

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP):

Protocolo de Aplicación:

Actualización 2020

Sergio Lacambra

Gines Suarez

Tsuneki Hori

Yuri Chakalall

Roberto Guerrero

Maricarmen Esquivel

Ivonne Jaimes

Claudio Osorio

Ana Maria Torres

Ernesto Visconti

División de Medio Ambiente,
Desarrollo Rural y Gestión de
Riesgo de Desastres

NOTA TÉCNICA N°

IDB-TN-02040

Julio, 2020

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): Protocolo de Aplicación: Actualización 2020

Sergio Lacambra

Gines Suarez

Tsuneki Hori

Yuri Chakalall

Roberto Guerrero

Maricarmen Esquivel

Ivonne Jaimes

Claudio Osorio

Ana Maria Torres

Ernesto Visconti

Banco Interamericano de Desarrollo

División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgo de Desastres

Julio, 2020

Catalogación en la fuente proporcionada por la

Biblioteca Felipe Herrera del

Banco Interamericano de Desarrollo

Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP): Protocolo de aplicación: Actualización 2020 / Sergio Lacambra, Gines Suarez, Tsuneki Hori, Yuri Chakalall, Roberto Guerrero, Maricarmen Esquivel, Ivonne Jaimes, Claudio Osorio, Ana Maria Torres, Ernesto Visconti.

p. cm. — (Nota técnica del BID; 2040)

Incluye referencias bibliográficas.

1. Natural disasters-Government policy. 2. Emergency management-Government policy. 3. Environmental risk assessment-Government policy. 4. Climate changes-Risk management. I. Lacambra, Sergio. II. Suarez, Gines. III. Hori, Tsuneki. IV. Chakalall, Yuri. V. Guerrero, Roberto. VI. Esquivel, Maricarmen. VII. Jaimes, Ivonne. VIII. Osorio, Claudio. IX. Torres, Ana Maria. X. Visconti, Ernesto. XI. Banco Interamericano de Desarrollo. División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres. XII. Serie.

IDB-TN-2040

Código JEL: Q54

Palabras claves: iGOPP, Índice de Gobernabilidad de Políticas Públicas, GRD, Gestión de Riesgo de Desastres, Clima, Cambio Climático, Inundaciones

<http://www.iadb.org>

Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode>) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformidad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.



Información de Contacto: Sergio Lacambra (slacambra@iadb.org)

Este documento fue preparado por:

Los especialistas del BID en Gestión del Riesgo: Sergio Lacambra (Jefe de Equipo), Ginés Suárez, Yuri Chakallal, Tsuneki Hori, Roberto Guerrero e Ivonne Jaimes.

La especialista del BID en Adaptación al Cambio Climático: Maricarmen Esquivel

Los consultores externos en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático: Claudio Osorio, Ana María Torres y Ernesto Visconti.

También se contó con valiosos aportes de Haris Sanahuja, Javier Gonzalez Müller, Nathalia Novillo Rameix, Marion Khamis, Lizardo Narvaez, Felipe Machado y Rolando Durán.

El desarrollo y publicación de este documento fue financiado por la Cooperación técnica Regional RG-T2787, financiada por el Fondo Multi donante de Prevención de Desastres con contribuciones de Canadá, Corea, España y Japón.

TABLA DE CONTENIDO

Presentación	7
PRIMERA PARTE	8
1.1 INTRODUCCIÓN	8
1.2 ALCANCE Y MARCO TEÓRICO DEL iGOPP	9
1.3 DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN	14
1.3.1. Comprendiendo el país y su contexto	14
Conocer el marco general para la gestión del riesgo de desastres en el país	14
Conocer el marco general de gobernanza	15
Identificación de las principales instituciones vinculadas a la aplicación del iGOPP	16
Recopilación de normatividad y otros documentos	17
1.3.2. Preparándose para la aplicación del iGOPP	17
1.3.3. Valoración de los indicadores iGOPP	19
Búsqueda y análisis de normatividad y documentos	20
Reunirse con representantes de institución vinculada con el indicador.	20
Acopio de información	21
1.3.4. Llenando las matrices de aplicación del iGOPP	21
1.3.5. Concepto de normatividad	27
1.3.6. Organización política-administrativa de los países	28
Sistemas normativos en América Latina y el Caribe	28
Sistemas administrativos en América Latina y el Caribe	29
SEGUNDA PARTE	31
2.1 INTRODUCCIÓN	31
2.2 LISTADO DE INDICADORES POR COMPONENTE	33
2.2.1 Fichas de los Indicadores por Componente	50
A. MARCO GENERAL DE GOBERNABILIDAD PARA LA GRD (MG)	51
B. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO (IR)	117
C. REDUCCIÓN DEL RIESGO (RR)	225
D. PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA (PR)	335
E. PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN (RC)	427
F. PROTECCIÓN FINANCIERA (PF)	497
Glosario	571

SIGLAS

ACC	Adaptación al cambio climático
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CC	Cambio climático
CEP	Curva de excedencia de pérdidas
GRD	Gestión del riesgo de desastres
iGOPP	Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en GRD
IPCC	Panel Intergubernamental de Cambio Climático (por sus en inglés, Intergubernamental Panel on Climate Change)
IR	Identificación y conocimiento del riesgo (componente del índice)
MG	Marco general de la gobernabilidad para la GRD (componente del índice)
PBL	Préstamo de Apoyo a Reforma de Políticas (por sus siglas en inglés, Policy-Based Loan)
PMP	Pérdida máxima probable
PAE	Pérdida anual esperada
PF	Protección financiera (componente del índice)
PR	Preparación para la respuesta (componente del índice)
RC	Planificación de la recuperación (componente del índice)
RR	Reducción del riesgo de desastres (componente del índice)

Presentación

Este protocolo constituye un documento de referencia esencial para las personas interesadas en realizar la aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP) en un determinado país.

A través de 245 fichas que corresponden a cada uno de los indicadores que conforman el iGOPP, este protocolo describe de forma detallada los pasos necesarios para realizar la investigación, análisis y verificación de dichos indicadores, incluyendo la explicación de la documentación que se debe recopilar, el proceso de valoración que se debe seguir, además de ofrecer una serie de recomendaciones y ejemplos basados en las experiencias de las aplicaciones pasadas realizadas en distintos países.

De igual manera, el protocolo orienta a las personas involucradas en la aplicación del índice a observar cuestiones de forma y redacción en el relleno de la matriz de aplicación del iGOPP con el propósito de mantener un estilo uniforme, accesible y fácil de abordar.

Objetivos del protocolo de aplicación

Presentar las directrices de aplicación del iGOPP para guiar a los evaluadores en los pasos de la investigación, análisis y verificación de los indicadores que componen el índice, así como en el relleno de su matriz de aplicación.

Exponer los elementos objetivos que deben ser verificados en cada país para que se cumpla cada indicador del iGOPP.

PRIMERA PARTE

1.1 INTRODUCCIÓN

El Protocolo de Aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP) que se presenta, preparado originalmente en el año 2013 y revisado en el 2015, ha sido objeto de una revisión y actualización de forma y fondo durante el año 2019. Estos trabajos, han sido llevados por un grupo de consultores coordinados por el BID y asesorados por el grupo de expertos que lo concibió originalmente.

Este ejercicio se ha nutrido de los nuevos conceptos desarrollados alrededor de la Gestión del Riesgo de Desastres en el transcurso de los años, así como de la experiencia acumulada entre los años 2013 y 2019 por los funcionarios del BID y consultores participantes en la aplicación del iGOPP en 26 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. También, se han incorporado las lecciones aprendidas de las aplicaciones retroactivas del índice en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú.

Estas experiencias y aprendizajes, además de confirmar la idoneidad del marco conceptual utilizado en la construcción del iGOPP, han identificado áreas de mejora de su protocolo de aplicación, de manera a incrementar su eficacia y perfeccionar el entendimiento en el proceso de preparación y aplicación del índice.

Considerando lo anterior, el BID ha dispuesto para el futuro inmediato del iGOPP que el seguimiento de sus fases de indagación, investigación de campo, acopio de información, análisis, así como los de justificación y verificación de los diferentes indicadores que contiene el iGOPP, sea respaldado -conforme a los requerimientos contemplados en este Protocolo- en la plataforma virtual *Risk Monitor* (<https://riskmonitor.iadb.org/>), de manera de compartir la información en línea con las partes interesadas y debidamente autorizadas por el BID.

Esta nueva versión del Protocolo de Aplicación del iGOPP se presenta en dos partes:

En la **primera parte**, tomando en cuenta que el Protocolo de Aplicación del iGOPP (en adelante “Protocolo”) es un documento de consulta esencial para aquellas personas involucradas en la aplicación y revisión del índice, se formulan detalladamente los pasos necesarios para realizar la investigación, análisis y verificación de los indicadores, incluyendo la explicación de la documentación que se debe recopilar, el proceso de valoración que se debe seguir, además de ofrecer una serie de recomendaciones y ejemplos basados en las experiencias de las aplicaciones pasadas realizadas en distintos países. Igualmente, en esta primera parte se orienta a las personas involucradas en la aplicación del índice a observar cuestiones de forma y redacción con el propósito de mantener un estilo uniforme, accesible y fácil de abordar.

En la **segunda parte** del Protocolo se presentan las 245 fichas que corresponden a cada uno de los indicadores que conforman el iGOPP, siguiendo para ello el orden de sus componentes, es decir: el Marco General de Gobernabilidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (MG), Identificación y conocimiento del riesgo (IR), Reducción del riesgo (RR), Preparativos para la respuesta (PR), Planificación de la recuperación (RC) y Protección financiera (PF).

1.2 ALCANCE Y MARCO TEÓRICO DEL iGOPP¹

El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en gestión del riesgo de desastres (iGOPP) ha sido diseñado para evaluar la existencia y vigencia de una serie de condiciones legales, institucionales y presupuestarias que se consideran fundamentales para que los procesos de la gestión del riesgo de desastres puedan ser implementados en un país determinado.

El iGOPP no reemplaza o sustituye otros indicadores relacionados con el tema, por el contrario, complementa las diferentes metodologías existentes para la evaluación holística del riesgo y de la gestión del riesgo de desastres.

La utilidad práctica del iGOPP consiste en identificar vacíos en el marco jurídico, institucional y presupuestal que pueden existir en un país determinado y ayudar a focalizar los esfuerzos del BID y del propio país en los aspectos relevantes de reforma de la gobernabilidad encaminados en mejorar la calidad de la política pública de gestión del riesgo de desastres en los países de América Latina y El Caribe. Es una herramienta de diagnóstico del nivel de gobernabilidad de un país en gestión del riesgo de desastres, así como de monitoreo y evaluación de reformas de política pública en esta temática. Es también una herramienta que puede ayudar a los países signatarios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en reportar sus avances en lo que respecta a la 2ª Prioridad para la Acción “Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para una mejor gestión”. México ha sido pionero en la adopción del iGOPP y actualmente reporta públicamente el progreso de la federación y de sus estados en materia de gobernanza en gestión del riesgo de desastres a través de este índice: <http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/apps/IGOPP/>.

El iGOPP es un indicador compuesto o sintético que permite verificar si en un determinado país se dan las condiciones de gobernabilidad adecuadas para poder implementar una política pública para la gestión integral del riesgo de desastres. En ese sentido, permite comparar las condiciones y elementos presentes en el conjunto de políticas públicas nacionales con las que son consideradas ideales para el concepto de gestión del riesgo de desastres utilizado en el índice.

El diseño del iGOPP se fundamenta en dos pilares conceptuales:

- El marco conceptual de la Gestión del Riesgo de Desastres y sus principales procesos.
- El marco conceptual de la Gobernabilidad y las fases de política pública.

La gestión del riesgo de desastres (GRD) se refiere a todos los procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión de los riesgos de desastre, fomentar la reducción y la retención y transferencia de riesgos de desastre, y promover la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recuperación para los casos de desastre y adaptación al cambio climático, con el objeto explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible.

Incluye las gestiones prospectivas, correctiva y reactiva del riesgo. La GRD se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad y la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos, y por lo tanto está intrínsecamente asociada con la planificación

¹ Extracto obtenido de Aplicación del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión del Riesgo de Desastres (iGOPP) en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá, Perú y República Dominicana, Informe iGOPP Regional, Banco Interamericano de Desarrollo, abril del 2015.

del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno.

En el marco conceptual del iGOPP la GRD se aborda como el conjunto de procesos orientados a adoptar e implementar políticas, estrategias y prácticas para reducir los riesgos y sus potenciales efectos, y se analiza en base a 6 componentes que son necesarios para su implementación efectiva. La selección de estos componentes se basa en la experiencia de los procesos de reforma política desarrollados por el BID:

1. Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG): Se refiere a la existencia de una base normativa adecuada para la definición de atribuciones y responsabilidades, la organización y coordinación, implementación y control de la GRD en cada país. Esta base incluye tanto la normativa específica en GRD como las normas habilitadoras territoriales y sectoriales que garanticen su viabilidad. Así mismo, la disponibilidad de recursos para la implementación de los procesos de la GRD, y el establecimiento de mecanismos adecuados de información y participación ciudadana, y de monitoreo, evaluación y seguimiento de dichos procesos.
2. Identificación y conocimiento del riesgo (IR): Es el proceso de la GRD enfocado en el conocimiento sobre orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evolución, entre otros aspectos, de los fenómenos potencialmente peligrosos, así como la ubicación, causas, evolución y capacidad de resistencia y de recuperación de elementos socioeconómicos expuestos. Este proceso incluye el análisis anticipado de las consecuencias y admite tanto interpretaciones objetivas y científicas, como de percepción social e individual. El marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita el desarrollo continuo del análisis de riesgos, herramienta que permite la identificación y evaluación de los probables daños y pérdidas ocasionadas por eventos naturales.
3. Reducción del riesgo (RR): Proceso de la GRD enfocado en minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. Este proceso comprende las intervenciones prospectiva y correctiva del riesgo de desastres, y para su implementación adecuada requiere contar con una buena base de información sobre las condiciones de riesgo. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la intervención oportuna y adecuada de las causas que generan las condiciones de vulnerabilidad actual.
4. Preparativos para la respuesta (PR): Es el proceso de la GRD cuyo objetivo es planificar, organizar y poner a prueba los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, permitiendo normalizar las actividades esenciales en la zona afectada por el desastre. La preparación se lleva a cabo mediante el monitoreo de eventos y la definición de escenarios de impacto de desastres, la planificación, organización, entrenamiento, dotación de recursos y simulación para las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro, y asistencia humanitaria que deben realizarse en caso de emergencia. En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la implementación de mecanismos para una rápida y adecuada respuesta ante la ocurrencia o inminencia de una situación de emergencia.
5. Planificación de la recuperación (RC): Proceso ex ante que se focaliza en la preparación para

el rápido y adecuado restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre. El marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita la implementación de mecanismos para un restablecimiento de medios de vida, de servicios básicos e infraestructura de forma tal que se reduzca la improvisación, la ineficiencia y la ineficacia en los procesos de recuperación post desastre.

6. Protección financiera (PF): Es el proceso de la GRD que busca la combinación óptima de instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo para poder acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres (eventos menores y recurrentes y grandes desastres de baja recurrencia) y protege el balance fiscal del Estado². En el marco conceptual del iGOPP hace referencia a la existencia de un marco normativo, institucional y presupuestal que permita el diseño e implementación de una combinación óptima de instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo de desastres.

Por otro lado, la Gobernabilidad se refiere a la capacidad de gobierno de un problema público. Esta capacidad se manifiesta en la gestión continuada y estable por parte del conjunto de los gobiernos y administraciones, pero también de los actores sectoriales y privados de un país. En la medida que se incrementa la capacidad de gobierno del problema debería observarse una mayor efectividad de las decisiones adoptadas y de las políticas implementadas con el resultado de evitar un mayor número de consecuencias negativas en el caso de los desastres.

En el marco conceptual del iGOPP la Gobernabilidad se aborda desde la perspectiva de las fases del proceso de políticas públicas, que incluyen las siguientes:

- A. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política. La inclusión en la agenda responde en buena medida al grado de madurez del problema público y al nivel de presión política y social que reciben las instituciones. Para que el liderazgo político y la presión social y económica den lugar a la acción substantiva puede ser necesario que el nivel político avance significativamente en la línea de definir las responsabilidades de los distintos actores involucrados en el proceso de análisis. El iGOPP analiza la inclusión en la agenda a través de la verificación de la existencia de marcos legales apropiados para la GRD, y de la integración explícita del tema en normas transectoriales, sectoriales y territoriales. El iGOPP analiza esta inclusión en la agenda y formulación de la política pública a tres niveles: (i) Coordinación y articulación central de la política; (ii) Definición de responsabilidades sectoriales; y (iii) Definición de responsabilidades territoriales.
- B. Implementación de la política. El iGOPP analiza las evidencias de implementación a través de la verificación de acciones ejecutadas y/o de la disponibilidad de recursos asignados a los actores responsables de implementar la política de GRD, en sus distintos componentes y niveles de gobierno.
- C. Evaluación de la política. El iGOPP analiza la evaluación y control de la política pública desde la perspectiva de la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, por un parte, y de información y participación ciudadana, por otra parte.

² Ghesquiere y Mahul, (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters, A Primer, The World Bank, Latin American and the Caribbean Region, Finance and Private Sector Development, Sustainable Development Network, September 2010.

Ambas dimensiones (GRD y Gobernabilidad/Política Pública) se evidencian en la estructura matricial del iGOPP (ver Tabla 1), definida por 5 columnas que analizan las fases de la política pública, y 6 filas que analizan los componentes de los procesos de reforma de política pública en GRD. Esta estructura matricial se expresa en 30 celdas, que integran un número variable de indicadores binarios.

Tabla 1. Matriz Conceptual del iGOPP

Fases de Política Pública Componentes de reforma de política pública en GRD	1. Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política			2. Implementación de la política	3. Evaluación de la política
	Coordinación y articulación central de la política	Definición de responsabilidades sectoriales	Definición de responsabilidades territoriales	Evidencias de progreso en la implementación	Control, rendición de cuentas y participación
Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG)	MG-1A	MG-1B	MG-1C	MG-2	MG-3
Identificación del riesgo (IR)	IR -1A	IR -1B	IR -1C	IR-2	IR-3
Reducción del riesgo (RR)	RR -1A	RR -1B	RR -1C	RR-2	RR-3
Preparación para la respuesta (PR)	PR -1A	PR 1B	PR -1C	PR-2	PR-3
Planificación de la recuperación (RC)	RC -1A	RC -1B	RC -1C	RC-2	RC-3
Protección financiera (PF)	PF -1A	PF -1B	PF -1C	PF-2	PF-3

El puntaje del iGOPP va de 0% a 100%, siendo que a mayor puntaje mejor será el nivel de gobernabilidad del país para implementar política pública en GRD, y se establece el siguiente sistema de clasificación:

%	Nivel de Gobernabilidad en GRD
91 al 100%	Sobresaliente
71 al 90%	Notable
41 al 70 %	Apreciable
21 al 40%	Incipiente
0 al 20%	Bajo

1.3 DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN

Para lograr que el iGOPP represente adecuadamente el nivel de condiciones de gobernabilidad de un país en GRD se debe asegurar que su aplicación ofrezca un resultado ajustado a la realidad y al momento en el cual se aplica, para lo cual las valoraciones deben ser el resultado de un análisis objetivo que siga las reglas y recomendaciones que se entregan en el presente Protocolo.

La aplicación del iGOPP debe resultar en los productos que se describen a continuación:

- 1) **Matrices de aplicación del iGOPP**, donde se consolida la valoración realizada para cada uno de sus 245 indicadores.
- 2) **Repositorio de verificables**, esto es, la colección de archivos de documentos (principalmente en versión PDF) que respaldan la valoración positiva de cada indicador.
- 3) **Informe de resultados de aplicación iGOPP**, siguiendo una estructura y contenido predefinidos, que presenta los resultados de la valoración hecha a todos los indicadores del iGOPP, acompañada de las recomendaciones de reforma de política pública con base en dicho diagnóstico.

1.3.1. Comprendiendo el país y su contexto

A continuación, se presentan algunas consideraciones generales al momento de realizar la aplicación iGOPP, que serán de utilidad, en particular, para aquellas personas que no tienen pleno conocimiento de la estructura gubernamental y administrativa del país, así como del marco normativo de gestión del riesgo de desastres vigente en el país.

Para los temas que se detallan a continuación se recomiendan una serie de acciones previas a ser realizadas por las personas involucradas en la aplicación del iGOPP en un determinado país, antes de iniciar con la verificación de los distintos indicadores.

Conocer el marco general para la gestión del riesgo de desastres en el país

- Revisar y analizar los principales documentos normativos del país en materia de gestión del riesgo de desastres, tales como:
 - i. Constitución. No en todos los países las constituciones mencionan los temas relacionados con la GRD, pero cuando sí lo disponen, le dan a la GRD una certeza jurídica importante como política pública y delinean la responsabilidad del estado.
 - ii. Ley, reglamento y otra normativa de gestión del riesgo de desastres, protección civil o similar.

- iii. Plan nacional de gestión del riesgo de desastres.
 - iv. Plan nacional de emergencia, contingencia o similar.
 - v. Política y/o estrategia nacional de gestión del riesgo de desastres.
- Revisar documentos e informes recientes elaborados por el gobierno o por organizaciones internacionales sobre el estado de la gestión del riesgo de desastres en el país.

Conocer el marco general de gobernanza

- Comprender el modelo de organización política-administrativa dispuesto generalmente en la Constitución del país.
- Identificar si en la Constitución del país o en el Plan Nacional de Desarrollo hay referencias a la gestión del riesgo de desastres.
- Identificar los diferentes niveles de gobierno con que cuenta el país. Esto, desde el gobierno nacional hasta aquellos niveles de gobiernos de menor jerarquía, a fin de comprender las distintas responsabilidades y cómo éstas se comparten o se delegan.
- Identificar las distintas Unidades de Gestión Territorial (UGT) y conocer la situación de los procesos de descentralización si los hubiese, así como los distintos grados de autonomía financiera y administrativa que les concede la Constitución frente al gobierno nacional.
- Identificar la UGT de menor jerarquía con responsabilidades para la planificación y uso del territorio, con el objeto de que ésta sea la que se use para verificar algunos de los indicadores del iGOPP, específicamente aquellos que indagan por la asignación de responsabilidades al menos a la UGT de menor jerarquía.

Ejemplos de modelo de derecho, tipo de gobierno, niveles de gobierno y UGT

	Colombia	México	Bolivia	Belice
Modelo de derecho	Romano-Germánico	Romano-Germánico	Romano-Germánico	Common law
Tipo de gobierno	República Unitario	República Federal	Estado unitario	Monarquía parlamentaria constitucional
Niveles de gobierno	Nacional	Federal	Estado	Nacional
	Departamental	Estatal	Departamental	Distrital
	Municipal	Municipal	Provincial o regional	
			Municipal	
Unidades de Gestión Territorial	Departamentos	Estados	Departamentos	Distritos
	Municipios	Municipios	Provincias	
			Municipios	
			Territorios indígenas, originarios campesinos	

- Comprender los arreglos institucionales (público nacional, público municipal, privados, etc.) para la prestación de servicios públicos de agua, saneamiento, telefonía y energía eléctrica.
- Identificar los modelos de control o fiscalización sobre la administración pública, y los entes de control existentes a nivel nacional y la función que desempeña cada uno de ellos.

Identificación de las principales instituciones vinculadas a la aplicación del iGOPP

En el iGOPP se consideran indicadores relacionados con diferentes ministerios o secretarías, sectores, empresas públicas y privadas e instituciones. Considerando que la existencia de dichas dependencias o las entidades equivalentes podrían variar entre países, se recomienda antes de iniciar la aplicación del iGOPP identificar la existencia de las instituciones o entidades equivalentes a las que se detallan en la siguiente tabla:

Instituciones vinculadas a algunos indicadores del iGOPP	
Entidad nacional responsable de la coordinación de la gestión del riego de desastres o protección civil	Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía
Ministerio de Ambiente	Ministerio de Educación
Ministerio de Agricultura	Ministerio de Turismo
Ministerio de Salud	Ministerio de Transporte ³
Ministerio de Vivienda	Superintendencia de Seguros
Entidad nacional responsable de la política pública ⁴ en lo relativo a la energía ⁵	Servicio nacional de bomberos
Entidad nacional responsable de la política pública en agua y saneamiento	Entidad nacional responsable de la política pública en lo referente a las telecomunicaciones
Empresa prestadora el servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país	Empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país
Empresa de generación de energía eléctrica con la mayor facturación en el país	Entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos
Empresa de transmisión de energía eléctrica con la mayor facturación en el país	Entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos
Empresa de distribución de energía eléctrica con la mayor facturación en el país	Entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales

Visto lo anterior, es necesario mencionar que la normatividad sobre la administración pública es la que determina la estructura, conformación y responsabilidades de los gabinetes, ya sea de los ministerios o secretarías, donde a veces se crean ministerios o secretarías que pueden reunir más de un tema central de gobierno o sector. Es así como en ocasiones el ministerio de agricultura y ganadería pueda incluir también responsabilidades en materia de pesca y/o alimentación. Otro

³ Entendido como obras públicas o viales

⁴ Puede ser en la provisión y/o regulación del servicio

⁵ Entendida como energía eléctrica

ejemplo sería cuando el ministerio de transporte forma parte de uno de mayor envergadura que cubre en general las obras públicas, o cuando se enlaza con energía. En todo caso, no existe una regla general, por lo cual pueden presentarse varias combinaciones.

Lo anterior es importante mencionarlo para efectos del iGOPP, ya que varios de los indicadores se refieren a condiciones que deben cumplirse en un sector específico, tales como: agricultura, ambiente, educación, salud, transporte (obras viales), turismo, vivienda, energía (eléctrica), telecomunicaciones (telefonía), agua y saneamiento. De manera que para verificar los indicadores sectoriales del iGOPP, la normatividad que regula a uno de estos ministerios “multisectoriales” (con responsabilidades que conllevan más de un sector) deberá hacer referencia específica al sector por el cual indaga el indicador del iGOPP.

Recopilación de normatividad y otros documentos

A fin de facilitar la aplicación del iGOPP se recomienda que una vez identificadas las instituciones nacionales vinculadas con los indicadores del iGOPP se realice una recopilación preliminar de normativa y de documentación relevante para cada uno de los ministerios, sectores, empresas, instituciones o entidades equivalentes identificadas en el punto anterior, entre las cuales se destacan:

- Ley y reglamento institucional
- Reglamento de organización y funciones (ROF) y/o Manual de Organización y Funciones (MOF)
- Planes y estrategias institucionales de desarrollo.
- Presupuesto institucional.
- Normativas técnicas.
- Informes anuales de actividades, gestión y/o ejecución presupuestal.
- Planes institucionales de gestión del riesgo de desastres, continuidad de operaciones, contingencias y/o emergencia.

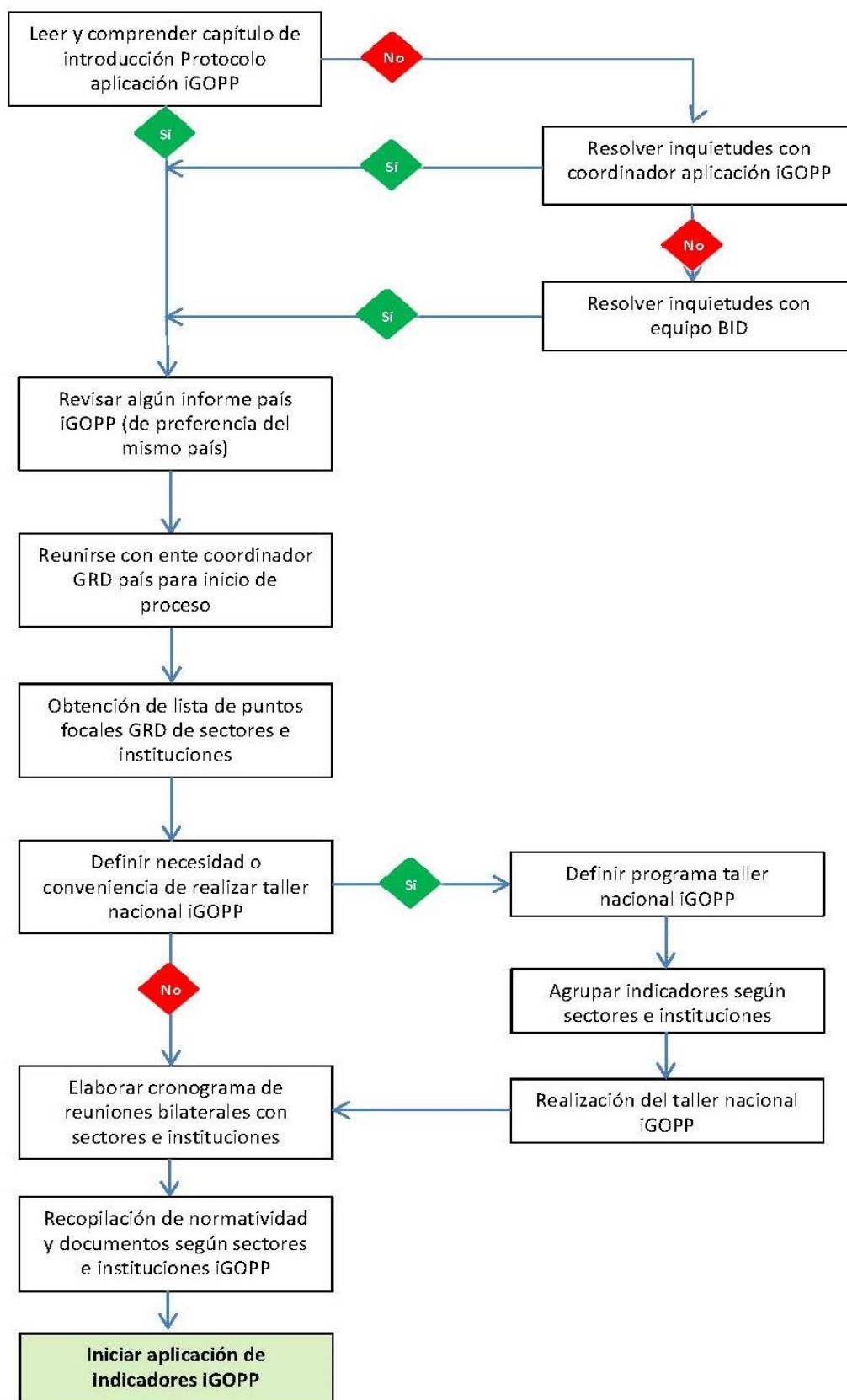
La recopilación de la información anterior puede realizarse usando el sitio web de cada institución, consultando al diario oficial del país (o página web en donde se compila la normatividad del país), presupuesto anual del país, consulta en bibliotecas, solicitud de información mediante mecanismos establecidos por cada institución o por la normativa de transparencia correspondiente.

1.3.2. Preparándose para la aplicación del iGOPP

Antes de iniciar la aplicación del iGOPP es necesario que las personas involucradas lean y comprendan a cabalidad las secciones iniciales del protocolo, consultando el glosario cada vez que sea necesario. Esto facilitará el trabajo en las distintas fases y, al mismo tiempo, la comunicación con el resto del equipo y los funcionarios del BID que pudiesen estar involucrados en la aplicación del iGOPP.

La coordinación con el ente rector de la GRD en el país puede ser de gran utilidad para ayudar a identificar e involucrar a otros actores relevantes para la aplicación del iGOPP. En el siguiente esquema se sugieren algunas acciones y secuencias a ser observadas para la planificación de actividades preparatorias previas al inicio de la valoración de los diferentes indicadores del iGOPP.

Acciones a realizar previo al inicio de la aplicación de indicadores iGOPP

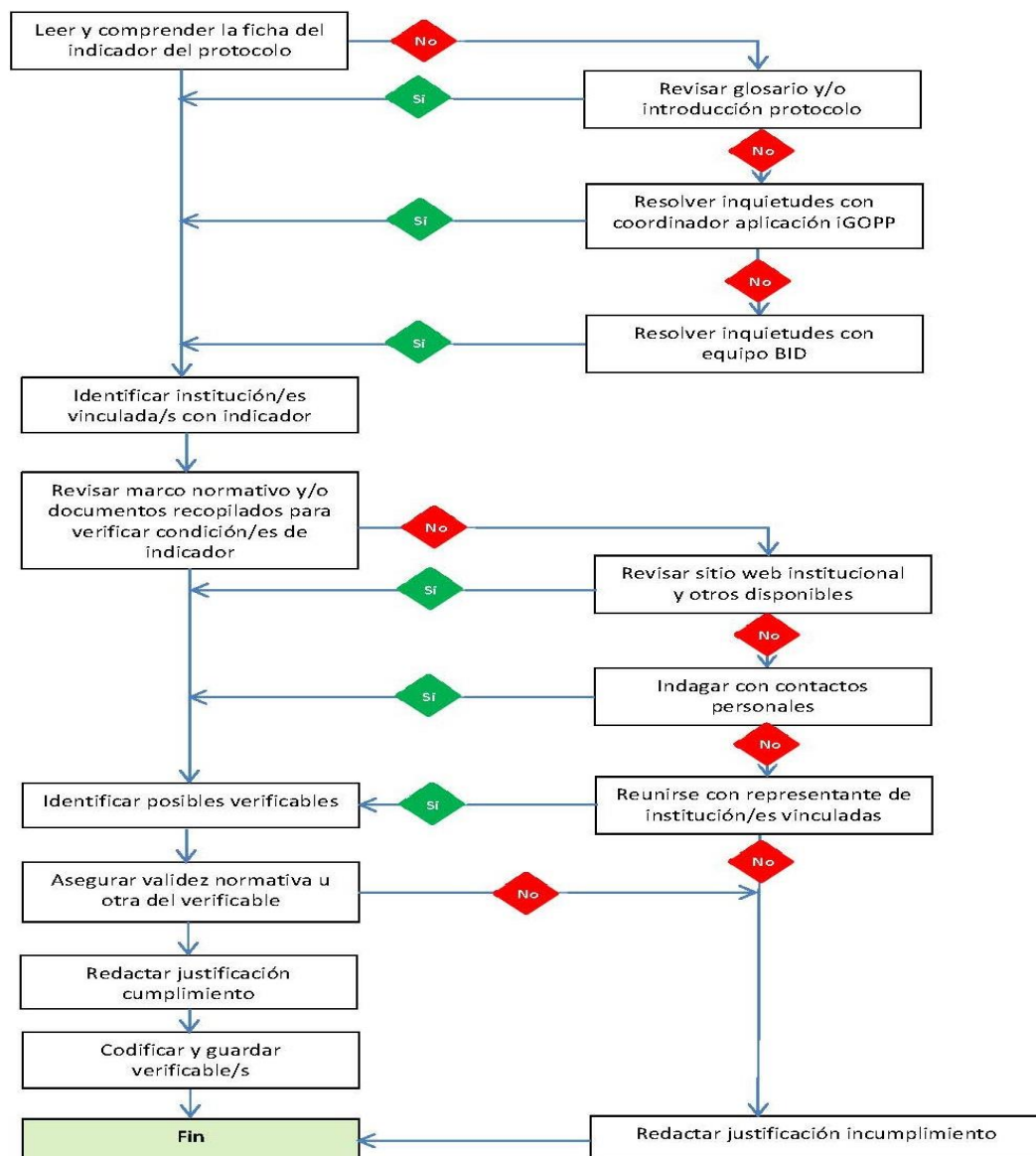


1.3.3. Valoración de los indicadores iGOPP

Si bien no existe una sola manera de iniciar la aplicación de los indicadores del iGOPP, algunas de las más utilizadas son por componente del iGOPP (MG, IR, RR, PR, RC, PF), por sectores, por ministerios o por temas comunes (recursos hídricos, ciudad capital, ordenamiento territorial, etc.). Sin embargo, la aplicación del iGOPP generalmente combina los enfoques anteriores, acomodándose a la información disponible, a la disponibilidad de las instituciones con las cuales es necesario reunirse y la forma de trabajo acordada entre las personas involucradas.

A pesar de lo anterior, la forma de abordar la valoración de cada indicador está estandarizada de la manera que se detalla en el siguiente esquema. Conforme a dicho esquema, siempre se aconseja comenzar con la lectura y comprensión de la ficha del indicador respectivo, ayudándose cuando sea necesario del glosario que se incluye en este protocolo.

Flujograma para aplicación de indicadores iGOPP



A continuación, se detallan recomendaciones para algunas de las acciones detalladas en el flujograma anterior:

Búsqueda y análisis de normatividad y documentos

- Internet puede resultar la principal fuente para la obtención de la normatividad y otro tipo de documentación por la cual indagan los indicadores del iGOPP.
- Se sugiere comenzar las consultas en los sitios web oficiales, ya sea del congreso, asamblea o parlamento nacional, del órgano oficial que publica la normatividad (por ejemplo: Diario Oficial), de la Presidencia o su área jurídica, o bien, el de los sectores, ministerios o instancias mencionadas por los diferentes indicadores.
- Así mismo, se recomienda consultar en sitios web de instituciones internacionales que compilan información sectorial, centros de documentación, etc.
- En el caso de verificables que correspondan a documentos normativos, se debe comprobar que se está usando la última versión vigente, es decir, que no ha sido modificada o derogada.
- El uso de expertos reconocidos que tengan conocimientos en temas específicos puede resultar de utilidad para obtener información, o bien para guiar adecuadamente en su obtención, pero en ningún caso su opinión puede reemplazar a un documento como respaldo de cumplimiento de cualquier indicador.
- De ser necesario, se pueden utilizar los procedimientos públicos de transparencia y de acceso a la información pública que puedan existir a nivel nacional o que apliquen para determinadas instituciones en el país, aun cuando puedan tomar tiempo, por lo que es conveniente usarlos desde la etapa inicial de búsqueda de la información.
- El formato de preferencia a ser usado para guardar los documentos que servirán como verificables para comprobar el cumplimiento de los indicadores del iGOPP es el PDF.
- Si por alguna razón deba usarse una página web como verificable o mencionarse en alguna justificación, se deberá proveer el vínculo a la página web, indicar la fecha de realización de la consulta y proveer una imagen de pantalla de la misma.

Reunirse con representantes de institución vinculada con el indicador.

La aplicación del iGOPP requerirá reuniones con representantes de diversas instituciones que son las propias fuentes de la información, ya sea para validar información recopilada y/o complementar la documentación necesaria para la aplicación del iGOPP.

Para estos encuentros se recomienda tener presente las siguientes recomendaciones:

- Antes de iniciar, contactar al ente rector de GRD para conocer los puntos focales sectoriales o institucionales que participan en el sistema nacional de GRD o los que dicho ente tiene en las diferentes instituciones, ministerios y/o sectores.
- Estos puntos focales deberían ser el primer contacto para indagar por los indicadores vinculados a un sector o institución en particular, así como otros indicadores sobre los cuales el entrevistado pueda tener conocimiento.
- Identificar los indicadores vinculados a una determinada institución o sector.
- Preparar la programación de entrevistas. Tener presente que pueden extenderse entre 30 y 90 minutos dependiendo de la cantidad de indicadores a ser abordados en la reunión.

- Para optimizar el tiempo de la entrevista se recomienda solamente tratar aquellos indicadores que, con base en la información recabada y analizada, hayan sido considerados como incumplidos y los que no se tenga certeza sobre su cumplimiento.
- Antes de concretar la entrevista, se recomienda enviar por adelantado las preguntas relativas a los indicadores que serán abordados durante la reunión.
- De preferencia, las entrevistas se deberían realizar en las oficinas de las personas que serán entrevistadas, de esta manera será más fácil obtener documentos o contactar a otras personas de la institución que sean necesarias.
- Si durante la entrevista se argumenta que ciertos documentos tienen carácter reservado o confidencial, hay que tratar de recabar la normatividad que así lo dispone, además de obtener una copia o foto de la portada y del índice de contenido del documento, los cuales eventualmente podrían ayudar a verificar un determinado indicador aun cuando no se tenga el documento completo. Esta recomendación es especialmente relevante para los planes de continuidad de operaciones de empresas de algunos servicios públicos de carácter estratégico, como puede ser la energía. Estas empresas son generalmente reacias a compartir dichos planes por cuestiones de seguridad. En estos casos, es aceptable mostrar que dichos documentos existen y que su contenido, al menos a nivel de índice, refleja la condición que indaga el indicador.
- En lo posible, obtener toda la información durante la entrevista. Podrá resultar más efectivo extender la entrevista para obtener la documentación que recibirla posteriormente vía correo electrónico u otra forma acordada.
- Durante la reunión, se recomienda comenzar con una introducción sobre el alcance, metodología, beneficios, resultados y productos del iGOPP, en especial si las personas entrevistadas no han tenido la oportunidad de conocer sobre este índice.

Acopio de información

Durante la búsqueda de información y entrevistas se obtendrán informaciones diversas, algunas de las cuales permitirán verificar ciertos indicadores y otras solo serán usadas como consulta. Se recomienda que la información sea organizada y archivada de acuerdo con el tema o sector considerado en el iGOPP.

Algunas recomendaciones para considerar en la recopilación y organización de la información son las siguientes:

- Hacer uso de un repositorio web (Dropbox, Google Drive o similar) con la documentación recopilada que sea accesible para todo el equipo involucrado en la aplicación del iGOPP.
- Acordar con las personas involucradas en la aplicación del iGOPP sobre la estructura del repositorio web y cómo se nombrarán los diferentes archivos, para facilitar una consulta amigable e intuitiva.
- Conforme se vaya avanzando en la aplicación, y una vez hecho el análisis de los indicadores, se deberán ir guardando los archivos de los verificables de los indicadores en las carpetas dispuestas con ese fin.

1.3.4. Llenando las matrices de aplicación del iGOPP

Uno de los productos resultantes de la aplicación del iGOPP son las 6 matrices de aplicación. Se deberá llenar una matriz para cada uno de los componentes del iGOPP (MG, IR, RR, PR, RC y PF).

Cada indicador corresponde a una línea de la matriz del componente del iGOPP al cual pertenece, donde para cada uno de ellos se deberá completar la información requerida en las diferentes columnas de la matriz, las cuales se detallan a continuación.

Código	Pregunta de respuesta cerrada	Sí/No	Año verificable	Justificación	Verificable	Comentarios

Código: Corresponde al código de identificación único del cada indicador. Viene predefinido en la matriz y sirve de guía para completar las otras columnas.

Pregunta de respuesta cerrada: Corresponde al indicador como tal y viene predefinido en la matriz correspondiendo a la pregunta que encabeza la ficha del indicador respectivo incluido en este Protocolo.

Sí/No: Corresponde a la valoración del indicador binario. En el caso de valorarse positivamente, es decir que el indicador se cumple, deberá responderse con un número uno (1) que corresponde a un “Sí”. En el caso de incumplimiento del indicador, deberá responderse con un cero (0) que corresponde al “No”.

Año verificable: Corresponde al “año de cumplimiento” del indicador, el cual de manera general corresponde al año que fue aprobada la normatividad o elaborado el documento que se está proporcionando como verificable del indicador en análisis. Sin embargo, se deben considerar otras situaciones para consignar el año en esta columna de la matriz teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- Si un país cumple un indicador con una normativa o documento recientemente aprobado, el año que deberá quedar consignado es el que conste en su aprobación.
- En el caso que el indicador se cumpla con la suma de varias normativas o documentos que tienen diversos años de promulgación o aprobación, el año que deberá registrarse será el del documento más reciente que permita, junto con los demás documentos de anterior promulgación, verificar a cabalidad todas las condiciones que exige el indicador.
- En el caso que se use como verificable una normatividad que no cumple por sí sola, pero una adición o reforma posterior sobre la misma permite verificar positivamente el indicador, el año de cumplimiento será el de la adición o reforma.
- En algunos de los indicadores que aparecen en el componente de PR, y en los que se combinan planes con asignaciones presupuestarias, por ejemplo, *“¿cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?”*, se debe señalar como fecha de cumplimiento en la que se aprobó el plan y no la fecha que se autorizó la dotación presupuestaria.
- En el caso de indicadores relacionados con la *disponibilidad presupuestaria* (p.ej. IR-2-10, RR-2-5, etc.) no aplican estos criterios y sólo se debe mencionar la fecha más reciente de cumplimiento dentro de los márgenes de tiempo que establece la pregunta.

- En el caso de un indicador que ha sido cumplido sistemáticamente durante varios años a través de diferentes documentos aprobados para tal fin, el año que deberá registrarse es el de aprobación del último documento siempre y cuando siga vigente. No obstante, si se contara con información acerca del cumplimiento previo del indicador a través de otros documentos, deberá consignarse en la explicación, pero meramente a título informativo.

Justificación: Corresponde a un texto narrativo ordenado y objetivo con argumentos en el cual se exponen las razones, motivos y reflexiones que sustentan la valoración positiva o negativa que se le dé al cumplimiento de un indicador en particular.

Si bien no existe un límite mínimo o máximo de cantidad de palabras para la justificación, quien la redacte deberá sustentarla usando sus propias palabras, respaldándolas con citas textuales de los artículos de la normatividad identificada. Las citas textuales deben ir entre comillas y en *itálica*.

Se debe evitar copiar y pegar los textos legales sin incluir una explicación razonada sobre porqué se cumple o no se cumple el indicador. Por lo general, un texto legal no se entiende de la misma forma por todas las personas, por lo cual resulta fundamental que en la justificación quede registrada la opinión e interpretación de quien redacta dicha justificación.

Específicamente, al momento de redactar la justificación de los indicadores, hay que tomar en cuenta que:

- En esta fase debe quedar claro que lo que importa es documentar la realidad y no querer “forzar” las justificaciones positivas, o bien, por el contrario, aplicar un mayor rigor al previsto.
- Los textos de las justificaciones deberán ser tan extensos como resulte necesario, sin embargo, deberá privilegiarse textos suficientes y concisos.
- Si el indicador resulta positivo la columna de “Justificación” debe iniciarse con una frase que indique que el indicador se ha cumplido. Posteriormente, se deben mencionar los argumentos que sustenten esa afirmación. De esta forma se facilita la consulta del documento.
- La justificación que se dé para cada indicador deberá ser deducida y razonada, de manera que con toda claridad se compruebe que la información aportada permite cumplir o no con las condiciones contenidas en el indicador en cuestión.
- Para la verificación positiva de indicadores, cuando en la justificación se haga referencia al o los verificables del indicador, se deberá mencionar el verificable con el título oficial, es decir, tal y como aparece en el medio que lo haya hecho público. Es relevante que se registre siempre la fecha de inicio de vigencia, ya sea la de publicación, aprobación, promulgación, etc., tal como se muestra en el texto resaltado en los ejemplos de verificación positiva que se presentan a continuación

Ejemplos de verificación positiva de indicadores:

Código	Pregunta de respuesta cerrada	Si/No	Año	Justificación	Verificable
IR-1A-2	¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático?	1	2012	El indicador se ha cumplido. El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Ambiente (IR-1A-2), aprobado el 15 de marzo del 2012 por su titular establece dentro de la estructura orgánica de esa cartera de Estado, en el numeral 7.3, la Subsecretaría de Cambio Climático cuya misión es " <i>liderar las acciones de mitigación y adaptación del país para hacer frente al cambio climático; incluyendo facilitar la implementación de mecanismos de transferencia de tecnología, financiamiento y comunicación</i> ". Son entre otras, atribuciones y responsabilidades de esa subsecretaría: " <i>f) Dirigir la generación y gestión de información actualizada sobre las causas e impactos del cambio climático en el Ecuador</i> " y " <i>m) Coordinar la investigación para la organización y ejecución de los planes, programas y proyectos de cambio climático</i> ".	Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Ambiente , aprobado el 15 de marzo del 2012 IR-1A-2.pdf

Código	Pregunta de respuesta cerrada	Si/No	Año	Justificación	Verificable
MG-2-5	¿Existe un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de	1	2012	El indicador se ha cumplido. La Ley N° 29125, que establece la implementación y el funcionamiento del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional	Ley N° 29125, que establece la implementación y el funcionamiento FONIPREL , del 30

	actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres?			y Local-FONIPREL (MG-2-5a), del 30 de octubre de 2007. Mediante Resolución Directoral N° 005-2012-EF/63.01, que aprueba los Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública de Apoyo al Desarrollo Productivo y para Proyectos de Inversión Pública que incluyan el enfoque de Prevención de Desastres, del julio 2012 (MG-2-5b), disponiendo en el numeral 1.2 la aprobación de los Lineamientos para los proyectos de inversión pública que incluyen el enfoque de prevención de desastres, contenidos en el Anexo 02 de esa Resolución Directoral (MG-2-5c).	de octubre del 2007 MG-2-5a Resolución Directoral N° 005-2012-EF/63.01, que aprueba los Lineamientos ... que incluyan el enfoque de Prevención de Desastres , de julio de 2012 MG-2-5b Lineamientos ... MG-2-5c
--	---	--	--	---	---

Ejemplo de verificación negativa de indicadores: Aun cuando no se logre verificar el indicador, en la justificación se deberán indicar las normativas consultadas con su título oficial.

Código	Pregunta de respuesta cerrada	Si/No	Año	Justificación	Verificable
MG-1A-1	¿Existe normatividad nacional que establece un marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres para todos los niveles de gobierno?	0	N/A	El indicador no se ha cumplido. La Argentina carece de una ley que aborde específicamente la temática de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD). Existe el Decreto N° 1250 de 1999 que establece el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), creado con el objetivo de <i>“Coordinar la acción de gobierno a nivel nacional, provincial y local de todos los sectores que tengan competencia en la materia, mediante la formulación de</i>	N/A

Código	Pregunta de respuesta cerrada	Si/No	Año	Justificación	Verificable
				<p><i>políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales para prevenir, mitigar y asistir desde el Estado Nacional a los afectados por emergencias, optimizando la asignación de los recursos". Este decreto establece como unidad ejecutiva del SIFEM al Gabinete de Emergencias (GADE); consigna además funciones y responsabilidades jerárquicas en su funcionamiento.</i></p> <p>No obstante a lo anterior, en la actualidad el SIFEM no constituye un mecanismo institucional activo y la normativa que lo crea está focalizada en la respuesta a los desastres y no en la gestión del riesgo de desastres, por lo tanto la condición no se cumple.</p>	

- La fecha de aprobación y/o publicación de un verificable deberá ser tan detallada como sea posible, incluyendo el día, mes, año y medio usado para su aprobación y/o publicación (diario oficial, Gaceta Oficial, etc.)⁶. De no ser posible tener toda la información detallada, por lo menos se deberá indicar el año de inicio de vigencia, aprobación o publicación.
- Adicionalmente, y en un párrafo por separado, se podrán hacer comentarios sobre cualquier aspecto considerado relevante, evitando, para mayor claridad, extenderse con aquello que no contribuye a explicar el cumplimiento de la condición.
- Cada uno de los argumentos se apoyarán en textos específicos de los verificables ofrecidos, para lo cual se harán las transcripciones o citas textuales que sean necesarias, identificándolas con letra itálica y entre comillas.
- Se evitará el uso de abreviaturas, mayúsculas, negritas, apócopeos o cualquier otra figura similar (a menos que así aparezca en la publicación que se esté citando). En el caso de usar acrónimos

⁶ Por ejemplo:

- La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio del 2012 (MG-1A-5a), establece en su Artículo 7 que....
- Programa de X, publicado en la página oficial del Ministerio de Y el 15 de junio del 2012...
- Minuta 234/2009 del Consejo de Ministros del 24 de noviembre del 2015.

los mismos deberán ser desarrollados en su primera aparición en el texto entregado como justificación.

- No se podrán dar por cumplidos los indicadores del iGOPP con base a la información proporcionada de manera verbal por las personas entrevistadas, sin importar su jerarquía o cargo que ostenten, o tampoco mediante información proveniente de artículos de prensa, o presentaciones en Power Point o similar realizadas por personal o autoridades gubernamentales.
- Si el indicador resulta incumplido, en la columna de “*Justificación*” se debe iniciar con la frase “El indicador no se cumple”. A continuación, se describirán brevemente los pasos dados en la investigación, listando la normatividad y documentos analizados y las entrevistas mantenidas para llegar a esa conclusión.
- Cuando existe alguna dificultad o impedimento para comprobar el cumplimiento del indicador, se deberá explicar los detalles de esa circunstancia.

Verificables: Para cada uno de los indicadores que sean valorados positivamente durante la aplicación del iGOPP se requerirá de al menos un documento que respalde su cumplimiento. Dicho documento idealmente deberá estar en formato PDF y ser guardado usando la codificación que se detalla a continuación:

- Se usará el mismo código del indicador para nombrar el archivo que contenga el documento que permite verificar la condición (p.ej.: MG-1A-1.pdf)
- En el caso que para verificar un indicador sea necesario proporcionar más de un verificable, se adicionarán letras minúsculas, una por cada verificable y en su orden de aparición en la justificación de cumplimiento del indicador (p.ej.: MG-1A-1a; MG-1A-1b; MG-1A-1c, etc.).

Comentarios: Esta columna es utilizada para que el equipo involucrado en la aplicación del iGOPP intercambie opiniones sobre la valoración de cada indicador, y la información detallada en cada una de las columnas descritas anteriormente. A fin de identificar los comentarios se recomienda incluir las iniciales de cada miembro del equipo al comienzo de los comentarios, de manera de facilitar el intercambio.

1.3.5. Concepto de normatividad

Para efectos de la aplicación del iGOPP, el término genérico “normativa” o “normatividad” se referirá en todo momento al conjunto de textos o instrumentos legales de los países. La normatividad puede tomar, según el país y su marco legal, diversas formas y categorías, empezando por la constitución, ley, decreto, reglamento, edicto, reglamento, resolución, códigos, normas, jurisprudencias, acuerdos, minutas, lineamientos o cualquiera que sea la figura legal reconocida en un país.

Para esto, la normatividad debe haber sido formalmente aprobada o promulgada por una instancia competente y con la jurisdicción necesaria. La normatividad usualmente es expedida por el poder legislativo; sin embargo, no se debe perder de vista que las leyes de los países pueden reconocer en su marco legal, distintas formas mediante las cuales tanto el poder ejecutivo como el judicial pueden emitir cierto tipo de normatividad.

Por otra parte, los acuerdos, convenios y los tratados bilaterales o multilaterales celebrados por un país, una vez que han sido ratificados por su poder legislativo, adquieren la categoría de normatividad (usualmente equiparables a la constitución) y, por lo tanto, pueden servir de verificables.

La normatividad usada para verificar un indicador del iGOPP deberá:

- (i) Estar vigente durante el levantamiento de la información del iGOPP.
- (ii) Haber sido publicada en el órgano oficial o, en su defecto, haber sido hecha pública por algún otro medio, incluyendo las páginas web oficiales de las autoridades competentes.

Para usar como verificables planes, programas, estrategias, políticas sectoriales o de otro tipo, habrá que demostrar su carácter legal y obligatorio de alguna de las siguientes maneras:

- Indicando el documento normativo que lo aprueba formalmente, que por lo general antecede al cuerpo principal de este tipo de documentos;
- Haciendo referencia a la normatividad que establezca de forma explícita la elaboración de este tipo de documentos (planes, programas, estrategias, políticas) por parte de una determinada instancia o institución. En este caso se deberá evidenciar que el documento ha sido elaborado por la instancia establecida en la normatividad.

Además de la normatividad, existen ciertos **documentos oficiales** que pueden presentar diversas formas, tales como oficios, circulares, informes, planes, estrategias, guías, lineamientos, memorándums y otros, que pueden servir de verificables. Para que este tipo de documentos sean válidos como verificables deberán cumplir alguna de las siguientes formalidades que se detallan a continuación:

1. Que los mismos estén anteceditos por un documento normativo (decreto, resolución, etc.) que haga oficial su cumplimiento, los cuales habitualmente son incluidos o mencionados explícitamente en las primeras páginas de dichos documentos oficiales;

En este caso se deberá proveer como verificables e incluirlos en la justificación los siguientes documentos:

- **Documento oficial** que contiene la información requerida para considerar el indicador cumplido.
- Documento normativo que acompaña al documento oficial mencionado anteriormente.

2. Que la institución, entidad o persona que emite el documento oficial, haya recibido mediante normatividad las atribuciones para su elaboración y despacho.

En este caso se deberá proveer como verificables e incluirlos en la justificación los siguientes documentos:

- **Documento oficial** que contiene la información requerida para considerar el indicador cumplido.
- Documento normativo que mandata o asigna atribuciones a la institución, entidad o persona que ha emitido el documento oficial.

1.3.6. Organización política-administrativa de los países

Sistemas normativos en América Latina y el Caribe

Con el fin de ajustar la metodología y el proceso de valoración de sus indicadores, el Protocolo de aplicación del iGOPP pone atención en conciliar aquellas diferencias derivadas de los dos sistemas jurídicos preponderantes en América Latina y el Caribe: el *Common Law* (del derecho anglosajón) y

el Romano-Germánico, además de aquellas cuestiones de orden jurídico-constitucional que dan lugar a las formas particulares de organización política-administrativa de cada país.

El derecho del *Common Law* se aplica en Belice, Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago, Barbados, Guyana y Surinam. En el resto de los países miembros del BID impera el derecho Romano-Germánico.

Resulta importante hacer notar que la aplicación del iGOPP resulta más sencilla en aquellos países en los que impera el derecho Romano-Germánico, pues la fuente por excelencia es la normatividad que procede de un órgano legislativo, es decir, la ley está codificada en una cadena jerarquizada que inicia con la constitución, leyes constitucionales, leyes secundarias, reglamentos, y así hasta llegar a normatividad de menor jerarquía.

En caso del *Common-Law* eso no es necesariamente así, de manera que existen los “Acts”, que son el equivalente a la ley, pero también esa norma puede venir de una instancia distinta, como pueden ser las resoluciones de los consejos de ministros, Gabinetes (“cabinets”) o un precedente judicial.

En ambos casos, lo verdaderamente importante es que exista normatividad acorde con las condiciones planteadas por el indicador del iGOPP en análisis que:

- se encuentre vigente,
- haya sido creada conforme al derecho local y por una instancia u órgano facultado para ello,
- que haya sido publicada en el órgano oficial (diario o Gaceta oficial, o similar), o bien, si es el caso, que se haya hecho pública por algún otro medio autorizado, incluyendo las páginas web institucionales o de las autoridades responsables.

Sistemas administrativos en América Latina y el Caribe

Cada país, su sistema jurídico y la forma en que se organiza políticamente son resultado de su historia, geografía y tradiciones. En América Latina y el Caribe sobresalen dos grandes modelos: los estados federales y los centralistas o unitarios. Los países federales en América Latina son Argentina, Brasil, México y Venezuela. El resto son centralistas o unitarios.

Países federales.

En las repúblicas federales, el poder se distribuye entre el gobierno federal y las unidades de gestión territorial (UGT), que pueden llegar a ser normalmente tres niveles (Federal, Estatal/Provincial/Regional y Municipal), gozando cada uno de éstos de distintos grados de soberanía y/o autonomía.

Los gobiernos federales o federados tienen para sí, según ordene la constitución, determinadas funciones, jurisdicciones o competencias que, por su naturaleza, quedan bajo su exclusiva responsabilidad. Pero, por otro lado, la misma constitución puede instruir para que las UGTs sean receptores de facultades que compartirán con el gobierno federal o, más aún, inclusive pueden gozar de manera exclusiva de otras en determinadas materias.

En el caso de la gestión del riesgo de desastres, la adaptación del cambio climático, ordenamiento territorial y la gestión integral de los recursos hídricos, en los países federados lo razonable es que por tratarse de materias que son parte del desarrollo sustentable, sean compartidas en alguna medida, entre el gobierno federal y las UGT. Así que es probable que coexista una normatividad federal con otras normativas para las UGTs. Sin embargo, por tratarse la aplicación del iGOPP de una evaluación del país, interesa particularmente la normatividad federal que, dependiendo del grado de la soberanía concedida a las UGT, puede incluir o no en su texto, responsabilidades para todos los niveles de gobierno.

Para los efectos del iGOPP, cuando la normatividad federal no haya asignado determinadas funciones al nivel nacional, en virtud de haberlas dispuesto o delegado a favor de las UGT, para dar por cumplido

el indicador en cuestión se deberá evidenciar que la **totalidad de las UGT** cuenten con normatividad que observe la condición planteada por el indicador. En estas situaciones, para facilitar el ejercicio de aplicación del iGOPP, resulta conveniente evidenciar el incumplimiento de la condición por parte de al menos una UGT. Por ejemplo, imaginemos un indicador cualquiera del iGOPP que indague por la existencia de una norma con determinados atributos relacionados con la GRD. Y asumamos que en un país federal dicha norma se expide a nivel provincial o estadual. Bastaría con identificar una sola provincia o estado en dicho país federal que no haya expedido dicha norma para dar el indicador por incumplido.

Países centralistas o unitarios.

Los estados centralizados o unitarios de América Latina y el Caribe, aunque guardan ciertas diferencias entre sí, de manera general se caracterizan por dividir su territorio para efectos administrativos, donde los encargados del gobierno de esas unidades territoriales pueden ser electos por votación popular o bien designados por la autoridad nacional o central.

Varios de estos países han iniciado procesos de descentralización que han avanzado desigualmente. En algunos casos las UGT han alcanzado niveles importantes de autonomía, en otros casos, los avances son poco significativos. En estos casos las leyes centralistas son las únicas que existen, incluyendo la que regula la relación y funcionamiento de las UGT.

El caso de los países pequeños.

En América y el Caribe existen países que, por la extensión de su territorio o nivel de centralización, presentan condiciones que obligan a tener consideraciones especiales en la aplicación de algunos de los indicadores del iGOPP. Dichas consideraciones han sido incluidas en las fichas de este Protocolo de los indicadores respectivos, donde en la sección que detalla la descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido, se han definido los criterios a ser usados para este tipo de situaciones.

SEGUNDA PARTE

2.1 CODIFICACIÓN DE LOS INDICADORES Y ESTRUCTURA DE FICHA

A continuación, se presentan las fichas de cada uno de los 245 indicadores del iGOPP. Si bien la extensión de las fichas de los diferentes indicadores puede variar, la estructura de la ficha se mantiene y en cada una de sus siete secciones (más el encabezado, correspondiente al código de cada indicador) se presenta la información que se detalla a continuación:

0. Código de identificación:

Permite una rápida relación entre el componente del iGOPP y la fase de la política pública a la cual pertenece, en base a la siguiente estructura:

NN-XM-YY

Donde

NN: componente del iGOPP (MG, IR, RR, PR, RC y PF)

MG = Marco general de la gobernabilidad para la GRD

IR = Identificación y conocimiento del riesgo

RR = Reducción del riesgo

PR = Preparación para la respuesta

RC = Planificación de la recuperación

PF = Protección financiera

X: Fase de la política pública

1 = Inclusión en la agenda del gobierno y formulación de la política pública

2 = Implementación de la política

3 = Evaluación de la política

M: Nivel de formulación de las políticas públicas (este subcódigo solo aplica para los indicadores de la Fase 1)

A = Articulación central (nacional) de la política

B = Definición de responsabilidades sectoriales

C = Definición de responsabilidades territoriales

YY: Numeración correlativa de los indicadores asociados a NN-XM

1. Pregunta de respuesta cerrada:

Esta sección contiene la redacción del indicador propiamente dicho, expresado en forma de pregunta, que admite una respuesta cerrada: sí (cumplimiento) o no (incumplimiento).

2. La descripción general del indicador:

Describe de manera general el indicador. Se presenta de forma sucinta la explicación sobre la importancia que tiene para la GRD el aspecto o materia sobre el que se indaga a través del indicador. Dicho de otra forma, se explica por qué cada indicador es relevante en términos de la gobernabilidad para la GRD.

3. Pasos a seguir para la obtención de la información requerida:

En esta sección se ordenan de manera lógica las acciones y gestiones que normalmente habría que realizar para obtener la información necesaria para poder determinar si se cumple o no con el indicador.

4. Vínculo con otros indicadores:

En esta parte se listan aquellos indicadores que guardan algún tipo de relación con el indicador que se investiga. Ya sea una relación causal, o de afinidad por la materia sobre la que se indaga, sobre la institución o sector involucrado, la normatividad aplicada, etc.

5. Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido:

Es una definición breve sobre condiciones indispensables que deben satisfacerse para poder concluir que se ha cumplido el indicador. Así mismo, se entregan indicaciones para ser consideradas al momento de redactar la justificación respectiva sobre la valoración positiva o negativa de cumplimiento del indicador.

6-7. Ejemplos de cumplimiento e incumplimiento en países de la región:

Se proveen algunos ejemplos de los resultados de las aplicaciones realizadas en algunos países, ya sea que hayan cumplido o no con los distintos indicadores, pero que, por la forma y contenido de su explicación, resultan de utilidad para el mejor entendimiento de lo que es aceptable o no para efectos del iGOPP.

Sin embargo, cabe aclarar que estos ejemplos expresan la circunstancia legal, institucional o presupuestaria que prevaleció durante el periodo que fue levantado el iGOPP, de tal forma que su utilidad se limita a mostrar cómo se apega la justificación dada a los requerimientos del indicador, pero de ninguna manera significa que sea información actualizada.

2.2 LISTADO DE INDICADORES POR COMPONENTE

Componente del índice: Marco general de la gobernabilidad para la GRD [MG]	
MG-1A Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
MG-1A-1	¿Existe normatividad nacional que establece un marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres para todos los niveles de gobierno?
MG-1A-2	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece instrumentos de política para su implementación?
MG-1A-3	¿La normatividad nacional de GRD establece que la coordinación y articulación de los instrumentos de política se debe realizar desde un nivel jerárquico igual o superior al ministerial?
MG-1A-4	¿La normatividad nacional de GRD establece la articulación con otras normas relacionadas con adaptación al cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos o planificación y ordenamiento territorial?
MG-1A-5	¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en la gestión del riesgo de desastres?
MG-1A-6	¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en ACC?
MG-1A-7	¿Existe normatividad de Cambio Climático que establece la Gestión del Riesgo de Desastres como un objetivo, meta, fin, propósito o resultado?
MG-1A-8	¿Existe normatividad que establece un régimen de carrera profesional en la administración pública aplicable a la entidad responsable de la GRD a nivel nacional?

MG-1B Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
MG-1B-1	¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la gestión del riesgo de desastres como un propósito, fin o resultado?
MG-1B-2	¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la adaptación al cambio climático como un propósito, fin o resultado?
MG-1B-3	¿La normatividad que regula la realización de evaluaciones de impacto ambiental (o proceso equivalente), integra el análisis de riesgo de desastres?

MG-1C Definición de responsabilidades territoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
MG-1C-1	¿Existe normatividad que descentralice las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio a las unidades de gestión territorial?
MG-1C-2	¿Existe normatividad nacional que establece un enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos?
MG-1C-3	¿Existe normatividad que faculte a las Unidades de Gestión Territorial para la formación de redes, acuerdos, alianzas o convenios territoriales aplicables a la GRD?
MG-1C-4	¿Existe normatividad que faculte la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas?

MG-2 Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
MG-2-1	¿Existe un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) o de la entidad rectora en GRD que establece la estrategia o política para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país?
MG-2-2	¿El ente responsable de las funciones de rectoría o coordinación o articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?
MG-2-3	¿Existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres?
MG-2-4	¿Existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades de adaptación al cambio
MG-2-5	¿Existe un fondo nacional o instrumento financiero equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante de gestión del riesgo de
MG-2-6	¿Existe un fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de adaptación al cambio climático?
MG-2-7	¿Existe un fondo o instrumento financiero equivalente del nivel nacional, habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado o para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto?
MG-2-8	¿Al menos uno de los fondos nacionales de desarrollo (o instrumento equivalente) está habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante en gestión del riesgo de desastres?
MG-2-9	¿Existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen acciones ex ante en gestión del riesgo de desastre?
MG-2-10	¿Existen incentivos presupuestales para que los distintos sectores (ministerios) implementen acciones ex ante de gestión del riesgo de desastres?

MG-3 Control, rendición de cuentas y participación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
MG-3-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la gestión del riesgo de desastres debe ser sometida a control por las respectivas organizaciones autorizadas?
MG-3-2	¿Existe normatividad sobre transparencia o acceso a la información pública en la gestión pública aplicable a la GRD?
MG-3-3	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación del cumplimiento de la normativa existente en gestión del riesgo de desastres en los últimos 5 años?
MG-3-4	¿La entidad nacional coordinadora de la Gestión del Riesgo de Desastres ha realizado en los últimos 3 años una evaluación de la gestión del riesgo de desastres en el país?
MG-3-5	¿Existe normatividad nacional que establezca algún mecanismo de participación de la sociedad civil aplicable a la gestión del riesgo de desastres?

Componente del índice: Identificación y conocimiento del riesgo [IR]

IR-1A Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-1A-1	¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a los sectores y a las unidades de gestión territorial para el análisis del riesgo de desastres?
IR-1A-2	¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático?
IR-1A-3	¿Existe normatividad que ordene la creación y mantenimiento de Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres?
IR-1A-4	¿Existe normatividad que establezca crear, sistematizar o actualizar bases de datos sobre los efectos de los desastres?

IR-1B Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-1B-1	¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?
IR-1B-2	¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?
IR-1B-3	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?
IR-1B-4	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?
IR-1B-5	¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país?
IR-1B-6	¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el cambio climático en el país?
IR-1B-7	¿Existe normatividad para el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de al menos dos fenómenos naturales peligrosos en el país?
IR-1B-8	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-9	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-10	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-11	¿La normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-12	¿La normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-13	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?

IR-1B Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-1B-14	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-15	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-16	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-17	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?
IR-1B-18	¿Existe normatividad nacional que defina cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país?

IR-1C Definición de responsabilidades territoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-1C-1	¿La normatividad nacional de gestión del riesgo de desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la evaluación del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?
IR-1C-2	¿Existe normatividad que determine escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben zonificar las amenazas o riesgos en el territorio, o bien que designe un actor nacional responsable de definir la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno?
IR-1C-3	¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de la zonificación de amenazas en ciudades?

IR-2 Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-2-1	¿Se integra la temática de riesgo de desastres en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?
IR-2-2	¿Se integra la temática de cambio climático en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?
IR-2-3	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-4	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-5	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-6	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?

IR-2 Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-2-7	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-8	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo (o entidad equivalente) para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-9	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-10	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-11	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-12	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
IR-2-13	¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?
IR-2-14	¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?
IR-2-15	¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?

IR-3 Control, rendición de cuentas y participación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
IR-3-1	¿Existe normatividad que haga obligatoria la disponibilidad de información para el análisis de riesgo y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?
IR-3-2	¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para estudios sobre cambio climático y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?
IR-3-3	¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?
IR-3-4	¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?
IR-3-5	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre identificación del riesgo de desastres en los últimos 5 años?
IR-3-6	¿La normatividad nacional de GRD establece la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastre?

Componente del índice: Reducción del riesgo [RR]

RR-1A Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-1A-1	¿Existe normatividad que establece competencias de forma articulada entre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para los sectores y entidades territoriales?
RR-1A-2	¿Existe normativa que defina referentes de riesgo aceptable para al menos 2 amenazas en el país?
RR-1A-3	¿Existe al menos una normatividad nacional que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución?
RR-1A-4	¿Existe normatividad que estipule un régimen de sanciones específico sobre el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado?
RR-1A-5	¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada?

RR-1B Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-1B-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?
RR-1B-2	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?
RR-1B-3	¿Existe al menos una norma nacional de seguridad (código) para el diseño sismo resistente de edificaciones, o similar (por ejemplo: viento) que sea de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados?
RR-1B-4	¿La normatividad que regula los aspectos técnicos de construcciones, define parámetros de diseño especiales para edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica en el país?
RR-1B-5	¿La norma nacional sismo-resistente, o similar (por ejemplo, viento-resistente), ha sido revisada y actualizada al menos una vez en los últimos 10 años?
RR-1B-6	¿La normatividad que regula la gestión ambiental integra en sus objetivos, metas o resultados de forma explícita la reducción del riesgo de desastres?
RR-1B-7	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-8	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-9	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-10	¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-11	¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-12	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?

RR-1B Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-1B-13	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-14	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-15	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-16	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?
RR-1B-17	¿Existe normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto?
RR-1B-18	¿Existe normatividad que ordene integrar en la fase de pre-inversión la realización de estudios de cambio climático?
RR-1B-19	¿Existe normatividad que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión?
RR-1B-20	¿Existe normatividad que ordene realizar estudios de cambio climático en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión?

RR-1C Definición de responsabilidades territoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-1C-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?
RR-1C-2	¿La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial en el país, establece la reducción del riesgo de desastres como una de sus competencias?
RR-1C-3	¿La normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente), establece la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo?
RR-1C-4	¿Existe normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos?
RR-1C-5	¿Existe normatividad para la relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo?

RR-2 Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-2-1	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-2	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-3	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-4	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?

RR-2 Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-2-5	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-6	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-7	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-8	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-9	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-10	¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?
RR-2-11	¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?
RR-2-12	¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?
RR-2-13	¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?

RR-3 Control, rendición de cuentas y participación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RR-3-1	¿Existe normatividad que establezca un régimen de sanciones por daños al medio ambiente para los infractores de naturaleza pública y privada?
RR-3-2	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres en los últimos 5 años?
RR-3-3	¿La normatividad que regula la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (o similares), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?
RR-3-4	¿La normatividad que regula la planificación o manejo de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?
RR-3-5	¿El ente nacional de control o ente regulador del sector, ha realizado al menos una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años?

Componente del índice: Preparación de la respuesta [PR]	
PR-1A. Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-1A-1	¿Existe normatividad que establece una organización interinstitucional en el nivel nacional para los procesos de preparativos y respuesta?
PR-1A-2	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece un mecanismo o instancia para el manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional?
PR-1A-3	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes?
PR-1A-4	¿Existe normatividad que permite activar un régimen temporal de medidas de excepción en caso de desastres, emergencia o calamidad pública?
PR-1A-5	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional?
PR-1A-6	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deben basarse en evaluaciones de daños y análisis de necesidades?
PR-1A-7	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la realización de simulacros y simulaciones?
PR-1A-8	¿Existe normatividad para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre?

PR-1B. Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-1B-1	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diferentes sectores o ministerios?
PR-1B-2	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, prevé la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos?
PR-1B-3	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-4	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-5	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-6	¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-7	¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-8	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-9	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-10	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación en caso de desastres en el ámbito de sus

PR-1B. Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-1B-11	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-12	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?
PR-1B-13	¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, obliga la formulación e implementación de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?
PR-1B-14	¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, obliga la formulación de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?
PR-1B-15	¿La normatividad que regula las entidades encargadas de la generación, transmisión y prestadoras del servicio público de energía, obliga la formulación de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?
PR-1B-16	¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados con el almacenamiento, transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas?
PR-1B-17	¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia ante derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos?

PR-1C. Definición de responsabilidades territoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-1C-1	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta estipula instancias de coordinación en el territorio?
PR-1C-2	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece criterios de asistencia subsidiaria entre diferentes niveles de gobierno?
PR-1C-3	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia al nivel de las Unidades de Gestión Territorial?
PR-1C-4	¿Existe normatividad nacional, distinta a la de GRD o preparativos, que define competencias para las unidades de gestión territorial en preparación y respuesta?
PR-1C-5	¿Existe normatividad que autoriza a los municipios a utilizar sus recursos propios fuera de su jurisdicción en situaciones de emergencia?

PR-2. Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-2-1	¿El ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?
PR-2-2	¿Al menos un servicio nacional de bomberos ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-3	¿La entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-4	¿Cuenta el sector ambiental con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

PR-2. Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-2-5	¿Cuenta el sector agricultura con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-6	¿Cuenta el sector salud con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-7	¿Cuenta el sector vivienda con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
PR-2-8	¿Cuenta el sector educación con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-9	¿Cuenta el sector turismo con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
PR-2-10	¿Cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-11	¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-12	¿Cuenta el sector energía con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?
PR-2-13	¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?
PR-2-14	¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? (NOTA: en caso de no ser la misma empresa, deben cumplirlo todas)
PR-2-15	¿La empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?
PR-2-16	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, reconoce y establece un tratamiento diferencial para poblaciones vulnerables?

PR-3. Control, rendición de cuentas y participación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PR-3-1	¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece mecanismos de participación de la sociedad civil en las unidades de gestión territorial?
PR-3-2	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre preparativos para desastre en los últimos 5 años?
PR-3-3	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno en la respuesta en alguna de las situaciones de desastre de los últimos 5 años declaradas por el nivel nacional o en que se solicitó ayuda internacional?
PR-3-4	¿La entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta ha realizado al menos una evaluación sobre la calidad en sus procesos en los últimos 3 años?
PR-3-5	¿Las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta, ha adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal?
PR-3-6	¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la respuesta?

Componente del índice: Planificación de la recuperación [RC]	
RC-1A. Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RC-1A-1	¿Existe normatividad sobre recuperación post-desastre que define la responsabilidad del estado frente a este proceso?
RC-1A-2	¿Existe normatividad que establezca que la recuperación de medios de vida es un propósito de la recuperación post-desastre?
RC-1A-3	¿Existe normatividad que establezca esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre?
RC-1A-4	¿Existe normatividad que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes?
RC-1A-5	¿Existe normatividad que ordene la formulación de planes de recuperación post-desastre que explícitamente busquen reducir la vulnerabilidad preexistente?
RC-1A-6	¿Existe normatividad que ordene la formulación ex-ante de planes de recuperación post desastre?
RC-1A-7	¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción?
RC-1A-8	¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas?

RC-1B. Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RC-1B-1	¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-2	¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-3	¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-4	¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-5	¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-6	¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-7	¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-8	¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-9	¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?
RC-1B-10	¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?

RC-1C. Definición de responsabilidades territoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RC-1C-1	¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?
RC-1C-2	¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?

RC-2. Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RC-2-1	¿Cuenta el Ministerio de Ambiente (o entidad rectora o coordinadora del ambiente) con un Plan ex-ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-2	¿Cuenta el Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post- desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

RC-2. Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RC-2-3	¿Cuenta el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-4	¿Cuenta el Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-5	¿Cuenta el Ministerio de Educación (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-6	¿Cuenta el Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-7	¿Cuenta el Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-8	¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan ex ante de recuperación post-desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-9	¿Cuenta el sector telecomunicaciones con un Plan ex ante de recuperación post-desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?
RC-2-10	¿Cuenta el sector energía con un Plan ex ante de recuperación post-desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?

RC-3. Control, rendición de cuentas y participación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
RC-3-1	¿Existe normatividad que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre?
RC-3-2	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre la gestión del gobierno en la recuperación en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional?
RC-3-3	¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación?
RC-3-4	¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la recuperación?

Componente del índice: Protección financiera [PF]	
PF-1A. Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PF-1A-1	¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres?
PF-1A-2	¿La normatividad nacional establece el porcentaje anual de recursos a asignarse a los fondos a nivel nacional para gastos emergentes de situaciones de desastres?

PF-1A. Coordinación y articulación central de la política	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PF-1A-3	¿Existe normatividad que establezca la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país?
PF-1A-4	¿La normatividad que regula el sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características no homogéneas/especiales está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo aceptados por el ente regulador del sector?
PF-1A-5	¿La normatividad que regula el sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características homogéneas/uniformes está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo aceptados por el ente regulador del sector?
PF-1A-6	¿Existe normatividad que establezca fondos nacionales de desarrollo que puedan financiar actividades de manejo de desastres?

PF-1B. Definición de responsabilidades sectoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PF-1B-1	¿Existe normatividad que establezca la responsabilidad fiscal del estado frente al riesgo de desastres?
PF-1B-2	¿Existe normatividad que asigne competencias al sector Hacienda, Finanzas o Economía, en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres?
PF-1B-3	¿Existe normatividad que establezca que las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?
PF-1B-4	¿Existe normatividad sobre incentivos para el aseguramiento frente al riesgo de desastres de la vivienda por parte de los privados?

PF-1C. Definición de responsabilidades territoriales	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PF-1C-1	¿Existe normatividad que establezca que las entidades de las Unidades de Gestión Territorial deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?
PF-1C-2	¿Existe normatividad que obligue a la implementación de estructuras de protección financiera ante desastres en la ciudad del país?
PF-1C-3	¿La ciudad capital del país cuenta con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?
PF-1C-4	¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad sede del gobierno del país, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?
PF-1C-5	¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y/o la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?

PF-2. Evidencias de progreso en la implementación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PF-2-1	¿La ciudad capital del país cuenta con una estructura de protección financiera en caso de desastre?
PF-2-2	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha dimensionado las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno?
PF-2-3	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha dimensionado las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes?
PF-2-4	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres?
PF-2-5	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de las concesiones de al menos un servicio básico o infraestructura crítica en caso de desastres?
PF-2-6	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado?
PF-2-7	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía u otra entidad nacional competente, ha generado lineamientos para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres de los bienes e infraestructura bajo su responsabilidad?
PF-2-8	¿Existe un fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?
PF-2-9	¿El fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?
PF-2-10	¿El fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, está basado en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?
PF-2-11	¿El país tiene suscrito al menos un crédito contingente explícitamente vinculado con la financiación de gastos emergentes de situaciones de desastre?
PF-2-12	¿Al menos un municipio de la ciudad capital del país cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado?
PF-2-13	¿Se ha implementado y está vigente al menos un instrumento de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector?
PF-2-14	¿Cuenta el sector público con al menos un instrumento financiero diseñado ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres?
PF-2-15	¿El Ministerio de Agricultura tiene una estructura de protección financiera del sector agricultura (o equivalente) vigente frente al riesgo de desastres?
PF-2-16	¿Existe un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas que establece la estrategia o política de protección financiera para la gestión del riesgo de desastres en el país?
PF-2-17	¿Existe un instrumento financiero vigente que haya sido empleado en el país para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto?

PF-3. Control, rendición de cuentas y participación	
Código	Pregunta de respuesta cerrada
PF-3-1	¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normatividad existente sobre protección financiera en los últimos 5 años?
PF-3-2	¿El ente rector del sector asegurador ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en el cálculo tarifario de las pólizas por parte de las compañías de seguro en los últimos 3 años?
PF-3-3	¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha realizado al menos una evaluación sobre la protección financiera en el país en los últimos 3 años?

2.2.1 Fichas de los Indicadores por Componente

A. Marco general de Gobernabilidad para la GRD (MG)

MG 1A
MG 1B
MG 1C
MG 2
MG 3

B. Identificación y conocimiento del riesgo (IR)

IR 1A
IR 1B
IR 1C
IR 2
IR 3

C. Reducción del riesgo (RR)

RR 1A
RR 1B
RR 1C
RR 2
RR 3

D. Preparativos para la respuesta (PR)

PR 1A
PR 1B
PR 1C
PR 2
PR 3

E. Planificación de la recuperación (RC)

RC 1A
RC 1B
RC 1C
RC 2
RC 3

F. Protección financiera (PF)

PF 1A
PF 1B
PF 1C
PF 2
PF 3

A. MARCO GENERAL DE GOVERNABILIDAD PARA LA GRD (MG)

Código MG-1A-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad nacional que establece un marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres para todos los niveles de gobierno?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se refiere al marco jurídico del sistema o estructura nacional, en el que se dispongan responsabilidades para los diferentes componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), así como las necesarias para articular sus partes o elementos, incluyendo al gobierno central, entidades autónomas y descentralizadas, empresas del estado, gobiernos locales y regionales, y los sectores y ministerios.</p> <p>De acuerdo con el marco conceptual utilizado en el iGOPP, los componentes de gestión del riesgo son los de: Identificación del riesgo, reducción del riesgo, preparativos para la respuesta, recuperación y protección financiera. Sin embargo, para referirse a estos componentes las diversas normativas nacionales pueden utilizar otros términos o marcos conceptuales. Así mismo, la normatividad por la cual indaga este indicador puede estar contenida en un solo documento normativo, o bien en un conjunto de éstos.</p> <p>Es de vital importancia para asegurar una adecuada y efectiva GRD que aumente la resiliencia de un país, que la normatividad nacional considere todos los componentes de la GRD detallados anteriormente, así como asigne de manera articulada responsabilidades sobre los mismos a los diferentes niveles de gobierno que existan en el país, que contribuyan de manera colaborativa a gestionar el riesgo de desastres en los diferentes sectores, ministerios, entidades descentralizadas, empresas del estado y unidades de gestión territorial.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de una normativa específica, o bien un conjunto de normativas de carácter nacional, que regulen la GRD. 2. Verificar si dicha normativa establece o define explícitamente el concepto de GRD que considere sus diferentes componentes (identificación del riesgo, reducción del riesgo, preparativos para la respuesta, recuperación y protección financiera). No es necesario que la terminología sea exacta, sino que considere la noción de cada uno de estos componentes. 3. Identificar los niveles de gobierno existentes en el país. 4. Verificar si la normatividad identificada asigna responsabilidades en materia de la GRD para todos los niveles de gobierno existentes en el país. 5. De ser necesario entrevistarse con representantes de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se verifique positivamente el presente indicador, se deben cumplir al menos las siguientes condiciones:

- La normatividad nacional debe incluir la gestión del riesgo de desastres de forma integral, **considerando todos los componentes de la GRD**, y
- La normatividad nacional de GRD debe establecer responsabilidades en materia de GRD **para cada uno de los niveles de gobierno** existentes en el país en el ámbito de sus funciones y competencias;

De manera que un país que cuente con un marco normativo que considere solo algunos de los componentes o únicamente acciones “ex-post” o de gestión de emergencia o desastres, no cumpliría con la condición mínima requerida por este indicador para una respuesta positiva.

En la justificación del indicador se deberá registrar los niveles de gobierno existentes en el país, así como las responsabilidades asignadas en los distintos componentes de GRD para cada uno de ellos. Cuando haya una asignación de responsabilidades a nivel de la GRD en general para todos los niveles de gobierno, habrá que verificar que la noción de GRD que se establece en el marco normativo del país efectivamente incluye todos los componentes de la GRD mencionados anteriormente.

Para los países que, debido a su extensión territorial, organización política administrativa o su sistema jurídico, no contemplen la existencia de unidades de gestión territorial como tales, se podrá validar el presente indicador si se cumple al menos a nivel nacional y sectorialmente. Esto deberá indicarse en la justificación respectiva y sustentándolo en la normatividad correspondiente.

Aunque no se logre cumplir con todas las condiciones para la verificación positiva de este indicador, en la justificación se deberá incluir la información requerida que deje en evidencia el cumplimiento parcial, ya sea en los componentes de GRD considerados, o en las responsabilidades para los diferentes niveles de gobierno existente en el país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013: La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (MG-1A-1a), la cual establece en su Artículo 2 que “*La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano...En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*”. No obstante que no se mencionan a la Preparación de Respuesta ni la de Protección Financiera, se deduce, que esas nociones están comprendidas dentro del “manejo de desastres”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Barbados 2017. The Emergency Management Act (EMA) of Barbados CAP 160 A, 2007 is quite comprehensive covering aspects related to risk reduction, response and recovery, and financial protection. Part 1 – Preliminary – of the EMA establishes this comprehensive scope of the regulation: “*emergency management*” includes (a) the prevention and mitigation of the effect of disasters or other emergencies; (b) the preparedness for, response to and recovery from emergencies, disasters and hazards; and (c) the organization and management of resources and responsibilities for dealing with all aspects of emergencies.”. Nevertheless, the EMA does not establish a responsibility framework for all government levels (central, decentralized, local). Concrete DRM responsibilities remain with the Director of the Department of Emergency Management. Local authorities or structures are not mentioned in the Act, and responsibilities of national institutions are partial: “*PART V Obligations of Public Officers and Other Persons* 12. Every Permanent Secretary and Head of a Department of Government shall (a) ensure that there is at all times an officer of his Ministry, Department or statutory body falling under his Ministry, who is the liaison officer for communication with the Director in relation to the procedures of the Ministry, Department or statutory body referred to in paragraph (a) of section 9(2); (b) as required by the Director, cause an emergency management plan for each Ministry, Department or statutory body to be prepared and reviewed by 1st April annually and to be submitted to the Director. 13. Every Permanent Secretary and Head of a Department of Government shall supply annually to the Director, in such form and by such date as may be required by the Minister, such information as may be requested by the Director for the purposes of paragraph (a) of sections 5 and 9(2).”

Traducción:

Barbados 2017. La *Emergency Management Act (EMA)* of Barbados CAP 160 A, 2007 es bastante comprehensiva al cubrir aspectos relacionados con la reducción de riesgos, la respuesta y recuperación, y la protección financiera. La Parte 1 - Preliminar - de la EMA establece este alcance integral de la normativa: "gestión de emergencias" lo que incluye (a) la prevención y mitigación del efecto de desastres u otras emergencias; (b) la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, desastres y peligros; y (c) la organización y gestión de recursos y responsabilidades para hacer frente a todos los aspectos de las emergencias". Sin embargo, la EMA no establece un *marco de responsabilidad para todos los niveles de gobierno (central, descentralizado, local)*. Las responsabilidades concretas de GRD corresponden al *Department of Emergency Management*. Las autoridades o estructuras locales no se mencionan en la Ley, y las responsabilidades de las instituciones nacionales son parciales: "*PARTE V Obligaciones de los funcionarios públicos y otras personas*. 12. Todo Secretario Permanente y Jefe de un Departamento de Gobierno (a) se asegurará de que haya en todo momento un funcionario de su Ministerio, Departamento u organismo estatutario que corresponda al Ministerio, que sea el oficial de enlace para la comunicación con el Director en relación con los procedimientos del Ministerio, Departamento u organismo estatutario a que se refiere el párrafo (a) de la sección 9 (2) (b) Según lo requiera el Director, preparará un plan de gestión de emergencias para cada Ministerio, Departamento u organismo estatutario, que deberá ser revisado para el 1 de abril de cada año, para ser sometido al Director. 13. Todo Secretario Permanente y Jefe de un Departamento de Gobierno proporcionará anualmente al Director, en la forma y fecha que lo requiera el Ministro, la información que el Director le solicite a los fines del párrafo (a) de las secciones 5 y 9 (2) ”.

Código MG-1A-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece instrumentos de política para su implementación?	
Descripción general del indicador	
<p>Es posible que la normatividad nacional postule los temas de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) de manera general, y que los aspectos más específicos vinculados con la implementación de la misma estén considerados en otras normas de menor jerarquía, tales como reglamentos, normas de carácter administrativo, decretos, políticas, estrategias o planes, etc., según el país de que se trate.</p> <p>Además, es posible que el marco jurídico de la GRD sea limitado y no contemple instrumentos para su implementación, generando así vacíos jurídicos y por tanto la inoperancia o una operatividad limitada por parte de las autoridades responsables. Por ello se considera una atribución de calidad del marco normativo de GRD que tenga claramente regulado cuáles son sus instrumentos de orden político, estratégico, técnico, operativo, presupuestario o cualquier otro que sea necesario para cumplir e implementar dicha normatividad nacional de GRD.</p> <p>Algunos ejemplos de instrumentos de política pueden ser: los Centros de Operaciones de Emergencia, una política nacional de GRD, una estrategia nacional para la GRD, un plan o programa nacional de GRD, un plan nacional de emergencia, un sistema nacional de información para la GRD o una estrategia nacional para la protección financiera (o similar), un fondo nacional o instrumentos financieros de GRD, entre otros.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la normatividad específica de carácter nacional que regule la GRD. 2. Verificar si la normativa nacional de GRD incluye al menos un listado de instrumentos de política para su implementación. 3. Identificar la existencia de algún instrumento de política para la GRD que esté respaldado por un documento normativo que le otorgue su legalidad. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	La normatividad identificada para este indicador puede contener la información que se busca verificar.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición, la normatividad nacional de GRD debe señalar explícitamente que se deben establecer instrumentos de política. Además, dichos instrumentos deben ser al menos enumerados, ya sea en esa misma normatividad nacional que los establece o en otro documento normativo de GRD.</p> <p>Si en la normatividad identificada se enumeran varios instrumentos de política, en la justificación se deberán citar todos los considerados, así como cuales han sido establecidos o están en funcionamiento al momento de la aplicación del iGOPP.</p> <p>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgo de Desastres (MG-1A-2a)

“ARTÍCULO 3.- Instrumentos de la política de gestión de riesgos. Los instrumentos de la política de gestión de riesgos son los siguientes:

- 1. Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante desastres;*
- 2. Plan Nacional de Gestión de Riesgos;*
- 3. Plan Nacional de Emergencia;*
- 4. Sistema Integrado Nacional de Información;*
- 5. Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres”*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. La Constitución establece que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico (Art. 390). De la misma manera, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, el Art. 11: Literal “d”, establece que: “... la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural o antrópico o para reducir la vulnerabilidad corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales...”. El Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado hace referencia las funciones de la Secretaría de Gestión de Riesgo (SGR), entre las que incluye la formulación de “las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos”, y también incluye entre las funciones del Comité Consultivo de GRD, presidido por la SGR: “1. Asesorar y apoyar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la elaboración y reforma de las políticas, estrategias, normas y planes nacionales en esta materia, especialmente en los de reducción de riesgos y de emergencias ante desastres de origen natural, socio-natural o antrópico; 2. Colaborar en el diseño de programas, proyectos; y, en general iniciativas nacionales para gestión de riesgos;” No obstante esta referencia a las responsabilidades de la SGR y de su Comité Consultivo, no se mencionan cuáles son esos instrumentos de políticas que debe generar. La única mención a un instrumento de política se incluye en el Art. 27. del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado: “De la Comunicación y Difusión. - El organismo Rector, contará con una estrategia nacional de comunicación social sobre gestión de riesgos.” Cabe mencionar que el Documento de Referencias Básicas para la GRD publicado por la SGR menciona que hace referencias al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas de Seguridad, como los principales instrumentos de planificación que contienen las políticas específicas de GRD. En ese sentido, se puede argumentar que la normatividad de GRD a través de la Constitución establece la incorporación de la GRD en los procesos de planificación del desarrollo a todos los niveles territoriales, y por otro lado establece que es el Plan Nacional de Desarrollo “el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados”. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo es uno de los instrumentos de política para la implementación de los mandatos de GRD. No obstante, estas consideraciones, en opinión del equipo consultor la normativa nacional relacionada con la GRD en sus pasajes específicos sobre la GRD no establece claramente cuáles son los instrumentos de política para su implementación. Se consultó a la SGR y ellos comparten esta valoración, y manifiestan la necesidad de contar con una Ley o una Política específica de GRD que permita identificar claramente los instrumentos de política para la articulación y la implementación de los mandatos de la Constitución y la implementación del Sistema Descentralizado de GRD.

Código MG-1A-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿La normatividad nacional de GRD establece que la coordinación y articulación de los instrumentos de política se debe realizar desde un nivel jerárquico igual o superior al ministerial?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>En los países donde la normativa nacional establece expresamente la creación de una institución rectora para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) para la coordinación de su sistema o estructura nacional, es una buena práctica que esa institución tenga un nivel jerárquico igual o superior al de ministerio o secretaría de estado, de manera que le reporte directamente al presidente o primer ministro, así como le permita una coordinación horizontal con ministerios y otras instituciones esenciales para una eficaz y efectiva GRD a nivel nacional. En muchos casos, cuando esa responsabilidad recae en instancias que se encuentran por debajo de ese nivel, esta condición puede reducir notablemente su capacidad de incidencia y articulación.</p> <p>Este indicador, cuando se refiere a las labores de coordinación, lo hace respecto a aquellas acciones operativas del sistema o la estructura nacional de la GRD y relativas a la implementación de los programas y a las políticas de GRD. No trata, por lo tanto, de la coordinación estratégica de los componentes de GRD, la cual ocurre en ciertos países donde se crean consejos o comités nacionales integrados generalmente por secretarios o ministros de estado y que son presididos por el presidente o primer ministro. Por lo cual este indicador busca privilegiar la coordinación operativa de la GRD a nivel nacional.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la normativa específica de carácter nacional que regule la GRD. 2. Identificar si en la misma se establece una estructura de coordinación y gestión de los planes, programas y políticas nacionales de GRD. 3. Verificar que a la instancia de coordinación operativa (ente rector de GRD), se le otorga un nivel jerárquico igual o superior al de ministerio o de secretaría de estado. 4. En el caso que no se le ha dado la categoría de ministerio o secretaría de estado, constatar que se le haya dotado de una categoría distinta, con autonomía técnica, financiera y administrativa, y que dependa directamente del presidente o el primer ministro. 5. De ser necesario entrevistarse con representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-1A-2	En la normatividad de GRD por lo general se identifica claramente a la institución rectora para la GRD, así como su dependencia con respecto al Presidente, Primer Ministro o un Ministerio o Secretaria de Estado específica.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la instancia de coordinación operativa general (ente rector) de la GRD establecida en la normatividad nacional, debe tener un nivel igual o superior al de ministerio o secretaría de estado, o bien, que no se encuentre jerárquicamente bajo un ministerio. O, en otro extremo, que haya sido dotado de autonomía y personalidad jurídica propia y que, por tal razón, debe de responder directamente al presidente o al primer ministro.</p> <p>No se podrá cumplir este indicador si el ente rector de la GRD se encuentra adscrito a un Ministerio o Secretaria de Estado. No obstante, de existir esta dependencia de rango inferior al ministerial, se recomienda registrarla a título informativo en la justificación del indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Ley Nº 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005 (MG-1A-3a), crea en su artículo 13 la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como órgano de desconcentración máxima adscrito a la Presidencia de la República, y establece en su artículo 14 las competencias para la misma entre las que refiere: “... a) *Articular y coordinar la política nacional referente a la prevención de los riesgos y a los preparativos para atender las situaciones de emergencia. Asimismo, deberá promover, organizar, dirigir y coordinar, según corresponda, las asignaciones requeridas para articular el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y sus componentes e instrumentos...*” Para la organización de la Comisión, la Ley establece su Junta Directiva, la que de conformidad con el artículo 17 está integrada por: “... a) *Un presidente ... designado por el Poder Ejecutivo, vía decreto, y presidirá la Junta. b) Los Ministros de la Presidencia, de Obras Públicas y Transportes, de Hacienda, de Seguridad Pública, de Salud, de Vivienda y Asentamientos Humanos, de Ambiente y Energía, los presidentes ejecutivos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y del Instituto Nacional de Seguros (INS), así como un representante de la Cruz Roja, designado por esta misma organización...*”.

Colombia 2013. El Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- (MG-1A-3a), señala en su Artículo 1 que la UNGRD se crea como una Unidad Administrativa Especial, revestida de “personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”. Precizando en su Artículo 4 sus funciones, entre otras, la de “1. *Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD (que desde el 2012 cambia a SNGRD), hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles nacional y territorial*”, tales funciones son ratificadas en el artículo 18 de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 (MG-1A-3b). No obstante, la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 establece en el Artículo 2 del Capítulo I, Gestión del riesgo, responsabilidad, principios, definiciones y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que “*En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entendiéndose: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*”. Esta consideración que parte del reconocimiento de la descentralización en Colombia se reafirma en los principios de Coordinación, Concurrencia y Subsidiariedad contenidos en el Artículo 3 de la misma Ley.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, aprobada por Decreto 18-2008, establece en su Artículo 22. Ámbito de Gestión de Riesgos y Defensa Civil. “*Constituye la capacidad de Estado para desarrollar e implementar políticas de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de orden natural, social y tecnológico que puedan afectar a la población, sus bienes y entorno; a nivel nacional, departamental y municipal*”. Actúa bajo la responsabilidad del Presidente de la República, por conducto de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). La Ley de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres, (CONRED), aprobada por Decreto Nº 109-96, el 09 de diciembre de 1996 (MG-1A-3a) establece en su Artículo 7 que el órgano superior de la CONRED será el Consejo Nacional y estará integrado por el sector público, entidades autónomas y por el sector privado. Posteriormente, el Artículo 14 del Reglamento de la Ley de la CONRED, aprobado por Acuerdo Nº49-2012, del 14 de marzo de 2012 (MG-1A-3b) establece que: “*El Ministro de la Defensa Nacional será el Coordinador del Consejo Nacional, en su defecto, su suplente.*” Por otro lado, la Política Nacional de Reducción de Desastres aprobada por Acuerdo Nº 06-2011-SE-CONRED ((MG-1A-3c), del 18 de mayo de 2011, precisa en el Capítulo VII. Estrategia de Implementación: “*su vinculación con la Vicepresidencia, como coordinador en la práctica, del Consejo Nacional de la CONRED*”

Código MG-1A-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿La normatividad nacional de GRD establece la articulación con otras normas relacionadas con adaptación al cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos o planificación y ordenamiento territorial?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Por su propia naturaleza, la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) debería estar explícitamente articulada con otras normas, políticas e instrumentos concurrentes inscritos en el marco del desarrollo sustentable. Algunas de las principales normativas y políticas que deberían articularse con la GRD pueden ser aquellas relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptación al Cambio Climático (ACC) - Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) - Planificación y Ordenamiento Territorial (POT) <p>El presente indicador valora positivamente que la normatividad de GRD establezca la articulación con dichas normas o políticas.</p> <p>La mención a la articulación con dichas normas o políticas puede estar incluida no solo en la normativa principal de la GRD, sino además en otras donde se pueda encontrar una explicación más amplia de la articulación de estas normas y políticas con los componentes de la GRD.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad de carácter nacional que regule la GRD (ley, reglamento, política nacional de GRD, plan nacional de GRD, estrategia nacional de GRD u otros documentos con carácter normativo.) 2. Verificar que en dicha normatividad se establezca, de forma explícita, la articulación de la GRD con normatividad sobre Adaptación al Cambio Climático, Gestión Integrada de Recursos Hídricos y/o Planificación y Ordenamiento Territorial. 3. De ser necesario, entrevistarse con representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-1A-2	En la normatividad vinculada con los planes, políticas, estrategias nacionales u otros instrumentos de políticas para la GRD, podría hacerse mención explícita a la articulación de acciones de GRD con otras normas relacionadas con el desarrollo sustentable.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición de este indicador, la normatividad nacional en GRD debe establecer de forma explícita que se debe articular con al menos una de otras políticas de carácter integral o multisectorial vinculadas con el desarrollo sostenible, o bien debe mencionar de forma explícita normas o políticas específicas vinculadas con temas tales como adaptación al cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos, planificación u ordenamiento territorial.</p> <p>La sola mención en la normatividad de GRD sobre su vínculo con otras “políticas vinculadas con el desarrollo sustentable” no será suficiente para verificar esta condición, ya que dicha mención deberá citar específicamente el tema al que esté vinculada, esto es, adaptación al cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos, planificación u ordenamiento territorial.</p> <p>En la justificación se deberá explicitar todas las articulaciones existentes que fueron identificadas durante el análisis, así como aquellas articulaciones inexistentes con las políticas vinculadas con el desarrollo sustentable indicadas anteriormente u otras relevantes para el país.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, de fecha 25 de mayo de 2011, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGERD (MG 1A-4a), establece en el Título III, Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, artículo 21, apartado 21.4 inciso G, que son instrumentos de la Política Nacional de GRD también *"los instrumentos de política, estrategia y planificación relacionados con el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano, protección del ambiente, cambio climático, la educación y comunicación"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. No se encontró en la normativa nacional de GRD articulación con normas relativas a la adaptación al cambio climático, gestión integrada de recursos hídricos o planificación y ordenamiento del territorio. Se analizaron: (i) Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005; (ii) Decreto N° 11.632 por el cual se reglamenta la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N), aprobado el 12 de Agosto 2013; (iii) Decreto N°1402 por el cual se aprueba el documento sobre Política Nacional de Gestión y reducción de Riesgos (PNGR), aprobado el 24 de marzo 2014 y publicado en la Gaceta N°67 del 4 de abril de 2014.

Código MG-1A-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en la gestión del riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Con el fin de comprobar que la GRD no es una política aislada, es esencial su inclusión dentro de las prioridades nacionales, vistas a través de los procesos de planeación del desarrollo y sus instrumentos. Por lo cual, es deseable que la GRD haga parte de estos instrumentos en sus objetivos, metas o indicadores concretos para así observar su impacto en los compromisos de política.</p> <p>Por lo anterior, se considera una buena práctica que la GRD de manera integral o algunos de sus componentes sean considerados en las políticas, estrategias, el plan plurianual o el plan nacional de desarrollo, u otro instrumento similar que establezca la visión y los compromisos de desarrollo del país a mediano o largo plazo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de un plan nacional, política, plan plurianual, estrategia de desarrollo nacional u otro instrumento equivalente vigente en el país que establezca la visión y los compromisos de desarrollo del país a mediano o largo plazo. 2. Identificar algún documento de carácter normativo que respalde la vigencia del instrumento identificado en el punto anterior. 3. Verificar que el o los instrumentos vigentes establecen criterios, objetivos, metas, compromisos o indicadores sobre componentes de GRD. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-6	Los documentos revisados o usados como verificables podrían ser de utilidad para verificar esta condición
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, se deben cumplir las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que el plan, política o estrategia nacional de desarrollo (o instrumento equivalente) contenga de manera explícita objetivos, metas, compromisos o indicadores sobre al menos uno de los componentes de GRD. - Que el instrumento identificado se encuentre vigente y esté respaldado por documento normativo. 	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

México 2014. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (MG-1A-5a) incluye explícitamente la GRD en la Primera Meta Nacional: "México en paz", bajo el título "Protección civil y prevención de desastres", y la retoma en el capítulo de objetivos, estrategias y líneas de acción, donde se incluyen bajo el Objetivo 1.6. *Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano*, dos estrategias con sus respectivas líneas de acción: Estrategia 1.6.1. *Política estratégica para la prevención de desastres* y 1.6.2. *Gestión de emergencias y atención eficaz de desastres*. Adicionalmente, bajo la Meta "México Próspero", el Objetivo 4.1 (*Mantener la estabilidad macroeconómica del país*) incluye la Estrategia 4.1.1. *Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico*, que introduce una línea de acción relacionada con instrumentos de protección financiera ante desastres naturales.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. The Bahamas does have a Working Draft of the National Development Plan 2016 (for public consultation), which proposes at 11.2: "*Integrate Disaster Risk Reduction in Development Policies*". This includes at 11.2.1 "*Integrating comprehensive disaster risk management strategies for disaster response*" and 11.2.4 and 11.2.5 "*Strengthening pre-disaster and post-disaster responses*". Since the Draft has not been approved yet, and there is no National Development Plan currently in place, the condition assessed in this indicator is not met by The Bahamas.

Traducción:

Bahamas 2017. Bahamas tiene un proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2016 (para consulta pública), que propone en el numeral 11.2: "*Integrar la reducción del riesgo de desastres en las políticas de desarrollo*". Esto incluye en 11.2.1 la "*integración de estrategias comprehensivas de gestión del riesgo de desastres para la respuesta a desastres*" y 11.2.4 y 11.2.5 "*fortalecer las respuestas previas y posteriores a los desastres*". Dado que el proyecto aún no ha sido aprobado y no existe un Plan Nacional de Desarrollo vigente, Bahamas no cumple actualmente la condición evaluada en este indicador.

Código MG-1A-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿El Plan Nacional de Desarrollo (o instrumento equivalente), establece objetivos, metas, o indicadores en ACC?	
Descripción general del indicador	
<p>Una política de Adaptación al Cambio Climático (ACC), insertada dentro de los procesos y prioridades de desarrollo, implicará una contribución importante a la reducción del riesgo de desastres. Por tanto, es deseable que este tipo de políticas sea incluida y considerada en los procesos nacionales de desarrollo, con objetivos, metas o indicadores de impacto.</p> <p>Por lo anterior, se considera una buena práctica que la ACC sea considerada dentro de las políticas, estrategias, el plan plurianual o el plan nacional de desarrollo, u otro instrumento similar que establezca la visión y los compromisos de desarrollo del país. La condición indagada se cumpliría también a través de un instrumento programático principal de la nación que implique que la ACC es tenida en cuenta en la planificación del desarrollo nacional.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de un plan, política, plan plurianual o estrategia de desarrollo nacional vigente en el país. 2. Identificar algún documento de carácter normativo que respalde la vigencia del instrumento identificado en el punto anterior. 3. Verificar que el o los instrumentos vigentes establecen criterios, objetivos, metas, compromisos o indicadores sobre los procesos de ACC. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-5	Los documentos revisados o usados como verificables podrían ser de utilidad para verificar esta condición
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, se deben cumplir las siguientes dos condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que el plan, política o estrategia nacional de desarrollo (o instrumento equivalente) contenga de manera explícita objetivos, metas, compromisos o indicadores sobre los procesos de ACC. - Que el instrumento identificado se encuentre vigente y esté respaldado por documento normativo. 	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Brasil 2017. Os objetivos vinculados ao Programa Temático Mudança do Clima (Programa 2050) podem ser encontrados no documento Plano Plurianual de Desenvolvimento (PPA) 2016-2019 são eles: *"Gerar e disseminar informação, conhecimento e tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas; Mitigar a mudança do clima e promover a adaptação aos seus efeitos, por meio da implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima; Desenvolver tecnologias para o monitoramento por sensoriamento remoto do desmatamento, uso da terra e ocorrência de queimadas e incêndios florestais e disseminar as informações geradas"*. Os indicadores e as metas, por sua vez estão contidos no documento No Diário Oficial da União de 14.01.2016 é possível identificar as: *"Metas 2016-2019: Fomentar 15 pesquisas e projetos sobre Mudanças Climáticas; Desenvolver e aprimorar modelos do sistema terrestre visando à construção e análise de cenários de mudanças climáticas; Elaborar Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima;- Elaborar dois Relatórios de Atualização Bienal à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (...)"*;

Traducción:

Brasil 2017. Los objetivos vinculados al Programa Temático de Cambio Climático (Programa 2050) se pueden encontrar en el documento del Plan Plurianual de Desarrollo (PPA) 2016-2019, y son: *"Generar y difundir información, conocimiento y tecnologías para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático; mitigar el cambio climático y promover la adaptación a sus efectos a través de la implementación de la Política Nacional sobre Cambio Climático; desarrollar tecnologías para el monitoreo de sensores remotos de la deforestación, el uso de la tierra y la ocurrencia de quemaduras e incendios forestales y diseminar la información generada"*. Los indicadores y metas, a su vez, están contenidos en el Diario Oficial de la Unión del 14 de enero del 2016, donde es posible identificar lo siguiente: *"Metas 2016-2019: Fomentar 15 investigaciones y proyectos sobre Cambio Climático; desarrollar y mejorar modelos del sistema terrestre para la construcción y análisis de escenarios de cambio climático; preparar la Comunicación Nacional de Brasil ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; preparar dos informes bienales de actualización de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (...)"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Plan Nacional de Desarrollo, marzo 2011: Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021 (aprobado por decreto supremo N° 054-2011-PCM), establece una serie de objetivos y acciones en ACC (eje estratégico 6: recursos naturales y ambiente. Punto D objetivo específico 4, páginas 253 - 254). No obstante, a que se cuenta con este documento, actualmente el Plan no está en vigencia puesto que a través del D. S. N° 051-2012-PCM el Gobierno amplió el plazo para actualizarlo (y para que entre en ejecución). Dicho plazo vence el 7 de mayo del 2014, por lo que actualmente (2013) la condición no se cumple.

Código MG-1A-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿Existe normatividad de Cambio Climático que establece la Gestión del Riesgo de Desastres como un objetivo, meta, fin, propósito o resultado?	
Descripción general del indicador	
La articulación entre la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) es un elemento clave en términos de coherencia, aprovechamiento de capacidades y enfoque integral. Por lo cual resulta conveniente que las estrategias de ACC y GRD se incluyan una a la otra de forma articulada, observando los puntos en común, fomentando sinergias y evitando la duplicación de esfuerzos y recursos.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar sobre la existencia de la normatividad nacional sobre cambio climático, la cual podría incluir alguna estrategia, política o plan nacional de cambio climático, así como documentos normativos vinculados con el sector ambiental. 2. Identificar dentro de la normatividad existente si cuenta con objetivos, metas, fines, propósitos o resultados explícitos de GRD. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras del sector ambiental o vinculada a la ACC sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
Para que se cumpla la condición, la normatividad de cambio climático en el país debe considerar, de forma explícita, objetivos, metas, fines, propósitos o resultados vinculados con la GRD.	
<i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
Paraguay 2016. En la Política Nacional de Cambio Climático aprobada por la Comisión Nacional de Cambio Climático en sesión del 17 de noviembre del 2011 y por el Consejo Nacional del Ambiente en sesión del 29 de diciembre del 2011 (MG-1A-7a), se considera la gestión del riesgo como una de las líneas estratégicas del pilar estratégico de “Gestión del conocimiento y tecnología”. La línea estratégica sobre gestión de riesgos se indica <i>“Establecer planes y programas de gestión de riesgo diseñados para identificar la vulnerabilidad y anticipar los impactos asociados al Cambio Climático de acuerdo con criterios de vulnerabilidad, frecuencia y la intensidad del impacto, que plantean medidas, capacidad nacional y local para adaptar, y acciones preventivas que reduzcan el costo del impacto”</i> . En el Decreto N° 14.943 por el cual se implementa el Programa Nacional de Cambio Climático, del 9 de Octubre 2001 (MG-1A-7b) se establece en el Art. 2 la creación de la Comisión Nacional de Cambio Climático, cuyas funciones se definen en el Art. 3 donde se destaca la de <i>“a) Definir, supervisar y evaluar la política nacional sobre cambio climático..”</i> , lo cual le permite dar el carácter normativo de la Política Nacional de Cambio Climático.	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Argentina 2014. A través del Decreto N° 2213/2002 se designó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) como Autoridad de Aplicación de la Ley N°24.295 (Aprobación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). Bajo la órbita de la SAyDS se creó la Dirección de Cambio Climático (DCC) que tiene como objeto la instrumentación y coordinación de políticas y acciones en las cuestiones que refieran al cambio climático. La DCC, en diciembre de 2009, constituye el Comité Gubernamental de Cambio Climático (CGCC) como una instancia de articulación institucional dirigida a liderar el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional en Cambio Climático (ENCC). El CGCC elaboró un primer documento “Estrategia Nacional en Cambio Climático: Estructura. Antecedentes. Objetivos Generales y Medios” (2010). Dicho documento fue sometido a un proceso de consulta con los sectores: privado, académico, de la sociedad civil y de los trabajadores. De esta forma, la modalidad de construcción de la ENCC se caracteriza por ser un proceso de acuerdos que habilita la participación y la integración de las visiones, prioridades y opciones para la acción de diferentes sectores e instituciones gubernamentales a nivel nacional y provincial. Este proceso de participación concluyó con un segundo documento denominado “Primera fase de la Estrategia Nacional en Cambio Climático” que define objetivos generales, medios, ejes de acción y propuestas de acciones específicas para cada eje. Este último, a su vez, será la base para iniciar una “Segunda Fase de la Estrategia Nacional en Cambio Climático” donde se espera avanzar sobre la definición de indicadores y metas para las acciones propuestas, incluyendo entre otras, actores involucrados, recursos y tiempos necesarios para llevarlas adelante. El documento base para esta “segunda fase” de la ENCC establece, como primer eje de acción, la necesidad de “Incorporar consideraciones de gestión integral del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático a los procesos de planificación territorial”. Por otra parte, la DCC, la DNPC y la SPTIP, por medio del Programa Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Territorial, han iniciado un trabajo conjunto de vinculación entre la Adaptación al Cambio Climático y Reducción de Riesgos a Desastres. En este marco, se elaboró una metodología de alcance local denominada “Manual de Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático para la gestión y planificación local” y se han elaborado los “Lineamientos para la incorporación de la Adaptación al Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres en Argentina”. A pesar de estos esfuerzos, hasta el momento (2014) tanto la Estrategia Nacional en Cambio Climático, como los Lineamientos para la incorporación de la Adaptación al Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de Desastres en Argentina no representan instancias legalmente vinculantes; razón por la que no se cumple la condición positiva para este indicador.

Belize 2017. The National Climate Change Policy, Strategy and Action Plan to Address Climate Change in Belize, prepared by the Ministry of Forestry, Fisheries and Sustainable Development, together with the Caribbean Community Climate Change Centre, lines out sectorial strategies and actions related to climate change adaptation. While the above would allow for a positive consideration of the condition, review of national regulations related to forestry and fisheries indicated no regulatory requirement to develop a policy such as the above. Furthermore, the Caribbean Community Climate Change Centre is established in Belize under the Act No. 6 of 2015 “Caribbean Community Climate Change Centre”, gazette 1st of August 2015. The said Act in Article IV “Objectives I”, section (c) states that the Centre shall provide “[...] *comprehensive policy and technical support in the area of climate change and related issues and spearheading regional initiatives in those areas* “. Nevertheless, there is no provision legally binding the Centre’s policies to Members of the Centre.

Traducción:

Belice 2017. La Política Nacional de Cambio Climático, la Estrategia y el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático para abordar este problema en Belice, ha sido preparados por el Ministerio de Silvicultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, junto con el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe, en los que se delinean las estrategias y acciones sectoriales relacionadas con la adaptación al cambio climático. Si bien lo anterior permitiría una consideración positiva de la condición, la revisión de las regulaciones nacionales relacionadas con la silvicultura y la pesca indicaron que no existe un requisito regulatorio para desarrollar una política como la anterior. Además, el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe se estableció en Belice en virtud de la Ley Núm. 6 de 2015 "Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe", gaceta del 1 de agosto de 2015. Dicha Ley en el Artículo IV, "Objetivos I", sección (c), establece que el Centro proporcionará "[...] *políticas integrales y apoyo técnico en el área del cambio climático y temas relacionados y encabezará iniciativas regionales en esas áreas*". Sin embargo, no existe ninguna disposición que obligue legalmente las políticas del Centro a los Miembros del Centro.

Código MG-1A-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. ¿Existe normatividad que establece un régimen de carrera profesional en la administración pública aplicable a la entidad responsable de la GRD a nivel nacional?	
Descripción general del indicador	
<p>La existencia de normatividad que regule el servicio civil o un régimen o servicio profesional de carrera, etc. en la administración pública, puede contribuir a mejorar la estabilidad en el empleo del personal y, por tanto, a preservar las inversiones en formación de capital humano y la experiencia generada con la práctica.</p> <p>Lo anterior aplicado a la institución responsable a nivel nacional de la GRD, asegura que los aprendizajes y experiencia tanto de niveles técnicos y operativos, permitan dar continuidad y proyección a la gobernabilidad de la GRD en el país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar sobre la existencia de normatividad relacionada con la función pública, servicio público o civil, carrera administrativa o vinculada con la administración pública. 2. Comprobar si el personal de la entidad nacional rectora de la GRD está incluido en este régimen. 3. Revisar si en la normatividad de GRD existente en el país se establece el régimen de carrera profesional aplicable a su personal, acorde a la administración pública del país. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora de la GRD o de la administración pública del estado sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-1A-2 MG-1A-3 MG-1A-4	<p>La normatividad identificada y/o utilizada para estos indicadores podría contener la evidencia de que el personal de la institución rectora de la GRD está adscrita al régimen de carrera profesional de la administración pública.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición, debe existir normatividad que regule el servicio civil, un régimen o servicio profesional de carrera, etc., en la administración pública, y que éste se aplique al menos a una parte del personal de la entidad rectora nacional de la GRD.</p> <p>Si el régimen de carrera profesional no aplicara para todos los funcionarios de la entidad responsable de la GRD a nivel nacional, en la justificación se deberá detallar a quienes aplica y no dicho régimen.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Bolivia 2015. La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, publicada el 27 de octubre de 1999, establece un marco normativo para la carrera profesional en la administración pública que es aplicable a las entidades del Sistema de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (SISRADE). En las Disposiciones Generales, Capítulo 1, sobre el Objetivo de Aplicación y Principios, Artículo 2 (Objeto), establece que: *"El presente Estatuto, en el marco de los preceptos de la Constitución Política del Estado, tiene por objeto regular la relación del Estado con sus servidores públicos, garantizar el desarrollo de la carrera administrativa y asegurar la dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública, así como la promoción de su eficiente desempeño y productividad.* El Artículo 3 (Ámbito de Aplicación), establece: *"I. El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que preste n servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas."*

Uruguay 2015. La Ley 19.121 del Estatuto del Funcionario público de la administración central, del 20 de agosto de 2013 (MG-1A-8a), que establece un régimen de carrera profesional en la administración pública que aplica para las entidades responsables del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE), es exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estos. La ley establece elementos clave como la capacitación de funcionarios públicos; la gestión del rendimiento y la evaluación del desempeño entre otras.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. Durante las entrevistas con funcionarios de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), se indicó que los recursos humanos de COPECO se rigen por el código del trabajo y no por el REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA, el cual rige al personal de gran parte de las instituciones gubernamentales.

Código MG-1B-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la gestión del riesgo de desastres como un propósito, fin o resultado?	
Descripción general del indicador	
<p>Uno de los factores físicos más relevantes en la generación del riesgo de desastres está ligado con los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, y en particular con los relacionados con el ciclo del agua. De tal manera, la normatividad, planes, políticas y/o estrategias para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) o equivalentes constituyen uno de los principales mecanismos para incidir sobre las causas y factores del riesgo de desastres hidro-climáticos.</p> <p>Por lo anterior, el presente indicador valora que la normatividad, planes, políticas y/o estrategias para la GIRH contengan elementos concretos vinculados de forma articulada con los componentes de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar sobre la existencia de normatividad, planes, políticas y/o estrategias en GIRH o equivalente. 2. Considerar que la normatividad sobre GIRH puede estar contenida en la normatividad ambiental. 3. Verificar que los planes, políticas y/o estrategias en GIRH o equivalente estén respaldados por algún documento normativo. 4. Comprobar que, en la normatividad, planes, políticas y/o estrategias de GIRH o equivalente se establezca expresamente a la GRD como uno de sus objetivos, propósitos, fin o resultado. 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora de la GIRH y/o GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG 1B-2 MG-1C-4	La normatividad identificada y/o utilizada para verificar estos indicadores podría contener la evidencia de que la GRD es considerada como parte de los objetivos, propósitos, fin o resultado de la normatividad de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) o equivalente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición, se deberá evidenciar la existencia de normatividad, planes, políticas y/o estrategias para la GIRH que incluyan explícitamente su articulación con la GRD. Esta articulación se materializará si la GRD, o al menos uno de sus componentes, es considerada dentro de los objetivos, propósitos, fin o resultado de la GIRH.</p> <p>Si la condición se verificara con planes, políticas y/o estrategias en GIRH, éstos deben estar respaldados por documentos normativos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Panamá 2014. La Política Nacional de Recursos Hídricos, aprobada a través del Decreto Ejecutivo 480 de abril de 2013 (MG 1B-1a), incorpora dentro de sus principios, el "Derecho a la Prevención", estableciendo que la gestión integrada de los recursos hídricos debe tomar en cuenta un enfoque de reducción de vulnerabilidad a través de una gestión integral del riesgo. De la misma manera, incorpora la gestión de riesgo de desastres dentro del Objetivo General de la Política. Adicionalmente, la Reglamentación de la Ley 44 de Cuencas Hidrográficas, también aprobada en 2013, a través del Decreto Ejecutivo 479, (MG 1B-1b), establece dentro de su artículo 3 que contribuye con aspectos relacionados de reducción de riesgos de desastres.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. No se encontró en la normativa una referencia explícita entre la gestión integrada de recursos hídricos y la gestión del riesgo de desastres, como propósito, fin o resultado. La Ley de Aguas Nacionales define a la gestión integrada de los recursos hídricos en su Artículo 3, fracción XXIX: *"...Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Para la aplicación de esta Ley en relación con este concepto se consideran primordialmente agua y bosque"*. Cabe destacar que esta misma Ley identifica en su Artículo 7 a la Comisión Nacional de Aguas (CONAGUA) como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, y le asigna la responsabilidad de *"Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos"*. No obstante, tampoco se encontró evidencia en la normatividad específica de CONAGUA que se establezca la gestión del riesgo de desastres como un propósito, fin o resultado de la gestión integrada de los recursos hídricos.

Código MG-1B-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos que establece la adaptación al cambio climático como un propósito, fin o resultado?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Considerando que los procesos de Adaptación al Cambio Climático (ACC) se vinculan con los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, y con el ciclo del agua, entonces la normatividad, planes, políticas y/o estrategias de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) o equivalentes constituyen mecanismos eficaces para incidir sobre las causas y consecuencias del cambio climático.</p> <p>Por lo anterior, el presente indicador valora que las normativas, planes, políticas y/o estrategias para la GIRH contengan elementos concretos vinculados de forma articulada con los procesos de ACC.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar la existencia de normativa sobre Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) o equivalente. 2. Considerar que la normatividad sobre GIRH puede estar contenida en la normatividad ambiental. 3. Verificar que los planes, políticas y/o estrategias en GIRH o equivalente estén respaldados por algún documento normativo. 4. Comprobar que en la normatividad, planes, políticas y/o estrategias de GIRH o equivalente (Política Hídrica, normatividad de recursos hídricos) se establezca explícitamente a la ACC como uno de sus objetivos, propósitos, fin o resultado. 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora de la GIRH y/o ACC sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG 1B-1 MG-1C-4	La normatividad identificada y/o utilizada para verificar estos indicadores podría contener la evidencia de que la ACC es considerada como parte de los objetivos, propósitos, fin o resultado de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) o equivalente.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición, se deberá evidenciar la existencia de normatividad, planes, políticas y/o estrategias para la GIRH que incluyan explícitamente su articulación con la ACC. Esta articulación se materializará si la ACC es considerada dentro de los objetivos, propósitos, fin o resultado de la GIRH.</p> <p>Si la condición se verificara con planes, políticas y/o estrategias en GIRH, éstos deben estar respaldados por documentos normativos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Ecuador 2016. En la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua (MG-1B-2), aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2014, en su artículo 83 sobre políticas en relación con el agua, se establece en el literal e) "*Adoptar y promover medidas con respecto de adaptación y mitigación al cambio climático para proteger a la población en riesgo*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. Se corroboró que el Mecanismo Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incluía referencias pertinentes para la valoración positiva de este indicador, ya no existe, y que la fuente actualmente vigente de información sobre normativa relacionada con la GIRH es el Plan Nacional de Cuencas. Como no se ha podido localizar la resolución que lo aprueba, ni otro medio que permita brindar evidencia sobre su adopción formal, el indicador no se cumple.

Código MG-1B-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿La normatividad que regula la realización de evaluaciones de impacto ambiental (o proceso equivalente), integra el análisis de riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
Las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) se han convertido en una práctica común. Tanto el estudio previo, como el control que se realiza sobre su cumplimiento, ofrecen buenas oportunidades para que se constituyan en instrumentos que prevengan o mitiguen el riesgo de desastres. Por lo tanto, se considera una buena práctica que la normatividad que las regula establezca que se analicen elementos relacionados con el riesgo de desastres.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula la realización de estudios de impacto ambiental, así como de permisos y autorizaciones ambientales en el país, la cual por lo general es parte de la normatividad ambiental y vinculada con los roles y responsabilidades del Ministerio de Ambiente o equivalente. 2. Identificar las herramientas técnicas (guías, manuales, términos de referencia) disponibles en el país para la realización y evaluación de las EIA. 3. Verificar que las herramientas técnicas para la EIA estén respaldadas por algún documento normativo, o que la institución que las haya emitido tiene asignada la tarea de elaborarlas. 4. Verificar si la normatividad y herramientas técnicas identificadas incluyen como parte de los estudios de impacto ambiental el análisis del riesgo de desastre, es decir, el análisis sobre el impacto que el propio proyecto puede sufrir como consecuencia de la ocurrencia de un evento natural, así como el riesgo de desastre que el proyecto puede generar o exacerbar como consecuencia de sus propias características. 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora del sector ambiental, en particular aquella encargada de revisar y aprobar los EIA, sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8	La normatividad ambiental que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría orientar si dicho rol se ha incorporado en normatividad complementaria o en guías y manuales para el EIA.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición, la normatividad que regula la realización de las evaluaciones de impacto ambiental o las herramientas técnicas diseñadas para tal propósito debe considerar de manera explícita el riesgo de desastre o a sus elementos constitutivos: amenaza, exposición y vulnerabilidad.</p> <p>La mención que se haga en la normatividad identificada debe hacer referencia explícita al “análisis de riesgo de desastres” producto de fenómenos naturales peligrosos, ya que en este tipo de normativa existe la noción de “análisis de riesgo ambiental” que es un concepto diferente.</p> <p>No será posible verificar este indicador con términos de referencia o contratos para la realización de EIA de proyectos específicos, ya que el espíritu del indicador es que el análisis de riesgo de desastres sea aplicable a todo tipo de proyectos establecidos en la normatividad ambiental del país.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Chile 2013. Decreto N° 40 del 12-08-12, que aprueba el Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental, del 12 de agosto del 2012, y entró en vigor el 24 de diciembre de 2013, (MG-1B-3a). Párrafo 2° "Del contenido mínimo de los Estudios de Impacto Ambiental, refiere en el *"Artículo 18.- Contenido mínimo de los Estudios... e.1. Medio físico, que incluirá, la caracterización y análisis de los aspectos asociados a [entre otros]: - La litósfera, como la geología, geomorfología, las áreas de riesgos geológicos y geomorfológicos, la caracterización fisicoquímica del suelo y el nivel de vibraciones existentes; ..."* Dichos aspectos deberán incorporar las áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales. De igual forma el artículo considera la formulación de: "... i) *Un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación que describirá y justificará las medidas que se adoptarán para eliminar, minimizar, reparar, restaurar o compensar los efectos ambientales adversos del proyecto o actividad descritos...*" y "... j) *Un Plan de Prevención de Contingencias y de Emergencias asociado a las eventuales situaciones de riesgo o contingencia identificadas, según lo establecido en el Párrafo 2o del Título VI de este Reglamento"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. La normatividad que regula las evaluaciones de impacto ambiental que está plasmada en la Ley No. 64-2000, y en especial, en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales, no incluye explícitamente la identificación del riesgo de desastres. Aunque existen casos en los que se pudo corroborar que se incluye un análisis de riesgo de desastres detallado, ese alcance se incluye en los Términos de Referencia del estudio de impacto ambiental, pero son específicos para cada sector y categoría de proyecto, y no están respaldados por la normatividad que regula las evaluaciones de impacto ambiental.

Argentina 2014. De acuerdo con la Ley General del Ambiente N° 25.675 *"todas las actividades que puedan modificar o alterar de manera significativa el ambiente, o sus recursos o la calidad de vida de la población, deben cumplir con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)"*. De esta forma queda puntualizada la EIA como un instrumento de la política ambiental nacional. Sin embargo, no queda definido el análisis de riesgo de desastre como un ítem constitutivo del mismo. No obstante, conviene remarcar que la Ley General de Ambiente contempla, como uno de sus objetivos de política ambiental, el *"Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental"* (artículo 2 inciso k).

Código MG-1C-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que descentralice las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio a las unidades de gestión territorial?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La descentralización y la gestión local son pilares fundamentales para asegurar la calidad de la gestión del riesgo de desastres (GRD) y la adaptación al cambio climático (ACC), ya que las propias comunidades y las autoridades locales son los mejores posicionados para identificar los problemas, desafíos y posibles soluciones sobre estas materias. La descentralización, tal y como se concibe en el presente indicador, para aquellos países que en función de su historia y características han adoptado un sistema de organización estatal en el que la mayoría de las decisiones emanan de un gobierno central, supone la existencia de normatividad que oriente el proceso de desconcentración o delegación en materia de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio, en beneficio de las unidades de gestión territorial.</p> <p>En el caso de los países federales, en principio, no hay una norma y un proceso descentralizador, ya que corresponde a la Constitución, o a alguna ley constitucional, sentar las bases de la organización política y administrativa de la República. Es entonces que desde ahí se puede reservar para el gobierno federal ciertas facultades, mientras tanto otras son establecidas para ser compartidas entre el gobierno federal y las unidades de gestión territorial, o bien, disponer que las ejerzan solamente las unidades de gestión territorial.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar, en el caso de países con sistemas centralizados, la normatividad de descentralización, normatividad o códigos municipales, así como normatividad de planificación y de ordenamiento territorial. 2. Verificar que dicha normatividad establezca responsabilidades a las unidades de gestión territorial para llevar a cabo procesos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de gestión territorial. 3. En el caso de los países federados, se debe recurrir a la constitución o leyes constitucionales, para identificar en su articulado, si se otorga a las unidades de gestión territorial, la responsabilidad de planificación del desarrollo u ordenamiento territorial. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1C-1	La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial identificadas en el país, en especial de los Municipios, puede contener la asignación de responsabilidades en las materias que indaga el presente indicador.
RR-1C-3	La normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial existente en el país puede contener la asignación de responsabilidades en estas materias a las unidades de gestión territorial.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla la condición, la normatividad identificada debe establecer explícitamente, al menos para la unidad de gestión territorial de menor jerarquía (Municipio o equivalente) existente en el país, competencias para el ordenamiento territorial, la planificación del desarrollo o la gestión territorial.

En la justificación se deberá explicitar las diferentes unidades de gestión territorial existentes en el país y para cuáles de ellas se les han asignado las responsabilidades que indaga este indicador, así como detallar las materias que le han sido delegadas a cada una de ellas (planificación del desarrollo, ordenamiento territorial u otros instrumentos de planificación y gestión del territorio).

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. La normatividad que descentraliza las responsabilidades en materia de planificación del desarrollo u ordenamiento territorial a las unidades de gestión territorial se halla en el Decreto Ejecutivo No. 78-2002, de Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, aprobado el 19 de Febrero del 2002, el cual establece una Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) cuya función es apoyar los procesos de Ordenamiento Territorial, coordinando a las instituciones para lograr su concurrencia en el proceso de conformidad con las respectivas funciones (Artículo 10); además se delega a los Gobiernos Regionales y Municipales como responsables de la implementación de disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo de Normas de Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, regidos conforme a sus competencias otorgadas en la legislación vigente aplicable, con la debida coordinación interinstitucional (Art. 11).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guyana 2017. The Local Democratic Organs Act, enacted by the Parliament on Guyana in 1980 establishes in Part II ("Local Democratic Organs"), numeral 7. *"Without prejudice to the generality of section 5, it shall be the duty of each local democratic organ and the members and officers thereof organs. within its area: (a) to maintain and protect public property; (b) to protect and improve the physical environment; (c) to improve working and living conditions; (d) to stimulate economic activities and improve production and efficiency; (e) to promote the social and cultural life of the people; (f) to raise the level of civic consciousness; (g) to preserve law and order; (h) to consolidate socialist legality; (i) to safeguard the rights of the people; and (j) to give advice, encouragement and support to the people in their daily activities and to give leadership by example."* The iGOPP's team reviewed other regulations in regards to local government, such as the Municipal and District Councils Act, the Local Authorities (Elections) Act amended in 2015, and the Local Government Act amended in 2015, and did not find evidence of the establishment of responsibilities for development planning or territorial planning and land use among the regional and municipal entities.

Guyana 2017. La *Local Democratic Organs Act*, promulgada por el Parlamento de Guyana en 1980 establece en la Parte II ("*Órganos Democráticos Locales*"), numeral 7. *"Sin perjuicio de la generalidad de la sección 5, será deber de cada órgano democrático local y los miembros y funcionarios de los mismos órganos dentro de su jurisdicción: (a) mantener y proteger la propiedad pública; (b) proteger y mejorar el entorno físico; (c) mejorar las condiciones de trabajo y de vida; (d) estimular actividades económicas, mejorar la producción y la eficiencia; (e) promover una conciencia social y cultural; (g) preservar la ley y el orden; (h) consolidar la legalidad socialista; (i) salvaguardar los derechos de las personas; y (j) asesorar, alentar y apoyar a las personas en sus actividades diarias y dar ejemplo con el liderazgo"*. El equipo de iGOPP revisó otras regulaciones con respecto al gobierno local, como la *Municipal and District Councils Act*, la *Local Authorities (Elections) Act* enmendada en 2015, y la Ley de Gobierno Local modificada en el 2015, y no encontraron evidencia del establecimiento de responsabilidades para la planificación del desarrollo o la planificación territorial y el uso de la tierra entre las entidades regionales y municipales.

Código MG-1C-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Existe normatividad nacional que establece un enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos?	
Descripción general del indicador	
La divergencia entre los límites de las cuencas existentes en un país y los límites de las unidades de gestión territorial del país puede representar una seria dificultad en los procesos de gestión ambiental o de los recursos hídricos. Por el contrario, la existencia de normativas, políticas, estrategias o instrumentos de gestión a nivel territorial, que dispongan un enfoque de cuencas o ecosistemas, entre otros, puede dar un valor agregado a la GRD en términos de su eficacia.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si existe normatividad programas o políticas sobre agua, gestión integral de recursos hídricos, manejo de cuencas, ordenamiento territorial o gestión ambiental o normatividad que regule la creación y funcionamiento de los comités de agua y/o cuencas en el país. 2. Verificar que dicha normativa establezca un enfoque de cuenca o eco-región para la planificación o gestión ambiental o del recurso hídrico. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora del sector ambiental o de la GIRH sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1B-1 MG-1B-2 MG-1C-4	La normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos identificada para estos indicadores podría establecer el enfoque de cuenca.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición, la normatividad nacional identificada debe establecer de forma explícita que las cuencas o eco-regiones son consideradas la base territorial para la gestión ambiental o del recurso hídrico.</p> <p>No se cumplirá la condición si la normatividad identificada establece el enfoque requerido, pero asignando responsabilidades a las unidades de gestión territorial para el manejo de las cuencas que se encuentran en el territorio bajo su administración, sin reconocer la labor que se debe realizar en cuencas compartidas con otras unidades territoriales.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

El Salvador 2016. La Ley de Medio Ambiente, aprobada por Decreto No. 233 publicado en el Diario Oficial No.: 79 Tomo No.: 339 con Fecha Emisión: 02/03/1998 Fecha Publicación: 04/05/1998 Fecha de Última Modificación 28/05/2015 y vigente desde el 12 de mayo de 1998 (MG-1C-2) , establece en su Artículo 14 literal b) que: *"Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: b) Las características ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos naturales y culturales y en especial, la vocación natural y el uso potencial del suelo, siendo la cuenca hidrográfica, la unidad base para la planeación del territorio;"*. Asimismo, el artículo 48 de dicho cuerpo refiere que: *"El Ministerio promoverá el manejo integrado de cuencas hidrográficas, una ley especial regulará esta materia. El Ministerio creará un comité interinstitucional nacional de planificación, gestión y uso sostenible de cuencas hidrográficas. Además, promoverá la integración de autoridades locales de las mismas."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Chile 2013. No se localizó evidencia de la existencia de normativa que establezca la administración bajo el enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos. La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos hace referencia a las 101 cuencas del país, y reconoce su importancia en su eje estratégico 1. Gestión Eficiente y Sustentable, en donde refiere: *"... En este escenario, es clave la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y la gestión integral de cuencas, en el entendido de que cada cuenca es un territorio particular y único. Así, cobran importancia las Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA), conformadas por las Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua"*. No obstante, no se localizó una norma que establezca la administración bajo el enfoque de cuenca o eco-región para la gestión ambiental o de recursos hídricos.

Código MG-1C-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿Existe normatividad que faculte a las Unidades de Gestión Territorial para la formación de redes, acuerdos, alianzas o convenios territoriales aplicables a la GRD?	
Descripción general del indicador	
La divergencia entre los ámbitos espaciales de los mapas del riesgo de desastres y los límites jurisdiccionales de las distintas Unidades de Gestión Territorial (UGT) es una dificultad adicional para la GRD. Las normativas que facilitan que las UGT busquen la asociación entre sí, con el objetivo de obtener ventajas en la generación de economías de escala y otro tipo de acciones generadoras de sinergia, permiten establecer mecanismos más eficientes para la gestión del riesgo de desastres.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad de GRD, de unidades de gestión territorial, normativa de ordenamiento territorial, así como políticas o programas para el mejoramiento de la gestión del territorio. 2. Indagar si dicha normatividad faculta la formación de acuerdos, alianzas o convenios aplicable a la GRD entre las distintas UGT. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	La normatividad sobre GRD puede contener las disposiciones para el trabajo conjunto de las UGT en materia de GRD.
RR-1C-1	La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial identificadas en el país, y en especial de los Municipios, puede contener la asignación de responsabilidades en las materias que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición debe existir normatividad nacional que faculte al menos a la unidad de gestión territorial de menor jerarquía existente en el país (municipio o equivalente), la formación de acuerdos, redes o convenios entre UGTs, que sea aplicable para al menos uno de los componentes de la GRD.</p> <p>En los países federados, a falta de un texto normativo explícito, se podrá justificar con base en la normatividad vigente en el país cómo es que las UGT con base en su autonomía pueden formar esas redes, acuerdos, convenios y alianzas.</p> <p>En la justificación se deberá explicitar las diferentes unidades de gestión territorial existentes en el país y cuáles de ellas tienen asignadas las facultades por las que indaga este indicador.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Perú 2013. La Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, del 26 mayo de 2003 (MG 1C-3a), define en el artículo 73, Materias de Competencia Municipal, en el apartado (c), la responsabilidad de "*Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con las respectivas municipalidades distritales*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Brasil 2017. No que concerne a gestão territorial urbana: a competência é exclusiva do município. A Constituição Federal de 1988 define este processo, em seu artigo 182 e 183, que em 2001 foi regulamentada pela lei 10. 257/2001. A LEI No 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamentan los artículos. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. No capítulo I das diretrizes gerais, no Art. 2o define que "*A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais*" sendo que no parágrafo III estabelece a "*cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social*", entretanto não foi encontrada normatização que autorize as Unidades de Gestão Territorial a formarem redes, acordos, alianças ou convênios territoriais aplicáveis a GRD.

Traducción:

Brasil 2017. Respecto a la gestión territorial urbana: la competencia es exclusiva del municipio. La Constitución Federal de 1988 define este proceso, en sus artículos 182 y 183, que en 2001 fue reglamentada por la Ley N° 10.257 del 10 de julio de 2001, estableciendo pautas generales para la política urbana y otras medidas. En el Capítulo I de las pautas generales, el Artículo 2 establece que "*La política urbana tiene como objetivo ordenar el desarrollo completo de las funciones sociales de la ciudad y la propiedad urbana, a través de las siguientes pautas generales*" y, en el párrafo III, establece: "*la cooperación entre gobiernos, el sector privado y otros sectores de la sociedad en el proceso de urbanización, para servir al interés social...*", sin embargo, no se encontraron regulaciones que autorizaran a las Unidades de Gestión Territorial para formar redes, acuerdos, alianzas o acuerdos territoriales aplicables a GRD.

Código MG-1C-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe normatividad que faculte la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas?	
Descripción general del indicador	
El enfoque de constituir estructuras de gestión en territorios que corresponden al de las cuencas o de determinados ecosistemas se considera un objetivo deseable para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). Sin embargo, para ello hace falta que exista normatividad en esa materia, y de esa manera dotar a estas estructuras de gestión territorial de la GIRH con un soporte normativo que establezca tanto la jurisdicción, la autoridad, la definición de los territorios y demás aspectos necesarios para su funcionamiento.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar la existencia de normatividad relacionada con la creación de estructuras de gestión territorial en GIRH, cuencas, eco-regiones o ecosistemas. Esta normatividad puede ser en materia ambiental, de agua, recursos hídricos, normatividad municipal o regional o vinculadas a la planificación y el ordenamiento territorial. 2. Identificar si se establece la creación de unidades de gestión basadas en cuencas, eco-regiones o ecosistemas. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1B-1 MG-1B-2	La normatividad sobre gestión integrada de recursos hídricos puede facultar la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas.
RR-1C-1	La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial en el país, en especial de los Municipios, puede facultar la formación de estructuras de gestión territorial para la gestión integrada de recursos hídricos o manejo de ecosistemas.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada debe establecer a la cuenca, eco-región o ecosistema como una unidad de gestión, con responsabilidades explícitas, diferentes a las unidades de gestión territorial existentes en el país.</p> <p>En la justificación se deberá registrar tanto las unidades de gestión identificadas, como las principales responsabilidades que tengan asignadas y que sean relevantes para la GRD.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Honduras 2014. LEY GENERAL DE AGUAS (DECRETO 181-2009) publicado en la Gaceta el 14 de diciembre 2009 (MG-1C-4a) “Art 19.- *NATURALEZA DE LOS CONSEJOS DE CUENCA: Los Consejos de Cuenca que integran y representan en sus respectivos Consejos de Sub-Cuenca y Micro-Cuenca son instancias de coordinación y concertación de las acciones de los agentes públicos y privados involucrados en la gestión multisectorial en el ámbito geográfico de la cuenca.*

Constituyen entidades de empoderamiento de la Comunidad para asegurar la participación ciudadana en el cumplimiento de la Ley, las políticas y los planes de la gestión hídrica. Tienen por finalidad proponer, ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y la protección, conservación y preservación de los recursos hídricos de la cuenca”.

“ARTÍCULO 21.- *FUNCIONES DE LOS CONSEJOS DE CUENCA: Los Consejos de Cuenca, tienen las funciones siguientes: 1) Identificar y proponer para su ejecución acciones en el ámbito de la cuenca para su inserción en los instrumentos del ordenamiento y la planificación hídrica y de las distintas entidades del Gobierno que tengan presencia en el espacio de la cuenca*”

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2018. No se cumple con la condición. Si bien existe normatividad que crea autoridades para el Manejo Sustentable de Cuencas, tales como las del Lago de Izabal, creada por Decreto N° 10-98 (MG-1C-4b); del Lago de Atitlán, mediante Decreto N° 133-96 (MG-1C-4c) y la autoridad para el Lago de Amatitlán, creada por Decreto N° 64-96 (MG-1C-4a), son casos muy puntuales y específicas para cuerpos lacustres, no para ríos. El Código Municipal tampoco hace referencia específica a la Gestión de Recursos Hídricos, aunque hay casos mancomunarios aislados, como la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo (MANCUERNA), y la Carta de Entendimiento para Implementar el Modelo de Gestión Integrada de Recursos Hídricos por Microcuencas en la Cuenca del Río Samalá en Quetzaltenango, que no alcanzan como evidencia para sustentar la valoración positiva del indicador.

Código MG-2-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) o de la entidad rectora en GRD que establece la estrategia o política para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera como deseable que los países generen una estrategia o política para el financiamiento de la gestión de riesgo de desastres (GRD) que considere cada uno de sus componentes, incluyendo el componente de protección financiera. Así mismo, se considera deseable que dicha estrategia o política de gestión financiera del riesgo de desastres esté acompañada de un plan para su implementación.</p> <p>Es decir, se considera como un factor de calidad la existencia de una estrategia o política de gestión financiera del riesgo de desastres que proponga diferentes instrumentos financieros que el país debería considerar para financiar los diferentes componentes de la GRD. Conviene destacar que en este indicador nos referimos a una estrategia de financiamiento no solo de las acciones de GRD después de ocurrido un desastre (respuesta, rehabilitación, recuperación, reconstrucción) sino también de aquellas que deben realizarse antes de la ocurrencia del evento natural, con miras a dimensionar, reducir, prepararse y protegerse financieramente frente al riesgo de desastre.</p> <p>Lo que interesa es que el país haya discutido el tema y haya plasmado su visión sobre la forma de gestionar recursos para todos los componentes de la GRD en documentos oficiales que reflejen su estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres, tales como Decretos, Resoluciones Ministeriales, Estrategias, Políticas o publicaciones del Ministerio Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) o bien por parte de la entidad rectora de la GRD en el país, entre otros.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar la existencia de documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces), o de la entidad rectora de la GRD en el país que describan las acciones o instrumentos financieros que el país ha identificado para financiar los diferentes componentes de la GRD. 2. De ser necesario entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de autoridad hacendaria, de economía o finanzas y de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-2-16	Si el país cuenta con una estrategia de protección financiera, es probable que tenga una estrategia para los otros componentes de la GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, debe existir documento normativo u oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) o de la entidad rectora de la GRD que contenga o evidencie la existencia de una estrategia o política de gestión financiera del riesgo de desastres, para los diferentes componentes de la GRD.</p> <p>Ese documento podrá estar publicado por el órgano oficial, aprobado o expedido mediante un decreto o por resolución ministerial, estar publicado en la página institucional de la entidad competente en el tema, o cualquier otra formalidad que le confiera al documento el carácter de estrategia oficial.</p> <p>Adicionalmente, el documento deberá estar vigente y haber sido elaborado o actualizado en los últimos 3 años, así como incluir la propuesta o listado de instrumentos financieros que podrían considerarse para financiar las necesidades identificadas.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La condición se cumple, dado que en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) está publicado el documento "Estrategia Financiera para Disminuir la Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante la Ocurrencia de un Desastres Natural", el cual fue elaborado en 2012 (MG-2-1a). Adicionalmente, en diciembre de 2013, el MHCP lanzó en un seminario de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la publicación "Colombia: Estrategia de política de gestión financiera pública ante el riesgo de desastres por fenómenos de la naturaleza".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. No obstante, a la elaboración en el 2012 del documento "Lineamientos de la Estrategia de Gestión Financiera de Estado para la Gestión del Riesgo de Desastres en Guatemala", con apoyo de una consultoría del BID, este documento aún no es de carácter oficial. Adicionalmente existe el documento "Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres, Presupuesto Público y Seguimiento al Gasto"; Primera Edición de junio de 2011, de la Dirección Técnica del Ministerio de Finanzas. Entre los contenidos de este documento no se establece una estrategia financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de desastres en el país.

Uruguay 2015. No se encontró evidencia de un documento aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas que establezca la estrategia financiera o las políticas para la gestión financiera del riesgo de desastres. Lo anterior fue confirmado en entrevista sostenida con personal de la Coordinación Técnica del SINAE. Cabe mencionar, que también se revisó la normatividad del SINAE, Ley N° 18.621, de noviembre de 2009, particularmente en el Artículo 23 que hace referencia a los recursos financieros del Sistema Nacional de Emergencias, y tampoco se encontraron referencias relacionadas con la condición de que indaga el indicador.

Código MG-2-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿El ente responsable de las funciones de rectoría o coordinación o articulación de la gestión del riesgo de desastres en el país, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce como una buena práctica que el presupuesto asignado al ente rector de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), además de contemplar los recursos necesarios para su funcionamiento, contemple asignación de recursos para actividades concretas para la coordinación o articulación de la GRD en el país.</p> <p>La disponibilidad de recursos, ya sean humanos, materiales o financieros es determinante para que el ente responsable de la GRD esté en posición de dar cumplimiento a la normatividad nacional y a las actividades asignadas para la coordinación o articulación de la GRD. Con ese fin, se deben asignar recursos para actividades tales como: (i) convocatoria de los actores del sistema; (ii) desarrollo de los instrumentos técnicos y de política de Gestión del Riesgo de Desastres (por ejemplo, el Plan de Gestión del Riesgo, Plataforma/Foro de GRD); y otras actividades vinculadas con los componentes de la GRD.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar en el presupuesto asignado al ente rector de la GRD o en los informes de ejecución presupuestal y del gasto, si dicho ente ha recibido recursos para el desarrollo de actividades que contribuyan a la GRD en el país. 2. Indagar sobre las fuentes de financiamiento utilizadas por el ente rector para el desarrollo de actividades tales como la convocatoria de los actores del sistema o estructura de la GRD y el desarrollo de los instrumentos técnicos y de política de gestión del riesgo de desastres. 3. No considerar los recursos asignados para actividades de respuesta a emergencias y desastres. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de la autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-3 MG-1A-8	Estos indicadores hacen referencia a la misma institución rectora de la GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir evidencia de la asignación de recursos, por vía de algún instrumento presupuestal, al ente rector nacional responsable de las funciones de coordinación o articulación de la GRD, para que lleve a cabo actividades para la GRD tales como: (i) la convocatoria de los actores del sistema, (ii) el desarrollo de los instrumentos técnicos y de política de gestión del riesgo de desastres; y otras actividades vinculadas con los diferentes componentes de la GRD.</p> <p>También se consideran como verificables válidos los informes y documentación oficial elaborada por el ente rector sobre la realización de dichas actividades, siempre que se pueda evidenciar que dichas actividades fueron financiadas con recursos del presupuesto y no con recursos provenientes exclusivamente de la cooperación internacional.</p> <p>El indicador no se cumplirá con la asignación exclusiva de fondos para actividades de respuesta a situaciones de emergencia, ya que esta asignación es evaluada en el indicador PR-2-1.</p> <p>En la justificación se deberán detallar las actividades de coordinación o articulación de la GRD para las cuales se han incluido recursos en el presupuesto del ente rector de la GRD, así como el monto de los fondos asignados.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 (MG-2-2-a), en su Título II, Presupuesto de Egresos, Capítulo I, establece que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres (CONRED) tiene una asignación presupuestaria de Q. 52.4 millones de quetzales, lo que se constituye en alrededor de US\$ 6.7 millones de Dólares Estadounidenses. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED es la entidad que recibe esta partida presupuestaria.

México 2014. En el Presupuesto se asignan recursos a la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (MG-2-2a) publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2012, se dedica el Ramo Administrativo 04 a la SEGOB, dentro del cual ubica el programa presupuestario N001 que corresponde a la "Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil" que recae en la CNPC. Cabe mencionar que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en su calidad de delegatario de la coordinación ejecutiva del SINAPROC, de acuerdo con el artículo 19 de la LGPC, es la institución que articula y coordina la GRD en México.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. There is no entity with a legal mandate to coordinate comprehensive DRM functions in the country. Important to mention that the Disaster Preparedness and Response Act, approved in 2006, identifies the National Emergency Management Agency, NEMA, as the main institutional agency in charge of preparedness and response responsibilities. In addition, it is important to mention that NEMA received allocation of resources. The “Commonwealth of the Bahamas, An agenda for a Modern Bahamas, 2016/2017, Draft Estimates of Revenues & Expenditures” and the “Estimates of Expenditure on Development Account 2016/2017” evidence assignation of resources to the item No. 911726, which corresponds to “Department of NEMA”, but does not discriminates resources for different DRM processes.

Traducción:

Bahamas 2017. No existe una entidad con un mandato legal para coordinar funciones integrales de GRD en el país. Es importante mencionar que la *Disaster Preparedness and Response Act*, aprobada en 2006, identifica a la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias, NEMA, como la principal agencia institucional a cargo de las responsabilidades de preparación y respuesta. Además, es importante mencionar que NEMA recibió asignación de recursos. El "*Estado Libre Asociado de las Bahamas, una agenda para las Bahamas Modernas, 2016/2017, Borrador de Estimaciones de Ingresos y Gastos*" y la "*Estimación de Gastos en la Cuenta de Desarrollo 2016/2017*" evidencia la asignación de recursos en el rubro 911726, que corresponde al "*Departamento de NEMA*", pero no discrimina recursos para los diferentes procesos de la GRD.

Uruguay 2015. En el Inciso 02, correspondiente a la Presidencia de la República, de la Ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2010-2014, Ley de N° 18719, de fecha del 27 de diciembre de 2010, no se encontró evidencia de asignación de recursos, ni para el Sistema Nacional de Emergencias, ni para la Dirección Nacional de Emergencias. De otra parte, en la rendición de cuentas del Presupuesto correspondiente al año fiscal 2013, en el PROGRAMA 481 / PROYECTO 911 se encontró evidencia de asignación de recursos a la Coordinación Técnica del SINAIE, pero no se especifica que estuviera destinado a actividades de articulación y coordinación de la GRD.

Código MG-2-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿Existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente que permita identificar los recursos asignados a las actividades ex ante de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y, por ende, poder hacer seguimiento a los recursos que el país invierte en actividades ex - ante de GRD.</p> <p>La GRD implica necesariamente la realización de actividades ex-ante tales como la identificación de los riesgos, su reducción y las acciones de preparativos para desastres. Para ello, se concede suma importancia a la disponibilidad de recursos presupuestales para cumplir con estos fines. En este sentido, este indicador reconoce el valor de la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente que permita identificar y rastrear los recursos asignados a actividades ex ante de GRD. La falta de este tipo de instrumento presupuestal no solo impide visibilizar los recursos asignados por el Estado para implementar la política pública de gestión del riesgo de desastres, sino que también dificulta efectuar con la debida precisión un análisis costo-beneficio de dicha política pública para poderla comparar con otras políticas y justificar adecuadamente su priorización.</p> <p>Cabe mencionar que el instrumento presupuestal por el que se indaga no corresponde a una línea del presupuesto que asigna recursos a una actividad específica de GRD, ni a un rubro para emergencias dentro del presupuesto.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el presupuesto nacional y documentos oficiales que detallan los clasificadores o rubros presupuestales existentes en el país para verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar los recursos asignados a actividades ex ante de GRD (por ejemplo, diferentes sectores asignan recursos a actividades ex ante de GRD a través de este mismo instrumento presupuestal). 2. Indagar si existe un documento que liste todos los clasificadores o rubros presupuestales o su equivalente del país. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-2 IR-2-3 a IR-2-12 RR-2-1 a RR-2-10	Los verificables usados para validar estos indicadores podrían mencionar el objeto de gasto o etiquetador presupuestal que permite asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres en el presupuesto nacional.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador debe evidenciarse mediante un documento oficial de tipo presupuestal la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita asignar recursos a actividades ex ante de GRD.

Con la sola existencia del instrumento presupuestal se cumple con el indicador, aun cuando el mismo no haya sido usado en el presupuesto fiscal vigente.

Se admite como justificación de cumplimiento la existencia de programas nacionales en el presupuesto a través de los cuales las diferentes entidades sectoriales y/o territoriales pueden solicitar recursos para actividades ex-ante de GRD, dentro de los cuales podría encontrarse un Fondo Nacional de GRD. Así mismo, puede darse el caso de que el clasificador presupuestal establezca como objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal o su equivalente al Fondo Nacional de GRD.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Panamá 2014. La Resolución Administrativa No. 030 del 28 de marzo de 2013 (MG 2-3a), por la cual el MEF modifica el Manual de Clasificaciones Presupuestales y se crea el Objeto de Gasto en Gestión de Riesgo de Desastres. Este objeto de gasto está destinado para ser utilizado por las instituciones que planifiquen actividades de inversión ex-ante de gestión de riesgo de desastres en sus propuestas presupuestarias a la Dirección Nacional de Presupuesto de la Nación (DIPRENA). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha organizado un proceso de inducción para la utilización correcta de este nuevo objeto de gasto.

Paraguay 2016. En el Anexo de "Clasificador presupuestario de ingresos, gastos y financiamiento" de la Ley N° 5554 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 6 del 11 de enero de 2016 (MG-2-3a), se encontró evidencia del clasificador por objeto de gasto y control financiero "831. Aportes a entidades con fines sociales y al Fondo Nacional de Emergencia. Además, incluye las transferencias o aportes al Fondo Nacional de Emergencia que estarán destinados a la afectación de gastos inherentes a las acciones puntuales orientadas a la prevención y mitigación de sucesos, capaces de producir desastres y la preparación, respuesta y rehabilitación de comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastres, en la respectiva cuenta especial habilitada con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, de conformidad a las normas establecidas en Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N) y la reglamentación establecida a tal efecto".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. El "Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos 2015", publicado por la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, no incluye categorías de gasto relacionadas con actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres. Cabe mencionar que incluye el rubro 4.09.11.00.00 para "Emergencias en el territorio nacional", a través del cual "se imputan por esta genérica los créditos presupuestarios a distribuir por el Ministerio competente en materia de finanzas, para atender las catástrofes ocurridas en el territorio nacional". De otra parte, en la Ley de Presupuesto 2015 dentro de los rubros de las diferentes entidades aparece el código "Protección y atención integral a las familias y personas en los refugios en caso de emergencias o desastres".

Ecuador 2016. No se encontraron evidencias en las consultas realizadas a: (i) Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, del Ministerio de Finanzas, actualizado a junio 27 de 2016; (ii) Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Ambiente; (iii) Clasificador de orientación de gasto en políticas de igualdad en género, el cual incluye una política de igualdad para la "Atención prioritaria a mujeres en casos de desastres naturales y antrópicos".

Código MG-2-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe un objeto de gasto o etiquetador presupuestal (o instrumento equivalente) en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente que permita identificar los recursos asignados a las actividades de adaptación al cambio climático, y por ende hacer seguimiento a los recursos que el país destina a actividades de adaptación al cambio climático.</p> <p>Las políticas de Adaptación al Cambio Climático (ACC), requieren necesariamente la asignación de recursos presupuestales para el cumplimiento de su normativa específica, objetivos y estrategias, de manera que se considera valioso que exista un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente que permita identificar y rastrear los recursos asignados a actividades de adaptación al cambio climático. La falta de este tipo de instrumento presupuestal no solo impide visibilizar todos los recursos asignados por el Estado para implementar la política pública de adaptación al cambio climático, sino también dificulta efectuar con la debida precisión un análisis costo-beneficio de dicha política pública para poderla comparar con otras políticas y justificar adecuadamente su priorización.</p> <p>Cabe mencionar que el instrumento presupuestal por el que se indaga no corresponde a una línea del presupuesto que permite asignar recursos a actividades puntuales de adaptación al cambio climático. De otra parte, es importante señalar que el indicador hace referencia al financiamiento de actividades de adaptación al cambio climático y no a las de mitigación del cambio climático.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el presupuesto nacional y documentos oficiales presupuestales que detallan los clasificadores o rubros presupuestales existentes en el país para verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar los recursos asignados a actividades de adaptación al cambio climático. 2. Indagar si existe un documento que liste todos los clasificadores o rubros presupuestales o su equivalente del país. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o en material de ACC sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe evidenciarse mediante un documento oficial la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador o su equivalente que permita asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático.</p> <p>Se admite como justificación de cumplimiento la existencia de programas en el presupuesto a través de los cuales las diferentes entidades sectoriales y territoriales pueden solicitar recursos para actividades de ACC, dentro de los cuales podría encontrarse un Fondo de ACC. Así mismo, puede darse el caso que el clasificador presupuestal establezca como objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal o su equivalente al Fondo de ACC.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Decreto Supremo N° 068-2008-EF, que aprueba el Clasificador Funcional del Sector Público, del 24 de mayo 2008 (MG-2-4a) en su artículo 1 dispone el Clasificador Funcional del Sector Público y los lineamientos del Clasificador Programático y “... *los que permitan la adecuación de los Programas Estratégicos a dicho Clasificador*”. Dicho Decreto Supremo fue modificado en virtud de la Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01, para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, del 7 de junio de 2011 (MG-2-4b). En el Anexo, que corresponde a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral No. 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 01, que corresponde al Clasificador Funcional Programático (MG-2-4c) se encuentra dentro de la Función 17 Medio Ambiente y, a su vez, dentro del Programa 054 Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, el Subprograma 0121 Gestión del Cambio Climático.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. No se localizó evidencia en la búsqueda en línea (online) sobre la existencia de un objeto de gasto o clasificador presupuestal en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático. Se corroboró la valoración negativa del indicador en la entrevista con funcionarios de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

Código MG-2-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Existe un fondo nacional o instrumento financiero equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable que existan diferentes fuentes de recursos para financiar actividades ex ante de GRD, dentro de las cuales se considera una buena práctica que los fondos nacionales puedan asignar recursos a actividades ex ante de GRD.</p> <p>La disponibilidad de recursos es esencial para realizar actividades ex-ante de GRD (por ejemplo, preparativos, identificación o reducción del riesgo). Por lo tanto, la existencia de fondos nacionales o instrumentos financieros equivalentes (como por ejemplo un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica), para el financiamiento o cofinanciamiento de algunas de estas actividades es relevante.</p> <p>Dichos fondos o instrumentos pueden ser de carácter nacional o multi-país/regional (si el país se ha adherido a un fondo regional mediante un mecanismo formal y, por ende, la normatividad de dicho fondo estipula que el país debe aportar recursos al mismo)</p> <p>Con relación a la interpretación del término “habilitado”, este significa que el fondo o instrumento financiero equivalente tiene recursos asignados al momento del análisis (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente, incluso si se trata de recursos donados por instituciones foráneas).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si la normativa nacional de GRD o la presupuestaria crean algún fondo nacional, o instrumento financiero equivalente (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) facultado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades <i>ex-ante</i> de GRD. 2. Comprobar si a dicho fondo nacional o instrumento financiero equivalente se le ha asignado recursos para ese fin durante el ejercicio fiscal presente, ya sea por vía presupuestal o alguna otra que esté dispuesta en la normatividad correspondiente, o si cuenta con saldo de recursos provenientes de vigencias pasadas, incluso si se trata de recursos donados por instituciones foráneas. 3. Descartar aquellos fondos dedicados exclusivamente a la gestión de emergencias o para realizar actividades ex-post de GRD, tales como atención humanitaria, rehabilitación, recuperación o reconstrucción, los cuales son objeto de otros indicadores del iGOPP. 4. Si no se ha logrado verificar por otros medios, se recomienda entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de la autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 5. Verificar si el país hace parte de acuerdos regionales que cuenten con fondos creados para financiar actividades <i>ex ante</i> de GRD. 6. De cumplirse lo señalado en el numeral (5) será necesario proveer documentación respecto a la normatividad de dicho fondo, donde se estipule además que el país debe aportar recursos para el uso de dicho fondo y que los mismos cumplen con lo detallado en el numeral (3). 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	Los verificables usados pueden indicar la existencia de los fondos que busca el presente indicador.
MG-2-8	Alguno de los fondos de desarrollo identificados para financiar actividades ex ante de gestión de riesgo de desastres podría respaldar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento del indicador se deben dar las siguientes condiciones:

- La existencia de un documento normativo que cree al menos un fondo o instrumento financiero equivalente (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) para el financiamiento o cofinanciamiento de al menos una actividad ex-ante de GRD tales como preparativos, identificación o reducción del riesgo. Dicho fondo deberá ser del nivel nacional o multi-país/regional.
- La asignación de recursos a dicho fondo o instrumento financiero equivalente (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente, incluso si se trata de recursos donados por instituciones foráneas).

Cabe mencionar que para efectos de este indicador no se consideran como fondos a líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, que cuente con saldo de recursos, incluso si se trata de recursos donados por instituciones foráneas.

En la justificación se deberá detallar el tipo de acciones ex ante en GRD que pueden ser financiadas por el fondo o instrumento financiero identificado, así como qué entidades pueden acceder al mismo.

No se podrá verificar este indicador con aquellos fondos que sirven exclusivamente para financiar la realización de actividades ex-post de GRD, tales como atención humanitaria, rehabilitación, recuperación o reconstrucción, aunque éstas sean implementadas con un enfoque que busque reducir la vulnerabilidad preexistente.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002 (MG-2-5a), crea en el Artículo 20 al Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres "... con autonomía administrativa, técnica y financiera, con el objeto de captar y administrar asignaciones ... para tomar medidas de reducción de riesgos o para prestar a la población asistencia y rehabilitación cuando se produzcan desastres, de manera subsidiaria o complementaria bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación y concurrencia". El Fondo cuenta con 4 millones de euros aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) (MG-2-5b), como apoyo presupuestario. En el año 2011 fue habilitado una vez que se aprobó el Reglamento para la Operación del Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (MG-2-5c).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N° 113/2013-2014, Ley de Gestión de Riesgos, aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2014, estipula en el literal I del Artículo 28 "*Se autoriza al Ministerio de Defensa a constituir el Fideicomiso "Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias" –FORADE con la finalidad de captar y administrar recursos para financiar la gestión de riesgos, en los niveles nacional, departamental, municipal y autonomías indígena originario campesinas en el marco de la presente Ley y conforme al reglamento*". De otra parte, en el Artículo 31 de la misma Ley, relacionado con la administración de los recursos del fideicomiso, se estipula: "*El Patrimonio Autónomo del Fideicomiso será administrado en dos fondos: a) Fondo Equidad, conformado por el 100% de los recursos señalados en el Artículo 29 de la presente Ley, así como sus rendimientos, destinado a la Gestión de Riesgos. De la totalidad de estos recursos, en función a un análisis técnico, el CONARADE deberá establecer en un reglamento específico los beneficiarios y los porcentajes destinados a la Reducción de Riesgos y a la Atención de Desastre y/o Emergencias. b) Fondo Exclusivo, que será definido mediante norma expresa del nivel central del Estado, destinado exclusivamente a la Atención de Desastres y/o Emergencias en todo el territorio del Estado Plurinacional*". No obstante, lo anterior, de las entrevistas sostenidas con diferentes autoridades, se señaló que el FORADE a la fecha no cuenta con recursos asignados para financiar actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres.

Código MG-2-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. <i>¿Existe un fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de adaptación al cambio climático?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable que existan diferentes fuentes de recursos para financiar actividades de adaptación al cambio climático, dentro de las cuales se consideran fondos o instrumentos financieros equivalentes (como por ejemplo un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) que puedan asignar recursos a actividades de adaptación al cambio climático (ACC).</p> <p>Una política de ACC requiere necesariamente de recursos para el logro de sus objetivos, por lo cual este indicador valora la existencia de normatividad que cree fondos nacionales o instrumentos financieros equivalentes, habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de ACC.</p> <p>Los fondos pueden ser de carácter nacional o multi-país/regional (por ejemplo, si el país se ha adherido formalmente a un fondo regional y la normatividad del fondo estipula que el país debe aportar recursos al mismo).</p> <p>Cabe mencionar que, para efectos de este indicador, no se consideran como fondos los conceptos de gasto dentro del presupuesto que tengan como fin la realización de actividades de ACC. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). Con relación a la interpretación del término “habilitado”, significa que el fondo o instrumento financiero equivalente tiene recursos asignados (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente, aunque se trate de recursos donados por instituciones foráneas).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar en la normativa ambiental, la relacionada con la ACC, la de gestión del riesgo de desastres (GRD) y en la presupuestaria la existencia de un documento normativo que cree al menos un fondo nacional o instrumento financiero equivalente (como por ejemplo un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) que esté facultado de manera explícita para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de ACC. 2. Revisar los documentos de políticas, estrategias y planes nacionales de ACC por si en ellos se hace referencia a fondos o instrumentos financieros equivalentes para financiar acciones de ACC. 3. Si existiera algún fondo para el financiamiento de actividades ex ante de GRD, verificar si permite el financiamiento de acciones de ACC. 4. Comprobar si alguno de los fondos nacionales o mecanismos equivalentes referidos está habilitado, esto es, cuenta con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente, incluso si se trata de recursos donados por instituciones foráneas). 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de la autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o en materia de ACC sobre el cumplimiento de este indicador. 6. Verificar si el país hace parte de acuerdos multi-país/regionales que cuenten con fondos creados para financiar actividades de adaptación al cambio climático. De ser el caso, será necesario proveer documentación respecto a la normatividad de dicho fondo, donde se estipule que el país debe aportar recursos a dicho fondo. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-5	Los fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento de actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres podría financiar acciones de ACC.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

<p>Para el cumplimiento del indicador se deben dar las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La existencia de un documento normativo que cree al menos un fondo o instrumento financiero equivalente (como por ejemplo un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de ACC. Dicho fondo deberá ser del nivel nacional o multi-país/regional. - La asignación de recursos a dicho fondo o instrumento financiero equivalente (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente, incluso si se trata de recursos donados por instituciones foráneas). <p>Cabe mencionar, que para efectos de este indicador no se consideran como fondos líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar.</p> <p>En la justificación se deberá detallar el tipo de acciones de ACC que pueden ser financiadas por el fondo o instrumento financiero identificado, así como las entidades que pueden acceder al mismo.</p>
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p>
<p>Colombia 2013. En el CONPES 3700 "Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia" del 14 de julio de 2011 (MG-2-6a) se establece <i>"la opción de destinar recursos frescos (p.ej. regalías) para la financiación"</i> de los proyectos de adaptación y mitigación. Actualmente dicha opción está siendo empleada, como se evidencia en la Ley 1606, del 21 de diciembre de 2012, la cual decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el periodo del 1ro de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 (MG-2-6b), la cual incluye recursos, entre otros, para: <i>"(i) la restauración, conservación y ordenamiento territorial de zonas costeras; (ii) protección de zonas costeras; (iii) conformación, implementación y sostenibilidad integral del sistema regional de áreas protegidas y sus planes de manejo"</i>.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>
<p>México 2014. La Ley General de Cambio Climático (LGCC) incluye un Capítulo VII Fondo para el Cambio Climático (MG-2-6a), precisando en su artículo 80 que ese Fondo tiene como objeto captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático. De acuerdo con el artículo 82, los recursos del Fondo se destinarán, entre otros, para: <i>"I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país; II. Proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático..."</i>. No obstante, la condición es negativa, pues en el Presupuestos de Egreso de la Federación (PEF) no se encontró evidencia de asignación de recursos para este Fondo. Cabe mencionar que en el PEF se asignan recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático, lo cual se refleja en el anexo 15.</p>

Código MG-2-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. <i>¿Existe un fondo o instrumento financiero equivalente del nivel nacional, habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado o para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto?</i>	
Descripción general del indicador	
Es deseable que una estrategia de protección financiera del riesgo de desastres considere instrumentos de transferencia del riesgo que permitan cubrir un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal (al permitir acceder a recursos para su reconstrucción) o disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto (al permitir acceder en el corto plazo a recursos para atender las fases de emergencia y rehabilitación). El hecho de contar con este tipo de instrumentos de transferencia de riesgo permite que el país, mediante el pago de una prima, traslade determinadas pérdidas probables por causa de desastres futuros hacia los mercados especializados. A efectos de este indicador en particular, se considera una buena práctica que una de las opciones para adquirir estos instrumentos de transferencia del riesgo sea a través de un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado a nivel nacional o multi-país.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de instrumentos vigentes de transferencia del riesgo para cubrir un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado o para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto en caso de desastre. 2. Identificar el origen de los recursos usados para el financiamiento del instrumento de transferencia del riesgo identificado. 3. Indagar si la fuente de recursos corresponde a fondo o mecanismo equivalente del nivel nacional o regional, habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o en materia de GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-1 MG-2-5 PF-1A-3 PF-2-13	Si el país cuenta a nivel nacional o sectorial con instrumentos de transferencia de riesgo frente a desastres, se debería indagar de las fuentes que financian dichos instrumentos financieros, las cuales permitirían orientar la verificación del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe encontrarse evidencia de la existencia de un fondo o instrumento financiero equivalente que esté habilitado o haya sido usado para la contratación de al menos un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres: (i) para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado o (ii) para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto.</p> <p>Si el instrumento de transferencia de riesgo en cuestión ha sido o puede ser adquirido a través de algún fondo nacional, regional y/o multi-país, deberá obtenerse el respaldo documental de la creación y habilitación de dichos fondos o instrumento financiero equivalente (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) que indiquen su existencia, operación y su capacidad para contratar instrumentos de protección financiera.</p> <p>Cabe mencionar que, para efectos de este indicador, no se consideran como fondos las líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica).</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. El fondo para la contratación de los instrumentos de transferencia del riesgo de desastres es el FONDEN, según lo estipulan las Reglas Generales de FONDEN (RGFONDEN) (MG-2-7a) en su artículo 4, fracción V, en el que determina como fin del FONDEN el “... Otorgar recursos para la realización de) proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionado con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como para los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales...”.

Colombia 2013. En 2003, se contaba con el Decreto 1547 del 21 de junio de 1984, “Por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y se dictan normas para su organización y funcionamiento” (2003_MG 2-7a). Posteriormente, el Decreto Ley 919 del 1 de mayo de 1989, “por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones” (2003_MG 2-7b), modifica en su Artículo 70, los alcances del Decreto 1547 de 1984 en relación con los gastos que pueden financiarse con el FNC; específicamente, se cambia el Artículo 2 del Decreto 1547 de 1984, sobre los destinos del Fondo, incluyendo, numeral e): “Tomar las medidas necesarias para prevenir los desastres o para atenuar sus efectos, las cuales podrán consistir, entre otras, en pólizas de seguros tomadas con compañías legalmente establecidas en el territorio colombiano y buscando mecanismos para cubrir total o parcialmente el costo de las primas” (subrayado añadido). Se concluye que a partir de la promulgación del Decreto Ley 919 de 1989, el FNC estuvo habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado, y por tanto la condición se cumplía en 2003.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Uruguay 2015. La Ley N° 18.621 del SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS, de fecha 12 de octubre de 2009, en el Artículo 24 Del Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres, no estipula que esté habilitado para contratar instrumentos de transferencia del riesgo. Tampoco se encontró evidencia de otros mecanismos habilitados para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo. También se revisaron el Reglamento del Fondo de Catástrofes Granjeras y la normatividad del Fondo Agropecuario de Emergencias, sin encontrar evidencia relevante para este indicador.

Código MG-2-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿Al menos uno de los fondos nacionales de desarrollo (o instrumento equivalente) está habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante en gestión del riesgo de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable que existan diferentes fuentes de recursos para financiar actividades ex ante de GRD, dentro de las cuales se considera una buena práctica que los fondos nacionales de desarrollo puedan asignar recursos a actividades ex ante de GRD. El que dichos fondos puedan financiar actividades ex ante de GRD es un reconocimiento de cómo la gestión del riesgo de desastres contribuye al desarrollo social, sectorial, local, subnacional y/o nacional.</p> <p>Los fondos nacionales de desarrollo, también conocidos como cuentas de inversión social o instrumentos equivalentes, se enfocan principalmente en dotar recursos para la inversión a distintas escalas y diferentes enfoques (territorial, sectorial, temáticos, etc.), y contribuyen hacia la visión de desarrollo de los países. Estos fondos pueden ser de regalías, fondos de inversión, programas de desarrollo social, acción o cohesión social, etc.</p> <p>El presente indicador valora que estos fondos de desarrollo o instrumentos equivalentes incluyan o consideren el financiamiento de actividades ex-ante de GRD, como por ejemplo los preparativos para desastre, la identificación y/o la reducción del riesgo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si el país cuenta con fondos de desarrollo o cuentas de inversión social (o instrumento financiero equivalente). 2. Revisar que la normatividad que regule el funcionamiento de los fondos de desarrollo o instrumentos financieros equivalente identificados los habilite para el financiamiento o cofinanciamiento de al menos una actividad <i>ex-ante</i> de GRD. 3. Finalmente, verificar que dicho fondo o instrumento financiero cuente con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-5	El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento de actividades <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres podrían corresponder a fondos nacionales de desarrollo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

<p>Para cumplir el presente indicador se deben satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de al menos un fondo nacional de desarrollo o cuenta de inversión social (o instrumento financiero equivalente). - Al menos uno de los fondos nacionales de desarrollo o cuentas de inversión social (o instrumento financiero equivalente) existentes está legalmente facultado para el financiamiento o cofinanciamiento de al menos una actividad <i>ex ante</i> de gestión del riesgo de desastres. - El fondo de desarrollo identificado cuenta con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). <p>Cabe mencionar, que para efectos de este indicador no se consideran como fondos a las líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica).</p> <p>Para cumplir el indicador no es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté plenamente habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos, aunque sea de vigencias anteriores.</p> <p>En la justificación del indicador se deberá detallar del tipo de acciones <i>ex ante</i> que son posibles de financiar por el fondo identificado.</p> <p>En el caso que el indicador no se cumpla, en la justificación se deberán listar, en su caso, los principales fondos consultados.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p> <p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p> <p>Colombia 2013. La Ley 1606 del 21 de diciembre de 2012, la cual decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014 (MG-2-8a) incluye recursos, entre otros, para: (i) Apoyo a la gestión integral de riesgos y fortalecimiento de los organismos para la prevención y atención de desastres en el Departamento de Caquetá y (ii) gestión de riesgos (para el OCAD Región Centro Sur).</p> <p>México 2014. Uno de los fondos con más recursos son los Fondos Metropolitanos, que recibieron una asignación en el PEF 2013 de \$8,616,058,106.00. El objeto del Fondo Metropolitano según el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el DOF el 11 de abril de 2011 (MG-2-8a), en su apartado III, inciso b, es el de “...La viabilidad y disminución de la vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica...”</p> <p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>

Ecuador 2016. No se encontraron evidencias sobre la existencia de fondos de desarrollo con esas condiciones. Cabe mencionar que muchos fondos especiales han sido eliminados. En el año 2009, mediante la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso Público de los Recursos Petroleros del Estado, Publicada en el Registro Oficial No. 308, del 3 de abril de 2008, aprobada por la Asamblea Constituyente, se eliminaron los fondos petroleros y sus recursos fueron incorporados en el Presupuesto General del Estado (PGE). De otra parte, la disposición transitoria trigésima de la Constitución de la República del Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008, estableció la liquidación del Fondo de Solidaridad. De otra parte, no se encontraron evidencias de la existencia de fondos habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante del riesgo de desastres en el marco legal compuesto de varias normas que rigen la GRD en el país, entre las que se incluye: (i) Constitución de la República del Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008; (ii) Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 35 del 28 de septiembre de 2009; (iii) Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Decreto Ejecutivo 486, publicado en el Registro Oficial Suplemento 290 de 30 de septiembre de 2010; y (iv) Buen Vivir, Plan Nacional 2013 -2017, Todo el Mundo Mejor, Registro Oficial Suplemento 78 de 11-sep-2013. La inexistencia de fondos de desarrollo habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres fue ratificada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Código MG-2-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. ¿Existen incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen acciones ex ante en gestión del riesgo de desastre?	
Descripción general del indicador	
<p>Es importante que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) promuevan y desarrollen acciones en gestión de riesgo de desastres (GRD), pues es en sus jurisdicciones donde ocurren los desastres. En ese sentido, se considera una buena práctica generar incentivos presupuestales, de forma que exista un instrumento financiero, tales como un fondo o un programa dentro del presupuesto al cual las UGT (al menos las de menor jerarquía, como por ejemplo municipio o equivalente) puedan presentar propuestas orientadas a implementar actividades <i>ex ante</i> de GRD.</p> <p>Un “incentivo” no significa la obligación de programar una partida en el presupuesto nacional, sino que exista un mecanismo que represente ventajas presupuestales o financiamiento <u>adicional</u> para las UGT si realizan esas actividades ex-ante de la GRD.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar en el presupuesto nacional, o en algún fondo o programa, al menos un caso de incentivos dirigidos a las UGT (al menos para las de menor jerarquía), con el fin de que éstas obtengan recursos adicionales a los programados en sus presupuestos para realizar al menos una actividad ex-ante de GRD. 2. Indagar en la normativa relacionada con fondos nacionales de GRD y de desarrollo la existencia de incentivos presupuestales para que las unidades de gestión territorial implementen actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres. 3. Verificar que, entre los requisitos establecidos en el instrumento financiero a través del cual se podrá acceder al incentivo presupuestal, se establezca de manera explícita que para tener acceso a los incentivos se deberán realizar actividades de GRD <i>ex ante</i>. 4. Verificar que el incentivo presupuestal identificado tenga recursos asignados (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). 5. De ser necesario, consultar a las autoridades de hacienda, economía o finanzas, de planificación para el desarrollo, y la de planificación territorial, particularmente sus áreas de presupuesto y de inversión. También puede resultar relevante consultar a la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento del presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-5 MG-2-8	<p>Los verificables utilizados para respaldar el cumplimiento de estos indicadores podrían respaldar también el presente indicador si es que alguno de dichos fondos (o instrumento financiero equivalente) estuviese facultado para asignar recursos, en forma de <u>incentivos</u>, a las unidades de gestión territorial para implementar acciones <i>ex ante</i> de GRD.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador se debe señalar al menos un instrumento financiero que permita asignar recursos en forma de incentivos a las UGT (al menos para la de menor jerarquía), que tengan como condición la realización de al menos una actividad *ex-ante* de GRD. Así mismo se debe verificar que tenga recursos asignados (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).

En la justificación se deberá detallar claramente cómo se hace efectivo el incentivo, así como las actividades *ex ante* de GRD vinculadas con dichos incentivos.

La sola existencia de una ley que establezca la necesidad de incentivar la inversión territorial en GRD no respalda el cumplimiento del indicador, a menos que el incentivo haya sido creado y esté operativo.

Tampoco se podrá verificar el presente indicador a través de la existencia de contratos de préstamo que incluyan recursos para la GRD para las unidades de gestión territorial, a menos que se incluyan figuras de incentivos para que las unidades de gestión territorial accedan a dichos recursos de préstamo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. La Ley N° 29332, que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, de 19 de marzo de 2009 (MG-2-9a), Ley que fue modificada mediante Decreto de Urgencia N° 119-2009, que modifica artículos de las Leyes N°s. 29332 y 29465 y dictan medidas extraordinarias para el financiamiento de la continuidad de las inversiones durante el Año Fiscal 2010, del 23 de diciembre del 2009 (MG-2-9b) y que ha sido incorporado en las Leyes de Presupuesto del Sector Público de los años sucesivos. Dicho plan incluye dentro de sus objetivos prevenir riesgos de desastres, tal como se evidencia en el artículo 2 (fines y objetivos del plan de incentivos) del Decreto Supremo No. 002-2013-EF (MG-2-9c).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley modificatoria de la Ley No 2140 para la reducción de riesgos y atención de desastres y/o emergencias, Ley N° 2335, del 5 de marzo de 2002, estipula en su artículo 6to "Se considerará, en la evaluación de los proyectos sujetos a financiamiento de los recursos del FORADE, la proporción de recursos propios, asignados por parte de las Prefecturas y Municipios a obras de prevención y mitigación de riesgos en sus presupuestos y en el proyecto, estudio e investigaciones dedicadas a la reducción de vulnerabilidades y procesos de capacitación y difusión tendientes a formar una cultura de prevención". Lo anterior es reforzado por otra normatividad: la Ley Marco de Autonomías y Descentralización "Andrés Bóñez", Ley n° 031, de fecha 19 de julio de 2010, la cual establece en el artículo 100 referente a Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Naturales, en el literal I referente a las competencias del nivel central del Estado, en el numeral 8 como competencia "*Diseñar y establecer políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los niveles de riesgo existentes en el país*". Cabe mencionar que la misma Ley establece estas competencias a nivel de gobiernos departamentales y gobiernos municipales. No obstante, la condición es negativa, pues estos incentivos no tienen un reflejo presupuestal.

Código MG-2-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10 ¿Existen incentivos presupuestales para que los distintos sectores (ministerios) implementen acciones ex ante de gestión del riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Es importante que, en el marco de la transversalidad de la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), los distintos sectores desarrollen, programen y ejecuten acciones <i>ex ante</i> de GRD, ya que los ministerios o secretarías de estado son responsables de la administración de bienes de responsabilidad fiscal del estado que pueden ser afectados por los desastres.</p> <p>En ese sentido, se considera una buena práctica generar incentivos presupuestales, de forma que exista un instrumento, como por ejemplo un fondo o un programa dentro del presupuesto, al cual los sectores puedan presentar propuestas de financiamiento orientadas a implementar actividades <i>ex ante</i> de GRD. Esto, en el entendido que un “incentivo” no significa la obligación para programar una partida en el presupuesto nacional, sino que exista una opción a través de un instrumento financiero que represente a los sectores ventajas presupuestales y/o financiamiento <u>adicional</u> para realizar esas actividades <i>ex ante</i> de la GRD.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar en el presupuesto nacional, o en algún fondo o programa, al menos un caso de incentivos dirigidos a uno o varios sectores, con el fin que sus respectivos ministerios o secretarías de estado obtengan recursos <u>adicionales</u> a los programados en sus presupuestos para realizar al menos una actividad <i>ex ante</i> de GRD. 2. Indagar tanto en la normativa de GRD, como en la normatividad presupuestal por la existencia de incentivos presupuestales, fondos o programas para que los sectores implementen acciones ex antes de riesgo de desastres. 3. Consultar a las autoridades, ya sea las hacendarias, de economía o de finanzas, o en su caso la de planeación del desarrollo nacional, particularmente con las áreas de presupuesto y de inversión. Igualmente, también podría consultarse la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 4. Consultar con los ministerios que presenten mayores avances en GRD en el país, la existencia de incentivos presupuestales, fondos o programas para implementar acciones ex ante en gestión del riesgo de desastres. 5. Verificar que, entre los requisitos establecidos en el instrumento financiero a través del cual se accede al incentivo presupuestal, se establezca de manera explícita que para tener acceso a los incentivos se deberán realizar actividades <i>ex ante</i> de GRD. 6. Verificar que el incentivo presupuestal identificado tenga recursos asignados (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-5 MG-2-8	El verificable utilizado para respaldar el cumplimiento de estos indicadores podría estar habilitado para asignar recursos, en forma de incentivos, a los sectores o ministerios para implementar actividades ex antes de GRD
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, el país deberá contar con al menos un instrumento que permita asignar recursos en forma de incentivos para los sectores, que tengan como condicionante la realización de actividades *ex-ante* de GRD. Así mismo se debe verificar que tenga recursos asignados (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).

En la justificación se deberá detallar claramente cómo se hace efectivo el incentivo, así como las actividades *ex ante* de GRD vinculadas con dichos incentivos.

No se podrá validar este indicador con la sola existencia de una ley que establezca la necesidad de incentivar la inversión sectorial en GRD, a menos que el incentivo haya sido creado y esté operativo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos de cumplimiento de este indicador en América Latina y el Caribe, de acuerdo a los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo. En ningún caso se encontró evidencia de alguna normativa que incentive para que los sectores o ministerios realicen acciones *ex ante* de gestión de riesgo de desastres.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. Mediante entrevista a la Unidad de Planificación y Evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), se manifestó que no existen incentivos presupuestales para que los distintos sectores implementen acciones en gestión del riesgo de desastre. Cabe mencionar que la Ley 8488 de 2005 “Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo” establece en el ARTÍCULO 45, relacionado con aprovisionamiento presupuestal para la gestión del riesgo y preparativos para situaciones de emergencia, que “*Todas las instituciones y empresas públicas del Estado y los gobiernos locales, incluirán en sus presupuestos una partida presupuestaria destinada a desarrollar acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencia en áreas de su competencia*”, lo cual no es un incentivo presupuestal.

Código MG-3-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que la gestión del riesgo de desastres debe ser sometida a control por las respectivas organizaciones autorizadas?	
Descripción general del indicador	
<p>La función pública de control, auditoría, fiscalización, contraloría, etc., ejecutada por órganos de control, auditorías o contralorías nacionales o cualquier otra institución equivalente, está dirigida a vigilar la legalidad de la gestión, el uso efectivo y transparente de los recursos públicos y el cumplimiento de los presupuestos, planes y programas.</p> <p>A pesar de que el marco legal de la función pública de control ya supone su ejercicio en la totalidad de los ámbitos de la administración pública nacional o federal, este indicador reconoce como buena práctica que sea la propia normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), la que señale de manera explícita, aquellos aspectos de legalidad, gasto y finanzas, funcionamiento, cumplimiento de metas u objetivos, etc., que deban ser fiscalizados por los órganos nacionales de control.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad nacional y los instrumentos de política que regulen la GRD a nivel nacional (ley, reglamento, política o planes nacionales de GRD, entre otros). 2. Verificar si dicha normatividad nacional de GRD dispone que la totalidad de sus cometidos y/o mandatos, o algunos en particular, están sujetos a la fiscalización por parte de las entidades nacionales de control. 3. Investigar si dentro de la normatividad nacional de la GRD se ha expedido alguna norma o decreto, posterior a la publicación de la normativa nacional, en la que se asignen a alguna entidad nacional de control nuevas tareas en la materia. 4. De ser necesario, entrevistarse con representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-1A-2 MG-1A-3	La normatividad de GRD o instrumentos de política identificados en estos indicadores podrían contener lo que indaga el presente indicador.
MG-3-3 IR-3-5 RR-3-2 PR-3-2 PR-3-3 RC-3-2	En el preámbulo o consideraciones de los informes realizados por el ente nacional de control sobre alguno de los componentes de GRD se podría encontrar información de la normatividad de GRD que habilita a dicho ente de control a realizar la fiscalización de los mismos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad nacional de GRD identificada debe establecer explícitamente que al menos uno de sus cometidos y/o mandatos quedará sujeto a la fiscalización por parte de alguna entidad nacional de control.</p> <p>Se acepta el cumplimiento del indicador cuando la normatividad identificada mandate la fiscalización, por parte de la entidad de control correspondiente, de al menos uno de los componentes de la GRD.</p> <p>Por entidades nacionales de control, para este indicador, no podrá entenderse un departamento interno de control o auditoría de la entidad rectora de la GRD.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Ley N° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 27 de octubre de 2005 (MG-3-1a), en su Capítulo IV, Artículo 28, establece la responsabilidad de la Contraloría General de la República y de las auditorías internas de las instituciones públicas de vigilar la aplicación de normas para manejar las causas de riesgo y las acciones de prevención realizadas por las instituciones en sus respectivos presupuestos.

Perú 2013. La Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011 (MG 3-1a) establece entre los lineamientos de la Política Nacional de GRD en el artículo 5, acápite 5f, "La integración de medidas de control, rendición de cuentas y auditoría ciudadana para asegurar la transparencia en la realización de las acciones, así como para fomentar procesos de desarrollo con criterios de responsabilidad ante el riesgo". Por su parte, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo del 2011 (MG 3-1b), contiene en la Segunda de sus Disposiciones Complementarias Finales, la indicación de que los aspectos relacionados con infracciones y sanciones ligados a responsabilidades administrativas y funcionales se rigen de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. Si bien la Ley del SINAGER, considera en su Art 24.- LA EVALUACIÓN DE RIESGOS COMO PROCESO DE APRENDIZAJE SOCIAL....que el SINAGER puede establecer acuerdos o convenios con el "Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y otras instancias, contraloras del estado, para establecer con ellas los mecanismos de control y seguimiento de las disposiciones relacionadas a la prevención y reducción de riesgo en el país", los mismos al no ser de carácter obligatorio no permite cumplir positivamente el presente indicador.

Guatemala 2013. No se localizó normatividad específica de GRD que establezca que la Gestión de Riesgo de Desastres debe ser objeto de control por parte de la Contraloría General de Cuentas, que es el órgano de contralor del país. Cabe destacar que el Reglamento de la Ley de la CONRED, aprobado en 2012 por Acuerdo N° 49-2012, establece en el artículo 36 la creación de una Inspectoría General, pero que se constituye como un órgano interno de fiscalización, que responde al Despacho Superior de la SE-CONRED, y que por lo tanto no puede considerarse como una instancia externa de control, como lo requiere el indicador.

Código MG-3-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad sobre transparencia o acceso a la información pública en la gestión pública aplicable a la GRD?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>El funcionamiento de la administración pública no se concibe en la actualidad si no va aparejada con la voluntad política de hacer pública la información que se genere en el desarrollo de su quehacer. Con ese fin, los países desarrollan normatividad de transparencia o de acceso a la información pública, en la que se estipulan las formas de cumplir con esa premisa.</p> <p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) encuentra en la política de transparencia o de acceso a la información pública un elemento a favor del cumplimiento de sus objetivos, pues permite que la población tenga un conocimiento más amplio de lo que implica la GRD, el papel que cumplen las autoridades en dicha política pública y también puede aportarle conocimiento sobre las posibles medidas de prevención y autoprotección a la población que se encuentra con determinado grado de exposición y vulnerabilidad. Además, la normatividad de transparencia, acceso a la información pública, anticorrupción y rendición de cuentas, ofrece una oportunidad fundamental para la reducción de elementos generadores de riesgo ligados con la corrupción y con la incorrecta aplicación de normatividad y procedimientos existentes.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar sobre la existencia de una normativa en materia de transparencia, acceso a la información pública o anticorrupción que considere a todos los ámbitos de la gestión pública. 2. De ser necesario, entrevistarse con representantes de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir al menos una normatividad vigente que establezca los principios de transparencia, acceso a la información pública o anticorrupción en la gestión pública que sea aplicable a la GRD o la institución rectora de la GRD.</p> <p>Para el cumplimiento, no es necesario que en la normatividad identificada se haga una mención explícita sobre la GRD o sus componentes, pero sí debe ser aplicable al menos a la institución rectora de la GRD.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Nicaragua 2016. La Ley No. 621, Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada el 16 de Mayo del 2007, publicada en La Gaceta No. 118 del 22 de Junio del 2007, hace cumplir con el indicador a través de su Artículo 11, el cual establece que: *"La presente Ley tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belice 2017. The Belize Constitution Act Chapter 4 of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, makes no reference to transparency requirements imposed on the Executive, Legislative and Judicial powers. No other legislative instruments promoting transparency has been found. Therefore, the condition is considered as not met.

Traducción:

Belice 2017. La *Belize Constitution Act*, en su Capítulo 4 sobre las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada en el 2011, no hace referencia a los requisitos de transparencia impuestos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. No se han encontrado instrumentos legislativos que promuevan la transparencia. Por lo tanto, la condición se considera no cumplida.

Código MG-3-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación del cumplimiento de la normativa existente en gestión del riesgo de desastres en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>La existencia de un mecanismo de fiscalización externo sobre la entidad nacional responsable de la coordinación de la GRD y/o sobre los mandatos de la normatividad de GRD, puede generar una mayor transparencia en la identificación y aplicación de mecanismos de control y ajuste. Se busca que las entidades nacionales responsables de este tipo de procesos de control y auditoría general del estado integren en sus procesos el análisis de la implementación de la normatividad en GRD.</p> <p>No se incluye en este análisis las evaluaciones en temas que no sean explícitamente relacionados con la normatividad de GRD, tales como evaluaciones sobre procedimientos contractuales en caso de desastre.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar al o los entes nacionales de control. 2. Revisar el programa o informes de auditorías o fiscalizaciones practicadas por el ente nacional de control en los últimos 5 años. 3. Indagar si los informes identificados hacen relación a la verificación o evaluación del cumplimiento de la normatividad de la GRD vigente en el país. 4. Considerar entre los posibles verificables los reportes de contraloría sobre la gestión de desastres luego de una situación catastrófica. Estos reportes podrían abordar temas relacionados con alguno de los componentes de GRD definidos en la normatividad nacional (preparativos para la respuesta, estimación del riesgo, prevención y reducción, recuperación, transferencia del riesgo según corresponda), y no solamente por los procesos de respuesta. 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente nacional de control y con la institución nacional rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-3-5 RR-3-2 PR-3-2 PR-3-3 RC-3-2	La agregación de los informes disponibles sobre los diferentes componentes de GRD establecidos en la normatividad de GRD permitiría cumplir con el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir al menos un informe de evaluación, que haya sido elaborado por un ente nacional de control, sobre el cumplimiento de al menos un componente <i>ex ante</i> considerado en la normatividad nacional de GRD, y que dicho informe haya sido realizado en los últimos 5 años.</p> <p>Para la verificación del presente indicador no se pueden considerar evaluaciones realizadas por el ente de control sobre acciones de respuesta y recuperación de desastres.</p> <p>En la justificación se deberán detallar los temas y componentes de la GRD que hayan sido considerados en los informes disponibles.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>Costa Rica 2014. El Informe N° DFOE-PGAA-IF-17-2010 del 15 de julio de 2010, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa en la Contraloría General de la República, relativo a las Limitaciones que Presenta la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) en la Coordinación, Supervisión y Control de la Atención de las Emergencias en las Fases de Rehabilitación y Reconstrucción (MG-3-3a). Asimismo, el Informe N° DFOE-PGAA-IF-15-2009 del 3 de setiembre de 2009, de la misma división fiscalizadora, sobre la Gestión de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en Materia de Prevención (MG-3-3b), son ejemplos de cumplimiento del indicador al evaluar la gestión de la CNE en sus funciones y no en auditar gastos en determinadas emergencias.</p>
<p>Colombia 2013. En Julio de 2012 la Contraloría General de la República publicó el Informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. 2011–2012 (MG-3-3a), en el que se hace una evaluación del desempeño tanto de las entidades nacionales como de los entes territoriales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres para el periodo mencionado. Adicionalmente, varias contralorías departamentales han emitido en 2013 "funciones de advertencia". Se presenta como verificable el caso de la CG del Putumayo al Gobernador y a los alcaldes municipales sobre el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 en relación con el cumplimiento de la normativa de gestión del riesgo de desastres (MG-3-3b). NOTA: al menos en 10 departamentos se están realizando estas acciones al momento de aplicar el IGOPP (agosto y septiembre de 2013).</p>
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Uruguay 2015. No se encontró evidencia de evaluaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de la normatividad de GRD de Uruguay. Solo se localizó una evaluación externa realizada por Tea Deloitte y Touche del Proyecto URU-08-007 "Fortalecimiento de las Capacidades Departamentales del Sistema Nacional de Emergencias", que no entra dentro del alcance de este indicador. También se mencionó por parte de la Coordinación Técnica del SINAE durante la misión de aplicación del iGOPP que el Congreso de la Nación solicitó en un par de ocasiones informes a Presidencia donde se incluyó información sobre el SINAE, pero que no implicó una evaluación de la normativa existe sobre GRD.</p>
<p>Chile 2013. No se localizó evidencia de que exista una normativa de Gestión de Riesgo en el país ni de que este tipo de evaluaciones se hayan realizado sobre la normativa vigente de protección civil. Se tiene conocimiento de que se han realizado otra serie de evaluaciones, particularmente sobre procesos administrativos de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) para situaciones de emergencia, pero no respecto del cumplimiento normativo, o de la implementación de procesos característicos de la gestión del riesgo.</p>

Código MG-3-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿La entidad nacional coordinadora de la Gestión del Riesgo de Desastres ha realizado en los últimos 3 años una evaluación de la gestión del riesgo de desastres en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la entidad nacional coordinadora en materia de GRD haya realizado, en los últimos 3 años, una evaluación de la normatividad nacional de GRD en el país, ya sea integral o sobre alguno de los componentes de GRD (a excepción de los procesos de preparación y respuesta que serán objeto de otro indicador), ya que de esta manera en base a la reflexión y autoevaluación se identifican los avances, obstáculos y desafíos para lograr los resultados que son delineados en la normatividad de GRD. La evaluación debe ser realizada por la propia entidad nacional coordinadora de la GRD o bajo la contratación o convenio con un tercero, por lo cual los resultados de dicha evaluación deben estar respaldados oficialmente por la entidad coordinadora de la GRD en el país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con la entidad nacional de GRD sobre la realización de al menos una evaluación de los componentes de GRD en los últimos 3 años en el país. 2. La evaluación puede ser sobre cualquiera de los componentes de la GRD, exceptuando la preparación y la respuesta, por ser dicho proceso objeto de otro indicador del iGOPP. 3. Este indicador acepta una autoevaluación como respaldo de su cumplimiento, es decir, no requiere necesariamente una evaluación externa. 4. De ser necesario, entrevistarse con representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir evidencia de al menos un reporte de evaluación sobre cualquiera de los componentes de la GRD, exceptuando la preparación y la respuesta, elaborado por la entidad nacional coordinadora de GRD, o bajo su auspicio, en los últimos 3 años.</p> <p>A efectos de validar positivamente este indicador se aceptan los informes de avance del Marco de Sendai, informes de CADRI (Capacity for Disaster Reduction Initiative) y similares, o evaluaciones sobre la Implementación del Plan, Política o Estrategia Nacional de GRD.</p> <p>En la justificación se deberá detallar los componentes de la GRD que han sido considerados en el o los documentos identificados.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Chile 2013. La Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (ONEMI) solicitó a la Secretaría de la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (ONU-EIRD) la realización de una evaluación del país. Dicha evaluación fue realizada y generó un informe con los resultados de la Misión Inter Agencial de las Naciones Unidas que se desarrolló del 25 de octubre y hasta el 3 de noviembre de 2010, denominado "Diagnóstico de la Situación de la Reducción del Riesgo en Chile (MG-3-4a)

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. No evidence was found about the existence of an official assessment report produced by National Emergency Management Agency (NEMA) in the last three years. The iGOPP team researched on NEMA's website and other relevant portals, such Prevention Web and Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA) website, and no reports on Disaster Risk management (DRM) from The Bahamas were found. This was confirmed in interviews with NEMA and the Office of the Auditor General.

Traducción:

Bahamas 2017. No se encontró evidencia sobre la existencia de un informe de evaluación oficial producido por NEMA en los últimos tres años. El equipo de iGOPP investigó en el sitio web de NEMA y otros portales relevantes, tales como el sitio Provention web y el sitio web de CDEMA, y no se encontraron informes sobre GRD. Esto se confirmó en entrevistas con personal de NEMA y la Oficina del Auditor General.

Código MG-3-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Existe normatividad nacional que establezca algún mecanismo de participación de la sociedad civil aplicable a la gestión del riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>El hecho de que alguna normatividad de carácter nacional incluya criterios de participación social otorga un atributo de calidad a la gestión del riesgo de desastres (GRD), ya que la misma sirve tanto como un sistema de control sobre las acciones planificadas, así como sobre la calidad de las actividades ejecutadas.</p> <p>La participación de la sociedad civil se puede concretar con la participación permanente de representantes entre otros de instituciones académicas, representantes del sector privado, representantes de ONG's y/o fundaciones. Así mismo, los mecanismos de participación pueden corresponder a cualquier instancia formal establecida en la normatividad tal como plataforma, comisión, comité, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de mecanismos o plataformas existentes en el país en los que haya considerado la representación de la sociedad civil o sector privado en los que se debatan y tomen decisiones acerca de asuntos relacionados con los componentes de la GRD. 2. Indagar por la normatividad que respalda los mecanismos o plataformas identificadas, sea aquella específica en GRD, sobre participación ciudadana u otro tipo. 3. De ser necesario, entrevistarse con representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador deberá existir normatividad que respalde el establecimiento o funcionamiento de al menos un mecanismo de participación y consulta de la sociedad civil a nivel nacional que incluya organizaciones comunitarias, la sociedad civil y/o del sector privado en la GRD y que se reúna o se establezca para el intercambio y/o toma de decisiones de forma periódica.</p> <p>El indicador no se considerará cumplido a través de la existencia de mecanismos o plataformas que traten temas relacionados exclusivamente con los componentes de preparativos y respuesta de emergencias como, por ejemplo, un comité local de emergencias, un centro de operaciones de emergencia o un comité de protección civil, si éste solamente trata temas de preparativos y respuesta.</p> <p>En la justificación se deberá entregar información sobre el nombre de la instancia donde se da la participación de la sociedad civil, así como las instituciones que participan en la misma bajo dicha categoría, así como las actividades y los componentes de la GRD donde tienen oportunidad de participar.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Argentina 2014. En la Argentina existe una Plataforma Nacional de Reducción de Riegos de Desastres (PNRRD), creada en octubre de 2007. Esta plataforma se define como una instancia habilitada en el contexto del marco de acción de Hyogo y se convoca una diversidad de instituciones (organismos estatales nacionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, algunos representantes provinciales y del sector privado). La PNRRD se encuentra co-coordinada por la Comisión Cascos Blancos (dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) y por la Subsecretaría de Desarrollo y Fomento Provincial (bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte) y ha desarrollado reuniones sistemáticas desde 2007 a la fecha (último registro julio 2012) (MG-3-5a). Es importante mencionar que, a diferencia de otros acuerdos internacionales, el marco de acción de Hyogo no ha sido ratificado por una ley nacional.

Panamá 2014. La PNGIRD, aprobada por Decreto n.º 1101 del 30 de diciembre de 2010 (MG 3-5a), publicado en la Gaceta Oficial Digital n.º 26698-C el 11 de enero 2011, establece en el Capítulo VII, Apartado C (Control y Seguimiento), la organización de un Foro abierto con participación del sector público, sociedad civil, sector privado, academia y medios, como "*mecanismo de consulta para la implementación de la Política*". En consonancia, con el mandato de la PNGIRD; se realizó el Foro de la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, el 16 de mayo de 2013. Se incluye el texto de la PNGIRD (MG 3-5b), y las memorias del Foro como evidencia del cumplimiento de la condición (MG 3-5c).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. En un evento realizado por el CENEPRED el 16 de enero de 2012 se estableció un Foro Nacional sobre Avances y Perspectivas de la Gestión del Riesgo de Desastres, con los Sectores, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones Técnicas Científicas y entidades de la Cooperación Internacional en lo que corresponde a la Gestión Prospectiva y Gestión Correctiva del Riesgo. Uno de sus objetivos específicos fue: "*establecer los mecanismos de coordinación, participación y de articulación más eficientes orientados a presentar los mecanismos técnicos institucionales para la adecuada implementación de los procesos de la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres*". Sin embargo, este Foro no ha sido refrendado por norma legal, por lo cual no se considera como un mecanismo de participación de la sociedad civil establecido de carácter permanente.

B. IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL RIESGO (IR)

Código IR-1A-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a los sectores y a las unidades de gestión territorial para el análisis del riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador concede importancia al hecho de que exista normatividad que disponga la existencia de una instancia de carácter técnico, dotada de competencia, presupuesto y una estructura, que entre sus funciones se encuentre la de realizar estudios integrales de riesgo de desastre (con sus componentes amenaza, vulnerabilidad y exposición), así como establecer lineamientos, criterios, estándares, parámetros, etc., que sirvan para cuantificar y cualificar el análisis de los riesgos de desastre, y en ese contexto suministren asistencia y lineamientos a los sectores y a las unidades de gestión territorial existentes en el país.</p> <p>Esta instancia no debe confundirse con entidades científicas o técnicas especializadas responsables de realizar el monitoreo y/o estudios específicos sobre fenómenos naturales y amenazas (como pudieran ser por ejemplo, los institutos o servicios de geología o de hidrología), pues el indicador indaga por una instancia que aborde el análisis del riesgo de forma integral, considerando no solo la información de la amenaza natural sino también los aspectos de exposición y de vulnerabilidad.</p> <p>Al igual que en otros componentes de la gestión del riesgo, es posible que en el país exista una entidad nacional encargada, por ejemplo, de “estudios territoriales”. En esos casos se debe verificar si la normatividad de dicha entidad considera el análisis de riesgo y los otros atributos por los que indaga este indicador.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar la existencia de normatividad que disponga de una instancia nacional para estudiar (analizar) integralmente el riesgo de desastres. 2. Verificar que la instancia identificada tenga asignadas en dicha normatividad responsabilidades de brindar asistencia técnica y lineamientos para el análisis del riesgo de desastres a los sectores y las unidades de gestión territorial existentes en el país. 3. Descartar los casos de las instituciones que realizan estudios científicos o técnicos sobre procesos naturales peligrosos, es decir, que se enfocan únicamente en los estudios de las amenazas o peligros. 4. Revisar la normatividad sobre estudios territoriales, o la asociada con el Ordenamiento Territorial (OT). Es posible que en el marco del OT se haya creado un instituto de investigación o análisis del territorio encargado de los estudios básicos. En estos casos se deberá comprobar si dicha normatividad considera de forma explícita entre sus funciones el análisis del riesgo de desastres y brindar asistencia técnica y lineamientos a los sectores y las unidades de gestión territorial para el análisis del riesgo de desastres. 5. De ser necesario entrevistarse con representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	La normatividad nacional que establece el marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres puede identificar al actor nacional encargado de brindar asistencia técnica y lineamientos para el análisis del riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe designar un actor nacional responsable de promover en el país el análisis del riesgo de desastres como proceso que evalúa los posibles daños de forma anticipada, y de brindar asistencia técnica y lineamientos a las unidades de gestión territorial y sectores para el desarrollo de estas actividades en el ámbito de sus competencias.

En la justificación se deberá identificar el nombre del actor, las funciones que le hayan sido asignadas y, caso de existir, algunas de sus herramientas y estándares o lineamientos para la realización de análisis de riesgo por parte de los sectores y unidades de gestión territorial.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. El Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial Suplemento 290 del 30 de septiembre de 2010 (última modificación 14-julio de 2014) (IR-1A-1a), establece en el Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos: *"La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia le corresponde: a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; ...d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción"*. Para ejercer este mandato, la Secretaría de Gestión de Riesgos ha creado como parte de su estructura orgánica, la Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, que de acuerdo con el Manual del Comité de Gestión de Riesgos emitido en el año 2014 (IR-3-6), se enfoca en *"generar y aplicar metodologías, normas y otras herramientas para el análisis y uso de la información y del conocimiento en la identificación y reducción de riesgos y en la implementación de planes, programas y proyectos de prevención y mitigación"*. El Manual del Comité de Gestión de Riesgos también establece que son parte de la estructura desconcentrada *"las Coordinaciones Zonales y las Direcciones Zonales de Gestión de Riesgos, esta última integra las Unidades de Análisis de Riesgos, Capacitación para la Gestión de Riesgos, Preparación y Respuesta ante Eventos Adversos, y Monitoreo de Eventos Adversos."* El mandato rector y coordinador de la SGR abarca todo el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, que de acuerdo con el Art. 13 del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Art. 19. está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos: local, regional y nacional. Durante la visita a la SGR en la misión de mediados de noviembre de 2016 se pudo constatar el rol asesor de la Subsecretaría de Análisis de Riesgos y se tuvo oportunidad de leer las solicitudes que envían los gobiernos locales a la SGR para el apoyo con la evaluación de riesgos de obras a implementar por las autoridades locales.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Uruguay 2015. No existe una norma que designe un responsable a nivel nacional para brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis de riesgo de desastres. La Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención de Desastres podría ser la instancia que asume este rol, pero la Ley 18.621 que crea el SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS que norma el accionar de esta Comisión no lo establece explícitamente: "*Es una comisión técnica y asesora presidida por el Director Nacional de Emergencias, con ámbito físico de actuación en la Dirección Nacional de Emergencias, integrada por representantes del máximo nivel técnico del Poder Ejecutivo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, el Congreso de Intendentes, e instituciones públicas y privadas de investigación y docencia*". Sus competencias son: "A) *Plantear estudios de prevención y apoyo, en referencia a las actividades a cargo del Sistema Nacional de Emergencias.* B) *Integrar comisiones asesoras en temas especializados, integradas por organismos técnicos, científicos, académicos y de investigación.* C) *Proponer medidas o acciones para la reducción de la vulnerabilidad existente.* D) *Proponer planes para el control de riesgos, a efectos de mantener los mismos niveles socialmente aceptables.* E) *Validar las actividades de capacitación y formación realizadas por entidades no sometidas a la supervisión de la Comisión Asesora Nacional, a efectos de habilitar la integración de recursos humanos al Sistema.* F) *Formular con el apoyo de la Dirección Nacional propuestas sobre políticas, estrategias, normativas y planes nacionales para la reducción de riesgos y manejo de situaciones de emergencia*".

Chile 2013. No se localizaron evidencias de que exista normatividad que designe un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales y sectoriales para el análisis del riesgo de desastres, lo cual fue confirmado por personal de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) y personal de los organismos técnicos (Servicio Nacional de Geología y Minería y del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile), organismos técnicos del Sistema Nacional de Protección Civil, quienes ratificaron que no existe este tipo de disposiciones.

Código IR-1A-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad que designe un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador concede importancia al hecho de que exista normatividad que disponga la existencia de una instancia de carácter técnico, dotada de competencia, presupuesto y una estructura, que entre sus funciones se encuentre la de definir metodologías para realizar estudios e investigaciones sobre los efectos del cambio climático (CC), de manera que resulten útiles a los sectores, unidades de gestión territorial y otros posibles interesados.</p> <p>Podría darse el caso de que dichas funciones sean asumidas por instituciones adscritas al sector ambiental o hidrometeorológico.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar la existencia de normatividad que establezca una instancia nacional como responsable para estudiar (analizar) los efectos del cambio climático. Lo que interesa es verificar si como parte de dicho análisis se estudian los “efectos probables” del cambio climático, es decir, no se trata solamente de estudios físicos sobre el clima sino sobre sus efectos potenciales. 2. Revisar si en la normatividad ambiental o aquella específica sobre cambio climático que pueda existir en el país se designa a un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre los efectos del cambio climático. 3. Analizar las comunicaciones, informes o resoluciones nacionales que respaldan los acuerdos internacionales sobre cambio climático; en éstas normalmente se incluye una descripción del marco legal e institucional nacional frente al CC. 4. De ser necesario entrevistarse con representante de la institución rectora del sector ambiental sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1A-1	Revisar si la normativa considerada para dicho indicador establece también responsabilidades sobre estudios acerca los efectos probables del cambio climático.
MG-1A-7 IR-1B-2 IR-3-2	Revisar si en alguna de las normativas consideradas para dichos indicadores se designa a un actor nacional responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre efectos de cambio climático.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe designar de manera explícita a una instancia de carácter nacional como responsable de la definición de metodologías para la elaboración de estudios sobre los efectos del CC. También se considerará como cumplido cuando la normatividad designe a una institución responsable en el país de realizar los estudios sobre los “efectos” probables del CC. (Nota: debe ser expresamente “efectos”, no se trata de estudios del clima per se o estudios de escenarios climáticos).</p> <p>En la justificación se deberá identificar el nombre del actor, las funciones que le hayan sido asignadas y, caso de existir, alguna de las herramientas y estándares o lineamientos para realizar los estudios de los efectos del CC.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2014. El Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del Ministerio de Ambiente aprobado en el 2012 por su titular (IR-1A-2) establece dentro de la estructura orgánica de esa cartera de Estado, en el numeral 7.3 la Subsecretaría de cambio climático cuya misión es *“liderar las acciones de mitigación y adaptación del país para hacer frente al cambio climático; incluyendo facilitar la implementación de mecanismos de transferencia de tecnología, financiamiento y comunicación”*. Son entre otras, atribuciones y responsabilidades de esa subsecretaría: *“f) Dirigir la generación y gestión de información actualizada sobre las causas e impactos del cambio climático en el Ecuador”* y *“m) Coordinar la investigación para la organización y ejecución de los planes, programas y proyectos de cambio climático”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. A nivel general, El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la autoridad ambiental nacional en el Perú creada por Decreto Legislativo N° 1013 de mayo del 2008. El MINAM cuenta con una Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos – DGCCDRH. No obstante que para la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático el SENAMHI se encargó de la elaboración de los escenarios de cambio climático a nivel nacional para el año 2030, la determinación de la relación entre el cambio climático, el retroceso de los glaciares y los impactos en la disponibilidad de agua en el Perú y del fortalecimiento del Sistema Nacional de Observación del Clima -SNOC, no existe una normativa que determine que el SENAMHI es responsable de brindar este servicio de forma taxativa para niveles territoriales y sectoriales. El SENAMHI se creó mediante el Decreto Ley N° 17532 de 1969. La Ley Orgánica del SENAMHI es la Ley 24031 de 1984, el Artículo 4, literal (d) establece la responsabilidad de asesorar y brindar apoyo técnico a las entidades públicas y privadas sobre temas relacionados con el SENAMHI.

Colombia 2013. De acuerdo con el Artículo 217 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014, es responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) o quien haga sus veces, *“la coordinación de la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático”*. Adicionalmente, serán el DNP junto con el MAVDT y el IDEAM los responsables de la *“formulación de la metodología a partir de la cual las entidades públicas del orden nacional deberán incorporar en sus Planes Sectoriales una estrategia de adaptación al Cambio Climático”*. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberá apoyar a las entidades de orden territorial que así lo requieran, a desarrollar sus planes territoriales de adaptación. (NOTA: en mayo de 2011 el MAVDT fue dividido en dos Ministerios: el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; este último asume las responsabilidades de la Ley 1450 en materia de CC). Esta normativa, sin embargo, no hace referencia expresa a la responsabilidad de definir metodologías para estudios de CC, sólo para incorporar el tema en los planes sectoriales, además el periodo de implementación es de 4 años (PND), por lo que no se cumple la condición.

Código IR-1A-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿Existe normatividad que ordene la creación y mantenimiento de Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica en política pública de GRD que exista normatividad que establezca la creación de Sistemas de Información como instrumentos que permiten la recolección, almacenamiento, ordenamiento, sistematización y acceso de información útil para apoyar las labores de gestión del riesgo de desastre que impulsan los diferentes actores. Debido al carácter dinámico del riesgo de desastres, es necesario que estos sistemas de información sean mantenidos de manera continua para contar con información actualizada y relevante.</p> <p>Un Sistema de Información para la gestión del riesgo de desastres idealmente debería integrar información relacionada con la probable ocurrencia de eventos físicos y las condiciones de exposición y vulnerabilidad de la población, la infraestructura (al menos la pública), y las actividades económicas en el territorio.</p> <p>Estos sistemas pueden ser de gestión centralizada a nivel nacional, desconcentrados, de acceso libre o restringido para ciertos tipos de usuarios, y habitualmente contienen información a escala local. Adicionalmente, pueden estar enmarcados en las iniciativas de estandarización de datos dentro de las infraestructuras de datos espaciales. Así mismo, el sistema puede ser un “subsistema” de otros sistemas relacionados como, por ejemplo, podría ser un Sistema Nacional de Información Ambiental o un Sistema Nacional de Información para la Planificación Nacional que tuvieran un módulo de “riesgo de desastres”, o similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad de GRD, la que verse sobre estudios territoriales u otras relacionadas con sistemas de información o la ambiental. 2. Comprobar si dicha normatividad dispone la creación y mantenimiento de sistemas de información para la administración de información útil para las labores de GRD, que integren datos sobre la ocurrencia de eventos naturales, las condiciones de vulnerabilidad y/o exposición. 3. Descartar los registros y sistemas de información que registren exclusivamente información sobre amenazas naturales y los datos históricos de los desastres y sus efectos. 4. De ser necesario, entrevistarse con un representante de la institución rectora de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-1A-2 IR-1A-4 IR-3-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores incluye la creación del sistema de información para la GRD.
IR-3-5	Verificar si en la justificación de cumplimiento de este indicador se hace referencia a normatividad que establece la creación del sistema de información para la GRD.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer explícitamente la creación y mantenimiento de un Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual se integre, además de datos sobre el comportamiento de amenazas naturales, información sobre exposición y vulnerabilidad de la población, la infraestructura (al menos la pública), y las actividades económicas en el territorio.

En el caso que exista normatividad que haya ordenado efectivamente la creación de tal sistema, pero éste todavía no haya sido diseñado o implementado, el indicador deberá considerarse cumplido, puesto que se indaga por la normatividad que crea el sistema. Si este fuera el caso, se deberá dejar constancia en la justificación la institución encargada de la administración del sistema de información, quienes pueden acceder al sistema, el posible carácter desconcentrado del mismo y otra información relevante sobre su funcionamiento.

Este indicador no puede verificarse con normatividad que establezca sistemas de monitoreo de amenazas o peligros (redes de observación y monitoreo del clima o de los volcanes, por ejemplo), y tampoco con sistemas de información que registran los daños, las emergencias o los desastres históricos.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N° 113 /2013-2014, LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS , aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2014 (IR-1A-3a), incluye el Título sobre "Sistemas de Información y Alertas para la Gestión del Riesgo", establece en el artículo Artículo 42 *“I. El SINAGER-SAT (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y ALERTA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES) a cargo del Viceministerio de Defensa Civil, es la base de información de amenazas, vulnerabilidades y niveles o escenarios de riesgo, de vigilancia, observación y alerta, de capacidad de respuesta y de parámetros de riesgo al servicio del SISRADE, para la toma de decisiones y la administración de la gestión de riesgo.”* En el mismo artículo se definen los componentes del SINAGER-SAT: *“el Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres -SNATD, el Observatorio Nacional de Desastres –OND, la Infraestructura de Datos Espaciales –GEOSINAGER y la Biblioteca Virtual de Prevención y Atención de Desastres – BIVAPAD.”* Finalmente, en el artículo 47. (ARTICULACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN), se dispone que: *“Las instituciones del SISRADE y otras relacionadas con la gestión de riesgos deberán articularse a los Sistemas de Información establecidos en la presente Ley.”*

México 2014. La Ley General de Protección Civil, publicada el DOF del 06 de junio de 2012 (IR-1A-3A) en su artículo 19 instruye: *“... Fracción XXI. Promover la instrumentación de un Subsistema de Información de Riesgos, Peligros y Vulnerabilidades que permita mantener informada oportunamente a la población; XXII. Supervisar, a través del CENAPRED, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y delegaciones; ... El Atlas se integra con la información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente...”*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. La Secretaría de Gestión de Riesgos cuenta con un sistema de monitoreo de los eventos adversos que opera bajo la Dirección de Monitoreo de la SGR. De acuerdo con el Manual del Comité de Gestión de Riesgo emitido por la SGR en 2014 (IR-3-6), la misión de la Dirección de Monitoreo tiene tres ejes: *"a. Monitorear y hacer el seguimiento de las amenazas y de los eventos adversos utilizando la información de los entes científico-técnicos del país y del exterior. b. Presentar a las autoridades competentes escenarios posibles e información consolidada, ordenada, oportuna y segura para la toma decisiones. c. Asegurar el funcionamiento permanente del sistema de monitoreo y la conservación de la información tanto en época de normalidad como de crisis."* De la misma manera, el Manual detalla que la Dirección de Monitoreo de la SGR es una red integrada que: *"1. Recepta y analiza información proveniente de los institutos científico-técnicos sobre la evolución de las amenazas, genera escenarios de riesgo y otros productos y los distribuye a los tomadores de decisión siguiendo protocolos establecidos por la SGR. 2. Mantiene una red de trabajo con los actores del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos, para recoger y validar la información sobre la evolución de los eventos adversos. 3. Administra el sistema de información sobre eventos adversos para procesamiento de los datos, generación de productos, conservación de la información e interconexión entre los tomadores de decisiones."* En opinión del equipo consultor, este sistema liderado desde la Dirección de Monitoreo de la SGR está orientado al monitoreo de los fenómenos adversos y no constituye un sistema de información de gestión de riesgos propiamente dicho, ya que no se evidencia que el sistema proporcione información sobre exposición y vulnerabilidad de los elementos socioeconómicos en el territorio, sino que está más enfocado en el monitoreo de los fenómenos adversos.

Chile 2013. No se localizó información sobre normatividad que ordene la creación y mantenimiento de Sistemas de Información para la Gestión de Riesgos de Desastres. Vale señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizó un Diagnóstico sobre la situación de Riesgos de Desastres en Chile, en el año 2010, dicho estudio refiere al respecto que *"... Varias instituciones están difundiendo información y datos relacionados con las amenazas y riesgo, vía su sitio web y otros canales. Sin embargo, no existe un sistema nacional de información sobre la gestión del riesgo, que integre información multisectorial y geográfica. Los mecanismos existentes para acceder a la información, cuando es posible acceder a ella, no corresponden con los niveles de desarrollo de las instituciones, ni con los recursos tecnológicos disponibles en el país."*

Código IR-1A-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe normatividad que establezca crear, sistematizar o actualizar bases de datos sobre los efectos de los desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Una buena práctica en las políticas públicas en materia de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) es contar con bases de datos sobre los efectos, daños o impactos de los desastres ocurridos. Estas bases de datos permiten complementar, con base a la evidencia empírica recabada, los estudios de estimación del riesgo. Idealmente los catálogos o bases de datos deben incluir datos de los efectos, daños o impactos de los desastres y no únicamente un registro de la ocurrencia y naturaleza de los mismos.</p> <p>Los efectos, daños o impactos de los desastres suelen cuantificarse en términos de población y viviendas afectadas, la infraestructura (al menos la pública) dañada, el impacto en las actividades económicas y/o en el monto total de los daños y pérdidas.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad de GRD, la relacionada con los procesos de preparación, respuesta o manejo de desastres, y cualquier otra que sustente los sistemas de información para la GRD. 2. Comprobar la existencia de alguna disposición para la creación de catálogos, bases de datos históricos o sistemas de información sobre los efectos y consecuencias de los desastres. 3. Confirmar que la normatividad instruye que esas bases de datos sean sistematizadas o actualizadas permanente y sistemáticamente. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 IR-1A-4 IR-3-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores incluye la creación de bases de datos sobre los efectos de los desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita que se debe contar con registros, bases de datos, sistema de información o equivalente sobre los efectos, daños o impactos de los desastres.</p> <p>Si existiera normatividad que establezca la creación de esta base de datos, aun cuando ésta no haya sido diseñada o implementada, se considerará cumplido el indicador, debiéndose dejar constancia de este hecho en la justificación, así como informando cómo se realiza la actualización de dicha base de datos. Así mismo, en la justificación deberá quedar registrado el nombre de la institución responsable por la creación y mantenimiento de la base identificada y, de ser posible, detallar la información que se registra para cuantificar los efectos de los desastres y desde que año se tiene registro de los mismos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (IR-1A-4a), establece en el Artículo 45 que es responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, poner en marcha un sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres que permitirá , según dispone el numeral 6 de ese mismo Artículo 45: "*Responder a las necesidades de información sobre las estadísticas de afectación y de apoyos brindados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en las situaciones de emergencia*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. En la Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, el 8 de febrero de 2011, Capítulo V, Art. 54, se ordena la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), definido como un mecanismo de identificación y registro cualitativo y cuantitativo, de la "*extensión, gravedad y localización de los efectos de un evento adverso*". No se habla de sistematizar datos sobre desastres históricos como tal, ni de efectos ambientales asociados con eventos locales y recurrentes (éste es el espíritu de este indicador, ya que el mandato de realizar evaluaciones de daños del tipo EDAN forma parte de otro indicador en el componente PR del IGOPP). Por otro lado, se cuenta con la base de datos DesInventar (actualizada al 2012 por parte de la ONG PREDES). Sin embargo, esta base de datos no ha sido formalmente reconocida como fuente oficial por el SINAGERD, así como tampoco tiene establecida una periodicidad de actualización, por tanto, no cumple el indicador.

Código IR-1B-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce la buena práctica de que los estudios de amenaza de los eventos de tipo geológico (sismos, volcanes, deslizamientos, etc.) se realicen desde un enfoque probabilista, utilizando las series de datos existentes para la estimación de las amenazas geológicas que puedan existir en el país.</p> <p>Mediante los análisis probabilistas de riesgo se define la denominada “curva de excedencia de pérdidas”, que representa la probabilidad anual de excedencia (esto es, el inverso del período de retorno) de los parámetros de intensidad de los fenómenos naturales en las diferentes partes del territorio expuesto a dichas amenazas. Esto significa que, espacialmente, en cada punto del territorio se debería contar con la frecuencia de ocurrencia de un parámetro que caracterice la intensidad del evento geológico, estando dicha frecuencia representada por una función de distribución de probabilidad.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar normatividad en materia de GRD, la de aseguramiento de infraestructura, la de protección financiera frente a desastres y la de diseño de edificaciones frente a fenómenos geológicos. 2. Confirmar si alguna de dichas normatividades establece el análisis probabilista del riesgo asociado a eventos de orden geológico. 3. Entrevistarse con representantes de la entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos o, de existir, con la institución responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos para el análisis del riesgo de desastres, para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 4. Descartar aquellos documentos que hacen referencia a estudios de amenaza, sin que se considere la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1A-1	De existir un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos para el análisis del riesgo de desastres, se sugiere consultarlo sobre lo que indaga el presente indicador.
IR-3-3	De existir una entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos, se sugiere consultarla sobre lo que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada deberá establecer de forma expresa el requerimiento del enfoque probabilista, es decir, que se considere la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad, para al menos un evento geológico relevante para el país.</p> <p>En caso de que el enfoque probabilista para estudios de riesgo geológico esté mencionado en guías o manuales, para que se cumpla el indicador se deberá señalar la normatividad y el articulado que la sustenta la legalidad y su obligatorio uso y cumplimiento.</p> <p>Así mismo, en la justificación deberán quedar registrados los parámetros utilizados para caracterizar la intensidad del fenómeno geológico identificado.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. La normatividad que establece que los estudios de amenaza por eventos geológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos se encuentra en la *Guía para Usuarios, Análisis de Riesgos e incorporación de la Gestión Preventiva en la Planificación Municipal*, elaborada en el contexto del Convenio de Crédito No.3487-Ni, “Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres Naturales en Nicaragua”, aprobado 23 de Abril del 2001 con el Acuerdo Presidencial No. 129-2001 y actualizada a través de la Cooperación Técnica (CT) “Análisis e Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación Municipal en Nicaragua” (ATN/OC-12298-NI), aprobada en el año 2010”, en su Capítulo 2, Sub capítulo 2.1, la cual define la metodología a utilizar para la realización de estudios de amenaza por eventos geológicos y considera la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos: Títulos: 2.1.2 -Amenaza por Inestabilidad de Laderas (páginas 18-30); 2.1.3. Amenaza Sísmica (páginas 30-37); y 2.1.4. Amenaza Volcánica (páginas 37-47). Esta Guía es el instrumento metodológico oficial que usa SINAPRED para contratar, revisar y aprobar estudios de amenazas de origen natural.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En Colombia, la competencia de nivel nacional de producir información, estudios y recomendaciones sobre amenazas y riesgos geológicos es asignada al Servicio Geológico Colombiano, cuyas funciones son definidas a través del Decreto 2703 del 22 de noviembre de 2013, por el cual se establece la estructura interna del Servicio Geológico Colombiano - SGC y se designan las funciones de sus dependencias. En el Artículo 9, sobre las “funciones de la Dirección de Geoamenazas”, estipula en el numeral 2: “*Dirigir las actividades conducentes al estudio, análisis y evaluación de las amenazas de origen geológico y de afectación regional y nacional en el territorio nacional*”; 3: “*Dirigir, elaborar y difundir la generación de guías metodológicas de evaluación de amenazas geológicas con afectaciones departamentales y municipales, para que los entes territoriales realicen la evaluación de las amenazas geológicas*”; 4: “*Investigar, identificar, caracterizar, monitorear, evaluar, diagnosticar y modelar fenómenos geológicos generadores de amenazas*”. Sin embargo, esta normativa no establece de forma taxativa que los estudios en mención deben considerar la frecuencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos, ni tampoco establece el enfoque probabilista como tal, por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código IR-1B-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad que establezca que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce la buena práctica de que los estudios de amenaza de los eventos climáticos e hidrológicos (inundaciones, sequías, heladas, granizos, tornados, huracanes, desbordes de ríos, etc.) se realicen desde un enfoque probabilista, utilizando las series de datos existentes para la estimación del peligro de este tipo de amenazas.</p> <p>Mediante los análisis probabilistas de riesgo se define la denominada “curva de excedencia de pérdidas”, que representa la probabilidad anual de excedencia (esto es, el inverso del período de retorno) de los parámetros de intensidad de los fenómenos naturales en las diferentes partes del territorio expuesto a dichas amenazas. Esto significa que, espacialmente, en cada punto del territorio se debería contar con la frecuencia de ocurrencia de un parámetro que caracterice la intensidad del evento climático o hidrológico, estando dicha frecuencia representada por una función de distribución de probabilidad.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar normatividad en materia de GRD, la de aseguramiento de infraestructura, la de protección financiera frente a desastres y la de seguridad de edificios frente a fenómenos naturales. 2. Confirmar si alguna de dichas normatividades establece el análisis probabilista del riesgo asociado a eventos de orden hidro climático. 3. Entrevistarse con representantes de la entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos climáticos e hidrológicos o, de existir, con la institución responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos para el análisis del riesgo de desastres, para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 4. Descartar aquellos casos que hacen referencia a meros estudios de amenaza, sin que se considere la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1A-1	De existir un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos para el análisis del riesgo de desastres, se sugiere consultarlo sobre lo que indaga el presente indicador.
IR-3-4	De existir una entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos, se sugiere consultarla sobre lo que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada deberá establecer de forma expresa el requerimiento del enfoque probabilista, es decir, que se considere la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad, para al menos un evento climático, hidrológico o meteorológico relevante para el país.</p> <p>En caso de que el enfoque probabilista para estudios de riesgo hidro climático esté mencionado en guías o manuales, para que se cumpla el indicador se deberá señalar la normatividad y el articulado que la sustenta la legalidad y su obligatorio uso y cumplimiento.</p> <p>Así mismo, en la justificación deberán quedar registrados los parámetros utilizados para caracterizar la intensidad del fenómeno climático, hidrológico o meteorológico identificado.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. La normatividad que establece que los estudios de amenaza por eventos climáticos e hidrológicos deben considerar la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos se encuentra en la Metodología, Planes Municipales de Gestión de Riesgos, publicada del 30 agosto de 2012, elaborada en el marco de la Cooperación Técnica (CT) “Análisis e Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación Municipal en Nicaragua” (ATN/OC-12298-NI), aprobada en el año 2010, la cual contiene en su capítulo 2, Títulos: 2.1.1. Amenaza por inundación (páginas 8-16) es la que define la metodología a utilizar para la realización de estudios de amenaza por inundaciones, donde se considera la frecuencia de ocurrencia asociada a los niveles de intensidad de los eventos. Esta metodología retoma aspectos de la Guía para Usuarios (elaborada en el marco del Convenio de Crédito No.3487-NI, “Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres Naturales en Nicaragua”), e incorpora las variables sobre Cambio Climático y Medidas de Adaptación, y los Indicadores de Gestión de Riesgos propuestos por el INETER, (metodología “Downscaling”).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. En Paraguay la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), creada por la Ley N° 1.228 de fecha 29 de diciembre de 1986, y actualmente perteneciente a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) es la encargada de normar, coordinar y prestar los servicios de meteorología e hidrología del país, no obstante, de existir otras instituciones (públicas y privados) que administran observatorios meteorológicos tales como la ANDE, MAG, MOPC, YACYRETA, ITAIPÚ y Armada Nacional. Se analizaron: (i) Ley N° 1228/1986 que crea el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ; (ii) Manual de Organización y Funciones de la DINAC aprobado por Resolución N° 460 del 8 de abril de 2015, si bien en este último manual se asignan a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las responsabilidades de “promover y realizar estudios e investigaciones en las áreas relacionadas con el clima, meteorología e hidrología”, no se encontraron evidencias que los mismos deban considerar la frecuencia de ocurrencia asociados a niveles de intensidad.

Código IR-1B-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Considerando que la GRD es una política pública que debe ejecutarse transversalmente en la administración pública, en el entendido que sus objetivos y visión son compartidos por todos los sectores, es deseable entonces que su normatividad estipule que cada sector debe, en el ámbito de sus competencias, realizar estudios para determinar su exposición, vulnerabilidad y riesgo, pues en la medida en que los sectores analicen y conozcan sus niveles de riesgo ante fenómenos naturales, podrán iniciarse los procesos subsecuentes de reducción del riesgo, preparación ante desastres, planificación de la continuidad de operaciones y recuperación, y la protección financiera.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “identificación del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología diversa tal como estimación o análisis del riesgo, de los niveles de exposición del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar normatividad vigente en materia de GRD y verificar si estipula de forma expresa que los diferentes sectores de la administración pública tienen responsabilidades para realizar acciones para la identificación de los riesgos de desastre en sus ámbitos de competencia. El análisis del riesgo supone el estudio de la amenaza, exposición y vulnerabilidad. 2. Si la normatividad identificada asigna a los sectores responsabilidades generales para la GRD, se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o el alcance de las acciones de GRD, a fin de confirmar que dicha normatividad incluya la identificación del riesgo como uno de los componentes de la GRD. 3. Si la normatividad identificada asigna responsabilidades para la identificación del riesgo a los miembros del Sistema Nacional de GRD, de Protección Civil, o similares, se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o el alcance de dichos sistemas nacionales, para confirmar que los sectores (ministerios, instituciones públicas, etc.) son parte de dichos sistemas. 4. Descartar la normatividad que asigna responsabilidades a los sectores solamente en las acciones que se refieran a otros componentes de la GRD, como pueden ser la reducción del riesgo, los preparativos para desastres o la recuperación. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 RR-1B-1 PR-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores asigna responsabilidades a los sectores en materia de identificación del riesgo.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad de GRD identificada deberá establecer explícitamente que los sectores sean responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres dentro del marco de sus funciones, lo cual implica analizar el comportamiento de las amenazas y la vulnerabilidad de los elementos expuestos correspondientes al sector.

Si la normatividad identificada asigna a los sectores responsabilidades generales en GRD, o cuando dicha normatividad asigna responsabilidades para la identificación de riesgos a los integrantes del sistema nacional de GRD, en la justificación debe quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la identificación del riesgo es parte de la misma, así como que los sectores son parte del Sistema Nacional de GRD (o similar), respectivamente.

No se logrará validar este indicador si la normatividad de gestión de riesgo asigna responsabilidades a los sectores solo para el análisis de amenazas, para el de exposición, o el de vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis, para que resulten en una estimación integral del riesgo.

La normatividad que se busca no debe confundirse con aquella que estipule que los sectores son responsables de realizar acciones en los otros componentes de la GRD como, por ejemplo, los preparativos para desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N° 113 /2013-2014, LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2014 (IR-1A-3a) establece en el Título II, Capítulo I, artículo 20 (Gestión de Riesgos en la Planificación Integral): *"I. El Estado en todos sus niveles debe incorporar en la planificación integral, la gestión de riesgos como un eje transversal, con carácter obligatorio y preferente, asimismo debe prever lineamientos, acciones y recursos para este fin en sus planes, programas y proyectos."* Más adelante, en el Capítulo II (Alcances de la Gestión del Riesgo), artículo 22, se establece: *"II. La gestión de riesgos se inicia con la identificación, conocimiento, análisis, evaluación, determinación de los riesgos y el pronóstico de las tendencias de los eventos, amenazas y vulnerabilidades, que serán efectuadas en todo su alcance..."*

Adicionalmente, el Reglamento General de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (D.S. N° 26739), promulgado el 4 de agosto de 2002, (IR-1B-3b), establece en el Capítulo III sobre Evaluación de Riesgos e Inversión, Artículo 66º: *"Cada sector es responsable de establecer normas específicas de evaluación del riesgo siguiendo la metodología establecida por el MDSP y de comunicar las mismas a los sistemas de Regulación Sectorial para su correspondiente aplicación."* Cabe mencionar que este Decreto ha sido abrogado de acuerdo con la nueva Ley No. 113, pero se deja como referencia, en caso de que en la reglamentación de la nueva Ley se mantenga este mandato.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. No obstante que el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgos, aprobado por Decreto No. 874-09 (IR-1B-3a) establece entre los objetivos del Sistema Nacional de PMR (que incluye a todos los sectores) que todas las instituciones deben desarrollar sus planes internos de gestión de riesgo (Artículo 6), no se menciona explícitamente la responsabilidad de realizar el análisis de riesgo de desastre dentro del ámbito de sus competencias.

Código IR-1B-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la normativa de la GRD establezca de forma expresa para las empresas prestadoras de servicios públicos la obligación de realizar análisis de riesgo, el cual supone el estudio de la amenaza, exposición y vulnerabilidad.</p> <p>Usualmente, la infraestructura relacionada con la prestación de servicios públicos es pública, aunque en algunos países puede ser concesionada, e incluso puede estar sujeta al derecho privado. En la medida en que las empresas prestadoras de servicios públicos sean responsables de conocer el riesgo de sus operaciones ante fenómenos naturales (y también sean responsables de reducirlo), el estado tendrá menor carga fiscal frente al riesgo de desastres, considerando el costo económico y social que significa su interrupción.</p> <p>Las acciones y responsabilidades sobre análisis del riesgo de desastres pueden ser referidas usando terminología diversa tal como estimación o identificación del riesgo de desastres, de los niveles de exposición del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad vigente en materia de GRD y verificar si estipula de forma expresa que las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la responsabilidad de realizar acciones para el análisis de los riesgos de desastre sus ámbitos de competencias. Este análisis supone el estudio de la amenaza, exposición y la vulnerabilidad. 2. Si la normatividad identificada asigna a las empresas prestadoras de servicios públicos responsabilidades generales para la GRD, se deberá identificar en dicha normatividad o en otra de GRD la definición y/o el alcance de las acciones de GRD, para confirmar que la GRD incluya la identificación del riesgo como uno de sus componentes. 3. Si la normatividad identificada asigna responsabilidades para la identificación del riesgo a los miembros del Sistema Nacional de GRD, de Protección Civil, o similares, se deberá corroborar en esta u otra normatividad de GRD que las empresas prestadoras de servicios públicos son parte de dichos sistemas. 4. Descartar la normatividad que asigne responsabilidades a dichas entidades solamente en otros componentes de la GRD como pueden la reducción del riesgo, los preparativos para desastres, la recuperación o la protección financiera (incluido el aseguramiento). 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 RR-1B-1 RR-1B-2 PR-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores asigna responsabilidades a las empresas proveedoras de servicios públicos en materia de análisis del riesgo de desastres.
PR-1B-13 PR-1B-14 PR-1B-15	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores hace referencia a normatividad de GRD que pueda ser empleada para respaldar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad de GRD identificada deberá establecer explícitamente que las empresas prestadoras de servicios públicos sean responsables de realizar el análisis del riesgo de desastres dentro del marco de sus funciones, lo cual implica analizar las amenazas y la vulnerabilidad de sus elementos expuestos.

Si la normatividad identificada asigna a las empresas proveedoras de servicios públicos responsabilidades generales en GRD, o cuando dicha normatividad asigna responsabilidades para la identificación de riesgos a los integrantes del sistema nacional de GRD, en la justificación debe quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la identificación del riesgo es parte de la GRD, así como que dichas empresas son parte del Sistema Nacional de GRD (o similar), respectivamente.

No se logrará validar este indicador si la normatividad de gestión de riesgo asigna responsabilidades a las empresas prestadoras de servicios públicos solo para el análisis de amenazas, el de exposición o el de vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación del análisis de los tres elementos que resulten en una estimación integral del riesgo.

La normatividad que se busca no debe confundirse con aquella que estipule que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar acciones en los otros componentes de la GRD como, por ejemplo, los preparativos para desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. En el Reglamento de la Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo número 048-2011-PCM, el 25 de mayo 2011 (IR 1B-4a), se establece en el artículo 13, numeral 13.2 que *“las entidades públicas identifican y priorizan el riesgo en la infraestructura y los procesos económicos, sociales y ambientales, en su ámbito de atribuciones, y establecen un plan de gestión correctiva, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el CENEPRED”*. Adicionalmente, la ley N° 29664 que crea el SINAGERD, del 8 de febrero 2011, en su artículo 2, y respecto del ámbito de aplicación de esta, dice *“... la ley es de aplicación y cumplimiento para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado y la ciudadanía en general...”*. El mismo artículo reza que *“...la referencia genérica a Entidades públicas en la presente ley y su reglamento se refiere a la definición de entidades públicas establecido en la ley 27444...”*. En esta última Ley, denominada Ley del Procedimiento Administrativo General) expedida el 21 de marzo de 2001, en su título preliminar, refiere el concepto de entidades públicas como extensivo a *“... Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia”*. De esta forma se concluye que, en el Perú, las empresas prestadoras de servicios públicos sí están obligadas a integrar los procesos de la GRD en al ámbito de sus operaciones.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. Se revisó la Ley de Protección Civil aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Decreto No. 777 del 18 de agosto del 2005 y el Plan Nacional de Protección Civil Prevención y Mitigación de Riesgo aprobado en junio del 2009, y solo se encontraron mandatos amplios para los sectores en cuanto a su responsabilidad de formular y ejecutar los respectivos planes de trabajo de protección civil, planes de trabajo de prevención del manejo del riesgo de desastres y de mitigación de sus impactos, pero no se encontraron referencias explícitas para las empresas prestadoras de servicios públicos sobre su responsabilidad de realizar el análisis de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Código IR-1B-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la normatividad nacional que regula la ciencia, la tecnología y la innovación (o equivalente), establezca expresamente la promoción de la investigación o el desarrollo de conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país.</p> <p>La existencia de normatividad, fondos, planes y programas nacionales que fomenten la generación de conocimiento en esta temática podría facilitar la labor de institutos de investigación, universidades y de la comunidad académica interesados en fomentar la financiación de tesis o proyectos de investigación en esta temática.</p> <p>La existencia de esta normatividad permite además verificar de manera indirecta la importancia relativa que el país le asigna a la investigación y el conocimiento del riesgo de desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad nacional que regula los temas sobre ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluyendo los fondos, planes y programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. 2. Revisar esta normatividad y verificar si existe una mención expresa sobre el conocimiento del riesgo de desastres, bien sea como un tema en sí mismo o como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados. 3. De ser necesario, entrevistarse con representante de la institución rectora de la ciencia, tecnología e innovación. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-6	Revisar si la normatividad utilizada en este indicador incluye la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe contener una mención expresa sobre el conocimiento del riesgo de desastres o algún otro componente de la GRD, bien sea como un tema en sí mismo de investigación o bien como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados tales como gestión ambiental, cambio climático, ordenamiento territorial o desarrollo, entre otros.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

El Salvador 2016. En el Plan Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, elaborado en el año 2010 por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, adoptado por Decreto Ejecutivo N° 12 de fecha 30/06/2009 (IR-1B-5a), en la Tabla 2: "Agenda Nacional de Investigación y su vinculación con el Plan Quinquenal de Desarrollo", se incluye dentro de las áreas estratégicas la Gestión Ambiental de Riesgos, siendo la Prevención y manejo de riesgos naturales una de las áreas de investigación estratégicas. En el documento se incluyen cómo temas de investigación los siguientes: 1. Caracterización del movimiento de laderas 2. Caracterización de inundaciones 3. Vigilancia de la actividad sísmica 4. Vigilancia de la actividad volcánica 5. Efecto de los eventos naturales 6. Percepción social de los riesgos 7. Mapas de riesgos 8. Integración de planes de energía.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La Ley 1286 de 2009, "Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990 (Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación), se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones", no hace referencia explícita a la promoción del conocimiento sobre el riesgo de desastres en el país. En el país existe Centro de Investigación para la Prevención y Atención de Desastres, Emergencias y Gestión del Riesgo de Colombia CIPADEGER, organismo adscrito a la Dirección Nacional del Círculo Nacional de Auxiliadores Técnicos CINAT. El funcionamiento del CIPADEGER es avalado por Colciencias, sin embargo, no existe una norma del sector que promueva la investigación en el riesgo de desastres de forma expresa. Finalmente, el Documento Conpes 3582 de abril 27 de 2009, que establece la "Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación", menciona la importancia de "adelantar acciones para mitigar el riesgo en desastres"; sin embargo, la Ley que se derivó de este Conpes (la Ley 1286), no retoma este tema de forma explícita, por lo tanto, la condición no se cumple. (Ver: <http://www.colciencias.gov.co/noticias/se-conform-en-bogot-la-junta-directiva-del-cipadeger>).

Código IR-1B-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿La normatividad de ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluye la promoción del conocimiento sobre el cambio climático en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la normatividad nacional que regula la ciencia, la tecnología y la innovación (o equivalente), establezca expresamente la promoción de la investigación o el desarrollo de conocimiento sobre el cambio climático en el país.</p> <p>La existencia de normatividad, políticas, fondos, planes y programas nacionales que fomenten la generación de conocimiento en esta temática podría facilitar la labor de institutos de investigación, universidades y de la comunidad de estudiantes para fomentar la financiación de tesis o proyectos de investigación en esta temática. Esta normatividad permite además verificar de manera indirecta la importancia relativa que el país le asigna a la investigación y el conocimiento sobre los aspectos del clima en el país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad nacional que regula los temas sobre ciencia, tecnología e innovación (o equivalente), incluyendo fondos, políticas, planes y programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. 2. Revisar esta normatividad y verificar si existe una mención expresa sobre la promoción del conocimiento en cambio climático, bien sea como un tema en sí mismo o como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados. 3. De ser necesario entrevistarse con representante de la institución rectora de la ciencia, tecnología e innovación. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-5	Revisar si la normatividad utilizada para respaldar este indicador incluye la promoción del conocimiento sobre el cambio climático
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe contener mención expresa sobre la promoción del conocimiento en cambio climático, bien sea como un tema en sí mismo de investigación o bien como un resultado, meta u objetivo de la investigación que se promueve en otros temas asociados tales como gestión ambiental, gestión integrada de los recursos hídricos, ordenamiento territorial o desarrollo, entre otros.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

México 2014. Se analizó el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación PECITI 2008-2012 (IR-1B-6^a), que guía las acciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT (el nuevo Programa no está aprobado todavía), y se encontró una referencia general a "*atención de desastres naturales y cambio climático*", dentro de los temas estratégicos identificados (Página 7). En entrevistas con CENAPRED y con la Consejo Nacional de Ecología y Cambio Climático se corroboró que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología financió estudios y análisis de cambio climático a través de la academia, por lo que la valoración del indicador es positiva.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La Ley 1286 de 2009 "Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990 (Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación), se transforma a Colciencias en la Ley 1286 de 2009 "*Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990 (Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación), se transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones*", no hace referencia explícita a la promoción del conocimiento sobre el cambio climático en el país. Se tiene que el Centro de Investigación para la Prevención y Atención de Desastres, Emergencias y Gestión del Riesgo de Colombia CIPADEGER, (cuyo funcionamiento es avalado por Colciencias), CIPADEGER identificó en el mes de septiembre del 2009 5 líneas de acción, la primera de ellas se llama "*Gestión de riesgos climáticos para la prevención y atención de desastres*". No obstante, estos avances, se concluye que aún no se cuenta con una normativa de ciencia tecnología e innovación que explícitamente promueva el conocimiento en cambio climático en el país de forma expresa.

Código IR-1B-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. <i>¿Existe normatividad para el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de al menos dos fenómenos naturales peligrosos en el país?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Para identificar y analizar el riesgo es indispensable contar con información sobre las amenazas naturales en series de tiempo prolongadas. Esto se logra a través de la instalación, operación y mantenimiento continuo de redes de observación y monitoreo. En ese sentido, este indicador valora que exista normatividad que disponga explícitamente el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de monitoreo para fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>En la mayoría de los países generalmente existe al menos una red de monitoreo hidrometeorológico, (usualmente operado por un servicio hidrometeorológico o un instituto universitario) la cual debería estar soportada en normatividad, en la que se disponga su desarrollo continuo y mantenimiento.</p> <p>Para los fines del presente indicador, se deberá confirmar la existencia de normatividad que establezca el funcionamiento de al menos dos redes independientes de observación y monitoreo dedicadas fenómenos naturales, tales como la red hidrológica, la meteorológica, la sismológica (incluye acelerógrafos y sismógrafos), la de monitoreo volcánico, la de detección de incendios forestales, la de monitoreo de desbordamiento de ríos, la de observación de laderas, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar cuáles son las principales redes y/o instituciones técnico-científicas encargadas del estudio, observación y monitoreo de fenómenos naturales peligrosos en el país. 2. Revisar la normatividad asociada a dichas redes y/o instituciones técnico-científicas. 3. Analizar si se establece por la normatividad identificada, el desarrollo, mantenimiento y funcionamiento de forma permanente de redes para la observación y monitoreo de al menos dos amenazas naturales existentes. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-3-3 IR-3-4	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores incluye el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo para los fenómenos naturales a cargo de cada institución.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada (puede ser a través de varias normas) deberá establecer el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de, al menos, dos fenómenos naturales peligrosos en el territorio nacional. Como fenómenos naturales peligrosos podrán ser considerados los hidrometeorológicos (inundaciones, sequías, granizos, vientos, desbordamientos de ríos, etc.), sismos, tsunamis, volcanes, deslizamientos de tierra e incendios forestales.</p> <p>A efectos de computar el número mínimo de fenómenos naturales monitoreados por redes, las amenazas hidrometeorológicas se contabilizarán como un solo fenómeno, salvo que se justifique debidamente que las redes de observación para los diversos fenómenos hidrometeorológicos son de carácter independiente.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) fue creado por Acuerdo Presidencial del 26 de marzo de 1976. De éste derivó el Acuerdo Gubernativo N° 26-1976, del Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas del 13 de agosto de 1976 (IR-1B-7a), en el que en los siguientes artículos contempla: "*Artículo 7o.- Establecer y operar las redes de estaciones necesarias al conocimiento de los fenómenos sismológicos, vulcanológicos, meteorológicos e hidrológicos en el territorio nacional;*" y "*Artículo 8o.: Obtener, recopilar, evaluar, analizar, concentrar, publicar y difundir datos e informaciones de carácter sismológico, vulcanológico, meteorológico e hidrológico y disciplinas conexas, sea en forma directa o en cooperación con otras entidades.*"

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Panamá 2014. Geociencias: se cuenta con un plan quinquenal de fortalecimiento del monitoreo sísmico de Panamá (documento del MEF) para el periodo 2010 al 2014, pero este plan no está amparado por alguna normatividad (no cumple la condición). Por su parte, a nivel de eventos hidrometeorológicos, se cuenta con la Ley 6 de 1997 que ordena operar, expandir, mantener y prestar servicios de la red de hidro meteorología y climatología (Artículo 79, numeral 6). Adicionalmente, en la Política Nacional de Cambio Climático se indica como "línea de acción", el "*Fortalecer las redes de observación del clima, para el monitoreo de los parámetros e indicadores del cambio Climático*". Se cuenta además con un programa de modernización y expansión de la red hidrometeorológica a nivel nacional aprobado por ANAM y ETESA con el respectivo Memorándum de Entendimiento suscrito entre ambas instituciones en 2012. En conclusión, a pesar de que en el tema hidrometeorológico se cuenta con normatividad que permite el desarrollo y mantenimiento de las redes de observación y monitoreo, se tiene que a nivel de amenazas geológicas no sucede lo mismo, por lo que no se cumple el indicador.

Código IR-1B-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector ambiental define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad ambiental de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector ambiental y sus políticas, estrategias o planes. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades del sector ambiental de realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector ambiental o de la institución nacional encargada de los asuntos vinculados con el cambio climático. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-6 RR-1B-7 PR-1B-3 RC-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector ambiental de realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector ambiental debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) elaboración de escenarios de impacto del cambio climático; (ii) generación de información y estudios sobre meteorología, y clima; (iii) servicios de información meteorológica.</p> <p>Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.</p> <p>No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de estos tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.</p> <p>Así mismo, no debe confundirse las responsabilidades asignadas al análisis de riesgos ambientales con los relacionados con riesgo de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. La Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, promulgada el 18 de agosto de 2000 (IR-1B-8a), dispone en el Artículo 18 que la *“Corresponden a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales las siguientes funciones: ... 20. Evaluar, dar seguimiento y supervisar el control de los factores de riesgo ambiental y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y ejecutar directamente, o en coordinación con otras instituciones pertinentes, las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos...”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. No explicit evidence was found that supports compliance with this indicator. The National Policy for the Adaptation to Climate Change, approved in 2005, states as one of its goals: “improve knowledge and understanding of, and conduct systematic research and observations on Climate Change issues”. Nevertheless, no regulations were found establishing that the Ministry of Environment & Housing or the BEST Commission should carry out disaster risk analysis or analysis of the adverse effects of climate change within the scope of its powers. Additionally, under the Forestry Act 2010, a Forestry Unit is established with a Director who can under section 4(n): *“promoting and conducting forest research and forest education, and promoting forest extension”*; but there is no reference to risk analysis. This was confirmed in interviews with the Ministry of the Environment and Housing.

Traducción:

Bahamas 2017. No se encontró evidencia explícita que respalde el cumplimiento de este indicador. La Política Nacional para la Adaptación al Cambio Climático, aprobada en 2005, establece como uno de sus objetivos: *“mejorar el conocimiento y la comprensión, y realizar investigaciones y observaciones sistemáticas sobre los problemas del cambio climático”*. Sin embargo, no se encontró normativa que, en el marco de sus facultades, que establezca que el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda o la Comisión BEST deban llevar a cabo análisis de riesgo de desastres o análisis de los efectos adversos del cambio climático. Además, en virtud de la Ley Forestal de 2010, se establece una Unidad Forestal cuyo Director puede, según la sección 4 (n): *“promover y llevar a cabo la investigación forestal y la educación forestal, y promover la extensión forestal”*; pero no hay referencia al análisis de riesgos. Esto se confirmó en entrevistas con el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda.

Código IR-1B-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector agricultura define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad del sector agricultura de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector agricultura y sus políticas, estrategias o planes. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades del sector agricultura para realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector agricultura o de la institución nacional encargada de los asuntos vinculados con el cambio climático 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-8 PR-1B-4 RC-1B-2	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-4	En el caso de verificar la asignación de recursos al sector agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar por la normatividad que faculte dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector agricultura debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) Estudios de riesgo de cultivos frente a evento hidrometeorológicos; (ii) estudios de riesgo hidrológicos en cuencas; (iii) análisis de riesgo en obras de riego.</p> <p>Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.</p> <p>No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.</p> <p>Así mismo, no debe confundirse las responsabilidades asignadas al análisis de riesgos agrícolas, si no se especifica que los mismos están vinculados con desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Argentina 2014. La Ley No. 26.509, que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Emergencia Agropecuaria), promulgada el 27 de agosto del 2009 (IR-1B-9a), fija en el Artículo 1 el objetivo del SNPMEDA es “... *prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales*”. La implementación del SNPMEDA se encuentra a cargo de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Artículo 2). Esta Ley establece además en su Artículo 11 que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos “... *organizará, junto con las jurisdicciones provinciales, las actuaciones que correspondan a efectos de prevenir y reducir los posibles daños por futuras emergencias y/o desastres agropecuarios...*”. Especifica además que, para cumplir con ello, se deberá realizar la “a) *Planificación, organización e implementación de acciones de determinación y/o monitoreo y/o prevención y/o morigeración de los riesgos que puedan derivar en eventuales emergencias y/o desastres agropecuarios, como así también todas las medidas y actividades desarrolladas para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las pérdidas potenciales*”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En el sector agropecuario colombiano, la única norma explícita sobre el tema de riesgos es la Ley 69 de 1993, “*por la cual se establece el Seguro Agropecuario en Colombia, se crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y se dictan otras disposiciones en materia de crédito agropecuario*”. Esta normativa si bien define funciones en relación con los “estudios” de riesgo, se refiere en esencia a los efectos de los eventos naturales en la producción agropecuaria para definir los procedimientos de la póliza de seguro, en este sentido no es una normatividad que promueva el conocimiento del riesgo de forma “ex ante” y por tanto el indicador no se cumple.

Código IR-1B-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10. ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector salud define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad del sector salud de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p> <p>Para este indicador se deben descartar aquellos riesgos de orden epidemiológico o de salud pública.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector salud, la cual también podría incluir las políticas, estrategias y planes sectoriales. 2. Indagar si el país cuenta con un programa o política de “Hospitales Seguros” respaldada por algún documento normativo. 3. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector salud de realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector salud sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-9 PR-1B-5 RC-1B-3	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-5	En el caso de confirmar la asignación de recursos al sector salud para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada del sector salud debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) estudio y elaboración del programa de riesgo sísmico en instituciones hospitalarias; (ii) Capacitación a evaluadores sobre la estrategia de hospitales seguros frente a desastres (aplicación de un índice de seguridad, es decir, evaluación de riesgo para la infraestructura).

Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

Así mismo, no debe confundirse las responsabilidades asignadas al análisis de riesgos sanitarios o de salud pública, si no se especifica que están vinculados con desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2016. La responsabilidad de realizar análisis de riesgo de desastres en el sector se define a través de la Política Nacional de Hospitales Seguros Frente a los Desastres, aprobada por Decreto Supremo N° 009-2010-SA, del 23 de abril 2010 (IR 1B-10a). En dicho documento se incorpora en el numeral 4, propósitos objetivos y estrategias, y se define como Objetivo Específico. 3 el "Mejorar los niveles de seguridad ante desastres en los establecimientos de salud existentes". Asimismo, dentro de este objetivo, se considera como la actividad 1: "Evaluación de las condiciones de seguridad de los establecimientos de salud", esto mediante la aplicación de un índice de seguridad.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2017. La Ley 42-01 General de Salud (IR-1B-10a) en su SECCIÓN IX - De la Prevención y Reducción de los Efectos de los Desastres Sobre la Salud, considera: "Art. 58. - La SESPAS, en coordinación con la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autoridades municipales, y cualquier otra entidad encargada por el Estado para la prevención y enfrentamiento de desastres, llevarán a cabo actividades sobre la prevención o mitigación y preparativos de tratamientos de desastres a fin de enfrentarlos adecuadamente". No obstante, no se menciona en forma específica la responsabilidad de realizar el análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático".

Código IR-1B-11

Pregunta de respuesta cerrada	
11. ¿La normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector vivienda define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad del sector vivienda de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p> <p>Dependiendo del país el sector vivienda puede corresponder a un sub-sector o estar adscrito a un Ministerio o Secretaría de mayor envergadura.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector vivienda, urbanismo y asentamientos humanos, y sus políticas, estrategias o planes. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector vivienda para realizar estudios y análisis de riesgo de desastres. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector vivienda sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-10 PR-1B-6 RC-1B-4	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres.
IR-2-6	En el caso de confirmar la asignación de recursos al sector vivienda para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector vivienda debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) formulación y actualización de estudios territoriales para el análisis de riesgo del nivel urbano; (ii) estudios territoriales de riesgo sísmico para la vivienda; (iii) monitoreo de actividad sísmica, respuesta de suelos y estructura; (iv) elaboración de curvas de vulnerabilidad para diferentes tipos constructivos.

Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. La normatividad del sector vivienda que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias se halla en el Decreto Ejecutivo No. 50-2009, Reglamento de la Ley No.677 “Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda de acceso a la vivienda de interés social”, aprobado el 6 de Julio del 2009, publicado en las Gacetas 140 y 141, del 28 y 29 de Julio del 2009, en sus Artículos 51, 54 y 57, el que establece que: “*los Programas de vivienda... deben incluir dentro de su contenido un capítulo de riesgos*”. El Artículo 58 del Reglamento, que refiere al “contenido de los Subprogramas especiales de ordenación territorial y desarrollo regional o municipal de carácter urbano y/o rural con fines habitacionales”, para lo cual enlista dicho contenido: “*Presentación. 1. Marco jurídico. 2. Congruencia con niveles superiores de planeación. 3. Propósitos y alcances del programa... 4. Diagnóstico y pronóstico: a) El medio físico - natural. b) Aspectos sociales. c) Aspectos económicos, turísticos, comerciales y de servicios e industrial. d) Aspectos territoriales. e) Infraestructura. f) Equipamiento. g) Servicios públicos. h) Aspectos ambientales, conservación del medio ambiente. i) Riesgos en general, fenómenos naturales, siniestros. j) Patrimonio histórico y arqueológico. k) Síntesis del diagnóstico y pronóstico*”. Es decir, dicho subprograma deberá presentar un diagnóstico de riesgos en general. Ese contenido se repite tanto en el programa como el resto de los subprogramas. Lo cual desde luego hace que se cumpla con el indicador. Complementariamente, el Artículo 115, establece que todo proyecto o solución habitacional de carácter concentrado deberá contemplar un programa de gestión de riesgos en aquellas áreas que por su naturaleza así lo requieran y cumplir con la normativa establecida por las diferentes regulaciones establecidas por ley. Para implementación de esta normativa el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), en el año 2016, desarrolló un Manual de procedimientos del sistema de gestión ambiental de proyectos de vivienda de interés social (Documento interno institucional) que define el procedimiento para “Evaluación del Sitio del Proyecto” aplicando el llenado de los histogramas que contiene variables tales como: Sismicidad, Erosión, Deslizamientos, Vulcanismo, Rangos de Pendientes, Calidad del suelo, Hidrología superficial, entre otros relacionados con el análisis de riesgo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. No se encontró evidencia explícita sobre la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en la normatividad del sector vivienda. Se analizó en profundidad la ley de Vivienda, publicada en junio de 2006, y también se analizó el marco normativo relacionado con la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la que depende la nueva Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (función que con antelación ejecutaba La Secretaría de Desarrollo Social y sus órganos desconcentrados como La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). A pesar de existir numerosas referencias a la reducción de riesgos en general, no se encontró ninguna referencia explícita al análisis del riesgo de desastres.

Guatemala 2013. Se revisó la nueva Ley de Vivienda (2012) y no se encontró evidencia de que exista normatividad que defina la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. Cabe destacar que la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Acuerdo Gubernativo N° 163-2004) contempla en la Parte Principal, Capítulo 3. Como Eje Transversal de la Política, el numeral 3. Medio Ambiente y Riesgo. No obstante, dicha Política tampoco define la responsabilidad del sector de realizar análisis de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias.

Código IR-1B-12

Pregunta de respuesta cerrada	
12. ¿La normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector educación define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad del sector educación de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad general del sector educación, así como aquella que pueda existir sobre el diseño y construcción de edificaciones educativas. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector educación para realizar estudios y análisis de riesgo de desastres. 3. Indagar si el país cuenta con un programa o política de “Escuelas Seguras” respaldada por algún documento normativo. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector educación sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-11 PR-1B-7 RC-1B-5	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector educación para realizar análisis de riesgo de desastres.
IR-2-7	En el caso de confirmar la asignación de recursos al sector educación para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector educación debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como la evaluación de los riesgos de desastres en la infraestructura educativa.

Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

Así mismo, no debe confundirse las responsabilidades asignadas al sector educación para incluir al análisis de riesgos y otros componentes de GRD en el currículo escolar.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. El Decreto Ejecutivo N° 36451-MEP de Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública del 7 de febrero de 2001 (IR-1B-12a) contiene: "Artículo 41. funciones del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo... Incisos: ... c) Planificar, coordinar y ejecutar el Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI-MEP). d) Desarrollar, implementar y actualizar una base de datos relacionados al riesgo de desastre y riesgo social en las diversas dependencias del Ministerio de Educación Pública. e) Jerarquizar los centros educativos que se enfrentan a mayores condiciones de desastre y riesgo...".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. No existe normatividad del sector educativo que defina la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias, no obstante a que existen otras normas relacionadas, tales como: (i) la Directiva N° 003-2006-OINFE "Orientaciones y Acciones para Edificaciones de Infraestructura Educativa con Riesgo de Colapso de Muros Libres o Suelos y Parapetos": que busca determinar las acciones necesarias que permitan revertir la situación que enfrentan las instituciones educativas en cuya infraestructura se presentan riesgos de colapso de muros libres o suelos y parapetos. (ii) la Directiva No 094-2003-ME - VMGI, que establece la "Evaluación de la Infraestructura en Centros Educativos y el Uso de Sistema de Información de Infraestructura Educativa SIED": con esta Directiva se dan las bases para contar con un sistema actualizado de información sobre el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional que contenga información levantada por especialistas. (i) la Resolución Viceministerial 0017 que aprueba las normas que establecen la organización y la ejecución de la actividad permanente de Movilización Social, Escuelas Seguras, Limpias y Saludables, y que por lo tanto busca mejorar el entorno educativo en el país.

Código IR-1B-13

Pregunta de respuesta cerrada	
13. ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector turismo define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad del sector turismo de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector turismo, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales de turismo. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector turismo de realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector turismo sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-12 PR-1B-8 RC-1B-6	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector turismo para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-8	En el caso de confirmar la asignación de recursos al sector turismo para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada del sector turismo debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) análisis de riesgo de la infraestructura hotelera en una región turística del país; (ii) análisis de riesgo de zonas de interés turístico.</p> <p>Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.</p> <p>No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Trinidad y Tobago 2018. The Ministry of Tourism at the meeting held with the iGOPP team on 26th July 2017 confirmed the existence of a National Tourism Policy approved in 2010 (RI-1B-13a). In section 4.1 of this policy document it is acknowledged the need for disaster and Climate Change risk assessments: “viii) Develop and implement effective risk assessment and crisis management strategies to deal with any of the symptoms of climate change and other natural disasters”. Unfortunately, the tourism legislation has not kept pace with policy development. Thus, the Tourism Development Act LRO 16/2006 does not mention, disaster, risk or climate change. However, for the shake of the indicator, the policy document is accepted as means of compliance as it is understood that the National Policy complements the Act.

Traducción:

Trinidad y Tobago 2018. El Ministerio de Turismo en la reunión celebrada con el equipo de iGOPP el 26 de julio de 2017, confirmó la existencia de una Política Nacional de Turismo aprobada en 2010 (RI-1B-13a). En la sección 4.1 de ese documento, se reconoce la necesidad de evaluaciones sobre el riesgo de desastres y cambio climático: “viii) Desarrollar e implementar estrategias efectivas de evaluación de riesgos y gestión de crisis para tratar cualquiera de los síntomas del cambio climático y otros desastres naturales”. Lamentablemente, la legislación turística no ha seguido el ritmo del desarrollo de políticas. Por lo tanto, la Ley de Desarrollo del Turismo LRO 16/2006 no menciona desastres, riesgos o cambio climático. No obstante, el documento de política se acepta como medio de cumplimiento, ya que se entiende que la Política Nacional complementa la Ley.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. Los representantes del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), confirman que las acciones del IHT en temas relacionados con la gestión del riesgo de desastres no responden a un mandato normativo, sino más bien a oportunidades que se dan en el quehacer diario del IHT, oportunidades de financiamiento o trabajo colaborativo en el marco del SINAGER. Ejemplos de lo anterior son las Normas Generales para el Control de las Islas de la Bahía.

Código IR-1B-14

Pregunta de respuesta cerrada	
14. ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector transporte, entendido como obras viales, define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Se debe tener presente que para referirse al “análisis del riesgo” la normatividad del sector transporte de cada país puede emplear otra terminología, como por ejemplo “estimación del riesgo”, “identificación del riesgo” u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector transporte, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector transporte de realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector transporte sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-13 PR-1B-9 RC-1B-7	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector transporte para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-9	En el caso de confirmar la asignación de recursos al sector transporte para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector transporte debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) estudios para la identificación del riesgo de desastres en la red de transporte vial; (ii) identificación del riesgo de desastres de obras de arte viales (puentes, alcantarillas, pasarelas, etc).</p> <p>Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.</p> <p>No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. El Plan Estratégico del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) 2009-2024, publicado por el MOPTVDU el 5 de enero de 2012, introduce el *"Enfoque de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático como eje estratégico desde una perspectiva preventiva e integral en todo el ciclo de las obras"*, y establece que *"sus políticas, programas y proyectos abordarán los efectos potenciales y los riesgos asociados al cambio climático, a través de medidas que fomenten la adaptación"*. De la misma manera, plantea que para garantizar que los programas, las políticas y los proyectos que impulsa el Ministerio sean sostenibles frente al cambio climático, y para reducir los riesgos que constituyen para las inversiones en desarrollo asociadas, se deberán cumplir requisitos mínimos, entre los que se incluye: *"Identificación de los riesgos del cambio climático para los programas y proyectos: todos los componentes de los programas y proyectos deben ser revisados con el propósito de determinar si su viabilidad o sostenibilidad a más largo plazo se puede ver amenazada por eventos generados por el cambio climático"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. No se localizó evidencia en la normativa del sector transporte, que defina la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias, el Decreto N° 27917 - MOPT que contiene la Reforma Organizativa y Funcional del Ministerio de Obras Públicas y Transportes del 31 de mayo de 1999, sólo refiere en su Artículo 15- Funciones de obras públicas, inciso e, la obligación de "coordinar" con la Comisión Nacional de Emergencia en los eventos tendientes a la prevención y atención de situaciones de emergencia, pero no establece obligaciones propias del sector para analizar los riesgos.

Paraguay 2016. No se encontraron evidencias al respecto. Se analizaron: (i) Ley N° 167 que aprueba con modificaciones el Decreto - Ley No. 5 de fecha 27 de marzo de 1991 que establece la estructura orgánica y funciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, (ii) Decreto N° 11.670/00 por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley N° 1533/2000 que establece el régimen de obras públicas; y (iii) Decreto N° 1350/14 por el cual se reglamenta la Ley N° 51 02/2013 de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado.

Código IR-1B-15

Pregunta de respuesta cerrada	
15. ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector de agua y saneamiento define responsabilidades para la realización de análisis, identificación del riesgo de desastres, o bien, del estudio acerca de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de ellas puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de agua y saneamiento pueden realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de identificar el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “análisis del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como estimación del riesgo, identificación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector, regulador y proveedores) del sector de agua y saneamiento. 2. Revisar la normatividad vinculada con el sector agua y saneamiento, incluido los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir. 3. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades, al menos para uno de los actores relevantes del sector agua y saneamiento, para realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 4. De ser necesario, consultar con representantes de los actores relevantes del sector agua y saneamiento, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-14 PR-1B-10 RC-1B-8	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades a los actores relevantes del sector agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-10 IR-2-13	En el caso de confirmar la asignación de recursos a alguno de los actores relevantes del sector agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector de agua y saneamiento debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) Análisis de riesgo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento; (ii) Evaluación del riesgo de los componentes críticos de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento; (iii) Análisis de riesgo sísmico de los servicios de agua y saneamiento.

Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. El Plan Estratégico Institucional 2007-2015. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (IR-1B-15a) considera en su numeral 1.3. Sub-Gerencia Ambiental, Desarrollo e Investigación, "... 9. Realizar un análisis de gestión del riesgo en la infraestructura de los sistemas en operación relevantes y del uso del recurso hídrico (Superficial subterráneo), a efectos de planificar las medidas de prevención, control o mitigación." "2.4. Políticas ... Gestión del Riesgo. El AyA implementará toda su gestión fortaleciendo el análisis del riesgo, mediante la integración de actividades de prevención, mitigación y reconstrucción, con las de conservación, vigilancia y control del recurso hídrico, así como en la infraestructura instalada y en cualquiera otra actividad propia del quehacer institucional. Además, elaborará el Plan de Valoración del Riesgo, el cual contendrá la metodología y la normativa al respecto, así como el Plan de establecimiento y funcionamiento del Sistema de Valoración del Riesgo (SEVRI) para AyA y su respectivo plan de capacitación integral para la culturización e implementación de este". Asimismo, considera bajo los conceptos de "Gestión Empresarial. ... Acciones Estratégicas: ... "2. Guiar y dirigir la gestión empresarial con énfasis en la atención al cliente, la rendición de cuentas, el manejo eficiente de los recursos y la identificación y minimización de los riesgos en la prestación de los servicios, garantizando la sostenibilidad financiera..." y "Desarrollo Institucional y... Acciones Estratégicas: ...5. Fortalecer el Sistema de Control Interno y de Valoración de Riesgos Institucionales".

Nicaragua 2016. La Guía Técnica para la Reducción de la Vulnerabilidad en Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, publicada en el 2000 y actualizada en el periodo 2008-2010, por el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), que funge como ente regulador de la prestación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (según el Artículo 3 de la Ley General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario). En dicha actualización introduce la gestión del riesgo en la planificación de los proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las fases del ciclo del proyecto: Estudio de Pre-factibilidad, Factibilidad, Construcción y Operación con la finalidad de reducir el riesgo y la vulnerabilidad de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. En la Sección B: Guía Técnica, en el apartado 2, Marco Conceptual de la Gestión de Riesgos, incluye en el numeral 2.1 la Metodología para la Evaluación del Riesgo, en el que evalúa tanto la amenaza como la vulnerabilidad. Respecto de la Evaluación de Amenazas dice que *"Se realiza a través de inventarios de fenómenos realizados de forma participativa con las municipalidades, los líderes comunales y la población; observaciones y mediciones de campo, análisis y revisión de información científica disponible (mapas, fotos aéreas, informes, etc.), con el fin de conocer la probable ubicación y severidad de los fenómenos naturales peligrosos, así como la probabilidad de que ocurran en un tiempo y área específica". Y tiene como resultado "...la elaboración de un mapa de amenazas, el cual representa un elemento clave para la planificación del uso del territorio y constituye un insumo imprescindible para la evaluación de los riesgos actuales y potenciales"*. Esto se complementa con la "Metodología de Pre-inversión de Proyectos de Agua y Saneamiento" de la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), rector del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), publicada en el 2013. Esta Metodología propone que los perfiles de proyectos deben contar con un "Diagnóstico de la situación actual" que incluya las características del área geográfica en que se localiza actualmente la unidad prestadora de servicios (o unidad productiva, si es que existe), y el sitio en que podría localizarse el proyecto; así como el área en que se localiza la población beneficiada (área de influencia). Deben estudiarse aspectos geográficos, físicos, climáticos, económicos, y sociales. El análisis del área de influencia debe incorporar la identificación de peligros o amenazas existentes, y de reciente ocurrencia.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Panamá 2014. El Marco Regulatorio del sector se plasma en el Decreto Ley 2 del 7 de enero de 1997, modificado por la Ley 77 del 28 diciembre del 2001, del IDAAN. La prestación del servicio de agua potable, en aéreas urbanas, la brinda IDAAN (Instituto de Acueductos y Alcantarillados), y se permite la participación de terceros en áreas donde IDAAN no puede prestar el servicio (se dan licencias temporales). Para las aéreas rurales, el Ministerio de Salud organiza la construcción de acueductos y ayuda a la comunidad. La norma de la IDANN no incluye el tema de conocimiento del riesgo de forma explícita. A nivel rural asigna responsabilidades a MINSA. En la Ley no hay ninguna referencia a GRD.

Guatemala 2013. Las competencias relacionadas con este sector están bajo la órbita de los municipios, y es la normatividad para las unidades de gestión territorial la primera referencia para evaluar la condición que indaga el indicador. En ese sentido, el Código Municipal creado por (Decreto N° 12-2002) y sus reformas generadas mediante el (Decreto N° 22-2010), no define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias, ya que sólo refiere en el Artículo 147 en lo referente a agua potable y alcantarillado y drenajes generales la obligación de las municipalidades de formular y efectuar planes de ordenamiento territorial, de desarrollo integral y planificación urbana, y en su artículo 53, sobre las atribuciones del alcalde quien preside el Consejo Municipal refiere: *" j) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o desastres o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias, dando cuenta inmediata al pleno del Concejo Municipal"*. Por otro lado, el Instituto de Fomento Municipal (INFOM) es el encargado de ejecutar los proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los municipios. La Ley Orgánica del INFOM (Decreto No. 1132 del 15 de febrero de 1957) no define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias, sin embargo, los proyectos son préstamos y donaciones y en esa medida se podría hacer algún análisis dependiendo de las condiciones de éstos.

Código IR-1B-16

Pregunta de respuesta cerrada	
16. <i>¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el marco normativo del sector telecomunicaciones define responsabilidades para la realización de análisis, identificación del riesgo de desastre, o bien, del estudio acerca de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Debe considerarse que, en algunos países, en el sector telecomunicaciones (entendido que incluya al menos los servicios de telefonía) participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso hay casos en los que la prestación de los servicios de telecomunicaciones puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de identificar el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirla.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “análisis del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como estimación del riesgo, identificación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector, regulador y proveedores) del sector telecomunicaciones. 2. Revisar la normatividad vinculada con el sector telecomunicaciones, incluido los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir. 3. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al menos a algunos de los actores relevantes del sector telecomunicaciones de realizar estudios y análisis de riesgo de desastres o sobre los efectos adversos del cambio climático. 4. De ser necesario, consultar con representantes de los actores relevantes del sector telecomunicaciones, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-15 PR-1B-11 RC-1B-9	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades a los actores relevantes del sector telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-11 IR-2-15	En el caso de confirmar la asignación de recursos a alguno de los actores relevantes del sector telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada del sector telecomunicaciones debe establecer de manera explícita competencias para realizar actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, tales como: (i) Análisis de riesgo de los prestadores de servicios de telecomunicaciones; (ii) Evaluación de riesgo de los componentes críticos de los servicios de telecomunicaciones; (iii) Análisis de riesgo sísmico para infraestructura crítica de los servicios de telecomunicaciones.

Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Brasil 2017. A RESOLUÇÃO Nº 656, DE 17 DE AGOSTO DE 2015, que Aprova o Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de Telecomunicações e Uso de Serviços de Telecomunicações em Desastres, Situações de Emergência e Estado de Calamidade Pública, no TÍTULO III DAS MEDIDAS DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA PARA DESASTRES, SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, no CAPÍTULO I DAS MEDIDAS DE PREPARAÇÃO, estabelece no Art. 12. que *"As prestadoras abrangidas por este Regulamento deverão elaborar e manter Plano de Contingência para as áreas de risco de desastres mapeadas, devendo colocá-lo em prática na ocorrência do desastre"*. Bem como no TÍTULO I das DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO I, DO OBJETIVO E DA ABRANGÊNCIA, no Art. 3º define que *"As prestadoras são integralmente responsáveis pelos ônus decorrentes da adoção e execução do processo de gestão de riscos e das medidas de preparação e de resposta para desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública"*, subentendendo-se no texto, através da expressão gestão de riscos a responsabilidade de realizar análises de risco de desastres ou efeitos adversos das mudanças climáticas no âmbito de suas competências, entretanto não deixando explícito a responsabilidade. Ainda no mesmo decreto, no parágrafo VI - do "Processo de Gestão de Riscos", define a *"aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análises crítica dos riscos"*.

Traducción;

Brasil 2017. La RESOLUCIÓN N° 656 DE 17 DE AGOSTO DE 2015, por la que se aprueba el Reglamento sobre Gestión de Riesgos de Redes de Telecomunicaciones y uso de Servicios de Telecomunicaciones en Casos de Desastre, Situaciones de Emergencia y Estado de Desastre Público, en el TÍTULO III DE LAS MEDIDAS DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA DESASTRES, SITUACIONES DE EMERGENCIA O CALAMIDAD PÚBLICA, en el CAPÍTULO I, MEDIDAS DE PREPARACIÓN, establece en el Artículo 12. "Los proveedores cubiertos por este Reglamento deberán preparar y mantener el Plan de Contingencia para áreas de riesgo mapeó los desastres y los pondrá en práctica en caso de desastre". Además del TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I, PROPÓSITO Y ALCANCE, el Artículo 3 establece que: "Los proveedores son totalmente responsables de adopción e implementación del proceso de gestión de riesgos y medidas de preparación y respuesta ante desastres, situación de emergencia o Estado del desastre público", lo que significa en el texto, a través de la expresión gestión de riesgos, la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de riesgos de desastres o efectos adversos del cambio climático dentro del alcance de sus competencias, sin dejar ninguna responsabilidad explícita. También en el mismo decreto, en el párrafo VI del "Proceso de gestión de riesgos", se define la "aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para la comunicación, consulta, establecimiento de contexto, y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y análisis crítico de los riesgos".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el ente regulador del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de acuerdo con la Ley N° 642/05 de Telecomunicaciones, aprobada en fecha 21 de mayo de 1995, en la cual no se asignan responsabilidades específicas sobre la realización de estudios de identificación del riesgo en este sector. Además se consultaron los documentos normativos: (i) Resolución N° 1232/2003 por la cual se aprueba el Reglamento de calidad de servicio para el servicio telefónico, aprobado por la CONATEL el 23 de octubre de 2003 y publicada en la Gaceta Oficial N°2016; y el (ii) Plan Nacional de Telecomunicaciones para el periodo 2016 -2020, aprobado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por Resolución 244 del 24 de febrero de 2016 y publicada en la Gaceta Oficial N°38, sin encontrar evidencia de cumplimiento del indicador. El incumplimiento de este indicador fue ratificado durante entrevistas con personal de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Código IR-1B-17

Pregunta de respuesta cerrada	
17. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca confirmar si el marco normativo del sector energía, entendido como energía eléctrica, define responsabilidades para la realización de análisis del riesgo de desastres, o bien, de los efectos adversos del cambio climático en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador reconoce que cada sector debe tener la obligación de implementar sus correspondientes responsabilidades en los componentes relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) o de la adaptación al cambio climático (CC), en particular en lo que se refiere a la identificación del riesgo o de los efectos adversos del cambio climático.</p> <p>Debe considerarse que, en algunos países, en el sector energía participan varias instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Así mismo, podrían existir instituciones responsables de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, y cada una de ellas podría tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de energía puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de identificar el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que debe cumplirla.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “análisis del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como estimación del riesgo, identificación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector, regulador) del sector energía. 2. Identificar a las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 3. Revisar la normatividad vinculada con el sector energía, incluido los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir, y verificar si establece responsabilidades de realizar actividades de análisis de riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático. 4. De ser necesario, consultar con representantes de los actores relevantes del sector energía, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-16 PR-1B-12 PR-1B-15 RC-1B-10	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades a los actores relevantes del sector energía para realizar análisis de riesgo de desastres o los efectos adversos del CC.
IR-2-12 IR-2-14	En el caso de confirmar la asignación de recursos a alguno de los actores relevantes del sector energía para realizar análisis de riesgo de desastres, indagar la normatividad que permite dicha asignación.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, se debe dar algunas de las condiciones que se detallan a continuación:

- El marco normativo aplicable al menos uno de los actores relevantes del sector de energía (ente rector o regulador), debe establecer responsabilidades y funciones para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático en su ámbito de competencias, o
- Que exista normatividad que establezca responsabilidades y funciones para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático para cada una de las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Entre las actividades de análisis del riesgo de desastre, o bien, de los efectos adversos del cambio climático, pueden ser del tipo: (i) Análisis de riesgo de los prestadores de servicios de energía; (ii) Evaluación de riesgo de la infraestructura crítica de los servicios de energía; (iii) Análisis de riesgo sísmico para infraestructura crítica de los servicios de energía.

Si en la normatividad se asignaran responsabilidades generales para la GRD, deberá constar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Uruguay 2015. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), es la empresa propiedad del Estado uruguayo que se dedica a las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, prestación de servicios anexos y consultoría. La UTE aprobó el 14 de junio de 2014, mediante Resolución del Consejo Directivo No. 94-1039 (IR-1-17a), la "Política de Gestión de Riesgos y el Marco Metodológico" (IR-1B-17b). Dicha Política considera como riesgos a todos aquellos eventos potenciales que puedan afectar negativamente el logro de los principales objetivos de negocio de la empresa, incluyendo los "riesgos medioambientales". La Política establece que la Gestión de Riesgos incluirá como mínimo: i) La identificación de los riesgos relevantes, según la definición previa, teniendo en cuenta los principales objetivos de negocio; ii) el análisis de dichos riesgos, evaluando su probabilidad de ocurrencia y su potencial impacto para la empresa (en términos de pérdidas económicas, incumplimientos regulatorios, problemas de imagen, daños y perjuicios para el personal, fallas en la provisión del servicio o atención al cliente, etc.).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica no contiene disposiciones específicas relacionadas con la responsabilidad de realizar un análisis de riesgo de desastres o efectos adversos del cambio climático para el sector; la única referencia está encaminada a verificar la factibilidad de dotación de servicios de electricidad en base a documento técnico emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Art.65).

Código IR-1B-18

Pregunta de respuesta cerrada	
18. <i>¿Existe normatividad nacional que defina cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce como buena práctica que haya normatividad nacional que defina a determinadas edificaciones o infraestructuras como esenciales, indispensables o críticas, por su importancia vital y estratégica en casos de emergencia o desastre, ya sea por los servicios esenciales que prestan a la sociedad, por su importancia estratégica en el desarrollo del país o por su especial utilidad en tareas de emergencia.</p> <p>Esta clasificación como esenciales, indispensables o críticas implica que deban diseñarse, construirse y recibir mantenimiento aplicando parámetros de mayor exigencia que el resto de las edificaciones, de tal manera que aseguren su seguridad y funcionalidad en cualquier tiempo y circunstancia.</p> <p>Ejemplos de edificaciones que suelen considerarse como esenciales o indispensables son los hospitales, estaciones de bomberos, de policía, del ejército y escuelas. Como infraestructura crítica se suelen considerar puertos (aéreos, marítimos o fluviales), vías principales, los sistemas de telecomunicaciones, energía, agua y saneamientos, entre otros.</p> <p>Generalmente esta definición de infraestructura crítica suele incluirse en la normatividad de GRD, en la normatividad general de construcción o en los códigos de construcción sismo-resistentes, aunque también podrían ser definidas en normas de construcción relacionadas con otros fenómenos naturales, o en otras normas relativas a la continuidad de operación del estado o a temas relacionados con seguridad.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad de GRD, normatividad vinculada con el diseño y la construcción de edificaciones e infraestructuras, en especial los códigos de diseño sismo-resistente, contra vientos u otros fenómenos, o la normatividad relacionada con la continuidad de operación del estado o en la de seguridad. 2. Analizar si en dicha normatividad se han determinado qué edificaciones o infraestructura son consideradas críticas, indispensables o esenciales, y por lo tanto sujetas a parámetros de construcción más exigentes, a diferencia de otras edificaciones regulares. 3. De ser necesario, consultar directamente a representantes de asociaciones de profesionales de ingenieros o arquitectos, así como al ente rector del sistema de GRD, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 RR-1A-3 RR-1B-3 RR-1B-4	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la definición de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe establecer la noción de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica del país.

En la justificación se deberá incluir el texto de la normatividad que contenga la definición de este tipo de infraestructura, y si lo hubiera, el listado de las edificaciones, infraestructura y servicios considerados en dicha definición.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. En la Norma Técnica de Edificación E.30 Diseño Sismorresistente, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 079-2003-Vivienda, del 2 de abril de 2003 (IR 1B-18a), la que dispone de diversas actualizaciones y cuya última versión se encuentra contenida en el Decreto Supremo N° 017-2012-Vivienda, se define en su artículo 10, la categoría de las edificaciones, y contiene la tabla identificada como No. 3, en cuya categoría A Edificaciones Esenciales describe: *"Edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de que ocurra un sismo, como hospitales, centrales de comunicaciones, cuarteles de bomberos y policía, subestaciones eléctricas, reservorios de agua, centros educativos y edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. También se incluyen edificaciones cuyo colapso puede representar un riesgo adicional, como grandes hornos, depósitos o materiales inflamables o tóxicos".*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belice 2017. The Belize Building Act Chapter 131 of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011 does not include any definitions of essential buildings or critical infrastructure. During interviews with the Ministry of Housing and Urban Development and the Central Building Authority, both regulated by the Housing And Town Planning Act Chapter 182 of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, it was specifically stated that no building code exists for Belize and building codes officially accepted by other countries are allowed. As a recommendation, the Central Building Authority advises the use of the Caribbean Uniform Building Code. Furthermore, it was specifically stated that no official definition of critical infrastructure has been developed. In the absence of regulation within the concerned Acts, the condition is not met.

Traducción:

Belice 2017. La Ley de Construcción de Belice, Capítulo 131, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, no incluye ninguna definición de edificios esenciales o infraestructura crítica. Durante las entrevistas con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y la Autoridad Central de Construcción, ambas reguladas por el Capítulo 182 de la Ley de Vivienda y Planificación Urbana, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada de 2011, se afirmó específicamente que no existe un código de construcción para Belice y Se permiten códigos de construcción aceptados oficialmente por otros países. Como recomendación, la Autoridad Central de Construcción recomienda el uso del Código de Construcción Uniforme del Caribe. Además, se afirmó específicamente que no se ha desarrollado una definición oficial de infraestructura crítica. En ausencia de regulación dentro de las leyes en cuestión, la condición no se cumple.

Código IR-1C-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿La normatividad nacional de gestión del riesgo de desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la evaluación del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador se refiere a un atributo de calidad de la normatividad nacional de GRD, por el que se reconoce la importancia de que la gestión del riesgo de desastres sea ejecutada no sólo desde el gobierno nacional, central o federal, sino que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) tengan competencias para el cumplimiento de determinadas funciones de gestión local del riesgo y que éstas sean acordes con sus funciones, recursos y capacidades.</p> <p>En este sentido, el presente indicador valora que la normatividad de GRD existente en el país asigne competencias a las UGT en materia de análisis de los riesgos de desastre en el ámbito de sus territorios (ya sean regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.).</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “análisis del riesgo” pueden ser referidas usando otros términos tales como evaluación de riesgos, estimación del riesgo, identificación del riesgo u otros similares.</p> <p>En este indicador hay que considerar que las UGT en cada país tienen una serie de particularidades respecto de su régimen político-administrativo. Aunque la mayoría de los países se ubican en el régimen descentralizado, los procesos de descentralización varían notablemente. Por otro lado, en los países federados las UGT también presentan diferentes grados de autonomía y soberanía. Cualquiera que sea el caso, hay que determinar cuál es la normatividad de GRD a la que le corresponde definir el papel de las UGT dentro de los componentes de la GRD, para luego determinar si esa normatividad dispone que éstas realicen labores de evaluación del riesgo en sus propios territorios.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las UGT existentes en el país que tengan asignadas competencias en el uso del suelo y ordenamiento territorial. 2. Identificar la normatividad nacional específica de GRD. 3. Analizar si en dicha normatividad de GRD (la identificada en el paso 2) se asignan de forma expresa competencias para la identificación, estimación o análisis del riesgo de desastres a las UGT identificadas en el paso 1. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 RR-1C-1 PR-1C-3	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades a las UGT para realizar análisis de riesgo de desastres en sus respectivos territorios
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad de GRD identificada deberá establecer de manera explícita a las UGT que tengan asignadas competencias en el uso suelo y ordenamiento territorial, responsabilidades sobre el componente o actividades de análisis, identificación o estimación del riesgo de desastres en sus respectivos territorios.

Si en la normatividad se asignaran a dichas UGT responsabilidades generales para la GRD, se deberá constatar en la justificación que el análisis de riesgo es parte del alcance y componentes del concepto de GRD que esté definido en la normatividad.

Si la normatividad identificada no asignara responsabilidades diferenciadas para cada uno de los niveles de UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador se cumplirá si al menos se asignan dichas responsabilidades para la unidad de gestión territorial de menor jerarquía (municipio o equivalente) existente en el país que tiene asignadas competencias en el uso y ordenación del suelo.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas, de la exposición o de la vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. El Decreto No. 874-09, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley No.147-02, sobre Gestión del Riesgos, del 30 Noviembre de 2009 (IR-1C-1a), establece en su Artículo 14, Comités Regionales, Provinciales y Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres; que *"La regionalización administrativa es el instrumento de coordinación de acciones de Prevención, Mitigación y Respuesta que permite y garantiza la mayor eficiencia en la respuesta y en la implementación de los planes sostenibles en gestión de riesgos, establecidos en este reglamento... Será competencia de los Comités Regionales, Provinciales y Municipales, la organización de las labores de PMR en sus respectivas demarcaciones, tales como:... 4) Apoyar técnicamente la identificación de riesgos, evaluación de su magnitud y formulación de alternativas de solución. Para ello deberá contar con la asesoría del Comité Técnico Nacional en Prevención y Mitigación de Riesgos. 5) Apoyar e impulsar la identificación de asentamientos humanos en zonas de riesgo y promover la consecución de recursos para el mejoramiento de sus condiciones o su reubicación..."*.

Bolivia 2015. La Ley N° 113 /2013-2014, LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2014 (IR-1C-1a) establece en el Título II, Capítulo I, Artículo 21 (GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL): *"A partir de las directrices emanadas del nivel central del Estado: a) Las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias deben incorporar parámetros básicos de identificación, evaluación, medición y zonificación de áreas con grados de vulnerabilidad y/o riesgo, con el propósito de emitir normas de prohibición de asentamientos humanos y actividad económica social en estas áreas, siendo el objetivo proteger la vida, los medios de vida y la infraestructura urbana y/o rural."* Adicionalmente, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, Ley No. 031, promulgada el 19 julio de 2010, establece en el Artículo 100 (GESTIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES), dentro de la responsabilidades de los Departamentos y de los Municipios: *"Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, monitorearlos, comunicarlos en el ámbito (municipal/ departamental) y reportarlos hacia el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (SISRADE)."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. No se cumple con la condición. El Reglamento de la Ley de la CONRED aprobado por Acuerdo N° 49-2012, en el Capítulo V Prevención y Mitigación de Desastres, Artículo 82. Proyectos de Prevención y Mitigación establece que: "*La Secretaría Ejecutiva, el Consejo Científico y las Coordinadoras Regionales, Departamentales, Municipales y Locales, implementarán e impulsarán proyectos de prevención y mitigación de desastres de conformidad con los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que se realicen*". No obstante, no hace referencia a responsabilidades de las unidades de gestión territorial en materia específica de realización de dichos estudios. Se aclara que las coordinadoras mencionadas son estructuras de la SE-CONRED en los niveles territoriales, y por tanto son diferentes de lo que en el glosario del iGOPP se define por unidades de gestión territorial.

Código IR-1C-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad que determine escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben zonificar las amenazas o riesgos en el territorio, o bien que designe un actor nacional responsable de definir la escala o resolución en que se debe realizar el análisis de riesgo para los diferentes niveles de gobierno?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Para que los resultados de análisis del riesgo sean de utilidad para las actividades de reducción del riesgo, dicho análisis debe ser elaborado a una escala o nivel de resolución apropiada que facilite la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial o de inversión pública, que son fundamentales para la reducción del riesgo.</p> <p>Para efectos del presente indicador no se busca un valor de referencia de resolución o una escala determinada, sino el establecimiento mediante normatividad de dotar a los mapas de amenazas o de riesgos de un valor apropiado para sustentar la toma de decisiones. En ausencia de la determinación de escalas de trabajo o niveles de resolución, se deberá indagar si la normatividad determina un actor institucional que tenga la facultad, dentro de su nivel de competencias, de establecer dichas escalas o niveles de resolución en función de los diferentes niveles de gobierno. Esto permitiría que los mapas y estudios que generen los institutos o servicios nacionales sean de utilidad práctica para los niveles de gobierno que deban formular los planes de ordenamiento territorial, de manejo integrado de cuencas o similares, así como los planes o programas para la prevención o reducción de riesgos.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar si la normatividad de ordenamiento territorial (o proceso equivalente) aborda el tema de las escalas o nivel de resolución en que se debe generar la información de base para el análisis de riesgo de desastre. 2. Analizar si la normativa nacional de GRD establece las escalas o niveles de resolución para el análisis del riesgo de desastres o proceso equivalente en el país. 3. Analizar si la normatividad que rige a los institutos hidrometeorológicos o geofísicos, la de infraestructura de datos espaciales, o la de estudios territoriales o ambientales, designa a un actor nacional como responsable de definir dichas escalas de trabajo o niveles de resolución considerando los diferentes niveles de gobierno. 4. De ser necesario, consultar con representantes de instituciones vinculadas con la normatividad de ordenamiento territorial, institutos hidrometeorológicos o geofísicos, o la de infraestructura de datos, así como del ente rector del sistema de GRD, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1A-1	De existir un actor nacional responsable de brindar asistencia técnica y lineamientos a niveles territoriales para el análisis del riesgo de desastres, verificar si se han desarrollado guías o lineamientos que permitan verificar el presente indicador.
IR-1A-3	Verificar si la normatividad o lineamientos del funcionamiento del sistema de información para la gestión del riesgo de desastres incluyen las consideraciones que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

La verificación del presente indicador se podrá dar con el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones:

- Existencia de normatividad de carácter nacional que defina las escalas de trabajo o niveles de resolución en que se deben zonificar (mapas) las amenazas o riesgos en el territorio.
- Existencia de normatividad que señale a una instancia nacional encargada de establecer las escalas de trabajo o niveles de resolución con que se deben formular los mapas o planes de ordenamiento territorial, de manejo integrado de cuencas hidrográficas o de procesos de planificación ambiental.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N° 113 /2013-2014, LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS, aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2014 (IR-1A-3a), establece en el Título 1, Capítulo II; Sección II, Artículo 16 (ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO), literal f): *“En coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ministerio cabeza de sector, establecer lineamientos y directrices que permitan evaluar el riesgo en proyectos sectoriales del nivel central del Estado”*. Mas adelante, en el Artículo 18. (OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL NIVEL CENTRAL DEL ESTADO EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS). Se establece que los ministerios y las instituciones públicas en materia de gestión de riesgos deben: *“a) Incorporar la gestión de riesgos en los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes sectoriales, sean estos en el nivel nacional, departamental, regional, municipal o indígena originario campesino, según corresponda...”*, introduciendo con carácter obligatorio y preferente, acciones y recursos para la gestión de riesgos, con énfasis, en la reducción de riesgos a través de la prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción, en el marco de los lineamientos estratégicos y directrices formulados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, como ente rector de la planificación integral del Estado. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (actualmente Ministerio de Planificación del Desarrollo) formuló la Guía Metodológica para la Formulación de los Planes Departamentales de Ordenamiento Territorial (IR-1C-2b), que la sección 4.3. Planes de Ordenamiento Territorial, numeral 3 (niveles de planificación), establece que *“... el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial debe incluir mapas a escala de trabajo 1:1,000,000; que el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial incluye mapas a escala de trabajo 1:250,000 o 1:500,000 y que el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial incluye mapas a escala de trabajo 1:100,000 y 1:50,000”*. De lo anterior se desprende que dado que los mapas de riesgo están integrados en los planes de ordenamiento territoriales los mismos se deben ajustar a las distintas escalas establecidas en los lineamientos metodológicos antes mencionados.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. No existe ninguna norma que de forma expresa indique un responsable de definir la escala en que se realiza el análisis de riesgo. El 26 de diciembre de 2012 se aprobó la Resolución Ministerial N° 334-2012-PCM, según la cual se *“aprueban los lineamientos técnicos del proceso de estimación del riesgo”*. En estos lineamientos se especifica el procedimiento para realizar el *“análisis de riesgo”* de un área geográfica en particular, pero no se define de forma explícita la escala de trabajo. Por otra parte, en el contexto de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDEP) se está trabajando en un formato de Metadatos que se espera avance en la definición de los atributos de la información que se genere para el tema de riesgos, entre éstos la escala y su resolución.

Código IR-1C-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de la zonificación de amenazas en ciudades?	
Descripción general del indicador	
<p>A partir de la identificación y análisis de las amenazas naturales, es factible definir o delimitar áreas de mayor o menor incidencia mediante el uso de tecnologías como la percepción remota (uso y manejo de imágenes de satélite), el sistema de posicionamiento global (GPS), los sistemas de información geográfica (SIG) y otros sistemas. Con la identificación de las amenazas y su interpretación, la información temática debe cruzarse con la traza urbana al nivel de calles, de manzanas, predios, o al menos al nivel de barrios, para definir una microzonificación.</p> <p>De esta manera la zonificación de las amenazas (o peligros) en las ciudades es clave para los procesos subsiguientes de identificación de elementos expuestos y su vulnerabilidad, así como para la planificación del uso del suelo y ordenamiento territorial de una manera sostenible y resiliente.</p> <p>El indicador busca determinar si en el país se ha considerado la obligatoriedad de la identificación y análisis de las amenazas naturales en ciudades, para su consideración en los procesos de planificación urbana.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad vigente de GRD, ordenamiento territorial o equivalente. 2. Identificar la normatividad existente sobre diseño de edificaciones o desarrollo urbanístico. 3. Analizar en la normatividad identificada, si se ha designado la obligatoriedad de zonificar, en las ciudades, las áreas sujetas a amenazas (o peligros). 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1C-1	De existir normativa que establezca responsabilidades para la evaluación del riesgo de desastres, en la misma se podría incluir la de realizar zonificación de amenazas o peligros naturales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador se deberá confirmar la existencia de normatividad vigente de carácter nacional que establezca la obligatoriedad de realizar la zonificación para al menos una amenaza (peligro) en ciudades o asentamientos humanos.</p> <p>En la justificación se deberá explicitar las amenazas para las cuales se debe realizar la zonificación, así como profundizar los objetivos y restricciones a las cuales quedarán sujetas las zonas identificadas.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Ecuador 2016. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (IR-1C-3) en el artículo 11 sobre alcance del componente del ordenamiento territorial, dispone en el literal 3, que *"los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y metropolitanos, de acuerdo con lo determinado en esta Ley, clasificarán todo el suelo cantonal o distrital, en urbano y rural y definirán el uso y la gestión del suelo. Además, identificarán los riesgos naturales y antrópicos de ámbito cantonal o distrital, fomentarán la calidad ambiental, la seguridad, la cohesión social y la accesibilidad del medio urbano y rural, y establecerán las debidas garantías para la movilidad y el acceso a los servicios básicos y a los espacios públicos de toda la población"*. La misma ley en la segunda disposición reformativa, numeral 13, que sustituye el artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, respecto de los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que deben formular y aprobar todos los niveles de gobierno, incluidos los cantonales (ciudades), establece en el literal 3 *"La identificación de las actividades económico- productivas, zonas de riesgo, patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la circunscripción territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado"*.

Barbados 2018. The Emergency Management Act (RI-1C-3) specifies regulations that establish the obligation to conduct hazard zoning in disaster-prone cities in Part VI, 17 (2) *"The Minister may , on the recommendation of the Director, (a) designate vulnerable areas or critical infrastructure for the purposes of emergency management by delimiting such areas or infrastructure under this section"*.

Traducción:

Barbados 2018. La Ley de Manejo de Emergencias (RI-1C-3), especifica las regulaciones que establecen la obligación de llevar a cabo la zonificación de riesgos en ciudades propensas a desastres en la Parte VI, 17 (2): *"El Ministro puede, por recomendación del Director, (a) designar áreas vulnerables o infraestructura crítica para el manejo de emergencias delimitando tales áreas o infraestructura bajo esta sección"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. En el caso de amenaza sísmica el INPRES, institución creada por Ley N° 19.616 de 1972, establece una "zonificación sísmica nacional" que indica 5 zonas diferentes en el país; por ejemplo, la zona centro-sur de la provincia de San Juan y el norte de Mendoza están definidas como áreas de peligrosidad muy elevada (la más alta del país); el norte de San Juan y centro de Mendoza en zona de peligrosidad elevada y hacia el sur de Mendoza la peligrosidad disminuye de moderada a reducida. No obstante, la situación mínima requerida para considerar la condición positiva no se cumple, ya que no se registran normativas de alcance nacional que ordenen explícitamente la zonificación sísmica de ciudades (o al menos a nivel de microescalas).

Código IR-2-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Se integra la temática de riesgo de desastres en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca verificar la integración de la temática del riesgo de desastres en los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario, o niveles equivalentes en cada país, lo cual contribuye a construir una cultura de gestión del riesgo de desastres y, por ende, al autocuidado y resiliencia de las personas y comunidades.</p> <p>En algunos países, la definición y desarrollo de los programas curriculares de los niveles básico y secundario (o equivalentes) son definidos a nivel nacional, central o federal, dependiendo del modelo político-administrativo. Sin embargo, en otros casos (por ejemplo, en donde prevalecen los niveles territoriales descentralizados), la definición de los programas curriculares y planes de estudio son definidos de manera descentralizada. En este último caso, para cumplir el indicador es necesario que la temática de la GRD esté integrada en los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario de todas las UGT. En este sentido, bastaría que un solo territorio no cumpliera con esta integración para considerar el indicador como incumplido.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad del sector educación, programas curriculares, planes de estudio o similares para verificar si el programa curricular del nivel básico o secundario incorpora la GRD (puede ser como un componente específico en GRD o como un subcomponente de la educación ambiental o de ciencias sociales). 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector educación de las áreas relativas al desarrollo curricular o dependencia ministerial encargada de la temática de GRD sobre la existencia de programas curriculares que permitan validar este indicador. 3. Confirmar, en el caso de que la competencia del desarrollo curricular esté transferida a las UGT, si en el programa curricular de al menos una UGT no se ha incorporado el tema en sus programas curriculares. En caso de que se haya transferido esta competencia a las UGT, bastaría con encontrar un caso de incumplimiento por una UGT para dar por incumplido el indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-2-2	Revisar si la normatividad utilizada para verificar este indicador considera la integración de la GRD en el plan de estudios de primaria o secundaria.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, se deberá demostrar la integración explícita de la temática de la GRD en los programas curriculares de primaria o secundaria a nivel nacional o bien a nivel de todos las UGT (si esta competencia ha sido transferida del nivel nacional al territorial). En ese último caso, si se identifica al menos una UGT que no ha incorporado el tema en sus programas curriculares entonces no se logrará verificar positivamente este indicador.</p> <p>En la justificación debe quedar reflejada de forma resumida los principales aspectos y componentes de la GRD que han sido incluidos en los programas curriculares de primaria y/o secundaria.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. El Eje Integrador del Subsistema de Educación Básico: Ambiente y Salud Integral: *“Fomenta y valora un estilo de vida tendente a la prevención de riesgos, mediante la formación integral y la educación para la vida, construyendo conocimientos y herramientas que permitan desarrollar una cultura sanitaria como base para la Salud Integral de las personas, familias y comunidades en el marco de la promoción de la Salud”* y. Currículo del Subsistema de Educación Primaria Bolivariano publicado en 2011 (IR-2-1a). 2- Perfil del egresado y la egresada del subsistema: Habilidades para detectar los factores de riesgo ante amenazas naturales o provocadas. *“4.5.3- Tercer grado. ÁREA DE APRENDIZAJE CIENCIAS SOCIALES, CIUDADANÍA E IDENTIDAD. Componente: la ciudadanía y la identidad como elementos de creación de la sociedad. La gestión de riesgo: desarrollo de un plan de evacuación, en situaciones sencillas. Estudio sobre la prevención de desastres ambientales, 4.5.4- Cuarto grado Contenidos: Prevención de accidentes y desastres socio naturales. Actividades de sensibilización sobre autoprotección y fenómenos naturales que causan desastres. Planificación y ejecución de simulacros para dar seguimiento control y evaluación de los programas de adiestramiento, mitigación, y atención de eventos adversos. 4.5.5- Quinto grado y 4.5.6- Sexto grado Experimentación: Experimentación sobre los cambios físicos y químicos que se producen en el ambiente. Exploración de las causas de los movimientos sísmicos. Contenidos: Ejecución de actividades de sensibilización sobre autoprotección y fenómenos naturales que causan desastres. • Planificación, ejecución y evaluación de simulacros para dar seguimientos, control y evaluación a los programas de adiestramiento, mitigación, y atención de eventos adversos”*. Adicionalmente, en el 2011 el MPPE publicó un documento titulado "Orientaciones Educativas para la Gestión Integral del Riesgo en el Subsistema de Educación Básica del Sistema Educativo Venezolano" (IR-2-1b), dicho documento contiene orientaciones para la formación de niños y niñas, propiciando el desarrollo cognitivo, social y emocional para la toma de acciones organizativas en el antes, durante y después de la ocurrencia de eventos adversos naturales y/o antrópicos, mediante actividades de gestión de riesgo de desastres.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En el marco de la Autonomía Escolar que consagró el artículo 77 de la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 "Por la cual se expide la Ley General de Educación"; se tiene que el Ministerio de Educación (MEN), no puede expedir normas que establezcan los contenidos curriculares como tal; lo que se realiza es "orientar" la generación de los contenidos mínimos de los currículos; en este sentido, se cuenta con el "Documento Número 3: Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, Ciencias-Naturales y Sociales-, Lenguaje y Ciudadanas", (ver portal Colombia Aprende). Este documento define lo que deben aprender los niños en Colombia y es el soporte conceptual para la elaboración de las pruebas de Evaluación externa –Prueba SABER- que aplica el MEN a través del ICFES, con base en cuyos resultados exige y acompaña la elaboración de los Planes de Mejoramiento Institucional. Adicionalmente, se cuenta con el documento "Política Nacional de Educación Ambiental" (2002) elaborado conjuntamente por el MEN y el Ministerio del Ambiente. Según este documento, es objetivo de dicha política "Incorporar la Gestión del Riesgo en los procesos de Educación Ambiental, en todos los niveles de la educación formal, no formal e informal, teniendo en cuenta el contexto cultural, en el ámbito local, regional y/o nacional; mediante un trabajo articulado con las entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD" (hoy SNGRD). Conclusión: no se cuenta con una norma que de forma taxativa defina el currículo y dentro de éste el tema de GRD; se cuenta con lineamientos y documentos orientadores en esta línea. El indicador indaga por la implementación (si se integra o no), y en entrevista con el Ministerio de Educación, la respuesta no fue concluyente (algunas regiones lo hacen y otras no, o lo integran, pero no en todos los niveles básico o secundario), por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código IR-2-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Se integra la temática de cambio climático en los programas curriculares de educación en al menos el nivel básico (primaria) o secundario?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador concede importancia a la adquisición de conocimiento sobre el Cambio Climático (CC) y sus efectos adversos, por ello busca verificar la integración de esta temática en los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario, o niveles equivalentes en cada país.</p> <p>En algunos países, la definición y desarrollo de los programas curriculares de los niveles básico y secundario (o equivalentes) son definidos a nivel nacional, central o federal, dependiendo del modelo político-administrativo. Sin embargo, en otros casos (por ejemplo, en donde prevalecen los niveles territoriales descentralizados), la definición de los programas curriculares y planes de estudio son definidos de manera descentralizada. En este último caso, para cumplir el indicador es necesario que la temática de CC esté integrada en los programas curriculares de educación en el nivel básico o secundario de todas las UGT. En este sentido, bastaría que un solo territorio no cumpliera con esta integración para considerar el indicador como incumplido.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad del sector educación, programas curriculares, planes de estudio o similares para verificar si el programa curricular del nivel básico o secundario incorpora el CC (puede ser como un componente específico de CC o como un subcomponente de la educación ambiental, ciencias o de ciencias sociales). 2. De ser necesario consultar con representantes del sector educación de las áreas relativas al desarrollo curricular o dependencia ministerial encargada de la temática de Cambio Climático (generalmente Ministerio de Ambiente) y la encargada de la GRD, sobre la existencia de programas curriculares que permitan validar este indicador. 3. Confirmar, en el caso de que la competencia del desarrollo curricular esté transferida a las UGT, si en los programas curriculares se ha incorporado el CC en todas las UGT. En caso de que se haya transferido esta competencia a las UGT, no se considera cumplido el indicador si se identifica al menos una UGT que no haya incorporado el tema en sus programas curriculares. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-2-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar este indicador considera la integración del CC en el plan de estudios de primaria o secundaria.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, se deberá demostrar la integración explícita de la temática de CC en los programas curriculares de primaria o secundaria a nivel nacional o bien a nivel de todos las UGT (si esta competencia ha sido transferida del nivel nacional al territorial). En ese último caso, si se identifica al menos una UGT que no ha incorporado el tema en sus programas curriculares entonces no se logrará verificar positivamente este indicador.</p> <p>En la justificación deben quedar reflejados los aspectos vinculados con el CC que han sido incluidos en los programas curriculares de primaria y/o secundaria.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Jamaica 2013. Climate change has been included into secondary educational programs as topics, on the CAPE Geography Syllabus, on the CXC Geography Syllabus and the CAPE Sociology Syllabus. On the CAPE Geography syllabus, they have defined what climate change is, the evidence for it and the causes. The syllabus requires terminologies such as: long-term climate, global warming, ENSO/El Niño, short term climate, ITCZ, and atmospheric circulation to be understood.

Traducción:

Jamaica 2013. El Cambio Climático se ha incluido en los programas educativos de secundaria como temas, en el Programa de Geografía CAPE, en el Programa de Geografía CXC y en el Programa de Sociología CAPE. En el programa de estudios de Geografía CAPE, se ha definido qué es el cambio climático, la evidencia y las causas. El programa requiere entender terminologías tales como: clima a largo plazo, calentamiento global, ENSO / El Niño, el clima a corto plazo, ITCZ y circulación atmosférica.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Ministerio de Educación (MEN) expresó en la entrevista que la temática de cambio climático se ha integrado en el desarrollo de los programas de educación ambiental, específicamente en los proyectos ambientales escolares (PRAES), en el marco de la sostenibilidad ambiental; Sin embargo, el MEN no define los contenidos curriculares a través de normativa, sino que los orienta mediante guías y estándares. Conclusión: en entrevista con el Ministerio de Educación, la respuesta no fue concluyente (algunas regiones lo hacen y otras no, o lo integran, pero no en todos los niveles, básico o secundario), por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código IR-2-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que el sector ambiente asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector ambiente durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector ambiente asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares. Así mismo, no debe confundirse con las acciones de análisis de riesgos ambientales, a menos que se especifique que los mismos están vinculados con amenazas naturales.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Ambiente y de sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si la autoridad ambiental (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas, cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector ambiental (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático, acerca de la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres. 5. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8	La existencia de normatividad del sector ambiental que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-1	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Ambiente (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas, para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector ambiental.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>El Salvador 2016. Dentro de los proyectos de inversión a 2016 a ser desarrollados por el Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentran: (i) el "Proyecto: 5229 - Programa nacional de reducción de riesgo" (IR-2-3a). La descripción de dicho Proyecto estipula que <i>"El programa fortalecerá las redes de monitoreo para deslizamientos e inundaciones, se identificarán las zonas de mayor vulnerabilidad en el país, se realizarán estudios para definir umbrales de alerta y zonas de más alto riesgo y asistencia técnica a los organismos encargados de las inversiones en infraestructura públicas y privadas. Se implementarán campañas de sensibilización y educación para la prevención y reducción de riesgo. Atlas Dinámico de Riesgos. Este componente fortalecerá la red de monitoreo Estaciones de registro con transmisión telemétrica, para deslizamientos e inundaciones"</i>; el "Proyecto: 5978 - Proyecto Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico a nivel nacional" (IR-2-3b), cuyo objetivo es <i>"Fortalecer el trabajo y procesos de monitoreo permanente de la sismicidad que ocurre a nivel nacional, a través de la ampliación y/o mejoramiento la Red de Monitoreo Sísmico, que permitan reducir el riesgo sísmico en el país"</i>.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Honduras 2014. De conformidad con la consulta efectuada a la discriminación de los recursos asignados a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNAA) para el Ejercicio Fiscal 2014 en SIAFI (Sistema de Administración Financiera Integrado), en "Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra" y "Categoría Programática" no se localizó evidencia de asignación de recursos para análisis de riesgo de desastres para la SERNAA. Cabe mencionar que la SERNAA cuenta con una Unidad de Gestión de Riesgo, no obstante, los recursos asignados a dicha área no se reflejan en SIAFI. De otra parte, SERNAA cuenta con el Módulo de Información Geográfica Ambiental (MIGA), construido con recursos de cooperación internacional, que incluye diferentes capas de información, incluyendo capas de riesgo.

Código IR-2-4

Pregunta de respuesta cerrada
4. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que el sector agricultura asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector agricultura durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector agricultura asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares. Así mismo, no debe confundirse las acciones de análisis de riesgos agropecuarios (por ejemplo, las relacionadas con políticas de comercialización, variación de precios en el mercado internacional, plagas), si no se especifica que los mismos están vinculados con amenazas naturales.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Agricultura y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) o de sus entidades adscritas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático acerca de la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres. 5. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.
Vínculo con otros indicadores

IR-1B-9	La existencia de normatividad del sector agricultura que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-2	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas, para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector agricultura.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Brasil 2017. No Programa do PPA 2016-2019 (IR-2-4a), publicado no Diário Oficial da União - Suplemento, Nº 9, quinta-feira, 14 de janeiro de 2016 encontra-se o Programa: "2077 - Agropecuária Sustentável", o qual inclui o Objetivo: "0601 - <i>Aperfeiçoar mecanismos de gestão de riscos climáticos e de proteção de renda para a atividade agropecuária, com ênfase no seguro rural</i>", o qual é responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O programa inclui como meta 2016-2019 "<i>Revisar as metodologias para o Zoneamento Agrícola de Risco Climático de 12 culturas</i>", e como iniciativa "<i>02CM - Disponibilização de informações e aperfeiçoamento dos mecanismos de monitoramento de riscos agroclimáticos</i>". O Artigo 2 do Programa do PPA 2016-2019 estipula "<i>O PPA 2016-2019 é instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas</i>"</p>	

Brasil 2017. En el Programa PPA 2016-2019 (IR-2-4a), publicado en Diario Oficial de la Unión-Suplemento, No. 9, del jueves 14 de enero de 2016, se establece el Programa 2077 "Agricultura sostenible" que incluye el Objetivo 0601: *"Mejorar la gestión del riesgo climático y los mecanismos de protección de ingresos para la actividad agrícola, con énfasis en el seguro rural"*, que es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. El programa incluye como meta 2016-2019 *"Revisar metodologías para la Zonificación del Riesgo Climático Agrícola de 12 Cultivos"*, y como una iniciativa *"02CM - Provisión de información y mejora de los mecanismos de monitoreo de riesgos agroclimáticos"*. El Artículo 2 del Programa PPA 2016-2019 estipula que *"El PPA 2016-2019 es un instrumento de planificación gubernamental que define las pautas, objetivos y metas de la administración pública federal para los gastos de capital y otros gastos que surgen de los mismos y para aquellos relacionados con los programas de duración. con el fin de permitir la implementación y gestión de políticas públicas"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socio naturales y Tecnológicos, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.095 del 9 de enero de 2009, establece en el Artículo 45 de la misma Ley establece que *"Todos los órganos y entes del Estado deben incluir en su previsión presupuestaria recursos para la formulación y ejecución de proyectos y actividades dirigidas a dar cumplimiento a la política nacional de gestión integral de riesgos socio naturales y tecnológicos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley"*. De conformidad con la consulta efectuada al "Resumen de la Distribución General de la Ley de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015", al "Plan Operativo Anual Nacional, Ejercicio Fiscal 2014" y a los cuatro títulos de la "Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015", publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.161 del miércoles 10 de diciembre de 2014, no se localizó evidencia de asignación de recursos para análisis de riesgo de desastres para el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT). Tampoco se encontró evidencia al respecto en la Memoria y Cuenta 2014 del MPPAT.

Código IR-2-5

Pregunta de respuesta cerrada
5. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que el sector salud asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector salud durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector salud asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares. Así mismo, no debe confundirse las acciones de análisis de riesgos sanitarios, si no se especifica que los mismos están vinculados con amenazas naturales.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Salud y de todas sus entidades adscritas, a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector salud (o entidad equivalente) o de sus entidades adscritas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres si existiera, sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres. 5. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.
Vínculo con otros indicadores

IR-1B-10	La existencia de normatividad del sector salud que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-3	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Salud (o entidad equivalente) para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector salud.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>República Dominicana 2014. La Ley No. 311-12, del Presupuesto General del Estado, promulgada el 19 de diciembre de 2012 (IR-2-5a), incluye partidas presupuestarias para una actividad de análisis del riesgo de desastres: Capacitación a evaluadores sobre la estrategia de hospitales seguros frente a desastres (aplicación de un índice de seguridad, es decir, evaluación de riesgo para la infraestructura (páginas 218 y 388)).</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Costa Rica 2014. No se localizó evidencia de que existan partidas presupuestarias explícitas para el sector para realizar análisis de riesgo de desastres, no obstante, a que se tiene conocimiento que la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual es la entidad líder en servicios de salud públicos en Costa Rica, tiene un área que realiza análisis de riesgo, y parte de él lo efectúa en conjunto con los inspectores de seguros y de reaseguros.</p>	

Código IR-2-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que el sector vivienda asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector vivienda durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector vivienda asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) y de todas sus entidades adscritas, a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) o de sus entidades adscritas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal o área de gestión de riesgo de desastres si existiera, sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres. 5. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-11	La existencia de normatividad del sector vivienda que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-4	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas, para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector vivienda.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Chile 2013. De conformidad con la consulta efectuada en la Ley N° 20641 de Presupuestos del Sector Público 2013, del 22 de diciembre de 2012 (IR-2-6a), en su página 620 refiere: <i>"Con cargo a estos recursos se destinarán M\$ 412.499 para la contratación de estudios de riesgo y de planificación urbana vinculados al Plan de Reconstrucción, y se podrán financiar los gastos asociados a licitación, contratación, difusión y publicación de estos estudios. El MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) informará trimestralmente a la Dirección de Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el estado de avance y ejecución de dichos estudios."</i></p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Bolivia 2015. De conformidad con la consulta efectuada a la Ley del Presupuesto General del Estado, Gestión 2014, Ley No. 455, del 11 de diciembre de 2013, al presupuesto institucional por categoría programática y grupo de gasto, incluyendo aquel donde se discriminan los proyectos de inversión, no se localizó evidencia de asignación de recursos para análisis de riesgo de desastres para el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Cabe mencionar, que en el Artículo 25 de la Ley N° 113/2013-2014, Ley de Gestión de Riesgos, aprobado por la Asamblea el 13 de noviembre de 2014, se estipula que <i>"Las entidades del nivel central del Estado, preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos, los recursos necesarios para la gestión de riesgos, según lo establecido en sus planes de desarrollo sectorial"</i>.</p>	

Código IR-2-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que el sector educación asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector educación durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector educación asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Educación y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Educación o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del Ministerio de Educación o de sus entidades adscritas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal o área de gestión de riesgo de desastres si existiera, sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres. 5. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-12	La existencia de normatividad del sector educación que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-5	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Educación (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas, para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector educación.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>México 2014. De acuerdo al artículo 16 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, publicada en el DOF el 14 de marzo de 2013 (IR-2-7a), el objetivo del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) es <i>"fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables y desempeñarse como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo"</i>. En http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Portal/transform.nodo?id=4.0&transformacion=s&excel=n&zip=n&paramts=0=L509331 se evidencia que INIFED asigna recursos a la identificación del riesgo de desastres: a través del <i>"programa E047 diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura"</i> se desarrolla la actividad de <i>"la evaluación técnica, así como la verificación física y/o documental de obras e infraestructura física educativa crítica y/o en riesgo"</i>.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Nicaragua 2016. No se encontró evidencia en el Presupuesto del Ministerio de Educación 2016 de asignación de recursos para realizar análisis de riesgo de desastres. No obstante, es importante mencionar que El Acuerdo Ministerial 135- 2010, emitido por el Ministerio de Educación el 11 de marzo del 2010, Acuerdo séptimo, establece que los proyectos de construcción de centros educativos, se deben ajustar al Código de la Construcción y Reglamento del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) vigente; a las Normas y Criterios para el Diseño de Establecimientos Escolares, y los Diseños Tipo, aprobados por el Ministerio de Educación, y en conjunto con el FISE de una evaluación de los riesgos existentes de acuerdo a las normativas dictadas por el MTI, FISE, Alcaldía e INETER, con el fin de reducir los riesgos y brindar mayor seguridad a la comunidad educativa. No obstante, debido a la ausencia de un instrumento de clasificación presupuestal no es posible verificar dicha asignación por lo que el indicador no se cumple.

Código IR-2-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo (o entidad equivalente) para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que el sector turismo asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector turismo durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector turismo asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Turismo y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector turismo (o entidad equivalente) o de sus entidades adscritas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 5. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-13	La existencia de normatividad del sector turismo que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-6	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas, para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector turismo.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
No existen ejemplos de cumplimiento de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Honduras 2014. De conformidad con la consulta efectuada a la discriminación de los recursos asignados a la Secretaría de Turismo para el Ejercicio Fiscal 2014 en SIAFI (Sistema de Administración Financiera Integrado), en “Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividades Obra” y “Categoría Programática” no se localizó evidencia de asignación de recursos para análisis de riesgo de desastres para la Secretaría de Turismo. Es importante mencionar que, a raíz de los ajustes a la estructura de gobierno, oficializado mediante Decreto Ejecutivo PCM-001-2014, publicado en la Gaceta del 22 de febrero de 2014, la Secretaría de Turismo actualmente se denomina Instituto Hondureño de Turismo (IHT). Cabe mencionar que IHT asigna recursos a actividades de conocimiento del riesgo de desastres, pues son responsables de elaborar los Planes de Ordenamiento Territorial para áreas de interés turístico. De otra parte, cuentan con la Unidad de Sostenibilidad Ambiental, la cual apoya temas de GRD.</p>	

Código IR-2-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que el sector transporte (entendido como carreteras u obras viales) asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres en el sector transporte durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector transporte asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Transporte y de sus entidades adscritas, entendido como obras viales, a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, consultar con representantes del Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) o de sus entidades adscritas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático, si existieran, sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres. 5. Consultar, en su caso, a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14	La existencia de normatividad del sector transporte que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-2-7	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas, para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará cumplir con el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector transporte.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Colombia 2013. En el Anexo del Decreto No. 2715 del 27 de diciembre de 2012, por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012 (IR-2-9a), a través del rubro presupuestal 450 600 1 se asignaron recursos para estudios de pre-inversión para la <i>“implementación de un sistema de gestión integral del riesgo de las redes de transporte en Colombia vial, fluvial, férrea y puertos- previo concepto DNP”</i>.</p>	
<p>Nicaragua 2016. En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal de acuerdo con el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2015, (IR-2-9a), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) asignó recursos a "Estudios de Ingeniería y diseño para la construcción de obras de mitigación y vulnerabilidad al cambio climático en puntos críticos sobre la ruta Chinandega-Guasaule". La información se encuentra en el Cuadro 20, Programas Específicos, Estrategia de reducción de la pobreza, página 327 del Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República 2015, Dirección General de Presupuesto 2016, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Barbados 2018. Barbados Estimates 2016-2017 does not evidence allocation of resources to perform disaster risk analysis to Ministry of Transport and Public Works, Head 40. Additionally, in January 2017, no information was found in the list of projects in execution published in the web page of the Public Investment Unit (<http://www.piu.gov.bb/pages/Projects.aspx>). Important to mention that the Coastal Zone Management Unit informed the iGOPP team that Lydar data generated for them is being used by other public entities such as the Ministry of Transport and Works. Important to mention that the Coastal Zone Management Unit informed iGOPP mission that Lydar data generated for them is being used by other public entities such as the Water Authority.

Traducción:

Barbados 2018. En los *Barbados Estimates 2016-2017*, no se evidencia la asignación de recursos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, rubro 40, para realizar análisis de riesgo de desastres. Además, en enero de 2017, no se encontró información en la lista de proyectos en ejecución publicada en la página institucional de la Unidad de Inversión Pública (<http://www.piu.gov.bb/pages/Projects.aspx>). Es importante mencionar que la Unidad de Gestión de la Zona Costera informó al equipo de iGOPP, que los datos de *Lydar* generados para ellos están siendo utilizados por otras entidades públicas como el Ministerio de Transporte y Obras y la Autoridad del Agua.

Código IR-2-10

Pregunta de respuesta cerrada
<p>10. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que la entidad nacional responsable del agua y saneamiento asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que la entidad nacional responsable del agua y saneamiento asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En el sector de agua y saneamiento conviven una serie de instituciones que desempeñan los roles de rectoría, regulación y prestación de los servicios. El presente indicador indaga por recursos asignados a las entidades encargadas de la rectoría o regulación de los servicios. Habitualmente la rectoría está a cargo de algún ministerio (salud, obras públicas, ambiente, etc.) o consejo interministerial, y la regulación del sector es realizada por una institución pública autónoma o dependiente del ministerio o sector que realiza la rectoría.</p> <p>Se debe evitar confundir a la entidad responsable por los servicios de agua y saneamiento, con la institución responsable por el manejo integral de los recursos hídricos, pudiendo éstas coincidir en algunos países.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento, que es generalmente quien ejerce la rectoría, o en algunos casos la regulación, del sector. 3. Revisar el presupuesto del año en curso de las instituciones identificadas como responsables del sector de agua y saneamiento a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 4. Identificar si la entidad nacional responsable del agua y saneamiento cuenta con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 5. De ser necesario, consultar sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres con representantes las instituciones identificadas como responsables del sector de agua y saneamiento, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal o con el área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático, si tal área existiera. 6. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-15	La existencia de normatividad del sector de agua y saneamiento que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-14 RR-2-8	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (rector o regulador), para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará cumplir el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector de agua y saneamiento. Tampoco se podrá verificar este indicador con asignación presupuestaria para el análisis de riesgo por parte de la institución prestadora de los servicios de agua y saneamiento.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2012. En el Anexo 8 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre 2012 (IR-2-10a), se asigna presupuesto a través de la partida 3000443, Prestadoras de Servicios de Saneamiento con Fortalecimiento Técnico Institucional en Gestión del Riesgo de Desastres. Partida específica 5001596 para Formulación y Actualización de los análisis de vulnerabilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, contenidas en la página 1633.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. Con relación a la realización de análisis de riesgo por parte de la entidad nacional responsable del agua y saneamiento, el Instituto Nacional del Agua (INA) es un organismo descentralizado, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación, Inversión Federal y Obras Públicas. Este Instituto cuenta con la Dirección de Sistemas de Información y Alerta Hidrológica, que tiene a su cargo el sistema de alerta hidrológica en la Cuenca del Río de la Plata. La mayoría de los datos utilizados para este Sistema son recolectados manualmente y transmitidos al INA, en donde se preparan los pronósticos. El sistema de pronósticos fue creado usando un modelo hidrodinámico 1D, desarrollado por el INA. El INA lleva a cabo investigaciones en ingeniería hidrológica e hidráulica. No obstante, la condición es negativa, pues no fue posible identificar recursos para las actividades mencionadas en el Presupuesto correspondiente al año 2013.

Código IR-2-11

Pregunta de respuesta cerrada
11. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que la entidad nacional responsable del sector de las telecomunicaciones (entendido como aquel que incluye al menos los servicios de <u>telefonía</u>) asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En el sector telecomunicaciones conviven una serie de instituciones, que desempeñan los roles de rectoría, regulación (superintendencia) y prestación de los servicios. El presente indicador indaga por recursos asignados a las entidades encargadas de la rectoría o regulación de los servicios. Habitualmente la rectoría está a cargo de algún ministerio o consejo interministerial, y la regulación del sector es realizada por una institución pública autónoma o dependiente del ministerio o sector que realiza la rectoría.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones, que es generalmente quien ejerce la rectoría, o en algunos casos la regulación, del sector. 3. Revisar el presupuesto del año en curso de las instituciones identificadas como responsables del sector telecomunicaciones a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 4. Identificar si la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones cuenta con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar son financiados con recursos públicos. 5. De ser necesario, consultar sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres con representantes las instituciones identificadas como responsables del sector telecomunicaciones, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal o área de gestión de riesgo de desastres, si tal área existiera. 6. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-16	La existencia de normatividad del sector de telecomunicaciones que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-15 RR-2-9	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (rector o regulador), para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará cumplir el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector de agua y saneamiento. Tampoco se podrá verificar este indicador con asignación presupuestaria para el análisis de riesgo por parte de la institución prestadora de los servicios de telefonía.</p>	

<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p>
<p>No existen ejemplos de cumplimiento de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>
<p>Guyana 2017. No evidence about allocation of resources to perform disaster risk analysis to Ministry of Public Telecommunications and Public Utility Commission was found at: (i) <i>“Estimates of the Public Sector, Current and Capital Revenue Expenditures for the year 2017, as presented to the National Assembly, Volume 1”</i>; (ii) <i>“Estimates of the Public Sector, Current and Capital Revenue Expenditures for the year 2017, as presented to the National Assembly, Volume 2, Medium Term Macroeconomic Framework, Revenue & Expenditure & Programme Performance Statements”</i>; (iii) <i>“Estimates of the Public Sector, Central Government Development Programme, Capital Project Profiles for the year 2017, as presented to the National Assembly, Volume 3”</i>.</p>
<p>Traducción:</p> <p>Guyana 2017. No se encontró evidencia de asignación de recursos para realizar análisis de riesgo de desastres en la Comisión del Ministerio de Telecomunicaciones Públicas y Servicios Públicos en: (i) <i>“Estimaciones de los gastos del sector público, los ingresos corrientes y de capital para el año 2017, tal como se presentaron a la Asamblea Nacional, Volumen 1”</i>; (ii) <i>“Estimaciones de los gastos del sector público, los ingresos corrientes y los ingresos de capital para el año 2017, tal como se presentaron a la Asamblea Nacional, Volumen 2, Marco macroeconómico a mediano plazo, ingresos y gastos y declaraciones de rendimiento del programa”</i>; (iii) <i>“Estimaciones del Sector Público, Programa de Desarrollo del Gobierno Central, Perfiles de Proyectos de Capital para el año 2017, presentado a la Asamblea Nacional, Volumen 3”</i>.</p>

Código IR-2-12

Pregunta de respuesta cerrada
<p>12. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar análisis de riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>Se considera una buena práctica que la entidad nacional responsable de energía (entendida como energía eléctrica) asigne recursos de su presupuesto a actividades de análisis del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos al análisis del riesgo de desastres a la entidad nacional responsable de la energía durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que la entidad nacional responsable de la energía asigna recursos de su presupuesto para actividades de análisis de riesgo en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En el sector energía conviven una serie de instituciones, las cuales desempeñan los roles de rectoría, regulación (superintendencia), generación, transmisión y prestación de los servicios. El presente indicador indaga por recursos asignados a las entidades encargadas de la rectoría o regulación de los servicios eléctricos. Habitualmente la rectoría está a cargo de algún ministerio, comisión nacional o consejo interministerial, y la regulación de los servicios es realizada por una institución pública autónoma o dependiente del ministerio o sector que realiza la rectoría.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser incluidas en el presupuesto usando terminología diversa tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de análisis de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar a la entidad nacional responsable de la energía eléctrica, que es generalmente quien ejerce la rectoría, o en algunos casos la regulación, del sector. 3. Revisar el presupuesto del año en curso de las instituciones identificadas como responsables del sector energía a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 4. Identificar si la entidad nacional responsable del sector energía cuenta con programas o proyectos en curso que consideren acciones de análisis de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 5. De ser necesario, consultar sobre la asignación de recursos para el análisis de riesgo de desastres con representantes las instituciones identificadas como responsables del sector energía (rectoría o regulación del sector), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal o con el área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático, si tal área existiera. 6. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-17	La existencia de normatividad del sector de energía que define la responsabilidad de realizar análisis del riesgo de desastres podría ser un indicador de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-16 RR-2-10	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable de energía (rector o regulador), para realizar actividades de análisis del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de análisis de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, el detalle del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará cumplir el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de análisis de riesgo que implemente el sector de energía. Tampoco se podrá verificar este indicador con asignación presupuestaria para el análisis de riesgo por parte de la institución encargada de la generación, transmisión o distribución de los servicios de energía eléctrica.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región
No existen ejemplos de cumplimiento de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en que se elaboró el presente protocolo.
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Ecuador 2016. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 418 el 16 de enero de 2015 el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER): <i>“Es el órgano rector y planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar las políticas; evaluar que la regulación y control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica; la identificación y seguimiento de la ejecución de proyectos; otorgar títulos habilitantes; evaluar la gestión del sector eléctrico; la promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables; los mecanismos para conseguir la eficiencia energética, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley”</i>. De la misma manera, el Artículo 14 de la misma Ley establece: <i>“La Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final”</i>. Se revisó el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual mayo 2016, Plan Anual de Inversiones de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad que es parte del presupuesto de gastos 2016 de la Proforma General del Estado, y no se encontró evidencia de asignación de recursos para realizar análisis del riesgo.</p>
<p>El Salvador 2016. No se encontró evidencia de asignación de recursos en el Presupuesto 2016 del Ramo de Hacienda, el cual incluye como unidad adscrita a la Dirección de Energía Eléctrica, para realizar análisis de riesgo de desastres para el sector de energía. Cabe mencionar que <i>“La Dirección de Energía Eléctrica (DEE) es una unidad administrativa especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Economía, creada por el Acuerdo N°27, de fecha 11 de enero de 2001, con la finalidad de asistir al Ministerio en el cumplimiento de su rol como ente rector de políticas del sector eléctrico de El Salvador”</i>. De acuerdo a la planeación estratégica trazada por el Ministerio de Economía, la misión de la Dirección será <i>“elaborar, proponer, coordinar y ejecutar las políticas, programas, proyectos y acciones que tengan como fin un eficiente funcionamiento de las actividades de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica, que redunde en beneficio de los consumidores y usuarios a través de un suministro de óptima calidad, a tarifas razonables no discriminatorias, por medio de condiciones y reglas de funcionamiento basadas en la competencia y eficiencia en la asignación de recursos”</i>.</p>

Código IR-2-13

Pregunta de respuesta cerrada	
13. <i>¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el pronto restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>En este contexto, el análisis de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta fundamental para identificar la posibilidad de fallo en la provisión de dichos servicios públicos. La información que se obtiene mediante la evaluación de sus riesgos es el sustento que permite realizar una adecuada planeación de las medidas ex-ante para la reducción del riesgo, que tienen como meta prevenir los daños a la infraestructura y evitar la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. Dichos análisis de riesgos son fundamentales para poder determinar una adecuada estrategia de protección financiera para estos servicios, incluyendo el aseguramiento de sus infraestructuras.</p> <p>En ese sentido, el presente indicador considera relevante que la empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país haya realizado análisis del riesgo de desastres de sus servicios al menos en una ocasión durante los últimos 5 años.</p> <p>La empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país usualmente corresponde a alguna empresa que presta sus servicios a nivel nacional, o bien aquella que provee los servicios de agua y saneamiento a la ciudad con mayor población del país. Dicha empresa puede ser de carácter público, o estar concesionada al sector privado.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser referidas usando otra terminología tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector, del ente regulador del sector o de la asociación nacional de empresas del rubro, entre otros. 2. Revisar la información publicada por esta empresa durante los últimos 5 años, relacionada con la gestión de la empresa, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo, informes de sostenibilidad o memorias anuales. 3. De ser necesario, consultar directamente con representantes de la empresa sobre si ha realizado análisis del riesgo de desastres de sus servicios en los últimos 5 años. 4. Contactar a la entidad rectora o reguladora del sector de agua y saneamiento para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-2-11 PR-2-13	<p>La planificación de la continuidad de operaciones en caso de emergencia o desastre, así como las acciones de reducción de riesgo de desastres en el servicio de agua y saneamiento, deberían basarse en los resultados de estudios de riesgo. Indagar si dichas actividades están sustentadas por algún tipo de estudio de riesgos.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador deberá existir evidencia documental oficial de la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, donde conste que se ha realizado al menos a un estudio de análisis del riesgo de desastres en sus servicios, durante los últimos 5 años. Cabe mencionar que dicho estudio puede haber sido realizado con recursos propios o de terceros.

En la justificación se debe hacer mención al nombre de la empresa, así como al alcance del estudio de riesgo de desastre realizado en su infraestructura, ya sea integralmente o en alguno de sus componentes.

Se aceptarán como verificables los propios informes de los estudios del riesgo de desastres, información al respecto publicada en la página web de la empresa, informes de gestión de la empresa, memorias anuales, informes de sostenibilidad, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo o documentación similar de carácter oficial.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. Se localizó como ejemplo el proyecto que la Empresa Municipal de Agua –EMPAGUA– en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-CONRED– realizaron mediante una evaluación al Radar de Penetración de Suelo –GPR, por sus siglas en inglés, con el propósito de verificar las condiciones en la red de drenajes en la 7a. Avenida y 1ra. Calle de la zona 1, barrio San Sebastián, Ciudad de Guatemala, lo cual aparece reseñado en un boletín publicado en el año 2012 (IR-2-13a).

República Dominicana 2014. El Plan de Mitigación de Acueductos en la región nordeste de la República Dominicana (IR-2-13a), fue elaborado por INAPA en 2009, el principal prestador de los servicios de agua y saneamiento en República Dominicana, que incluyó un estudio de la vulnerabilidad de las infraestructuras de los sistemas de agua potable del nordeste (incluyendo plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, acueductos, alcantarillados y canales) que son vulnerables a daños por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos. Este estudio se realizó en el marco del Proyecto de Prevención y Mitigación (PPD), con apoyo de PNUD, ECHO, CNE.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Brasil 2017. Não foram encontradas evidências de que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo tenha realizado análises de risco de desastres. Foi consultado o Relatório de Sustentabilidade 2015 da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (<http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=1D4769482AB57353832574F7005D9F27&docidPai=AB82F8DBCD12AE488325768C0052105E&pai=filho3>), onde menciona-se que "Sociedade anônima de capital aberto e economia mista, com sede no município de São Paulo, capital do Estado de São Paulo, no Brasil, a Companhia é regulada por princípios e normas de direito público e privado. De acordo com a edição mais atualizada do anuário Pinsent Masons Water Yearbook (2012-2013), a Companhia é a maior empresa de saneamento das Américas e a quinta maior do mundo em população atendida".

Traducción:

Brasil 2017. No se encontró evidencia de que la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo realizara análisis de riesgo de desastres. Fue consultado el Informe 2015 de Sostenibilidad de la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São Paulo (<http://www.sabesp.com.br/CalandraWeb/CalandraRedirect/?temp=4&proj=investidoresnovo&pub=T&db=&docid=1D4769482AB57353832574F7005D9F27&docidPai=AB82F8DBCD12AE488325768C0052105E&pai=filho>) , donde se menciona que "*La Sociedad Anónima de capital abierto y economía mixta, con sede en la ciudad de São Paulo, capital del estado de São Paulo, Brasil, se rige por principios y normas de derecho público y privado. Según la edición más reciente del anuario Pinsent Masons Water Yearbook (2012-2013), la Compañía es la compañía de saneamiento más grande de América y la quinta más grande del mundo por población atendida*".

Código IR-2-14

Pregunta de respuesta cerrada	
14. <i>¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el pronto restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>En este contexto, el análisis de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta fundamental para identificar la posibilidad de fallo en la provisión de dichos servicios públicos. La información que se obtiene mediante la evaluación de sus riesgos es el sustento que permite realizar una adecuada planeación de las medidas ex ante para la reducción del riesgo, que tienen como meta prevenir los daños a la infraestructura y evitar la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. Dichos análisis de riesgos son fundamentales para poder determinar una adecuada estrategia de protección financiera para estos servicios, incluyendo el aseguramiento de sus infraestructuras.</p> <p>En ese sentido, el presente indicador considera relevante que las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con las mayores facturaciones del país hayan realizado actividades para el análisis del riesgo de desastres de sus servicios e infraestructura al menos en una ocasión durante los últimos 5 años.</p> <p>Las empresas de generación, transmisión y distribución de energía pueden ser diferentes o estar agrupadas en una o más empresas; así mismo, pueden ser de carácter público, o estar concesionadas al sector privado.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser referidas usando otra terminología, tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación del país. Lo anterior puede encontrarse en informes sobre el sector o del ente regulador del sector energía, entre otros. 2. Revisar la información publicada por dichas empresas durante los últimos 5 años, relacionada con la gestión de la empresa, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo, informes de sostenibilidad o memorias anuales. 3. De ser necesario, consultar directamente con representantes de cada una de las empresas identificadas sobre si han realizado análisis del riesgo de desastres de sus servicios en los últimos 5 años. 4. Contactar a la entidad rectora o reguladora del sector energía para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-2-12 PR-2-14	<p>La planificación de la continuidad de operaciones en caso de emergencia o desastre, así como las acciones de reducción de riesgo de desastres en el servicio de energía, deberían basarse en los resultados de estudios de riesgo. Indagar si dichas actividades están sustentadas por algún tipo de estudio de riesgos.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, deberá existir evidencia documental oficial donde conste que cada una de las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación del país, de manera conjunta o independiente, han realizado al menos a un estudio de análisis del riesgo de desastres en sus servicios o infraestructura durante los últimos 5 años. Cabe mencionar que dicho estudio puede haber sido realizado con recursos propios o de terceros.

Si la generación, transmisión y distribución de energía la realiza una misma empresa, para validar este indicador es necesario verificar que se ha realizado el análisis de riesgo en la infraestructura de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, cuyos resultados pueden estar contenidos en un solo estudio o estudios independientes correspondientes respectivamente a cada fase o proceso, que hayan sido realizados en los últimos 5 años.

En la justificación se debe hacer mención al nombre de la o las empresas, así como al alcance del estudio de riesgo de desastre realizado en su infraestructura, ya sea integralmente o para alguno de sus fases o procesos (esto es, generación, transmisión y distribución).

Se aceptarán como verificables: los propios informes de los estudios del riesgo de desastres, información al respecto publicada en la página web de las empresas, informes de gestión de las empresas, memorias anuales, informes de sostenibilidad, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo o documentación similar de carácter oficial.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. En México, la empresa proveedora de los servicios de energía eléctrica (generación, transmisión y distribución) es la Paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). La CFE realiza el análisis de riesgos para todos sus procesos de manera anual, y se los proporciona a la Unidad de Administración de Riesgos para que se contemple en el aseguramiento integral de CFE. Se están brindando como verificables, oficios y evidencias relacionados con la remisión del análisis de riesgos realizado para la infraestructura de generación (IR-2-14a), junto con los oficios remitidos en 2013 sobre la actualización de estos estudios en la infraestructura de transmisión (IR-2-14b); y de distribución (IR-2-14c). Estos análisis están basados en la metodología global de evaluación de riesgos (EGNR), que incluye el cálculo de la pérdida máxima probable para todas las instalaciones.

Venezuela 2015. La empresa de mayor facturación en el país es la Corporación Eléctrica Nacional S.A, CORPOELEC, empresa del estado, operadora y prestadora del servicio según el artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. La empresa realizó el estudio sobre “Identificación y Reducción de la Vulnerabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ante las amenazas de eventos extremos hidrometeorológicas” (IR-2-14a), financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2013. El Trabajo se realizó para la Coordinación Corporativa de Gestión Ambiental de CORPOELECT.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. En entrevista con la Dirección del Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia, Subdepartamento de la Gerencia General del ICE, se manifestó que el ICE realiza análisis del riesgo de su infraestructura. Se efectuaron las gestiones para la obtención de los documentos necesarios para respaldar la verificación del indicador, pero no fue posible obtenerlos. El argumento principal para no poder acceder a la información es su carácter confidencial, después de las reformas normativas de apertura del sector.

Surinam 2017. The indicator is not met. The Energy Company (EBS N.V.) has never conducted a disaster risk assessment. The company is planning to carry out disaster risk assessment for the company together with the National Coordination Center for Disaster Relief (NCCR).

Traducción:

Surinam 2017. El indicador no se cumple. La Energy Company (EBS N.V.) nunca ha realizado una evaluación de riesgo de desastres. La compañía planea llevar a cabo una evaluación del riesgo de desastres para la compañía junto con el Centro Nacional de Coordinación para el Socorro en Desastres (NCCR).

Código IR-2-15

Pregunta de respuesta cerrada	
15. <i>¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha realizado al menos un análisis del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el pronto restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>En este contexto, el análisis de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta fundamental para identificar la posibilidad de fallo en la provisión de dichos servicios públicos. La información que se obtiene mediante la evaluación de sus riesgos es el sustento que permite realizar una adecuada planeación de las medidas ex ante para la reducción del riesgo, que tienen como meta prevenir los daños a la infraestructura y evitar la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. Dichos análisis de riesgos son fundamentales para poder determinar una adecuada estrategia de protección financiera para estos servicios, incluyendo el aseguramiento de sus infraestructuras.</p> <p>En ese sentido, el presente indicador considera relevante que la empresa de telecomunicaciones (entendida como aquella que presta servicios de telefonía fija y/o móvil) con la mayor cartera de usuarios en el país haya realizado el análisis del riesgo de desastres de sus servicios e infraestructura al menos en una ocasión durante los últimos 5 años. La empresa de telecomunicaciones puede ser de carácter público o privada.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones de “análisis del riesgo” pueden ser referidas usando otra terminología tal como estimación o evaluación del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector o del ente regulador del sector telecomunicación, entre otros. 2. Revisar la información publicada por dicha empresa durante los últimos 5 años, relacionada con la gestión de la empresa, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo, informes de sostenibilidad o memorias anuales. 3. De ser necesario, consultar directamente a representantes la empresa identificada si han realizado análisis del riesgo de desastres de sus servicios en los últimos 5 años. 4. Contactar a la entidad rectora o reguladora del sector telecomunicaciones para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-2-13 PR-2-15	<p>La planificación de la continuidad de operaciones en caso de emergencia o desastre, así como las acciones de reducción de riesgo de desastres en el servicio de agua y saneamiento, deberían basarse en los resultados de estudios de riesgo. Indagar si dichas actividades están sustentadas por algún tipo de estudio de riesgos.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador deberá existir evidencia documental oficial de la empresa prestadora de telecomunicaciones (telefonía fija y/o celular) con la mayor cartera de usuarios en el país donde conste que se ha realizado al menos un estudio de análisis del riesgo de desastres en sus servicios durante los últimos 5 años. Cabe mencionar que dicho estudio puede haber sido realizado con recursos propios o de terceros.

En la justificación se debe hacer mención al nombre de la empresa, así como el alcance del estudio de riesgo de desastre realizado en su infraestructura, ya sea integralmente o en algunos de sus componentes.

Se aceptarán como verificables: los propios informes de los estudios del riesgo de desastres, información al respecto publicada en la página web de la empresa, informes de gestión de la empresa, memorias anuales, informes de sostenibilidad, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo o documentación similar de carácter oficial.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Belize 2017. According to <http://www.belizetelemedia.net/en/our-company/our-history> “Telecommunications in Belize dates back to 1902, when a manual line linked Belize City with Consejo Village in the Corozal District in the Northern region of the country. Since then BTL has grown from a small company to Belize’s largest nationalized telecommunications company, providing the latest in cutting edge technology by deploying and maintaining its high quality networks”. BTL mentioned in interviews, in the context of the insurance program they have, that they conduct risk analysis on an annual basis on its infrastructure, to prepare for the inspection meetings of the insurance and reinsurance companies, as these companies present their own risk analysis (RI-2-15a). This was evidenced in the cover page of the confidential Property Risk Report elaborated by Marsh Risk Consulting in 2015.

Traducción:

Belice 2017. Según <http://www.belizetelemedia.net/en/our-company/our-history> “Las telecomunicaciones en Belice se remontan a 1902, cuando una línea manual unía la ciudad de Belice con el Consejo Village en el distrito de Corozal en el región norte del país. Desde entonces, BTL ha pasado de ser una compañía pequeña a la compañía de telecomunicaciones nacionalizada más grande de Belice, proporcionando lo último en tecnología de punta mediante el despliegue y el mantenimiento de sus redes de alta calidad”. BTL mencionó en entrevistas, en el contexto del programa de seguros que tienen, que realizan análisis de riesgo anualmente sobre su infraestructura, para prepararse para las reuniones de inspección de las compañías de seguros y reaseguros, ya que estas compañías presentan su propio análisis de riesgos (RI-2-15a). Esto se evidenció en la portada del confidencial *Property Risk Report* elaborado por Marsh Risk Consulting en 2015.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. En materia de telefonía TELMEX controla alrededor del 80% del mercado en telefonía fija, el 70% en telefonía móvil (TELCEL) y el 74% de internet fijo (Infinitum). Se sabe que al menos desde el 2008, TELMEX ha trabajado su plan de contingencias, que derivan del análisis de amenazas a nivel regional y local. No obstante, la condición es negativa, ya que no fue posible obtener ningún verificable por parte de TELMEX, a pesar de los buenos oficios que ofreció COFETEL para ayudar con esa requisitoria.

Código IR-3-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que haga obligatoria la disponibilidad de información para el análisis de riesgo y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora positivamente que desde la normatividad existente en el país se establezca para las entidades públicas que generan información útil para la GRD la obligación de ponerla a disposición de otras entidades públicas y del público en general, de manera gratuita o no onerosa, bajo los mecanismos y restricciones que establezca dicha normatividad.</p> <p>Por otra parte, para hacer efectivo el mandato legal de poner a disposición esta información se requiere que el país cuente con mecanismos o instrumentos que permitan dicho acceso.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad donde pueda estar contenida esta condición, tal como la normatividad específica de GRD, la asociada a la transparencia, el acceso y uso de la información pública, y la normatividad sobre la infraestructura de datos espaciales. 2. Analizar si la normatividad permite acceder, a instituciones públicas y al público en general, a información sobre riesgos de desastres producida o compilada por determinadas instituciones. 3. Analizar si la normatividad establece los mecanismos o instrumentos para el intercambio o acceso a dicha información por parte de instituciones públicas y del público en general. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-3-3 IR-3-4	La disponibilidad de evaluaciones de desempeño de las entidades nacionales responsables de generar información sobre fenómenos geológicos, hidrológicos, meteorológicos o de otro tipo podría incluir consideraciones que orienten o permitan cumplir el presente indicador.
IR-3-5	La evidencia de que el ente nacional de control haya realizado alguna evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre el riesgo de desastres, debería estar basada en normativa que así lo establezca, la cual podría permitir validar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de normatividad vigente que establezca que la información para el análisis de riesgo de desastres debe estar accesible para entidades públicas o para el público en general. - Existencia de normatividad que establezca los instrumentos o mecanismos para el acceso a información para el análisis de riesgo. 	
<p>Los mecanismos o instrumentos para acceder a dicha información pueden ser de varios tipos: (i) sistema de información o plataforma informática, (ii) procedimientos y protocolos para acceder a la información dispuestos por la autoridad; entre otros.</p> <p>En la justificación se deberá explicitar el nombre del mecanismo o instrumento identificado para el intercambio, si es accesible para entidades públicas o público en general, así como incluir una breve descripción del proceso y condiciones para acceder al mecanismo.</p> <p>No será necesario para validar este indicador que el mecanismo o instrumento para el intercambio de información se encuentre operativo. Sin embargo, la justificación deberá hacer referencia a su existencia y operatividad.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. En cuanto a la obligatoriedad de la disponibilidad de información para el análisis de riesgo, la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Decreto No. 777 del 18 de agosto del 2005 (IR-3-1a), en su artículo Art. 33 mandata que: *“Todos los organismos públicos y privados que tengan en su poder datos o estudios científicos o tecnológicos de posibles eventos sísmicos, hídricos, volcánicos, ambientales, meteorológicos u otros relacionados con desastres, tienen el deber de comunicarlos a la Dirección General inmediatamente y, además, suministrarle toda la información que le requiera para cumplir con sus objetivos.”* En cuanto al mecanismo para su intercambio, el Decreto Presidencial de Creación del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) No. 96 publicado el 18 de octubre del 2001 (IR-3-1b) en los literales... *“b) Realizar la instrumentación, así como el monitoreo continuo y sistemático de los procesos y fenómenos meteorológicos, hidrológicos, sismológicos, vulcanológicos y de geotecnia con fines de pronóstico y alertamiento, para lo cual las entidades de Gobierno responsables de dicha actividad deberán hacer el traslado de infraestructura física y de equipos que permitan al SNET cumplir con dicha función; c) “Validar y difundir la información de forma oportuna y eficiente a las autoridades y población en general, acerca de las amenazas y de las condiciones vulnerables cuya magnitud e importancia pueda traducirse en pérdidas y daños”.* Cabe mencionar que a través del Decreto Ejecutivo No. 41, publicado en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2007, fue derogado el D. E. No.96, y es en virtud del Decreto Ejecutivo No.42, publicado en el Diario Oficial el 18 de mayo de 2007 (IR-3-1c), que asume el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales todas las funciones del SNET, y se instruye que *“...El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales asumirá los aspectos técnicos, financieros y administrativos, así como las obligaciones y compromisos que hubiera adquirido el Servicio Nacional de Estudios Territoriales y se entenderá que toda referencia de leyes y convenciones en las que se mencione este último, serán funciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.* Este mecanismo institucional del MARN que asumió las responsabilidades del SNET a partir de 2007 se denomina actualmente Observatorio Ambiental de El Salvador, e incluye en su portal institucional una sección sobre riesgos, donde se introduce el concepto de análisis de riesgos y pone a disposición del público general escenarios de riesgo, índices de riesgo territoriales, etc. (<http://www.snet.gob.sv/ver/riesgo>). En resumen, con los mandatos de la Ley de Protección Civil sobre la disponibilidad de la información sobre riesgos, por un lado, y el rol del Ministerio de Ambiente, a través de Observatorio Ambiental como mecanismo de información institucional con la responsabilidad de validar y difundir la información en forma oportuna eficiente a autoridades y población en general, se considera que se cumple con el indicador.

Paraguay 2016. A continuación, se presentan documentos normativos complementarios, los cuales en conjunto permiten respaldar el cumplimiento de este indicador, considerando que la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N) tiene responsabilidad de generar y recabar información relacionada con la identificación del riesgo. La Ley N° 2615/5 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta Oficial N° 53 el 15 de junio de 2005 (IR-3-1a), establece en el Artículo 4°.- *"Para realizar los fines establecidos en la presente Ley la S.E.N. podrá: a) recabar toda información que permita conocer el comportamiento general de las condiciones meteorológicas e hidrológicas o de cualquier otro agente que pueda dar lugar a las situaciones de emergencia definidas en esta Ley; b) identificar los riesgos previsible y determinar su incidencia en la población, sus bienes y sus actividades económicas..."* De manera complementaria a lo indicado anteriormente, en el Decreto N° 11632/13 por el cual se reglamenta la Ley 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional publicado el 19 de agosto 2013 en la Gaceta Oficial N° 155, (IR-3-1b) se indican la responsabilidades de la S.E.N vinculadas a recabar y consolidar información relevante para el análisis de riesgo, tal como lo indican en el Art. 4 *"La S.E.N. tendrá a su cargo crear y mantener actualizado un directorio de instituciones y actores vinculados a la generación, producción, administración o difusión de información y conocimiento relacionado a la gestión y reducción de riesgos"*, y en el Art 5 *"La S.E.N. tendrá a su cargo, expresa: mantener actualizados acervos que incluyan conocimientos empíricos actuales, ancestrales y experiencias de la comunidad así como conocimientos científicos, la transferencia de los mismos y los procesos de innovación correspondientes para la producción de tecnología e información conducente a reducir y/o eliminar amenazas, vulnerabilidades y riesgos"*. Finalmente, el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la Secretaria de Emergencia Nacional, aprobado por Resolución SEN N° 915/2015 del 23 de octubre de 2015 (IR-3-1c), se plantea el desarrollo de un Sistema de Información Gerencial para toma de Decisiones dentro de la línea estratégica 5 que se refiere a "Comunicación e Información", cuyo objetivo institucional es *"Gestionar una política institucional y desarrollar un sistema de comunicación eficiente, eficaz, oportuno e innovador, tanto interno (SEN) como externo (ciudadanía, actores involucrados) que permitan definir el sentido de las acciones y la toma de decisiones integrando a los diferentes actores sociales e institucionales en materia de GRRD, utilizando para ello las capacidades técnicas, la tecnología y los medios de comunicación disponibles, con el propósito de potenciar los procesos internos (administrativos) y externos (gestión de los propios riesgos)"*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. Si bien la Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras (2013) (IR-1B-7a), hace mención en uno de sus lineamientos estratégicos la implementación del SIGRET *"...para la prevención, manejo de desastres y atención de Desastres basado en Sistemas - Nodos institucionales, como sistema único y oficial que provea información de calidad, confiable, actualizada y oportuna sobre las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgo para estimar el proceso de construcción social de riesgos de desastre y la presencia de eventos físicos cuya intensidad y magnitud representa probabilidades concretas de pérdidas y daños"*, no se indica que el SIGRET es de obligatoria implementación así como de libre acceso para actores relevantes y comunidad hondureña en general.

Código IR-3-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad que haga obligatorio la disponibilidad de información para estudios sobre cambio climático y defina mecanismos o instrumentos para su intercambio?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora positivamente que desde la normatividad existente en el país se establezca para las entidades públicas que generan información útil sobre el Cambio Climático (CC) la obligación de ponerla a disposición de otras entidades públicas y del público en general, de manera gratuita o no onerosa, bajo los mecanismos y restricciones que establezca dicha normatividad.</p> <p>Por otra parte, para hacer efectivo el mandato legal de poner a disposición esta información se requiere que el país cuente con mecanismos o instrumentos que permitan dicho acceso.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad donde pueda estar contenida esta condición, tal como la normatividad de CC, la asociada a la transparencia, el acceso y uso de la información pública, y la normatividad sobre la infraestructura de datos espaciales. 2. Analizar si la normatividad permite acceder a instituciones públicas o al público en general, a información sobre CC que producen o compilan determinadas entidades públicas. 3. Analizar si la normatividad establece los mecanismos o instrumentos para el intercambio o acceso a dicha información por parte de instituciones públicas o por el público en general. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-3-4	La disponibilidad de evaluaciones por parte de las entidades nacionales responsables de generar información sobre fenómenos hidrológicos y/o meteorológicos podría incluir consideraciones que orienten o permitan cumplir el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existencia de normatividad vigente que establezca que la información para determinar probables escenarios de afectación futura por cambios en el clima debe estar accesible para entidades públicas o para el público en general. - Existencia de normatividad que establezca los instrumentos o mecanismos que permitan el acceso a la información que sirve para determinar probables escenarios de afectación futura por cambios en el clima. <p>Los mecanismos o instrumentos para el intercambio pueden ser de varios tipos: (i) sistema de información o plataforma informática, (ii) procedimientos y protocolos para acceder a la información dispuestos por la autoridad; entre otros.</p> <p>En la justificación se deberá explicitar el nombre del mecanismo o instrumento identificado para facilitar el acceso a la información, si es accesible para entidades públicas y/o público en general, así como se deberá incluir una breve descripción del proceso y condiciones para acceder a dicho mecanismo.</p> <p>No será necesario para validar este indicador que el mecanismo o instrumento para el intercambio de información se encuentre operativo. Sin embargo, la justificación deberá hacer referencia a su existencia y operatividad.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Argentina 2014. La Ley No. 24.295, que aprueba la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 11 de enero de 1994 (IR-3-2a), ordena en el artículo 6, Educación, Formación y Sensibilización del Público, que *“Al llevar a la práctica los compromisos a que se refiere el inciso i) del párrafo 1 del artículo 4 las Partes: ... ii) El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos”*. Ahora bien, y de acuerdo con las condiciones a satisfacer que marca el presente indicador, se puede afirmar que no hace falta designar un mecanismo especial para el acceso a esta información, pues sin duda le sería aplicable la Ley No. 25.831, del Régimen de libre acceso a la Información Pública Ambiental, del 7 de enero de 2004 (IR-3-2b), y en particular el Artículo 3°, que instruye que *“El acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado. Se deberá presentar formal solicitud ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo acuerdos con países u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad.”*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Chile 2013. El país cumple con la primera condición del indicador referida a la obligatoriedad de hacer disponible la información a través de la Ley N° 20825 Sobre Acceso a la Información Pública, del 20 de agosto de 2008, que constituye el marco normativo sobre el libre acceso a información, donde entre otras cosas se plantea: *“Artículo 1°.- La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información...”* y *“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales...”*. No obstante, no establece ningún mecanismo específico para el intercambio de información sobre estudios de cambio climático, por lo que no se cumple con este indicador.

Código IR-3-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Considerando que los fenómenos geológicos (sismos, tsunamis, deslizamientos, erupciones volcánicas) son causantes de desastres, resulta fundamental la generación de información que caracterice e informe sobre la frecuencia e intensidad de los fenómenos geológicos.</p> <p>La información que genera la entidad nacional responsable del estudio y monitoreo de fenómenos geológicos es esencial para poder realizar el análisis del riesgo geológico, en particular desde la perspectiva de la amenaza natural. El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que el servicio o instituto geológico nacional (o entidad equivalente) haya realizado, al menos en los últimos 3 años, una evaluación interna sobre la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información que ellos elaboran y comparten con otras instituciones.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el servicio geológico nacional o la entidad nacional responsable de generar información sobre los fenómenos geológicos relevantes para el país. En algunos países podrían existir más de una institución de carácter nacional que genere información sobre fenómenos geológicos específicos (sismos, volcanes, etc.) 2. Identificar la existencia de informes, evaluaciones o documentación similar elaborados por, o en coordinación con, la entidad nacional responsable de generar información sobre los fenómenos geológicos, sobre la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación. 3. De ser necesario, consultar directamente a representantes la institución identificada si se ha realizado una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación en los últimos 3 años. 4. Comprobar que en esa evaluación de calidad se hayan incluido los procesos de investigación, monitoreo y divulgación de la información. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-7	La normatividad que define a una entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos y sus funciones podría orientar la búsqueda de información que respalde el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador deberá existir un informe, evaluación o documento similar elaborado en los últimos tres años, por, o en colaboración con, el servicio geológico nacional o la entidad nacional responsable de generar información sobre los fenómenos geológicos, en el cual se aborde la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información.

Si el país contará con más de una institución que genere información sobre fenómenos geológicos, por ejemplo, instituto sismológico, instituto vulcanológico o similar, bastaría con que uno de ellos satisfaga la condición de este indicador para respaldar su cumplimiento. Sin embargo, en la justificación se deberán identificar las diferentes instituciones existentes en el país.

No se permitirá validar el indicador con “informes anuales” o “de gestión”, los cuales habitualmente abordan de manera exclusiva el reporte del presupuesto, actividades y las metas durante un periodo de tiempo determinado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. Son varias las instituciones públicas nacionales que asumen responsabilidades en la generación de información sobre fenómenos geológicos, y todas son frecuentemente auditadas respecto de la calidad en sus procesos y del uso de los recursos asignados. Tomando como referente nacional a CENAPRED, se hace referencia al "Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 del CENAPRED, publicado en el 2012" (IR-3-3a). Que en el apartado 11.3 “Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011” dedica espacios al tema de la “Red de Observación Sísmica del CENAPRED”, sobre la que señala: “se modernizaron todos los enlaces de comunicación en la Red, además de actualizar el equipamiento sísmico en algunas estaciones de registro. Se realizaron varios trabajos para la instrumentación temporal de equipo sísmico”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Servicio Geológico Colombiano realiza de forma periódica procesos de rendición de cuentas tanto a través de informes especializados como Audiencias Públicas (la última publicada cubre el periodo septiembre de 2011 - agosto de 2012); adicionalmente cuenta con un sistema para facilitar la participación ciudadana y para la publicación de informes de gestión. Finalmente cuenta con un sistema de información pública que incluye noticias y la publicación de la revista "Ingeominas al día". Luego de la revisión de la documentación publicada, no se pudo verificar que la entidad ha realizado una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años.

Código IR-3-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿La entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos ha realizado al menos una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información en los últimos 3 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Considerando que los fenómenos hidrometeorológicos (inundaciones, lluvias torrenciales, tornados, huracanes, sequías, desbordes de ríos, etc.) son causantes de desastres, resulta fundamental la generación de información que caracterice e informe sobre la frecuencia e intensidad de este tipo de fenómenos naturales.</p> <p>La información que genera la entidad nacional responsable del estudio y monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos es esencial para poder realizar el análisis del riesgo hidrometeorológico, en particular desde la perspectiva de la amenaza natural. El análisis del riesgo de desastres es el primer eslabón en la cadena de los componentes que comprenden la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y sin una adecuada medición del riesgo es dudoso que se puedan priorizar adecuadamente las intervenciones a través del resto de componentes de la GRD, tales como la reducción del riesgo, los preparativos y la protección financiera. En ese sentido, el presente indicador considera relevante que el servicio nacional de meteorología o hidrología (o entidad equivalente) haya realizado, al menos en los últimos 3 años, una evaluación interna sobre la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información que ellos elaboran y comparten con otras instituciones.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar a la entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos. En algunos países podrían existir más de una institución de carácter nacional que genere información sobre fenómenos hidrológicos y/o meteorológicos. 2. Identificar la existencia de informes, evaluaciones o documentación similar, elaborada por o en conjunto con la entidad nacional responsable de generar información sobre los fenómenos hidrológicos y meteorológicos, sobre la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación. 3. De ser necesario, consultar directamente con representantes la/s institución/es identificada/s sobre si se ha realizado una evaluación de la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación en los últimos 3 años. 4. Comprobar que en esa evaluación de calidad se hayan incluido los procesos de investigación, monitoreo y divulgación de la información. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-7	De existir normatividad que defina a una entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos geológicos y sus funciones, la misma podría orientar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, deberá existir un informe, evaluación o documento similar elaborado, dentro de los últimos tres años, de manera exclusiva o con la colaboración la entidad nacional responsable de generar información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos, en el cual se aborde la calidad de sus procesos de investigación, monitoreo y divulgación de información.

Si el país contará con más de una institución que genere información sobre fenómenos hidrológicos y meteorológicos, bastará para cumplir este indicador que al menos una de ellas satisfaga la condición indagada. Sin embargo, en la justificación se deberán identificar las diferentes instituciones existentes en el país.

No se permitirá validar el indicador con “informes anuales o de gestión”, si los mismos solo reportan acerca del presupuesto ejecutado, actividades realizadas y las metas alcanzadas durante un periodo de tiempo determinado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. El informe de Situación actual de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la República del Paraguay y recomendaciones para su evolución hacia un Nuevo Organismo, elaborado por la Organización Mundial de Meteorología, Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y la Agencia Estatal de Meteorología Española (AEMET) de abril de 2015 (IR-3-4a), permite validar esta condición, ya que la misma ha tenido como objetivo *“la revisión de la ubicación actual de la DMH y la formulación de argumentos (científicos, técnicos, jurídicos y económicos) y propuestas que posibiliten la evolución de la Dirección de Meteorología e Hidrología hacia un nuevo marco jurídico, organizacional y funcional capaz de satisfacer las necesidades del país en materia de meteorología e hidrología”*. En este informe se presenta un análisis y recomendaciones en relación con los productos y servicios de la Dirección de Meteorología e Hidrología, entre los cuales se destacan los siguientes: meteorología aeronáutica, avisos meteorológicos, predicción meteorológica, servicios climáticos, servicios hidrológicos y servicios específicos para sectores productivos. Así mismo en el informe se analiza la forma en la que la Dirección de Meteorología e Hidrología hace la difusión de productos.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. De acuerdo con los funcionarios consultados del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) no se han hecho evaluaciones formales de este tipo de información. Solo se encontró evidencia de controles de calidad realizados por el INSIVUMEH de los datos meteorológicos e hidrológicos generados por la infraestructura de monitoreo desplegada a nivel nacional, que es la que sirve de base para la investigación aplicada, especialmente en lo que corresponde a la caracterización de los peligros asociado a los fenómenos naturales. Uno de los controles de calidad es aplicado a través del software estadístico Rclimindex, el cual le permite evaluar el grado de homogeneidad de las series históricas de datos y hacer las correcciones correspondientes. Se brindaron ejemplos del tipo de salida que genera este paquete en el caso de una estación en particular como es la estación San Marcos, pero se considera que este tipo de controles corresponde a un aspecto muy puntual (calidad científica de los datos) y no es suficiente para una valoración positiva del indicador que considera la calidad de los procesos de investigación, monitoreo y divulgación.

Código IR-3-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre identificación del riesgo de desastres en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Resulta relevante que el ente nacional de control, auditoría, contraloría u órgano fiscalizador nacional (o quien haga sus veces en el país) haya realizado alguna verificación o evaluación sobre la disponibilidad de información sobre la identificación del riesgo de desastres en los últimos 5 años.</p> <p>Se debe tener presente que las referencias a “identificación del riesgo” de desastres puede ser consideradas usando terminología diversa tal como análisis de riesgo, estimación del riesgo, niveles de exposición del riesgo u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad o las entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 2. Identificar la existencia de informes, evaluaciones o documentación similar, elaborada por la entidad nacional de control, sobre la generación y disponibilidad de información sobre identificación de riesgo de desastres. 3. De ser necesario, consultar directamente a los representantes la entidad nacional de control si se ha realizado, en los últimos 5 años, una evaluación sobre la generación y disponibilidad de información sobre identificación de riesgo de desastres. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-3-3	Si el ente nacional de control ha realizado una evaluación del cumplimiento de la normativa existente en gestión del riesgo de desastres, verificar si incluye la evaluación de la generación y disponibilidad de información sobre riesgos de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador deberá existir un informe, evaluación o documento similar que haya sido elaborado en de los últimos cinco años por, o con la colaboración de, la entidad nacional de control, en el cual se aborde la generación y disponibilidad de información sobre el riesgo de desastres.</p> <p>Si el país contará con más de una institución nacional de control, bastará para verificar positivamente este indicador que al menos una de ellas cumpla la condición. Sin embargo, en la justificación se deberán identificar las diferentes instituciones existentes en el país.</p> <p>No se permitirá validar el indicador con informes “anuales” o “de gestión”, si los mismos solo reportan acerca del presupuesto ejecutado, actividades realizadas y las metas alcanzadas durante un periodo de tiempo determinado.</p> <p>No se logrará validar este indicador si la evaluación se realiza sólo para acciones de análisis de amenazas, inventario de elementos expuestos o análisis de vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres componentes de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.</p> <p>Se aceptaría como verificable un informe de evaluación del desempeño de una sola entidad (por ejemplo, del servicio geológico o hidrometeorológico nacional) o bien a un grupo de entidades en lo que respecta a la generación y disponibilidad de la información que generan.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. El CENAPRED, quien dispone entre sus atribuciones la difusión de lo que produce a través de sus procesos de monitoreo e investigación de los diferentes fenómenos perturbadores, dispone de la Dirección de Difusión, la cual fue auditada por la Auditoría Superior de la Federación, en la “Evaluación del Desempeño 1089” cuyos trabajos de observación a sus recomendaciones y observaciones se llevaron a cabo durante los años 2010 y 2011. Asimismo, la Coordinación General de Protección Civil (Hoy Coordinación Nacional por disposición legal) y de quién depende el CENAPRED, fue auditada el mismo año 2009, y bajo el nombre de “Evaluación del Desempeño 141”, auditoría que considera información relativa al proceso de difusión en su calidad e impacto.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. Desde el año 2007, la Contraloría General de la República cuenta con la Directiva N° 02-2007-CG/CA, “para el ejercicio del Control Preventivo del Sistema Nacional de Control ante una Declaración de Estado de Emergencia por Catástrofe”. Esta normatividad no aborda el control sobre la aplicación de políticas ex ante (prevención), pues su ámbito de aplicación lo es “ante una declaración de estado de emergencia para atender las necesidades derivadas como consecuencia de catástrofes”.

Código IR-3-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿La normatividad nacional de GRD establece la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastre?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca verificar un elemento de calidad en la normatividad nacional de GRD, relacionado con la responsabilidad de informar a la población, comunidad o público en general sobre el riesgo de desastres (información acerca de posibles pérdidas y daños) con el objeto de que tome conciencia sobre dicho riesgo, se realicen los preparativos que correspondan para enfrentarlo, y eventualmente se adopten medidas para reducirlo y para protegerse financieramente frente a dicho riesgo.</p> <p>Interesa determinar si la normatividad nacional de GRD ha previsto que la población, comunidad o público en general deba ser informado sobre el riesgo de desastres (esto es, sobre posibles pérdidas y daños). No debe confundirse con información durante situaciones de desastres, tales como alertas, qué hacer en caso de desastres, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad nacional de GRD. 2. Analizar si dicha normatividad aborda los conceptos de información pública o información comunitaria. 3. Determinar si la norma establece la responsabilidad de informar sobre el riesgo de desastres (información acerca de posibles pérdidas y daños) a la población, comunidad o público en general. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1A-3	Los Sistemas de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, estos pueden ser usados para informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastres.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad nacional de GRD debe establecer explícitamente algún nivel de responsabilidad, para al menos una institución nacional, para la divulgación de información hacia la comunidad, ciudadanía o público en general, sobre riesgos de desastre, esto es, acerca de posibles pérdidas y daños por eventos naturales.</p> <p>No se logrará validar este indicador si el mandato de divulgación de información se limita sólo a aspectos de amenazas o vulnerabilidad, ya que el indicador busca que la difusión de información sea sobre el riesgo de desastres, esto es, sobre posibles pérdidas y daños.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Guatemala 2013. El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012 (IR-3-6a), en el Artículo 79, Manuales, inciso D, Manual de Organización Nacional, Anexo III de las Funciones de las comisiones de las coordinadoras en el nivel municipal y departamental, en el numeral 13 establece: <i>“Informar a la población en la jurisdicción sobre posibles riesgos, así como el estado de situación en caso de emergencias o desastres.</i></p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Chile 2013. No se localizó normatividad nacional de GRD que establezca la responsabilidad de informar a la ciudadanía sobre el riesgo de desastres. El Plan Nacional de Protección Civil, Decreto Supremo 156 de 2002, es un instrumento de carácter indicativo y sólo refiere informar a la población respecto de las situaciones de emergencia: "*VII. Flujos e Informes de Emergencia. 1... La administración de emergencias y desastres implica la solución de situaciones complejas, lo que necesariamente obliga a que las autoridades cuenten con la mejor información posible, de forma tal, que permita ... informar verazmente a la población...2.1. Tipos de Informe de Emergencia... d) Informe a la Población: mensajes que entregan las autoridades con el propósito de dar a conocer a la población la gravedad de una situación de emergencia en su justa medida, para disminuir la incertidumbre, ansiedad y conmoción natural...*".

C. REDUCCIÓN DEL RIESGO (RR)

Código RR-1A-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que establece competencias de forma articulada entre reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para los sectores y entidades territoriales?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca determinar si el marco legal vigente en el país, diferente a la normatividad nacional de la GRD, reconoce la necesidad de conciliar, por una parte, y compatibilizar en otra, los ámbitos y los valores tutelados entre la GRD, concretamente en su fase de reducción del riesgo (RR), y la Adaptación al Cambio Climático (ACC); de manera que la ejecución de ambas políticas generen sinergias respecto de los temas y objetivos comunes o compartidos, destacando la reducción de riesgos y sus aportes al desarrollo sostenible; evitando además duplicidades de acciones entre los sectores y las entidades territoriales.</p> <p>La expresión “de forma articulada”, significa una designación de responsabilidades para la reducción de riesgo de desastres, tanto para los sectores y las entidades territoriales, en la normatividad vinculada a la adaptación al cambio climático.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad de Cambio Climático (estrategias, planes o políticas), normatividad ambiental, planes nacionales de desarrollo o cualquier otra en la que se relacionen la GRD con la ACC. (excluyendo la normatividad de GRD, dado que ya fue analizada en el indicador MG 1A-4). 2. Analizar si dicha normatividad aborda la articulación de competencias de la reducción de riesgo de desastres y la ACC, respecto de las acciones a realizar tanto por los sectores, como por las unidades de gestión territorial. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de la GRD y ACC sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-4	La normatividad usada para verificar este indicador podría orientar en identificar normatividad diferente a la de GRD para validar la presente condición.
MG-1A-7	La normatividad usada para verificar este indicador podría establecer competencias de reducción de riesgo de desastres para sectores y entidades territoriales.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada deberá establecer un enfoque sinérgico y complementario entre la reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los sectores y las unidades de gestión territorial.</p> <p>En el caso que la normatividad utilizada para verificar esta condición haga mención a la GRD de manera general, en la justificación debe quedar explícito el alcance de la GRD, para así evidenciar que la reducción del riesgo es parte de la misma, caso contrario no se podrá validar la presente condición.</p> <p>Si la normatividad identificada no asignara responsabilidades a cada una de las diferentes UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador podrá validarse si al menos las asigna para la unidad de gestión territorial de menor jerarquía (Municipio o equivalente) existente en el país.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que al día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. La Ley de Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 2 de marzo de 1998, y en cuya modificación publicada el 12 de noviembre del 2012 (RR-1A-1a), se le incluyó el Título VI-BIS Adaptación al Cambio Climático, en cuyo Artículo 64-A establece que “... *El Estado por medio del Gobierno Central, entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas y municipales, adoptarán las regulaciones necesarias para estudiar, investigar, prevenir, planificar y responder de manera urgente, adecuada, coordinada y sostenida a los impactos negativos del cambio climático*”. Más adelante, el Artículo 64-D introduce la figura del Plan Nacional de Cambio Climático, al que define como: “... *el marco de coordinación interinstitucional de la administración pública e intersectorial en la evaluación de políticas, impactos, vulnerabilidad de los distintos sectores y sistemas frente a la adaptación al cambio climático*”. Una vez dispuesta la elaboración quinquenal del Plan Nacional de Cambio Climático de El Salvador (PNCC), y de pasar por el proceso que ordena el Artículo 64-E de esa misma Ley, es decir, la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el apoyo del Sistema Nacional de Gestión del Medio Ambiente, y sometido a un proceso de consulta pública; este fue finalmente presentado el 5 de junio del 2015 (RR-1A-1b). El PNCC despliega su contenido en componentes, y cada uno de estos, en acciones claves. Es así como el Componente 1. “*Programa de incorporación del cambio climático y la reducción de riesgo a desastres en los planes de desarrollo, en las políticas públicas y en la modernización de la institucionalidad pública*”, incluye la Acción 1 “*Incorporación estratégica del cambio climático y la reducción de riesgos en las políticas, los planes de desarrollo nacional, territorial y sectorial, y en el presupuesto nacional*”. Misma importancia tiene la Acción 3, relativa a la creación del Gabinete de Sustentabilidad “... *destinado a asegurar la integración del cambio climático y la gestión de riesgos en la política pública nacional y la planificación del desarrollo, liderando iniciativas y creando condiciones para la transición del país hacia una economía resiliente y baja en carbono*”. La “LEY DE MEDIO AMBIENTE”, aprobada por Decreto No. 233 publicado en el Diario Oficial No. 79, tomo 339, con Fecha Emisión: 02/03/1998, Fecha Publicación: 04/05/1998 Fecha de Última Modificación 28/05/2015 y vigente desde el 12 de mayo de 1998 (RR-1A-1a) en el TÍTULO VI-BIS (2) “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”, define al Plan Nacional de Cambio Climático como: “*el marco de coordinación interinstitucional de la administración pública e intersectorial en la evaluación de políticas, impactos, vulnerabilidad de los distintos sectores y sistemas frente a la adaptación al cambio climático*.” (Art. 64-D), detallando luego los objetivos de ese. El documento PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE EL SALVADOR, Aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente y vigente desde junio del 2015 (RR-1A-1b) en su desarrollo fija los componentes y acciones claves que lo integran, y que expresan las prioridades del país en adaptación y mitigación ante el cambio climático. La primera acción contenida en el primer componente consiste en la: “*Incorporación estratégica del cambio climático y la reducción de riesgos en las políticas, los planes de desarrollo nacional, territorial y sectorial, y en el presupuesto nacional*”. Adicionalmente, con la creación del Gabinete de Sustentabilidad mediante decreto No. 12 del presidente de la República y publicado en el Diario Oficial ,Tomo No. 403, pág. 72 publicado el 13 de junio de 2014 (ver pág. 72 del documento RR-1A-1c) el cual está integrado por: Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien coordina el Gabinete, Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministro de Defensa Nacional, Ministro de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Secretario para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia de la República, es la instancia donde participan la Secretaria de la Vulnerabilidad y el Ministerio de Medio Ambiente, abordando temas de adaptación y gestión de riesgos, con lo que se muestra que existe un ámbito de coordinación interinstitucional para ambas políticas de las dos instituciones rectoras del tema.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. Se analizó la Ley General de Protección Civil (LGPC) y la Ley General de Cambio Climático (LGCC) ambas publicadas el mismo día en el Diario Oficial de la Federación (22 de junio de 2012), y no se evidencia una designación explícita de responsabilidades compartidas y diferenciadas entre RR y ACC en ninguno de los dos marcos normativos. Si bien la LGCC hace referencia a la GIRD, no la define y no hace referencia a la normatividad de gestión de riesgos. Esta falta de articulación se pudo verificar en las entrevistas realizadas durante la misión. No obstante, cabe destacar que los procesos de reglamentación de ambas Leyes ofrecen un espacio importante para establecer esa articulación.

Código RR-1A-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Existe normativa que defina referentes de riesgo aceptable para al menos 2 amenazas en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora la vigencia de alguna normatividad de carácter nacional, en la que se establezca la noción de riesgo aceptable o tolerable respecto a, al menos, dos amenazas naturales relevantes en el país.</p> <p>Por “riesgo aceptable” se deberá entender como el nivel de pérdida o afectación dentro de un período de tiempo, que se considera admisible para determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con fines de protección y planificación, ante posibles fenómenos peligrosos. En general se refiere a consecuencias sociales, económicas y ambientales que una sociedad asume o tolera por considerar innecesaria, inviable, inoportuna o imposible una intervención para su reducción dado el contexto económico, social, político, cultural y técnico existente.</p> <p>En términos de ingeniería, el concepto de riesgo aceptable se usa para definir las intensidades y probabilidades de ocurrencia de una amenaza que deben incorporarse como parámetros o estándares de diseño mínimo para una infraestructura determinada.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las principales amenazas naturales a las cuales está expuesto el país. 2. Identificar la normatividad vigente que trate reglamentos y códigos de construcción, para los procesos de ocupación del suelo, así como otra normatividad que pueda existir sobre las amenazas relevantes en el país (sismicidad, vulcanismo, vientos, fenómenos de remoción en masa, inundaciones, incendios forestales, etc.) 3. Indagar si en dicha normatividad se define el concepto de riesgo aceptable para al menos dos amenazas en el país. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de colegio de profesionales (ingenieros y arquitectos) sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-18	En la normatividad que define y/o identifica las edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica en el país podría haber definido también los niveles de riesgo aceptable para este tipo de infraestructuras.
RR-1A-3	La normatividad que mandata la reducción del riesgo de las edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica podría definir también el nivel de reducción de riesgo de dicho mandato.
RR-1B-3 RR-1B-4	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener las consideraciones sobre riesgo aceptable que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, el país debe contar con normatividad que establezca niveles de seguridad de construcción y ocupación del territorio que deben cumplirse teniendo en cuenta parámetros de intensidad de fenómenos asociados a períodos de retorno o la frecuencia anual de excedencia de pérdidas o afectaciones para al menos para dos amenazas.</p> <p>De ser necesario en la justificación deberá quedar registrada cualquier interpretación que se haga del concepto de “riesgo aceptable”.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. La Norma Venezolana COVENIN 1756-2:2001, sobre Edificaciones Sismorresistentes, publicada en 2001 (RR-1A-2a), establece en la sección 7.2 los Espectros de Diseño. En el país existen, además, un conjunto de normas que hacen recomendaciones sobre parámetros específicos de cargas, como lo son la Norma COVENIN 2003-89 de “*Acciones del viento sobre las construcciones*” (RR-1A-2b) y la Norma COVENIN 2002-88 de “*Criterios y acciones mínimas para el proyecto de edificaciones*” (RR-1A-2c)

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 de 2010, contenido en un Anexo del Decreto N.º 926 del 19 de marzo de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistente NSR-10, y que actualiza La Ley 400 de 1997; establece que las edificaciones que se diseñen y construyan en Colombia deben soportar como máximo un evento sísmico cuya probabilidad de ocurrencia es lo suficientemente baja con el fin de que la obra pueda ser efectiva en la gran mayoría de los casos, (es decir para los eventos más frecuentes); específicamente, el apartado A.1.2.2.2., define que: “*Una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este Reglamento, debe ser capaz de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño a los elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos estructurales y no estructurales pero sin colapso*”. Específicamente, en relación con el riesgo aceptable a nivel probabilista, el Reglamento define en el Capítulo A.2 sobre los movimientos sísmicos de diseño, un nivel de probabilidad de excedencia de 10% en un lapso de cincuenta años. Finalmente, se tiene que los referentes de riesgo están determinados también por el tipo de edificaciones (si son indispensables o no), en este sentido, el apartado A.1.2.2.5., define que “*Para las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad como las define el Capítulo A.2 del presente Reglamento, se espera que el daño producido por movimientos sísmicos de características similares a los movimientos sísmicos de diseño prescritos en él sea reparable y no sea tan severo que inhiba la operación y ocupación inmediata y continuada de la edificación*”. No obstante que la norma NSR-10 también establece parámetros de resistencia para fuerzas de viento (Título A.9.5.4) y requisitos de protección contra incendios en edificaciones (Título J), en estos dos casos no hay una clara determinación de parámetros de probabilidad de ocurrencia asociados a niveles de intensidad de estas amenazas que sean considerados para el diseño de las edificaciones; por otro lado, no se pudo verificar la existencia de normativa que defina niveles de riesgo aceptable para otras amenazas en el territorio nacional, por lo tanto el indicador no se cumple.

Código RR-1A-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿Existe al menos una normatividad nacional que obligue a las entidades públicas a reducir la vulnerabilidad de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica a través de medidas de reforzamiento o sustitución?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que en los países donde se haya definido en la normatividad la noción de edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” (que se analiza en el indicador “IR 1B-18”), se mandate la reducción de su vulnerabilidad ante fenómenos naturales mediante acciones de reforzamiento o sustitución.</p> <p>Son ejemplos de edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” los hospitales, escuelas, estaciones de bomberos o policías, centros de gestión de las emergencias e instalaciones dirigidas a las comunicaciones, generación y suministro de energía eléctrica, etc. Por su carácter estratégico y la importancia que revisten por los servicios que prestan, no deben quedar inutilizadas o colapsar ante la ocurrencia de un desastre.</p> <p>El indicador no busca confirmar que se están realizando tales reforzamientos o sustituciones de aquellas infraestructuras críticas vulnerables, sino comprobar la vigencia de una normatividad que establezca esa obligación.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si existe normatividad que defina lo que es infraestructura crítica (ver si el país cumple el indicador IR-1B-18). 2. Verificar si en dicha normatividad, además de definir, se establece el mandato que indaga el indicador. 3. Identificar las edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” que son consideradas explícitamente en la normatividad del país. 4. Identificar normatividad nacional existente sobre criterios de diseño de edificaciones e infraestructura del país, u otro tipo de normatividad de carácter nacional, y verificar si establece la obligación de someter a las edificaciones o estructuras a determinados parámetros o estándares para reforzarlas o sustituirlas para garantizar su funcionalidad y normal operación en ocasión de un desastre. 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes de colegios de profesionales (ingenieros y arquitectos), del ente rector de la GRD y/o representantes de los sectores involucrados sobre el cumplimiento de esta condición (p.ej. salud, educación, obras públicas, energía, etc.). 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-18	En base a la respuesta a este indicador se puede tener claridad de cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica consideradas en el país.
RR-1B-3 RR-1B-4	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, debe existir al menos una normatividad nacional vigente que obligue a las entidades públicas al reforzamiento o sustitución de las edificaciones consideradas “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” que sean consideradas vulnerables ante fenómenos naturales.

No se logrará cumplir la condición de este indicador si existe normatividad que obligue a las entidades públicas al reforzamiento o sustitución de solo una o algunas de las edificaciones consideradas “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” definidas por la normativa identificada en IR-1B-18.

Si la condición se cumpliera sólo para algunas de las edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica que son definidas en la normatividad, en la justificación deberá quedar registrada para qué tipo de edificación se cumple la condición.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. No se localizó una norma que en particular se refiera al reforzamiento de edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica. De todos modos, cabe mencionar que dentro del REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (Aprobado por Decreto Ejecutivo N° 105 de fecha 23/10/2016, Publicado en el Diario Oficial N° 204, Tomo 333, de fecha 30/10/1996, vigente desde el 07/11/1996), se encuentra el artículo 60 que establece: “...toda construcción que haya sido visiblemente afectada por sismo, viento, explosión, incendio, asentamiento del terreno, exceso de carga, procesos constructivos o deterioro de los materiales, se deberá realizar, en un plazo no mayor de 72 horas después de identificada la falla, una revisión preliminar de la estructura para las medidas emergentes de seguridad adecuadas al caso, dictaminadas por un ingeniero civil o un arquitecto competentes.” Esta misma disposición, en su inciso segundo contempla que posteriormente la edificación deberá someterse a un dictamen de estabilidad y seguridad por parte de un ingeniero civil u otro profesional de la construcción especialistas en el área estructural, y que si el dictamen demuestra que los daños no afectan la seguridad y la estabilidad de la construcción en su conjunto o de una parte significativa de la misma, deberá repararse adecuadamente; de lo contrario, deberá ser objeto de un proyecto de refuerzo estructural o demolición. De la misma manera, el Plan Nacional de Cambio Climático, en el Capítulo V Desarrollo del Plan, Componente 2, Acción 4 sobre programa de Inversiones críticas, pág. 27 que contempla las inversiones para blindaje climático de la infraestructura registrada en el inventario de infraestructura. Los bienes sujetos a estas inversiones son, por un lado, la infraestructura estratégica esencial para la funcionalidad clave del país, en particular la vial y la social. No obstante, el Plan no tiene fuerza normativa, por lo que no es obligatorio su cumplimiento para todas las entidades públicas.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2013. Se cuenta con la Resolución Ministerial N° 335-2005-MINSA – “Estándares Mínimos de Seguridad para Construcción, Ampliación, Rehabilitación, Remodelación y Mitigación de Riesgos en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”. Y si bien es de competencia nacional, lo es exclusivamente para un sólo sector y sólo para edificaciones nuevas.

Código RR-1A-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿Existe normatividad que estipule un régimen de sanciones específico sobre el incumplimiento de normativa relacionada con el diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones de carácter público y privado?</i>	
Descripción general del indicador	
El indicador reconoce un factor de calidad, que contribuye a la reducción del riesgo de desastres, que los países cuenten con normatividad que contemple un régimen de sanciones relativo a la inobservancia del marco legal aplicable al diseño, construcción o localización de edificaciones e infraestructuras públicas o privadas. De manera que el caso de incumplimiento de las mismas, se consideran una contravención o un delito que puede ser objeto de una sanción administrativa o pena de prisión, según el régimen que se haya establecido previamente.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad nacional que disponga de esquemas de sanciones, ya sean de carácter meramente administrativo o penal, o bien, la norma vigente en materia de edificaciones e infraestructura, u ordenamiento territorial en el país. 2. Verificar si dicha normatividad establece un régimen que señale sanciones administrativas, o bien, que tipifique algún delito e indique las penas correspondientes, por el incumplimiento de una norma vigente en materia de edificaciones e infraestructura en el país. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de colegio de profesionales (ingenieros y arquitectos) o ente rector de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-3 RR-1B-4 RR-1C-3 RR-3-3	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe contener explícitamente un régimen de sanciones por el incumplimiento de obligaciones en materia de diseño, construcción o localización de infraestructura o edificaciones.</p> <p>En la justificación deberá detallarse el tipo de sanciones que podrían llegar a ser aplicadas en caso de incumplimiento.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Chile 2013. El Decreto con Fuerza de Ley DFL-458 de 2013 Ley General de Urbanismo y Construcciones, considera: “Artículo 20.- Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley...”</p>	

Guyana 2017 The National Building Codes, prepared by the Guyana National Bureau of Standards, approved by the National Standards Council and published by Central Housing Authority of Guyana in 2005 (RR-1A-4a), include a general section on “Code of Practice for Building, Part 1-Enforcement”. This section establishes specific penalties for the breach of the regulations set in the other sections of the National Building Codes.

Traducción:

Guyana 2017. Los *National Building Codes*, preparados por la Oficina Nacional de Normas de Guyana, aprobados por el Consejo Nacional de Normas y publicados por la Autoridad Central de Vivienda de Guyana en 2005 (RR-1A-4a), incluyen una sección general sobre "*Código de prácticas for Building, Part 1-Enforcement*". Esta sección establece sanciones específicas por el incumplimiento de las regulaciones establecidas en las otras secciones de los Códigos Nacionales de Construcción.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La versión del Reglamento Boliviano de Construcción de Edificación en General, publicada en el portal del Viceministerio de Vivienda y Urbano en 2003 (RR-1A-4a), establece en el CAPÍTULO IV DE LA APLICACIÓN Y VIGILANCIA- Artículo 11. "*La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento corresponderán a los Gobiernos Autónomos Municipales, que tendrán las siguientes facultades enunciativas no limitativas, en el marco de sus competencias: m) En caso de incumplimiento con las disposiciones de este Reglamento y otras complementarias, ejecutará con cargo al propietario las obras instruidas que no hubiesen sido realizadas en caso de verificarse riesgos; n) Ordenar y ejecutar demoliciones, parciales o totales de edificaciones en casos de incumplimiento de la ley, disposiciones de este Reglamento y los Reglamentos Municipales; o) Imponer las sanciones que correspondan en aquellos casos de incumpliendo de la ley y disposiciones de este Reglamento, que no estén contemplado en los incisos m) y n) precedentes. p) Expedir y modificar, cuando sea necesario, las Normas Técnicas Complementarias, ordenanzas, acuerdos, instructivos, circulares y demás disposiciones administrativas, legales y técnicas que procedan para el debido cumplimiento de este Reglamento; q) Para hacer cumplir las acciones que disponga el Municipio, con resolución judicial poder acudir al uso de la fuerza pública, de acuerdo a Ley*". No obstante, no se pudo encontrar evidencia de aprobación formal de este documento. En ese sentido, cabe de destacar que el 23 de diciembre de 2012 fue puesto en consulta pública este Reglamento, para que en el lapso de 3 meses las instituciones relacionadas con su aplicación lo revisen y efectúen observaciones o comentarios, de manera previa a su aprobación final y promulgación.

Brasil 2017. Em entrevista com professor pesquisador da Universidade de Brasília na área de Arquitetura e Urbanismo, no dia 19 de julho de 2016, foi informado que não existem normatizações nacionais que estipulem um regime de sanções específicas sobre o não cumprimento da normatização relacionada com desenho, construção ou localização de infraestruturas ou edificações de carácter público e privado, apenas os Códigos de Obras e Edificações (COE) de cada Município (os quais somam cerca de 2000 códigos). Como exemplo foi informado que no Distrito Federal o COE é definido pela Lei 2.105 de 08 de outubro de 1998, Código de Edificações do Distrito Federal e regulamentada pelo Decreto 19.915 de 17 de dezembro de 1998 e o Decreto que regulamenta a Lei 2.105 de 08 de outubro de 1998, o qual dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal.

No Brasil, existe o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, que é abrigado na NR 23. Porém, cada estado da federação pode, em virtude de suas especificidades, dispor sobre demais aspectos a serem exigidos. O Plano é um documento que detalha o conjunto de ações e recursos internos e externos ao local, permitindo controlar a situação em caso de emergência. A legislação estabelece penalidades e sanções para os aspectos de emergência e pânico, mas não em relação com os aspectos de localização, desenho e infraestrutura.

Traducción:

Brasil 2017. En una entrevista con un profesor investigador de la Universidad de Brasilia en el área de Arquitectura y Urbanismo, el 19 de julio de 2016, se informó que no hay normatividad nacional que estipule un régimen de sanciones específico por incumplimiento de las regulaciones relacionadas con el diseño, construcción o ubicación de infraestructuras o edificios públicos y privados, solo los Códigos de Obras y Edificios (COE) de cada municipio (que suman alrededor de 2000 códigos). Como ejemplo, se informó que en el Distrito Federal el COE está definido por la Ley 2.105 del 8 de octubre de 1998, el Código de Construcción del Distrito Federal y regulado por el Decreto 19.915 del 17 de diciembre de 1998 y el Decreto que regula la Ley 2.105 de 8 octubre de 1998, que establece el Código de Construcción del Distrito Federal.

En Brasil, existe el Plan de Prevención y Protección contra Incendios, que está protegido en el NR 23. Sin embargo, cada estado de la federación puede, debido a sus especificidades, proporcionar otros aspectos que se requieren. El Plan es un documento que detalla el conjunto de acciones y recursos internos y externos al sitio, lo que permite controlar la situación en caso de emergencia. La legislación establece sanciones y sanciones para los aspectos de emergencia y pánico, pero no en relación con los aspectos de ubicación, diseño e infraestructura.

Código RR-1A-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Existe normatividad que establezca la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce como buena práctica la consideración de medidas para reducir el riesgo que se genera durante la etapa de construcción de proyectos de infraestructura por efectos de la propia obra y que pueden afectar a terceros. Por ejemplo, en la construcción de una presa hidroeléctrica, existe el riesgo de producirse una avenida para lo cual, deben haberse considerado previamente una serie de medidas de reducción de riesgo no sólo para proteger a la infraestructura en construcción, sino también la población, actividades económicas e infraestructuras localizadas aguas abajo cuyo nivel de riesgo pudo aumentar durante la fase de construcción de la infraestructura por las características de la obra y de sus arreglos constructivos. Otro ejemplo, puede ser la normatividad que se establece para proteger a terceros que podrían verse afectados durante la etapa de construcción de una carretera en una zona de alta pendiente, donde durante la fase de construcción puede existir el riesgo por fenómenos de remoción en masa.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar aquella normatividad relacionada al sistema nacional de inversión pública, estudios de impacto ambiental o la que regula la construcción de infraestructura pública o privada, dentro de la cual se podría considerar los términos de referencia o documentos de contratos. 2. Determinar si dicha normatividad establece que durante la fase de construcción se deban considerar acciones para la reducción de los riesgos relacionados con la infraestructura. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes de colegio de profesionales (ingenieros y arquitectos) o ente rector del sistema nacional de inversión pública sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-17 RR-1B-18 RR-1B-19 RR-1B-3 RR-1B-4	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
RR-3-5	De existir una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura, en la misma se podría hacer mención a la normatividad que lo mandata.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición de este indicador, la normatividad identificada debe señalar la necesidad de adoptar medidas de mitigación o reducción de los riesgos que se pueden generar durante la fase de construcción de una determinada infraestructura pública o privada.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Perú 2013. En 2003, Estaba vigente el Reglamento Nacional de Construcciones aprobado mediante Decreto Supremo N°. 039-70-VI y Decreto Supremo N°. 063-70-VI que establece en su Título V. - Requisitos de seguridad y previsión de siniestros "*Capítulo IV Seguridad contra el efecto destructivo de los sismos*" y en su Capítulo VI. Problemas especiales de cimentación que establece medidas preventivas en la fase de cimentaciones que contemplan: Suelos colapsables, ataque químico, licuefacción y expansión de suelos. En el punto 6.5.2 Parámetros de cálculos y otras condiciones "*Donde sea aplicable, el informe del EMS, deberá incluir los parámetros de suelos requeridos para el diseño de las obras de calzada y sostenimiento de las edificaciones, muros, perimetrales, pistas y terrenos vecinos, considerando que éstos puedan ser desestabilizados como consecuencia directa de las excavaciones que se ejecuten para la construcción de las obras, o como consecuencia de un sismo o sobrecargas durante la ejecución de las obras, las que deberán ser consideradas en cálculos respectivos.*" A lo largo del capítulo establece varias otras disposiciones contemplando también medidas preventivas ante los posibles efectos de sismos sobre cortes de terreno, encofrado, andamios, entre otras consideraciones. En el punto 6.5.4 establece "*La ausencia de cargas horizontales sobre una calzada puede ser un fenómeno temporal, cuya presencia dependerá: Del tiempo que la excavación permanezca sin soporte. Del tipo de suelo involucrado. De contingencias tales como: variaciones en la carga hidrostática (humedeciendo y secado), sobrecargas estáticas durante el proceso constructivo, y por sobrecargas dinámicas (sismos y vibraciones causadas artificialmente)*" de modo que este punto considera también posibles variaciones de humedad debidas a precipitación u otros fenómenos durante la fase de construcción. Este reglamento aplica para la construcción de infraestructura. El indicador se cumple.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. No se encontraron evidencias al respecto. Se analizó el (i) Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto Conectividad y Transporte de Paraguay, elaborado el 6 de mayo de 2016; y el (ii) Decreto 1350/14, por el cual se reglamenta la Ley No 5102/2013 de promoción de la inversión en Infraestructura Pública y Ampliación y Mejoramiento de los Bienes y Servicios a cargo del Estado, aprobado el 12 de marzo de 2014 y publicado en Gaceta Oficial N° 51 del 13 de marzo de 2014. En este último decreto si bien no se hace referencia a incorporar medidas de reducción de riesgo, sí se hace referencia a la adquisición de pólizas de seguro vigentes durante la construcción que atiendan posibles eventos adversos que ocurran como consecuencia de las obras, lo cual queda indicado en el Art 74 "*Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley y de lo estipulado en las condiciones del contrato, el Participante Privado deberá tomar mínimamente las siguientes pólizas de seguro: responsabilidad civil por daños a terceros y seguro contra todo riesgo en zona de obra y accidentes de trabajo que puedan ocurrir durante el periodo de vigencia del contrato de PPP. Las sumas percibidas producto de los seguros por catástrofes serán destinadas a la reconstrucción de la obra, salvo que las partes acuerden destinarlas a otros fines u obras propias del contrato de PPP.*"

Código RR-1B-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Considerando que la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) es una política pública que debe ejecutarse transversalmente en la administración pública, en el entendido que sus objetivos y visión son compartidos por todos los sectores, es deseable entonces que su normatividad estipule que cada sector debe, en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones, realizar acciones para reducir la exposición y vulnerabilidad de los elementos bajo su responsabilidad, y así, consecuentemente, reducir su riesgo.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p> <p>No se debe asumir que los sectores realizan la reducción del riesgo simplemente porque lo estipule un plan sectorial de GRD; lo que interesa en este punto es verificar si la norma de GRD explícitamente asigna la responsabilidad a cada sector de reducir su propio riesgo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Analizar normatividad vigente en materia de GRD para verificar si estipula de forma expresa que los diferentes sectores de la administración pública tienen responsabilidades para realizar acciones de reducción del riesgo de desastre en sus respectivos ámbitos de competencia. 6. Si la normatividad identificada asigna a los sectores responsabilidades generales para la GRD, se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición o el alcance de las acciones de GRD, a fin de verificar que incluya la reducción del riesgo como uno de sus componentes. 7. Si la normatividad identificada asigna responsabilidades para la reducción del riesgo a los miembros del Sistema Nacional de GRD, Sistema Nacional de Protección Civil (o similar), se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición o el alcance de dichos sistemas nacionales, para verificar que los sectores (ministerios, instituciones públicas, etc.) son parte de los mismos. 8. En la revisión de la normativa es importante descartar que las acciones que queden bajo responsabilidad de los sectores se refieran a otra de las fases de la GRD como pueden ser labores de preparativos para desastres o la recuperación. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 IR-1B-3 PR-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores asigna responsabilidades a los sectores en materia de reducción del riesgo
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad de GRD identificada deberá asignar explícitamente que los sectores serán responsables de la reducción del riesgo de desastres dentro del marco de sus funciones.

Si dicha normatividad asigna de forma general responsabilidades en materia de GRD a los actores integrantes del Sistema Nacional de GRD, en la justificación debe quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta, así como que los sectores son parte del Sistema Nacional de GRD (o similar).

No debe confundirse con la normatividad que estipule que los sectores son responsables de realizar acciones de preparativos para desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de septiembre del 2002 (RR-1B-1a), no cuenta con un artículo en particular que de manera explícita disponga que cada sector es responsable de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, esto se logra deducir del contenido de sus artículos, como es el caso del Artículo 1, en el que enlista los llamados Principios Generales que orientan la política de gestión de riesgos: "... 2. La prevención: La acción anticipada de reducción de la vulnerabilidad y las medidas tomadas para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o desastres son de interés público y de obligatorio cumplimiento... 3. El ámbito de competencias: En las actividades de prevención, mitigación, preparación y respuesta ante desastres se tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia de los criterios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad institucional... 6. La descentralización: Los organismos nacionales ... ejercerán libremente y autónomamente sus funciones en materia de prevención, mitigación y respuesta ante desastres, con estricta sujeción a las atribuciones que a cada una de ellas se les haya asignado específicamente en la Constitución y las leyes y... los reglamentos y decretos dictados a 1 efecto...". Además, esa Ley dispone en su Artículo 6 que entre los objetivos del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres tendrá (numeral 1) el de reducción de riesgos y la prevención de desastres. Ahora, ese Sistema está integrado (según se deduce de los artículos 5 y 9) por todas las entidades y sectores públicos nacionales. En ese mismo sentido el Artículo 7, Funciones del Sistema Nacional, menciona la de "2. Coordinar las actividades de todas las entidades públicas... en materia de gestión de riesgos de acuerdo con sus responsabilidades y funciones".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Haití 2014. No existe normatividad nacional sobre Gestión de Riesgo. El "*Plan National de Gestion de Risque et des Désastres: 4.4 Des Comités Thématiques, institutionnels et séctoriels*" dispone que todas las instituciones del Estado deben establecer comités que serán responsables de establecer las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad del sector/institución y evitar la creación de vulnerabilidades a terceros. Sin embargo, dicho plan no tiene respaldo legal.

Código RR-1B-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Tomando en cuenta que la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública que debe ejecutarse de manera transversal, involucrando a todos los sectores de la administración pública, además de todas las unidades de gestión territorial, entonces es razonable que la normatividad nacional de la GRD incluya en esa integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público o concesionadas a un privado.</p> <p>En ese tenor, este indicador valora que la normativa nacional de GRD establezca responsabilidades para estas empresas en materia de la reducción de los riesgos y en el ámbito de los servicios que prestan. Este indicador resulta de valorar los costos sociales y financieros que generan tanto la afectación física directa de las infraestructuras que proveen los servicios, como la interrupción parcial o integral de esos servicios a consecuencia de un desastre.</p> <p>Se debe tener presente que las acciones y responsabilidades sobre “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Analizar normatividad vigente en materia de GRD para verificar si estipula de forma expresa que las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la responsabilidad de realizar acciones para la reducción del riesgo de desastre en sus respectivos ámbitos de competencias. 6. Si la normatividad identificada asigna a las empresas prestadoras de servicios públicos responsabilidades generales para la GRD, se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o el alcance de las acciones de GRD, a fin de verificar que incluya la reducción del riesgo como uno de sus componentes. 7. Si la normatividad identificada asigna responsabilidades para la reducción del riesgo a los miembros del Sistema Nacional de GRD, Sistema Nacional de Protección Civil, o en general a las entidades o instituciones públicas (o similares), se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o su alcance para verificar que las empresas prestadoras de servicios públicos son parte de dichos sistemas o son consideradas como entidades o instituciones públicas en lo que se refiere a dicha responsabilidad. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 RR-1B-1 IR-1B-4 PR-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores asigna responsabilidades a las empresas proveedoras de servicios públicos en materia de reducción del riesgo.
PR-1B-13 PR-1B-14 PR-1B-15	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores hace referencia a normatividad de GRD que pueda ser revisada para analizar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad de GRD identificada deberá establecer explícitamente que empresas prestadoras de servicios públicos (o equivalente) sean responsables de realizar acciones de reducción del riesgo de desastres dentro del marco de sus funciones.

Si dicha normatividad asigna de forma general responsabilidades en materia de GRD a los actores integrantes del Sistema Nacional de GRD, en la justificación debe quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de la misma, así como que las empresas de servicios públicos son parte del Sistema Nacional de GRD o consideradas dentro del ámbito de las entidades públicas (o similar).

No debe confundirse con la normatividad que estipule que las empresas prestadoras de servicios públicos son responsables de realizar acciones de preparativos para desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo número 048-2011-PCM, del 25 de mayo 2011 (IR 1B-2a), establece en el artículo 13, numeral 13.2 que “... las entidades públicas identifican y priorizan el riesgo en la infraestructura y los procesos económicos, sociales y ambientales, en su ámbito de atribuciones, y establecen un plan de gestión correctiva, tomando en consideración los lineamientos establecidos por el CENEPRED”. Adicionalmente, la Ley N° 29664 que crea el SINAGERD, del 8 de febrero 2011 (IR 1B-2b), en el artículo 2o. relativo al ámbito de aplicación de la Ley instruye: “la Ley es de aplicación y cumplimiento para todas las entidades y empresas públicas de todos los niveles de gobierno, así como el sector privado y la ciudadanía en general”, y adiciona: “... toda referencia genérica a entidades públicas en la presente Ley, su reglamento y las disposiciones que a su amparo se emitan se entiende referida a... las entidades públicas a que se refiere la Ley Núm. 27444...”. Esta última, correspondiente a la Ley del Procedimiento Administrativo General del 21 de marzo de 2001, (IR 1B-2c) el concepto de entidades públicas es extensivo a “... Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia...”. De esta forma se concluye que, en el Perú, las empresas prestadoras de servicios públicos sí están obligadas a reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus operaciones.

Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (RR-1B-2a) dispone en su Artículo N° 2 que “La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano... En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades... privadas... desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo... reducción del riesgo”. Adicionalmente, precisa en el artículo 42, Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia, que “Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñarán e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Panamá 2014. No obstante que la Política Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres (PNGIRD) aprobada por Decreto N.º 1101 del 30 de diciembre de 2010, estipula en el eje número V que "... *la GIRD debe ser considerada parte intrínseca de los procesos de planificación del desarrollo. Siguiendo el principio del ámbito de competencias, cada entidad pública debe reducir el riesgo de su propia actividad social o productiva y debe evitar la creación de nuevos riesgos.*", se tiene que esta norma no cobija a las entidades prestadoras de servicios públicos de forma explícita las cuales pueden ser en muchos casos privadas o concesionadas.

Código RR-1B-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿Existe al menos una norma nacional de seguridad (código) para el diseño sismo resistente de edificaciones, o similar (por ejemplo: viento), ¿que sea de obligatorio cumplimiento para proyectos públicos y privados?	
Descripción general del indicador	
Este indicador valora la vigencia de normas y códigos nacionales para el diseño y construcción de edificaciones que recojan los resultados del análisis de los riesgos y los traduzcan en reglas o preceptos obligatorios para proyectos públicos o privados, con el fin de dotarlos de la resistencia suficiente para soportar la acción de las fuerzas causadas por fenómenos naturales peligrosos tales como sismos, viento u otros diversos.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los fenómenos naturales peligrosos relevantes en el país. 2. Analizar normatividad vigente en materia de diseño de edificaciones, códigos de construcción o similares para verificar si se incluyen consideraciones específicas frente a fenómenos naturales peligrosos. 3. Identificar la existencia de normas nacionales para el diseño de construcciones e infraestructura frente a sismos, vientos u otra amenaza natural. 4. Verificar que la normatividad identificada sea de obligatorio cumplimiento. 5. De ser necesario, entrevistarse con representantes de colegio de profesionales (ingenieros y arquitectos) o ente rector de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1A-3 RR-1B-4 RR-1B-5	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores permite orientar o verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada deberá ser de obligatorio cumplimiento, tanto para edificaciones públicas como privadas, y regule su diseño y construcción de acuerdo a normas técnicas que las hagan resistentes a la acción del viento, sismos u otros fenómenos naturales peligrosos a los cuales esté expuesto el país.</p> <p>En la justificación se deberá destacar los objetivos y consideraciones incluidas en la normatividad identificada, tales como su alcance de aplicación y tipos de amenazas consideradas, entre otros.</p> <p>En el caso de no existir normas nacionales de seguridad específicas para amenazas puntuales, se podrá validar el indicador con los códigos generales de construcción o similares, que incluyan consideraciones de seguridad frente a fenómenos naturales peligrosos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Bahamas 2017. The Bahamas Building Code (3rd edition), published in 2003 (RR-1B-3a) contains provisions for Wind Loads in Chapter 20, which provides that all buildings must meet section 6 of Stand 7-88 of the American Society of Civil Engineers Minimum Design Loads for Building and other structures, and that all buildings in The Bahamas are to be considered in the hurricane ocean line for the purposes of these requirements.

Traducción:

Bahamas 2017. El Bahamas Building Code (3a edición), publicado en 2003 (RR-1B-3a) contiene disposiciones para cargas de viento en el Capítulo 20, los que establecen que todos los edificios deben cumplir con la sección 6 del *Stand 7-88* de la *American Society of Civil Engineers Minimum Design Loads for Building and other structures*, y que todos los edificios en las Bahamas deben considerarse en la línea oceánica de los huracanes para efectos de estos requisitos.

EI SALVADOR 2016. EL REGLAMENTO PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES (Aprobado por Decreto Ejecutivo N° 105 de fecha 23/10/2016, Publicado en el Diario Oficial N° 204, Tomo 333, de fecha 30/10/1996 (RR-1B-3) contiene los requisitos mínimos para el diseño estructural, la ejecución, supervisión estructural y el uso de las construcciones, ya sean públicas o privadas. El Reglamento es aplicable a todas las construcciones nuevas efectuadas a partir de su entrada en vigencia, así como a las preexistentes que puedan ser objeto de modificación, reparación o demolición. Asimismo, se establece que los procedimientos de diseño para las acciones de sismo y viento, así como los requisitos específicos de diseño y construcción para determinados materiales y sistemas estructurales están definidos en Normas Técnicas que forman parte de este Reglamento. En particular, en el CAPITULO 4 “*DISEÑO POR SISMO*” y el CAPITULO 5 “*DISEÑO POR VIENTO*”, contenidos en el Título II “Criterios de Diseño Estructural”, establecen las bases y requisitos generales mínimos de diseño para que las estructuras tengan seguridad adecuada ante los efectos sísmicos y el viento respectivamente.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Jamaica 2013. The International Building Code which is referenced by the National Building Code of Jamaica (2009) deals very extensively with earthquake and wind resistant designs. These will be made mandatory under the National Building Act which is currently being reviewed in parliament.

Traducción:

Jamaica 2013. El *International Building Code* al que hace referencia el *National Building Code* de Jamaica (2009), trata muy extensamente con diseños resistentes a terremotos y vientos. Estos serán obligatorios en virtud de la *National Building Act*, que actualmente está siendo revisado por el parlamento.

Código RR-1B-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿La normatividad que regula los aspectos técnicos de construcciones, define parámetros de diseño especiales para edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador se relaciona con otros dos indicadores del iGOPP: el IR 1B-18 que trata sobre las “edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica” y el RR 1A-3 que trata sobre los códigos de construcción.</p> <p>Este indicador se refiere a un criterio de calidad de la normativa de construcciones del país, en particular se indaga si es que en dicha normatividad se otorga un tratamiento especial (en forma de parámetros específicos) para el diseño de las edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” consideradas en la normatividad del país (ver indicador IR 1B-18). 2. Identificar normatividad nacional existente sobre códigos de diseño de edificaciones e infraestructura del país, u otro tipo de normatividad de carácter nacional, y revisar si establece parámetros de diseño especiales para las edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica”. 3. Identificar normativa relacionada con los sectores a cargo del desarrollo de las edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” que son consideradas en el país, para analizar si en dichas normas sectoriales se establecen parámetros de diseño especiales para estas infraestructuras. 4. De ser necesario entrevistarse con representantes de colegios de profesionales (ingenieros y arquitectos), del ente rector de la GRD y/o de los sectores involucrados sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-18	En base a la respuesta a este indicador se puede tener claridad de cuales son edificaciones esenciales, indispensables o infraestructura crítica consideradas en el país.
RR-1A-3 RR-1B-3 RR-1B-4 RR-1B-5	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, en la normatividad identificada debe establecerse un tratamiento o régimen especial en cuanto al diseño de aquellas edificaciones consideradas “esenciales, indispensables o infraestructura crítica”.</p> <p>En el caso que no exista normatividad que defina explícitamente a las edificaciones “esenciales”, “indispensables” o “infraestructura crítica” (IR-1B-18), aún podría cumplirse el presente indicador, pero en la justificación se deberá sustentar la razón por la cual el tipo de infraestructura considerado en la norma o código de construcción propuesto como verificable se le confiere dicha importancia a efectos de este indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 (RR-1B-4a), contenido en un Anexo del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, por el cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo resistentes - NSR-10, y que actualiza la Ley 400 de 1997, esta norma integra en la sección A.2.5 el *"Coeficiente de importancia"*, donde se prescribe un mayor grado de conservatismo en el diseño sismo resistente de aquellas edificaciones que son indispensables para la atención de la emergencia y la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo fuerte. En esta norma, se indica que son edificaciones esenciales o indispensables las de los grupos III y IV, y se incluyó a las escuelas dentro del Grupo de Uso III de edificaciones de atención a la comunidad.

Chile 2013. Norma NCh433 modificada en el año 2009 - Diseño sísmico de edificios. Categoriza las edificaciones según su ocupación, según "categoría de ocupación", bajo la categoría de ocupación IV se incluyen:

- “- Edificios y otras estructuras clasificadas como edificios gubernamentales, municipales, de servicios públicos o de utilidad pública....*
- Edificios y otras estructuras clasificadas como instalaciones esenciales cuyo uso es de especial importancia en caso de catástrofes...*
- Edificios y otras estructuras (incluyendo, pero no exclusivamente, instalaciones que manufacturan, procesan, manipulan, almacenan, usan o desechan sustancias tales como combustibles peligrosos, productos químicos peligrosos, residuos peligrosos o explosivos) que contienen sustancias peligrosas en cantidades superiores a las establecidas por la Autoridad Competente"*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. La República de Paraguay no cuenta con documentos normativos de carácter nacional para el diseño y construcción de edificaciones. En el año 2012 el Ministerio de Obras Públicas impulsó la creación de una ley o código de edificación en Paraguay, el cual no fue aprobado, por lo cual la elaboración y cumplimiento de los códigos de diseño y construcción sigue siendo de responsabilidad de las municipalidades. Por lo cual no fue posible identificar un reglamento/código de construcción de carácter nacional o documentos normativos similares de carácter nacional que permita verificar esta condición.

Código RR-1B-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿La norma nacional sismo-resistente, o similar (por ejemplo, viento-resistente), ha sido revisada y actualizada al menos una vez en los últimos 10 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador se refiere al código o normatividad nacional utilizada para verificar el indicador RR-1B-3. En este caso se mide un criterio de desempeño basado en la buena práctica por la que, en determinados lapsos, dicha normatividad sea sometida a su revisión y actualización.</p> <p>Para considerar este indicador satisfecho debería verificarse una de estas dos condiciones: (1) la vigencia de una norma expedida o aprobada no hace más de 10 años, o (2) si la vigencia de dicha norma es mayor a ese periodo, que haya sido sometida a alguna revisión y actualización en los últimos 10 años.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los fenómenos o peligros naturales más relevantes para el país. 2. Analizar la normatividad utilizada para verificar el indicador RR-1B-3. 3. Determinar si dicha norma fue aprobada en los últimos diez años. Caso contrario, verificar si ha sido actualizada o revisada al menos una vez en los últimos 10 años. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de colegios de profesionales (ingenieros y arquitectos), o del ente rector de la GRD sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-3	La normatividad utilizada para verificar este indicador debe ser utilizada para el cumplimiento de la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada para el diseño de infraestructura que las hagan resistentes a la acción del viento, sismos u otros fenómenos naturales peligrosos debe haber sido aprobada o actualizada al menos una vez en los últimos 10 años.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

<p>Nicaragua 2016. La norma sismo-resistente ha sido revisada al menos una vez en los últimos 10 años ya que el Ministerio de Transporte e Infraestructura, mediante la Resolución Ministerial 01-2007, de fecha 11 enero de 2007, declaró el inicio de la vigencia del Reglamento Nacional de Construcción (RNC), señalando en el Considerando IV "... <i>que después 24 años de promulgado el Reglamento vigente y dado el avance de la ingeniería sismoresistente, así como de nuevos métodos de diseño estructural, de nueva información geofísica, geotécnica y de vientos, es necesaria su actualización</i>". De manera que dicho texto normativo sí ha sido revisado en los últimos 10 años. Actualmente el Reglamento Nacional de la Construcción se encuentra en proceso de actualización. Este proceso es coordinado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y Codirección del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (CD-SINAPRED), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de la Cooperación Técnica "<i>Apoyo a la Implementación del Programa de Gestión Integral de Riesgos de Desastres de Nicaragua (PGIRDN) ATN/OC-14249-NI (NI-T1188)</i>". Las Normas en actualización son las siguientes: (i) Normas Mínimas de Diseño y Construcción General para Mampostería; (ii) Normas Mínimas de Diseño y Construcción General para Concreto; y (iii) Mínimas de Diseño y Construcción General para Acero. Con el aporte del sector privado el MTI está elaborando las Mínimas de Diseño y Construcción General con materiales prefabricados (fibrocemento)."</p>
<p>Trinidad y Tobago 2018. The engineering codes mandated by the Ministry of Works and Transport (MOWT) in the Structural Guidelines for Trinidad and Tobago, Designs Engineering Branch, Construction Division, MOWT 2017 (RR-1B-5a) are international standards e.g. American Society of Civil Engineers ASCE/SEI 7-16 (Earthquake Loads) (RR-1B-5b). All the standards included in the Guidelines are updated or confirmed at least every 5 years. The 10-year Seismic Microzonation studies of the major cities are currently (2016) underway. It is a collaborative effort between the Town and Country Planning Division and the Seismic Research Center. Its objective is to perform microtremors measurements and seismic refraction tests in select areas in Trinidad and Tobago, for use in technical microzonation studies. To develop maps showing details of the different levels of a particular geotechnical hazard that may be triggered by an earthquake in the main cities, Port of Spain, San Fernando and Scarborough.</p>
<p>Traducción:</p> <p>Trinidad Y Tobago 2018. Los códigos de ingeniería exigidos por el Ministerio de Obras y Transportes (MOWT) en las Structural Guidelines para Trinidad y Tobago, División de Ingeniería de Diseños, División de Construcción, MOWT 2017 (RR-1B-5a), son estándares internacionales, por ejemplo, la <i>American Society of Civil Engineers ASCE/SEI 7-16</i> (para cargas de temblores) (RR-1B-5b). Todos los estándares incluidos en las <i>Structural Guidelines</i> se actualizan o confirman al menos cada 5 años. Los estudios de microzonificación sísmica de 10 años de las principales ciudades están actualmente en curso (2016). Es un esfuerzo de colaboración entre la <i>Town and Country Planning Division</i> y el <i>Seismic Research Center</i>. Su objetivo es realizar mediciones de micro temblores y pruebas de refracción sísmica en áreas seleccionadas de Trinidad y Tobago, para su uso en estudios técnicos de microzonificación. Desarrollar mapas que muestren detalles de los diferentes niveles de peligro geotécnico provocado por un terremoto en las principales ciudades, Puerto España, San Fernando y Scarborough.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>
<p>El Salvador 2016. De acuerdo con la resolución emitida por la Oficina de Información y Respuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con fecha 20 de abril de 2016 con referencia MARN-OIR-Nº 0109-2016, la norma sísmica-resistente no ha sido revisada. Por Ley, la competencia es del Ministerio de Obras Públicas, específicamente del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. En la entrevista con la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo-DACGER del MOP manifestaron que las Normas Técnicas de Diseño por Sismos fueron aprobadas en 1993 y sancionadas por el presidente en 1994, y que en 2014 este Ministerio coordinó un equipo interinstitucional para elaborar los TdR que permita implementar la revisión de la normativa, pero la revisión no se ha concretado todavía. Cabe mencionar que el MARN a través del Observatorio Ambiental, mantiene actualizada la información técnica necesaria (Catalogo Sísmico) para ser utilizada en la actualización de la norma sismo-resistente cuando sea requerida.</p>

Código RR-1B-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿La normatividad que regula la gestión ambiental integra en sus objetivos, metas o resultados de forma explícita la reducción del riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce la importancia de contar con normatividad en materia ambiental que logre conciliar y compatibilizar sus ámbitos y valores tutelados, con los objetivos y metas de la gestión del riesgo de desastre (GRD), concretamente en su componente de reducción del riesgo. Esto, considerando que se trata de políticas públicas que se refuerzan mutuamente, de manera que es posible generar sinergias respecto de los temas y objetivos comunes o compartidos.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad ambiental vigente en el país, incluida la política ambiental y normatividad relacionada con cambio climático. 2. Analizar si dicha normatividad hace mención explícita a la reducción de riesgo de desastres dentro de sus objetivos, metas o resultados. 3. De ser necesario consultar con representantes del sector ambiental, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8 RR-1B-7 PR-1B-3 RC-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad de la gestión ambiental identificada deberá incluir de manera explícita en su articulado objetivos, metas o resultados relacionados con la reducción del riesgo de desastres, lo cual deberá quedar claramente registrado en la justificación que se entregue para su verificación.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Trinidad y Tobago 2018. The environmental management regulations do address the Disaster Risk Reduction initiative of protection integrated into routine practice. The National Environmental Policy 2006 (RR-1B-6a) dedicates a section "4.10 National Disaster and Environmental Emergencies e.g. (e) Provision of a natural disaster vulnerability assessment in land transfer transactions". Under the Environmental Management Authority (EMA) Act 3 Of 2000 LRO1/2009 (RR-1B-6b), a Certificate of Environmental Clearance (regulations 2006) may require Environmental Impact Assessment which includes "*an identification of the potential hazards and an assessment of the level of risk that may be caused by the proposed activity and an account of the measures envisaged to address any environmental emergencies that may result from the activity*". The Office of Disaster preparedness and Management (ODPM) is invited to review and provide feedback on the Environmental Impact Assessment (EIA) documents.

Traducción:

Trinidad y Tobago 2018. La normatividad de gestión ambiental aborda la iniciativa de RRD de protección integrada dentro de una práctica habitual. La *National Environmental Policy* 2006 (RR-1B-6a) dedica la sección: "*4.10 Desastres Nacionales y Emergencias Ambientales, por ejemplo (e) una evaluación de vulnerabilidad ante desastres naturales en transacciones de transferencia de tierras*". Según la *Environmental Management Authority (EMA)* (EMA) 3 Of 2000 LRO1 / 2009 (RR-1B-6b), un Certificado de Autorización Ambiental (regulaciones 2006) puede requerir una Evaluación de Impacto Ambiental que incluye "*una identificación de los peligros potenciales y una evaluación del nivel de riesgo que puede causar la actividad propuesta y una descripción de las medidas previstas para abordar cualquier emergencia ambiental que pueda resultar de la actividad*". La *Office of Disaster preparedness and Management (ODPM)* es invitada a revisar y comentar sobre los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

Ecuador 2016. Las "Políticas Básicas Ambientales del Ecuador" (RR-1B-6a) plantean en su Artículo 15 que los riesgos y desastres son problemas ambientales prioritarios del país: "*El Estado Ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la gestión ambiental en el país, dará prioridad al tratamiento y solución de los siguientes aspectos reconocidos como problemas ambientales prioritarios del país*", entre los que incluye explícitamente: "*Los riesgos, desastres y emergencias naturales y antrópicas*." Se considera que, al especificar los riesgos como un tema prioritario a abordar desde las políticas de gestión ambiental, se está cumpliendo con el indicador. Cabe mencionar que en virtud del Decreto N° 1589 en el Registro Oficial N° 320 de 25/07/2006 (RR-1B-6b) las Políticas Básicas Ambientales fueron incorporadas como parte integral del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente-TULAS (RR-1B-6c), que fuera aprobado Decreto Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento 2, el 31 de marzo de 2003, que si bien incluía en su índice de contenidos las Políticas Básicas Ambientales, se habían omitido en el cuerpo del documento en su momento.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. Se cuenta con la Ley N° 25.675, General del Ambiente, del 28 de noviembre de 2002, la cual establece en su Artículo 2 que la política ambiental nacional deberá cumplir una serie de objetivos, entre los que se encuentra el de "*k. Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental*". Esta normatividad, sin embargo, no integra en sus objetivos, metas o resultados de forma explícita la reducción del riesgo de desastres asociado a fenómenos naturales (solamente los causado por acción humana como sería la contaminación); por lo tanto, la condición no se cumple.

Código RR-1B-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector ambiental o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Revisar la normatividad del sector ambiental, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales de cambio climático. 5. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector ambiental en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 6. De ser necesario, consultar con representantes del sector ambiental, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8 RR-1B-6 PR-1B-3 RC-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector ambiental en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-1	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de ambiente para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad del sector ambiental vigente que considere, de forma explícita dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p> <p>Así mismo, no deben confundirse las responsabilidades asignadas para la prevención o reducción de riesgos ambientales con los relacionados con la reducción de riesgo de desastres frente a fenómenos naturales peligrosos.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Honduras 2104. ACUERDO NUMERO 109-93 - REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL AMBIENTE (RR-1B-7a) *“Art 13 - ...la Secretaria de Ambiente tendrá las siguientes funciones:*

f) Colaborar con las instituciones competentes para prevenir y controlar desastres, emergencias y otras contingencias ambientales... Art. 28 - En aplicación de esta Ley y de las leyes sectoriales respectivas, corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho del Ambiente y las demás Secretarías de Estado e instituciones descentralizadas competentes, las atribuciones siguientes:

h) La prevención y control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales que incidan negativamente en parte o en todo el territorio nacional; Art 78.-Es obligación de la Secretaría de Ambiente participar conjuntamente con la Comisión Permanente de Contingencias en la planificación para la prevención, mitigación, atención y rehabilitación de los desastres naturales...”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Brasil 2017. A LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, que Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, não define a responsabilidade de reduzir o risco de desastres no âmbito de suas competências. A Lei Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências, tampouco define a responsabilidade de reduzir o risco de desastres no âmbito de suas competências. Por sua vez, a LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997, que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, tampouco define a responsabilidade de reduzir o risco de desastres no âmbito de suas competências

Traducción:

Brasil 2017. LA LEY Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981, que establece la Política Nacional del Medio Ambiental, sus fines y mecanismos de formulación y aplicación, y otras medidas, no define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el marco de sus competencias. La Ley Nº 12.187, de 29 de diciembre de 2009, que establece la Política Nacional sobre Cambio Climático (PNMC) y otras medidas, no define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres dentro de su alcance. A su vez, la Ley Nº 9.433, de 8 de enero de 1997, que establece la Política Nacional de Recursos Hídricos, y crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que reglamenta el inciso XIX del artículo art. 21 de la Constitución Federal, y modifica el artículo 1 de la Ley Nº 8.001, del 13 de marzo de 1990, que modificó la Ley Nº 7.990, del 28 de diciembre de 1989, no define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres dentro de su alcance.

Código RR-1B-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector agricultura o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector agricultura, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector agricultura en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector agricultura, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-9 PR-1B-4 RC-1B-2	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector agricultura en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-2	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de agricultura para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, deberá existir normatividad del sector agricultura vigente que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), Área de Política Agropecuaria y Rural (APAR), en 2011 (RR-1B-8a) considera: "Lineamiento Estratégico 4.2.3.1 Gestión Integral del Riesgo. Se impulsará una visión más integral de la gestión del riesgo, que minimice los riesgos y amenazas de la introducción de materiales y prácticas de producción; que defina o actualice lineamientos para la prevención y control de plagas, desastres por fenómenos naturales y que fortalezca la coordinación interinstitucional para la implementación de las acciones correspondientes."

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. Se analizó todo el marco normativo del sector agricultura y se identificó el documento "Políticas Agropecuarias al 2025", publicado en 2015 que establece como política No 4: "*articular el marco de prioridades de política ambiental, incluyendo la gestión de riesgos, la resiliencia y la adaptación al cambio climático*". Si bien es parte de esta política: "*fortalecer la gestión del conocimiento en el sector agropecuario*" y es estrategia de ésta "*investigar para el desarrollo de variedades mejoradas de cultivos que sean adecuadas para múltiples agroecosistemas y prácticas agrícolas y resistentes al cambio climático*", no se encontraron otras referencias sobre la responsabilidad del sector de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. La inexistencia de esta responsabilidad en la normatividad del sector fue ratificada en la entrevista con el delegado de ese Ministerio.

Código RR-1B-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector salud o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector salud, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector salud en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario consultar con representantes del sector salud, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-10 PR-1B-5 RC-1B-3	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector salud en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-3	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de salud para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, deberá existir normatividad del sector salud vigente que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p> <p>Así mismo, no debe confundirse las responsabilidades asignadas para la prevención o reducción de riesgos sanitarios con los relacionados con la reducción de riesgo de desastres frente a fenómenos naturales peligrosos.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Código de Salud (Decreto N° 90-97 aprobado por el Congreso de la República (RR-1B-9a) establece lo siguiente: *“ARTICULO 76: De los desastres y calamidades públicas. El Ministerio de Salud conjuntamente con otras instituciones del Sector y otros sectores participarán en la formulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos orientados a la prevención y mitigación del impacto de desastres y calamidades públicas”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belize 2017. The public health regulations only incorporate the responsibility and specific measures to reduce risk related with vector control, through the elimination of stagnant water and regular spraying. As vector control measures are not considered “disaster” risk reduction actions, the condition is considered as not met. The Public Health Act Chapter 40, of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011 doesn’t include dispositions to allow uphold the positive assessment of the condition. In addition, there is a Hurricane Disaster Plan, revised in August 2004, and developed by the National Medical Care and Public Health Committee (NMCPHC) Ministry of Health and the Environment. However, it doesn’t include risk reduction actions as well as not being endorsed by any regulatory instrument.

Traducción:

Belice 2017. La normativa de salud pública incorpora solo la responsabilidad y las medidas específicas para reducir el riesgo relacionado con el control de vectores, mediante la eliminación del agua estancada y la fumigación regular. Las medidas de control de vectores no se consideran acciones de reducción de riesgos de desastre, la condición se considera no cumplida. El Capítulo 40 de la *Public Health Act*, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, no incluye disposiciones que permitan mantener la evaluación positiva de la condición. Además, existe un Plan de desastres por huracanes, revisado en agosto de 2004, y desarrollado por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente del Comité Nacional de Atención Médica y Salud Pública (NMCPHC). Sin embargo, no incluye acciones de reducción de riesgos y no está respaldado por ningún instrumento regulador.

Código RR-1B-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10. ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector vivienda o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector vivienda, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector vivienda en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario consultar con representantes del sector vivienda, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RC-1B-4 PR-1B-6 RC-1B-4	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector vivienda en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-4	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de vivienda para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, deberá existir normatividad del sector vivienda vigente que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2012-2030. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos sin fecha de publicación (RR-1B-10a) establece en su numeral *“6. Ejes de la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos... Eje Ambiental ... Los subtemas que contempla el eje Ambiental son los siguientes: a) Prevención del riesgo b) Viviendas afectadas por desastres naturales, c) Cambio climático d) Gestión residencial del recurso hídrico...”* y establece consideraciones y Lineamientos: *“Prevención del riesgo.... Lineamiento. Se desarrollarán proyectos habitacionales en zonas de baja vulnerabilidad, en función de la sostenibilidad del asentamiento humano, su aptitud ambiental, accesibilidad a servicios y fuentes de empleo e ingresos.”*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belize 2017. While the country has no adopted building code, the Belize Building Act Chapter 131 (RR-1B-10a), of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, does include provisions which enable the Central Building Authority to regularly assess the safety of buildings and, when necessary, take actions in case a building is considered a risk, linked to specific hazards. With the explicit mention of responsibilities and concrete actions, the condition is considered as met. In Part III “Building Permits and Control”, section 29 of the Act it states that *“Every person who erects or owns a public building shall cause it to be examined at least once every four years [...] for the purpose of ascertaining whether it is safe for the purpose for which it was erected [...]”*. In addition, within the same Part, section 34, subsection (1) mandates that *“Where a structure is considered by the Authority to be unable to withstand a hurricane, to be ruinous or so far dilapidated as to have become unfit for use or occupation, or to be from any cause whatever in a structural condition dangerous or prejudicial to the property in, or inhabitants of, the neighborhood, the Director may advise the Authority to serve a notice in writing to the owner of such structure requiring him [...] to take down, secure, repair or rebuild it, or any part thereof, or otherwise to put it in a state of good repair[...]”*. The Housing and Town Planning Act Chapter 182 of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, in Part II “Powers, Functions, etc., of Central Authority”, section 15, subsection (1) states that *“Where the Central Authority, [...] is satisfied as respects any area that the housing conditions in that area are dangerous or injurious or likely to be injurious to the health and welfare of the inhabitants [...]”* it can take the necessary measures to address these issues. However, this has a palliative approach and no prospective risk reduction planning consideration are contained in the Act.

Traducción:

Belice 2017. Si bien el país no ha adoptado un código de construcción, el Capítulo 131 (RR-1B-10a) de la Ley de Construcción de Belice, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, incluye disposiciones que permiten a la Autoridad Central de Construcción evaluar periódicamente la seguridad de los edificios y, cuando sea necesario, tomar medidas en caso de que un edificio se considere un riesgo, relacionado con riesgos específicos. Con la mención explícita de responsabilidades y acciones concretas, la condición se considera cumplida. En la Parte III "*Permisos y control de construcción*", la sección 29 de la Ley establece que "*Toda persona que erija o posea un edificio público deberá hacer que se examine al menos una vez cada cuatro años [...] con el fin de determinar si es seguro para el propósito para el cual fue erigido [...]*". Además, dentro de la misma Parte, la sección 34, subsección (1) ordena que "*Cuando la Autoridad considere que una estructura no puede resistir un huracán, que sea ruinosa o que esté en mal estado por no ser apta para su uso u ocupación, o por cualquier causa, en cualquier condición estructural peligrosa o dañina para la propiedad o los ocupantes, el Director puede aconsejar a la Autoridad que notifique por escrito al propietario de dicha estructura que lo requiera [...] para desmontarlo, asegurarlo, repararlo o reconstruirlo, o cualquier parte del mismo, o ponerlo en buen estado [...]*". El Capítulo 182 de la Ley de Vivienda y Planificación Urbana de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, en la Parte II "*Poderes, Funciones, etc., de la Autoridad Central*", sección 15, subsección (1) establece que "*Donde la Autoridad Central, [...] Está convencido que, respecto de cualquier área de la vivienda, está en condiciones peligrosas o perjudiciales o que pueden ser perjudiciales para la salud y el bienestar de los habitantes [...] puede tomar las medidas necesarias para abordar estos problemas*". Sin embargo, esto tiene un enfoque paliativo y la Ley no contiene ninguna consideración prospectiva de planificación de reducción de riesgos.

Código RR-1B-11

Pregunta de respuesta cerrada	
11. ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector educación o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares. (NOTA: no debe confundirse con el tema curricular que ya se está considerando en el indicador IR-2-1).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector educación, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector educación en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector educación, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-12 PR-1B-7 RC-1B-5	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector educación en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-5	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de educación para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, deberá existir normatividad del sector educación vigente que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. La Resolución Ministerial N°19234, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Educación para la Gestión del Riesgo del Ministerio de Educación y Cultura, aprobada el 18 de julio de 2011 (RR-1B-11a), permite verificar esta condición ya que dentro del eje estratégico del plan que hace referencia al Fortalecimiento de la Gestión Institucional para la Reducción de Riesgos, en el cual se incluyen entre otros los siguientes objetivos específicos: *"Gestionar recursos financieros para la implementación de la gestión y reducción de riesgos en las instituciones educativas. Establecer estrategias para la sostenibilidad de la Gestión y reducción de riesgos en las comunidades educativas."*, *"Fortalecer y potenciar la capacidad presupuestaria del Ministerio de Educación y Cultura para la gestión y Reducción de Riesgos"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. Se cuenta con la Resolución Vice Ministerial N° 016-2010-ED que aprueba las *“Normas para la educación preventiva ante sismos en las instituciones educativas públicas y privadas”*. Con base en esta resolución, se ha venido trabajando en la construcción de: (i) guía metodológica para la elaboración del Plan de Gestión del Riesgo en las instituciones educativas; y (ii) implementación del plan de educación preventiva frente a sismos 2010 en el marco del Decreto Supremo N° 037-2010-PCM, que aprueba el *“Plan de Prevención por Sismos 2010”*. Adicionalmente, la Oficina de Infraestructura Educativa (OINFE) aplica las Normas Técnicas de Diseño de Espacios Educativos en la construcción de Infraestructura Educativa que incluye análisis de vulnerabilidad y aplicación del Reglamento Nacional de Construcción. Finalmente se cuenta con el Plan Estratégico de Prevención y Atención de Desastres del sector educación, de julio 2004. No obstante, lo anterior, la RVM N° 016-2010-ED, no establece de forma específica la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en las instituciones educativas, aunque esto se puede "inferir" de la norma, en rigor el indicador no se cumple.

Código RR-1B-12

Pregunta de respuesta cerrada	
12. ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector turismo o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector turismo, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector turismo en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector turismo sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-13 PR-1B-8 RC-1B-6	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector turismo en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-6	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de turismo para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, deberá existir normatividad del sector turismo vigente que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/> “

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. La Ley General de Turismo (RR-1B-12a), publicada el 17 de junio de 2009 (última reforma 8 de abril del 2013) dispone en el Capítulo I, Artículo 4: “... X. *Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;*”

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. La Resolución N° 417-2012-MINCETUR del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobó la creación de un grupo de trabajo para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29664 (Ley de creación del SINAGERD) a efecto de articular y transversalizar la GRD en sus instrumentos de gestión. No obstante, el sector no dispone de una norma propia en la cual se defina su responsabilidad para reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. Actualmente, se rige exclusivamente por la Ley Nacional del SINAGERD.

Código RR-1B-13

Pregunta de respuesta cerrada	
13. ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector transporte, entendido como obras viales, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad del sector transporte, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 2. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector transporte en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector transporte, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14 PR-1B-9 RC-1B-7	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector transporte en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-7	En el caso de verificar la asignación de recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad del sector transporte vigente que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. LEY N° 165 – Ley General de Transporte del 16 de agosto de 2011, CAPÍTULO QUINTO, GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Artículo 89. (GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES). La autoridad competente del nivel central del Estado, será responsable de elaborar la normativa y vigilar su cumplimiento a fin de que todos los planes, programas y proyectos del sector de transporte en sus diferentes modalidades, incorporen la gestión de riesgos de desastres, basados en la identificación y zonificación en áreas vulnerables respaldada en base a datos geográficos y en forma coordinada con los sistemas de planificación y gestión territorial en los niveles central, departamental y municipal. “Artículo 90. (PLAN DE CONTINGENCIA). La autoridad competente del nivel central del Estado normará y supervisará que se incorpore en los planes estratégicos y operativos de todas las autoridades competentes, operadores del servicio de transporte en todas sus modalidades y aquellos que prestan servicios logísticos complementarios al transporte, acciones de reducción de riesgo y respuesta a emergencias y desastres”. Agrega además elementos de asignación presupuestaria para el sector y responsabilidades relacionadas con el SINAGER

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. El Decreto N° 27917 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte del 31 de mayo de 1999 sólo establece “Artículo 15. Funciones de obras públicas... inciso e. Coordinar con la Comisión Nacional de Emergencias en los eventos tendientes a la prevención y atención de situaciones de emergencia.” Por otra parte, en su Artículo 16, establece las unidades asesoras entre las que se encuentra la Unidad de atención de emergencias y desastres y en su Artículo 20. Atención de Emergencias y Desastres. Le corresponderá: “a. Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para que el Ministerio brinde una adecuada respuesta ante las emergencias y desastres. b. Coordinar adecuadamente con la Comisión Nacional de Emergencias ante las emergencias y desastres. c. Desarrollar los sistemas idóneos que garanticen una adecuada y oportuna información entre las diferentes unidades de la División de Obras Públicas y de esta con la Comisión Nacional de Emergencia”. De lo anterior se desprende, que la normativa referida sólo considera coordinar acciones preparatorias y emergentes con la CNE, pero no establece responsabilidades en el marco de las competencias del sector para la reducción del riesgo de desastres.

Código RR-1B-14

Pregunta de respuesta cerrada	
14. ¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector agua y saneamiento, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de agua y saneamiento pueden realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector, regulador y prestadores) del sector de agua y saneamiento. 2. Revisar la normatividad del sector agua y saneamiento, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 3. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector agua y saneamiento en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector agua y saneamiento, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-15 PR-1B-10 RC-1B-8	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector agua y saneamiento en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-8	En el caso de verificar la asignación de recursos a alguno de los actores relevantes del sector agua y saneamiento para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, deberá existir normatividad vigente aplicable al menos uno de los actores relevantes del sector agua y saneamiento (rector, regulador y prestadores) que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.

Así mismo, no debe confundirse las responsabilidades asignadas para la prevención o reducción de riesgos ambientales con los relacionados con la reducción de riesgo de desastres frente a fenómenos naturales peligrosos.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Chile 2013. Decreto N° 1199 (2004) Reglamento de las Concesiones Sanitarias de Producción y Distribución de Agua Potable y Recolección y Disposición de Aguas Servidas y de las Normas de Calidad de Atención a los Usuarios de estos Servicios, considera: Artículo 97° *"En conformidad con la respectiva normativa vigente, el prestador del servicio de distribución de agua potable y, en su caso, el concesionario de producción debe garantizar la continuidad del servicio, la que sólo podrá verse afectada por razones de fuerza mayor calificadas por la Superintendencia o debido a interrupciones, restricciones y racionamientos programados e imprescindibles para la prestación del servicio, los que deberán ser comunicados al usuario, con a lo menos, 24 hrs. de anticipación..."*. Art 99: *"El prestador deberá tener en aplicación un programa permanente de mantención preventiva de sus redes de alcantarillado. Igualmente, el prestador tendrá la obligación de mantener disponible y sin interrupción la red pública para la evacuación de las aguas servidas provenientes de los inmuebles, de modo que tal red no produzca inundaciones, filtraciones, daños u otros efectos, salvo causa de fuerza mayor, desperfectos causados por el mal uso o ejecución defectuosa de la instalación domiciliaria no imputable a la empresa"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. Section 3(3) of Chapter 196 of the Water and Sewerage Corporation Act 1976(updated in 1996) vests the control and administration of water in the Water and Sewerage Corporation (WSC). Section 5(1) of that Act states that the WSC should *"ensure the application of appropriate standards and techniques for the investigation, use, control, protection, management and administration of water"*, but does not specifically mention disaster risk or climate change. The online WSC Standards & Procedures for Subdivision Development provide the corporation with the power to provide specifications of privately developed utilities and to test them. None of these mention risk reduction responsibilities. Despite the current lack of regulations related to this indicator, it is important to underscore that there are some sectoral practices that point out into the right direction. For instance, a national transfer of water supply was switched from the barging of water from ground water lenses in a family island in Andros to Nassau, to reliance on desalination plants, in order to reduce the increasing risks from hurricanes to the national water supply. The WSC also confirmed in an interview that when they purchase new water desalination plants from private companies, they now require that these plants meet certain hurricanes standards in addition to the requirements in the Building Code.

Bahamas 2017. La Sección 3 (3) del Capítulo 196 de la Water and Sewerage Corporation Act de 1976 (actualizada en 1996) confiere el control y la administración del agua a la Corporación de Agua y Alcantarillado (WSC). La Sección 5 (1) de esa Ley establece que la WSC debe "*garantizar la aplicación de normas y técnicas apropiadas para la investigación, uso, control, protección, gestión y administración del agua*", pero no menciona específicamente el riesgo de desastres o el cambio climático. Los Estándares y Procedimientos para el Desarrollo de Subdivisiones *on line* de la WSC, proporcionan a la corporación el poder para establecer especificaciones sobre servicios prestados por el sector privado y ponerlas a prueba. Ninguno de estos menciona la responsabilidad de reducción de riesgos. A pesar de la actual falta de normativa relacionada con este indicador, es importante subrayar que hay algunas prácticas sectoriales que apuntan en la dirección correcta. Por ejemplo, la transferencia del suministro de agua se cambió de transportar agua subterránea en barcazas de una isla en Andros a Nassau, a depender de plantas de desalinización, para reducir los riesgos crecientes de los huracanes en el suministro nacional de agua. El WSC también confirmó en una entrevista que cuando compran nuevas plantas de desalinización de agua de compañías privadas, ahora requieren que estas plantas cumplan ciertos huracanes estándar además de los requisitos del Código de Construcción.

Código RR-1B-15

Pregunta de respuesta cerrada	
15. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector telecomunicaciones o de sus distintas instancias, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector telecomunicaciones (entendido que incluya al menos los servicios de telefonía) participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de telecomunicaciones puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de reducir el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector, regulador y proveedores) del sector telecomunicaciones. 2. Revisar la normatividad del sector telecomunicaciones, la cual también podría incluir las políticas, estrategias, planes y programas nacionales. 3. Identificar si en dicha normatividad se establecen responsabilidades al sector telecomunicaciones en materia de reducción de riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector telecomunicaciones, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-16 PR-1B-11 RC-1B-9	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector telecomunicaciones en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-9	En el caso de verificar la asignación de recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad vigente del sector telecomunicaciones, aplicable al menos uno de los actores relevantes del sector (esto es, los encargados de la rectoría, regulación/superintendencia o la prestación de servicios), que considere, de forma explícita, dentro de las responsabilidades del sector la realización de acciones, proyectos o programas que reduzcan el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias sectoriales.

Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la reducción del riesgo es parte de ésta. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, 2009-2014, del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Viceministerio de Telecomunicaciones, 13 de mayo de 2009 (RR-1B-15a) *“3.4 Institucionalidad actual del sector Telecomunicaciones, 3.4.1 Rectoría. La rectoría del Estado es un componente esencial de la gobernabilidad del Sector Telecomunicaciones. ... El Ministro Rector será el responsable de alinear el desarrollo del sector, de acuerdo con las prioridades nacionales en cuanto a competitividad, universalidad, solidaridad, cobertura, derecho de los consumidores, reducción de los riesgos de desabastecimiento, sostenibilidad ambiental, social y económica.”*. Asimismo, establece en el numeral 4.4.3 los ejes del PNDT: *“ a. Telecomunicaciones ... a.7 Asegurar una plataforma de telecomunicaciones con calidad ambiental, cuyo impacto sobre el ambiente sea el menor posible, contribuya a la conservación del ambiente, así como a la prevención y mitigación de efectos por desastres naturales.”* y *“5.1.3 Eje Ambiental: ... a. Línea estratégica: Protección Ambiental... Objetivo Específico No. 3: Garantizar las posibilidades que ofrecen las TIC para mejorar la calidad ambiental del país, lo cual incluye medidas sobre la prevención, mitigación y adaptación de los desastres naturales. ... Acciones y medidas: ... b. Desarrollar, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, planes y proyectos de fortalecimiento de las redes de comunicación en áreas de mayor vulnerabilidad socioambiental y económica, que incluye sistemas de alerta temprana. c. Identificar la condición del país en cuanto a la interconexión regional e internacional de las redes digitales de información para prevención de catástrofes...”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones dispone a través de la Resolución Ministerial N° 568-2007-MTC, el *“contrato tipo para el régimen de concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones”*. En éste, la cláusula 6, numeral 12 establece *“Las obligaciones de las empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones en caso de emergencia o crisis...”*. Por otra parte, el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones - (OSIPTEL), aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece indicadores de reparación de fallas en el servicio. No obstante, estas normas están relacionadas con la rehabilitación del servicio en caso de desastre y no con la reducción de riesgos como tal, por lo tanto, la condición no se cumple.

Código RR-1B-16

Pregunta de respuesta cerrada	
16. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública dirigida al desarrollo nacional, que además resulta ser transversal e incluyente, y que por esa razón involucra a todas las instancias de los sectores de la administración pública. Entonces, siguiendo esa lógica, se puede afirmar como indispensable que la normatividad de cada uno de los sectores establezca obligaciones para la realización de actividades de GRD, concretamente aquellas de reducción del riesgo ejecutadas en el ámbito de sus competencias.</p> <p>Este indicador se valora que dentro del conjunto de responsabilidades del sector energía, entendido como energía eléctrica, se incorporen funciones enfocadas a reducir los riesgos de desastres que se relacionan con las actividades propias del sector.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector energía participan varias instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Así mismo, podrían existir instituciones responsables de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de energía puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de reducir el riesgo, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que debe cumplimentarlo.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector, regulador) del sector energía. 2. Identificar a las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 3. Indagar en la normatividad del sector energía, incluyendo los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir, si establece responsabilidades de realizar actividades para reducir el riesgo de desastres. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector energía, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-17 PR-1B-12 RC-1B-10	Revisar si la normatividad utilizada para verificar estos indicadores considera la asignación de responsabilidades al sector energía en materia de reducción de riesgo de desastres.
RR-2-10	En el caso de verificar la asignación de recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres, indagar la normatividad que lo permite.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad vigente del sector energía, entendido como energía eléctrica, que satisfaga alguna de las condiciones que se detallan a continuación:

- Que sea aplicable al menos a uno de los actores relevantes del sector de energía (ente rector o regulador) y establezca responsabilidades y funciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en su ámbito de competencias.
- Que establezca responsabilidades y funciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres para las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

Si la normatividad para el cumplimiento asignara responsabilidades en términos generales para la GRD, en la justificación deberá quedar explícito el alcance del concepto de GRD a efectos de esta normatividad, para evidenciar que la reducción del riesgo es parte dicho concepto de GRD. De ser posible, ejemplificar en el texto de la justificación las acciones de reducción de riesgo de desastres consideradas en la normatividad usada para verificar el indicador.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene un Modelo de Administración de Riesgos Institucionales (RR-1B-16a), que contempla entre otros, los siguientes objetivos: *"Identificar, analizar, controlar, evaluar y monitorear los posibles riesgos que enfrenta la entidad y que, de materializarse, pueden limitar o impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales"*. Adicionalmente. *"Establecer mecanismos para la adecuada administración de los riesgos de la CFE y para la definición de las estrategias de control que reduzcan a su mínima expresión, la posibilidad de que se materialicen los riesgos"*. Por otro lado, la CFE proporcionó evidencia de la obligatoriedad de incluir junto con los análisis de riesgos de su infraestructura que se realiza en forma anual *"un programa de las medidas preventivas y correctivas que se realizarán con el fin de eliminar los riesgos detectados"*. Se proporciona como ejemplo un oficio remitido en el 2013 a los gerentes divisionales de distribución solicitando esta información (RR-1B-16b.pdf)

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica no contiene disposiciones específicas relacionadas con la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres para el sector; la única referencia está encaminada a verificar la factibilidad de dotación de servicios de electricidad en base a documento técnico emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Art.65)

Código RR-1B-17

Pregunta de respuesta cerrada	
17. ¿Existe normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto?	
Descripción general del indicador	
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “<i>pre- inversión</i>”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, y exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes.</p> <p>Este indicador busca determinar si en el país se ha tenido en consideración la realización del análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión, con el fin de integrar el riesgo de desastres como un elemento de decisión sobre la factibilidad del proyecto.</p> <p>Por lo anterior, se considera una buena práctica que en la normatividad de los sistemas de inversión pública se exija la obligatoriedad de realizar este tipo de análisis en la etapa de pre-inversión. Lo anterior favorecerá la incorporación de la reducción de los riesgos frente a desastre previo a la ejecución del proyecto.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si el país cuenta con un sistema de inversión pública o banco de proyectos (o el sistema equivalente en el país). 2. Revisar la normatividad de inversión pública, incluyendo la relacionada con alianzas público-privadas, para identificar si se ordena realizar de manera explícita un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto. 3. Revisar la normatividad de GRD y la de contratación de obras públicas, para identificar si en alguna de éstas se ordena realizar de manera explícita un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto. 4. De ser necesario, consultar con representantes de las áreas de inversión de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), o bien, con la autoridad en planificación o programación (o entidad equivalente) para indagar al respecto, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-18 RR-1B-19	Revisar si la normatividad revisada o utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad identificada deberá ordenar de manera explícita la realización de análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto, como requisito para la aprobación de proyectos de inversión pública.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada hace referencia solo al análisis de amenazas, exposición o de vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

En la justificación deberá constar que la normatividad identificada hace referencia explícita que debe realizarse el análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión. Si fuera necesario hacer una interpretación respecto a si dicha normatividad contiene tal mandato, no se dará por cumplido este indicador.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. En la Resolución No. 01-2010, Normas Técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de 18 junio del 2013 (RR-1B-17a), en el Capítulo III *"Normas Generales que orientan el Proceso de Inversión Pública"*, en el inciso k se establece que *"... Las instituciones públicas que formulan proyectos de inversión pública deberán incorporar en el análisis de los mismos la variable de riesgo de desastres..."*, y posteriormente, en el inciso "j", se indica que: *"El Análisis de Riesgo se debe incorporar fundamentalmente en los proyectos Previo Concepto, cuya elaboración requiere estudios de Prefactibilidad y Factibilidad para su ejecución y operación"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. No se encontraron evidencias en el Acuerdo N° 1355 del 19 de diciembre de 2002 referente a la "Aprobación del Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado", que incluye un capítulo que "Norma sobre el proceso de Inversión Pública", que incluye "Normas para la elaboración de los estudios de proyectos en la fase de preinversión". La inexistencia de normatividad que ordene realizar un análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto fue ratificada por el Ministerio de Hacienda en las visitas realizadas en julio de 2016. Cabe mencionar que el Ministerio de Hacienda manifestó que CEPREDENAC y la CEPAL los están apoyando en generar normatividad para integrar el análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto.

Código RR-1B-18

Pregunta de respuesta cerrada	
18. ¿Existe normatividad que ordene integrar en la fase de pre-inversión la realización de estudios de cambio climático?	
Descripción general del indicador	
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “<i>pre- inversión</i>”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes.</p> <p>Este indicador busca determinar si en el país se ha tenido en consideración la realización del análisis del riesgo específicamente relacionado con los efectos potenciales del Cambio Climático (CC) en la fase de pre-inversión, esto con el fin de integrar aspectos de Adaptación al Cambio Climático como un elemento de decisión sobre la factibilidad del proyecto.</p> <p>Se considera una buena práctica que en la normatividad de los sistemas de inversión pública o en la de cambio climático se establezca la obligatoriedad de realizar este tipo de análisis en la etapa de pre-inversión. Lo anterior favorecerá la construcción de infraestructura resiliente ante los efectos potenciales del CC.</p> <p>Cabe mencionar que, por lo general, los estudios de impacto ambiental difieren de los estudios de impacto de los efectos del cambio climático, o no consideran el análisis de estos efectos.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si el país cuenta con un sistema de inversión pública o banco de proyectos (o el sistema equivalente en el país). 2. Revisar la normatividad de inversión pública, incluyendo la relacionada con alianzas público-privadas, para identificar si ordena realizar de manera explícita estudios de cambio climático en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto. 3. Revisar la normatividad de cambio climático y la de contratación de obras públicas, para identificar si se ordena realizar de manera explícita estudios de cambio climático en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto. 4. De ser necesario, consultar con representantes las áreas de inversión de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), o bien, con la autoridad en planificación o programación (o entidad equivalente) para indagar al respecto, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-17 RR-1B-19 RR-1B-20	Revisar si la normatividad revisada o utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad vigente que ordene de manera explícita realizar estudios de cambio climático en la fase de pre-inversión del ciclo del proyecto, como requisito para la aprobación de proyectos de inversión pública.

En la justificación deberá constar que la normatividad identificada hace referencia explícita a que debe realizarse el análisis de riesgo de desastres en la fase de pre-inversión. Si fuera necesario hacer una interpretación respecto a si dicha normatividad incluye tal mandato, no se considerará cumplido este indicador.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Honduras 2014. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Ejecutivo No. 83-2004 (RR-1B-18a), publicado en la Gaceta el 21 de junio de 2004, es atribución de la Dirección General de Inversiones Públicas “Dictar las normas técnicas y directrices para la formulación de programas y proyectos de inversión pública”. Adicionalmente, en el Artículo 62 se establece que “las entidades del Estado que propongan nuevos proyectos, fundamentados en las prioridades de inversión definidas por el Poder Ejecutivo, deberán presentarlos a la Dirección General de Inversiones Públicas, acompañados de la información que permita el análisis técnico, económico y del impacto social para el otorgamiento de la Nota de Prioridad, la cual será requisito para gestionar recursos externos y nacionales...”. Adicionalmente, mediante el Acuerdo Ministerial No. 0321 (RR-1B-18b), de abril 18 de 2006 se aprobaron las normas técnicas de inversión pública, las cuales consideran como objetivo “Establecer los lineamientos, metodologías y parámetros para la organización, formulación ejecución y evaluación ex - ante y ex - post de proyectos que deberán aplicar las instituciones públicas en su Programas de Inversión Pública Plurianual...”. En el Artículo 3 se estipula “Estas Normas Técnicas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las entidades del Sector Publico ...”. Por su parte, el Artículo 9 referente a los conceptos básicos de inversión pública, define Manuales de Inversión Pública como “Describen, para las Instituciones que manejen recursos públicos, la metodología, técnicas, instructivos, formularios, requerimientos y procedimientos generales y específicos para hacer operativos los procesos de: Formulación, Avance de la Ejecución Física y Financiera y Monitoreo y Evaluación del Programa de Inversión Pública...”. Dentro de este contexto de requerimientos para la emisión de la nota de prioridad para gestionar recursos, la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) elaboró en 2012 la “Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública” (RR-1B-18c). En la guía se establece que “las instituciones formuladoras de programas y proyectos deben...tener en cuenta en la formulación de proyectos los escenarios climáticos y sus efectos en la intensidad y frecuencia de las amenazas socio-naturales y las acciones que deben asumirse para reducir los riesgos de desastres mediante una adecuada gestión de los riesgos”. En el paso 4 de dicha guía se estipula la “Evaluación de la vulnerabilidad del proyecto ante los distintos riesgos en la fase de perfil con el “Blindaje de Proyectos” (RR-1B-18d). En la Guía también se señala que esta “debe ser seguida para presentar el perfil de proyecto al SISPU, necesaria para la emisión de la Nota de Prioridad por la DGIP”. El Método para Reducir la Vulnerabilidad en Proyectos de Infraestructura “Blindaje de Proyectos” establece “Por otro lado a la hora de analizar el riesgo ante los eventos climáticos no basta con reducir el riesgo ante los eventos climáticos relacionados con la variabilidad climática, sino que deben considerarse los impactos del cambio climático”.

Los pasos metodológicos para reducir la vulnerabilidad en un proyecto incluyen escenarios de afectaciones. “Se pide a los dos grupos que identifiquen para la eventualidad de las dos (2) amenazas más fuertes y determinen la periodicidad de al menos un escenario frecuente y de un escenario extremo de afectaciones precisando cada cuantos años ocurren (por ejemplo, el frecuente cada 2-3 años y el extremo cada 10 años). En estos escenarios se pueden incluir como referencia los escenarios climáticos proyectados para Honduras, relacionando el escenario con sus posibles impactos. Se puede tomar como referencia los escenarios de precipitación y temperatura para el año 2026”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La normatividad no hace referencia explícita a la realización de estudios de cambio climático. En Colombia, el CONPES 3714 de diciembre de 2011 “*Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública*” establece que dentro de los riesgos preVISIBLES se consideran los “*Riesgos Ambientales: Se refiere a las obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas y de la evolución de las tasas retributivas y de uso del agua*”, De otra parte, en la Ley 1508 de enero de 2012, “*Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas*”, en el artículo 11, Relacionado con los “*Requisitos para abrir procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos de asociación público privada, de iniciativa pública*” se exige “*Los estudios vigentes de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y jurídico acordes con el proyecto*”. No obstante, no se señala de manera explícita la necesidad de realizar estudios de cambio climático. Finalmente, El CONPES 3700 de julio de 2011 “*Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia*”, no estipula en la fase de pre-inversión la realización de estudios de cambio climático.

Código RR-1B-19

Pregunta de respuesta cerrada	
19. ¿Existe normatividad que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión?	
Descripción general del indicador	
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “<i>pre- inversión</i>”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes. La segunda fase es la de “<i>inversión</i>” en el que el PIP alcanza la categoría de “viable” o “realizable”, que comprende la elaboración del expediente técnico ya detallado y se procede con la ejecución del proyecto, y culmina precisamente con su terminación y liquidación. La tercera fase es la de “<i>post-inversión</i>”, que comprende los procesos de mantenimiento, control y evaluación ex post, en la que se analiza si se cumplieron los objetivos planteados inicialmente en el PIP.</p> <p>Este indicador busca determinar si el país cuenta con alguna normatividad que ha dispuesto la obligatoriedad de realizar el análisis de riesgo de desastres en las fases de Inversión y de Post-inversión del ciclo del proyecto.</p> <p>El cumplimiento de este tipo de mandatos favorecerá la existencia de infraestructura resiliente ante la ocurrencia de desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si el país cuenta con un sistema de inversión pública o banco de proyectos (o el sistema equivalente en el país). 2. Revisar la normatividad de inversión pública, incluyendo la relacionada con alianzas público-privadas, para identificar si se ordena realizar de manera explícita el análisis de riesgo de desastres en la fase de inversión y/o de post-inversión del ciclo del proyecto. 3. Revisar la normatividad de GRD y la de contratación de obras públicas, para identificar si se ordena realizar de manera explícita el análisis de riesgo de desastres en las fases de inversión y/o de post-inversión del ciclo del proyecto. 4. De ser necesario consultar, con representantes las áreas de inversión de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), o bien, con la autoridad en planificación o programación (o entidad equivalente) para indagar al respecto, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-17 RR-1B-18 RR-1B-20	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad vigente que ordene de manera explícita realizar un análisis de riesgo de desastres en las fases de inversión y/o post-inversión del ciclo del proyecto o PIP (fases diferentes de la fase de pre-inversión) como requisito para la aprobación de proyectos de inversión pública.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada hace referencia solo al análisis de amenazas, exposición o vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

En la justificación deberá constar que la normatividad identificada hace referencia explícita a que debe realizarse el análisis de riesgo de desastres en fases diferentes de la fase de pre-inversión, explicitando en cuáles. Si fuera necesario hacer una interpretación respecto a si dicha normatividad incluye tal mandato, no se considerará cumplido este indicador.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cuenta con las "Pautas para el Seguimiento de la Inversión Pública" de junio de 2011 (RR-1B-19a), documento que establece un sistema operativo para el seguimiento de los proyectos en cuanto a los avances en la ejecución. Asimismo, el cumplimiento pleno del indicador se complementa a través de las "Pautas Generales para la Evaluación Ex Post de Proyectos de Inversión Pública", publicadas de Marzo de 2012 (RR-1B-19b), en cuyo capítulo 5.4.7 Evaluación de la Sostenibilidad, en el numeral d) Gestión de Riesgos, señala que: "Se evaluará si los riesgos importantes han sido identificados en la pre-inversión, se incluyeron las medidas para reducirlos y éstas han sido aplicadas. Se identificarán los riesgos que pudiesen haber surgido en las fases de inversión y post inversión y la manera en que éstos han sido enfrentados. Se evaluará la capacidad del operador del servicio o los beneficiarios para asimilar y recuperarse de un desastre o conflicto social, entre otros". Debe precisarse que estas pautas son de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el numeral "3.1.3. Competencia. La evaluación de culminación, estará a cargo de la Unidad Ejecutora - UE, por constituir la instancia institucional sobre la cual recae la responsabilidad de la ejecución del proyecto. Los demás involucrados en el proceso de ejecución apoyarán a ésta; es el caso del Órgano Técnico que se encargó de los aspectos técnicos de los componentes del PIP." y "3.1.4. Ámbito de Aplicación. La evaluación de culminación es obligatoria para todos los Proyectos de Inversión Pública, se efectuará de acuerdo con los Contenidos Mínimos para la Evaluación de Culminación (anexo 1), según la línea de corte establecida por monto de inversión; estas pautas constituyen las orientaciones para tal fin."

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. No se encontraron evidencias respecto de normatividad que ordene realizar análisis de riesgo de desastres en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión. Se analizó: (i) Ley N° 5102/2013 de promoción de la inversión en infraestructura pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 51 del 13 de marzo de 2014; (ii) Guía para la Formulación de Proyectos de Inversión a Nivel de Perfil (2015), la cual incluye un capítulo referente al análisis del riesgo, pero sin señalar los riesgos a ser considerados en el análisis. (Guía del Ministerio de Hacienda, Sistema Nacional de Inversión Pública); y (iii) Metodología general de preparación y evaluación de proyectos de inversión (2014) del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Código RR-1B-20

Pregunta de respuesta cerrada	
19. ¿Existe normatividad que ordene realizar estudios de cambio climático en otras fases del ciclo del proyecto diferente de la fase de pre-inversión?	
Descripción general del indicador	
<p>Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad.</p> <p>En la mayoría de los países los PIP se formulan siguiendo el <i>ciclo del proyecto</i>, cuya primera fase es la “<i>pre-inversión</i>”. Esta fase tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular, exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecidos por las autoridades correspondientes. La segunda fase es la de “<i>inversión</i>” en el que el PIP alcanza la categoría de “viable” o “realizable”, que comprende la elaboración del expediente técnico ya detallado y se procede con la ejecución del proyecto, y culmina precisamente con su terminación y liquidación. La tercera fase es la de “<i>post-inversión</i>”, que comprende los procesos de mantenimiento, control y evaluación ex post, en la que se analiza si se cumplieron los objetivos planteados inicialmente en el PIP.</p> <p>Este indicador busca determinar si el país cuenta con alguna normatividad que ha dispuesto la realización de estudios de cambio climático en las fases de Inversión y de Post-inversión del ciclo del proyecto. Esto favorecerá la existencia de infraestructura resiliente frente a los efectos adversos del cambio climático.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si el país cuenta con un sistema de inversión pública o banco de proyectos (o el sistema equivalente en el país). 2. Revisar la normatividad de inversión pública, incluyendo la relacionada con alianzas público-privadas, para identificar si se ordena realizar de manera explícita estudios de cambio climático en las fases de inversión y/o de post-inversión del ciclo del proyecto. 3. Revisar la normatividad de cambio climático y la de contratación de obras públicas, para identificar si se ordena realizar de manera explícita estudios de cambio climático en las fases de inversión y/o de post-inversión del ciclo del proyecto. 4. De ser necesario, consultar con representantes las áreas de inversión de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente), o bien, con la autoridad en planificación o programación (o entidad equivalente) para indagar al respecto, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-17 RR-1B-18 RR-1B-19	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad vigente que ordene de manera explícita realizar un análisis de riesgo de desastres en las fases de inversión y/o post-inversión del ciclo del proyecto o PIP (fases diferentes de la fase de pre-inversión) como requisito para la aprobación de proyectos de inversión pública.

No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada hace referencia solo al análisis de amenazas, exposición o vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de los tres elementos de análisis que resulten en una estimación integral del riesgo.

En la justificación deberá constar que la normatividad identificada hace referencia explícita que debe realizarse el análisis de riesgo de desastres en fases diferentes de la fase de pre-inversión, explicitando en cuales. Si fuera necesario hacer una interpretación respecto a si dicha normatividad incluye tal mandato, no se considerará cumplido este indicador.

“Por tratarse de un nuevo indicador considerado en el proceso de actualización del protocolo iGOPP no se presentan ejemplos para este indicador. No obstante, para conocer ejemplos de futuras aplicaciones se puede consultar las aplicaciones del iGOPP disponibles en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Código RR-1C-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece que las unidades de gestión territorial son responsables de la reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador se refiere a un atributo de calidad de la normatividad nacional de GRD, por el que se reconoce la importancia de que la gestión del riesgo de desastres sea ejecutada no sólo desde el gobierno nacional, central o federal, sino que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) tengan dentro de su jurisdicción competencia para el cumplimiento de determinadas funciones de gestión local del riesgo y que éstas sean acordes con sus recursos y capacidades.</p> <p>En este sentido, el presente indicador valora que la normatividad de GRD existente en el país asigne competencias a las UGT en materia de reducción de riesgos de desastre en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones (ya sean regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.).</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres, u otras similares.</p> <p>En este indicador hay que considerar que las UGT en cada país tienen una serie de particularidades respecto de su régimen político-administrativo. Aunque la mayoría de los países se ubican en el régimen descentralizado, los procesos de descentralización varían notablemente. Por otro lado, en los países federados las UGT también presentan diferentes grados de autonomía y soberanía. Cualquiera que sea el caso, hay que determinar cuál es la normatividad de GRD a la que le corresponde definir el papel de las UGT dentro de los componentes de la GRD, para luego determinar si esa normatividad dispone que éstas realicen labores de reducción del riesgo en sus propios territorios.</p> <p>Nota: No debe confundirse con el indicador RR-1C-2, que pregunta si la normatividad que regula las responsabilidades de los entes territoriales reconoce como una responsabilidad de los mismos la reducción del riesgo (o la prevención de desastres o de riesgos). Es decir, este indicador pregunta a la normativa expresa de GRD, mientras que el indicador RR-1C-2 pregunta a la normativa de los gobiernos locales o regionales (o equivalente).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las UGT existentes en el país. 2. Identificar la normatividad nacional específica de GRD. 3. Analizar si en dicha normatividad de GRD se asignan de forma expresa competencias para la reducción del riesgo de desastres a las UGT. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1C-1 PR-1C-4	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada deberá establecer de manera explícita a las UGT que tengan asignadas competencias en el uso suelo y ordenamiento territorial, responsabilidades sobre el componente de reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios.

Si en la normatividad se asignaran a dichas UGT responsabilidades generales para la GRD, se deberá constatar en la justificación que la reducción del riesgo es parte del alcance y componentes del concepto de GRD que esté definido en la normatividad.

Si la normatividad identificada no asignara responsabilidades diferenciadas para cada uno de los niveles de UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador se cumplirá si al menos se asignan dichas responsabilidades para la unidad de gestión territorial de menor jerarquía (Municipio o equivalente) existente en el país que tiene asignadas competencias en el uso y ordenamiento del suelo.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N° 113 /2013-2014, LEY DE GESTIÓN DE RIESGOS, aprobada por la Asamblea Nacional el 13 de noviembre de 2014 (RR-1C-1a) establece en su Artículo 1. (OBJETO). *"La presente Ley tiene por objeto regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación y; la atención de desastres y/o emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales."* El Artículo 4. (ÁMBITO DE APLICACIÓN), define que: *"La presente Ley tiene como ámbito de aplicación a las entidades del nivel central del Estado, entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, privadas y personas naturales y/o jurídicas, que intervienen o se relacionan con la gestión de riesgos"*. Adicionalmente, en el Artículo 21. (GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL), establece responsabilidades para las unidades territoriales autónomas sobre la implementación de acciones de reducción prospectiva y correctiva del riesgo en sus territorios. Finalmente, la Segunda Disposición Final de la Ley establece que SEGUNDA. *"En el marco del Sistema de Planificación Integral del Estado, las entidades territoriales autónomas deberán incorporar la gestión de riesgos en sus planes de desarrollo compatibles con la planificación nacional."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. No se cumple con la condición. El Reglamento de la Ley de la CONRED (Acuerdo N° 49-2012) establece en el Artículo 39. Dirección de Gestión Integral de Reducción de Riesgos a Desastres que *"La Dirección de Gestión Integral de Riesgo es la encargada de diseñar e implementar las estrategias que permitan la gestión de políticas públicas, procedimientos institucionales y el impulso de la política de gestión integral de reducción de riesgos a desastres en los procesos de planificación municipal, sectorial e institucional; la formulación, aplicación e implementación de medidas integrales de gestión de reducción del riesgo a desastres en los procesos de desarrollo..."*. No obstante, a lo anterior, no se establece la responsabilidad de los municipios ni de los departamentos de implementar la reducción de riesgos en sus respectivos territorios.

Código RR-1C-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿La normatividad sobre funciones y competencias de las unidades de gestión territorial en el país, establece la reducción del riesgo de desastres como una de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce la buena práctica en un régimen o modelo de gobierno centralizado, que la normatividad que establece las competencias para las diferentes unidades de gestión territorial (UGT) se incorpore el concepto de la GRD, concretamente el de la reducción del riesgo. Se indaga si se le asignan funciones a las UGT en materia de reducción del riesgo, ya que son las UGT las que pueden incidir directamente en los niveles de riesgo de su territorio planificando e implementando acciones de reducción del riesgo de desastres.</p> <p>Por otra parte, en el caso de algunos países federales la regulación sobre las funciones y jurisdicción de las UGT suele ser la constitución o una ley constitucional, esto en función del reconocimiento a su soberanía o autonomía, de manera que a diferencia de los países centralizados existe una relación de coordinación y no supeditación entre las UGT y el gobierno federal.</p> <p>Cualquiera que sea el caso, este indicador busca comprobar que la normatividad que determina las funciones o competencias de las UGT le establece responsabilidades en materia de reducción del riesgo.</p> <p>Se debe tener presente que la “reducción del riesgo” puede ser considerada usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las UGT existentes en el país. 2. Identificar la normatividad que regula las funciones de las UGT del país o, en el caso de países federales, los artículos constitucionales o la ley federal o general que así lo dispone. 3. Analizar si dentro de las competencias asignadas a las UGT del país, se señala de manera expresa funciones y competencias relacionadas con la reducción de riesgo de desastres. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1C-4	Revisar si la normatividad utilizada para este indicador permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador deberá existir normatividad vigente que regule las funciones o competencias de las UGT y que asigne responsabilidades a las mismas en materia de reducción del riesgo de desastres en sus respectivos territorios.</p> <p>Si en la normatividad se asignaran a las UGT responsabilidades generales para la GRD, se deberá constatar en la justificación que la reducción de riesgo es parte del alcance y componentes de la GRD definida en la normatividad.</p> <p>Si la normatividad identificada no asignara responsabilidades a todas las UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador podrá validarse si al menos se asignan dichas responsabilidades al nivel municipal (distrital).</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Chile 2013. La Ley N° 19175 - Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, (RR-1C-2a) establece: "*Artículo 16. Funciones generales del gobierno regional ... f) Adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe, en conformidad a la ley, y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre...*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2015. El Código Municipal, aprobado por Decreto Legislativo N° 274, de fecha 31/01/1986, Publicado en el Diario Oficial N° 23, Tomo 290, de fecha 05/02/1986 define en el Art. 4 las competencias de las municipalidades, y establece en el numeral 1 la obligatoriedad de elaborar, aprobar y ejecutar los Planes de Desarrollo Local. Y el numeral 30 se refiere a las demás funciones que sean propias de la vida local y las que le atribuyan otras leyes. Se considera que no existen referencias explícitas a la reducción del riesgo en este cuerpo normativo municipal, y que, por ende, el indicador no se cumple.

Código RR-1C-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿La normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente), establece la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo?	
Descripción general del indicador	
<p>La exposición de la población, sus viviendas, la infraestructura y servicios públicos frente a fenómenos naturales peligrosos, puede ser uno de los principales factores que definen su nivel de riesgo. Por lo tanto, la identificación de las zonas de riesgo y su tratamiento especial puede contribuir significativamente a la reducción del riesgo de desastres.</p> <p>Una vez identificadas las zonas de riesgo, se puede prohibir su uso para la ubicación de asentamientos humanos, infraestructura crítica, servicios básicos y otros tipos de infraestructura, o bien limitar su uso para áreas verdes, actividades, recreativos o de otro tipo.</p> <p>La toma de decisiones sobre el uso y la ocupación del suelo resulta ser una manera efectiva para la reducción del riesgo de desastres, y por tanto, es una buena práctica que dentro de la normatividad sobre ordenamiento o planificación territorial (o proceso equivalente) se establezca la zonificación de áreas en riesgo como determinante en la definición del uso y ocupación del suelo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula el ordenamiento territorial (o proceso equivalente) en el país. 2. Analizar si en la normatividad identificada se establece que dentro del proceso de planificación se considera el riesgo de desastres como un elemento en la zonificación del suelo. 3. En caso de que el riesgo sea parte de los elementos que determinan la zonificación, identificar si la normatividad establece una reglamentación del uso del suelo consecuente con el riesgo zonificado (es decir si la normatividad establece un tratamiento especial a las zonas en riesgo para evitar su uso u ocupación insegura). 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1C-3 RR-1C-5	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada deberá considerar de manera explícita que la zonificación de áreas en riesgo frente a fenómenos naturales peligrosos constituye un determinante en la definición del uso y ocupación del suelo.</p> <p>En la justificación deberá explicitarse tanto los riesgos considerados para la zonificación, como las restricciones o consideraciones estipuladas para el posible uso de dichas zonas.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. La Ley 388 del 18 de julio de 1997, por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras disposiciones (RR-1C-3a), que tiene como objetivo, según dice el Artículo 2, establecer los procedimientos para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial a nivel municipal. De acuerdo con el Artículo 8, Acción urbanística, comprende entre otras, la de "5. *Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda*". De igual manera el Artículo 12, Contenido del componente general del plan de ordenamiento, establece en el numeral 2.3 obliga a "la determinación y ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales o por condiciones de insalubridad".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. Guatemala no cuenta con una Ley de Ordenamiento Territorial. La Ley Preliminar de Urbanismo, aprobada mediante Decreto No. 583 del 29 de febrero de 1956, aún se mantiene vigente en la actualidad. En la misma se fijan los instrumentos que cada municipio debería poseer para poder encauzar el uso del suelo de su término (zonificación) y la expansión urbanística. La referida Ley, no contiene el concepto de riesgo como tal, pero si refiere en su Artículo 1. Definiciones... "(G) *Zonificación: es la determinación del uso más conveniente de los terrenos para beneficio integral de la ciudad. Asimismo, en su Artículo 5. instruye: Las municipalidades procederán A) estudiar el plan regulador... y realizar los estudios que sean necesarios. B) A estudiar la instrumentación urbanística para determinar... 3 la reglamentación y zonificación necesarios. ... C) Preparar el programa de rehabilitación urbano y la delimitación de barrios insalubres*". Adicionalmente, existe la Guía para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, la cual no es de uso obligatorio.

Código RR-1C-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe normatividad para el mejoramiento integral de asentamientos humanos?	
Descripción general del indicador	
<p>La reducción del riesgo de desastres se implementa a través de procesos que tienen como objetivo la transformación del espacio geográfico en búsqueda de mejores condiciones de vida y de desarrollo social y económico. Uno de los procesos claves para la reducción del riesgo, especialmente a nivel urbano, es el mejoramiento integral de asentamientos humanos, también conocido en algunos países como mejoramiento de barrios.</p> <p>Este indicador indaga específicamente si en el país existe normatividad que regule el mejoramiento integral de asentamientos humanos.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad relacionada con desarrollo urbano, vivienda, asentamientos humanos, planificación urbana y territorial u otras que puedan existir relacionadas con mejoramiento de barrios, subsidio habitacional o equivalentes. 2. Analizar si la normatividad identificada considera el mejoramiento integral de asentamientos humanos, mejoramientos de barrios o similar. 3. De ser necesario consultar, con representantes del sector vivienda o representantes de programas de mejoramiento de asentamiento humanos, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1C-3 RR-1C-5	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe hacer referencia explícita al mejoramiento integral de asentamientos humanos o barrios.</p> <p>Esta condición se podría verificar positivamente con la evidencia de existencia de programas de mejoramientos de barrios o asentamientos humanos en la medida que existan documentos normativos que sustenten la legalidad de los mismos.</p> <p>De verificarse las condiciones requeridas para este indicador, en la justificación deberá explicitarse el tipo de mejoras consideradas en la normatividad identificada.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>México 2014. La Ley General de Asentamientos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 1993 (RR-1C-4a), establece en su Artículo 1, Apartado II: <i>"Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población..."</i> Y en el Artículo 2, Apartado XIII, define: <i>"Mejoramiento: la acción tendente a reordenar o renovar las zonas de un centro de población de incipiente desarrollo o deterioradas física o funcionalmente"</i>, y desglosa a lo largo de la ley una serie de acciones y previsiones encaminadas al mejoramiento de los centros de población y los asentamientos humanos.</p>	

República Dominicana 2014. La Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 26 de enero de 2012 (RR-1C-4a), contempla la articulación de sus políticas públicas alrededor de 4 ejes, incorporando en el Artículo 8 el Segundo Eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades, y entre los Objetivos Generales en que se desdobra ese eje, se distingue para los efectos de este indicador, el 2.5 "*Vivienda digna en entornos saludables*", que en el Artículo 23 describe dos Objetivos Específicos, en el que destaca el 2.5.1, que se propone "*Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora*". Este Objetivo Específico enlista 12 líneas de acción.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. La Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos (Decreto N° 120-96) y la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos no regulan el mejoramiento integral de asentamientos humanos de forma específica, pues refiere más bien el concepto de desarrollo, ejemplo de ello lo es el artículo 2 que cita: "... b) *Los asentamientos humanos constituyen una base insustituible para el desarrollo del país, debiendo el Estado promover su desarrollo*".

Código RR-1C-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Existe normatividad para la relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador supone la existencia de varios procesos previos: (i) la determinación de asentamientos humanos localizados en zonas de riesgo y (ii) la decisión política de que estos asentamientos deban relocalizarse o reubicarse en áreas de mayor seguridad.</p> <p>La relocalización, reubicación o reasentamiento por riesgo de desastres es un proceso generalmente complejo y políticamente muy costoso. No obstante, se considera una buena práctica que exista un marco legal que lo posibilite de manera de reducir la probabilidad de pérdidas de vidas humanas y a la propiedad.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad relacionada con desarrollo urbano, vivienda, asentamientos humanos, planificación urbana y territorial o equivalentes. 2. Analizar si la normatividad identificada considera la relocalización o reubicación de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo de desastre. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector vivienda o GRD, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1C-3 RR-1C-4	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe contemplar de manera explícita la relocalización o reubicación de personas y sus viviendas por estar asentados en zonas de riesgo relacionados con fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>No se logrará cumplir el indicador si la relocalización o reubicación se debe a razones diferentes a las vinculadas con el riesgo relacionado con fenómenos naturales peligrosos, como podrían ser riesgos ambientales, sanitarios o de carácter tecnológico.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>República Dominicana 2014. La Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 26 de enero de 2012 (RR-1C-4a), contempla la articulación de sus políticas públicas alrededor de 4 ejes, incorporando en el Artículo 8 el Segundo Eje, que procura una Sociedad con Igualdad de Derechos y Oportunidades, y entre los Objetivos Generales en que se desdobra ese eje, se distingue para los efectos de este indicador, el 2.5 "Vivienda digna en entornos saludables", que en el Artículo 23 describe dos Objetivos Específicos, en el que destaca el 2.5.1, que se propone "Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora". Este Objetivo Específico incluye entre 12 líneas de acción, la 2.5.1.3 "Reubicar los asentamientos en condiciones de riesgo ante fenómenos naturales, focos de contaminación o riesgos derivados de la acción humana".</p>	

Jamaica 2013. The Disaster Preparedness and Emergency Act (RR-1C-5a) states in Section 12 that the Minister shall notify the Prime Minister in writing and the Prime Minister may by order published in the Gazette declare that part of the Island to be a disaster area and direct the enforcement of any measures recommended by the Office or any other measures that he thinks expedient for removing or otherwise guarding against any such condition and the probable consequences thereof or mitigating as far as possible, any such hazard.

Traducción:

Jamaica 2013. La *Disaster Preparedness and Emergency Act* (RR-1C-5a) establece en la Sección 12 que el Ministro deberá notificar al Primer Ministro por escrito y el Primer Ministro puede, por orden publicada en la Gaceta, declarar qué parte de la Isla es un área de desastre y aplicar la ley en cualquiera de las medidas recomendadas por la Oficina o cualquier otra medida que considere conveniente para eliminar o proteger cualquier condición y las posibles consecuencias de la misma o mitigar en la medida de lo posible, cualquier peligro.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. No existe una norma general sobre relocalización de asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo. La Dirección de Tierras de la Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social “*Padre Carlos Múgica*” (Decreto 848/2012, del 31/5/2012) tiene competencias parciales en el tema, pero no de forma explícita para la reubicación de asentamientos en riesgo. Su responsabilidad primaria es: Implementar las acciones tendientes a lograr la regularización de dominio de las tierras fiscales y traspasarlas a los ocupantes de dichas tierras o a los beneficiarios de planes de vivienda social según corresponda en colaboración con los organismos competentes. En ese contexto se le asigna: “*Relocalizar asentamientos humanos en tierras aptas para dicho fin*”(en el marco de las competencias de la Comisión).

Código RR-2-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de ambiente para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector ambiente durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector ambiente asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 6. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 7. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Ambiente y otras entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 8. Identificar si la autoridad ambiental (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 9. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector ambiental (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 10. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicho objeto o clasificador debería permitir el rastreo de las asignaciones de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-7	La existencia de normatividad del sector ambiental que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

IR-2-3	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Ambiente (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector ambiental.</p> <p>Evidencia de la asignación de recursos el último ejercicio o vigencia fiscal al sector ambiente, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de recursos del presupuesto, dentro de los que podría estar un instrumento presupuestal/objeto de gasto/catálogo/ etiquetador presupuestal o su equivalente para la GRD.</p> <p>Los proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo de desastres que implemente el sector ambiente con recursos de la cooperación internacional diferentes a recursos públicos no pueden ser usados como verificable.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
No existen ejemplos de cumplimiento de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Paraguay 2016. El Artículo 27 de la Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005, establece que *"Los ministerios del Poder Ejecutivo incluirán en sus respectivos Presupuestos planes que contemplen programas de reducción de riesgos, en el área específica de sus respectivas carteras, los cuales serán ejecutados en coordinación con la S.E.N. Preverán, asimismo, los recursos presupuestarios necesarios para el financiamiento de las tareas de respuestas a las situaciones de emergencia definidas en esta Ley"*. No obstante, no se encontró evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres a la Secretaría de Ambiente. Se analizaron: (i) Ley N° 5554 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 6 del 11 de enero de 2016; (ii) Decreto 4774 por el cual se reglamenta la Ley 5554 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 12 del 19 enero de 2016. La falta de asignación de recursos para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres fue ratificada por la Secretaría de Ambiente. Cabe mencionar que el Plan Estratégico Institucional 2015-2018 de la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobado por Resolución N° 915/15 del 23 de octubre de 2015, establece dentro de la línea estratégica 2 *"Administrativa y Financiera"*, dentro del Objetivo Institucional 2 *"Fomentar la inversión público-privada en GRRD, a través de su transversalización en organismos y entidades del Estado, actores del sector privado y la academia"* y como programa *"Promover la inclusión gradual de GRRD en las normas de formulación presupuestaria de cada ejercicio fiscal de instituciones públicas y privadas"*.

Belize 2017. The National Emergency Management Organization Environment & Solid Waste Committee, headed by the Department of the Environment, revised in 2017 the Environment & Solid Waste Committee Hurricane Emergency Preparedness Plan. As stated in section *"1.1 Environment & Solid Waste Committee"* of the Plan, the Terms of Reference for the Committee include making *"[...] recommendations for the recovery of ecologies and habitats to their original state."*. However, no evidence has been found that the said Committee is formally established and during an interview with representatives from the Department of the Environment, it was stated that the said Plan had not yet been approved. Therefore, the condition is negative.

Traducción:

Belice 2017. El Comité de Medio Ambiente y Residuos Sólidos de la Organización Nacional de Manejo de Emergencias, encabezado por el Departamento de Medio Ambiente, revisó en 2017 el Plan de Preparación para Emergencias por Huracanes del Comité de Medio Ambiente y Residuos Sólidos. Como se indicó en la sección *"1.1 Comité de Medio Ambiente y Residuos Sólidos"* del Plan, *los Términos de Referencia para el Comité incluyen hacer "[...] recomendaciones para la recuperación de ecologías y hábitats a su estado original"*. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que dicho Comité esté formalmente establecido y durante una entrevista con representantes del Departamento de Medio Ambiente, se afirmó que dicho Plan aún no había sido aprobado. Por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código RR-2-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de agricultura para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector agricultura durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector agricultura asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Agricultura y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Agricultura o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector agricultura (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 5. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-8	La existencia de normatividad del sector agricultura que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.

IR-2-4	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.	
En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.	
No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector agricultura.	
<i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
El Salvador 2016. En la Ley de Presupuesto General para el ejercicio financiero fiscal del 2016, publicado en el Diario Oficial el 15 de diciembre del 2015 (RR-2-2a), aparece dentro del Ramo 4200 de Agricultura y Ganadería, en la página 162, en el apartado 3, Relación Propósitos con Recursos Asignados, con la Unidad Presupuestaria 04 Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego; y Línea de Trabajo 01 Desarrollo Forestal y Sistema de Riego: <i>"Contribuir a la generación y aprovechamiento de la infraestructura agropecuaria, recursos forestales, suelo y agua, fomentando la producción y la productividad en términos de mitigación y adaptación del Sector Agropecuario a los efectos del cambio climático; contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad, y a la prevención del riesgo a través de la transferencia de tecnología y desarrollo de las áreas bajo riego, para una agricultura que aporta a la seguridad alimentaria y nutricional del país"</i> . Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuenta con el perfil de proyecto <i>"Atención, prevención y mitigación de los efectos de cambio climático a productores agropecuarios en municipios del corredor seco y otras zonas afectadas por la sequía en El Salvador"</i> (RR-2-2b) de diciembre de 2015, que incluye como impactos esperados <i>"150 productores beneficiados con sistemas de cosecha de agua, provisionar alimento ensilado y/o henificado y conocimientos para afrontar los problemas ocasionados por cambio climático"</i> .	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Paraguay 2016. El Artículo 27 de la Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005, establece que *"Los ministerios del Poder Ejecutivo incluirán en sus respectivos Presupuestos planes que contemplen programas de reducción de riesgos, en el área específica de sus respectivas carteras, los cuales serán ejecutados en coordinación con la S.E.N. Preverán, asimismo, los recursos presupuestarios necesarios para el financiamiento de las tareas de respuestas a las situaciones de emergencia definidas en esta Ley"*. No obstante, no se encontró evidencias de asignación de recursos para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se analizaron: (i) Ejecución presupuestaria consolidada por objeto de gasto de los meses de enero a abril de 2016; (ii) Ley N° 5554 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 6 del 11 de enero de 2016; (iii) Decreto 4774 por el cual se reglamenta la Ley 5554 que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, publicado en la Gaceta Oficial N° 12 del 19 enero de 2016; y (iv) Proyectos a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería que aparecen en la lista del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (http://snip.hacienda.gov.py/Snip_Web/pages/portal/portalResultadoBusqueda.jsf). La falta de asignación de recursos para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres fue ratificada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Cabe mencionar que el Plan Estratégico Institucional 2015 2018 de la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobado por Resolución N° 915/15 del 23 de octubre de 2015, establece dentro de la línea estratégica 2 *"Administrativa y Financiera"*, dentro del Objetivo Institucional 2 *"Fomentar la inversión público-privada en GRRD, a través de su transversalización en organismos y entidades del Estado, actores del sector privado y la academia"* como programa *"Promover la inclusión gradual de GRRD en las normas de formulación presupuestaria de cada ejercicio fiscal de instituciones públicas y privadas"*.

Código RR-2-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de salud para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector salud durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector salud asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector. Así mismo, no debe confundirse las acciones de reducción de riesgos sanitarios, si no se especifica que los mismos están vinculados con amenazas naturales.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del Ministerio de Salud y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 3. Identificar si el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector salud (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 5. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.

RR-1B-9	La existencia de normatividad del sector salud que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-5	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Salud (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector salud.</p> <p><i>"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/"</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Colombia 2013. Anexo del Decreto "por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, se detallan apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" (RR-2-3a). A través del rubro presupuestal 410 306 1 se asignaron recursos para "estudio y elaboración de programa de vulnerabilidad sísmica estructural en instituciones hospitalarias a nivel nacional".</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Ecuador 2016. En el reporte de transparencia del mes de julio de 2016 del Ministerio de Salud Pública consta el informe del Gobierno por Resultados: "Plan Anual comprometido 2016" que en la página 43 contiene los objetivos de indicadores de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos sin asignación presupuestaria para ese período fiscal; en el acápite de proyectos se menciona que el Proyecto de Contingencia para prevenir los efectos del Fenómeno El Niño y la posible erupción del volcán Cotopaxi por un monto de 11,2 millones de dólares está en nivel de anteproyecto. Por lo tanto, no existe asignación de recursos para realizar actividades de reducción de riesgos de desastres que pueda verificarse a través de instrumentos de clasificación presupuestaria. Cabe mencionar, que el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual Mayo 2016, Plan de Inversiones del Ministerio de Salud Pública, que es parte de la proforma de gastos 2016 del Presupuesto General del Estado, señala que el objetivo estratégico del "Proyecto de contingencia para prevenir los efectos del Fenómeno de El Niño y la posible erupción del volcán Cotopaxi" es "Garantizar la provisión de los servicios de salud e higiene a la población en general, priorizando la atención de la población damnificada y/o afectada frente a la ocurrencia de los eventos adversos, en coordinación con los niveles desconcentrados, a través del análisis de Riesgos de los establecimientos de salud, expuestos a amenazas de inundaciones y deslizamientos". Es decir que el objetivo del Proyecto no incluye actividades de reducción del riesgo de desastres. En la entrevista sostenida con el Ministerio de Salud manifiestan que en el año 2016 sí han recibido recursos en el marco de la emergencia por el terremoto de abril de 2016 y que no están reflejados porque ingresan por una línea diferente a la de inversión.</p>	

Código RR-2-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de vivienda para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector vivienda durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector vivienda asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del ministerio de vivienda y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 3. Identificar si el ministerio de vivienda (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector vivienda (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 5. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.

RR-1B-10	La existencia de normatividad del sector vivienda que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-6	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector vivienda.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>El Salvador 2016. Dentro de los proyectos de inversión a 2016 a ser desarrollados por el Ramo de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano se encuentra el "Proyecto: 5939 - Programa de reducción de vulnerabilidad en asentamientos urbanos precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS" (RR-2-4a). La descripción de dicho Proyecto estipula que "Componente 1: Inversiones en infraestructura para reducir el riesgo hídrico en el AMSSS. Para reducir la vulnerabilidad a inundaciones y deslizamientos en los AUPs del AMSS se requieren soluciones de carácter estructural, encuadradas dentro de un plan de desarrollo del AMSS. Este componente financiará la preparación de un plan maestro de gestión de drenajes en el AMSS, la construcción de un conjunto de lagunas de laminación con el propósito de amortiguar los picos de caudal almacenando temporalmente agua ante la ocurrencia de lluvias extraordinarias, y la reparación de bóvedas de canalización. Componente 2: Realización de obras de mitigación de riesgo y mejoramiento integral de AUPs en AMSS. Se concentrará en al menos 8 AUPs, dentro de los 29 identificados como vulnerables. Se espera atender aproximadamente a 2.200 familias. Se realizarán inversiones en mitigación de riesgos, infraestructura urbana básica (infraestructura sanitaria, energía eléctrica, infraestructura de drenajes pluviales, accesibilidad vial, red peatonal, centros comunitarios y de salud y espacios verdes) y fortalecimiento de la infraestructura social básica". Consecuentemente, el objetivo del proyecto es "El objetivo del presente programa es reducir la vulnerabilidad y mejorar las condiciones de vida de familias beneficiarias expuestas a riesgos de inundaciones y deslizamientos en el AMSS. El proyecto combinará intervenciones de mejoramiento de barrios, extensión en el acceso a servicios sociales, mitigación local de riesgos, y soluciones estructurales para el manejo de aguas".</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Brasil 2017. De acordo com o estipulado na Lei No 10.683, de 28 de Maio de 2003, publicada no D.O.U. de 29.5.2003, o Ministério das Cidades é responsável, entre outros, pelas: "*políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental, transporte urbano e trânsito*". No Programa do PPA 2016-2019, publicado no Diário Oficial da União - Suplemento, Nº 9, quinta-feira, 14 de janeiro de 2016, não foram encontradas evidências de alocação de recursos para realizar atividades de redução do risco de desastres no Ministério das Cidades.

Traducción:

Brasil 2017. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 10.683, de 28 de mayo de 2003, publicada en D.O.U. de 29.5.2003, el Ministerio de las Ciudades es responsable, entre otros, de las: "*políticas sectoriales de vivienda, saneamiento ambiental, transporte urbano y tráfico*". En el Programa PPA 2016-2019, publicado en la Gaceta Oficial Federal - Suplemento, No. 9, jueves 14 de enero de 2016, no hubo evidencia de asignación de recursos para llevar a cabo actividades de reducción del riesgo de desastres en el Ministerio de las Ciudades.

Código RR-2-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de educación para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector educación durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector educación asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del ministerio de educación (o entidad equivalente) y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 3. Identificar si el ministerio de educación (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector educación (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 5. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.

RR-1B-11	La existencia de normatividad del sector educación que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-7	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Educación (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector educación.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Ecuador 2016. En el Plan Anual de Inversiones 2016 (RR-2-5a) que es parte de la Proforma Presupuestaria 2016, consta como un proyecto del Ministerio de Educación <i>"Reducción de Riesgos ante los desastres naturales en la comunidad educativa del Ecuador"</i> con una asignación de 326.000 dólares. El citado proyecto (RR-2-5b) aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación y desarrollado para ejecutarse desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 con código CUP No 91400000.0000.372755 por un monto total de 48 millones de dólares, menciona en la página 4 como descripción de las actividades del componente 1 sobre el fortalecimiento de capacidades de los actores, lo siguiente: <i>"El componente 1 busca fortalecer las capacidades de todos los actores de la comunidad educativa (docentes, estudiantes, administradores, padres y madres de familia) y su resiliencia frente a amenazas de origen natural. Se trata de lograr que la comunidad educativa esté en capacidad de reducir los riesgos, gestionar emergencias y recuperarse bien y rápido de ocurrir un desastre. Las acciones principales que están previstas son: a) formativas; b) institucionalización de prácticas de reducción de riesgos en los establecimientos y los circuitos educativos (organización, planificación, seguimiento y evaluación); y, c) equipamiento mínimo para realizar la primera respuesta en situaciones de emergencia."</i></p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Guyana 2013. No evidence about allocation of resources to the Ministry of Education to perform disaster risk reduction activities was found at: (i) <i>"Estimates of the Public Sector, Current and Capital Revenue Expenditures for the year 2017, as presented to the National Assembly, Volume 1"</i>; (ii) <i>"Estimates of the Public Sector, Current and Capital Revenue Expenditures for the year 2017, as presented to the National Assembly, Volume 2, Medium Term Macroeconomic Framework, Revenue & Expenditure & Programme Performance Statements"</i>; (iii) <i>"Estimates of the Public Sector, Central Government Development Programme, Capital Project Profiles for the year 2017, as presented to the National Assembly, Volume 3"</i>.</p>	

Traducción:

Guyana 2013. No se encontró evidencia sobre la asignación de recursos al Ministerio de Educación para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres en: (i) "*Estimaciones de los gastos del sector público, los ingresos corrientes y de capital para el año 2017, tal como se presentaron a la Asamblea Nacional, Volumen 1*"; (ii) "*Estimaciones de los gastos del sector público, los ingresos corrientes y los ingresos de capital para el año 2017, tal como se presentaron a la Asamblea Nacional, Volumen 2, Marco macroeconómico a mediano plazo, ingresos y gastos y declaraciones de rendimiento del programa*"; (iii) "*Estimaciones del Sector Público, Programa de Desarrollo del Gobierno Central, Perfiles de Proyectos de Capital para el año 2017, presentado a la Asamblea Nacional, Volumen 3*".

Código RR-2-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de turismo para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector turismo durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector turismo asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del ministerio de turismo (o entidad equivalente) y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 3. Identificar si el ministerio de turismo (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector turismo (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 5. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.

RR-1B-7	La existencia de normatividad del sector turismo que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-12	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector turismo.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Jamaica 2013. In the 2013-2014 Budget for the Ministry of Tourism and Entertainment there are resources for: <i>"Enhancing the Resilience of the Agricultural Sector and Coastal Areas, implemented by the Office of Disaster Preparedness and Emergency Management. The purpose is: To protect livelihoods and food security in vulnerable communities by improving land and water management for the agricultural sector, <u>strengthening coastal protection</u> and building institutional and local capacity for climate change adaptation"</i>. This project also involved the agricultural and environmental sectors.</p> <p>Traducción: Jamaica 2013. En el Presupuesto 2013-2014 para el Ministerio de Turismo y Entretenimiento hay recursos para: <i>"Mejorar la resiliencia del sector agrícola y las zonas costeras, implementado por la Oficina de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias. El propósito es: proteger medios de vida y seguridad alimentaria en comunidades vulnerables mejorando la gestión de la tierra y el agua para el sector agrícola, <u>fortaleciendo la protección costera</u> y la construcción institucional y la capacidad local para la adaptación al cambio climático"</i>. Este proyecto también involucró a los sectores agrícola y ambiental.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Venezuela 2015. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.095 del 9 de enero de 2009, en su Artículo 45 establece que "*Todos los órganos y entes del Estado deben incluir en su previsión presupuestaria recursos para la formulación y ejecución de proyectos y actividades dirigidas a dar cumplimiento a la política nacional de gestión integral de riesgos socionaturales y tecnológicos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley*". De conformidad con la consulta efectuada al "*Resumen de la Distribución General de la Ley de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015*", al "*Plan Operativo Anual Nacional, Ejercicio Fiscal 2014*" y a los cuatro títulos de la "*Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015*", publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.161, del miércoles 10 de diciembre de 2014, no se localizó evidencia de asignación de recursos para actividades de reducción de riesgo de desastres para el Ministerio del Poder Popular para el Turismo. Tampoco se encontró evidencia al respecto en la "Memoria y Cuenta 2014 del Ministerio del Poder Popular para el Turismo."

Código RR-2-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?	
Descripción general del indicador	
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector transporte, entendido como obras viales, durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector transporte asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Revisar el presupuesto del año en curso del ministerio de transporte (o entidad equivalente) y de todas sus entidades adscritas a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres. 3. Identificar si el ministerio de transporte (o entidad equivalente) o sus entidades adscritas cuentan con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes del sector transporte (o entidad equivalente), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 5. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.

RR-1B-13	La existencia de normatividad del sector transporte que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-9	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal al Ministerio de Transporte (entendido como el encargado de obras viales o entidad equivalente) o a alguna de sus entidades adscritas para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector transporte.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>El Salvador 2016. Dentro de los proyectos de inversión a 2016 a ser desarrollados por el Ramo de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano se encuentra el "Proyecto: 5576 - Construcción de Obras Complementarias de Mitigación en la Zona del Puente sobre el Boulevard del Ejército y Río Acelhuate, Municipio y Departamento de San Salvador" (RR-2-7a). El objetivo general de dicho Proyecto consiste en la <i>"Mitigación de los riesgos a través de la construcción de obras de protección y reparación de las obras existentes para la protección de la infraestructura vial y la zona industrial contigua, al mismo tiempo prevenir pérdidas de vidas humanas y materiales"</i>.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Ecuador 2016. El Gobierno de Ecuador suscribió en abril de 2016 el Acuerdo de Préstamo con el Banco Mundial 8591-EC <i>"Proyecto de Mitigación del Riesgo y Recuperación de Emergencias"</i> (Risk Mitigation and Emergency Recovery Project). De acuerdo a la descripción de los objetivos del Acuerdo de Préstamo, el proyecto incluye como componente <i>"La prestación de apoyo a las medidas de preparación para desastres y mitigación de riesgos en el sector del transporte, a través de la realización de actividades destinadas a mitigar el riesgo de daños en la red vial del Prestatario en áreas críticas mediante la reducción de su vulnerabilidad y mejorar su resiliencia al clima frente a los posibles efectos de El Niño y su robustez frente a los efectos potenciales del volcán Cotopaxi, incluyendo: (i) la protección y estabilización de obras en determinados tramos de la red vial del Prestatario; (ii) trabajos de mantenimiento de emergencia en determinados tramos de la red vial del Prestatario y en puentes seleccionados; (iii) trabajos de mantenimiento de emergencia en maquinaria y equipo; y (iv) la adquisición de componentes para puentes Bailey, así como la prestación de servicios para la revisión de puentes Bailey"</i>. No obstante, el MOPT manifestó que dichos recursos aún no se reflejan en su Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Plan de Inversiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.</p>	

Código RR-2-8

Pregunta de respuesta cerrada

8. *¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?*

Descripción general del indicador

Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.

Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector de agua y saneamiento durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector de agua y saneamiento asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.

En el sector de agua y saneamiento conviven una serie de instituciones que desempeñan los roles de rectoría, regulación y prestación de los servicios. El presente indicador indaga por recursos asignados a las entidades encargadas de la rectoría o regulación de los servicios. Habitualmente la rectoría está a cargo de algún ministerio (salud, obras públicas, ambiente, etc.) o consejo interministerial, y la regulación del sector es realizada por una institución pública autárquica o dependiente del ministerio o sector que realiza la rectoría.

Se debe evitar confundir a la entidad responsable por los servicios de agua y saneamiento con la institución responsable por el manejo integral de los recursos hídricos, pudiendo éstas coincidir en algunos países.

Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<ol style="list-style-type: none"> 7. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 8. Identificar a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento, que es generalmente quien ejerce la rectoría, o en algunos casos la regulación, del sector. 9. Revisar el presupuesto del año en curso de las instituciones identificadas como responsables del sector de agua y saneamiento a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de reducción de riesgo de desastres. 10. Identificar si la entidad nacional responsable del agua y saneamiento cuenta con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 11. De ser necesario, consultar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgos con representantes de las instituciones identificadas como responsables del sector de agua y saneamiento, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal o área de gestión de riesgo de desastres o de adaptación al cambio climático, si tal área existiera. 12. De ser necesario consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-14	La existencia de normatividad del sector de agua y saneamiento que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-10	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (rector o regulador) para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector agua y saneamiento. Tampoco se podrá validar el indicador demostrando la asignación presupuestaria para la reducción de riesgo por una institución prestadora de los servicios de agua y saneamiento.</p> <p>Evidencia objetiva de la asignación de recursos el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente), la misma que puede ser quién ejerce la rectoría o regulación del sector, con el fin de realizar actividades de RR en el ámbito de su competencia, comprobable y rastreable a través de recursos del presupuesto, dentro de los que podría estar un instrumento presupuestal/objeto de gasto/catálogo/ etiquetador presupuestal o su equivalente para la GRD.</p>	

<p>Los proyectos, programas o acciones de riesgo de desastres que implemente la entidad nacional responsable del agua y saneamiento (o entidad equivalente), la misma que puede ser quién ejerce la rectoría o regulación del sector, con recursos de la cooperación internacional diferentes a recursos públicos no pueden ser usados como verificable.</p>
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p>
<p>Trinidad y Tobago 2018. The Ministry of Public Utilities confirmed to the iGOPP team that they are in charge of the water and sewerage sector. The <i>“Draft Estimates of Development Programme for the Financial year 2017”</i> (RR-2-8), included in Head 39, which corresponds to the Ministry of Public Utilities <i>“049 - Development of a water supply drought management plan”</i>.</p>
<p>Traducción: Trinidad y Tobago 2018. El Ministerio de Servicios Públicos confirmó al equipo de iGOPP que están a cargo del sector de agua y alcantarillado. El <i>“Proyecto de Estimaciones del Programa de Desarrollo para el ejercicio 2017”</i> (RR-2-8), incluido en el Título 39, que corresponde al Ministerio de Servicios Públicos <i>“049 - Desarrollo de un plan de gestión del suministro de agua”</i>.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>
<p>Barbados 2018. Barbados Estimates 2016-2017 includes resources for Ministry of Agriculture, Food, Fisheries and Water Resource Management, head 72, which includes Programme <i>“0542 Barbados Water Authority”</i>, whose Programme Statement is <i>“This subprogramme provides assistance for the Barbados Water Authority's capital projects”</i>. The mentioned Programme does not evidence assignation of resources to perform disaster risk reduction activities. Additionally, at January 2017, no information was found in the list of projects in execution published in the web page of the Public Investment Unit (http://www.piu.gov.bb/pages/Projects.aspx).</p>
<p>Traducción: Barbados 2018. Los <i>Barbados Estimates 2016-2017</i> incluyen recursos para el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Gestión de Recursos Hídricos, Rubro 72, que incluye el Programa <i>“0542 Barbados Water Authority”</i>, cuya Declaración del Programa es <i>“Este subprograma proporciona asistencia para la Autoridad de Aguas de Barbados proyectos de capital”</i>. El mencionado Programa no evidencia la asignación de recursos para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres. Además, en enero de 2017, no se encontró información sobre la lista de proyectos en ejecución publicados en la página web de la Unidad de Inversión Pública (http://www.piu.gov.bb/pages/Projects.aspx).</p>

Código RR-2-9

Pregunta de respuesta cerrada
<p>9. <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector telecomunicaciones (entendido como aquel que incluye al menos los servicios de telefonía) durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector telecomunicaciones asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>En el sector telecomunicaciones (entendido como aquel incluya al menos los servicios de telefonía) conviven una serie de instituciones que desempeñan los roles de rectoría, regulación (superintendencia) y prestación de los servicios. El presente indicador indaga por recursos asignados a las entidades encargadas de la rectoría o regulación de los servicios. Habitualmente la rectoría está a cargo de algún ministerio o consejo interministerial, y la regulación del sector es realizada por una institución pública autárquica o dependiente del ministerio o sector que realiza la rectoría.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones, la misma que puede ser quién ejerce la rectoría o regulación del sector. 3. Revisar el presupuesto del año en curso de las instituciones identificadas como responsables del sector de telecomunicaciones a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de análisis de riesgo de desastres. 4. Identificar si la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones cuenta con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos. 5. De ser necesario, consultar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgos de desastres con representantes de las instituciones identificadas como responsables de las telecomunicaciones, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres. 6. De ser necesario, consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-15	La existencia de normatividad del sector telecomunicaciones que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-1	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable de las telecomunicaciones (rector o regulador) para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector telecomunicaciones. Tampoco se podrá cumplir el indicador demostrando la asignación presupuestaria para la reducción de riesgo por una institución prestadora de los servicios de telefonía.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos al ministerio de transporte para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal en el Presupuesto General de la República de 2015, aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre 2014, que asignó recursos al Ministerio de Transporte e Infraestructura un total de C\$1, 823,651 (Un millón, ochocientos veintitrés mil, seiscientos cincuenta y un córdobas) para Construcción de infraestructura vial para la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático sobre la ruta Chinandega – Guasaule. Estos fondos surgen de dos fuentes de financiamiento: Rentas del tesoro (C\$ 303,942) y Préstamos Externos, Banco Interamericano de Desarrollo –BID (C\$1,519,709). El Programa de Apoyo al Sector Transporte III (NI-L1071, Convenio de préstamo con el BID), cuenta con un monto total de US\$ miles 30.633,59 de los cuales el BID aporta 29.887,9 US\$ miles y el Gobierno de Nicaragua un total de 745,6 US\$ miles. De estos se destinan fondos para el Componente 4. Disminución de la vulnerabilidad de la red vial al Cambio Climático, para que el MTI cuente con obras para la reducción de la vulnerabilidad en el tramo del Corredor Pacífico Chinandega-Guasaule en puntos críticos de acceso a la frontera con Honduras.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Barbados 2018. Barbados Estimates 2016-2017 includes resources for Prime Minister's Office, Head 13, for Programme “490 Telecommunications”, whose programme Statement is “To perform deregulatory and licensing functions in accordance with the Telecommunications Act Cap. 282B” for Subprogramme “0492 Telecommunications Unit”, whose Programme Statement is “To facilitate a competitive fully liberalised telecommunications sector, while achieving Government's vision of making Barbados a centre of telecommunications in the Caribbean”. The mentioned Subprogramme does not evidence assignation of resources disaster risk reduction activities. Additionally, at January 2017, not information was found in the list of projects in execution published in the web page of the Public Investment Unit (<http://www.piu.gov.bb/pages/Projects.aspx>).

Traducción:

Barbados 2018. Los *Barbados Estimates 2016-2017* incluyen recursos para la Oficina del Primer Ministro, Rubro 13, para el Programa 490 “Telecomunicaciones”, cuya Declaración del programa es “Para realizar funciones de desregulación y licencias de acuerdo con el Capítulo 282B de la Ley de Telecomunicaciones”, para el Subprograma 0492 “Unidad de Telecomunicaciones”, cuya Declaración del Programa es “Facilitar un sector de telecomunicaciones competitivo y totalmente liberalizado, mientras se logra la visión del Gobierno de hacer de Barbados un centro de telecomunicaciones en el Caribe”. El subprograma mencionado no evidencia la asignación de recursos para actividades de reducción del riesgo de desastres. Además, en enero de 2017, no se encontró información sobre la lista de proyectos en ejecución publicados en la página web de la Unidad de Inversión Pública (<http://www.piu.gov.bb/pages/Projects.aspx>).

Código RR-2-10

Pregunta de respuesta cerrada
<p>10 <i>¿En la última vigencia fiscal, se asignaron recursos a la entidad nacional responsable de la energía para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres que pueden ser verificados a través de instrumentos de clasificación presupuestal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>Existe evidencia empírica que demuestra que por cada dólar invertido en reducción de riesgos se pueden ahorrar cuatro dólares en respuesta. Incluso hay acciones de reducción de riesgos que presentan ratios beneficio/costos más favorables. Por lo tanto, se considera una buena práctica que cada sector asigne recursos de su presupuesto a actividades de reducción del riesgo de desastres en el ámbito de sus competencias. También es fundamental que dicha asignación de recursos sea rastreable en el presupuesto, tal y como sucede con otras políticas públicas. Sin una trazabilidad de los recursos es difícilmente viable analizar la efectividad de una política pública, determinar si es suficiente la asignación presupuestal que se está realizando en comparación a la dimensión del problema, y si está debidamente priorizada en la agenda de gobierno desde una perspectiva presupuestal.</p> <p>Este indicador concede importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente, que permita identificar la asignación de recursos públicos a la reducción del riesgo de desastres en el sector energía (entendido como energía eléctrica) durante el último ejercicio o vigencia fiscal. Aunque la situación ideal de cumplimiento es que la asignación de recursos se pueda verificar a través de alguno de los elementos anteriores, sin embargo, lo relevante es que se pueda evidenciar que el sector energía asigna recursos de su presupuesto para actividades de reducción de riesgo en el ámbito de sus competencias sectoriales.</p> <p>En el sector energía (entendido como energía eléctrica) conviven una serie de instituciones, las cuales desempeñan los roles de rectoría, regulación (superintendencia), generación, transmisión y prestación de los servicios. El presente indicador indaga por recursos asignados a las entidades encargadas de la rectoría o regulación de los servicios eléctricos. Habitualmente la rectoría está a cargo de algún ministerio, comisión nacional o consejo interministerial, y la regulación de los servicios es realizada por una institución pública autónoma o dependiente del ministerio o sector que realiza la rectoría.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de reducción de riesgo o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar a la entidad nacional responsable de la energía eléctrica, que es generalmente quien ejerce la rectoría, o en algunos casos la regulación, del sector. 3. Revisar el presupuesto del año en curso de las instituciones identificadas como responsables del sector de la energía a fin de identificar si existen recursos asignados para realizar acciones de reducción de riesgo de desastres. 4. Identificar si la entidad nacional responsable de la energía cuenta con programas o proyectos en curso que consideren acciones de reducción de riesgo de desastres, e indagar si son financiados con recursos públicos.

<p>5. De ser necesario, consultar sobre la asignación de recursos para la reducción del riesgo de desastres con representantes de las instituciones identificadas como responsables de la energía (rectoría o regulación del sector), concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal, área de gestión de riesgo de desastres o adaptación al cambio climático si existiera, con el fin de indagar sobre la asignación de recursos para la reducción de riesgo de desastres.</p> <p>6. De ser necesario, consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, concretamente con las áreas responsables del tema presupuestal.</p>	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-3	Si el país cuenta con un objeto de gasto o clasificador presupuestal para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, dicha información puede ser utilizada para verificar la asignación de recursos vía presupuestal en el sector.
RR-1B-16	Si la existencia de normatividad del sector energía que define la responsabilidad de realizar la reducción del riesgo de desastres podría ser un indicativo de que el sector esté asignando recursos para dicho propósito.
IR-2-12	La evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de análisis de riesgo de desastres en el sector podría facilitar la búsqueda de información para verificar el presente indicador. En ocasiones, la asignación de recursos para actividades de reducción de riesgos lleva emparejada el financiamiento de estudios de riesgo que sustentan dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia de asignación de recursos en el último ejercicio o vigencia fiscal a la entidad nacional responsable de la energía (rector o regulador) para realizar actividades de reducción del riesgo de desastres a través de recursos del presupuesto.</p> <p>En la justificación se deben detallar las actividades de reducción de riesgo de desastres consideradas en el presupuesto y, en el caso de existir, se debe incluir el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador con la asignación de recursos de la cooperación internacional u otros diferentes a recursos públicos para proyectos, programas o acciones de reducción de riesgo que implemente el sector energía. Tampoco se podrá verificar esta condición con asignación presupuestaria para la reducción de riesgo por una institución prestadora de los servicios de energía eléctrica.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Belize 2017. “Approved Estimates of Revenue and Expenditure for Fiscal Year 2016/2017” (RR-2-10a), as Presented to the House of Representative on March 23th, 2016 and by the Senate on March 29th, 2016, includes under “18 Ministry of Finance, Public Service, Public Utilities and Energy” the Programme “1911 Energy Resilience for Climate Adaptation Project (ERCAP)”.</p>	

Traducción:

Belice 2017. "Estimaciones aprobadas de ingresos y gastos para el año fiscal 2016/2017" (RR-2-10a), tal como se presentó a la Cámara de Representantes el 23 de marzo de 2016 y al Senado el 29 de marzo de 2016, incluye en " 18 Ministerio de Hacienda, Servicio Público, Servicios Públicos y Energía "el Programa" Proyecto de Adaptación Climática de 1911 para la Adaptación al Clima (ERCAP) ".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. No se encontró evidencia de asignación de recursos para realizar actividades de reducción de riesgo de desastres en el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual mayo 2016 (que es parte de la proforma de gastos 2016 del Presupuesto General del Estado) de: (i) la Agencia de Regulación y Control de Electricidad; (ii) Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 14 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 418 el 16 de enero de 2015 *"La Agencia de Regulación y Control de Electricidad ARCONEL, es el organismo técnico administrativo encargado del ejercicio de la potestad estatal de regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía eléctrica y el servicio de alumbrado público general, precautelando los intereses del consumidor o usuario final"*. De otra parte, de acuerdo con el Artículo 11 de la misma Ley, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) *"Es el órgano rector y planificador del sector eléctrico. Le corresponde definir y aplicar las políticas; evaluar que la regulación y control se cumplan para estructurar un eficiente servicio público de energía eléctrica; la identificación y seguimiento de la ejecución de proyectos; otorgar títulos habilitantes; evaluar la gestión del sector eléctrico; la promoción y ejecución de planes y programas de energías renovables; los mecanismos para conseguir la eficiencia energética, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley"*.

Código RR-2-11

Pregunta de respuesta cerrada	
11. ¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el raudo restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal, que involucra a todas las entidades de la administración pública nacional, central o federal, a los distintos niveles de gobierno y a los sectores privado y social. Lo que incluye en su integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público, privado u objeto de concesión a un particular.</p> <p>En ese contexto, la reducción del riesgo de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta fundamental para reducir las vulnerabilidades de estos servicios y así mitigar los daños a la infraestructura y evitar la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. Es así como el presente indicador considera relevante que la empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país haya realizado actividades para la reducción del riesgo de desastres de sus servicios al menos en una ocasión durante los últimos 5 años.</p> <p>La empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país usualmente corresponde a alguna empresa que presta sus servicios a nivel nacional, o bien aquella que provee los servicios de agua y saneamiento a la ciudad con mayor población del país. En ambos casos la empresa puede ser de carácter público, o estar concesionada al sector privado.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Identificar la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector, del ente regulador del sector o de existir de la asociación nacional de empresas del rubro, entre otros. También se puede acudir a criterio de experto. 6. Revisar la información publicada por esa empresa durante los últimos 5 años, relacionada con la gestión de la empresa, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo, informes de sostenibilidad o memorias anuales. 7. De ser necesario, consultar directamente con representantes de la empresa sobre si ha realizado actividades de reducción de riesgo de desastres de sus servicios en los últimos 5 años. 8. Contactar a la entidad rectora o reguladora del sector de agua y saneamiento para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-2-13 PR-2-13	<p>Estos indicadores hacen referencia a la misma empresa prestadora de los servicios de agua y saneamiento. Además, la evidencia de la realización de acciones de preparativos para desastres y/o de identificación de riesgo de desastres en el servicio de agua y saneamiento, podrían estar vinculados con acciones de reducción de riesgo.</p>

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido
<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia documental oficial de la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, donde conste que se ha realizado al menos a una acción de reducción del riesgo de desastres en sus servicios, durante los últimos 5 años. Cabe mencionar que dicha acción puede haber sido realizada con recursos propios o de terceros.</p> <p>En la justificación se debe hacer mención al nombre de la empresa, así como el alcance de las acciones de reducción riesgo de desastre realizado en su infraestructura, ya sea integralmente o en algunos de sus componentes.</p> <p>Se aceptarán como verificables los propios informes de las acciones de reducción de riesgo de desastres, información al respecto publicada en la página web de la empresa, informes de gestión de la empresa, memorias anuales, informes de sostenibilidad, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo o documentación similar de carácter oficial.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>El Salvador 2016. Dentro de los proyectos de inversión a 2016 a ser desarrollados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados se encuentran: (i) el "Proyecto: 4583 - Mejoramiento del sistema de agua potable, a través de la construcción de tanque de almacenamiento de 1000 m3 y la instalación de un anillo de distribución en el municipio de Texistepeque" (RR-2-11a). La descripción de dicho Proyecto estipula que "Debe considerarse áreas de protección, realizar actividades de mitigación periódicamente para evitar arrastres que puedan con el tiempo hacerla vulnerable, debilitando la zona"; (ii) el "Proyecto: 5875 - Reparación y Reducción de vulnerabilidades en las obras de paso de las quebradas del Sistema Zona Norte y Río Lempa, Municipio de San Salvador, San Salvador" (RR-2-11b), cuyo objetivo es "Reducir el riesgo de deslizamientos y de socavación de estructuras, a través de la construcción de obras de mitigación en las quebradas del Sistema Zona Norte, para garantizar la durabilidad de las obras de paso".</p>
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Guatemala 2013. La Empresa Municipal de Agua –EMPAGUA- en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –SE-CONRED- realizaron una evaluación al Radar de Penetración de Suelo –GPR, por sus siglas en inglés con el propósito de verificar las condiciones en la red de drenajes en la 7av. Avenida y 1ra. Calle de la zona 1, barrio San Sebastián, Ciudad de Guatemala. No obstante, no se pudo corroborar que esta evaluación fue seguida por acciones de reducción de riesgo de desastres.</p>

Código RR-2-12

Pregunta de respuesta cerrada	
12. ¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el raudo restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal, que involucra a todas las entidades de la administración pública nacional, central o federal, a los distintos niveles de gobierno y a los sectores privado y social. Lo que incluye en su integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público, privado u objeto de concesión a un particular.</p> <p>En ese contexto, la reducción del riesgo de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta fundamental para reducir las vulnerabilidades de estos servicios y así mitigar los daños a la infraestructura y evitar la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. Es así como el presente indicador considera relevante que las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con las mayores facturaciones del país hayan realizado actividades para la reducción del riesgo de desastres de sus servicios al menos en una ocasión durante los últimos 5 años.</p> <p>La generación, transmisión y distribución de energía pueden estar agrupadas en una o en varias empresas, Asimismo, éstas pueden ser de carácter público o estar concesionadas.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> Identificar las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación del país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector o del ente regulador del sector energía, entre otros. También se puede acudir a criterio de experto. Revisar la información publicada por dichas empresas durante los últimos 5 años, relacionada con la gestión de la empresa, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo, informes de sostenibilidad o memorias anuales. De ser necesario, consultar directamente con representantes de cada una de las empresas identificadas sobre si han realizado actividades de reducción de riesgo de desastres de sus servicios en los últimos 5 años. Contactar a la entidad rectora o reguladora del sector energía para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-2-14 PR-2-14	<p>Estos indicadores hacen referencia a las mismas empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país. Además, la evidencia de la realización de acciones de preparativos para desastres y/o de identificación de riesgo de desastres en el servicio de energía, podría también ser indicativo de que la empresa también esté implementando de acciones de reducción de riesgo, aunque dicho supuesto habría que confirmarlo a través del presente indicador.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia documental oficial de que cada una de las empresas con la mayor facturación del país responsables de la generación, transmisión y distribución de energía han realizado, de manera conjunta o independiente, al menos una acción de reducción de riesgo de desastres en sus servicios o infraestructura durante los últimos 5 años. Cabe mencionar que dicha acción puede haber sido realizada con recursos propios o de terceros.

De esta manera, la situación mínima de cumplimiento es que se verifique que se hayan implementado acciones de reducción de riesgos de desastres en los tres procesos (generación, transmisión y distribución), por parte de las respectivas empresas con mayor facturación encargada de cada uno de los procesos enunciados. Esto es, cumpliéndose solo en uno o dos de los procesos no se logra cumplir con la situación mínima requerida.

En la justificación se debe hacer mención al nombre de las empresas, así como el alcance de las acciones de reducción riesgo de desastre realizado en su respectiva infraestructura, ya sea integralmente o en algunos de sus procesos.

Se aceptarán como verificables: los propios informes de las acciones de reducción de riesgo de desastres, información al respecto publicada en la página web de la empresa, informes de gestión de la empresa, memorias anuales, informes de sostenibilidad, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo o documentación similar de carácter oficial.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos de cumplimiento de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. De acuerdo a lo que se señala en el informe de gestión sostenible 2012 de la Empresa de Energía de Bogotá (participa en el negocio de transmisión, con el 7,37% en la totalidad de los ingresos de transmisión nacional), para el cumplimiento del programa de mantenimiento del 2012 fueron suscritas 22 órdenes de servicio y 12 contratos entre la zona suroccidente y centro, en donde se realizaron obras de tipo contención mediante la construcción de gaviones, trinchos en madera y metálicos y muros de contención, obras de drenaje de tipo filtros, cunetas, disipadores y drenes, cimentaciones profundas tipo *Caisson* y zapatas y reconformación geomorfológica con la ejecución de siembra de pasto vetiver y carrizo. De otra parte, se realizaron obras civiles tales como: (i) obras de estabilización geotécnica de la torre 68 y 80 de la línea Guavio-Circo; (ii) Se encuentran en ejecución las obras de protección para el flujo de lahares en la torre 96 de la línea Guavio-Reforma-Tunal; (iii) Se encuentran en ejecución las obras de estabilización geotécnica de la torre 288 de la línea Guavio-Reforma-Tunal. No obstante, a los avances en la reducción de riesgos a nivel del proceso de transmisión de energía, el indicador no se cumple en razón a que no fue posible confirmar avances similares a nivel de los procesos de generación y distribución de energía, específicamente con las empresas de mayor facturación en el país, que son ISAGEN y CODENSA. No fue viable conseguir entrevistas con las empresas en cuestión, así como tampoco se consiguió información al respecto en los informes de gestión de ISAGEN y de CODENSA.

Código RR-2-13

Pregunta de respuesta cerrada	
13. <i>¿La empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, ha implementado al menos un proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres de su infraestructura en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el raudo restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es una política pública transversal, que involucra a todas las entidades de la administración pública nacional, central o federal, a los distintos niveles de gobierno y a los sectores privado y social. Lo que incluye en su integralidad a las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean de carácter público, privado u objeto de concesión a un particular.</p> <p>En ese contexto, la reducción de los riesgos de desastre de las empresas prestadoras de servicios públicos resulta fundamental para reducir las vulnerabilidades de estos servicios y así mitigar los daños a la infraestructura y evitar la interrupción de dichos servicios durante una emergencia o desastre. Es así como el presente indicador considera relevante que la empresa de telecomunicaciones, (entendida como aquella que presta servicios de telefonía fija y/o móvil) con la mayor cartera de usuarios en el país, haya realizado actividades para la reducción del riesgo de desastres de sus servicios al menos en una ocasión durante los últimos 5 años. La empresa de telecomunicaciones puede ser de carácter público o privada.</p> <p>Se debe tener presente que las actividades de “reducción del riesgo” pueden ser consideradas usando terminología tal como prevención o mitigación del riesgo de desastres u otras similares específicamente con el quehacer del sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> Identificar la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector o del ente regulador del sector telecomunicación, entre otros. También se puede acudir a criterio de experto. Revisar la información publicada por dicha empresa durante los últimos 5 años, relacionada con la gestión de la empresa, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo, informes de sostenibilidad o memorias anuales. De ser necesario, consultar directamente con representantes la empresa identificada sobre si han realizado acciones de reducción del riesgo de desastres de sus servicios en los últimos 5 años. Contactar a la entidad rectora o reguladora del sector telecomunicaciones para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-2-15 PR-2-15	<p>Estos indicadores hacen referencia a la misma empresa prestadora de los servicios de telecomunicaciones. Además, la evidencia de la realización de acciones de preparativos para desastres y/o de identificación de riesgo de desastres en el servicio telecomunicaciones, podrían ser indicativos de que la empresa también haya realizado acciones de reducción de riesgo, aunque dicho supuesto habría que confirmarlo mediante el presente indicador.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

<p>Para el cumplimiento de este indicador debe existir evidencia documental oficial de la empresa de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, donde conste que se ha realizado al menos a una acción de reducción del riesgo de desastres en sus servicios, durante los últimos 5 años. Cabe mencionar que dicho estudio puede haber sido realizado con recursos propios o de terceros.</p> <p>En la justificación se debe hacer mención al nombre de la empresa, así como el alcance de las acciones de reducción riesgo de desastre realizado en su infraestructura, ya sea integralmente o en algunos de sus componentes.</p> <p>Se aceptarán como verificables: los propios informes de las acciones de reducción de riesgo de desastres, información al respecto publicada en la página web de la empresa, informes de gestión de la empresa, memorias anuales, informes de sostenibilidad, informes de auditoría, informes de calificadoras de riesgo o documentación similar de carácter oficial.</p> <p>No se aceptan como verificables: Información mencionada en entrevistas, que no haya sido soportada</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p> <p>Chile 2013. Decreto 60, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de 2012 (RR-2-13a) - Reglamento para la interoperación y difusión de la mensajería de alerta, declaración y resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones e información sobre fallas significativas en los sistemas de telecomunicaciones., establece: Artículo 18º - <i>"Este Título tiene por objeto asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia, resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe, mediante el adecuado resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones así declarada, y el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de un Plan de Resguardo de dicha infraestructura a nivel nacional, en coordinación con los diversos organismos e instituciones de gobierno y agentes privados"</i>. En el Reporte de Sustentabilidad Bienal 2011-2012 Entel (RR-2-13b), bajo la sección <i>"Continuidad del Servicio en Situaciones de Emergencia"</i>, se indica entre otras cosas que <i>"se han establecido 188 puntos críticos en los que se garantiza la transmisión de señal durante un mínimo 48 horas, aunque exista corte en el abastecimiento eléctrico"</i>.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p> <p>Belize 2017. According to http://www.belizetelemedia.net/en/our-company/our-history <i>"Telecommunications in Belize dates back to 1902, when a manual line linked Belize City with Consejo Village in the Corozal District in the Northern region of the country. Since then BTL has grown from a small company to Belize's largest nationalized telecommunications company, providing the latest in cutting edge technology by deploying and maintaining its high-quality networks"</i>. BTL informed that in the context of the insurance program that they have, they carry out annual inspections with the insurance and reinsurance companies. After each inspection, a Property Risk Report with information about the vulnerabilities to be fixed is produced. BTL also informed that they implement most of the recommendations contained in the report. Given that it was not possible to have access to evidence that supports the mentioned activities the condition is negative. No evidence about any project or program that includes disaster risk reduction activities in its infrastructure was found at either the web page of Belize Telemedia Limited (http://www.belizetelemedia.net/home) nor in the BTL Annual Director's Report 2015/2016.</p>

Traducción:

Belice 2017. Según la página <http://www.belizetelemedia.net/en/our-company/our-history> “*Las telecomunicaciones en Belice se remontan a 1902, cuando una línea manual unía la ciudad de Belice con el Consejo Village en el distrito de Corozal en la región norte del país. Desde entonces, BTL ha pasado de ser una pequeña empresa a ser la mayor empresa de telecomunicaciones nacionalizada de Belice, proporcionando lo último en tecnología de vanguardia mediante la implementación y el mantenimiento de sus redes de alta calidad*”. BTL informó que, en el contexto del programa de seguros que tienen, realizan inspecciones anuales con las compañías de seguros y reaseguros. Después de cada inspección, se produce un Informe de riesgo con información sobre las vulnerabilidades a corregir. BTL también informó que implementan la mayoría de las recomendaciones contenidas en el informe. Dado que no fue posible tener acceso a evidencia que respalde las actividades mencionadas, la condición es negativa. No se encontró evidencia sobre ningún proyecto o programa que incluya actividades de reducción del riesgo de desastres en su infraestructura en la página web de Belize Telemedia Limited (<http://www.belizetelemedia.net/home>) ni en el Informe Anual de Directores de BTL 2015 / 2016.

Código RR-3-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe normatividad que establezca un régimen de sanciones por daños al medio ambiente para los infractores de naturaleza pública y privada?	
Descripción general del indicador	
El indicador reconoce como atributo de calidad del marco legal aplicable al sector ambiental u otro que pueda existir en el país, cuando se establece un régimen de sanciones para aquellos casos que personas físicas, entes públicos o privados, incurran en determinadas conductas que provoquen daños al medio ambiente. Este régimen puede contemplar infracciones administrativas y/o la configuración de delitos que a su vez traigan consigo sanciones administrativas o penales. Este indicador reconoce que la existencia de un régimen así contribuye a la disminución de condiciones de riesgo asociadas a fenómenos naturales recurrentes.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar el marco normativo ambiental del país u otra normatividad que pueda contener un régimen de sanciones por daños al medio ambiente. 2. Revisar si dicha normativa establece, para los casos de daños al medio ambiente, un régimen que señale sanciones administrativas, o bien, que tipifique algún delito e indique las penas correspondientes. 3. De ser necesario contactar a la entidad rectora del sector ambiental para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad identificada debe contemplar un régimen de sanciones por la realización de conductas relacionadas con daños al medio ambiente.</p> <p>En la justificación se debe referir tanto las conductas merecedoras de sanciones como las sanciones establecidas en el marco normativo ambiental.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Venezuela 2015. La Ley Penal del Ambiente, publicada en Gaceta Oficial N° 39.913 del 02 de mayo de 2012 (RR-3-1a), establece en su artículo 1, que la ley <i>"tiene por objeto tipificar como delito los hechos atentatorios contra los recursos naturales y el ambiente e imponer las sanciones penales. Asimismo, determinar las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar y las disposiciones de carácter procesal derivadas de la especificidad de los asuntos ambientales"</i>. Menciona en el Artículo 2 que las disposiciones de esa Ley son aplicables a las personas naturales y jurídicas por los delitos cometidos tanto en el espacio geográfico de la República como en país extranjero, si los daños o riesgos del hecho se producen en Venezuela.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Suriname 2017. This indicator is not met. The Police Criminal Act of 1915, whose last amendment was approved by the National Assembly in 1990, stipulates in several articles the punishment of those who litter public spaces. However, it does not establish a system of penalties to public and private entities for damaging the environment. According to NIMOS, the draft Environmental Law, currently under preparation, has provisions for punishment of those who damage the environment.

Suriname 2017. Este indicador no se cumple. La Ley Penal de la Policía de 1915, cuya última enmienda fue aprobada por la Asamblea Nacional en 1990, estipula en varios artículos el castigo de quienes ensucian espacios públicos. Sin embargo, no establece un sistema de sanciones a las entidades públicas y privadas por dañar el medio ambiente. Según NIMOS, el Borrador de La Ley Ambiental, en preparación, tiene disposiciones para castigar a quienes dañan el medio ambiente.

Código RR-3-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Resulta relevante que el ente nacional de control, auditoría, contraloría, órgano fiscalizador nacional (o quien haga sus veces en el país) haya realizado alguna verificación o evaluación sobre el cumplimiento en los últimos 5 años del mandato de reducción del riesgo de desastres que haya sido establecido en el marco legal del país.</p> <p>Se debe tener presente que para referir a la “reducción del riesgo” se pueden emplear otras terminologías tal como la prevención o mitigación del riesgo de desastres, u otras similares.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Identificar la entidad o las entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 5. Identificar la existencia de informes, evaluaciones o documentación similar, elaborada por la entidad nacional de control, sobre el cumplimiento de acciones en reducción del riesgo de desastres en los últimos 5 años. 6. De ser necesario, consultar directamente con representantes la entidad nacional de control para indagar sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-3-3 IR-3-5 RR-3-5 PR-3-2 PR-3-2 PR-3-3	La información utilizada para verificar estos indicadores podría contener la información para cumplir el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador se debe comprobar la existencia de un documento del órgano de control, auditoría superior, contraloría o entidad equivalente; que comprenda una evaluación o verificación del desempeño de al menos una de las entidades que tenga definido un mandato legal en materia de reducción de riesgo en el país.</p> <p>En el caso que los informes, evaluaciones o documentación identificada para verificar este indicador hagan referencia a la GRD de manera general, en la justificación deberá quedar explícito que entre lo evaluado como GRD están las actividades de reducción de riesgo de desastre, caso contrario no se podrá validar el cumplimiento del presente indicador.</p> <p>NOTA: la evaluación podría ser sobre el desempeño de una sola entidad o bien de un grupo de entidades.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. En 2012 la Contraloría General de la República (CGR), publicó el informe sobre el estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2011– 2012 (RR-3-2a), en el que se hace una evaluación del desempeño tanto de las entidades nacionales como de los entes territoriales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, y concretamente sobre la reducción de riesgos, como en el apartado de Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en transporte e infraestructura, el reporte del Ministerio de Transporte en la infraestructura vial primaria (página 64). Este informe incluye un análisis de la integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial (gestión prospectiva del riesgo que contribuye a la reducción del riesgo de desastres). Ver páginas 411 a 414 sobre "Planes de ordenamiento territorial y gestión del riesgo". Adicionalmente, se tiene que la CGR profirió "función de advertencia en 2011" dirigida a las corporaciones autónomas regionales frente a la "ola invernal" (Fenómeno La Niña), señalando que dentro de las actividades que deberían implementar estaba *"la reparación de jarillones y demás obras que permitan la evacuación de las aguas y precaver inundaciones futuras"*, advirtiendo que *"la demora en la ejecución de las obras anteriormente señaladas podría causar perjuicios graves en pocos días, cuando retornen las lluvias e incluso poner en riesgo la vida de las personas"* (Informe de la GRD sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente, página 106). Adicionalmente, el especial seguimiento a la reconstrucción y la adaptación en el contexto de la llamada "Ola Invernal" (2011 y 2012), se tiene que la CGR hizo verificación y evaluación de acciones de reducción de riesgos de desastres de responsabilidad de Colombia Humanitaria y del Fondo Adaptación, por cuanto la normativa *"obliga a que se deje capacidad física y de planeamiento del desarrollo espacial que prevenga situaciones futuras de emergencia, desastre o calamidad"*; es decir que las áreas deben quedar mejor preparadas.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. Desde el año 2007, la Contraloría General de la República cuenta con la Directiva N° 02-2007-CG/CA, *"para el ejercicio del Control Preventivo del Sistema Nacional de Control ante una Declaración de Estado de Emergencia por Catástrofe"*. Esta normatividad no aborda el control sobre la aplicación de políticas ex ante (prevención), su ámbito de aplicación es *"ante una declaración de estado de emergencia para atender las necesidades derivadas como consecuencia de catástrofes"*.

Código RR-3-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿La normatividad que regula la formulación de Planes de Ordenamiento Territorial (o similares), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?	
Descripción general del indicador	
<p>El indicador reconoce como atributo de calidad del marco legal aplicable en materia de planificación y ordenamiento territorial, que disponga que los planes de ordenamiento territorial (o instrumento equivalente) sean objeto de monitoreo, evaluación y actualización.</p> <p>Se indaga por la normatividad que determine estas tres responsabilidades (monitoreo, evaluación y actualización), es decir, no se está preguntando si se cumplen en la práctica, sino si están normadas en el país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad vigente en materia de planificación y ordenamiento territorial. 2. Determinar si en dicho marco normativo se establecen procedimientos de monitoreo, evaluación y actualización de los planes de ordenamiento territorial. 3. Determinar si se asignan responsabilidades frente a dichos procedimientos. 4. De ser necesario, consultar directamente con representantes la entidad nacional vinculada con la planificación territorial sobre el cumplimiento del indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1C-3 RC-1C-2	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad identificada debe establecer de manera explícita responsabilidades en materia de monitoreo, evaluación y actualización de los planes de ordenamiento territorial.</p> <p>No se logrará cumplir el indicador si solamente se provee normatividad que establezca responsabilidades para alguno de los procedimientos indicados (monitoreo, evaluación y actualización), pero no para los tres.</p> <p>En la justificación, independientemente de la valoración del indicador, deberá quedar registrado lo que indica la normatividad respecto a los procedimientos de monitoreo, evaluación y actualización de los planes de ordenamiento territorial, así como los entes responsables para cada uno de ellos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Colombia 2013. La Ley 388 del 18 de julio de 1997 de Ordenamiento Territorial (RR-3-3a), "Por la cual se modifica la Ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se dictan otras disposiciones", establece los procedimientos para la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (artículos 7 y 8), revisión y actualización (Artículo 28) y seguimiento (que es el monitoreo) en el Artículo 29. Adicionalmente, el Decreto 4002 del 30 de noviembre de 2004 (RR-3-3b), "Por el cual se reglamentan los artículos 15 y 28 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997 y se establecen las condiciones para la revisión excepcional de los planes de ordenamiento territorial", estipula los casos en que debe efectuarse la revisión excepcional del POT, incluyendo las situaciones de desastre o emergencia.</p>	

Chile 2013. El Decreto con fuerza de ley N° 1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ministerio el Interior, del 9 de mayo de 2006, establece: "Artículo 21.- La *Secretaría Comunal de Planificación* desempeñará funciones de asesoría del alcalde y del concejo, en materias de estudios y evaluación, propias de las competencias de ambos órganos municipales. En tal carácter, le corresponderán las siguientes funciones: ... c) *Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.* d) *Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales;* g) ... Adscrito a esta unidad existirá el asesor urbanista, quien requerirá estar en posesión de un título universitario de una carrera de, a lo menos, diez semestres, correspondiéndole las siguientes funciones: a) *Asesorar al alcalde y al concejo en la promoción del desarrollo urbano;* b) *Estudiar y elaborar el plan regulador comunal, y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar los planes seccionales para su aplicación, y* c) *Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal, formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. Se localizó un documento sobre "*El Ordenamiento Territorial*" publicado por Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación disponible en (http://atlasflacma.weebly.com/uploads/5/0/5/0/5050016/ley_de_ordenamiento_territorial_en_bolivia.pdf) que hace referencia a: "*El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de carácter normativo, técnico político y administrativo para la gestión del territorio mediante el cual se planifica y regula el uso del suelo y se optimiza las modalidades de su ocupación*", y menciona explícitamente que estos planes tienen una vigencia de 10 años. También incluye dentro de los instrumentos operativos del ordenamiento territorial a los "*Informes de Evaluación del Ordenamiento Territorial, en los niveles nacional, departamental y municipal, que son documentos de evaluación técnica (instrumentos operativos) del grado de aplicación de los planes de Ordenamiento Territorial, elaborados cada cinco años por el órgano rector del ordenamiento territorial a nivel nacional y las instancias técnicas de las prefecturas y los gobiernos municipales respectivamente.*" Más allá de esta referencia, no se encontró en la normativa relacionada con ordenamiento territorial, la asignación explícita sobre responsabilidades de monitoreo, evaluación y actualización.

Código RR-3-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿La normatividad que regula la planificación o manejo de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente), asigna responsabilidades para su monitoreo, evaluación y actualización?	
Descripción general del indicador	
Al igual que en el caso del ordenamiento territorial, el manejo (integrado) de cuencas hidrográficas (o instrumento de planificación equivalente) es un elemento clave para la gestión prospectiva del riesgo de desastres, especialmente en ámbitos rurales o peri-urbanos. Por lo cual este indicador verifica la buena práctica de que exista normatividad que establezca el monitoreo, evaluación y actualización de los planes de manejo de cuencas (o instrumentos de planificación similares).	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad vigente en materia planificación de cuencas hidrográficas o gestión de recursos hídricos (o similares). 2. Determinar si en dicho marco normativo se establecen procedimientos de monitoreo, evaluación y actualización de los planes de ordenamiento o gestión de cuencas, o similar. 3. Determinar si se asignan responsabilidades frente a dichos procedimientos. 4. De ser necesario, consultar directamente con representantes la entidad nacional vinculada con la gestión integral de recursos hídricos. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1C-2	Revisar si la normatividad utilizada para este indicador permite verificar la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad identificada debe establecer de manera explícita responsabilidades en materia de monitoreo, evaluación y actualización de los planes de ordenamiento o gestión de cuencas (o instrumento similar).</p> <p>No se logrará cumplir el indicador si solamente se provee normatividad que establezca responsabilidades sólo para alguno de los procedimientos indicados (monitoreo, evaluación y actualización) pero no para los tres.</p> <p>En la justificación, independientemente de la valoración del indicador, deberá quedar registrado lo que indica la normatividad respecto a los procedimientos de monitoreo, evaluación y actualización de los planes, así como los entes responsables para cada uno de ellos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. El Decreto 1640 del 2 de agosto de 2012, por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposiciones (RR-3-4a) en el artículo 26 establece como una de las Fases del proceso de "ordenación de las cuencas hidrográficas" el de "seguimiento y evaluación" (numeral 6). Adicionalmente, el artículo 40 reglamenta la "revisión, y ajustes del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica", y se establece que el ajuste debe estar fundamentado en "los resultados anuales del seguimiento y evaluación del Plan".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. La Ley de Aguas, publicada en Gaceta Oficial N. 35.595, del 2 de enero de 2007 (RR-3-4a), instrumento legal que rige la gestión integrada del recurso hídrico, se establece la existencia de Secretarías Ejecutivas de los Consejos de Regiones Hidrográficas y Cuencas Hidrográficas (Artículos 30 y 35 respectivamente), encargadas de coordinar la elaboración y ejecución del Plan de Gestión Integral de las Aguas. Así mismo se establece en el "Artículo 46. La elaboración, aprobación y control de los planes de gestión integral de las aguas se regirá por las disposiciones establecidas a tales efectos en esta Ley, en la legislación sobre planificación, en la legislación sobre ordenación del territorio, en la legislación orgánica del ambiente, así como en la legislación en materia indígena y en las demás leyes aplicables. Los planes se elaborarán y ejecutarán mediante un proceso de coordinación interinstitucional, multidisciplinario y permanente, que incluirá los medios de consulta y participación protagónica previstos en la ley. Artículo 47. Los planes orientarán la gestión integral de las aguas y constituirán instrumentos flexibles, dinámicos, prospectivos y transversales que permitirán prever y enfrentar situaciones cambiantes del entorno que directa e indirectamente afecten al recurso." Sí bien se establece la responsabilidad de "control", no se incluye una definición que muestre, de forma explícita, que el seguimiento, la evaluación y actualización están incluidos en dicho concepto.

Código RR-3-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿El ente nacional de control o ente regulador del sector, ha realizado al menos una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este es un indicador de desempeño que se relaciona con la realización de evaluaciones sobre la aplicación de medidas de reducción de riesgo, durante la fase de construcción de proyectos de infraestructura.</p> <p>Este indicador se deriva de la normatividad que establece la obligatoriedad de incorporar medidas de reducción del riesgo de desastre durante la fase de construcción en proyectos de infraestructura pública y privada (RR-1A-5), y valora la buena práctica que dichas obligaciones sean evaluadas de manera periódica ya sea por el ente nacional de control o el ente regulador del sector vinculado con el proyecto de infraestructura en los últimos 5 años.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por los proyectos principales de infraestructura pública (megaproyectos) durante los últimos 5 años. 2. Identificar las autoridades nacionales responsables de los proyectos de infraestructura identificados y a los entes reguladores de los sectores que abarcan dichas infraestructuras. 3. Identificar la entidad o entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 4. Consultar con las entidades mencionadas en los puntos anteriores si al menos en uno de esos proyectos, la entidad de control o ente regulador competente han realizado una evaluación de la aplicación de medidas de reducción de riesgo de desastre durante la fase de construcción del proyecto. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador se debe contar con un informe de evaluación que haya sido elaborado en los últimos 5 años por parte del ente nacional de control o por el ente regulador del sector vinculado con el proyecto de infraestructura analizado, sobre la aplicación de medidas de reducción de riesgo durante la fase de construcción de proyecto de infraestructura.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
No existen ejemplos de cumplimiento de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>México 2013. Si bien se encontró evidencia de auditorías que evalúan la aplicación de medidas de reducción del riesgo en obras y proyectos de infraestructura, no se pudo verificar la evaluación concreta de medidas "transitorias" durante la fase de construcción.</p>	

D. PREPARATIVOS PARA LA RESPUESTA (PR)

Código PR-1A-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que establece una organización interinstitucional en el nivel nacional para los procesos de preparativos y respuesta?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>El indicador pregunta por el establecimiento de una entidad o estructura institucional, a escala nacional, con responsabilidad sobre los procesos de Preparación y Respuesta (PR). Este indicador concede importancia a que en los países cuenten con una normatividad que establezca una entidad o estructura nacional que agrupe a distintas instancias con competencias y capacidades con el fin de concentrar los recursos disponibles y coordinar los esfuerzos institucionales para atender las actividades de Preparación y Respuesta (PR), frente a una emergencia o desastre. Esa normatividad puede ser la nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), o bien, normatividad de defensa o protección civil nacional o cualquier otra en la que se establezca y regule una organización interinstitucional con esas características y objetivos.</p> <p>Por Preparación y Respuesta se entiende la suma de los preparativos: la planificación, organización y prueba de los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre; y de la respuesta misma: la etapa de ejecución de los procedimientos y protocolos y de la atención oportuna de la sociedad.</p> <p>La organización interinstitucional por la cual indaga este indicador puede corresponder entre otros a un Comité Nacional para el Manejo de Desastres, Comité de Protección Civil, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o Gabinete de Emergencias, en los cuales habitualmente participan representantes ministeriales, instituciones públicas y de la sociedad civil involucradas directamente en la respuesta a emergencias y desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar por la existencia de normatividad de carácter nacional o federal que regule los componentes de la GRD o los de la preparación y respuesta a emergencias y desastres, así como la normatividad que crea instituciones o sistemas de defensa o protección civil. 2. Verificar si dicha normatividad establece una organización nacional e interinstitucional, así como define funciones para la coordinación de los procesos de preparativos y respuesta. 3. De ser necesario consultar con representantes de la institución encargada de coordinar a nivel nacional o federal los preparativos y respuesta a emergencias y desastres. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG 1A-1 MG-1A-3	La normatividad nacional que establece el marco de responsabilidades sobre la gestión del riesgo de desastres debería establecer también la organización interinstitucional para los procesos de preparativos y respuesta.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe establecer explícitamente la creación de una entidad o estructura nacional conformada por instituciones nacionales o federales, que sirva como un mecanismo de coordinación de las actividades de preparativos y respuesta a emergencias y desastres.</p> <p>La existencia de una institución con responsabilidades respecto sólo para la respuesta no es suficiente para cumplir el indicador</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 27 de octubre de 2005 (PR-1A-1a) Establece en su Capítulo III: " *Artículo 13: se crea la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias como órgano de desconcentración máxima*". El Artículo 14 indica que dicha institución es rectora en materia de prevención de riesgos y preparativos para atender situaciones de emergencia en su inciso a); y en su artículo 17 define la Integración de la Junta Directiva, en donde se considera la participación de los diversos sectores a través de sus ministros definiendo además en el artículo 15 las atribuciones de la referida junta, entre las que considera "*dictar las políticas generales para la articulación del Sistema Nacional...*" y "*aprobar los planes generales de emergencia*", incisos b y g respectivamente.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2018. There are no regulations that establish inter-institutional organization for preparedness at the national level. The existing Disaster Measures Act 47 of 1978 Ch. 16:50 LRO 2006 is an emergency powers/ declaration-of-disaster regulation. The Comprehensive Disaster Management Policy Framework (CDMPF) 2013 structures an Inter-Ministerial Committee (NSC) and a Disaster Management Advisory Council for all Disaster Risk Management processes or components and not just preparedness. However, the Policy Framework doesn't have a legal support. On the contrary, the same document establishes (page 36) "*The CDMPF and its proposed institutional arrangements can only effective if supported and empowered by a robust legal and regulatory framework...*" The Office of Disaster Preparedness and Management (ODPM) was established through Cabinet Minutes #56 January 6, 2005 and No. 2042, dd17/08/200. The latter stated that the Office of Disaster Preparedness and Management's purpose was "*... to spearhead the national effort aimed at addressing Comprehensive Disaster Management.*" Email discussion with the Deputy CEO Office of Disaster Preparedness and Management March 27, 2017 establishes the note discusses organizational structure and manpower; "*The rest of the Note and Minute speaks to the constituent Office of Disaster Preparedness and Management Sections (overall areas of responsibility, no. of positions, etc.). The Sections/Units are: (i) Preparedness & Response; (ii) Mitigation, Planning & Research, (iii) Public Information, Education & Community Outreach, (iv) Project Management; and (v) Administrative Support & Finance. All other documentation that deal with the work of the Office of Disaster Preparedness and Management are Office of Disaster Preparedness and Management -driven*".

Traducción:

Bahamas 2018. No existen regulaciones que establezcan una organización interinstitucional para la preparación a nivel nacional. La actual *Disaster Measures Act 47 of 1978 Ch. 16:50 LRO 2006* es una normatividad que establece facultades para emitir declaraciones de desastre. El Marco Integral de Políticas de Gestión de Desastres (CDMPF en sus siglas en inglés) 2013 estructura un Comité Interministerial (NSC) y un Consejo Asesor de Gestión de Desastres para todos los procesos o componentes de Gestión de Riesgos de Desastres y no solo la preparación. Sin embargo, ese Marco de Políticas no tiene soporte legal. Por el contrario, el mismo documento establece (página 36): “*El CDMPF y sus arreglos institucionales propuestos solo pueden ser efectivos si cuentan con el respaldo y el poder de un marco legal y regulatorio sólido ...*”. La Oficina de Preparación y Gestión de Desastres (ODPM en sus siglas en inglés) se estableció a través de la minuta #56 del Gabinete, del 6 de enero de 2005, y la #2042, dd17/08/200. En la última declaró que el propósito de la Oficina de Preparación y Gestión de Desastres era “... *encabezar el esfuerzo nacional dirigido a abordar la Gestión Integral de Desastres*”. En discusión por correo electrónico con el Director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Preparación y Gestión de Desastres el 27 de marzo de 2017 establece que la nota discute la estructura organizacional y mano de obra; “El resto de la Nota y el Acta se dirigen a las secciones constitutivas de la Oficina de Preparación y Gestión de Desastres (áreas generales de responsabilidad, número de puestos, etc.). Las Secciones / Unidades son: (i) Preparación y Respuesta; (ii) Mitigación, planificación e investigación, (iii) Información pública, educación y divulgación comunitaria, (iv) gestión de proyectos; y (v) Apoyo administrativo y finanzas. Toda otra documentación que se ocupe del trabajo de la Oficina de Preparación y Gestión de Desastres está dirigida por la Oficina de Preparación y Gestión de Desastres ”.

Código PR-1A-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece un mecanismo o instancia para el manejo de crisis por desastre al más alto nivel político nacional?	
Descripción general del indicador	
<p>Por su capacidad disruptiva, las situaciones de desastre pueden provocar crisis dentro del gobierno que desembocan en el establecimiento de entes <i>ad hoc</i> para el manejo de estos desastres. Esto genera conflictos con figuras institucionales similares definidas en la normatividad de GRD o en la normatividad específica de preparativos y respuesta a desastres, tales como los centros de operaciones de emergencia. Un atributo de calidad de la normatividad nacional es que establezca y regule una instancia de manejo de crisis para situaciones de desastre, de nivel igual o mayor al ministerial o de secretaría.</p> <p>Estas instancias pueden denominarse comisiones, comités de emergencia o contingencia, gabinetes, junta, etc. Lo importante es que la normatividad disponga la creación y funcionamiento con el fin del manejo de crisis en situación de desastre al más alto nivel político nacional.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar por la existencia de normatividad de carácter nacional o federal que regule los procesos de la GRD, los de la preparación y respuesta a emergencias y desastres o normatividad relacionada con el establecimiento y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) nacional o estructuras similares. 2. Indagar si la normativa identificada establece un mecanismo o instancia con el propósito de manejar las crisis provocadas por desastres. 3. Comprobar que la coordinación de esa instancia corresponde al más alto nivel político nacional. Ya sea a nivel ministerial o de secretaría o, incluso, a nivel de la presidencia de la república, la presidencia del consejo de ministros, o bien una estructura multistitucional presidida por actores de ese nivel político. 4. De ser necesario consultar con representantes de la institución encargada de coordinar los preparativos y respuesta a emergencias y desastres. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-1A-3 PR-1A-1	La normatividad usada para verificar estos indicadores podría contener la información sobre el mecanismo o instancia definida para el manejo de crisis por desastre a nivel nacional.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normativa debe establecer un mecanismo o instancia para el manejo de crisis por desastre, al más alto nivel político nacional, ya sea a nivel ministerial o de secretaría o, incluso, a nivel de la presidencia de la república, la presidencia del consejo de ministros, o bien una estructura multistitucional presidida por actores de ese nivel político.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Chile 2013. Decreto N° 38 de 2011, que modifica decreto N° 156 de 2002 y determina la constitución de los Comités de Operaciones de Emergencia (PR-1A-2a), considera: *"Integrarán el "Comité Nacional" las siguientes autoridades: Ministro del Interior, Ministro de Defensa Nacional, Subsecretario del Interior, Jefe del Estado Mayor Conjunto, Ministro de Energía, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Ministro de Salud, Ministro de Obras Públicas, General Director de Carabineros de Chile y Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. El "Comité Nacional" será presidido por el Ministro del Interior, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, de la Ley N° 16.282, que establece disposiciones permanentes para casos de sismos o catástrofes."* Según la constitución política y la ley 20502 del 9 de febrero de 2011 que *"Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos Cuerpos Legales"* (PR-1A-2b) existe un orden de precedencia de los ministerios, en el cual el Ministerio del Interior es designado como primero (Artículo 21). El Ministro del Interior asume funciones de Vicepresidente.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. No se encontró evidencias de un mecanismo o instancia de manejo de crisis al más alto nivel político nacional. Si bien la normatividad establece la facultad del presidente de emitir la Declaratoria de Emergencia y también de su finalización, el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 147-02 hace alusión explícita a la responsabilidad de la Comisión Nacional de Emergencias de planear, coordinar, dirigir y controlar las acciones orientadas a resolver necesidades urgentes, ejecutar programas y actividades de atención, salvamento y rehabilitación, a través de las instituciones que la componen, basada en un "Plan de Acción para la atención de las Emergencias y/o Desastres" que ella misma elabora en base a una evaluación de necesidades (Artículo 10, inciso 1, acápite 14). El mismo Artículo establece que la CNE es el vocero oficial del Gobierno, en caso de que se produzca un evento destructivo y/o emergencias (acápite 8). Por otro lado, el Reglamento también identifica al Centro de Operaciones de Emergencia como el coordinador de todas las acciones de preparativos y respuesta en caso de un fenómeno súbito, y que el mismo se activa a instancias de la CNE, siendo un órgano operativo de la misma. La CNE está presidida por el Secretario Ejecutivo de la Defensa Civil, e integrada por funcionarios designados por los representantes del Consejo Nacional de PMR. En el caso del COE, Centro de Operaciones de Emergencias, está dirigido por la Defensa Civil, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y tiene un Encargado Técnico designado por decreto. Se considera que en ambos casos no se cumple con la condición del "más alto nivel político nacional" que indaga el indicador.

Código PR-1A-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones o comando de incidentes?</i>	
Descripción general del indicador	
El indicador reconoce como atributo de calidad del marco legal aplicable a la GRD, la que aborda los procesos de preparación y respuesta, o la que regula el funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) o la del Sistema de Comando de Incidentes (SCI), que disponga la elaboración de protocolos oficiales para la coordinación de los trabajos de respuesta. Esto implica la definición de una estructura de funcionamiento, procedimientos, responsabilidades, liderazgo, etc. Este indicador obedece a la necesidad de regular y estandarizar las acciones y operaciones en materia de respuesta, contribuyendo así a reducir la improvisación y a la optimización de los resultados en las tareas de respuesta.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar la existencia de normatividad de carácter nacional o federal que regule los procesos de la GRD, los de la preparación y respuesta a emergencias y desastres, o normatividad relacionada con el establecimiento y funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) o la del Sistema de Comando de Incidentes (SCI). 2. Verificar que en la normatividad identificada se establece la formulación de protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones de respuesta. 3. De ser necesario indagar con las instituciones responsables del funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) o Sistema de Comando de Incidentes (SCI). 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR 1A-1	Dentro de la normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría contener la información sobre la necesidad de establecer la formulación de protocolos para la respuesta.
PR-1A-5	La normatividad que establece la formulación de planes de emergencia o contingencia a nivel nacional podría establecer la formulación de protocolos para la respuesta.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador deberá existir normatividad que establezca explícitamente la responsabilidad de desarrollar protocolos de coordinación para los procesos de respuesta a emergencias o bien el establecimiento de un Sistema de Comando de Incidentes (SCI).</p> <p>Si bien para cumplir el indicador no es necesario que los protocolos establecidos en la normativa existan o se encuentren operativos, en la justificación se deberá incluir información relevante sobre la existencia de dichos protocolos, detallando la temática de los mismos, así como entregar la evidencia del funcionamiento del COE y/o SCI en eventos recientes.</p> <p>Este indicador no podrá verificarse con normatividad que mandate la elaboración de un plan nacional de emergencia o el establecimiento de un Centro de Operaciones de emergencia (COE). Asimismo, tampoco se podrá validar el presente indicador con la existencia de protocolos de respuesta si no tienen un respaldo normativo; sin embargo, se espera que dicha información sea incluida en la justificación aun cuando no se logre verificar positivamente el indicador.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012 (PR-1A-3a): en el Capítulo IV Sistema Integrado de Manejo de Emergencias, el Artículo 76 establece que: *"De acuerdo a las finalidades establecidas en la Ley de la CONRED, se instituye el Sistema Integrado de Manejo de Emergencias -SIME-".* Por su parte, el Artículo 77 establece: *"Objetivos del SIME. El Sistema Integrado de Manejo de Emergencias tendrá como objetivos: d) Uniformar y estandarizar los protocolos, procedimientos, manuales y planes."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. No se registran evidencias de normativa en la materia. Se detectó un Manual básico de planeamiento para emergencias y desastres, editado por la Dirección Nacional de Protección Civil (3era. Edición de marzo de 2010), pero no se encuentra regulado por ninguna norma. Es un material para capacitación. El Decreto 636/2013 establece entre los objetivos de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias *"ejecutar los protocolos de actuación coordinada en situaciones de emergencia y catástrofe, en el marco de competencias de la Jurisdicción"*; esta norma sin embargo aplica para el cumplimiento de los protocolos, no de forma explícita para su formulación.

Código PR-1A-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe normatividad que permite activar un régimen temporal de medidas de excepción en caso de desastres, emergencia o calamidad pública?	
Descripción general del indicador	
<p>Los regímenes temporales de medidas de excepción constituyen una solución jurídica para circunstancias catastróficas como los desastres, las emergencias o las calamidades públicas provocadas por fenómenos naturales que, por sus características extremas, hacen imperiosa la toma de decisiones de forma expedita y sin obstáculos, de tal manera que esa gestión garantice, respecto del régimen ordinario, una diferencia notable en los resultados de la gestión, en términos de pérdida de vidas y daños materiales. Su activación o aplicación, conforme a los procedimientos y formalidades establecidas, permitiría por ejemplo allanar restricciones y dificultades para la adquisición de insumos para la atención de la población, resoluciones emergentes en materia del uso del suelo, la simplificación de los procesos para hacer uso de reservas de recursos financieros, la agilización en general de la contratación de servicios, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar en la Constitución para ver si se establece la hipótesis por la que se dispone la emisión o el decreto de una declaratoria de emergencia, desastre o calamidad pública, y si esto trae aparejado medidas de excepción. 2. Identificar normatividad específica sobre los estados de excepción, GRD o normatividad relacionada con la responsabilidad social y fiscal del estado, y analizar si las mismas consideran medidas de excepción aplicables a situaciones de emergencia y desastres. 3. De ser necesario, indagar con las instituciones responsables de la coordinación de la respuesta a desastres, Ministerio de Hacienda o Administración Pública sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	<p>La normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría contener la información sobre regímenes temporales y de medidas de excepción durante situaciones de emergencia y desastres.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer algún mecanismo que permita la activación de un régimen temporal de medidas de excepción aplicables al manejo de situaciones de emergencia o desastre.</p> <p>En la justificación del indicador deberá quedar registrado tanto el mecanismo (declaración de emergencia, etc.) que permite activar el régimen de excepción, como las medidas de excepción aplicables para el manejo de la emergencia o desastre.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (PR-1A-4a); dispone en su Capítulo VI, Declaratoria de Desastre, Calamidad Pública y Normalidad, los criterios y principios que normarán cada uno de los procesos de declaratoria, tanto de desastre como de calamidad; y corresponde, por otro lado, al Capítulo VII, Régimen Especial para Situaciones de Desastre y Calamidad Pública, establecer las medidas de excepción a lo prescrito en el Capítulo VI que, entre otras materias, considera la “... *contratación del Estado, empréstitos, control fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad*” (Artículo 65).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Suriname 2017. This indicator is not met. No evidence of the existence of formal regulations for the implementation of temporary regime measures in the case of disaster, emergency or public calamity was found. According to NCCR the concept Act on disaster management still need to be submitted to the National Assembly for its approval.

Traducción:

Surinam 2017. Este indicador no se cumple. No se encontró evidencia de la existencia de regulaciones formales para la implementación de medidas de régimen temporal en caso de desastre, emergencia o calamidad pública. Según el NCCR, el concepto de Ley sobre gestión de desastres aún debe presentarse a la Asamblea Nacional para su aprobación.

Código PR-1A-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la normatividad sobre Gestión del Riesgo de Desastre, o la vinculada con los procesos de preparativos y respuesta, establezca a nivel nacional la formulación ex-ante de planes de emergencia o contingencia. Estos planes permiten orientar los protocolos de coordinación, los planes nacionales de emergencia sectoriales, así como los planes de emergencia en los territorios. No obstante, hay ocasiones en las que los planes nacionales de emergencia se elaboran mediante una consolidación de planes sectoriales y territoriales. También, en algunos países se puede observar que el plan nacional de contingencia es una parte integrante del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.</p> <p>Por otro lado, los planes nacionales de emergencia o contingencia pueden ser elaborados para amenazas específicas o de con un enfoque multi-amenaza.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si en la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, se establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional. 2. Investigar si la normatividad que mandata el desarrollo del Plan Nacional de Gestión de Riesgo contempla como parte integrante de su formulación al plan de emergencia o contingencia. 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD o de los preparativos y respuesta, para indagar sobre la existencia de planes nacionales de emergencia o contingencia, así como la normatividad que sustenta a los mismos. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 PR-1B-1 PR-1C-3	Dentro de la normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría contener la información sobre la formulación de planes de emergencia o contingencia a nivel nacional.
PR-1A-3	Verificar si la normatividad que mandata la preparación de los protocolos oficiales para la coordinación de las operaciones de emergencias también establece el desarrollo de un plan nacional de emergencia o contingencia.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer explícitamente la responsabilidad o función de formular planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional. Para su cumplimiento no es necesario que dichos planes existan o se encuentren vigentes.</p> <p>En el caso que la normatividad establezca que el plan de emergencia o contingencia sea parte del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la justificación de cumplimiento deberá entregar detalles sobre su alcance y el contenido del plan de emergencia o contingencia.</p> <p>Cuando corresponda y si se cuenta con la información, en la justificación se deberá mencionar los planes nacionales de emergencia o contingencia que existan en el país, aun cuando estos no estén respaldados por una normatividad específica.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. La Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, aprobada por la Asamblea Legislativa mediante Decreto No. 777 del 18 de agosto del 2005 (PR-1A-5a) establece en los "Conceptos Operativos" del Artículo 4 "... j) Manejo del desastre: Son políticas, planes, programas, proyectos y acciones dirigidas a crear o incrementar las capacidades de una sociedad para enfrentarse a una situación de desastre. Comprenden las fases de preparación, atención a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción". Ligado a estos conceptos, en el Artículo 18 se establece "Las atribuciones del Director General son las siguientes: a) Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión Nacional los planes de atención de las emergencias en el ámbito nacional y planes de contingencia en el caso de eventos específicos... e) Dirigir la ejecución de los planes de preparación y atención de emergencias y de Protección Civil, aprobados por la Comisión Nacional." Adicionalmente, el Art. 6 establece entre los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil: "d) Diseñar y ejecutar planes de protección civil, para responder ante el evento de un desastre de cualquier naturaleza, procurando mitigar sus daños o reducir sus impactos." En base los contenidos de los artículos mencionados se considera que se cumple con el indicador.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La única mención a planes de emergencia o contingencia en la Ley No. 113 / 2013-2014, Ley de Gestión de Riesgos, aprobada en noviembre de 2014, es en el Título III, Capítulo I (Previsiones Presupuestarias), Artículo 25, que establece: "II. Las entidades territoriales autónomas, preverán en sus programas operativos anuales y presupuestos los recursos necesarios para la gestión de riesgos, según lo establecido en sus Planes de Desarrollo, Planes de Emergencia y Planes de Contingencia." A la espera de lo que se defina en el reglamento de esta ley, no se encontró en ninguna otra sección de la Ley una alusión más explícita a la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel nacional.

Código PR-1A-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. <i>¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deben basarse en evaluaciones de daños y análisis de necesidades?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, además de procurar un orden lógico de sus procesos, busca imperativamente el uso racional de los recursos disponibles, los esfuerzos y sinergias institucionales y sectoriales, para el cumplimiento eficiente de sus objetivos. La realización de evaluaciones de daños y análisis de necesidades permite definir una línea de base que guíe adecuadamente la priorización de las acciones de respuesta y su contenido.</p> <p>En ese contexto, este indicador busca determinar si el marco normativo que regula los preparativos y respuesta establece que las actividades de respuesta y de asistencia humanitaria deben sustentarse en base a la evaluación de los daños y el análisis de las necesidades posterior al desastre.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar en la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, si se establece la realización de la evaluación de daños y análisis de necesidades como base para definir y/o priorizar las actividades de respuesta y asistencia humanitaria. 2. Revisar este vínculo en los protocolos y procedimientos de las instancias de coordinación de la respuesta que puedan existir. 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD o de los preparativos y respuesta, para indagar sobre la existencia de herramientas y/o metodologías (p.ej. EDAN) adoptadas para la evaluación de daños y análisis de necesidades. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	La normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría establecer también la realización de las evaluaciones de daños y análisis de necesidades como base para definir y/o priorizar las acciones de respuesta a emergencia y desastres.
PR-1A-3 PR-1A-5	Verificar si el plan nacional de emergencia o los protocolos y procedimientos oficiales (es decir, que tengan valor normativo) de las instancias de coordinación de la respuesta respaldan el cumplimiento de este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador, la normatividad identificada (entre la cual se incluyen a efectos de este indicador, además de la de GRD y/o la de preparativos y respuesta, también los planes, protocolos y procedimientos oficiales de emergencia) debe establecer explícitamente que las acciones de respuesta y asistencia humanitaria deben basarse en la evaluación de los daños y el análisis de las necesidades identificadas a partir de la ocurrencia de la emergencia o desastre.</p> <p>El que país cuente con instrumentos oficiales para las evaluaciones de daños y análisis de necesidades (EDAN) no es suficiente para verificar este indicador. Sin embargo, en la justificación deberá indicarse si el país cuenta con este tipo de herramientas y si éstas han sido oficialmente adoptadas.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Jamaica 2013. The National Disaster Plan (PR-1A-6b), supported by Disaster and Emergency Management Act (PR-1A-6a) outlines in Annex A Section 16.1 that relief would be distributed on the basis of the damage and needs assessment reports submitted by the damage assessment personnel or committee.

Traducción:

Jamaica 2013. El Plan Nacional de Desastres (PR-1A-6b), respaldado por la Ley de Manejo de Desastres y Emergencias (PR-1A-6a) describe en la Sección 16.1 del Anexo A que la ayuda se distribuiría sobre la base de los informes de evaluación de daños y necesidades. presentado por el personal o el comité de evaluación de daños.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. El Decreto N° 11.632 por el cual se reglamenta la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N) aprobado el 12 de agosto 2013, permitiría validar parcialmente esta condición, ya que en el mismo se indica que para la activación del plan de emergencia deberá existir una evaluación de daños. Como se indica en el Art. 39 *"Participación de los Actores Involucrados en la Situación de Emergencia o Desastre para la Activación del Plan de Emergencia. "Los "actores involucrados" cuya participación fuese requerida por la S.E.N. estarán obligados a contribuir en lo necesario, con información y apoyo técnico para la activación del Plan, para lo cual en estrecha coordinación con las instituciones de nivel regional y municipal, deberán desarrollar sus procesos de evaluación de daños".* Sin embargo, este artículo fue posteriormente derogado por el Decreto N° 3713/15, por el cual se amplía y modifica parcialmente el Decreto N° 11.632/2013 que establece la reglamentación de la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), aprobado el 30 de junio de 2015, donde se indica en su Art. 15 *"Derogase los Artículos 38 al 40 del Decreto N° 11.632/2013".*

Código PR-1A-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece la realización de simulacros y simulaciones?	
Descripción general del indicador	
<p>La preparación y respuesta a emergencias y desastres encuentra un gran beneficio en la realización sistemática de simulaciones, simulacros y ejercicios que validen y pongan a prueba los diversos procedimientos y protocolos, además de los planes de emergencia y contingencia vigentes, dando así oportunidad a una mejora continua y al desarrollo de nuevas y mejores estrategias y medidas.</p> <p>Este indicador reconoce la importancia de que la normatividad lo establezca como una obligación.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar en la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, si se establece la obligación de realizar simulaciones y simulacros sobre los diversos procesos de preparativos y respuesta. 2. Identificar los tipos de simulacros y/o simulaciones que se han realizado recientemente en el país, sean estos a nivel nacional, sectorial o territorial, e indagar la normatividad que sustenta su realización. 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD o de los preparativos y respuesta, para indagar sobre la realización de simulaciones y simulacros, así como la normatividad que sustenta a los mismos 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 PR-1A-2	La normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría establecer la realización de simulaciones y/o simulacros.
PR-1A-3 PR-1A-5	Verificar si el plan nacional de emergencia, los protocolos y procedimientos oficiales (es decir, que tengan valor normativo) de las instancias de coordinación de la respuesta establecen la realización de simulaciones o simulacros.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada, la cual incluye plan nacional de emergencia, los protocolos y procedimientos oficiales (es decir, que tengan valor normativo), debe establecer explícitamente la responsabilidades o funciones para realizar simulacros y/o simulaciones de los procesos de preparativos y respuesta. Para este cumplimiento bastaría con que la normatividad establezca la realización de simulaciones y/o simulacros a nivel nacional, sectorial o territorial.</p> <p>Si se cuenta con información, es deseable dejar constancia en la justificación del presente indicador la evidencia encontrada sobre la realización de simulacros y/o simulaciones recientes en el país, describiendo brevemente los mismos, aun cuando no exista la normatividad que establezca la obligación de su realización.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>México 2014. El Artículo 60 del Reglamento Interno de la Secretaría de Gobierno establece: <i>“XIII. Promover la realización de ejercicios y simulacros que fortalezcan la coordinación del Gobierno Federal con las entidades federativas, el sector privado y la sociedad civil en tareas de protección civil”</i>. Adicionalmente, el Manual de Organización y Operación de SINAPROC, aprobado en octubre de 2006 (PR-1A-7b), identifica las responsabilidades de los Gobiernos Municipales y las entidades federativas y establece que: <i>“Promueven la realización de cursos de capacitación, ejercicios y simulacros que permitan mejorar las capacidades preventiva y de respuesta de los participantes en el Sistema Estatal de Protección Civil, y Sistema Municipal de Protección Civil”</i>.</p>
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 no establece de manera directa o explícita la realización de simulacros y simulaciones. No obstante, los mismos se han llevado a cabo a nivel nacional y de manera particular en regiones del país afectadas por la probable ocurrencia de huracanes y tsunami. (NOTA: este tema debería ser parte de la reglamentación de la Ley la cual hasta el momento de aplicación del IGOPP - Agosto y Septiembre de 2013- todavía no se había producido).</p>

Código PR-1A-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿Existe normatividad para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y el sistema nacional o la estructura que detenta su aplicación a nivel nacional, parten de la premisa de que se requiere permanentemente la confluencia y contribución de todos los niveles de gobierno, así como de la sociedad civil y sector privado, para hacerle frente a las consecuencias de los desastres. No obstante, los países deberían tener especial atención de que su normatividad contemple probables escenarios en los que debido a la severidad de los eventos sea ineludible plantear solicitudes de ayuda y asistencia a los gobiernos de otros países o a organizaciones internacionales, o bien, que sin mediar tales formalidades se reciba esa ayuda o asistencia provista por los gobiernos extranjeros, sin perder de vista que esas hipótesis se deben considerar tanto como gobierno solicitante o como receptor.</p> <p>Mediante este indicador se reconoce como buena práctica que la normativa nacional disponga las facultades y las competencias para realizar las acciones de coordinación necesarias para facilitar la asistencia internacional y ayuda mutua en los casos de desastre.</p> <p>Alternativamente, es usual que esta materia sea objeto de tratados, acuerdos multilaterales o bilaterales, etc., en los que se plantee el desarrollo de acciones coordinadas en respuesta internacional, regional (CDEMA, CEPREDENAC, etc.) o bilateral y en los que se participe como país signatario.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la vigencia de una normatividad nacional que establezca la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre, bien sea la normatividad nacional de la GRD, la que regule las actividades de preparación y respuesta, la normatividad de relaciones exteriores u otra normatividad relevante. 2. Verificar, en caso de que no se encuentre una normativa nacional vigente con ese fin, si el país es signatario de algún mecanismo bilateral o multilateral (por ejemplo, dentro de su pertenencia a entidades regionales tales como CDEMA, CEPREDENAC, etc.) de derecho internacional con ese mismo contenido. Adicionalmente, comprobar que dicho mecanismo internacional haya sido ratificado, aprobado o confirmado según la formalidad establecida por la normatividad nacional correspondiente y que, por lo tanto, ese mecanismo reciba un estatus legal en el país (por ejemplo, mediante su publicación en el órgano oficial). 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD, de los preparativos y respuesta, y/o el representante del Sistema de Naciones Unidas en el país para indagar sobre el presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	La normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría establecer la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre.
PR-3-3 PR-3-6 RC-3-2 RC-3-3 RC-3-4	Dentro de la documentación revisada o usada para verificar estos indicadores se podrían obtener orientaciones sobre la existencia de normatividad para la coordinación de la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla este indicador, la normatividad identificada debe establecer la coordinación entre países para la asistencia internacional y ayuda mutua en caso de desastre; o bien, la existencia de un mecanismo de derecho internacional que haya sido ratificado, aprobado o confirmado oficialmente por el país y por lo tanto, cuente con estatus legal en el país.

En el caso que se desee verificar este indicador con la evidencia de la participación del país en entidades regionales (CDEMA, CEPREDENAC, etc.), acuerdos bilaterales o similares, se deberá proveer evidencia que dicho acuerdo ha sido ratificado, aprobado o confirmado de acuerdo a las formalidades previstas por la normatividad que corresponda al país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo del 27 de octubre de 2005 (PR-1A-8a) Considera en su "Artículo 14. Competencias ordinarias de prevención de la Comisión ... L) Realizar la gestión de la ayuda internacional, de agencias y países, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para los programas de prevención y la atención de emergencias. M) Coordinar la ayuda internacional que Costa Rica puede ofrecer a otras naciones...". Por otra parte, el "Artículo 19. Presidencia de la Comisión ... D. Coordinar, con los Ministros de Gobierno, las instituciones autónomas, las empresas públicas, las municipalidades y agencias de cooperación, entre otras, las acciones y negociaciones que procuren obtener asistencia técnica, material y financiera para cubrir las necesidades que la Comisión demande." Lo anterior se ve enriquecido con el contenido del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo 2010 - 2015. Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (PR-1A-8b), en cuyo Eje Temático No. 6, preparativos y respuesta para enfrentar situaciones de emergencia y desastres, considera en el lineamiento de política No. 3 el propiciar el establecimiento de acuerdos, convenios y lineamientos de cooperación, nacionales e internacionales para optimizar los preparativos y la respuesta ante emergencias y desastres.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. No obstante, el Reglamento 874-09 de Aplicación de la Ley No 147-02 sobre Gestión de Riesgos (PR-1A-8a) Artículo 10.1.- De la actividad de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), incluye dos párrafos relacionados con el apoyo humanitario de la República Dominicana a otros países (párrafos I y II), no establece parámetros o referencias similares sobre el apoyo humanitario de otros países a la República Dominicana, que es en esencia lo que indaga este indicador.

Código PR-1B-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diferentes sectores o ministerios?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un conjunto concatenado de procesos previos y posteriores a la ocurrencia de las emergencias y desastres. Dentro de estos procesos se encuentra la elaboración de planes de emergencia o contingencia. Este indicador valora que la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta contemple de manera explícita que la elaboración de dichos planes sea responsabilidad de los distintos sectores en el ámbito de sus competencias.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar en la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, si se establece explícitamente la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel sectorial. 2. Si la normatividad identificada asigna a los sectores responsabilidades generales para la GRD, se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o el alcance de las acciones de GRD, a fin de verificar que la misma incluya explícitamente la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel sectorial. 3. Si la normatividad identificada asigna responsabilidades para la formulación de planes de emergencia a los miembros del Sistema Nacional de GRD, Sistema Nacional de Protección Civil (o similar), se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o el alcance de dichos sistemas nacionales, para verificar que los sectores (ministerios, instituciones públicas, etc.) son parte de los mismos. 4. De ser necesario entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD, de los preparativos y respuesta para indagar sobre el presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	Revisar si la normatividad utilizada para verificar dichos indicadores asigna responsabilidades a los sectores o los ministerios la formulación de planes de emergencia o contingencia.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe establecer responsabilidades o funciones explícitas sobre la formulación de planes de emergencia o contingencia en los diversos sectores.</p> <p>En la redacción de alguna normatividad se puede asignar estas responsabilidades a instituciones públicas, instituciones gubernamentales u otras denominaciones en las cuales los diversos sectores, secretarías o ministerios del país caen en dichas categorías.</p> <p>Coyunturalmente, puede suceder que algunos sectores hayan formulado sus planes de emergencia. Sin embargo, lo que busca el indicador es la existencia de normatividad que establezca la obligación de formular dichos planes.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>Perú 2013. Reglamento de la Ley del SINAGERD, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, del 25 de mayo de 2011 (PR 1B-1a), establece en su Artículo 39, De los planes específicos por proceso, que:</p> <p><i>"39.1 En concordancia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres las entidades públicas en todos los niveles de gobierno formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los siguientes Planes: ... f. Planes de contingencia."</i></p>
<p>Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (PR-1B-1a) establece en Artículo 42, sobre análisis específicos de riesgo y planes de contingencia, que: <i>"todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento"</i>.</p>
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Guyana 2017. No evidence of formal regulations for the disaster preparedness and response process were found for Guyana. There is a set of documents developed by the Civil Defense Commission (CDC) which, per the people interviewed in this institution, have been approved by the Cabinet in 2014. Since Cabinet resolutions are considered classified documents, they are not available for consultation. Among these set of documents, the draft version of the Multi-hazard Disaster Preparedness and Response Plan available in Internet, establishes in Chapter 5.0 Disaster Preparedness Functions: <i>"5.2 Pre-Disaster: The CDC will: e. Provide technical support to public and private sectors in preparation of contingency plans; f. Lay down the guidelines for preparing disaster management plans for different Ministries, Department and the RDCs"</i>. While the Multi-Hazard Disaster Preparedness and Response Plan includes these relevant provisions for the assessment of the indicator, due to its "draft" condition, it cannot be used as verifier.</p>
<p>Traducción:</p> <p>Guyana 2017. No se encontró evidencia de regulaciones formales para el proceso de preparación y respuesta ante desastres para Guyana. Existe un conjunto de documentos desarrollados por la Comisión de Defensa Civil (CDC) que, según las personas entrevistadas en esta institución, han sido aprobados por el Gabinete en 2014. Dado que las resoluciones del Gabinete se consideran documentos clasificados, no están disponibles para consulta. Entre este conjunto de documentos, la versión borrador del Plan de Preparación y Respuesta ante Desastres de Riesgos Múltiples disponible en Internet, establece en el Capítulo 5.0 Funciones de Preparación ante Desastres: <i>"5.2 Pre-desastre: Los CDC: e. Brindarán asistencia técnica a los sectores público y privado, sectores en preparación de planes de contingencia; f. Establecer las pautas para preparar planes de gestión de desastres para diferentes Ministerios, Departamento y las CDR"</i>. Si bien el Plan de preparación y respuesta ante desastres de múltiples riesgos incluye estas disposiciones relevantes para la evaluación del indicador, debido a su condición de "borrador", no puede utilizarse como verificador.</p>

Código PR-1B-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, prevé la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta sobre fenómenos naturales peligrosos?	
Descripción general del indicador	
<p>Los sistemas de vigilancia y alerta temprana sobre fenómenos naturales peligrosos han mostrado un gran impacto en la reducción de pérdidas de vidas y bienes en los países o zonas que los implementan. De tal manera, se considera un criterio de calidad que en la normativa nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) o aquella que regula las acciones de Preparación y Respuesta (PR), esté contemplada la creación y operación de estos sistemas.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar en la normatividad de la GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, si se estipula la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta temprana de fenómenos peligrosos. 2. Indagar si en la normatividad relacionada con las entidades nacionales responsables de generar información sobre fenómenos peligrosos se considera la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta temprana de fenómenos peligrosos. 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD, de los preparativos y respuesta, o aquellas relacionadas con generar información sobre fenómenos peligrosos para indagar sobre la existencia de estos sistemas. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente indicación.
IR-1B-7	La normatividad relacionada con el desarrollo continuo y mantenimiento de redes de observación y monitoreo de fenómenos naturales peligrosos podría permitir orientar o verificar el presente indicador, siempre y cuando su alcance vaya más allá del monitoreo de los fenómenos y abarque también la alerta a la población.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada debe establecer explícitamente la creación y operación de sistemas de vigilancia o alerta temprana sobre fenómenos naturales peligrosos. Bastaría que se haga mención a estos sistemas de manera general o bien de manera específica para una o más amenazas o peligros naturales. No es necesario que los sistemas de alerta que hace referencia la normatividad se encuentren operativos, sin embargo, en la justificación se deberá mencionar si éstos se encuentran o no en funcionamiento, aun cuando la normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta no haga mención a dichos sistemas.</p> <p>No se cumpliría el indicador si la normatividad identificada hace referencia exclusivamente al monitoreo de las variables que caracterizan a los fenómenos naturales ya que por dicha condición ya indaga el indicador IR-1B-7.</p> <p>En el presente indicador se quiere dar un paso más y verificar si la normatividad establece la creación y operación de sistemas de alerta a la población. Si bien dichos sistemas se alimentan de la información generada por los sistemas de monitoreo de fenómenos naturales, requieren asimismo de un análisis de exposición y vulnerabilidad que determine la población que debe ser alertada y, por ende, que debe eventualmente proceder con las medidas urgentes necesarias para evitar o minimizar el impacto del fenómeno natural.</p>	

Dicho de forma resumida, así como el indicador IR-1B-7 se centra en el monitoreo de los fenómenos naturales, este indicador se focaliza en la alerta oportuna a la población ante la eventual ocurrencia de dichos fenómenos.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Reglamento de la Ley N° 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (CONRED), adoptado por Acuerdo Gubernativo N° 49-2012, del 14 de marzo del 2012 (PR-1A-2a) en su Artículo 90, Sistemas de Alerta Temprana, establece que: *"Las Coordinadoras impulsarán, implementarán, operarán y darán mantenimiento al sistema de alerta temprana con la participación de las comunidades con el objeto de establecer los mecanismos de aviso y alerta tendientes a reducir el impacto de los desastres..."*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. No se encontraron evidencias al respecto. Se analizaron: (i) Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005; (ii) Decreto N° 11.632 por el cual se reglamenta la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N), aprobado el 12 de Agosto 2013; (iii) Decreto N° 3713/15, por el cual se amplía y modifica parcialmente el Decreto N° 11.632/2013 que establece la reglamentación de la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), aprobado el 30 de junio de 2015; y (iv) Plan Estratégico Institucional 2015 2018 de la Secretaria de Emergencia Nacional, aprobado por Resolución N° 915/15. Si bien la Ley N°2615/05 que crea la Secretaria de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005, otorga facultades a la Secretaria de Emergencia Nacional para recabar información hidrometeorológica, no se dice nada acerca de que la misma sea usada para establecer un sistema de vigilancia o alerta sobre este tipo de fenómenos.

Código PR-1B-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional coordinadora de la GRD o de los preparativos y la respuesta, como puede ser una protección civil, sino también al conjunto de los demás sectores del gobierno.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector ambiental defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector ambiental establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector ambiental sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8 RR-1B-6 RR-1B-7 RC-1B-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-4	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador, el marco normativo del sector ambiente debe establecer la responsabilidad y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador si la normatividad hace referencia a actividades de preparativos para la respuesta frente a emergencias o desastres “ambientales”, sin que la misma detalle que los desastres debido a fenómenos naturales peligrosos son parte de estos.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad ambiental sobre otros procesos ex ante de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Paraguay 2016. La Ley N° 1561/00, que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente, aprobado el 24 de julio de 2000 y publicado en la Gaceta Oficial N° 140 (PR-1B-3a), permite validar esta condición ya que dentro de las funciones de la Secretaría del Ambiente se considera la de participar en la respuesta a desastres y contingencias, tal como queda explicitado en el literal o) del Art. 12. *"La SEAM tendrá por funciones, atribuciones y responsabilidades, las siguientes: ... o) participar en planes y organismos de prevención, control y asistencia en desastres naturales y contingencias ambientales"*

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. Se analizó la normatividad principal del sector (Ley N. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, del 28 de setiembre de 1995). Esta define el ámbito de competencias del sector ambiental: *"educación e investigación ambiental; impacto ambiental; protección y mejoramiento del ambiente en asentamientos humanos; ordenamiento territorial; áreas silvestres protegidas; recursos marinos, costeros y humedales; diversidad biológica; recursos forestales, aire; agua; suelo; recursos energéticos; contaminación y producción ecológica"*. Esta normatividad, en ninguna de las áreas de competencia señaladas, establece responsabilidades explícitas para la preparación.

Por otro lado, la Ley N° 7575, Ley Forestal del 5 de febrero de 1996, considera: *"Artículo 14. Actividades autorizadas... Inciso D. Prevenir incendios forestales, desastres naturales u otras causas análogas o sus consecuencias"*. Asimismo, en Artículo 35 establece: *"Prevención de incendios forestales. Se declaran de interés público las acciones que se emprendan a fin de prevenir y extinguir incendios forestales. Las medidas que se tomen serán vinculantes para todas las autoridades del país, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento de esta ley"*. Esta ley es la única que incluye responsabilidades en materia de preparación, sin embargo, no se considera representativa, dada la amplitud de competencias y áreas de acción establecidas por la normatividad principal del sector.

Colombia 2013. En la Ley del Medio Ambiente de Colombia (Ley 99 de 1993), se define en el Artículo 1, numeral 9 que: *"La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento"*. Además que el Artículo 5, numeral 35, dispone como una de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, la de *"Hacer evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a impedir la extensión de sus efectos"*, y también el Artículo 31, numeral 23, establece que es responsabilidad de las Corporaciones Autónomas Regionales: *"Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirles en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación"*. No obstante, se considera que esta legislación no establece de forma taxativa la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para desastres. Se revisaron Planes de Emergencia del sector, que son esencialmente para el sistema de áreas protegidas: tanto en la guía para su formulación (original del 2009 y actualizada al 2013) como en los planes consultados, se menciona como marco legal que define esta responsabilidad la legislación sobre salud ocupacional y las normas de Prevención y Atención de Desastres (versión de la guía de 2009) y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (versión de la guía de 2013). Por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código PR-1B-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional coordinadora de la GRD o de los preparativos y la respuesta, como puede ser una protección civil, sino también al conjunto de los demás sectores del gobierno.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector agricultura, defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector agricultura establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector agricultura sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-9 RR-1B-8 RC-1B-2	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-5	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, el marco normativo del sector agricultura debe establecer la responsabilidad y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad de agricultura sobre otros procesos ex ante de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2011 (PR-1B-4a) define los pilares de la política y considera en su "Pilar 4.4. Cambio Climático y Gestión Agroambiental, y establece en el numeral "4.4.1.1. *Gestión integral del riesgo. En el sector se impulsará una visión integral de la gestión del riesgo, que considere la ejecución de acciones a través de la participación y coordinación de la institucionalidad pública sectorial. Considerará riesgos naturales ... y las amenazas que derivan de la acción de la sociedad Se impulsarán los siguientes instrumentos: • Sistema nacional de prevención del riesgo, atención y manejo de desastres por fenómenos naturales extremos. En el contexto de este sistema, el sector agroalimentario fortalecerá su participación y presencia, de manera que sea sujeto y objeto de los planes y programas nacionales, regionales y locales de gestión de riesgos ...*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. Se analizó todo el marco normativo del sector agricultura y se identificó el documento Políticas Agropecuarias al 2025, publicado en 2015 que establece como política No 4: "*articular el marco de prioridades de política ambiental, incluyendo la gestión de riesgos, la resiliencia y la adaptación al cambio climático*". Además de este documento de políticas sectorial, que no incluye referencias relevantes para este indicador, no se ha encontrado evidencia de normativa que establezca de manera específica la responsabilidad del sector de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres. Adicionalmente, la inexistencia de este mandato en la normativa del sector fue ratificado en la entrevista con el delegado de ese Ministerio.

Código PR-1B-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. <i>¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional coordinadora de la GRD o de los preparativos y la respuesta, como puede ser una protección civil, sino también al conjunto de los demás sectores del gobierno.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector salud defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector salud establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector salud, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-10 RR-1B-9 RC-1B-3	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-6	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, el marco normativo del sector salud debe establecer la responsabilidad y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador si la normatividad hace referencia a actividades de preparativos para la respuesta frente a emergencias o desastres “sanitarios”, sin que se detalle que los desastres debido a fenómenos naturales peligrosos son parte de los mismos.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector salud sobre otros procesos ex ante de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. El Manual de Organización General de la Secretaría de Salud, publicada el 17 de agosto del 2012 (PR-1B-5a), señala entre las funciones del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades *“Establecer los mecanismos y procedimientos nacionales, regionales, estatales y en su caso jurisdiccionales, de la respuesta rápida para el apoyo de los programas de prevención y protección a la salud de manera específica en urgencias en salud, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil”*.

Perú 2013. La Política Nacional de Salud Ambiental 2011-2020-Ministerio de Salud, aprobada por Resolución Ministerial N° 258-2011-MINSA, del 04 de abril del 2011 (PR 1B-5a), dispone en su sexta política, contenida en la página 31, que *“...se deberá establecer un conjunto de dispositivos y planes que articulen la respuesta ante eventuales emergencias y desastres de las intervenciones de salud ambiental, definiendo mecanismos de Gestión Ambiental oportuna y que tenga impacto ante este tipo de situaciones...”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Chile 2013. Si bien el Ministerio de Salud publicó la *“Guía de Vigilancia Epidemiológica para Emergencias y Desastres”* que contiene recomendaciones explícitas, no se localizaron evidencias normativas del sector salud, que defina la responsabilidad de realizar tales actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias. Lo anterior fue corroborado por el Departamento de Emergencias del Ministerio de Salud (MINSAL).

Código PR-1B-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional coordinadora de la GRD o de los preparativos y la respuesta, como puede ser una protección civil, sino también al conjunto de los demás sectores del gobierno.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector vivienda defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector vivienda establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector vivienda sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-11 RR-1B-10 RC-1B-4	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-7	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada del sector vivienda debe establecer la responsabilidad y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector vivienda sobre otros procesos ex ante de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2012-2030, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: (PR-1B-6a) *"Objetivo General: Impulsar el desarrollo de asentamientos humanos en sitios seguros y en función de su sostenibilidad, incrementando la capacidad para atender eficazmente las emergencias"*. Se considera que la mención explícita a *"incrementar la capacidad de atender emergencias"* es un mandato para la preparación.

El Salvador 2016. La Política Nacional de Vivienda y Hábitat de El Salvador, vigente desde octubre del año 2015, (PR-1B-6a) dentro del eje *“Déficit habitacional cuantitativo y cualitativo”*, establece la necesidad de *“Diseñar e implementar programas para familias en situación de riesgo, que prevean mecanismos de respuesta y atención rápida a emergencias, prevención y la resiliencia”*. –IV Ejes y Lineamientos. Eje 1.5-

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belize 2017. The Housing and Town Planning Act Chapter 182, of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, in Part I *“Preliminary and Constitution of Central Authority”*, section 3, subsection (1) establishes the *“Central Building Authority”*. According to subsection (2), this Authority shall consist of 8 persons, among who is *“[...] the National Emergency Coordinator appointed under the Disaster Preparedness and Response Act, Cap. 145”*. While the above makes the National Coordinator part of the Central Building Authority, his role and responsibility is unclear, hence by this section alone no specific disaster preparedness obligation can be established. In Part III *“Town and Country Planning, Land Development, Compensation and Betterment etc.”*, section 41, subsection (1) enables the Central Building Authority to prepare, vary or adopt schemes *“[...] subject to the provisions of any special area precautionary plan prepared under the Disaster Preparedness and Response Act, Cap. 145 [...]”*. Again, specific disaster preparedness links can't be established through this section. The Reconstruction and Development Corporation Act Chapter 193, of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, doesn't include any regulations related to disaster preparedness. Even though the housing regulations do link to the Disaster Preparedness and Response Act Chapter 145, of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011, no specific competencies and functions to conduct disaster preparedness activities in the field were established, hence the condition is not met.

Traducción:

Belice 2017. La *Housing and Town Planning Act Chapter 182*, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, en la Parte I "*Preliminar y Constitución de la Autoridad Central*", sección 3, subsección (1) establece la "*Autoridad Central de Construcción*". De acuerdo con la subsección (2), esta Autoridad estará compuesta por 8 personas, entre las cuales se encuentra "[...] *el Coordinador Nacional de Emergencias designado bajo la Ley de Preparación y Respuesta ante Desastres, Cap. 145*". Si bien lo anterior hace que el Coordinador Nacional forme parte de la Autoridad Central de Construcción, su papel y responsabilidad no están claros, por lo tanto, solo en esta sección no se puede establecer una obligación específica de preparación ante desastres. En la Parte III "*Planificación de la ciudad y el país, desarrollo de la tierra, compensación y mejoramiento, etc.*", la sección 41, subsección (1) permite a la Autoridad Central de Construcción preparar, variar o adoptar esquemas "[...] *sujeto a las disposiciones de cualquier plan preventivo para cualquier zona especial en virtud de la Ley de preparación y respuesta ante desastres, cap. 145 [...]*". Nuevamente, no se pueden establecer enlaces específicos de preparación para desastres a través de esta sección. El *Reconstruction and Development Corporation Act Chapter 193*, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, no incluye ninguna regulación relacionada con la preparación para desastres. A pesar de que las reglamentaciones de vivienda se vinculan con el *Disaster Preparedness and Response Act Chapter 145*, de las Leyes Sustantivas de Belice, edición revisada 2011, no se establecieron competencias y funciones específicas para llevar a cabo actividades de preparación para desastres en el campo, por lo tanto, la condición no se cumple.

Código PR-1B-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional coordinadora de la GRD o de los preparativos y la respuesta, como puede ser una protección civil, sino también al conjunto de los demás sectores del gobierno.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector educación, defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector educación establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector educación sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-12 RR-1B-11 RC-1B-5	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-8	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, el marco normativo del sector educación debe establecer la responsabilidad y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector educación sobre otros procesos ex antes de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación (PR-1B-7a), enumera en el Artículo 5 los fines de la educación, incluyendo en el numeral 10 que *"La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación"*. Específicamente, en relación con la preparación para la respuesta, la Directiva Ministerial N° 12 de julio de 2009, dirigida a las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, sobre la continuidad de la prestación del servicio educativo en situaciones de emergencia (PR-1B-7b), ordena en su proemio que esas secretarías *"deben participar en los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres"* (hoy día Comités Territoriales de Gestión del Riesgo), para *"desarrollar planes locales de emergencia y contingencias"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. La Ley Orgánica de Educación publicada en Gaceta Oficial N° 5929 del 15 de agosto 2009 y el Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación publicado en Gaceta Oficial N° 36.787 del 15 de septiembre de 1999, no definen la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. A pesar de que la normativa del sector educación no define esta responsabilidad, la Norma Venezolana COVENIN: Plan de Actuación de Emergencias en Instalaciones Educativas N° 3791:2002 establece los requerimientos y acciones mínimas necesarias para la formulación y preparación de un Plan de Actuación para Emergencias en instalaciones educativas, tanto públicas como privadas, en todos los niveles. Aunque esta norma COVENIN establece los requerimientos para formular los planes, sin embargo, no determina responsabilidades concretas dentro del sector.

Código PR-1B-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional coordinadora de la GRD o de los preparativos y la respuesta, como puede ser una protección civil, sino también al conjunto de los demás sectores del gobierno.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector turismo, defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector turismo establece responsabilidades para realizar preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector turismo sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-13 RR-1B-12 RC-1B-6	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-9	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, el marco normativo del sector turismo debe establecer la responsabilidad y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de responsabilidades.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector turismo sobre otros procesos ex antes de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Turismo y Comercio Exterior, aprobado por Resolución Ministerial N° 054-2008 MINCETUR-DM del 31 de marzo 2008 (PR 1B-8a). Este documento de carácter normativo establece las actividades de preparación y respuesta que se deben ejecutar en el sector en cumplimiento del Plan Nacional de Operaciones de Emergencia.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La normativa del sector está definida por la Ley 300 de 1996, "*por el cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones*"; y sus decretos reglamentarios, además de la Ley 1101 de 2006 que modifica en algunos artículos la Ley 300. En general, el enfoque de toda la legislación del sector es garantizar el control de parte del Estado de las actividades privadas de prestadores de servicios turísticos, así como llevar un registro de los operadores y garantizar la protección al ambiente y al consumidor. Se menciona en la Ley el concepto de "*seguridad del turista*", pero no hay una clara determinación de responsabilidades en materia de preparativos para desastres por parte del sector o de los operadores turísticos acreditados ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código PR-1B-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. <i>¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o de los preparativos y la respuesta.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector transporte (entendido como obras viales), defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar si la normatividad del sector transporte establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 2. De ser necesario, consultar con representantes del sector transporte sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14 RR-1B-13 RC-1B-7	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-1B-16	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, el marco normativo del sector transporte, entendido como obras viales, debe establecer competencia y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector transporte sobre otros procesos ex antes de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Chile 2013. La Resolución N° 4391 del Ministerio de Obras Públicas del 09 de diciembre del (2010) que regula la Organización Interna Funcional de la Dirección General de Obras Públicas, y establece: *"2° La Subdirección General de Obras Públicas está conformada por ... el Departamento de Prevención de Riesgos de Obras Públicas, la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente y Participación Ciudadana, la Oficina de Atención de Emergencias de Obras Públicas ... Sus objetivos y funciones generales son: ... e) Proponer, implementar y controlar el Plan Ministerial de Acción ante Emergencias derivadas de catástrofes naturales u otras causas que provoquen grave daño a las personas y las obras públicas. Este Plan deberá asegurar la respuesta adecuada y oportuna ante las emergencias y la debida coordinación entre la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes..."*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley General N° 165 de Transportes, promulgada el 16 de agosto de 2011, establece en el artículo 90. (Plan de Contingencia): *"La autoridad competente del nivel central del Estado, normará y supervisará que se incorpore en los planes estratégicos y operativos de todas las autoridades competentes, operadores del servicio de transporte en todas sus modalidades y aquellos que prestan servicios logísticos complementarios al transporte, acciones de reducción de riesgo y respuesta a emergencias y desastres"*. No se precisa la responsabilidad de preparativos para la respuesta, aunque en la entrevista con el sector se manifestó la existencia durante muchos de años de una unidad encargada del tema de preparativos, pero que en la actualidad no está activa.

Código PR-1B-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10. <i>¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación en caso de desastres en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o de los preparativos y la respuesta.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector de agua y saneamiento (o equivalente), defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de agua y saneamiento pueden realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector de agua y saneamiento. 2. Indagar si la normatividad vinculada a los actores relevantes (rector y regulador) del sector agua y saneamiento establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector agua y saneamiento (o equivalente) sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-15 RR-1B-14 RC-1B-8 PR-1B-13	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-11 PR-2-13	Si el sector agua y saneamiento (o equivalente) y/o la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento contasen con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

<p>Para que se cumpla el indicador, el marco normativo aplicable a al menos uno de los actores relevantes del sector agua y saneamiento (ente rector o el regulador), debe establecer responsabilidades y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias. Sería aceptable que dichas responsabilidades y funciones estuvieran definidas, no para el ente rector o para el regulador, sino directamente para el proveedor del servicio. Lo importante es que estén definidas para algún actor relevante del sector.</p> <p>En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.</p> <p>No se logrará validar el presente indicador si la normatividad hace referencia a actividades de preparativos para la respuesta frente a emergencias, sin que quede explícito que dentro de la noción de “emergencias” están las originadas por la ocurrencia de fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente) sobre otros procesos ex antes de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p>
<p>Chile 2013. El Ministerio de Obras Públicas es la institución que ejerce la rectoría del Sector de Agua Potable y Saneamiento. La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) es una institución autónoma dependiente de este Ministerio el cual dispone asimismo de la Dirección de Obras Hidráulicas y de la Dirección General de Obras públicas. La Resolución N° 4391 del Ministerio de Obras Públicas del 09 de diciembre del (2010) que regula la Organización Interna Funcional de la Dirección General de Obras Públicas, establece: "2° La Subdirección General de Obras Públicas está conformada por ... el Departamento de Prevención de Riesgos de Obras Públicas, la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente y Participación Ciudadana, la Oficina de Atención de Emergencias de Obras Públicas ... Sus objetivos y funciones generales son: ... e) Proponer, implementar y controlar el Plan Ministerial de Acción ante Emergencias derivadas de catástrofes naturales u otras causas que provoquen grave daño a las personas y las obras públicas. Este Plan deberá asegurar la respuesta adecuada y oportuna ante las emergencias y la debida coordinación entre la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Obras Públicas y sus Servicios dependientes...".</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>

Brasil 2017. A LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997 que Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, não define a responsabilidade para a realização de atividades de preparação para a resposta a desastres no âmbito das suas competências. Por sua vez, a LEI No 9.984, DE 17 DE JULHO DE 2000 que Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras providências, tampouco define a responsabilidade para a realização de atividades de preparação para a resposta a desastres no âmbito das suas competências. Em consulta a LEI No 10.881, DE 9 DE JUNHO DE 2004, que Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de domínio da União e dá outras providências, também não menciona em nenhum momento o termo desastre e/ou define a responsabilidade para a realização de atividades de preparação para a resposta a desastres no âmbito das suas competências.

Traducción:

Brasil 2017. La Ley Nº 9.433, de 8 de enero de 1997, que establece la Política Nacional de Recursos Hídricos, crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, reglamenta el inciso XIX del art. 21 de la Constitución Federal, y modifica el art. 1 de la Ley N º 8.001, del 13 de marzo de 1990, que modificó la Ley Nº 7.990 del 28 de diciembre de 1989, no define la responsabilidad de las actividades de preparación para desastres dentro de su competencia. A su vez, la Ley N º 9.984, de 17 de julio de 2000, que trata de la creación de la Agencia Nacional del Agua - ANA, la entidad federal para la implementación de la Política Nacional de Recursos Hídricos y la coordinación del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, tampoco establece ninguna responsabilidad por llevar a cabo actividades de preparación para desastres dentro de su competencia. Al consultar la Ley Nº 10.881, de 9 de junio de 2004, que se ocupa de los contratos de gestión entre la Agencia Nacional del Agua y las entidades que delegan las funciones de las Agencias del Agua relacionadas con la gestión de los recursos hídricos en el dominio de la Unión y otras medidas. Tampoco menciona el término desastre en ningún momento y/o define la responsabilidad de las actividades de preparación para desastres dentro de su competencia.

Código PR-1B-11

Pregunta de respuesta cerrada	
11. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o de los preparativos y la respuesta.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector telecomunicaciones defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector telecomunicaciones (entendido como aquel que incluye al menos los servicios de telefonía) participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de ellas puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de telecomunicaciones puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de actividades de preparativos para la respuesta, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirla.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector telecomunicaciones. 2. Indagar si la normatividad del sector telecomunicaciones, incluyendo los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir, establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector telecomunicaciones sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-16 RR-1B-15 RC-1B-9 PR-1B-14	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-15	Si el sector telecomunicaciones y/o la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, el marco normativo aplicable al menos uno de los actores relevantes del sector de telecomunicaciones (ente rector, regulador o proveedor), debe establecer responsabilidades y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias. Sería aceptable que dichas responsabilidades y funciones estuvieran definidas, no para el ente rector o para el regulador, sino directamente para el proveedor del servicio. Lo importante es que estén definidas para algún actor relevante del sector.

En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.

No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector telecomunicaciones sobre otros procesos ex antes de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Chile 2013. Ley N° 20478, Ministerio de Transporte y telecomunicaciones (2010) sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de telecomunicaciones, considera en el Título VIII "De las Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones", Artículo 39 A, que *"El Ministerio, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el objeto de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe..."*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Decreto N° 94 – 96 del 17 de octubre de 1996 y sus reformas emitidas mediante Decretos N° 115-97 del 21 de noviembre de 1997 y N° 34-2012 del 20 de noviembre de 2012 de la Ley General de Telecomunicaciones, no definen la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias.

Código PR-1B-12

Pregunta de respuesta cerrada	
12. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) requiere permanentemente la confluencia y contribución de los distintos sectores de la administración pública y de las unidades de gestión territorial. Este indicador valora que los distintos marcos normativos de los sectores dispongan responsabilidades para que desde cada ámbito se realicen actividades de preparativos para la respuesta. Este es un reconocimiento explícito de que las responsabilidades en este proceso de preparativos y respuesta no apuntan únicamente a la instancia nacional responsable de la GRD o de los preparativos y la respuesta.</p> <p>Entre las actividades típicas de preparativos para la respuesta se encuentran aquellas que hacen relación entre otros a capacitaciones, elaboración de planes y protocolos de respuesta, realización de simulaciones o simulacros.</p> <p>De esta manera, este indicador reconoce como atributo de calidad que el marco normativo del sector energía, entendida ésta como energía eléctrica, defina la responsabilidad de realizar actividades de preparativos para la respuesta.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector energía participan varias instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Así mismo, podrían existir instituciones responsables de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de ellas puede tener su propio marco normativo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector la energía eléctrica. 2. Identificar a las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 3. Indagar si la normatividad del sector energía eléctrica, incluyendo los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir, establece responsabilidades de realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector energía eléctrica sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicado. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-17 RR-1B-16 RC-1B-10	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-1B-15	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar por la normatividad que mandate o respalde su elaboración.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

- Para que se cumpla el indicador, se debe satisfacer al menos una de las siguientes condiciones:
- El marco normativo aplicable al menos uno de los actores relevantes del sector de energía (ente rector o regulador), debe establecer responsabilidades y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres en su ámbito de competencias.
 - Que exista normatividad que establezca responsabilidades y funciones para realizar actividades de preparativos para la respuesta a desastres para cada una de las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.

No confundir con las funciones que pueda establecer la normatividad del sector energía sobre otros procesos ex antes de GRD tales como identificación del riesgo, acciones de prevención o mitigación de desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. Amparándose en los mandatos de la Ley y el Plan Nacional de Protección, y en uso de sus facultades legales dentro del sector energético, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, aprobó, mediante Acuerdo 558 - E -2013 del 20 de mayo de 2013 (PR-1B-12a), los Contenidos Básicos de los Planes de Emergencia para las empresas distribuidoras de energía eléctrica, estableciendo que: *“Las empresas distribuidoras deberán presentar a la SIGET dentro de un plazo de 60 días a partir de la notificación del presente acuerdo (558-E-2013) un Plan de Emergencia completo compuesto por un Manual General del Plan de Emergencia y los Procedimientos correspondientes (literal c, recomendaciones); y que “Los Planes de Emergencias deberán ser actualizados anualmente y las Empresas Distribuidoras deberán presentar a la SIGET, el Manual Actualizado a más tardar a los dieciséis días del mes de enero de cada año o el siguiente día hábil” (literal d).* El Acuerdo 558-E-2013 incluye como Anexo los contenidos aprobados de los planes de emergencia, en los cuales se define que el mismo debe contemplar todos los eventos que pudieran ocasionar importantes interrupciones del servicio de energía eléctrica, tales como: huracanes; depresiones tropicales; terremotos; inundaciones; tormentas; accidentes e incendios.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. La Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica no contiene disposiciones específicas relacionadas con la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta en el ámbito de competencias del sector; la única referencia está encaminada a verificar la factibilidad de dotación de servicios de electricidad en base a documento técnico emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Art.65).

Código PR-1B-13

Pregunta de respuesta cerrada	
13. <i>¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, obliga la formulación e implementación de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Es un objetivo fundamental de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD), y concretamente de los procesos de preparativos para la repuesta, que una vez ocurrido determinado desastre se identifique con diligencia aquellas funciones y servicios que se hayan suspendido parcial o totalmente, y que por su naturaleza e importancia resulte crítica su restauración.</p> <p>Este indicador valora que la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento, dada su importancia estratégica para la recuperación de la normalidad de la sociedad en caso de un desastre, establezca la obligación para que esas entidades formulen e implementen planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres, dotando así a la organización de la debida resiliencia.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de agua y saneamiento puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores (rector y regulador) del sector de agua y saneamiento. 2. Indagar si la normatividad vinculada a los actores (rector y regulador) del sector agua y saneamiento (incluido los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir), establece la responsabilidad de que las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento deban formular e implementar planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector agua y saneamiento (o equivalente) sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-15 RR-1B-14 RC-1B-8 PR-1B-10	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-2-11 PR-2-13	Si el sector agua y saneamiento (o equivalente) y/o la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento contasen con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia indagar la normatividad que los respaldan.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de agua y saneamiento debe establecer la responsabilidad de elaborar planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres.

En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.

No se podrá verificar este indicador con la sola existencia de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres de una o más prestadoras del servicio público de agua y saneamiento.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS - 2000, aprobado mediante la Resolución N° 1096 de 2000 (PR-1B-13a) y que es de obligatorio cumplimiento para el sector; obliga la elaboración de "*Planes de Contingencia*", y define en el artículo 201 que estos planes "*se deben basar en los potenciales escenarios de riesgo del sistema que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante su vida útil. El plan de contingencia debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del 31 de diciembre del 2001, solo establece en las "*Obligaciones de los Prestadores de los Servicios*", Artículo 65, literal "*q. prestar auxilio inmediato a las autoridades en casos de emergencia o calamidad pública, en las materias relacionadas con los servicios a los que se refiere esta Ley*" pero no obliga la formulación e implementación de planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres.

Código PR-1B-14

Pregunta de respuesta cerrada	
14. ¿La normatividad que regula las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones, obliga la formulación de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Es un objetivo fundamental de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD), y concretamente de los procesos de preparativos para la repuesta, que una vez ocurrido determinado desastre se identifique con diligencia aquellas funciones y servicios que se hayan suspendido parcial o totalmente, y que por su naturaleza e importancia resulte crítica su restauración.</p> <p>Este indicador valora que la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones (entendido como el que incluye al menos los servicios de telefonía), dada su importancia estratégica para la recuperación de la normalidad de la sociedad en caso de un desastre, establezca la obligación para que esas entidades formulen e implementen planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres, dotando así a la organización de la debida resiliencia.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de telecomunicaciones puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores (rectores, reguladores y prestadores) del sector telecomunicaciones. 2. Indagar si la normatividad vinculada a los actores (rectores, reguladores y prestadores) del sector telecomunicaciones (incluido los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir) establece la responsabilidad de que las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones deban formular e implementar planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector telecomunicaciones sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-16 RR-1B-15 RC-1B-9	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR 1B-11 PR-2-15	Si el sector telecomunicaciones y/o la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia indagar la normatividad que lo respalda.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de telecomunicaciones debe establecer la responsabilidad de elaborar planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres.

En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada.

No se podrá verificar este indicador con la sola existencia de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres de una o más prestadoras del servicio público de telecomunicaciones.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Chile 2013. La Ley N° 18168, Ley General de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del 15 de septiembre de 1982 (PR-1B-14a), Ley General de telecomunicaciones; considera en el "TÍTULO VIII - De las Infraestructuras Críticas de Telecomunicaciones", Artículo 39 A, que: *“El Ministerio, por medio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, desarrollará un plan de resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones del país, con el objeto de asegurar la continuidad de las comunicaciones en situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas generalizadas u otras situaciones de catástrofe. Para este efecto, tendrá las siguientes atribuciones...”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. Se cuenta con la Ley 1341 de 2009, *"Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones"*. El parágrafo 2 del Artículo N° 8 sobre las *"telecomunicaciones en casos de emergencia"*, establece que *"con el fin de atender las necesidades relacionadas con los motivos de declaratoria de emergencia (...), y en particular para garantizar la continuidad en la provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones, la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones se declara como de utilidad pública"*. Esta norma sin embargo no obliga de forma taxativa la formulación de planes de continuidad de negocios como tal en situaciones de emergencia.

Código PR-1B-15

Pregunta de respuesta cerrada	
15. <i>¿La normatividad que regula las entidades encargadas de la generación, transmisión y prestadoras del servicio público de energía, obliga la formulación de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Es un objetivo fundamental de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD), y concretamente de los procesos de preparativos para la repuesta, que una vez ocurrido determinado desastre se identifique con diligencia aquellas funciones y servicios que se hayan suspendido parcial o totalmente, y que por su naturaleza e importancia resulte crítica su restauración.</p> <p>Este indicador valora que la normatividad que regula a las entidades encargadas de la generación, transmisión y prestadoras del servicio público de energía, dada su importancia estratégica para la recuperación de la normalidad de la sociedad en caso de un desastre, establezca la obligación para que esas entidades formulen e implementen planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres, dotando así a la organización de la debida resiliencia.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de energía participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y las encargadas de la generación, transmisión y prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores (rectores, reguladores, generadoras, transmisoras y prestadores) del sector energía. 2. Indagar si la normatividad vinculada a los actores (rectores, reguladores, generadoras, transmisoras y prestadores) del sector energía (incluido los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir) establece la responsabilidad que dichas entidades del servicio público de energía deban formular e implementar planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector energía sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-17 RR-1B-16 RC-1B-10	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
PR-1B-12	Si el sector contase con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia, indagar la normatividad que lo respalda.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador, la normatividad que regula a las entidades prestadoras del servicio público de energía debe establecer la responsabilidad de elaborar planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres para las entidades generadoras, transmisoras y prestadoras del servicio de energía.

En la justificación se recomienda detallar las actividades de preparación para la respuesta a desastres definidas en la normativa identificada para las entidades encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía.

No se podrá verificar este indicador con la sola existencia de planes de emergencia, contingencia o planes de continuidad de operaciones o negocios ante desastres de las entidades encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, publicado en Gaceta Oficial N° 39.573 de fecha 14 de diciembre de 2010 (PR-1B-15a), establece en su artículo 23 que *“El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, con el apoyo técnico del operador y prestador del servicio, elaborará el plan de previsión de contingencias, con el fin de garantizar la seguridad del sistema y la continuidad del servicio eléctrico, de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Brasil 2017. A LEI N° 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996 que Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providência, e a LEI N° 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, que Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei no 9.984, de 17 de julho de 2000, bem como o DECRETO N° 2.335, DE 6 DE OUTUBRO DE 1997 que Constitui a Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências, ou o DECRETO No 41.019, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1957, que Regulamenta os serviços de energia elétrica, não menciona a obrigação de formular planos de continuidade das operações ou negócios frente a desastre. Em consonância com as informações encontradas, durante entrevista com a equipe gestora de uma das maiores companhias energéticas do país (Tractebel, Angie), foi informado que estes também desconhecem normas específicas para estes casos.

Traducción:

Brasil 2017. La LEY N° 9.427, de 26 de diciembre de 1996, que establece la Agencia Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL, regula el régimen de concesiones de servicios públicos de energía eléctrica y proporciona otras medidas, y la LEY N° 12.334, de 20 de septiembre de 2010, que establece la Política Nacional de Seguridad de Presas para la acumulación de agua para cualquier uso, la disposición final o temporal de relaves y la acumulación de desechos industriales, crea el Sistema Nacional de Información de Seguridad de Presas y modifica la redacción del art. 35 de la Ley N° 9.433, del 8 de enero de 1997, y del art. 4 de la Ley N° 9.984, de 17 de julio de 2000, así como del Decreto N° 2.335, de 6 de octubre de 1997, que constituye la Agencia Nacional de Energía Eléctrica - ANEEL, como una autoridad de régimen especial, aprueba su Estructura Regimental y el Marco Demostrativo. Posiciones de la Comisión y funciones confiables y otras disposiciones, o en el Decreto N° 41.019 del 26 de febrero de 1957, que regula los servicios de electricidad, no menciona la obligación de formular planes de continuidad comercial o de desastre. En consonancia con la información encontrada, durante una entrevista con el equipo directivo de una de las compañías de energía más grandes del país (Tractebel, Angie), se informó que tampoco conocen reglas específicas para estos casos.

Código PR-1B-16

Pregunta de respuesta cerrada	
16. ¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados con el almacenamiento, transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas?	
Descripción general del indicador	
La amenaza antrópica que constituyen los derrames, la contaminación o las explosiones de sustancias peligrosas interactúa en ocasiones con las amenazas naturales, incrementando los niveles de riesgo. Dado que los actores de la respuesta a este tipo de fenómenos son usualmente los mismos que responden a las emergencias y desastres, se considera como un atributo de calidad, la existencia de normatividad que regule el almacenamiento, transporte, manipulación y procesamiento de sustancias peligrosas.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por normatividad específica que regule el almacenamiento, transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas. 2. Indagar por normatividad del sector ambiental, salud, transporte terrestre de sustancias peligrosas o en la específica de GRD o la de preparativos para la respuesta a emergencias y desastres. 3. Identificar si dicha normatividad señala la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia o contingencia específicos para los casos de accidentes o desastres antrópicos relacionados con el almacenamiento, transporte, manipulación o procesamiento de estas sustancias peligrosas. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-1 PR-1B-17	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador, la normatividad identificada debe establecer la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados al almacenamiento, transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas.</p> <p>No se podrá verificar este indicador si la normatividad identificada solo cubre hidrocarburos, ya que el espíritu del mismo es que haya una cobertura para diferentes tipos de sustancias peligrosas.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Perú 2013. La Ley N° 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, del 18 de junio de 2004 (PR 1B-16a) - contiene en su Artículo 9, De los Planes de Contingencia: <i>“Los titulares de la actividad que usan materiales peligrosos están obligados a elaborar o exigir a las empresas contratistas que intervengan en la producción, almacenamiento, embalaje, transporte, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y disposición final de materiales y residuos peligrosos, un plan de contingencia que será aprobado por el Sector correspondiente, para los fines de control y fiscalización ambiental”.</i></p>	

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. Se revisó la normatividad relevante del sector ambiental, salud, transporte y específica de manejo de los residuos sólidos y no se localizó normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados con el transporte, manipulación o procesamiento de sustancias peligrosas. El documento Perfil Nacional de Manejo Racional de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos en Guatemala, del 2010, afirma que Guatemala no cuenta con un plan de emergencia sobre sustancias químicas, y que no se está aplicando el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) a nivel nacional.

Código PR-1B-17

Pregunta de respuesta cerrada	
17. ¿Existe normatividad que establece la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia ante derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos?	
Descripción general del indicador	
<p>Una larga cadena de efectos y su prolongación en el tiempo son algunas de las consecuencias negativas de los accidentes relacionados con el derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos, sin dejar de considerar su oneroso proceso de recuperación, comparable al de los accidentes por sustancias peligrosas. Además, este tipo de accidentes son en ocasiones generados por fenómenos naturales.</p> <p>Por la naturaleza de este tipo de accidentes, involucran a varios sectores, pues no sólo conciernen las entidades petroleras, sino a los sectores ambiental, de energía, salud, transporte (terrestre y marítimo), además de los servicios de bomberos, entre otros. Este indicador concede valor, en el marco del proceso de preparativos para la respuesta, a la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia relacionados con este tipo de accidentes, principalmente por el ejercicio de coordinación que exige.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de normatividad específica sobre hidrocarburos que regule su derrame, combustión o contaminación. 2. Identificar la normatividad de los sectores que pudieran ser involucrados con relación al derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos: entidad nacional petrolera, ambiental, energía, salud, transporte (terrestre y marítimo), servicio de bomberos, etc., para identificar si en alguna de dichas normatividades se establece la obligatoriedad de elaborar planes de emergencia o contingencia relacionados con ese tipo de accidentes. 3. Revisar, en su caso, la normativa específica de GRD o la de preparativos para la respuesta a emergencias y desastres, por si hubiera alguna referencia en alguna de ellas. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-1 PR-1B-16	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador la normatividad identificada debe establecer la obligatoriedad de formular e implementar planes de emergencia o contingencia asociados al derrame, combustión o contaminación por hidrocarburos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Costa Rica 2014. La Ley N° 7227 Convenio para la protección y el desarrollo del medio ambiente marino de la región del gran Caribe del 22 de abril de 1991 (PR-1B-17a) refiere lo siguiente: "*Artículo 3. Disposiciones generales ... 2. Las Partes Contratantes dentro de sus posibilidades, establecerán y mantendrán o harán establecer y mantener los medios para hacer frente a los incidentes de derrames de hidrocarburos y se esforzarán por reducir los riesgos de ellos. Esos medios comprenderán la promulgación, cuando fuere necesario, de la legislación pertinente, la preparación de planes de emergencia, la determinación y el desarrollo de medios que permitan hacer frente a incidentes de derrame de hidrocarburos y la designación de una autoridad responsable del presente Protocolo*". Asimismo: "*Artículo 11. Cooperación en casos de emergencia ... 1. Las Partes Contratantes cooperarán para adoptar todas las medidas necesarias con el objeto de hacer frente a las emergencias en materia de contaminación que se produzcan en la zona de aplicación del Convenio, sea cual fuere su causa, y de controlar, reducir o eliminar la contaminación o la amenaza de contaminación que resulten de ellas. Con este objeto las Partes Contratantes, individual o conjuntamente, elaborarán y promoverán planes de emergencia para hacer frente a incidentes que entrañen una contaminación o una amenaza de contaminación de la zona de aplicación del Convenio*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. Chapter 275 of the Merchant Shipping (Oil Pollution) Act 1974 (updated in 2009) incorporates MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978) into national law and prohibits discharges of oil or mixtures into Bahamian waters in section 5. There is a National Oil Spill Contingency Plan which was approved by Cabinet in 1999, which derives in part from the Caribbean Islands Oil Pollution Preparedness Response and Co-operation Plan. Despite the existence of such plan, no legislation that mandates its development and implementation could be found.

Traducción":

Bahamas 2017. El Capítulo 275 de la Ley de la Marina Mercante (Contaminación por hidrocarburos) de 1974 (actualizada en 2009) incorpora el MARPOL 73/78 (Convenio internacional para la prevención de la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978) en la legislación nacional y prohíbe descargas de petróleo o mezclas en aguas de las Bahamas en la sección 5. Existe un Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Petróleo que fue aprobado por el Gabinete en 1999, que se deriva en parte del Plan de Respuesta y Preparación para la Contaminación de Petróleo de las Islas del Caribe. A pesar de la existencia de dicho plan, no se pudo encontrar legislación que exija su desarrollo e implementación.

Código PR-1C-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta estipula instancias de coordinación en el territorio?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca que la normatividad de GRD o la de preparativos y respuesta, disponga la existencia de instancias de coordinación de la preparación y respuesta en un plano local, contribuyendo a que las Unidades de Gestión Territorial (UGT) regulen y estandaricen las acciones y operaciones en materia de preparación, lo que contribuye a reducir las demoras y la improvisación en las tareas de la respuesta.</p> <p>Como criterio de calidad de la normatividad se valora, por lo tanto, la existencia de instancias de coordinación de los procesos de preparativos y respuesta en las UGT.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las unidades de gestión territorial existentes en el país. 2. Indagar en la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, si se establecen instancias de coordinación en el territorio para llevar a cabo los procesos de preparativos y respuesta a desastres. 3. De ser necesario indagar con la institución rectora de la GRD o de los procesos de preparativos y respuesta sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 IR-1C-1 RR-1C-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normativa identificada debe establecer de forma explícita las instancias de coordinación que llevarán adelante los procesos de preparativos y respuesta a emergencias y desastres en las unidades de gestión territorial.</p> <p>Si en la normatividad estableciera en las UGT instancias de coordinación generales para la GRD, se deberá constatar en la justificación que los preparativos y respuesta son parte del alcance y procesos de la GRD definida en la normatividad. Asimismo, habrá que indicar explícitamente las instancias definidas en la normatividad para los diferentes niveles territoriales.</p> <p>Si la normatividad identificada no estableciera instancias de coordinación para a las diferentes UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador podrá validarse si al menos las mismas se establecen al nivel municipal (distrital).</p> <p>No se logrará validar este indicador si la normatividad identificada asigna responsabilidades sólo para el análisis de amenazas o análisis de vulnerabilidad, ya que el indicador busca validar la combinación de ambos análisis que resulten en una estimación del riesgo.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Jamaica 2013. Section 5 of the Disaster Preparedness and Emergency Act mandates the collaboration with the local government authorities for supporting disaster preparedness and mitigation activities. The Act mandated the development of a National Disaster Management Plan that establishes a National Emergency Operation Centre as well as Emergency Operations Centres at the local level for each parish. The Plan outlines an organisational chart for coordination.

"Concept of operations: Regional Emergency Operations Centres (REOC's) will be activated in cases where only a few parishes are affected, in which events the ODP will relate to the appropriate REOC".

Traducción

Jamaica 2013. La Sección 5 de la *Disaster Preparedness and Emergency Act* exige la colaboración con las autoridades del gobierno local para apoyar las actividades de preparación y mitigación de desastres. La Ley ordenó el desarrollo de un Plan Nacional de Manejo de Desastres que establezca un Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, así como Centros de Operaciones de Emergencia a nivel local para cada parroquia. El plan describe un organigrama para la coordinación: *"Concepto de operaciones: los centros regionales de operaciones de emergencia (REOC) se activarán en los casos en que solo unas pocas parroquias se vean afectadas, en los cuales el ODP se relacionará con el REOC apropiado".*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. Según el Decreto 1697/2004 la Dirección Nacional de Protección Civil tiene como funciones: *"Coordinar la formulación de los planes y actividades de preparación y atención de desastres a desarrollar por los organismos de Protección/Defensa Civil de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Promover la coordinación de esfuerzos con otros organismos del Estado Nacional, Provincial, Municipal y organizaciones civiles, respecto del tratamiento que exijan una actuación integral en la materia".* El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es el órgano que ejerce la conducción de las operaciones en el terreno que es constituido por el Gobernador (a nivel provincial) o el Intendente (a nivel de municipio) frente a una emergencia. La existencia del COE no está formalizada en normativa a nivel nacional y no ha sido posible verificar en todas las provincias y municipios del país normatividad que adopte los COE respectivos.

Código PR-1C-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, establece criterios de asistencia subsidiaria entre diferentes niveles de gobierno?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce como atributo de calidad en la normatividad nacional de GRD o en la de preparativos y respuesta si se establecen criterios de asistencia subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno en las tareas relativas a la respuesta de desastre. Esto significa una suerte de principio de gradualidad, por el que la normatividad dispone que el nivel territorial inferior, en el caso de una emergencia o desastre, tendrá inicialmente la responsabilidad de ejecutar las tareas de respuesta que correspondan a sus capacidades, y el criterio de subsidiariedad se aplicará en el caso de que esas capacidades territoriales se vean rebasadas por la situación, de manera que el nivel territorial superior deberá retomar esas tareas y así subsecuentemente, y será hasta que se hayan agotado los niveles territoriales (según el modelo político administrativo del país que se trate) que se activará la acción del gobierno nacional.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar en la normatividad de GRD o la que regula los procesos de preparativos y respuesta, si se establecen criterios subsidiariedad entre los diferentes niveles de gobierno para la respuesta a emergencias y desastres. 2. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o los procesos de preparativos y respuesta sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer el principio o criterios de asistencia subsidiaria entre los diferentes niveles de gobierno.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Honduras 2014. Decreto PCM-051-2013 Política de Estado para la Gestión Integral del Riesgo en Honduras, publicada en La Gaceta el 26 de noviembre 2013 (PR-1C-2a). Dentro de los principios de esta política se considera "f) <i>Autonomía, subsidiariedad y descentralización. Un nivel superior solamente deberá entrar en acción cuando el nivel inferior no tenga jerarquía territorial funcional o cuando por alguna razón no esté en condición de decidir o de actuar o cuando su capacidad de decisión quede desbordada por la magnitud de los efectos del desastre. Se fortalecerá y asistirán subsidiariamente las capacidades de gobernanza municipal con el apoyo de ente públicos centrales y sociedad civil</i>".</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Costa Rica 2014. Si bien existe el principio de solidaridad en la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, éste es de las instituciones del estado hacia la población y no entre niveles de gobierno. Lo más cercano al principio subsidiario lo contiene el Plan nacional para la Gestión del Riesgo 2010-2015, que define: *"Integralidad del proceso de gestión: La gestión del riesgo se basa en un abordaje integrado, en el cual se articulan los órganos, las estructuras, los métodos, los procedimientos y los recursos de la Administración central, la administración descentralizada, las empresas públicas y los gobiernos locales, procurando la participación del sector privado y de la sociedad civil organizada"*.

Código PR-1C-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece la formulación de planes de emergencia o contingencia al nivel de las Unidades de Gestión Territorial?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce la importancia de que los planes de emergencia sean formulados desde las unidades de gestión territorial, en el entendido de que el manejo del desastre desde el nivel local siempre será más rápido y responderá más adecuadamente a las necesidades reales de la población afectada.</p> <p>La planificación de la actuación de autoridades locales para la respuesta a los desastres se considera un atributo de calidad. De esta manera, este indicador requiere que la normatividad que regula los componentes de GRD o los procesos de preparativos y respuesta instruya la elaboración de tales planes de emergencia o contingencia a nivel de las unidades de gestión territorial.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si la normatividad de GRD o de preparativos y respuesta ordena la formulación de planes de emergencia o contingencia en el nivel de las unidades de gestión territorial. 2. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o de los procesos de preparativos y respuesta sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 IR-1C-1 RR-1C-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador la normatividad identificada debe establecer la obligatoriedad o la responsabilidad de la formulación de planes de emergencia o contingencia a nivel de las unidades de gestión territorial.</p> <p>Si en la normatividad se estableciera la formulación de planes de GRD, se deberá constatar en la justificación que la planificación de emergencia o contingencia es parte integral de los planes de gestión de riesgo de desastres.</p> <p>Si la normatividad identificada no estableciera esta obligatoriedad para a las diferentes UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador podrá validarse si al menos la misma se establece para el nivel municipal (distrital).</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones (PR-1C-3a), define en su artículo 33 al Plan de Gestión del Riesgo como “... el instrumento que define los objetivos, programas, acciones, responsables y presupuestos, mediante las cuales se ejecutan los procesos de... manejo de desastres... abordará las acciones necesarias para ... la preparación para la respuesta a emergencias...”. Adicionalmente, en el Artículo 37 se establece que “Las autoridades departamentales, distritales y municipales formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2017. No se encontraron evidencias al respecto, donde se asigne la responsabilidad u obligatoriedad que las instancias territoriales (municipios y departamentos) deban elaborar planes de emergencia o de gestión de riesgo de desastres. Se analizaron: (i) Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N.) aprobada el 10 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial N° 53 del 15 de junio de 2005; (ii) Decreto N° 11.632 por el cual se reglamenta la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N) aprobado el 12 de Agosto 2013; y (iii) Decreto N° 3713/15, por el cual se amplía y modifica parcialmente el Decreto N° 11.632/2013 que establece la reglamentación de la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), aprobado el 30 de junio de 2015.

Código PR-1C-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe normatividad nacional, distinta a la de GRD o preparativos, que define competencias para las unidades de gestión territorial en preparación y respuesta?	
Descripción general del indicador	
<p>La Gestión de Riesgos de Desastres (GRD), en el cumplimiento de sus objetivos, debe de armonizarse con los distintos modelos de organización política-administrativa, sobre todo cuando se trata de diferenciar entre lo nacional o central, y lo que corresponde a las Unidades de Gestión Territorial (UGT). En este caso, este indicador le concede un valor importante a la existencia de una definición de competencias para las UGT en materia de preparativos para la respuesta a desastres dentro de la normatividad que regula las competencias generales de las UGT, pues coadyuva con la normatividad expresa de la GRD o de preparativos y respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de normatividad nacional de materia distinta a la GRD y de los preparativos y respuesta que regule las competencias de las UGT. 2. Verificar si dicha normativa específica establece competencias para las UGT en los procesos de preparativos y respuesta a emergencias y desastres. Posibles verificables pueden ser: normatividad municipal, de autonomías, de descentralización, territoriales o normatividad de planificación regional, etc. 3. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o los procesos de preparativos y respuesta, o con asociaciones nacionales de municipios sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada, distinta a la GRD y preparativos y respuesta, debe establecer explícitamente competencias para las UGT en materia de preparativos y respuesta a desastres.</p> <p>Si en la normatividad estableciera competencias para las UGT para la GRD, se deberá constatar en la justificación que los preparativos y respuesta son parte del alcance y procesos de la GRD definida en dicha normatividad. Asimismo, se deberá indicar en la justificación las competencias que se definen para las unidades de gestión territorial en dicha normatividad en materia de preparativos y respuesta a desastres.</p> <p>Si la normatividad identificada no estableciera competencias para las diferentes UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador podrá validarse si al menos las mismas se establecen para el nivel municipal (distrital).</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Bolivia 2015. El Artículo 100 (Gestión de Riesgos y Atención de Desastres Naturales) de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031, promulgada el 19 julio de 2010 (PR-1C-4a) establece que: "*En aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 72 de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestión de riesgos*", estableciendo competencias exclusivas para el nivel central del Estado, nivel departamental, nivel municipal y gobiernos de las autonomías indígenas. En el apartado II de este artículo define entre las competencias exclusivas para el nivel departamental las siguientes: "*1. Conformar y liderar comités departamentales de reducción de riesgo y atención de desastres, en coordinación con los comités municipales...5. Elaborar sistemas de alerta temprana vinculados a más de un municipio; 6. Declarar desastre y/o emergencia, en base a la clasificación respectiva y acciones de respuesta y recuperación integral de manera concurrente con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos*". Adicionalmente, en el apartado III define entre las competencias exclusivas para el nivel municipal, las siguientes: "*(...) 2. Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y atención de desastres. (...) 8. Implementar sistemas de alerta temprana. (...) 12. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo con la categorización que corresponda. Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo a su presupuesto*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. la Ley N° 7794 Código Municipal del 27 de abril de 1998, es la normativa que define las competencias de las unidades territoriales, sin embargo, relacionado a riesgo sólo considera en su Artículo 13 como facultad del Concejo el dictar las medidas de ordenamiento urbano, y no prevé en absoluto temas relativos a desastres o emergencias.

Código PR-1C-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Existe normatividad que autoriza a los municipios a utilizar sus recursos propios fuera de su jurisdicción en situaciones de emergencia?	
Descripción general del indicador	
En algunos países la legislación podría restringir que los municipios eroguen recursos bajo su jurisdicción en beneficio de otro municipio. El presente indicador considera como deseable el esfuerzo mancomunado entre diversos municipios en materia de respuesta a emergencias o desastres y por lo tanto valora la existencia de normatividad que permita a un municipio apoyar con recursos a otros municipios en caso de ser requerido. Los recursos podrían ser tanto financieros, como en especie.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que establece las atribuciones de los municipios, normatividad sobre autonomías territoriales o normativa que regule los procesos de inversión pública y territorial. 2. Indagar por la existencia de normatividad específica que habilita el uso de recursos económicos o en especie para la respuesta en caso de desastre entre municipios. 3. Identificar experiencias recientes de ayuda mutua entre municipios en caso de emergencias y desastres, e indagar con los municipios involucrados la normalidad que lo permite. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad que permita el uso de recursos económicos o en especie entre municipios para la respuesta en caso de desastre.</p> <p>De ser identificadas experiencias recientes de ayuda mutua entre municipios, las mismas deberán quedar constatadas en la justificación aun cuando no se logró verificar el indicador por falta de normatividad al respecto.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Venezuela 2015. El Decreto con fuerza de Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres publicado en Gaceta Oficial, Nro. 5557 Extraordinario, el 13 de noviembre de 2001 (PR-1C-5a), establece en su artículo 25 que entre las responsabilidades asignadas en el Plan Nacional para la Protección Civil y Administración de Desastres, deben incluir la cooperación y ayuda mutua de los organismos estatales y municipales limítrofes con relación a las capacidades disponibles y cobertura del espacio geográfico donde ocurra el desastre.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Paraguay 2016. No se ha identificado normativa que habilite a los Gobiernos Municipales utilizar recursos propios fuera de su jurisdicción en situaciones de emergencia, sean estos financieros u otros. Se analizaron: (i) Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005; (ii) Ley 3.966/10 Orgánica Municipal, del 8 de febrero de 2010, publicada en la Gaceta Oficial N° 28 del 10 de febrero de 2010; y (iii) Ley N° 426/94 que Establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental, aprobada el 07 de diciembre de 1994.</p>	

Código PR-2-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿El ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta, ha recibido recursos para estas funciones en la última vigencia fiscal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que se asignen recursos ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta para financiar actividades para la preparación de la respuesta. Las actividades para la preparación de la respuesta pueden incluir entre otros: simulacros, instalación y/o reforzamiento de sistemas de alerta temprana, capacitación en preparativos y respuesta, adquisición de equipos e insumos para la respuesta, campañas de comunicación y sensibilización sobre preparativos para la respuesta, etc.</p> <p>No basta con que esa asignación de presupuesto sea exclusivamente para el funcionamiento de la entidad coordinadora de los preparativos a nivel nacional; este indicador valora que a dicho ente también se le asignen recursos para planificar e implementar actividades de preparativos para la respuesta.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la existencia y atribuciones de la entidad nacional encargada de la coordinación de los preparativos para la respuesta. 2. Verificar que en la última vigencia fiscal se han asignados recursos financieros a dicha entidad. Esto puede verificarse en el presupuesto nacional, en los informes de ejecución presupuestal y de gasto, o en el plan operativo anual y de gestión de la entidad. 3. Consultar a la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas, específicamente con las áreas encargadas de los temas presupuestales. 4. De ser necesario, consultar con la entidad nacional a cargo de coordinar la preparación para la respuesta, sobre el cumplimiento del presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	La normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría contener la información sobre cuál es la entidad nacional responsable de la coordinación en los preparativos para la respuesta.
MG-2-3	Si existe un objeto de gasto o clasificador presupuestal en el presupuesto nacional para asignar recursos a actividades ex ante de gestión del riesgo de desastres, verificar si se han asignado recursos al ente nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta que permita verificar este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencia de la existencia de un ente nacional responsable de la coordinación de la preparación para la respuesta. Entre los nombres generalmente empleados para designar a esta entidad están los de "Protección Civil", "Defensa Civil", "Oficina Nacional de Emergencias", entre muchos otros. Hay países en los que la entidad rectora de la gestión del riesgo de desastres es la encargada de coordinar los preparativos para la respuesta, y lo hace a través de una de sus unidades, departamentos, direcciones, etc. 	

<p>2- Evidencia de la asignación de recursos a dicha entidad, provenientes del presupuesto nacional para actividades tales como simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización sobre preparativos para la respuesta, equipamiento de brigadas, etc.</p> <p>No basta con evidenciar la asignación presupuestal para el funcionamiento (gastos corrientes como personal, combustible de vehículos, papelería, etc.) de la entidad nacional responsable de la coordinación de la preparación de la respuesta. Es imprescindible demostrar que estos recursos han sido asignados para realizar actividades como las mencionadas anteriormente.</p> <p>En la justificación, de ser posible, se recomienda detallar tanto los tipos de actividades de preparativos para la respuesta, como el monto total de recursos asignados para tal fin.</p> <p>No se cumplirá este indicador si los recursos provienen del, o las actividades de preparativos para desastres son realizadas con, financiamiento de instituciones de cooperación internacional, sector privado u otra fuente diferente al presupuesto nacional.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p> <p>Chile 2013. En la ficha de definición estratégicas año 2012-2014 (Formulario A1), en la Partida 05, capítulo 04, Oficina Nacional de Emergencia se evidencia la asignación de recursos para el producto estratégico 1, el cual consiste en: <i>"Modernización de la gestión de emergencias y alerta temprana en el Estado"</i>, y se describe como <i>"Desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la Red Nacional de Monitoreo Sísmico, la Red Nacional de Telecomunicaciones, el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) y el uso de herramientas digitales para el control y monitoreo de emergencias"</i>. Así también, a través del desarrollo de proyectos de inversión regional para el fortalecimiento de los sistemas de Alerta Temprana en el territorio. Cabe mencionar que este Formulario lo deben presentar todos los servicios a la División de Presupuestos al momento de presentar sus presupuestos para aprobación y asignación de recursos.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p> <p>República Dominicana 2014. Se pudo constatar que la Ley No. 311-12, Ley de Presupuesto General del Estado 2013 (PR-2-1a), aprobada en 2012, asigna recursos para:</p> <p>Comisión Nacional de Emergencia: RD\$ 35,383,732.00</p> <p>Defensa Civil: RD\$ 70,886,972.00</p> <p>Si bien el Centro de Operaciones de Emergencia (que es una dependencia de la Comisión Nacional de Emergencia), está dirigido por un funcionario de la Defensa Civil y tiene su sede en la Defensa Civil, no se ha podido verificar si los fondos mencionados (o parte de ellos) son asignados a las actividades de preparación y respuesta en particular. Adicionalmente, en el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 147-02 sobre Gestión de Riesgo se señala que <i>"el COE solicitará los recursos necesarios a las diferentes instituciones, en función de lo marcado en el Plan Nacional de Emergencia"</i>. Tampoco se pudo encontrar evidencia de los recursos aportados por otras instituciones.</p>

Código PR-2-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Al menos un servicio nacional de bomberos ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?	
Descripción general del indicador	
<p>La labor de los cuerpos de bomberos en situaciones de desastre es fundamental para reducir el impacto de la catástrofe, especialmente en términos de fallecidos y heridos. Los bomberos ayudan a evacuar la población en riesgo, rescatan a personas en peligro, especialmente a los más vulnerables, realizan tareas de primeros auxilios, trasladan a los heridos más graves a hospitales, e incluso en el caso de incendios contribuyen a mitigar el desastre. Los cuerpos de bomberos suelen tener una presencia generalizada en todo el país, especialmente en las zonas urbanas, donde se concentra la población. Para que los bomberos puedan realizar de manera efectiva su labor en emergencias, es fundamental que estén debidamente equipados y entrenados, y que cuenten con una población sensibilizada que facilite y coadyuve en su labor.</p> <p>Este indicador reconoce la importancia de la asignación de recursos para al menos un servicio nacional de bomberos para la realización de actividades de preparación de respuesta. Entre dichas actividades/gastos están los siguientes: adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes de emergencia, campañas de comunicación y sensibilización, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la organización de los servicios de bomberos en el país. 2. Determinar si al menos un servicio nacional de bomberos tiene asignados recursos para las actividades de preparativos para la respuesta, ya sea en el presupuesto nacional o en los informes de ejecución presupuestal y de gasto, presupuesto del ministerio del cual depende bomberos, plan operativo de bomberos, normatividad relacionada con cuerpos de bomberos o memorias e informes de gestión del cuerpo de bomberos. 3. En caso de que los recursos para los cuerpos de bomberos provengan de un porcentaje de la prima de seguros o de otras fuentes que no sean recursos públicos, hay que probar que dichos recursos se asignan a los bomberos, indagando por ejemplo en reportes de la superintendencia de seguros o de las compañías de seguros o del gremio asegurador. 4. De ser necesario, consultar con los representantes de los servicios de bomberos, sobre la asignación de recursos y ejecución de actividades de preparativos para la respuesta. 5. En el caso de que no exista un cuerpo nacional de bomberos, sino que dichos cuerpos sean de carácter municipal o similar, habrá que confirmar si el cuerpo de bomberos de la ciudad capital ha recibido recursos en el último ejercicio fiscal. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-2-3	En algunos países los servicios de bomberos también son responsables por la prevención y extinción de los incendios forestales. De ser el caso en el país en análisis, el indicador PR-2-3 permitiría orientar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla este indicador se deberá evidenciar la asignación de recursos para al menos un servicio nacional de bomberos para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta en la última vigencia fiscal. Entre dichas actividades podrían estar las siguientes: adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, entre otras. También, se considerará como evidencia válida la realización de dichas actividades, siempre y cuando pueda evidenciarse que hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En el caso de los países en los cuales no exista un cuerpo nacional de bomberos, sino que esos sean de carácter municipal o similar, habría que confirmar que el cuerpo de bomberos de la ciudad capital haya recibido recursos en el último ejercicio fiscal. Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde este la sede administrativa de gobierno.

De existir la información disponible, en la justificación se deberá detallar tanto los tipos de actividades de preparativos para la respuesta que hayan sido planificadas o realizadas, así como el monto total de recursos asignados para tal fin.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. De acuerdo al Artículo 1 del Decreto 289, Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador (PR-2-2a), publicada en el Diario Oficial No. 69 el 7 de abril de 1995 *"El Cuerpo de Bomberos de El Salvador es una Institución de servicio público que tendrá a su cargo las labores de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo, así como las actividades de evacuación y rescate; protección a las personas y sus bienes; cooperación y auxilio, en caso de desastre y demás actividades que sean afines a dicho Servicio"*. Así mismo, en el Artículo 2 de dicha Ley se establece *"El Cuerpo de Bomberos de El Salvador, funcionará como una Dirección General adscrita al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública"*. Cabe mencionar que el 18 de diciembre de 2001 por Decreto No. 124 (PR-2-2b), publicado en el Diario Oficial No. 242 del 20 de diciembre de 2001 el Ministerio del Interior y Seguridad Pública pasa a denominarse *"Ministerio de Gobernación"*, y más recientemente, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1 del Consejo de Ministros, publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2014, este Ministerio pasa a denominarse *"Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial"* (PR-2-2c). En el Presupuesto 2016 para el *"Ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial"* (PR-2-2d) se encontró evidencia de asignación de recursos en la sección correspondiente a *"3. Relación Propósito con Recursos Asignados"* para la Unidad Presupuestaria *"02 Prevención y Atención de Riesgos"* para la Línea de Trabajo *"01 Prevención, Control y Extinción de Incendios"* para *"Prevenir la ocurrencia de incendios y atender de forma inmediata las emergencias, a fin de disminuir la pérdida de vidas humanas y materiales; asimismo participar en la mitigación de riesgos de manera eficiente y eficaz"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. "La ley 1575 de 2012 *"por medio de la cual se establece la Ley general de bomberos de Colombia"* en su artículo 34 establece *"Fondo nacional de bomberos. Créese el fondo nacional de bomberos de Colombia como una cuenta especial de la nación, manejada por la Dirección Nacional de Bomberos, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística con fines de interés público y asistencia social y de atención de la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos para fortalecer los cuerpos de bomberos"*. En el artículo 35 se establece *"Recursos del fondo nacional de bomberos. El fondo nacional de bomberos se financiará con los siguientes recursos:*

1. Toda compañía aseguradora que otorgue pólizas de seguros en los ramos del hogar, incendio, terremoto, minas y petróleo, o la denominación que en su portafolio de pólizas esté registrada ante la Superintendencia Financiera y que tengan que ver con los ramos antes señalados, deberá aportar al fondo nacional de bomberos una suma equivalente al dos por ciento (2%) liquidada sobre el valor de la póliza de seguros; este valor deberá ser girado al Fondo Nacional de Bomberos dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a la adquisición de las mencionadas pólizas.

2. En cada vigencia fiscal, el Gobierno Nacional apropiará en el presupuesto general de la nación con destino al Fondo Nacional de Bomberos, como mínimo la suma de veinticinco mil millones de pesos, cifra que será ajustada anualmente, de acuerdo con el índice de Precios al Consumidor. Estos recursos se destinarán para financiar proyectos de inversión". En la sección 3709 de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2013 solo se encontró evidencia de asignación de recursos para el presupuesto de funcionamiento. El indicador no se cumple en razón a que no fue posible verificar la asignación de recursos para actividades de preparación para desastres.

Código PR-2-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿La entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La labor de la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales es fundamental para reducir el impacto de este tipo de incendios en las actividades agropecuarias, forestales y otros medios de vida del ámbito rural, así como para evitar su propagación a centros urbanos.</p> <p>Las entidades responsables de la prevención y extinción de incendios forestales suelen tener una presencia en las zonas expuestas a este tipo de incendios, y para que puedan realizar de manera efectiva su labor es fundamental que estén debidamente equipadas y entrenadas, y que cuenten con una población sensibilizada que facilite y coadyuve en su labor.</p> <p>Este indicador reconoce la importancia de la asignación de recursos para la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales para la realización de actividades de preparación de respuesta. Entre dichas actividades/gastos están los siguientes: adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes de emergencia, campañas de comunicación y sensibilización, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales en el país. 2. Revisar en el presupuesto nacional o en los informes de actividades de dicha entidad si en el último ejercicio fiscal tiene asignados recursos para las actividades de preparativos para la respuesta. 3. De ser necesario, consultar con un representante dicha entidad sobre la asignación de recursos y ejecución de actividades de preparativos para la respuesta. 4. En el caso que no exista un ente responsable a nivel nacional de la prevención y extinción de incendios forestales, sino que estos sean del nivel territorial, habrá que confirmar que al menos uno de estos ha recibido recursos para los preparativos en el último ejercicio fiscal. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-2-2	En algunos países los servicios de bomberos también son responsables por la prevención y extinción de todo tipo de incendios, incluyendo los forestales. De ser el caso en el país en análisis, el cumplimiento del indicador PR-2-2 podría orientar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla este indicador se deberá evidenciar la asignación de recursos para la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta en la última vigencia fiscal. También, se considerará como evidencia válida la realización de dichas actividades, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que las mismas hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En el caso de los países en los cuales no exista una entidad responsable a nivel nacional de la prevención y extinción de incendios forestales, sino que estos sean del nivel territorial, habría que confirmar que al menos una de estas entidades responsables de la prevención y extinción de incendios forestales haya recibido recursos en el último ejercicio fiscal.

De existir la información disponible, en la justificación se recomienda detallar tanto los tipos de actividades de preparativos para la respuesta que hayan sido planificadas o realizadas, así como el monto total de recursos asignados para tal fin.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. La entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales, ha recibido recursos para la financiación de actividades de preparación para desastres en la última vigencia fiscal en el Presupuesto General de la República 2015, Anexo II –79, asigna fondos al Instituto Nacional Forestal, para promover la participación activa de la población en el proceso de prevención y control de incendios forestales, para lo que se realizarán procesos de organización y equipamiento de brigadas, sistemas de alertas temprana, sistemas de vigilancia forestal, infraestructura forestal, concientización y capacitación a la población y divulgación sobre la importancia de la protección de los bosques (Alcances esperados para el Año 2015). Al programa 12 de construcción y equipamiento de puestos de control forestal regulación y fomento al manejo sostenible de los bosques se asigna un monto total de C\$1.0 millón de córdobas y al Programa 13 de Reforestación y protección de los bosques, se asignan C\$ 2.2 millones de córdobas.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En Colombia el Cuerpo de Bomberos es la entidad nacional responsable de la prevención y extinción de incendios forestales. De acuerdo con la Ley 1575 de 2012 "por medio de la cual se establece la Ley general de bomberos de Colombia", en el artículo 2 se establece "*Gestión integral del riesgo contra incendio. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, estarán a cargo de las instituciones Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio público esencial a cargo del Estado*". En la sección 3709 de la Ley de Presupuesto General de la Nación 2013 solo se encontró evidencia de asignación de recursos para el presupuesto de funcionamiento. La condición es negativa en razón a que no fue posible verificar la asignación de recursos para actividades de preparación para desastres.

México 2014. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero de 2003, crea a la Comisión Nacional Forestal, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios (artículo 17) y con el objeto de “... *desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal...*” (artículo 18).

La Comisión, además, coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios (artículo 123).

El Decreto de Presupuesto de Egresos Federal del Ejercicio Fiscal 2013, (PEF 2013), publicado en el DOF el 27 de diciembre de 2012, fijó en el ANEXO 11. PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (pesos), en el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales, recursos para la Comisión Nacional Forestal. No obstante, no se puede valorar la condición como positiva porque no existe evidencia explícita de asignación de estos recursos para tareas de preparativos para la respuesta.

Código PR-2-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿Cuenta el sector ambiental con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas ex-ante. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de negocio (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector ambiente, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de negocio es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector ambiental (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, de contingencia o un plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales. 2. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan identificado. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-3	Si la normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría considerar elaborar el tipo de planes que indaga este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador el sector ambiental deberá contar con un plan nacional de emergencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente que haya sido aprobado por la institución respectiva en los últimos 5 años.

Si dicho plan fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.

Tampoco se logrará cumplir el indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector ambiental (a menos que dicho plan contenga un capítulo o anexo, o similares, que corresponda a un plan nacional de emergencia o plan de continuidad de operaciones para el sector ambiente) o mediante planes del sector ambiental de continuidad o de emergencia que no tengan relación con fenómenos naturales.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2013. No se pudo constatar si efectivamente se cuenta con un Plan de Emergencia del Sector formalmente aprobado. No obstante, la Ley N.º 28551 de 2005 establece la obligación y procedimiento para la elaboración y presentación de planes de contingencia, con sujeción a los objetivos, principios y estrategias del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. La anterior cubre a todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen y/o administran empresas, instalaciones, edificaciones y recintos, quienes tienen la obligación de elaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad competente, planes de contingencia para cada una de las operaciones que desarrollen. Por otra parte, la Ley N.º 29664, del 8 de febrero de 2011, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD), en sus artículos 38 y 34 punto 34.3 establecen los instrumentos y definen los planes específicos por proceso que incluyen planes de emergencia y contingencia para todos los actores del Sistema Nacional. Establece además el concepto de continuidad de servicios.

Código PR-2-5

Pregunta de respuesta cerrada
<p>5. <i>¿Cuenta el sector agricultura con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector agricultura, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p> <p>Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector agricultura haya recibido recursos para prepararse para la respuesta en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<p><i>Respecto de los planes de emergencia, contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector agricultura (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales, para el sector o para alguno de sus subsectores. 2. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan identificado. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de preparación de la respuesta de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar si existen recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector agricultura o a alguna de sus entidades adscritas para actividades de preparativos para la respuesta para desastres. 3. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial del sector agricultura. 4. De ser necesario, consultar con representantes del área de presupuesto o con la de gestión de riesgo de desastres dentro de la entidad rectora del sector agricultura sobre la asignación de recursos, para el fin que indaga el presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-4	Si la normatividad del sector agricultura define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el sector agricultura cuente con un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años. 2. Evidencia que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector, o a alguna de sus entidades adscritas, durante la última vigencia o ejercicio fiscal, para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta frente a fenómenos naturales peligrosos. <p>Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir el presente indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector agricultura (a menos que dicho plan incluya un capítulo o anexo, o similares, que corresponda a un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones para el sector agricultura) o mediante planes del sector agricultura de continuidad de operaciones o de emergencia que no tengan relación con fenómenos naturales peligrosos (por ejemplo, para determinadas plagas).</p> <p>Se considerará como evidencia válida para la segunda condición, la realización de actividades de preparativos para la respuesta, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que las mismas hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.</p> <p>En la justificación se deberá detallar el tipo de plan identificado, las actividades de preparativos para la respuesta planificadas o realizadas por el sector, así como la información sobre el monto total de recursos asignados para tales fines. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal utilizado.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. Se dispone del Plan de Operaciones de Emergencia del sector Agricultura- del Ministerio de Agricultura, del 2008 (PR-2-5a), el cual fue aprobado por Resolución Suprema N.º 059-2008-AG del 10 de noviembre del 2008 (PR-2-5b). Asimismo, como segunda condición, se tiene que el Ministerio de Agricultura ha recibido recursos presupuestales para la preparación en caso de desastres como se aprecia en el Anexo 5 de la Ley N.º 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre del 2012 (PR-2-5c), donde se asignan recursos para: (i) población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante inundaciones; (ii) población y sus medios de vida con capacidades de resistencia ante flujos en quebradas y laderas, a través de los productos del 3000444 al 3000448.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. El sector cuenta con el Plan de Contingencia del Sector Agropecuario 2012, elaborado y publicado en junio de 2012 por el Ministerio de Agricultura, con colaboración de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las ONG's y Asociación de Productores de las Regionales Agropecuarias, Sur, Noroeste, Nordeste, Suroeste, Norte. No obstante, el indicador no se cumple en razón a que no se pudo evidenciar asignación de recursos para actividades de preparación en el Presupuesto 2013 del sector.

Código PR-2-6

Pregunta de respuesta cerrada
<p>6. <i>¿Cuenta el sector salud con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector salud, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p> <p>Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector salud haya recibido recursos para acciones para los preparativos para la respuesta en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

Respecto de los planes de emergencia, contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente):

1. Consultar a la cabeza del sector salud (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalente) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.
2. De ser necesario entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador.
3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan identificado.

Respecto de la asignación de recursos:

1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de preparación de la respuesta de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector.
2. Identificar si existen recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector salud o a alguna de sus entidades adscritas para actividades de preparativos para desastres.
3. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial del sector salud.
4. De ser necesario, consultar con representantes del área de presupuesto o con la de gestión de riesgo de desastres dentro de la entidad rectora del sector salud sobre la asignación de recursos, para el fin que indaga el presente indicador.

Vínculo con otros indicadores

PR-1B-5	Si la normatividad del sector salud define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
----------------	--

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido

Para cumplir este indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:

1. Que el sector salud cuente con un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalente) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años.
2. Evidencia que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector, o alguna de sus entidades adscritas, durante la última vigencia o ejercicio fiscal, para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta frente a fenómenos naturales peligrosos.

Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir el presente indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector salud (a menos que dicho plan incluya un capítulo o anexo, o similares, que corresponda a un plan nacional de emergencia o plan de continuidad de operaciones para el sector salud) o mediante planes del sector salud de continuidad de operaciones o de emergencia que no tengan relación con fenómenos naturales peligrosos (por ejemplo, para epidemias u otras emergencias sanitarias).

Se considerará como evidencia que respalda la segunda condición, la realización de actividades de preparativos para la respuesta, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que las mismas hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En la justificación se deberá detallar el tipo de plan identificado, las actividades de preparativos para la respuesta planificadas o realizadas por el sector, así como la información sobre el monto total de recursos asignados para tales fines. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo o etiquetador presupuestal utilizado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. Con relación a la elaboración de planes de contingencia, el sector elaboró y publicó en 2011 el *"Plan de contingencia del sector salud ante la temporada invernal en Colombia"* (PR-2-6a). Con relación a la asignación de recursos, en el Presupuesto del Ministerio de Salud y Protección Social a septiembre de 2013 (PR-2-6b) se encontró evidencia de asignación de recursos para el *"Fortalecimiento del centro nacional de comunicaciones, sala de atención de crisis y del grupo atención de emergencias y desastres del MPS"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. La Ley de Gestión Integral de Riesgos Socionaturales y Tecnológicos, publicada en la Gaceta Oficial N.º 39.095 del 9 de enero de 2009, en el numeral 11 del Artículo 8, correspondiente a Lineamientos de la Política Nacional establece que *"Todas las instituciones públicas deben garantizar su preparación para la instrumentación de manera rápida, diligente, coordinada y efectiva de acciones de respuesta y rehabilitación en caso de emergencias o desastres"*. No obstante, no se encontraron evidencias al respecto de la existencia de un plan de emergencias por desastres en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Lo anterior fue corroborado mediante entrevistas a varios expertos en gestión de riesgo del país. Sin embargo, cabe mencionar que representantes del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil manifestaron que el sector salud cuenta con estos planes, aunque no fue viable tener acceso a los mismos. De otra parte, de conformidad con la consulta efectuada al *"Resumen de la Distribución General de la Ley de Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2015"*, al *"Plan Operativo Anual Nacional, Ejercicio Fiscal 2014"* y a los cuatro títulos de la *"Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015"*, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.161 del miércoles 10 de diciembre de 2014, no se localizó evidencia de asignación de recursos para la preparación en caso de desastres para el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Código PR-2-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿Cuenta el sector vivienda con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector vivienda, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la institución rectora del sector vivienda (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos. 2. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) que se haya identificado. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-6	Si la normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para cumplir este indicador el sector vivienda debe contar con un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años.

Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir el presente indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector vivienda (a menos que dicho plan incluya un capítulo, anexo o equivalentes, que corresponda a un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones para el sector vivienda) o mediante planes del sector vivienda de emergencia que no tengan relación con fenómenos naturales.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. Se cuenta con el Plan de Operaciones de Emergencia del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por Resolución Ministerial N° 026- 2010 VIVIENDA, del 11 de febrero de 2010 (PR-2-7a).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. No se encontró evidencia de la existencia de un plan de emergencia, contingencia o continuidad de operaciones para el sector. No obstante, SINAPRED manifestó que el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) elaboró el Plan de Respuesta INVUR. Dado que no se pudo acceder al Plan en mención la condición se considera negativa. Cabe mencionar que el INVUR manifestó que se encuentra en proceso la elaboración del Protocolo de actuación institucional para atención de emergencias ante eventos múltiples (Taller de consulta IGOPP).

Código PR-2-8

Pregunta de respuesta cerrada

8. *¿Cuenta el sector educación con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?*

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.

Este indicador tiene interés particular en el sector educación, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.

Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.

Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.

De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.

Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector educación haya recibido recursos para acciones para los preparativos para la respuesta en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

Respecto de los planes de emergencia, contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente):

1. Consultar a la cabeza del sector educación (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.
2. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador.
3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan identificado.

Respecto de la asignación de recursos:

1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de preparación de la respuesta de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector.
2. Identificar si existen recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector educación o a alguna de sus entidades adscritas para actividades de preparativos para la respuesta para desastres.
3. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial del sector educación.
4. De ser necesario, consultar con representantes del área de presupuesto o con la de gestión de riesgo de desastres de la entidad rectora del sector educación sobre la asignación de recursos, para el fin que indaga el presente indicador.

Vínculo con otros indicadores

PR-1B-7	Si la normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
----------------	--

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido

Para cumplir este indicador, se deberán satisfacer las siguientes condiciones:

1. Que el sector educación cuente con un plan nacional de emergencia, contingencia o continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años.
2. Evidencia que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector, o a alguna de sus entidades adscritas, durante la última vigencia o ejercicio fiscal para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta frente a fenómenos naturales peligrosos.

Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir el presente indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector educación (a menos que dicho plan incluya un capítulo, anexo o similares, que corresponda a un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones para el sector educación) o mediante planes del sector educación que no tengan relación con fenómenos naturales peligrosos.

Se considerará como evidencia que respalda la segunda condición, la realización de actividades de preparativos para la respuesta, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En la justificación se deberá detallar el tipo de plan identificado, las actividades de preparativos para la respuesta planificadas o realizadas por el sector, así como la información sobre el monto total de recursos asignados para tales fines. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal utilizado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El sector cuenta con el Plan de Educación Preventiva ante Sismos 2010, aprobado por Resolución Directoral N° 463-2010-ED, del 02 de junio de 2010 (PR-2-8a), que establece la obligatoriedad de formular a su vez en cada institución educativa el Plan de Gestión del Riesgo para la preparación ante sismos (resultado 1). Adicionalmente, la condición se cumple ya que el Ministerio como entidad rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal. Ver el Anexo 5 de la Ley N° 29951 del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, del 30 de noviembre de 2012 (PR-2-8b), que asigna en la página 73, recursos para instancias de gestión educativa descentralizada preparadas para la respuesta y rehabilitación del servicio de educación ante ocurrencia de emergencias y desastres - afianzamiento del soporte pedagógico para respuesta a desastres y emergencias.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. Con relación a la existencia de planes de contingencia, en la página web del Ministerio de Educación (<http://educacion.gob.ec/contingencia-fenomeno-el-nino/>) se menciona que el "*Plan de Contingencia ante el Fenómeno de El Niño Régimen Costa 2015 - 2016*", fue establecido en el Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2015-00156-A (PR-2-8a). No obstante, no se pudo acceder al Plan de Contingencia que se menciona para verificar su existencia. Con relación a la asignación de recursos el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual - Mayo 2016, Plan de Inversiones del Ministerio de Educación (PR-2-8b) evidencia asignación de recursos al "*Proyecto reducción de riesgos ante los desastres naturales en la comunidad educativa en Ecuador (PAI)*", que incluye como meta "*180 capacitaciones en gestión de riesgos a la comunidad educativa que se encuentren en zonas de vulnerabilidad*". Dado que no se ha podido corroborar que exista un plan nacional de emergencia propiamente dicho, salvo un listado de acciones en el portal web del Ministerio ante la inminencia del Fenómeno de El Niño, el equipo que aplicó el iGOPP en Ecuador considera que no se cumple a cabalidad con la condición de que plantea este indicador.

Código PR-2-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. <i>¿Cuenta el sector turismo con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector turismo, valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la cabeza del sector turismo (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos. 2. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) que se haya identificado. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-8	Si la normatividad del sector turismo define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido
<p>Para cumplir este indicador se deberá verificar que el sector turismo cuente con un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años.</p> <p>Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador.</p> <p>Tampoco se logrará cumplir el presente indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector turismo (a menos que dicho plan incluya un capítulo, anexo o equivalentes, que corresponda a un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones para el sector turismo) o mediante planes del sector turismo que no tengan relación con fenómenos naturales peligrosos.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>Perú 2013. El sector cuenta con un Plan Sectorial de Operaciones de Emergencia, aprobado por Resolución Ministerial N.º 054-2008 MINCETUR-DM, del 31 de marzo del 2008 (PR 2-9a), que establece las actividades de preparación y respuesta que se deben ejecutar en el sector de Comercio Exterior y Turismo.</p>
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Uruguay 2015. La Ley del sector Turismo, Ley No. 14.335, de fecha 18 de diciembre de 1974, no estipula que el sector deba contar con un Plan Nacional de Emergencia o Contingencia. De otra parte, la Ley del Sistema Nacional de Emergencias, Ley No. 18.621 de fecha 12 de octubre de 2009, no estipula responsabilidades a los sectores respecto de la elaboración de planes de emergencia o contingencia.</p>

Código PR-2-10

Pregunta de respuesta cerrada

10. *¿Cuenta el sector transporte (o equivalente) con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?*

Descripción general del indicador

De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.

Este indicador tiene interés particular en el sector transporte (entendido como obras viales), valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.

Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.

Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.

De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.

Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector transporte haya recibido recursos para acciones para los preparativos para la respuesta en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar al rector del sector transporte (o entidad equivalente) respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales, ya sea para el sector, o para alguno de sus subsectores. A efectos del indicador el subsector relevante es el que tenga la responsabilidad de las obras viales. 2. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 3. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) que se haya identificado. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de preparación de la respuesta de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar si existen recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a la entidad rectora del sector transporte para actividades de preparativos para desastres en el área o subsector de obras viales. 3. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial del sector transporte. 4. De ser necesario, consultar con representantes del área de presupuesto o con la de gestión de riesgo de desastres dentro de la entidad rectora del sector transporte sobre la asignación de recursos, para el fin que indaga el presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-9	Si la normatividad del sector transporte define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador, se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el sector transporte, o su subsector de obras viales, cuente con un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años. 2. Evidencia que constate la asignación de recursos a la entidad rectora del sector, o a alguna de sus entidades adscritas dentro del subsector de obras viales, durante la última vigencia o ejercicio fiscal, para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta frente a fenómenos naturales peligrosos. <p>Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector transporte (a menos que dicho plan incluya un capítulo, anexo o equivalentes, que corresponda a un plan nacional de emergencia o plan de continuidad de operaciones para el sector transporte) o mediante planes del sector transporte que no tengan relación con fenómenos naturales. Asimismo, no se cumplirá el indicador mediante planes preparados por empresas que tengan concesionadas autopistas específicas ya que se indaga por un plan de cobertura nacional para el sector vial.</p> <p>En el caso que el sector de transporte sea parte o dependa de un ministerio con mandatos más amplios (p.ej. Obras públicas), el plan de emergencia que permitirá validar la primera condición debe ser específico para el subsector vial y no el plan general del ministerio al cual está adscrito este subsector.</p>	

Se considerará como evidencia que respalda la segunda condición, la realización de actividades de preparativos para la respuesta, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que las mismas hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En la justificación se deberá detallar el tipo de plan identificado, las actividades de preparativos para la respuesta planificadas o realizadas por el sector, así como la información sobre el monto total de recursos asignados para tales fines. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal utilizado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. Con relación a la asignación de recursos, en 2012 se asignaron recursos para la preparación de la respuesta a través de los rubros (i) 113 600 28 conservación mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional por contrato; (ii) 113 600 618 mejoramiento y mantenimiento de vías para la conectividad regional. nación; (iii) mejoramiento y mantenimiento y rehabilitación de la red vial primaria por corredores. nacional. Con relación al Plan de contingencias o emergencias, el Ministerio de Transporte en 2006 elaboró el "Plan de emergencias sectorial de accesibilidad y transporte". La condición se considera negativa en razón a que no se encontró una evidencia de una versión final del plan de contingencia elaborado en los últimos 5 años. En el caso de la infraestructura concesionada, y de acuerdo con los procedimientos que se establecen en el Manual Operativo de la Vía, la responsabilidad del manejo de las emergencias recae sobre el concesionario, quien de manera complementaria debe hacer un reporte a Invías, de las emergencias que se presenten en estas vías, con el fin de que esta entidad registre los eventos y su atención.

Código PR-2-11

Pregunta de respuesta cerrada
<p>11. <i>¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas ex-ante. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector agua y saneamiento, valorando que al menos en los últimos 5 años haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parciales o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p> <p>Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad coordinadora o rectora del sector agua y saneamiento haya recibido recursos para acciones para los preparativos para la respuesta en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.</p> <p>Se da importancia a la existencia de un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente que permita identificar la asignación de recursos públicos a los preparativos de respuesta ante desastres en el sector agricultura durante el último ejercicio o vigencia fiscal.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. A efectos de este indicador las entidades relevantes serían el rector y el regulador, pero no el proveedor ya que por éste se indaga en el indicador PR-2-13.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector de agua y saneamiento. 2. Consultar a los actores relevantes (rector y regulador) del sector respecto a si han elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, contingencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos. 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 4. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan nacional de emergencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) que se haya identificado. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de preparación de la respuesta de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar si existen recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a alguno de los actores relevantes (rector o al regulador) del sector de agua y saneamiento para actividades de preparativos para desastres. 3. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial de los actores relevantes (rector y regulador) del sector de agua y saneamiento. 4. De ser necesario, consultar con representantes del área de presupuesto o con la de gestión de riesgo de desastres de los actores relevantes (rector y regulador) dentro del sector de agua y saneamiento sobre la asignación de recursos, para el fin que indaga el presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-10	Si la normatividad del sector de agua y saneamiento define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que al menos uno de los actores relevantes del sector (rector o regulador) cuente con un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años. 2. Evidencia que constate la asignación de recursos para al menos uno de los actores relevantes del sector (rector o regulador) durante la última vigencia o ejercicio fiscal, para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta frente a fenómenos naturales peligrosos. 3. Adicionalmente, y para asegurar coherencia, las condiciones anteriores deberán cumplirse para la misma entidad sectorial. <p>Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector agua y saneamiento (a menos que dicho plan incluya un capítulo, anexo o equivalentes, que corresponda a un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones para el sector de agua y saneamiento) o mediante planes del sector agua y saneamiento que no tengan relación con fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>En el caso que el sector de agua y saneamiento sea parte o dependa de un ministerio con mandatos más amplios (Obras públicas, Ambiente, Salud, etc.), el plan de emergencia que permitirá validar la primera condición debe ser específico para agua y saneamiento y no el plan general del ministerio al cual está adscrito este subsector.</p>	

En el caso que haya normatividad nacional que lo contemple, la primera condición podrá ser verificada mediante un plan nacional sectorial de emergencia, elaborado en instancias de carácter interinstitucional tales como un Grupo Sectorial o las Mesas Nacionales de agua y saneamiento y emergencias, siempre y cuando dicho plan haya sido formalmente aprobado y apropiado por al menos uno de los actores relevantes (rector o regulador) del sector de agua y saneamiento.

Por otro lado, se considerará como evidencia válida para la segunda condición, la realización de actividades de preparativos para la respuesta, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En la justificación se deberá detallar los tipos de planes identificados, las actividades de preparativos para la respuesta planificadas o realizadas por el sector, así como la información sobre el monto total de recursos asignados para tales fines. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal utilizado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cuenta con el Manual de Protocolos para Situaciones de Emergencia o Desastre en Agua Potable y Aguas Residuales a Nivel Nacional, publicado en 2009, sin embargo, no se localizaron evidencias que permitan afirmar la asignación de recursos en la última vigencia fiscal para la preparación de la respuesta, razón por la cual se da por negativa la condición.

Código PR-2-12

Pregunta de respuesta cerrada
<p>12. <i>¿Cuenta el sector energía con un Plan Nacional de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años, y su entidad coordinadora o rectora ha recibido recursos para la preparación en caso de desastres en la última vigencia fiscal?</i></p>
Descripción general del indicador
<p>De las actividades propias del proceso de preparativos para la respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que los distintos sectores de la administración pública (ya sea nacional, central o federal, según el país de que se trate) asuman la responsabilidad de elaborar, de manera anticipada a la ocurrencia de desastres, planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente) que permitan la continuidad de la misión del sector en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en el sector energía (entendido como energía eléctrica), valorando que al menos en los últimos 5 años, haya producido y aprobado un plan nacional de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p> <p>Adicionalmente, este indicador reconoce la importancia que la entidad reguladora o rectora del sector energía haya recibido recursos para acciones para los preparativos para la respuesta en caso de desastres durante el último ejercicio o vigencia fiscal.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países podrían existir instituciones responsables de la rectoría y regulación (superintendencia), donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. A efectos de este indicador las entidades relevantes serían el rector y el regulador, pero no el proveedor ya que por éste se indaga en el indicador PR-2-14.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

<p><i>Respecto de los planes de emergencia o contingencia o continuidad de operaciones (o equivalente):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector energía eléctrica. 2. Consultar a los actores relevantes (rector y regulador) del sector respecto a si se ha elaborado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un plan nacional de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos. A efectos del indicador el subsector relevante es el que tenga la responsabilidad de la energía eléctrica. 3. De ser necesario, entrevistarse con personal de la entidad rectora de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 4. Comprobar la validez legal, vigencia y fecha de aprobación del plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) que se haya identificado. <p><i>Respecto de la asignación de recursos:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si existe un instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, etiquetador presupuestal o su equivalente para las acciones de preparación de la respuesta de desastres o de GRD que pueda haber sido empleado para asignar recursos en el presupuesto del sector. 2. Identificar si existen recursos asignados, en la última vigencia fiscal, a alguna de los actores relevantes (rector y regulador) del sector energía para actividades de preparativos para desastres en el área o subsector de energía eléctrica. 3. Revisar el presupuesto nacional, los informes presupuestales, informes de ejecución de gastos o documentos relacionados de carácter oficial de los actores relevantes (rector y regulador) del sector energía. 4. De ser necesario, consultar con representantes del área de presupuesto o con la de gestión de riesgo de desastres dentro de los actores relevantes (rector y regulador) del sector energía sobre la asignación de recursos, para el fin que indaga el presente indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1B-12	Si la normatividad del sector energía define la responsabilidad de realizar actividades de preparación para la respuesta a desastres, también podría mandar la elaboración del tipo de planes que indaga este indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador se deberán satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que al menos uno de los actores relevantes (rector y regulador) cuente con un plan nacional de emergencia, contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) vigente y que haya sido aprobado formalmente por la institución respectiva en los últimos 5 años. 2. Evidencia que constate la asignación de recursos para al menos uno de los actores relevantes (rector y regulador) del sector, durante la última vigencia o ejercicio fiscal, para la financiación de actividades de preparativos para la respuesta frente a fenómenos naturales peligrosos en el área o subsector de energía eléctrica. 3. Adicionalmente, y para asegurar coherencia, las condiciones anteriores deberán cumplirse para la misma entidad sectorial. <p>Si el plan identificado fue aprobado hace más de 5 años, aunque en su momento no fuera establecido un periodo de vigencia, no se considerará cumplido el indicador. Tampoco se logrará cumplir el presente indicador con la existencia de planes nacionales de emergencia (o equivalentes) en los cuales se cite al sector energía (a menos que dicho plan contenga un capítulo, anexo o equivalentes que corresponda a un plan nacional de emergencia o plan de continuidad de operaciones para el sector energía) o mediante planes del sector energía eléctrica de continuidad de emergencia que no tengan relación con fenómenos naturales peligrosos. Asimismo, no se cumplirá el indicador mediante planes preparados por empresas de generación, transmisión o prestación del servicio de energía eléctrica ya que por estos planes se indaga en el indicador PR-2-14.</p>	

En el caso de que el sector energía sea parte o dependa de un ministerio con mandatos más amplios (Obras públicas, Ambiente, Minas, Petróleo, etc.), el plan de emergencia que permitirá validar la primera condición debe ser específico para energía eléctrica y no necesariamente el plan general del ministerio al cual está adscrito este subsector.

Se considerará como evidencia que respalda la segunda condición, la realización de actividades de preparativos para la respuesta, tales como adquisición de equipamiento para la respuesta, simulacros, capacitaciones, elaboración de planes, campañas de comunicación y sensibilización, siempre y cuando pueda evidenciarse que las mismas hayan sido realizadas con recursos provenientes del presupuesto de dicha entidad.

En la justificación se deberá detallar el tipo de plan identificado, así como de las actividades de preparativos para la respuesta planificadas o realizadas por el sector, así como la información sobre el monto total de recursos asignados para tales fines. De otra parte, se debe incluir, en caso de existir, el detalle sobre la existencia del instrumento presupuestal, objeto de gasto, catálogo, o etiquetador presupuestal utilizado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Panamá 2014. El sector no cuenta con un plan de contingencia o continuidad de operaciones o equivalente que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años. No obstante, los contratos de concesión para proyectos de generación eléctrica establecen planes de emergencia. Adicionalmente, están en las normas de seguridad expresa (resolución de servicios públicos). El plan de emergencia aplica a toda la central hidroeléctrica y a toda su infraestructura. Se hace seguimiento a planes de emergencia en proyectos vulnerables (que tienen comunidad aguas abajo). Donde hay evidencias de crecidas y vertimiento se hace seguimiento anual a través de simulacros, que conllevan la posibilidad de revisar el plan de emergencia, el cual es dinámico. El plan de emergencias incluye alertas para proteger a la población. Cada alerta tiene un flujo gram de comunicación, que incluye a SINAPROC y a todas las entidades de emergencia. No obstante, no se encontró evidencia que el sector haya asignado recursos a la preparación de la respuesta, por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código PR-2-13

Pregunta de respuesta cerrada
<p>13. ¿La empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?</p>
Descripción general del indicador
<p>Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el raudo restablecimiento de esos servicios se considera esencial.</p> <p>De las actividades propias del proceso de preparativos y respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas <i>ex-ante</i>. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que las empresas que prestan servicios públicos recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito.</p> <p>Este indicador tiene interés particular en que la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país haya generado un plan de emergencia o contingencia, o bien un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.</p> <p>Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.</p> <p>De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.</p>
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida
<ol style="list-style-type: none"> Identificar la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector, del ente regulador del sector o de existir de la asociación nacional de empresas del rubro, entre otros. También, se puede acudir a criterio de experto. Analizar los informes de: gestión, auditoria, calificadoras de riesgo o similares de la empresa sobre la existencia de planes de emergencia, contingencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos. Consultar a los actores relevantes (rector y regulador) del sector respecto si la empresa prestadora de servicio público de agua y saneamiento cuenta con este tipo de planes. De ser necesario, consultar directamente con representantes de la empresa sobre la existencia de este tipo de planes.
Vínculo con otros indicadores

IR-2-13 RR-2-11	La empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento considerada para estos indicadores debe ser considerada para el presente indicador.
PR-1B-10 PR-1B-13	Si la normatividad identificada para validar estos indicadores establece que los prestadores de servicios deben formular los planes por los cuales indaga la pregunta, posiblemente los mismos existan y se encuentren disponibles.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador la empresa prestadora del servicio público de agua y saneamiento con la mayor cartera de usuarios en el país debe contar con al menos un plan de emergencia, contingencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>En razón a que este tipo de planes para este tipo de servicio público pueden ser considerados confidenciales, se permite verificar el indicador entregando copia de la portada del plan y el índice de su contenido.</p> <p>En la justificación se debe hacer mención del nombre de la empresa.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Argentina 2014. Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) cuenta con un Plan de Prevención y Emergencias que le permite actuar ante cualquier evento operativo en evidencia, de forma ordenada y clara, siendo su principal compromiso garantizar la calidad y continuidad del servicio, minimizando los eventuales riesgos e inconvenientes a los usuarios. El Plan de Prevención y Emergencias (PR-2-13a) incluye un Plan Integral, que contiene la Base Documental del Libro de Abordo y los Procedimientos relacionados actualizados. Con este Plan la empresa se encuentra preparada para reaccionar en caso de eventos (desastres, eventos operativos, etc.) en forma local y ordenada, con todos los contactos de las fuerzas de seguridad, organismos oficiales y sociedades civiles que permitan trabajar conjuntamente para salir de la emergencia de la mejor forma posible.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>Belize 2017. According to http://www.bws.bz/about-us/bws/ “Belize Water Services Limited is the water and sewerage utility for the country of Belize, serving the larger municipal areas of the country”. No evidence about any emergency, contingency or continuity operation plans in the event of disaster was found at: (i) web page of Belize Water Services Limited (http://www.bws.bz/); (ii) Belize Water Services (BWS) Limited Annual Report 2014- 2015; Important to mention that according to BWS Business Plan, Review Report 2015-2020 “Due to the nature and importance of the services offered, BWS must be adequately equipped to provide continuity of service, to properly respond to meet the needs of customers, to recover from emergency or disaster situations, and to provide technical assistance to rural system in restoration of these systems”. During the iGOPP application, BWS provided the PPT “Disaster Preparedness at Belize Water Services” that included information about the main aspects of its preparedness plan. The compliance of this indicator requires the existence of a plan formally approved. A ppt does not suffice. Therefore, the condition is negative.</p>	

Traducción:

Belice 2017. Según el sitio <http://www.bws.bz/about-us/bws/> "*Belize Water Services Limited es la empresa de servicios de agua y alcantarillado para el país de Belice, que atiende a las áreas municipales más grandes del país*". No se encontró evidencia sobre planes de operación de emergencia, contingencia o continuidad en caso de desastre en: (i) la página web de Belize Water Services Limited (<http://www.bws.bz/>); (ii) Informe anual limitado de Belize Water Services (BWS) 2014-2015. Es importante mencionar que, de acuerdo con el Plan de negocios de BWS, Informe de revisión 2015-2020: "*Debido a la naturaleza e importancia de los servicios ofrecidos, BWS debe estar adecuadamente equipado para proporcionar continuidad de servicio, para responder adecuadamente a las necesidades de los clientes, para recuperarse de situaciones de emergencia o desastre, y para proporcionar asistencia técnica al sistema rural en la restauración de estos sistemas*". Durante la aplicación de iGOPP, BWS proporcionó el PPT "*Preparación para desastres en los servicios de agua de Belice*" que incluía información sobre los aspectos principales de su plan de preparación. El cumplimiento de este indicador requiere la existencia de un plan aprobado formalmente. Un ppt no es suficiente. Por lo tanto, la condición es negativa.

Código PR-2-14**Pregunta de respuesta cerrada**

14. *¿La empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre? (NOTA: en caso de no ser la misma empresa, deben cumplirlo todas)*

Descripción general del indicador

Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el raudo restablecimiento de esos servicios se considera esencial.

De las actividades propias del proceso de preparativos y respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que las empresas que prestan servicios públicos recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito.

Este indicador tiene interés particular en que la empresa de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con la mayor facturación en el país haya generado un plan de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales peligrosos.

Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.

Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.

De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.

Si los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son llevados a cabo por empresas diferentes, este indicador requiere que cada empresa cuente con su plan respectivo.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar las empresas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica con la mayor facturación del país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector o del ente regulador del sector energía, entre otros. También, se puede acudir a criterio de experto.
2. Analizar los informes de: gestión, auditoría, calificadoras de riesgo o similares de las empresas identificadas sobre la existencia de planes de emergencia, contingencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.

<p>3- Consultar a los actores relevantes (rector y regulador) del sector eléctrico si las empresas de generación, transmisión y distribución de energía cuentan con este tipo de planes.</p> <p>4- De ser necesario, consultar directamente con representantes de las empresas de generación, transmisión y distribución de energía sobre la existencia de este tipo de planes.</p>	
Vínculo con otros indicadores	
IR-2-14 RR-2-12	La empresa de generación, transmisión y distribución de energía considerada para estos indicadores debe analizarse para el presente indicador.
PR-1B-12 PR-1B-15	Si la normatividad identificada para validar estos indicadores establece que los prestadores de servicios de energía deben formular los planes por los cuales indagan dichos indicadores, posiblemente los mismos existan y se encuentren disponibles.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador, la empresa de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país debe contar con al menos un plan de emergencia, contingencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>En razón a que este tipo de planes para este tipo de servicio público pueden ser considerados confidenciales, se permite verificar el indicador entregando copia de la portada del plan y el índice de su contenido.</p> <p>Si los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica son llevados a cabo por empresas diferentes, este indicador requiere que cada empresa cuente con su plan respectivo. En la justificación se debe hacer mención del nombre de la o las empresas.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>México 2014. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con planes de emergencia tanto para la infraestructura de generación eléctrica, como de transmisión y distribución. Existe un Plan Nacional para la Atención de Emergencias en Líneas de Transmisión (PF-2-14a), que es parte del Sistema de Respuesta Temprana ante el Impacto de Huracanes (SIRETIH). El SIRETIH es apoyado por los Grupos de Ayuda Mutua (GAM), los cuales buscan integrar las capacidades de los gobiernos locales y de las unidades de protección civil, del sector privado y de la CFE. También se cuenta con el Plan de Respuesta a Emergencias para la Distribución de Electricidad (PF-2-14b). Finalmente, existen planes de emergencia para sus plantas termoeléctricas, evidenciado a través del ejemplo del Procedimiento de Emergencia ante huracanes del Complejo Termoeléctrico “Presidente Adolfo López Mateos” (PF-2-14c). Además, la CFE ha creado planes especiales basados en escenarios; en primer lugar, para la infraestructura crucial (como hospitales y aeropuertos), y, en segundo lugar, para el área metropolitana de la Ciudad de México, debido a su concentración demográfica y al efecto potencialmente desestabilizador que pudiera tener un apagón.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
<p>República Dominicana 2014. Solo la empresa de generación hidroeléctrica (EGEHD) cuenta con Planes de Emergencia. Algunas de las empresas distribuidoras indicaron contar con estos planes, pero no se logró obtener copia de estos. A manera ilustrativa, según medios escritos, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDE Este) pone en marcha un plan de contingencia para la temporada ciclónica 2013, pero no se obtuvo acceso a este plan.</p>	

Código PR-2-15

Pregunta de respuesta cerrada

15. ¿La empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país, cuenta con un Plan de Emergencia o contingencia o continuidad de operaciones en caso de desastre?

Descripción general del indicador

Las empresas proveedoras de servicios públicos deben garantizar la prestación de sus servicios de forma continua y con calidad para todos los usuarios, incluso en situaciones de catástrofe natural. En el caso que un desastre afecte parcial o totalmente su funcionamiento, el raudo restablecimiento de esos servicios se considera esencial.

De las actividades propias del proceso de preparativos y respuesta, la planificación es una de las que más importancia tiene, pues además de ofrecer una guía respecto de un evento futuro probable, es un ejercicio reflexivo que permite alcanzar cierto grado de anticipación y el descubrimiento de debilidades y deficiencias que pueden ser resueltas *ex-ante*. La planificación se sirve de insumos valiosos como, por ejemplo, la información generada durante la evaluación de los riesgos, tanto el conocimiento sobre la vulnerabilidad como el de las amenazas; la información histórica de desastres pasados; los resultados de las acciones dirigidas a reducir los riesgos, etc. Por esa razón se considera como un factor de calidad de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en los países, que las empresas que prestan servicios públicos recojan esta responsabilidad de planear en su ámbito.

Este indicador tiene interés particular en que la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones (entendida como aquellas que presta servicios de telefonía fija y/o móvil) con la mayor cartera de usuarios en el país haya generado un plan de emergencia o contingencia, o bien, un plan de continuidad de operaciones, ante la ocurrencia de desastres provocados por fenómenos naturales peligrosos.

Un plan de emergencias generalmente define las funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno natural.

Por su parte, un plan de contingencia son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una institución, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo.

De otra parte, el objetivo del plan de continuidad de operaciones es analizar las vulnerabilidades de la institución para crear y validar planes logísticos para preparar a la organización para recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Identificar la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país. Esta identificación puede realizarse mediante la revisión de informes sobre el sector, del ente regulador del sector o de existir de la asociación nacional de empresas del rubro, entre otros. También, se puede acudir a criterio de experto.
2. Analizar los informes de: gestión, auditoría, calificadoras de riesgo o similares de la empresa sobre la existencia de planes de emergencia, de contingencia o de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.
3. Consultar a los actores relevantes (rector y regulador) del sector respecto si la empresa prestadora de servicio público de telecomunicaciones cuenta con este tipo de planes.
4. De ser necesario, consultar directamente con representantes de la empresa sobre la existencia de este tipo de planes.

Vínculo con otros indicadores	
IR-2-15 RR-2-13	La empresa de telecomunicaciones considerada para estos indicadores debe analizarse para el presente indicador.
PR-1B-11 PR-1B-14	Si la normatividad identificada para validar estos indicadores establece que los prestadores de servicios deben formular planes por los cuales indaga la pregunta, posiblemente los mismos existan y se encuentren disponibles.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador, la empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones con la mayor cartera de usuarios en el país debe contar con al menos un plan de emergencia, contingencia o plan de continuidad de operaciones (o equivalentes) aplicable a fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>En razón a que este tipo de planes para este tipo de servicio público pueden ser considerados confidenciales, se permite verificar el indicador entregando copia de la portada del plan y el índice de su contenido.</p> <p>En la justificación se debe hacer mención del nombre de la empresa.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Belize 2017. According to http://www.belizetelemedia.net/en/our-company/our-history “<i>Telecommunications in Belize dates back to 1902, when a manual line linked Belize City with Consejo Village in the Corozal District in the Northern region of the country. Since then BTL has grown from a small company to Belize’s largest nationalized telecommunications company, providing the latest in cutting edge technology by deploying and maintaining its high-quality networks</i>”. BTL mentioned in interviews that they are mandated to update annually the Emergency Plan by their own regulations, and they do so by taking into account recent events. Given it is a confidential document, BTL kindly shared with the iGOPP team the cover and index of the “<i>2016 BTL’s Disaster Management Plan – Revised Edition, June 2016</i>” (DP-2-15a), which was accepted as evidence.</p> <p>Traducción: Belice 2017. Según el sitio http://www.belizetelemedia.net/en/our-company/our-history “<i>Las telecomunicaciones en Belice se remontan a 1902, cuando una línea manual unía la ciudad de Belice con el Consejo Village en el distrito de Corozal en la región norte del país. Desde entonces, BTL ha pasado de ser una compañía pequeña a la compañía de telecomunicaciones nacionalizada más grande de Belice, proporcionando lo último en tecnología de punta mediante la implementación y el mantenimiento de sus redes de alta calidad</i>”. BTL mencionó en entrevista que tienen el mandato de actualizar anualmente el plan de emergencia según sus propias regulaciones, y lo hacen teniendo en cuenta los eventos recientes. Dado que es un documento confidencial, BTL compartió amablemente con el equipo de iGOPP la portada y el índice del “<i>Plan de gestión de desastres de BTL 2016 - Edición revisada, junio de 2016</i>” (DP-2-15a), que fue aceptado como evidencia.</p>	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

México 2014. Teléfonos de México (TELMEX) es la empresa de telecomunicaciones más grande del país con 15.4 millones de líneas fijas. De acuerdo con comunicados de prensa de la empresa se sabe que TELMEX cuenta con un Plan de Contingencia que *“... inicia desde el momento en que se detectan los fenómenos meteorológicos, que se monitorean para conocer su trayectoria y evolución, y determinar si representan un potencial riesgo para alguna zona, ya sea por su trayectoria o por su intensidad. En ese momento inicia la fase preventiva del Plan de Contingencia de la empresa. Una vez que ha pasado la emergencia y en caso de haber afectaciones en la red, el Plan de Contingencia entra en su fase de Recuperación, que incluye el monitoreo de daños, establecimiento de prioridades de atención y estimación de los tiempos de reparación”*. Se ubicó un comunicado de TELMEX de 2011, haciendo referencia a la activación del Plan de Contingencias. No obstante, no se ha podido acceder a los contenidos del Plan ni determinar las fechas de aprobación, vigencia y/o actualización de éste, por lo que se considera que no existe suficiente evidencia para darse por cumplido el indicador.

Código PR-2-16

Pregunta de respuesta cerrada	
16. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta, reconoce y establece un tratamiento diferencial para poblaciones vulnerables?	
Descripción general del indicador	
<p>El indicador reconoce como atributo de calidad del marco legal aplicable los procesos de preparativos y respuesta que se establezca de manera explícita reconocer un tratamiento diferencial para poblaciones vulnerables durante las actividades de respuesta a emergencias y desastres.</p> <p>Considerando la realidad y contexto de cada país, la normatividad podrá identificar diferentes poblaciones vulnerables, tales como: personas con discapacidad, mujeres gestantes y/o lactantes, niños y niñas menores de 3 años, pueblos originarios, población migrante, población desplazada, etc., para las cuales por su condición de vulnerabilidad se espera que se establezca un tratamiento diferencial en la respuesta a la emergencia.</p> <p>La vulnerabilidad debe ser una condición intrínseca de la persona o población a que se hace referencia, y no por su exposición al riesgo de desastre o afectación por una determinada situación de emergencia o desastre.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si la normatividad de GRD o de preparativos y respuesta establece o define poblaciones o grupos vulnerables. 2. Identificar en acciones ya realizadas de preparativos o de respuesta a desastres si se ha observado un tratamiento diferencial para poblaciones vulnerables. En caso positivo, verificar si dicha práctica ha obedecido a algún mandato legal o si simplemente se ha debido a una buena práctica. 3. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o de los procesos de preparativos y respuesta sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1	La normatividad revisada o usada para verificar estos indicadores podría contener la información sobre consideraciones sobre poblaciones vulnerables.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador, se deberán cumplir las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que normatividad de GRD o de preparativos y respuesta reconozca explícitamente quiénes son las poblaciones vulnerables. 2. Que los procesos de preparativos y respuesta establezcan un tratamiento diferencial para poblaciones vulnerables. <p>En la justificación del indicador deberá quedar registrado tanto las poblaciones vulnerables definidas en la normatividad identificada, así como el tratamiento diferencial considerado para las mismas.</p> <p>No se permitirá validar este indicador si la normatividad identificada define como población vulnerable aquella asentada en zonas de riesgo o afectadas por una determinada emergencia y desastre.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2020. Sí se cumple el indicador. La Ley 602 del 2014, Ley de Gestión de Riesgos, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en el Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia el 13 de noviembre de 2014 (**PR 2-16a**), es la normatividad que regula la preparación y respuesta en Bolivia, estableciendo para ese efecto en el Artículo 17, (Atribuciones del Ministerio de Defensa), inciso m) las de "*Formular lineamientos, directrices y coordinar las acciones para la prevención y preparación contingencial, atención de desastres, emergencias y recuperación temprana para su implementación en los ámbitos sectorial y territorial.*" Por otro lado, en su Artículo 5, en el que se disponen los principios que rigen a esa ley, se incluye en el numeral 7, el de Atención Prioritaria a Poblaciones Vulnerables, que "*La atención frente a desastres y/o emergencias, debe ser preferencial para mujeres gestantes, niñas, niños, adultos mayores, personas en condición de enfermedad inhabilitante y personas con capacidades diferentes*".

Siendo lo deseable que el Reglamento de esta Ley amplíe lo instruido en el principio de Atención Prioritaria a Poblaciones Vulnerables, contrario a eso, el Decreto Supremo 2342, que reglamenta la Ley 602, publicada en el Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia el 29 de abril de 2015, (**PR 2-16b**) solo incluye en el Artículo 32, fracción V, sobre los planes de emergencia nacional, que "*V. El contenido básico del Plan Nacional de Emergencias será: a. Determinación de los objetivos del Plan Nacional de Emergencia... h. Definición de parámetros de asistencia humanitaria con énfasis en los grupos más vulnerables*". Suficiente lo anterior, para dar por satisfechos los requisitos establecidos en el indicador, ya que sí existe un criterio que dispone la distinción de las personas en función de una característica o condición intrínseca que presente la persona o población señalada como vulnerable, además que igualmente se ordena en ese marco legal la priorización y diferenciación en la atención que se les preste durante la preparación y respuesta.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Perú 2020. No se cumple con el indicador. Se revisó el marco normativo de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Perú. La Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de febrero del 2011 no establece ninguna referencia a ese respecto. En el Decreto Supremo 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de mayo del 2011, se señala en el Artículo 32 los "subprocesos" de la fase de respuesta: "*Son Subprocesos de la Respuesta los siguientes: 32.7 Asistencia Humanitaria: Desarrollar y coordinar las acciones relacionadas con la atención que requieren las personas afectadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en especial, lo relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así como la protección a grupos vulnerables*". En el Decreto Supremo 034-2014-PCM, que dispone la aprobación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014-2021, se señala en sus apartados, 3.3 Caracterización de la población en riesgo de desastres 3.3.1 Estimación de la población vulnerable por exposición a los peligros originados por fenómenos naturales e inducidos por la acción humana, que: "*Es importante destacar que el PLANAGERD2013-2021, por su enfoque integral, holístico e inclusivo, considera que la población objetivo está conformada por la población total del país, que para el año base (2012) es de 30,135,875 habitantes, en la cual la población vulnerable antes descrita, así como aquella relativamente no vulnerable tendrán tratamiento diferenciados en función a las prioridades establecidas en el presente plan para los diferentes horizontes temporales y niveles espaciales (véase Gráfico NO06)*"

No obstante, a lo anterior, se considera que no se ha cumplido el indicador, toda vez que hace falta que se precisen cuáles son las personas que se adjetivan como "vulnerables", en el entendido que la vulnerabilidad debe ser una condición intrínseca de la persona o población a que se hace referencia, y no ser referida a su grado o tipo de exposición al riesgo de desastre o afectación por una determinada situación de emergencia o desastre. Consecuentemente, por otro lado, tampoco se señalan cuáles serán los tratamientos diferenciados que recibirán tales personas vulnerables durante la fase de preparativos y respuesta.

Código PR-3-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta establece mecanismos de participación de la sociedad civil en las unidades de gestión territorial?	
Descripción general del indicador	
<p>La participación de la sociedad civil en los procesos de preparativos y respuesta es importante para el desarrollo de las capacidades autónomas de parte de las unidades de gestión territorial.</p> <p>Por lo anterior, el indicador reconoce como atributo de calidad de la normatividad que regula los procesos de preparativos y respuesta que considere un articulado específico sobre la participación comunitaria, organizaciones sociales o no gubernamentales y del sector privado en los procesos de preparativos y respuesta en las unidades de gestión territorial. Por lo anterior, dicha participación se debe dar en el ámbito de una instancia formal definida en la normatividad, la cual podría corresponder a una plataforma, comisión, comité, u otra similar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si la normatividad de GRD o de preparativos y respuesta establece mecanismos de participación comunitaria, organizaciones sociales, no gubernamentales y sector privado en los procesos de preparativos y respuesta a desastres a nivel de las unidades de gestión territorial. 2. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o los procesos de preparativos y respuesta sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 MG-3-5 PR-1A-1 RC-3-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador la normatividad identificada debe establecer mecanismos (plataforma, comisión, comité, u otra similar) que considere la participación comunitaria, de organizaciones sociales o no gubernamentales explícitamente, tanto en los procesos de preparativos como en los de respuesta a desastres a nivel de las unidades de gestión territorial.</p> <p>Se debe tener presente que los mecanismos de participación identificados no deben ser solamente de carácter informativo para sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales, por lo cual los mismos necesariamente deben considerar el involucramiento de la población o sus organizaciones en la consulta, toma de decisión e incluso implementación de la política pública de preparativos y respuesta a desastre.</p> <p>Si en la normatividad se estableciera un mecanismo de participación de la sociedad civil para todos los procesos de la GDR, se deberá constatar en la justificación que los aspectos de preparativos y respuesta son parte integral de dichos procesos.</p> <p>Si la normatividad identificada no estableciera los mecanismos de participación de la sociedad civil para a las diferentes UGT existentes en el país (regiones, estados, provincias, departamentos, municipios, cantones, etc.), este indicador podrá validarse si al menos dichos mecanismos se establecen para el nivel municipal (distrital).</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. El Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado detalla en el Título III-Del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, Capítulo II -De los Organismos del Sistema, la composición y funciones de los organismos del Sistema Nacional, y establece en el Art. 24: "De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).- son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre." En el Manual del Comité de Gestión de Riesgos aprobado por Resolución No. SGR-038-2014 y publicado por la Secretaría de Gestión de Riesgos en septiembre de 2015 (PR-3-1a) se establece que *"independientemente de que se trate del ámbito cantonal, provincial o nacional los CGR/COE operan con dos mecanismos permanentes: a) El plenario, y b) Las mesas técnicas de trabajo (MTT). El Manual identifica en la conformación de los Plenarios y de las MTT de los distintos niveles territoriales la participación de representantes de ONGs y de la sociedad civil"* (Numeral 4.1. y Anexo II.).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N.º 113/2013-2014, Ley de Gestión de Riesgos, aprobada por la Asamblea el 13 de noviembre de 2014, establece en el Artículo 19. (DERECHOS Y OBLIGACIONES). I. Son derechos de las personas: *"b) Participar en las actividades que comprende la gestión de riesgos..."*, y en la sección II. Son obligaciones de las personas: *"c) Prestar colaboración a las acciones de atención de desastres y/o emergencias"*. Por otro lado, en la conformación de los Comités de Operaciones de Emergencia Departamentales y Municipales se incluye en su conformación a *"instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales a nivel departamental y municipal respectivamente, vinculadas con la atención de desastres y/o emergencias y la recuperación"* (Artículo 13). No obstante, no se explicita la participación de sociedad civil en las acciones de *"preparación para desastres"*.

Código PR-3-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre preparativos para desastre en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Al igual que en otros indicadores similares, interesa determinar si algún órgano nacional de control o fiscalización, auditoría superior, contraloría, etc. (o quien haga sus veces en el país) ha realizado alguna verificación o evaluación específica sobre los preparativos para la respuesta a desastres, al menos una vez en los últimos 5 años.</p> <p>No confundir esta evaluación a nivel de preparativos con el indicador PR 3-3, el cual se enfoca en la evaluación del desempeño del gobierno durante la respuesta tras un desastre.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 5. Identificar la entidad o las entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 6. Identificar la existencia de informes de evaluación o documentación similar, elaborada por la entidad nacional de control, sobre la normatividad nacional de preparativos para desastre en los últimos 5 años. 7. De ser necesario, consultar directamente con representantes la entidad nacional de control sobre si se ha realizado dicha evaluación 	
Vínculo con otros indicadores	
MG 3-3 IR 3-5 RR 3-2	Las evaluaciones identificadas para dichos indicadores podrían contener la información que permita verificar el presente indicador, siempre y cuando la evaluación en cuestión incluya en su alcance y contenido el tema específico los preparativos ante desastres (no sobre respuesta ante un desastre específico o ante un conjunto de desastres).
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador debe existir al menos un reporte de evaluación sobre el cumplimiento de la normatividad nacional de los preparativos para desastre en los últimos 5 años llevado a cabo por el ente nacional de control.</p> <p>No se logrará validar este indicador con evaluaciones realizadas por el ente nacional de control sobre las acciones de respuesta a desastres.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. En cumplimiento del Decreto 267 del 22 de febrero de 2000, por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, se dispone en Colombia de un Sistema Nacional de Control descentralizado, de manera que existen Delegaciones de la Contraloría en cada Departamento. En entrevista sostenida con la Contraloría General de la República el día 6 de septiembre de 2013, se informó que en varios departamentos se han realizado evaluaciones sobre el cumplimiento de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, presentándose un caso en el que la Contraloría General del departamento de Santander expidió la Función de Advertencia 004 el día 13 de marzo de 2013 (PR-3-2a) al Gobernador del Departamento y a todos los Alcaldes Municipales, y bajo el rubro de Asunto siguiente: *“Incentivar y tener activos los Planes de Contingencia y Planes de Emergencia con el fin de prevenir y atender los desastres naturales provocados por la ola invernal como deslizamientos, inundaciones entre otros e igualmente prevenir y controlar los incendios forestales”*, exhortándoles a que: *“Conformen y organicen el Consejo de gestión del riesgo y los comités... Crear, conformar y organizar el fondo de gestión del riesgo de desastres- Este fondo deben constituirlo como una cuenta especial con autonomía técnica y financiera, con el propósito de: invertir, destinar, y ejecutar recursos en la adopción de medidas de conocimiento, reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción”*. En otros departamentos, se han realizado este tipo de acciones durante el primer semestre de 2013, lo que ha generado 10 Funciones de Advertencia relacionadas con la gestión del riesgo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. De la información de transparencia revisada desde el año 2011, en la página web de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, relativa al literal sobre auditorías internas y gubernamentales, no se encontró que se haya realizado en los últimos 5 años una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en preparativos para desastres en los últimos 5 años.

Código PR-3-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno en la respuesta en alguna de las situaciones de desastre de los últimos 5 años declaradas por el nivel nacional o en que se solicitó ayuda internacional?	
Descripción general del indicador	
<p>Este tipo de evaluaciones ex post permite mejorar los procesos y estrategias nacionales de respuesta, en base a los resultados y lecciones aprendidas de dichas evaluaciones, en las cuales se pueden considerar el desempeño de una o más instituciones de los diferentes niveles de gobierno.</p> <p>Como desempeño del gobierno se refiere a cualquier institución pública involucrada en el manejo del desastre, y no necesariamente a la institución encargada de la coordinación de la respuesta a emergencias y desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la entidad o las entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 2. Identificar la existencia de informes, evaluaciones o documentación similar, elaborada por la entidad nacional de control, sobre la calidad de la respuesta en alguna emergencia o desastre ocurrido en los últimos 5 años declaradas por el nivel nacional o en que se solicitó ayuda internacional. 3. De ser necesario, consultar directamente con representantes la entidad nacional de control sobre si se ha realizado dicho tipo de evaluación. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-3-6 RC-3-3 RC-3-3 RC-3-4	Algunas de las situaciones de desastre declaradas que fueron consideradas para estos indicadores podrían haber sido sujetas a la evaluación por parte del ente nacional de control.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir al menos una evaluación ex post sobre el desempeño del gobierno o alguna institución pública en la respuesta en alguna situación de desastre declarado por el nivel nacional durante los últimos años. También sería aceptable si existiera tal evaluación para un desastre que no hubiera sido declarado oficialmente, pero para el que se solicitó ayuda internacional.</p> <p>En la justificación se debe hacer mención a la declaratoria de desastre y/o la solicitud de ayuda internacional, así como la o las instituciones consideradas en la evaluación.</p> <p>No se logrará verificar la condición si la evaluación es realizada por un ente de control sectorial o territorial.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, ha venido realizando especial seguimiento a los recursos asignados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD) a fin de atender los damnificados de la II temporada de lluvias 2011-2012, periodo desde Noviembre del 2011, por medio de visitas de especial seguimiento, pre-audiencias y dos Audiencias Especiales de Seguimiento celebradas los día 11 de Septiembre del 2012 y 08 de febrero del 2013. Se presenta el más reciente "Informe de Gestión del Riesgo Número 3", del 23 de septiembre de 2013 (PR-3-3a), que incluye una evaluación de la gestión de la UNGRD en las fases asistencia humanitaria, recuperación temprana y recuperación para el desarrollo. Adicionalmente, se cuenta con el "Informe Defensoral" de noviembre de 2011 (PR-3-3b) emitido por parte de la Defensoría del Pueblo donde se evalúa la respuesta del gobierno en el marco de la emergencia en Colombia por el Fenómeno La Niña de 2010-2011; (ver páginas 25 y 46 donde se evalúa la respuesta del gobierno en el contexto de esa emergencia).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó una auditoría que examina la gestión de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) en la ejecución del Plan de Control de Inundaciones. Este plan está esencialmente vinculado a la construcción de obras para regulación de cauces (presas, desagües). No obstante que el plan surge del problema de las inundaciones, el enfoque de la AGN está más relacionado con la verificación en el cumplimiento de las obras y no en la gestión del gobierno durante las inundaciones de la región pampeana y del litoral; por lo tanto, el indicador no se cumple para el componente de Preparativos para la Respuesta-PR (aunque sí en el componente de Reducción de Riesgos-RR).

Código PR-3-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿La entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta ha realizado al menos una evaluación sobre la calidad en sus procesos en los últimos 3 años?	
Descripción general del indicador	
El indicador reconoce como un atributo de calidad que la entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta realice de manera periódica autoevaluaciones y análisis sobre la calidad en sus procesos, ya que este tipo de evaluaciones es considerado un elemento que aproxima la implementación concreta de lo establecido en la normatividad. Este ejercicio de control interno no incluye aquellos relacionados con los procesos administrativos en general, sino con los procesos sustanciales de la preparación y la respuesta.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar la estructura del Sistema Nacional de GRD e identificar a la entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta. 2. Identificar la existencia de informes, evaluaciones o documentación similar, elaborado en los últimos 3 años, sobre la calidad de los procesos de preparación y la respuesta elaborada por la entidad nacional coordinadora. 3. De ser necesario, consultar directamente con representantes de la entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta, sobre si se ha realizado dicho tipo de evaluación. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-3-4	Si la evaluación utilizada para validar dicho indicador incluyera aspectos de preparativos y/o respuesta de desastre podría emplearse para verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir al menos un ejercicio de control interno sobre la calidad en los procesos de preparación o respuesta en los últimos 3 años por parte del ente nacional encargado de los mismos.</p> <p>Hay ocasiones en las que la evaluación de los procesos de preparación o respuesta forma parte de evaluaciones más amplias que involucren todos los procesos de la GRD. De ser así, en la justificación se deberá explicitar la parte del contenido del informe de evaluación de los procesos de GRD que corresponde específicamente a los preparativos y/o respuesta a desastre.</p> <p>Así mismo, se podrá sustentar el cumplimiento del indicador mediante evaluaciones interinstitucionales sobre el tema indicado, siempre y cuando son hayan sido lideradas por la entidad nacional encargada de coordinar la preparación y la respuesta.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Uruguay 2015. El SINAIE cuenta con un "*Diagnóstico del estado de la Reducción del riesgo de desastres*" (PR-4a) elaborado en diciembre de 2010 por la misión interagencial del Sistema de Naciones Unidas con el concurso de representantes de la CEPAL, OPS, PNUD, PNUMA, UNESCO y UNISDR. El Informe incluye un capítulo sobre los preparativos y respuesta.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, publicado en el Registro Oficial Suplemento 163 de 09-sep.-2014 (PR-3-4) establece en su Art 4 el "*Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional*". De conformidad con lo previsto en el artículo 138 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sector Público (LOSEP), la Secretaría de Gestión de Riesgos cuenta con un Comité de Gestión de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional, que tendrá la responsabilidad de "... *proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional*". Se consultó al Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional y confirmó que no se ha realizado una evaluación como la que plantea el indicador.

Código PR-3-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta, ha adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal?	
Descripción general del indicador	
Con el objetivo de mejorar la calidad de la respuesta humanitaria, este indicador valora la adopción formal de las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en casos de desastre (Proyecto Esfera), u otros estándares mínimos equivalentes, con el fin de establecer los requerimientos básicos de ayuda humanitaria post-desastre al menos en sectores críticos tales como: agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el país ha adoptado las Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en casos de desastre (Proyecto Esfera). 2. Indagar si en el país se han desarrollado estándares para la respuesta humanitaria en materia de agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal. 3. De ser necesario analizar si el país cuenta con una plataforma o estructura de coordinación sectorial para los preparativos y respuesta a desastres, identificando las instituciones encargadas de los temas afines a agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal. 4. Indagar si las instituciones encargadas de la coordinación de la respuesta humanitaria en los temas de agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal han desarrollado este tipo de estándares. 5. De ser necesario, consultar directamente con la entidad nacional encargada de la asistencia humanitaria sobre el cumplimiento del presente indicador. 6. Indagar sobre la existencia de un documento normativo que oficialice y de carácter legal de los estándares que hayan sido identificados. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-1A-1	La normatividad que establece la organización interinstitucional para los preparativos y respuesta podría ayudar a identificar a las instituciones responsables de la coordinación en los temas de agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta deben haber adoptado de manera oficial estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con la provisión de agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal.</p> <p>No se logrará validar el indicador con estándares que no cuenten con el respaldo oficial sobre su adopción, Tampoco se cumplirá si se han adoptado estándares solo para algunos de los cuatro temas mencionados o para otros diferentes a los citados. Sin embargo, lo anterior deberá quedar registrado en la justificación respectiva.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Ecuador 2016. De acuerdo con el informe oficial desarrollado y publicado en 2012 por la Secretaría de Gestión de Riesgos "Ecuador: Referencias básicas para la Gestión de Riesgos 2013-2014" (PR-3-5a), a partir del año 2011 la Secretaría de Gestión de Riesgos reconoce a Esfera como la base normativa para la respuesta humanitaria en el Ecuador. Las Normas Esfera se exponen en cuatro capítulos técnicos del Manual: abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene; seguridad alimentaria y nutrición; alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios; y acción de salud. De acuerdo con el Informe antes mencionado, Esfera inició su consolidación en el Ecuador a partir del segundo semestre de 2011, en el que se establece la Mesa Esfera de Ecuador, constituida por las ONG con responsabilidad de respuesta humanitaria, OIG, instituciones públicas y con liderazgo de la SGR. Adicionalmente, Ecuador ha desarrollado instrumentos nacionales complementarios a los internacionales, que permiten cumplir las normas mínimas de Esfera, como la Normativa para la aplicación de Estándares de Ayuda Humanitaria en Emergencias para Alimentos, Cocina, Hogar y Limpieza, publicado por la SGR en mayo 2011.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. No se localizaron evidencias que determinen que las entidades nacionales encargadas de la preparación y la respuesta hayan adoptado estándares de calidad en la asistencia humanitaria al menos en relación con agua, saneamiento, nutrición y albergue temporal. Asimismo, se efectuaron consultas y entrevistas con personal de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes corroboraron la inexistencia de dichos estándares.

Código PR-3-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la respuesta?	
Descripción general del indicador	
<p>El indicador reconoce como atributo de calidad que las actividades de respuesta a desastres consideren la participación comunitaria, de manera que la comunidad sea informada y considerada en la planificación y rendición de cuentas de las acciones de respuesta.</p> <p>Es así como algunas normativas, no necesariamente en la específica de GRD, protección civil o preparativos para la respuesta, establecen el principio de participación comunitaria, llegándose a definir los mecanismos específicos de participación de la sociedad civil; sin embargo, la puesta en práctica de estos principios no es siempre evidente. Por lo cual demostrar el funcionamiento de estos mecanismos es una aproximación al cumplimiento del principio de participación comunitaria pues a través de ellos la ciudadanía puede monitorear la respuesta de sus autoridades a los desastres que afectan a dicha ciudadanía.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las últimas 5 situaciones de desastres que han sido declaradas por el nivel nacional o en las que se ha solicitado ayuda internacional. 2. Indagar si la normatividad nacional existente tanto de GRD como la de participación comunitaria consideran mecanismos de participación y consulta comunitaria durante la respuesta a desastres. 3. Indagar si en el país existen procesos de fomento de la participación comunitaria en la respuesta a desastres, como son las mesas de concertación, diálogos nacionales, mesas de consulta u otros que pueden no estar establecidos en la normatividad pero que en la práctica son coordinados por la entidad rectora de la GRD u otras autoridades públicas como mecanismos de consulta. 4. Indagar si alguna de las últimas cinco situaciones de desastre declarado fue activado alguno de los mecanismos de participación identificados. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-3-1	Si existe normatividad que establece mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de preparativos y respuesta, ésta podría ser la base para concretar su participación.
RC-3-4	Si se verificó la participación comunitaria en la recuperación post desastre en alguna de las últimas 5 situaciones de desastres declaradas, dichos mecanismos podrían haberse iniciado en la fase de respuesta de los mismos eventos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir evidencia del funcionamiento de al menos un mecanismo de participación comunitaria, o de organizaciones sociales, no gubernamentales y/o sector privado en la respuesta en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.</p> <p>Se debe tener presente que los mecanismos de participación identificados no deben ser solamente de carácter informativo para sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales, por lo cual los mismos necesariamente deben considerar el involucramiento de la población o sus organizaciones en la consulta, toma de decisión e incluso implementación de la política pública de preparativos y respuesta a desastre.</p> <p>El mecanismo de participación comunitaria no necesariamente debe estar definido por normatividad de carácter nacional, pero sí debe haber sido coordinado por la entidad rectora de GRD u otra autoridad pública, lo cual debe quedar consignado en la justificación respectiva. Así mismo, en la justificación debe quedar registrada la declaratoria de desastre y/o la solicitud de ayuda internacional a la que esté vinculada el funcionamiento del mecanismo identificado.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Panamá 2014. Conforme al Informe sobre el Sistema de Preparativos y Respuesta Comunitario activado en las inundaciones del 2010 en la cuenca del Río Chucunaque (PR-3-6a) que afectaron gran parte del territorio nacional y llevaron a la declaración de emergencia nacional, se activó el sistema comunitario de preparativos y respuesta comunitario en la cuenca del río Chucunque, en la Provincia de Darién.

Ejemplo de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. El mecanismo previsto en la Ley de Protección Civil para la participación comunitaria en la respuesta son las Comisiones Comunales, pero no se ha podido encontrar evidencia de la activación de algunas de estas Comisiones Comunales. La última emergencia en todo el ámbito nacional fue la Depresión Tropical Doce E, que afectó El Salvador en 2011.

E. PLANIFICACIÓN DE LA RECUPERACIÓN (RC)

Código RC-1A-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe normatividad sobre recuperación post-desastre que define la responsabilidad del estado frente a este proceso?	
Descripción general del indicador	
<p>La recuperación post-desastre (RC), se refiere al proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la <i>rehabilitación</i> y <i>reconstrucción</i> de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, incluyendo la <i>reactivación</i> económica y social de la comunidad, bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre.</p> <p>La <i>rehabilitación</i> es la etapa de la recuperación que corresponde al restablecimiento temporal de los servicios vitales indispensables interrumpidos o deteriorados por el desastre. Es aquella durante la cual se continúa con la atención de la población, pero en la cual se restablece el funcionamiento de las líneas vitales, como la energía, el agua, las vías y las comunicaciones, y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos y víveres.</p> <p>La <i>reconstrucción</i> es la etapa de la recuperación que corresponde al proceso de restitución y refuerzo de las construcciones afectadas y de reparación del daño físico de las edificaciones, la infraestructura y los centros de producción después de un desastre.</p> <p>La <i>reactivación</i> es el proceso impulsado por el estado para restablecer los medios de vida, la dinámica productiva, la actividad comercial y la infraestructura necesaria vinculada a la actividad económica de una comunidad que ha sido afectada por la ocurrencia de un desastre.</p> <p>Este indicador busca que, dentro del marco legal del país, ya sea el propio de la GRD o uno específico para la recuperación post desastres, se establezca la responsabilidad del estado para atender la recuperación post-desastre.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<p>9. Analizar normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastres, para verificar si define responsabilidades del estado en materia de recuperación post-desastre.</p> <p>10. Si la normatividad identificada asigna responsabilidades generales para la GRD, se deberá identificar en la misma u otra normatividad de GRD la definición y/o el alcance de las acciones de GRD, a fin de verificar que la incluya la recuperación post-desastre como uno de los componentes de la GRD.</p> <p>11. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador.</p>	
Vínculo con otros indicadores	
<p>MG-1A-1 PR-1A-1</p>	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad nacional vigente que reconozca la responsabilidad del estado, frente a los efectos o consecuencias dejadas por los desastres, tanto para rehabilitar como para reconstruir los servicios básicos y la infraestructura pública y privada dañada o destruida por el desastre.

No se cumplirá este indicador si la normatividad existente en el país solamente hace referencia a la fase de rehabilitación (es decir, al restablecimiento de los servicios vitales indispensables interrumpidos o deteriorados por el desastre), sin considerar la otra fase del proceso, esto es, la reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos.

Así mismo, tampoco se podrá verificar el indicador con normatividad *ad hoc* que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).

De ser necesario, en la justificación deberán quedar registradas las definiciones que pueda incluir la normatividad utilizada para las acciones de rehabilitación, reconstrucción y/o recuperación.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. La Ley N°2615/05 que crea la Secretaria de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005 (RC-1A-1a), permite validar esta condición ya que en la misma se hace responsable al Estado mediante la Secretaria de Emergencia Nacional responsable de los procesos de rehabilitación y reconstrucción. Lo anterior queda explicitado dentro de los objetivos de la Secretaria de Emergencia Nacional, que se indica en el Art. 2 *"La S.E.N. tendrá por objeto primordial prevenir y contrarrestar los efectos de las emergencias y los desastres originados por los agentes de la naturaleza o de cualquier otro origen, como asimismo promover, coordinar y orientar las actividades de las instituciones públicas, departamentales, municipales y privadas destinadas a la prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de las comunidades afectadas por situaciones de emergencia o desastre."* Más adelante dentro de la misma ley, se reafirma en esta responsabilidad del Estado en la recuperación post-desastre, entregando facultades a la S.E.N y Ministerio de Hacienda en solicitar créditos internacionales para cubrir las necesidades de reconstrucción en caso de desastres, donde en el Art. 19 se indica que en situaciones de desastres *"Cuando se declare una Situación de Desastre, la S.E.N., conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, podrán solicitar empréstitos en el exterior para la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas, debiendo la misma tener la aprobación del Congreso Nacional, de acuerdo al Artículo 202 numeral 10) de la Constitución Nacional. La ejecución de los proyectos de rehabilitación y de reconstrucción se hará con criterios de prevención y como mínimo de mitigación, en coordinación con los ministerios del ramo."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Panamá 2014. La normativa de la GRD de Panamá (Ley del SINAPROC y su reglamento) y el Decreto que aprueba la PNGIRD no abordan de forma expresa la recuperación post-desastre. No se encontró otra normativa que abordara esta temática.

Código RC-1A-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Existe normatividad que establezca que la recuperación de medios de vida es un propósito de la recuperación post-desastre?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador reconoce como atributo de calidad sobre las normatividades de GRD o sobre recuperación post-desastre, cuando en alguna de ellas se le da relevancia de forma explícita a la recuperación de medios de vida (entiéndase formas de producción y de subsistencia de las comunidades afectadas).</p> <p>El espíritu de este indicador radica en el reconocimiento de que la recuperación post-desastre debe ir más allá que la simple restitución de las viviendas o infraestructura afectada, es decir, que sean considerada como objetivo del proceso de recuperación la normalización de la actividad económica de la población afectada por el desastre.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar si la normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastre establece que la recuperación de los medios de vida o la reactivación económica de la zona afectada es un propósito de la recuperación post-desastre. 2. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-7	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad nacional vigente que considere la recuperación de los medios de vida (o económica) como objetivo, propósito o meta explícita de la recuperación post-desastre.</p> <p>No se cumplirá este indicador con normatividad <i>ad hoc</i> que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
<p>Honduras 2014. REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS (SINAGER) - ACUERDO EJECUTIVO NÚMERO 032-2010 - (RC-1A-2a) “Art 50. DE LOS OBJETIVOS DE LA RECUPERACIÓN TEMPRANA. Los esfuerzos de recuperación temprana tienen tres objetivos generales: 1. Aumentar las operaciones de asistencia de emergencia permanentes a través del desarrollo a partir de los programas humanitarios, con el objetivo de fomentar la autosuficiencia de las poblaciones afectadas y ayudar a reconstruir los medios de vida.”.</p>	

Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Argentina 2014. No existe una norma a nivel general para todo tipo de desastres. Solo en materia de emergencias agropecuarias, la Ley 26509 de 2009 establece en el artículo 10 inciso (c) que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca debe: "<i>Asistir a los productores agropecuarios para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o el desastre agropecuario, recuperar la capacidad productiva de los sistemas de producción y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros</i>".</p>

Código RC-1A-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿Existe normatividad que establezca esquemas institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre?	
Descripción general del indicador	
<p>El indicador reconoce como atributo de calidad del marco legal aplicable de la GRD o de la normatividad sobre recuperación post-desastre que establezca esquemas institucionales permanentes para el manejo y coordinación de los procesos de la recuperación post desastre, sobre todo a nivel de la etapa de reconstrucción.</p> <p>Por el contrario, no se considera como buena práctica la creación de organizaciones <i>ad hoc</i> comúnmente establecidas a raíz del desastre, pero que en la mayoría de las ocasiones ejecutan su gestión sin dejar capacidad instalada que sirva para enfrentar los efectos o consecuencias de nuevos eventos catastróficos.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastre y verificar si establece esquemas y/o procedimientos institucionales para la coordinación de la reconstrucción post-desastre. 2. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-7	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad nacional vigente que establezca esquemas institucionales permanentes para la coordinación de la reconstrucción post-desastre, de manera que no haya necesidad de crear instituciones <i>ad hoc</i>. En la justificación deben quedar claramente explicitados los esquemas institucionales (planes, protocolos, marcos estratégicos, comités o similares) para la coordinación de la reconstrucción post-desastre. Alternativamente, también se acepta como respaldo al cumplimiento de este indicador que la normatividad indique al menos la institución que será responsable de establecer los mecanismos de coordinación para la recuperación post desastre.</p> <p>No se logrará verificar este indicador con normatividad <i>ad hoc</i> que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular, y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

República Dominicana 2014. La Ley No. 147-02, Sobre Gestión de Riesgos, del 22 de Septiembre del 2002 (RC-1A-1a), considera los esquemas de coordinación para la recuperación de la siguiente manera: "Artículo 24. *Plan de Acción Específico para la Atención y Recuperación Post-desastre. Declarada una situación de desastre y activado el Plan Nacional de Emergencias, la Comisión Nacional de Emergencia procederá a elaborar un plan de acción específico para el retorno a la normalidad, la recuperación y la reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria, y sus modificaciones*". También detalla en el Párrafo I, las instancias de coordinación interinstitucional correspondientes y los procedimientos a realizar cuando se trata de situaciones calificadas como regionales, provinciales o municipales.

Perú 2014. Se cumple el indicador, ya que la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobada el 18 de febrero de 2011(RC-1A-3a), indica en su Artículo 10 – "Atribuciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)" se destaca el literal j) *"En situaciones de desastres de gran magnitud, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, proponer al Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres el esquema institucional y financiero reconstrucción, sobre la base de un estudio de vulnerabilidades, daños y necesidades. Este esquema tiene presente las competencias de los gobiernos regionales y gobiernos locales, la existencia de capacidades de la sociedad civil organizada y el principio de subsidiaridad, según lo establecido en la presente ley."* De este modo esta ley establece que la PCM, podrá establecer los mecanismos de coordinación para la recuperación post desastre.

Por otra parte, el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo de 2011 (RC-1A-3b), establece en el artículo 36, numeral 1, como uno de los subprocesos de la reconstrucción *"Definir el esquema institucional, de gestión y de coordinación requerido para la reconstrucción con base en los lineamientos definidos en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Brasil 2017. A Lei 12.608 de 10 de abril de 2012 que Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, estabelece um regime de gestão financeira, atrelado a requisitos para disparar a declaração de desastre e aceder a recursos para recuperação de desastre. Tudo isto como um processo padrão repetido continuamente. Adicionalmente, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, publicada em 2007 estabelece no Capítulo VIII, "Programas" o seguinte: *"O Programa de Reconstrução - PRRC - é constituído pelos seguintes subprogramas e projetos: 4.1. Subprograma de Recuperação Socioeconômica de Áreas Afetadas por Desastres; 4.1.1. Projetos de Relocação Populacional e de Construção de Morádias para Populações de Baixa Renda; 4.1.2. Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas; 4.2. Subprograma de Reconstrução da Infraestrutura de Serviços Públicos Afetados por Desastres; 4.2.1. Projetos de Recuperação da Infraestrutura de Serviços Públicos"*. Ressaltamos que nem a Lei, nem a política referida anteriormente estabelecem a criação de esquemas institucionais específicos para a reconstrução pós-desastres.

Traducción:

Brasil 2017. La Ley 12.608, del 10 de abril de 2012, que instituye la Política Nacional de Protección y Defensa Civil, establece un régimen de gestión financiera, vinculado a los requisitos para activar la declaración de desastre y acceder a los recursos para la recuperación de desastres. Todo esto como un proceso estándar que se repite continuamente. Además, la Política Nacional de Protección Civil y Defensa, publicada en 2007, establece en el Capítulo VIII, "Programas", lo siguiente: *"El Programa de Reconstrucción - PRRC - consta de los siguientes subprogramas y proyectos: 4.1. Subprograma de Recuperación Socioeconómica de las Áreas Afectadas 4.1.1 Proyectos de reubicación de población y construcción de viviendas para poblaciones de bajos ingresos 4.1.2 Proyectos para la recuperación de áreas degradadas 4.2 Subprograma para la reconstrucción de servicios públicos afectados por desastres 4.2.1 Proyectos de recuperación de infraestructura de servicios públicos"*. Hacemos hincapié en que ni la ley ni la política a las que se hace referencia anteriormente establecen la creación de arreglos institucionales específicos para la reconstrucción posterior al desastre.

Código RC-1A-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿Existe normatividad que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Uno de los avances recientes de la GRD es la metodología llamada “estudio forense” de los desastres (FORIN, por sus siglas en inglés). Se trata de investigaciones sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes.</p> <p>Este indicador se deriva del reconocimiento que el riesgo es un factor que siempre tiene agentes causales (presiones dinámicas y causas de fondo), que pueden ser en gran medida la razón fundamental de las pérdidas. Normalmente los agentes causales de los desastres son de tipo político, social y económico, puesto que los eventos naturales actúan como “detonantes” de condiciones preexistentes que determinan el riesgo de desastres. En ese tenor, este indicador valora que, desde la normativa de la GRD o la que aplique a procesos de recuperación post-desastre, se establezca como obligatorio estudiar las causas de los desastres, de manera que durante la reconstrucción no se reproduzcan los riesgos preexistentes.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar si la normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastre mandata la realización de estudios para determinar las causas del desastre para orientar el proceso de reconstrucción de forma tal que no reproduzca los riesgos preexistentes. 2. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-2 RC-1A-3 RC-1A-7	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la realización de estudios de las causas de desastres, de tal forma que la información enriquezca los procesos de recuperación post-desastre con el fin de no reproducir los riesgos preexistentes.</p> <p>No se cumplirá el indicador si la normatividad identificada indica que la recuperación se realizará “reconstruyendo mejor” o reduciendo las vulnerabilidades existentes. Es necesario que la normatividad haga mención explícita a la realización de estudios sobre las causas del impacto de los desastres.</p> <p>Esto no debe confundirse con las evaluaciones sobre el impacto del desastre (por ejemplo, las que emplean las metodologías DALA o PDNA, de CEPAL y BM-UE-PNUD, respectivamente). En este indicador nos estamos refiriendo al análisis de los factores subyacentes del riesgo previo a la ocurrencia del desastre (por ejemplo: inadecuada ocupación del suelo, degradación ambiental, marginación y exclusión social, acelerado crecimiento urbano, falta de aplicación de normas de prevención en la construcción, etc.).</p> <p>No se logrará verificar este indicador, con normatividad ad hoc que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular, y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo de 2011 (RC-1A-4a), establece en el artículo 36 los subprocesos de la Reconstrucción, entre esos el numeral 36.4, sobre la evaluación de impacto, que consiste en *“Realizar la evaluación del impacto socioeconómico en el escenario de desastre, identificando presiones dinámicas y causas de fondo”*. Lo que se complementa con el subproceso de planificación participativa, que según el numeral 36.7 se dirige a *“Formular participativamente el plan integral de reconstrucción que no reproduce los riesgos preexistentes, definiendo el alcance, estrategias de implementación, actividades y responsabilidades, presupuestos e indicadores de seguimiento y evaluación”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. No se encontró evidencia en la Ley Nacional de Emergencias y prevención del riesgo (Ley N. 8488 del 27 de octubre de 2005), el Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo ni en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2010-2015 que ordene la formulación de planes de recuperación post-desastres que busquen explícitamente reducir la vulnerabilidad preexistente ni que establezca la realización de estudios sobre las causas de los desastres para orientar una recuperación que evite la restitución de las condiciones de riesgo preexistentes. Esto fue confirmado en entrevista con el jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Código RC-1A-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Existe normatividad que ordene la formulación de planes de recuperación post-desastre que explícitamente busquen reducir la vulnerabilidad preexistente?	
Descripción general del indicador	
<p>Los desastres dejan en evidencia los factores de riesgo que inciden en el nivel de los daños y pérdidas de las comunidades, servicios, infraestructura y medios de vida afectados por el evento adverso, por lo cual las acciones de recuperación post-desastre representan una oportunidad única para tomar medidas que reduzcan la exposición y vulnerabilidad que reduzcan el riesgo frente a futuros eventos similares, contribuyendo así a sentar las bases para un modelo de desarrollo resiliente frente a fenómenos naturales peligrosos.</p> <p>Es así como en procesos de recuperación post-desastres se puede decidir reubicar a zonas seguras poblaciones e infraestructuras afectadas, incorporar acciones de reducción de riesgo en la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura y medios de vida dañados, así como actualizar normativas de diseño, construcción, planes de desarrollo u ordenamiento territorial en bases al aprendizaje sobre las causas de los daños y pérdidas.</p> <p>Por lo anterior, se considera una buena práctica que la normatividad sobre la Gestión del Riesgo de Desastre o la vinculada con la recuperación post-desastre, establezca la formulación de planes de recuperación post-desastre que consideren de manera explícita reducir los niveles de vulnerabilidad pre existente.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar si la normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastre mandata la formulación de planes de recuperación o reconstrucción tras un desastre. 2. Verificar si en dicha normatividad se establece de forma explícita como objetivo o criterio de calidad de dichos planes la reducción de la vulnerabilidad preexistente. 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-2 RC-1A-3 RC-1A-4 RC-1A-7	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador deberán satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la normatividad nacional vigente mandate la formulación de planes de recuperación tras los desastres. 2. Que dicha normatividad establezca como objetivo explícito de dichos planes la reducción de la vulnerabilidad pre-existente. <p>No se respaldará el cumplimiento de este indicador con normatividad <i>ad hoc</i> que se haya generado en el marco de la reconstrucción tras un desastre en particular, y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada dicha reconstrucción (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 (RC-1A-5a), *"Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones"*, define en el Artículo 61, la obligación de formular un *"Plan de acción específico para la recuperación"*, y dispone que el mismo *"deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de seguridad territorial"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Uruguay 2015. Se revisó la Ley N° 18.621 del Sistema Nacional de Emergencias y no se encontró referencias a la condición que indaga este indicador. Cabe destacar que el artículo 9° de dicha Ley establece en el apéndice C que le compete a la Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención de Desastres: *"Proponer medidas o acciones para la reducción de la vulnerabilidad existente"*. No obstante, la referencia es general y no está vinculada al proceso de formulación de planes de recuperación post-desastre, a los que hace referencia el indicador.

Código RC-1A-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿Existe normatividad que ordene la formulación ex-ante de planes de recuperación post desastre?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca determinar un criterio de calidad de la normatividad en general a propósito de la recuperación post desastre (RC), específicamente el momento en el que se deberían formular los planes de recuperación. Normalmente los países, aún sin una legislación al respecto, solo se ocupan de la recuperación luego de ocurrido el desastre. Por otro lado, suele ser habitual la planificación de la respuesta humanitaria. Incluso hay países que definen escenarios de daños posibles y planifican el restablecimiento de servicios públicos críticos con base en dichos escenarios. Sin embargo, no es tan común la formulación de planes de recuperación antes de que haya ocurrido el desastre, de la forma que se hace con la respuesta humanitaria.</p> <p>Este indicador considera una buena práctica que se planifique la recuperación de forma anticipada, esto es, antes de que haya ocurrido el desastre. Es un atributo de calidad de la normatividad nacional que mandate la elaboración ex ante de planes de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de actores o entidades responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastres, para verificar que en la misma se establece la formulación de planes de recuperación o reconstrucción. 2. Verificar si esta formulación se debe realizar de forma <i>ex-ante</i> (al menos a un nivel básico o general de la planificación). 3. De ser necesario entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-2 RC-1A-3 RC-1A-4 RC-1A-5 RC-1A-7	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe ordenar la formulación ex-ante de los planes de recuperación, al menos a un nivel general o esquemático (planificación de actividades previas que podrían realizarse antes de que se verifique la condición de desastre).

No se podrá respaldar el cumplimiento del indicador con normatividad *ad hoc* que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular, y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada dicha reconstrucción (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. Este concepto se encuentra incorporado en los Planes de Continuidad de Operaciones que la Ley General de Protección Civil, publicada el 22 de junio de 2012 (RC-1A-6a) define en su artículo 3, fracción XII, como *“... Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros...”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. La normatividad en la materia no especifica un esquema de plan ex ante de recuperación post desastre. El Decreto 1250/1999 establece que el Gabinete de Emergencias (GADE) debe: 6.3 *"Formular las políticas y normas relativas a la mitigación, respuesta y recuperación de todo tipo de emergencias"*. 6.6 *"Aprobar los planes de mitigación, respuesta y recuperación y todo proyecto o programa que se desarrolle en el ámbito del SIFEM"*. No obstante que se habla de planes de recuperación, la norma no especifica que éstos deben formularse de forma "ex ante", por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código RC-1A-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, durante la transición entre la respuesta y la reconstrucción?	
Descripción general del indicador	
<p>Al igual que los indicadores precedentes, aquí se propone un criterio de calidad de la normatividad de la GRD o la vinculada con la recuperación post desastre, específicamente relacionado con la definición de la duración de la etapa de recuperación de los medios de vida, que generalmente se realiza durante la transición entre la respuesta humanitaria y la reconstrucción de la infraestructura.</p> <p>Su importancia radica en que, si la etapa de recuperación de los medios de vida afectados o destruidos no se atiende a su debido momento, las familias afectadas por el desastre pueden sufrir una descapitalización (por ende, un empobrecimiento) y esto puede conducir, eventualmente, a una migración forzosa hacia zonas de mayor actividad económica. Esta migración no siempre cumple las expectativas de quien migra, resultando además en una afectación del tejido social de la zona impactada por el desastre, además de sobrecargar la prestación de servicios públicos en los lugares receptores de dicha migración.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastre y verificar si establece o menciona la recuperación de los medios de vida como parte integrante del proceso general de recuperación post desastre. 2. Analizar si dicha normatividad establece que se deben definir umbrales razonables de tiempo (máximos) para la ejecución de los planes de recuperación (estos pueden variar dependiendo de la complejidad del escenario de desastre). 3. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-2 RC-1A-3 RC-1A-4 RC-1A-5 RC-1A-6	La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe establecer de forma explícita que la recuperación de los medios de vida es parte integral del proceso general de recuperación post desastre. Es decir, a efectos de este indicador no se asumirá que la recuperación de los medios de vida forma parte de la recuperación post desastre. Se requiere una mención explícita en la normatividad. 2. Adicionalmente debe satisfacer una de las siguientes condiciones: <ol style="list-style-type: none"> a) Establece la duración máxima de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida. b) Establece que los planes de recuperación deberán definir dicha duración. 	

No se cumplirá el indicador con normatividad *ad hoc* que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular, y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Parágrafo único del Artículo 64 (Retorno a la normalidad), de la Ley 1523 (ley de GRD) de 2012, establece que *"El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de desastre, en estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial, para la gestión del riesgo, según el caso. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o calamidad pública"*. No obstante, a lo anterior, la norma no establece de forma expresa que el Plan de acción específico debe definir la duración de la etapa en que se apoyará el restablecimiento de los medios de vida, y por lo tanto el indicador no se cumple.

Código RC-1A-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿Existe normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Al igual que el indicador anterior, en este caso interesa establecer si la normatividad de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), la que regula el proceso de recuperación post desastre (RC) u otra afín existente en el país, prevé que los planes de recuperación definan la duración del periodo de reparación o reconstrucción de las viviendas afectadas que son responsabilidad fiscal del estado. Usualmente en la región de América Latina y el Caribe, el estado se hace cargo total o parcialmente del costo de la reconstrucción de las viviendas afectadas en los estratos socioeconómicos más pobres.</p> <p>La determinación de metas asociadas a plazos razonables dentro de los planes de reconstrucción se considera una buena práctica que reduce la incertidumbre en la población afectada y mejora la imagen y el desempeño del estado frente a este proceso de RC.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Analizar la normatividad vigente en materia de GRD u otra relacionada con la recuperación post-desastre y verificar si establece que en los planes de recuperación se deba definir un plazo razonable (máximo) para la etapa de reparación o reconstrucción de las viviendas. 2. De ser necesario, entrevistarse con representantes del ente rector de la GRD o sector vivienda para indagar sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1 PR-1A-1 RC-1A-1 RC-1A-2 RC-1A-3 RC-1A-4 RC-1A-5 RC-1A-6 RC-1A-7	<p>La normatividad identificada para verificar estos indicadores podría contener consideraciones que orienten o permitan cumplir la consideración que se indaga.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador la normatividad identificada debe establecer que los planes de recuperación deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas que sean de responsabilidad fiscal del Estado.</p> <p>No se cumplirá este indicador con normatividad <i>ad hoc</i> que se haya generado para realizar una reconstrucción tras un desastre en particular, y que se prevé que no continuará vigente luego de haber sido ejecutada la recuperación (por ejemplo, cuando se crean fondos o programas especiales de reconstrucción temporales).</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. Los Lineamientos Operativos del Fondo de Desastres Naturales, LOFONDEN (RC-1A-8a) publicados en 2010, establecen que en las tareas de reconstrucción habrá calendarios de obras y acciones (artículo 20), incluso antes de autorizarse los recursos. En el Anexo IV “Atención de la vivienda”, el numeral 1, “De los alcances”, indica que, una vez superada la fase de emergencia, las acciones de atención a la vivienda se realizarán en dos etapas, de atención inmediata o de reconstrucción. El numeral 2. Consideraciones específicas de las modalidades, específica que, de acuerdo con la magnitud de afectación de las viviendas, se clasificarán en cuatro niveles de daños, y en el numeral 3.7 define las modalidades de terminación de los apoyos para las viviendas. Finalmente, en el numeral 7 del Anexo IV en el punto 7.5 precisa que sólo se podrá modificar los calendarios de obras en dos ocasiones.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. No se encontró evidencia de normatividad que establece que los planes de recuperación post desastre deben definir la duración del periodo en que se deben reparar o reconstruir las viviendas afectadas. Se revisó la Ley No. 863 de Reforma a la Ley No. 337 “Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres”, publicada en La Gaceta del lunes 18 de Mayo de 2014; Ley No. 337, Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED), aprobada el 8 de Marzo del 2000, publicada en La Gaceta No. 70 del 7 de Abril del 2000; Decreto 98-2000, Reglamento de asignación de funciones del SINAPRED a las instituciones del estado. Por su parte el Marco Nacional de Recuperación Post-Desastre, publicado por SINAPRED en junio 2014, en su título 7. Marco general de recuperación y ejes transversales, sub-título 7.1 Aspectos conceptuales (página 14), establece que: “La recuperación post desastres puede y debe ser planificada... La preparación de la recuperación implica: ...Preparar a la institucionalidad y a la ciudadanía: Generando capacidades mediante procesos de formación, sensibilización, prácticas y políticas de actuación;... insertando en la práctica cotidiana del sector económico, la institucionalidad y la comunidad las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de las actividades, la rápida recuperación de las rutinas y las facilidades para el restablecimiento de la normalidad en el menor tiempo posible...” El título 8. Establecimiento de contenidos sectoriales, sub título 8.3 Área de hábitat y vivienda (página 32, define que: “...La rehabilitación / reconstrucción de la vivienda es un elemento clave para cerrar la brecha entre el socorro de emergencia y la recuperación sostenible... la recuperación temprana en este sector se enfoca en apoyar los esfuerzos de reconstrucción espontáneos de la población, cubrir las necesidades de vivienda transicional y sentar las bases para la recuperación a largo plazo del sector vivienda” Se presentan tres fases (diagrama de pág. 33): Fase Humanitaria, Recuperación Temprana, y Recuperación a largo plazo. El Marco Nacional de Recuperación Post-Desastre no está normado y el propio documento, en su párrafo tercero, resalta que: “La presente propuesta de marco de recuperación, solamente posee carácter indicativo; es decir, que entrega a los actores político-institucionales, un conjunto de lineamientos generales con base en los cuales pueden sustentar la consolidación y desarrollo de las medidas e instrumentos necesarios para la planificación de las acciones de recuperación en Nicaragua”.

Código RC-1B-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector ambiental establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Identificar normatividad ambiental vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 5. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación, antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 6. De ser necesario, consultar con representantes del sector ambiental sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8 RR 1B-6 RR-1B-7 PR-1B-3	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-2-1	En el caso de verificar que el ministerio de ambiente cuente con un plan ex ante de recuperación post desastre, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Honduras 2014. En el ACUERDO NUMERO 109-93 - REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DEL AMBIENTE, publicado en La Gaceta el 5 de Febrero de 1994 (RC-1B-1a), señala en el Artículo 78 que *“Es obligación de la Secretaría de Ambiente participar conjuntamente con la Comisión Permanente de Contingencias en la planificación para la prevención, mitigación, atención y rehabilitación de los desastres naturales”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. La Ley de Medio Ambiente, creada por Decreto Legislativo N° 233, de fecha 02/03/1998, publicado en el Diario Oficial N° 79, Tomo 339, de fecha 04/05/1998, establece el deber que tiene el Estado y sus Instituciones de adoptar medidas para prevenir, evitar y controlar desastres ambientales –Art. 53-, y que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con el Comité de Emergencia Nacional, elaborará el Plan Nacional de Prevención y Contingencia Ambiental, siendo éste último el que lo ejecutará –Art. 55-; sin embargo, a la fecha el referido Plan no ha sido elaborado y por lo tanto no se ha podido corroborar el alcance real del mandato establecido por dicho articulado. Por otro lado, la demás normativa contenida en la ley tampoco define puntualmente la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias. Por lo antes expuesto, el indicador no se cumple.

Código RC-1B-2

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La normatividad del sector agricultura, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector agricultura establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad del sector agricultura vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 2. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación, antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector agricultura sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-9 PR-1B-4 RR-1B-8	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RC-2-2	En el caso de verificar que el ministerio de agricultura cuente con un plan ex ante de recuperación post desastre, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. La Resolución No. 34-11 del Ministerio de Agricultura, del 13 de junio de 2011 (PR-1B-4a) establece en su Artículo 5 *"La misión del departamento será orientar la gestión y coordinar con la entidad del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, para aplicar la prevención y reducción de los riesgos y facilitar la organización de los preparativos para la atención de emergencias, la rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre, incorporando la Gestión de Riesgo a desastre en la planificación del sector agropecuario dominicano..."*.

Argentina 2014. La Ley No. 26.509, que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Emergencia Agropecuaria), promulgada el 27 de agosto del 2009 (RC-1B-2a), precisa en el Artículo 12 que *"Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las situaciones de emergencias y desastres agropecuarios contemplarán: 1. Gastos de inversión y funcionamiento de los entes públicos que desarrollarán los sistemas de prevención, ordenamiento de tierras, medidas de mitigación y preparación de los productores agropecuarios para reducir la vulnerabilidad; 2. Gastos de inversión y funcionamiento de los beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor riesgo de posibles emergencias y/o desastres agropecuarios. 3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres agropecuarios desarrollados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos"*. Y en el Artículo 13 se distingue aquellos recursos dirigidos a los entes públicos: *"Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención y los recursos del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las situaciones de emergencias y desastres agropecuarios para entes públicos serán: a) Subsidios por única vez para la elaboración de proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones de preparación para la posible ocurrencia de eventos adversos; b) Subsidios para gastos de funcionamiento de los sistemas de alerta conformados durante los primeros tres (3) años"*. Por otra parte, el Fondo prevé la utilización de mecanismos financieros y crediticios para asistir a los productores damnificados y recuperar la producción en caso de desastre. Por su parte el Artículo 22, numeral 1.b) establece el *"Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos que permitan lograr la continuidad de las explotaciones, la recuperación de las economías de los productores afectados, y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25%) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un cincuenta por ciento (50%) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza para estas operaciones conforme con las normas que establezcan las instituciones bancarias; 2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia"*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. Se cuenta con la Ley 69 de 1993, *"por la cual se establece el Seguro Agropecuario en Colombia, se crea el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios y se dictan otras disposiciones en materia de crédito agropecuario"*. Esta normatividad, si bien contribuye a la recuperación post desastre, está ya considerada en el componente de PF del iGOPP (ver PF-2-15). En RC se ha indagado por normatividad que defina la responsabilidad de realizar actividad de preparación de la recuperación del sector. Al momento de realizar la aplicación, no se encontró evidencia de dicha normativa.

Código RC-1B-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿La normatividad del sector salud, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector salud establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad del sector salud vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 2. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación, antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector salud, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-10 PR-1B-5 IR-1B-9	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-2-3	En el caso de verificar que el ministerio de salud cuente con un plan ex ante de recuperación, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandatado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. La Política Nacional de Salud, aprobada por Acuerdo Ejecutivo No.126 de fecha 10/Febrero/2010, Publicado en D.O. No.33, Tomo No.386 de fecha 17/Febrero/2010) (RC-1B-4), en la Estrategia 13: Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres, instruye en la Línea de acción 13.1 que se debe: *“Formular la política, planes y programas de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana, para reducir el impacto de los desastres sobre la salud pública, con un enfoque integral con relación a los daños y la etiología de todas y cada una de las emergencias o desastres posibles en el país.”* A partir de lo anterior, en el año 2011 el Ministerio de Salud, emite los Lineamientos Técnicos para la Preparación, Respuesta y Rehabilitación de los Servicios Básicos de Salud en Emergencias y Desastres, siendo el objetivo general del documento: *“Definir los mecanismos y procedimientos de preparación y de respuesta rápida y efectiva para garantizar una asistencia médica, sanitaria y de rehabilitación a la población, al presentarse un evento de origen natural y/o antrópico con la integración, coordinación y gestión de las instituciones que conforman la CISALUD y la CTSS, que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres en conjunto con la comunidad.”*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. No se encontró evidencia de que el sector salud cuenta con una normativa específica que defina responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias. La Ley No. 423, Ley General de Salud, aprobada el 14 de Marzo del 2002, en su Artículo 12 establece que para los efectos de la Ley se entienden por acciones de salud, las intervenciones dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de las enfermedades en beneficio de las personas y de la sociedad en general, a promover, proteger, recuperar y rehabilitar la salud de las personas y la comunidad. El Artículo 397 establece que *“En el caso de desastres, el MINSA, por medio de los Consejos Departamentales de Salud, Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica de Salud, Consejos Municipales de Salud y del Programa de Emergencias y Desastres, coordinará el cumplimiento de las funciones previstas en el Reglamento de Asignación de Funciones del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres a las Instituciones del Estado”*. Las funciones asignadas en este reglamento al Ministerio de Salud no definen la responsabilidad de realizar actividades de preparación (ex-ante) de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias.

Código RC-1B-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿La normatividad del sector vivienda, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector vivienda establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad del sector salud vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 2. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación, antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector salud sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RC-1B-4 PR-1B-6 RR-1B-10	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-2-4	En el caso de verificar que el ministerio de salud cuente con un plan ex ante de recuperación post desastre, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. La Ley de Vivienda, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 2006 (RC-1B-4a) establece en su Artículo 82: *"La Comisión promoverá la celebración de acuerdos y convenios con productores de materiales básicos para la construcción de vivienda a precios preferenciales para: I. La atención a programas de vivienda emergente para atención a damnificados, derivados de Desastres..."*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El sector cuenta con definición de normativa para procesos de preparación para desastres, pero sólo referidos de forma explícita en el tema de agua potable y saneamiento básico (APSB) que hacen parte de las competencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para temas de recuperación no se han encontrado evidencias normativas que respalden el cumplimiento de este indicador.

Código RC-1B-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿La normatividad del sector educación, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector educación establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad del sector educación vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 2. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector educación sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-12 PR-1B-7 RR-1B-11	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RC-2-5	En el caso de verificar que el ministerio de salud cuente con un plan ex ante de recuperación post desastre, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada antes de la ocurrencia del desastre.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural aprobado en el 2012 (RC-1B-5a), en el Art. 92. sobre los requisitos que deben presentarse para otorgar la autorización de creación y funcionamiento de las instituciones educativas, determina: *"3. Plan de reducción de riesgos, en el cual consten las acciones para enfrentar situaciones de emergencia o desastre"*. Con acuerdo Ministerial (Ministerio de Educación) No ME-2016-00096-A del 14 de octubre de 2016 (RC-1B-5b), se expide la Política integral de seguridad escolar en el sistema nacional de educación, cuyos textos aún no han sido publicados. Son objetivos de la citada política: *"prevención y reducción de riesgos integrales en la institución educativa; preparación para enfrentar emergencias; desarrollo progresivo de las capacidades de autoprotección de los estudiantes; y, mejora continua de los procesos de seguridad escolar"*. El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación aprobado en el 2012 (RC-1B-5c), especifica dentro de la misión de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, que es parte de la Subsecretaría de Administración Escolar lo siguiente: *"prepararse para enfrentar emergencias y desastres y para la recuperación post desastre, asegurando la continuidad de los procesos educativos"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. No se localizó evidencia de que exista normatividad del sector educación (leyes, políticas, reglamentos, resoluciones) que defina la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias. Se consultó la página web del Ministerio de Educación y se revisó la Ley de Educación Nacional (Decreto Legislativo 12 - 91) y varios decretos que conforman el marco normativo del sector.

Código RC-1B-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿La normatividad del sector turismo, define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector turismo establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad del sector turismo vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 2. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector turismo sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-13 PR-1B-8 RR-1B-12	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RC-2-6	En el caso de verificar que el ministerio de turismo (o entidad equivalente) cuente con un plan ex ante de recuperación, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. No se encontraron evidencias explícitas sobre el cumplimiento de esta condición. A nivel de la Ley General de Turismo, se dedican breves fracciones de los artículos 4, 9 y 10 para fijar las responsabilidades generales, que podrían interpretarse que engloban actividades de planificación de la recuperación, pero que al no ser explícitas no son suficientes para una valoración positiva del indicador.

Código RC-1B-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿La normatividad del sector transporte (o sector equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector transporte, entendido como obras viales, establezca en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar normatividad del sector transporte (entendido como obras viales) vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 2. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 3. De ser necesario, consultar con representantes del sector transporte, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14 PR-1B-9 RR-1B-13	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RC-2-7	En el caso de verificar que el ministerio de transporte (o entidad equivalente) cuente con un plan ex ante de recuperación, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad del sector transporte (entendido como obras viales) identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.</p> <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada antes de la ocurrencia del desastre.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. El Decreto 2056 del 24 de julio de 2003, por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, Inviás, y se dictan otras disposiciones (RC-1B-7a), establece en el Artículo 2, Funciones del Instituto Nacional de Vías, numeral 2.2, la de *"elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su competencia"*, y en el numeral 2.5 la de *"asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten"*. Finalmente, el Artículo 11, Oficina de Prevención y Atención de Emergencias, enumera una serie de responsabilidades derivadas del SNPAD (ahora SNGRD), entre ellas la de *"administrar integralmente los procesos de atención y prevención de emergencias"*. En cumplimiento del Decreto 2056 de 2003, el Inviás cuenta con procedimiento y protocolos establecidos "ex ante" para la recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de desastres en época de lluvias (el principal riesgo que afecta al sector son los deslizamientos de tierra y las inundaciones).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. Si bien, en el acuerdo 0569 de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, establece la creación de la Unidad de Gestión Integral del Riesgo y Cambio Climático (UGIR-CC), publicado el 7 de Noviembre de 2013 en La Gaceta, entre las funciones que ahí se describen no se considera de manera explícita la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación ex ante.

Código RC-1B-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿La normatividad del sector agua y saneamiento (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector agua y saneamiento establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de agua y saneamiento pueden realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de actividades de planificación ex ante para la recuperación, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector de agua y saneamiento. 2. Identificar normatividad del sector de agua y saneamiento vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 3. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector agua y saneamiento, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14 PR-1B-9 RR-1B-14	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RC-2-8	En el caso de verificar que el ente rector o coordinador del sector agua y saneamiento cuente con un plan ex ante de recuperación, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandatado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.

En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera *ex-ante*, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. La Ley Nº 1614/2000 - General del marco regulatorio y tarifario del servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay, aprobada el 2 de noviembre de 2000 y publicada en la Gaceta Nº 214 del 7 de noviembre de 2000 en el cual se asigna al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) elaborar los reglamentos necesarios para que los prestadores de agua potable y saneamiento provean sus servicios con la calidad y cantidad necesarias, y que su precio sea justo y sostenible. Y en base a las atribuciones que establece esta ley, es que el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN) en el año 2003, establece el Reglamento de Calidad en la Prestación del Servicio - Concesionarios (RC-1B-8a), el cual considera que las empresas prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento deben elaborar un Programa Integral de Contingencias. Si bien no se hace mención explícita del término de recuperación dentro del contenido del plan a desarrollar, las acciones descritas que debe contener el plan considera actividades puramente de recuperación como se indica en su Art. 117 que indica *“El Prestador deberá realizar un análisis de vulnerabilidad de los sistemas, en previsión de situaciones de emergencia causadas por sequías, deslizamientos, inundaciones, contaminaciones accidentales de origen físico, químico o biológico, interrupciones imprevistas, colapso de las estructuras, o instalaciones de los sistemas u otras contingencias que pudieran interrumpir la prestación de los servicios, o alterar los estándares de calidad de los mismos. Tomando como base el resultado del análisis, el Prestador deberá preparar un Programa Integral de Contingencia que contemple acciones tales como: (i) utilización de fuentes alternativas para el suministro de agua potable; (ii) mecanismos alternativos para facilitar el transporte y la distribución a los Usuarios; (iii) producción y tratamiento de emergencia; (iv) sistemas de información y difusión a la comunidad (v) esquemas de reparaciones y reposiciones urgentes; (vi) medidas que permitan controlar rápidamente la situación y mitigar sus efectos en general. El Programa de Contingencia deberá definir claramente, responsabilidades, procedimientos a seguir, medios a utilizar, coordinación institucional, recursos humanos y técnicos y esquema de organización necesario para enfrentar la emergencia”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. La Ley de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, aprobada por Decreto Legislativo Nº 341 de fecha 17/10/1961, Publicado en el Diario Oficial Nº 191, Tomo 193, de fecha 19/10/1961, que crea la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), no define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias. Según la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, vigente desde el 08/09/2005, dicha responsabilidad recae en el Director General de la Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, quien tiene la obligación de elaborar el Plan Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Art. 21 literal f), con el apoyo del Consejo Asesor integrado por ANDA y otras instituciones.

Código RC-1B-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. ¿La normatividad del sector telecomunicaciones (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector telecomunicaciones (entendido que incluya al menos los servicios de telefonía) establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector telecomunicaciones participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de telecomunicaciones puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de actividades de planificación ex ante para la recuperación, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Identificar los actores relevantes (rector, regulador y proveedores) del sector telecomunicaciones. 5. Identificar normatividad del sector telecomunicaciones vigente en el país, en particular aquella relacionada con los componentes de gestión del riesgo de desastres (GRD) o similar. 6. Analizar si dicha normatividad define la responsabilidad de planificar, o de realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias. 7. De ser necesario, consultar con representantes del sector telecomunicaciones, sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-16 PR-1B-11 RR-1B-15	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RR-2-9	En el caso de verificar que el ente rector o coordinador del sector telecomunicaciones cuente con un plan ex ante de recuperación, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador la normatividad del sector telecomunicaciones (entendido que incluya al menos los servicios de telefonía) identificada debe establecer de manera explícita la responsabilidad de planificar, o realizar preparativos para, la recuperación antes de la ocurrencia del desastre y en el ámbito de sus competencias.

En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera *ex-ante*, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Brasil 2017. A RESOLUÇÃO Nº 656, DE 17 DE AGOSTO DE 2015, que Aprova o Regulamento sobre Gestão de Risco das Redes de Telecomunicações e Uso de Serviços de Telecomunicações em Desastres, Situações de Emergência e Estado de Calamidade Pública (RC-1B-9a), no TÍTULO I das DISPOSIÇÕES GERAIS, CAPÍTULO I, DO OBJETIVO E DA ABRANGÊNCIA, no Art. 3º define que *"As prestadoras são integralmente responsáveis pelos ônus decorrentes da adoção e execução do processo de gestão de riscos e das medidas de preparação e de resposta para desastre, Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública"*, subentendendo-se no texto, através da expressão gestão de riscos a responsabilidade de realizar atividades de preparação para a recuperação pós-desastres. Ainda no mesmo decreto, no parágrafo VI - do *"Processo de Gestão de Riscos"*, define a *"aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, consulta, estabelecimento do contexto, e na identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e análise crítica dos riscos"*; bem como no parágrafo IX estabelece o *"Plano de Restabelecimento de Serviço: procedimentos documentados das ações a serem realizadas em situações de interrupção de elementos que compõem a Infraestrutura crítica, especificando os recursos de telecomunicações necessários para responder a essas situações, bem como as estratégias a serem adotadas para assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar graves perdas"*. Por sua vez, o Art. 6º referente a ao *"PGRiscos das redes e serviços de telecomunicações"* estabelece que este deve conter, no mínimo: *II - a identificação das vulnerabilidades das Infraestruturas Críticas de Telecomunicações e dos riscos associados à continuidade dos serviços de telecomunicações; III - as medidas adotadas para mitigação das vulnerabilidades mapeadas, incluindo a descrição sobre a redundância física e lógica da rede de transporte e de sinalização, dos principais elementos de redes, como também deve ser incluída uma descrição dos sistemas alternativos de energia; IV - a hierarquia das Infraestruturas Críticas de Telecomunicações; V - a estrutura da equipe responsável pelo PGRiscos, contendo a identificação dos responsáveis ou gerência competente"*.

Traducción:

Brasil 2017. La Resolución N° 656 de 17 de agosto de 2015, por la que se aprueba el “Reglamento sobre gestión de riesgos de redes de telecomunicaciones y uso de servicios de telecomunicaciones en desastres, situaciones de emergencia y estado de calamidad pública” (RC-1B-9a), en el TÍTULO I de las DISPOSICIONES GENERALES, CAPÍTULO I, OBJETIVO Y ALCANCE, en el artículo tercero se define que *"Los proveedores son totalmente responsables de la carga de adoptar y ejecutar el proceso de gestión de riesgos y las medidas de preparación y de respuesta ante desastres, situaciones de emergencia o estados de calamidad pública"*, lo que significa en el texto, a través de la expresión gestión de riesgos, la responsabilidad de llevar a cabo actividades de preparación para recuperación post desastre. También en el mismo decreto, en el párrafo VI del "Proceso de gestión de riesgos", se define la *"aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de gestión para las actividades de comunicación, consulta, establecimiento de contexto, y la identificación, análisis, evaluación , tratamiento, monitoreo y análisis crítico de riesgo"*; así como en el párrafo IX establece el *"Plan de Restauración del Servicio: procedimientos documentados de las acciones a tomar en situaciones de interrupción de elementos que componen la Infraestructura Crítica, especificando los recursos de telecomunicaciones necesarios para responder a estas situaciones, así como las estrategias a ser implementadas para garantizar las condiciones de continuidad del servicio y limitar las pérdidas graves"*. A su vez, el Artículo 6 sobre "PGRiscos de redes y servicios de telecomunicaciones" establece que debe contener al menos: *"II - la identificación de vulnerabilidades de las Infraestructuras de Telecomunicaciones Críticas y los riesgos asociados con la continuidad de los servicios de telecomunicaciones. ; III - las medidas adoptadas para mitigar las vulnerabilidades mapeadas, incluida la descripción de la redundancia física y lógica de la red de transmisión y señalización, de los elementos principales de la red, así como una descripción de los sistemas de energía alternativa; IV - la jerarquía de las infraestructuras críticas de telecomunicaciones; V - la estructura del equipo responsable de PGRiscos, que contiene la identificación de los responsables o la gestión competente"*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. No se encontró evidencias que sustenten una valoración positiva del indicador en el marco jurídico general que regula al sector telecomunicaciones y que incluye lo siguiente: Ley Federal de Telecomunicaciones, la Ley Federal de Radio y Televisión, el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012. En la entrevista con COFETEL se corroboró también esta apreciación.

Código RC-1B-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10. ¿La normatividad del sector energía (o equivalente), define la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre en el ámbito de sus competencias?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador valora que la normatividad del sector energía (entendido como energía eléctrica) establezca, en el ámbito de su competencia, la responsabilidad de planificar antes de que ocurra el desastre, o de realizar anticipadamente preparativos para, la recuperación. Es decir, aquellas acciones de planificación y/o preparación hechas de forma ex-ante a la ocurrencia del desastre, y no solamente aquellas ex-post (que es la práctica más común en la región).</p> <p>Se considera un atributo de calidad de la normatividad sectorial que mandate la elaboración ex ante de planes sectoriales de recuperación basados en escenarios de daños, pérdidas y necesidades, conteniendo, entre otros, los siguientes elementos: (i) un plan de generación y procesamiento de información, con base en los déficits identificados en el análisis de los escenarios, e incluyendo diversas acciones como la inversión en la generación, procesamiento y análisis de datos, (ii) los acuerdos interinstitucionales para la recuperación que deben prepararse, incluyendo acuerdos con el sector privado, para cada escenario de afectación considerado, (iii) los instrumentos financieros que financiarán la recuperación, incluyendo tanto opciones de protección financiera (como fondos de emergencia, seguros, bonos catastróficos, créditos contingentes, etc.) como de reorientación de presupuesto y programas, y nuevo endeudamiento, (iv) protocolos de acción generales y específicos para los distintos escenarios considerados, y (v) una definición de dependencias y/o entidades adscritas al sector que sean responsables de las acciones contenidas en dicho plan.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector energía participan varias instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Así mismo, podrían existir instituciones responsables de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de energía puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados. En cualquier caso, debe quedar definida la responsabilidad de actividades de planificación ex ante para la recuperación, indistintamente de quién sea el actor (público o privado) que deba cumplirlo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector de energía eléctrica. 2. Identificar a las instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 3. Indagar en la normatividad del sector energía eléctrica, incluyendo los lineamientos, reglamentos técnicos y contratos de concesión que puedan existir, si establece responsabilidades de realizar actividades de planificación ex ante para la recuperación. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector energía sobre la existencia de normatividad que permita validar este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-17 PR-1B-12 RR-1B-16	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
RC-2-10	En el caso de verificar que el responsable del sector energía cuente con un plan ex ante de recuperación, indagar por la normatividad que eventualmente lo haya mandado.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

<p>Para que se cumpla el indicador se debe satisfacer al menos una de las siguientes condiciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ El marco normativo aplicable al menos a uno de los actores relevantes del sector de energía (ente rector o regulador), debe establecer responsabilidades y funciones para realizar actividades de planificación ex ante para la recuperación en su ámbito de competencias. ▪ Que exista normatividad que establezca responsabilidades y funciones para realizar actividades de planificación ex ante para la recuperación para cada una de las entidades encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. <p>En la justificación debe quedar claramente establecido el tipo de responsabilidades o acciones incluidas en la normativa, así como la evidencia de que se deban realizar de manera <i>ex-ante</i>, esto es, de forma anticipada a la ocurrencia del desastre.</p>
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p>
<p>No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>
<p>México 2014. La Comisión Federal de Electrificación (CFE) manifestó en la entrevista mantenida que la responsabilidad de realizar actividades de preparación de la recuperación post desastre está contenida en el Manual de Procedimientos Técnicos para la Atención de Desastres, formalizado el 15-oct-2010, para el caso de la Subdirección de Distribución de CFE, y en el Manual Institucional de Procedimientos Administrativos para la Atención de Desastres, y/o Casos Fortuitos y/o de Fuerza Mayor, formalizado el 11-oct-2009, para el caso de la Subdirección de Generación. No obstante, dado que no se pudo acceder a los contenidos de los mencionados manuales, no se pudo valorar la condición de este indicador en forma integral.</p>

Código RC-1C-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?	
Descripción general del indicador	
<p>La ocurrencia de desastres supone una ventana de oportunidad para corregir procesos de desarrollo que evidencian problemas o desajustes. En este sentido se considera una buena práctica que los planes de desarrollo (en cualquier nivel de gobierno) puedan ser actualizados después de ocurrido un desastre con el fin de reducir el riesgo preexistente y asegurar un desarrollo resiliente y sostenible. La revisión de estos planes de desarrollo se convierte en una oportunidad para integrar los diferentes sectores en un proceso de planificación que contribuya a reducir la vulnerabilidad evidenciada por el desastre.</p> <p>Esto debería estar normado de forma explícita para garantizar una correcta integración de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en la planificación del desarrollo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula los procedimientos para la formulación, revisión y actualización de los planes de desarrollo en el país (puede ser nacional, regional o local) o instrumento equivalente. 2. Identificar si dicha normatividad establece procedimientos y circunstancias para la actualización o revisión de los planes de desarrollo. 3. Determinar si la ocurrencia de desastres se establece como causal de revisión, actualización o evaluación de los planes de desarrollo. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-5 MG-1C-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad identificada debe indicar explícitamente que la ocurrencia de desastres puede ser una de las razones para iniciar procesos de ajuste o revisión ordinaria o extraordinaria de planes de desarrollo (en cualquier nivel de gobierno).</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	

Ecuador 2016. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en el artículo 467 que los "*planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado*". Por lo que no existe evidencia de una norma que regule de manera explícita la evaluación, revisión o actualización de los planes de desarrollo después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas.

Código RC-1C-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Existe normatividad que regule la evaluación, revisión o actualización de planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas?	
Descripción general del indicador	
<p>La ocurrencia de desastres supone una ventana de oportunidad para corregir procesos de ocupación y uso del suelo que evidencian problemas o desajustes. Después del desastre es aconsejable: (i) la revisión de la normativa de zonificación; (ii) verificar si el plan de ordenamiento territorial existente identificaba de forma apropiada el riesgo que el desastre evidenció; (iii) ajustar las zonificaciones vinculadas a códigos de construcción, e (iv) incluir en la nueva zonificación las nuevas condiciones generadas por el desastre, como nuevos asentamientos o declaración de zonas como de riesgo no mitigable.</p> <p>En este sentido se considera una buena práctica que los planes de ordenamiento territorial (o su equivalente en cada país) puedan ser actualizados después de ocurrido un desastre con el fin de reducir el riesgo preexistente. Esto debería estar normado de forma explícita para garantizar una correcta integración de la gestión del riesgo de Desastres (GRD) en la planificación del desarrollo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar la normatividad que regula los procedimientos para la formulación, revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial en el país (puede ser nacional, regional o local) o instrumento equivalente. 2. Identificar si dicha normatividad establece procedimientos y circunstancias para la actualización o revisión de los planes de ordenamiento territorial. 3. Determinar si la ocurrencia de desastres se establece como causal de revisión, actualización o evaluación de los planes de ordenamiento territorial. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1C-3 RR-3-3	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, la normatividad que establece los procedimientos para la revisión y actualización de los planes de ordenamiento territorial debería considerar la ocurrencia de desastres en el área en cuestión como un causal de posible ajuste a dichos planes.</p> <p>Para que se cumpla el indicador, la normatividad identificada se debe cumplir al menos para la unidad de gestión territorial de menor jerarquía (Municipio o equivalente) existente en el país.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Nicaragua 2016. El Decreto Ejecutivo Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, prevé todo un esquema para su actualización, modificación y evaluación: "Artículo 74.- Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal solo podrán ser modificados y/o actualizados en forma ordinaria una vez que se sometan a revisión y evaluación cada cinco años, partiendo de los resultados obtenidos en los informes de seguimiento y evaluación anuales y de las solicitudes de modificación presentadas ante el Consejo Municipal. Sin embargo, estas modificaciones no podrán efectuarse en el período comprendido entre los seis meses anteriores y seis meses posteriores a la celebración de elecciones municipales y/o Regionales en la Costa Atlántica. Artículo 75.- Los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal podrán ser modificados y/o actualizados en forma extraordinaria cuando los cambios se deban a casos de fuerza mayor, provenientes de causas naturales o sociales. Artículo 76.- Las modificaciones y/o actualizaciones del Plan de Ordenamiento Territorial Municipal solo podrán realizarse con el propósito de garantizar la estabilidad de su contenido siendo estas: 1) Por ajustes técnicos producto de las evaluaciones previstas en los distintos periodos señalados en el diseño del plan. 2) Por cambios en la realidad municipal debido a la incorporación de nuevos factores o por la ampliación en el conocimiento científico que pudieran reorientar los objetivos del corto, mediano y largo plazo. 3) Con el objeto de realizar los ajustes técnicos o de actualización con las políticas sectoriales nacionales. 4) Debido a fuerza mayor, cuando durante el periodo de implementación del plan ocurriera algún fenómeno social o natural que ponga en riesgo sus objetivos. 5) Por creación de otro municipio, que desmiembren territorios. 6) Por la construcción de obras de infraestructura y proyectos intermunicipales de fuerte impacto en el territorio y que no fueran previstas por ser identificadas en otros planes prospectivos sectoriales: Presas hidroeléctricas, canal seco, dragados de puertos, manejo de cuencas, entre otras. Artículo 77.- Las propuestas de modificaciones de forma ordinaria al Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, conforme el artículo 74, podrán ser presentadas por cualquier ciudadano, gremios locales, asociaciones u otros agentes residentes o no en el municipio, debidamente fundamentados y documentados por escrito ante la Secretaría del Consejo Municipal para su análisis, divulgación a la población en el cartel o tabla de avisos de la Alcaldía Municipal. Posteriormente el Consejo Municipal emitirá dictamen, para el cual se apoyará en el Equipo Técnico Municipal u otros especialistas".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece en el artículo 467 que los "planes de desarrollo y de ordenamiento se expedirán mediante ordenanzas y entrarán en vigencia una vez publicados; podrán ser actualizados periódicamente, siendo obligatoria su actualización al inicio de cada gestión. Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial serán referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno autónomo descentralizado". Por lo que no existe evidencia de una norma que regule de manera explícita la evaluación, revisión o actualización de los planes de ordenamiento territorial después de ocurrido un desastre en las unidades de gestión territorial afectadas.

Código RC-2-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Cuenta el Ministerio de Ambiente (o entidad rectora o coordinadora del ambiente) con un Plan ex-ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Identificar si el Ministerio del Ambiente cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 8. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 9. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 10. De ser necesario, consultar con representantes del sector ambiental, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-8 RR 1B-6 RR-1B-7 PR-1B-3	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-1	En el caso de verificar que la normatividad del sector ambiental define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector ambiente debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belize 2017. The National Emergency Management Organization Environment & Solid Waste Committee, headed by the Department of the Environment, revised in 2017 the Environment & Solid Waste Committee Hurricane Emergency Preparedness Plan. As stated in section “1.1 Environment & Solid Waste Committee” of the Plan, the Terms of Reference for the Committee include making “[...] *recommendations for the recovery of ecologies and habitats to their original state*.”. However, no evidence has been found that the said Committee is formally established and during an interview with representatives from the Department of the Environment, it was stated that the said Plan had not yet been approved. Therefore, the condition is negative.

Traducción:

Belice 2017. El Comité de Medio Ambiente y Residuos Sólidos de la Organización Nacional de Manejo de Emergencias, encabezado por el Departamento de Medio Ambiente, revisó en 2017 el Plan de Preparación para Emergencias por Huracanes del Comité de Medio Ambiente y Residuos Sólidos. Como se indicó en la sección “1.1 Comité de Medio Ambiente y Residuos Sólidos” del Plan, los Términos de Referencia para el Comité incluyen hacer “[...] *recomendaciones para la recuperación de ecologías y hábitats a su estado original*”. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia de que dicho Comité esté formalmente establecido y, durante una entrevista con representantes del Departamento de Medio Ambiente, se afirmó que dicho Plan aún no había sido aprobado. Por lo tanto, el indicador no se cumple.

Código RC-2-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿Cuenta el Ministerio de Agricultura (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector agricultura ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el Ministerio de Agricultura cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 2. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector agricultura, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-9 PR-1B-4 RR-1B-8	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar también el presente indicador.
RC-1B-2	En el caso de verificar que la normatividad del sector agricultura define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector agricultura debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. Si bien la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable incluye un par de artículos relacionados con transferencia del riesgo para el sector (126 y 127), los mismos no constituyen un "Plan" *ex ante* de recuperación para el sector que haya sido aprobado formalmente por la Secretaría de Agricultura.

Código RC-2-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿Cuenta el Ministerio de Salud (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector salud ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el Ministerio de Salud cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 2. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector salud, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-9 IR-1B-10 PR-1B-5	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-3	En el caso de verificar que la normatividad del sector salud define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector salud debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) que es la institución de salud y de seguridad social más grande de México, en coordinación con la SEGOB, evaluaron a todos los hospitales del Sector Salud, esfuerzo que concluyó en el Sistema Integral de Información de Protección Civil1 (SIIPC). Este esfuerzo, y adicionalmente el desarrollo de una herramienta informática, que se denominó Centro Virtual de Operaciones de Emergencias y Desastres (CVOED), da lugar al Plan Institucional frente a Emergencias y Desastres, publicado en 2011 (RC-2-3a). En esta planeación se consideraron las tres fases de la planeación: antes, durante y después de una situación de crisis; además de tres niveles distintos: nacional (considerado como estratégico), estatal (táctico) y municipal (operativo). El “después” lo relaciona con la Recuperación o la vuelta a la normalidad, que es un “*proceso de recuperación debe ser planeado desde el mismo reconocimiento de las amenazas que pueden afectar a la organización hasta la manera en que se iniciará la reconstrucción y se regresará a la actividad...*”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Chile 2013. El Ministerio de Salud cuenta con este tipo de planes a nivel territorial, por ejemplo, el PLAN EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO, que incluye aspectos de recuperación. Sin embargo, el país no cuenta con un Plan de este tipo de carácter sectorial/nacional, lo cual fue corroborado por el Departamento de Emergencias de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y del Ministerio de salud.

Código RC-2-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿Cuenta el Ministerio de Vivienda (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector vivienda ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el Ministerio de Vivienda cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 2. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector vivienda, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
RR-1B-10 PR-1B-6 RC-1B-4	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-4	En el caso de verificar que la normatividad del sector vivienda define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector vivienda debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. No se encontró evidencia de que el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural cuente con un plan reglamentado institucionalmente para recuperación post desastres. Sin embargo, se acoge a lo estipulado en el “*Marco Nacional para recuperación post desastre*”, elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) en el 2014, con el apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres UNISDR Oficina Regional – Las Américas. Este “*Marco Nacional para recuperación post desastre*”, en su Capítulo 8, integra el contenido sectorial para el área Hábitat y Vivienda que comprende las tareas de recuperación y sus correspondientes actores responsables. Para el área Hábitat y Vivienda se plantean un objetivo: Asegurar la adecuación de espacios apropiados para suplir la necesidad de refugio de las poblaciones afectadas por el desastre, considerando los estándares humanitarios y su transición hacia la vivienda permanente, incorporando la reducción de riesgos en los nuevos emplazamientos habitacionales

Código RC-2-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿Cuenta el Ministerio de Educación (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector educación ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el Ministerio de Educación cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 2. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector educación, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-12 RR-1B-11 PR-1B-7	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-5	En el caso de verificar que la normatividad del sector educación define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector educación debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. El sector cuenta con la guía: “Planificación y Ordenamiento del Centro Educativo para la Reducción del Riesgo y la Atención de Emergencias que Pueden Convertirse en Desastres” elaborada por la Comisión Nacional de Emergencias en 2009, pero no se localizó un plan preparado ex ante de recuperación post desastre en el sector; lo anterior fue corroborado en entrevistas con personal de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Código RC-2-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿Cuenta el Ministerio de Turismo (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post-desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector turismo ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el Ministerio del Turismo (o entidad equivalente) cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 2. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector turismo, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-13 RR-1B-12 PR-1B-8	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-6	En el caso de verificar que la normatividad del sector turismo define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector turismo debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección "Descripción General del Indicador" de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Belize 2017. The Ministry of Tourism & Civil Aviation produced the National Sustainable Tourism Masterplan for Belize 2030. Within section "5.1 Governance and Institutional Strengthening" it is stated that the Ministry should lead the formation of the National Disaster & Crisis Management Committee, with the goal of reducing losses related to natural disasters and other shocks to the industry by allocating resources to increase disaster resilience, cooperation in evacuation procedures and business continuity planning. This statement, however, excludes disaster recovery specifically; moreover, no evidence has been found of the Committee being established to date and neither has evidence been found of disaster recovery plan for the tourism sector, developed ex ante within the last 5 years. Therefore, in absence of such a plan, the condition is not met.

Traducción:

Belice 2017. El Ministerio de Turismo y Aviación Civil elaboró el Plan Maestro Nacional de Turismo Sostenible para Belice 2030. En la sección "5.1 Gobernanza y Fortalecimiento Institucional" se afirma que el Ministerio debe liderar la formación del Comité Nacional de Gestión de Desastres y Crisis, con el objetivo de reducir las pérdidas relacionadas con los desastres naturales y otras perturbaciones en la industria mediante la asignación de recursos para aumentar la resiliencia ante desastres, la cooperación en los procedimientos de evacuación y la planificación de la continuidad de operaciones. Sin embargo, esta declaración excluye específicamente la recuperación ante desastres, además, no se ha encontrado evidencia de que el Comité se haya establecido hasta la fecha y tampoco se ha encontrado evidencia del plan de recuperación ante desastres para el sector turístico, desarrollado ex ante en los últimos 5 años. Por lo tanto, en ausencia de tal plan, el indicador no se cumple.

Código RC-2-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿Cuenta el Ministerio de Transporte (o entidad equivalente) con un Plan ex ante de recuperación post- desastre para su sector que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si la entidad rectora o coordinadora del sector transporte, entendido como obras viales, ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si el Ministerio del Transporte (o entidad equivalente) cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre de las obras viales. 2. De existir el plan, verificar si ha sido aprobado formalmente. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector transporte, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14 RR-1B-13 PR-1B-9	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-7	En el caso de verificar que la normatividad del sector transporte define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o coordinadora del sector transporte, entendido como obras viales, debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre en lo relativo a obras viales.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección "Descripción General del Indicador" de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. No se encontraron evidencias (a través de consulta online) sobre la existencia de un plan *ex ante* de recuperación post desastres, que haya sido aprobación formalmente por el sector en los últimos 5 años (NOTA: en el contexto de la emergencia de la llamada "Ola Invernal" de finales de 2010 y principios de 2011, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), desarrolló una serie de acciones para la recuperación de las zonas afectadas en el ámbito de sus competencias, pero esto se realizó de forma "ex post", por lo que no se cumpliría la condición).

Código RC-2-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. ¿Cuenta el sector agua y saneamiento con un Plan ex ante de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer el sector agua y saneamiento ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a su ocurrencia, ya que contar con estos planes de manera anticipada contribuye a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación, (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector de agua y saneamiento participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rectores, reguladores y prestadores) del sector de agua y saneamiento. 2. Identificar si el ente rector, el regulador o el prestador con la mayor cartera de usuarios del sector de agua y saneamiento cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre. 3. Determinar si dicha aprobación ha tenido lugar dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario, consultar con representantes del sector de agua y saneamiento, preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres si existiera tal dependencia, sobre la existencia del plan al que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-14 RR-1B-14 PR-1B-9	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar el presente indicador.
RC-1B-8	En el caso de verificar que la normatividad del sector de agua y saneamiento define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre éstas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora, reguladora y/o el prestador con la mayor cartera de usuarios del sector de agua y saneamiento debe haber formulado y aprobado formalmente en los últimos 5 años un Plan *ex-ante* que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastre.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. No se encontró evidencia de que el sector de agua y saneamiento ha elaborado el Plan de Recuperación Post Desastre. El “Marco Nacional de Recuperación Post Desastre”, elaborado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) en el 2014, en su capítulo 8, incluye únicamente dos recomendaciones para rehabilitación y reconstrucción de infraestructura de agua y saneamiento. Este marco Nacional no cuenta con normativa que defina su aprobación y puesta en vigencia.

Código RC-2-9

Pregunta de respuesta cerrada	
9. ¿Cuenta el sector telecomunicaciones con un Plan ex ante de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el sector telecomunicaciones (entendido que incluya al menos los servicios de telefonía) ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a la ocurrencia de los mismos, ya que los contar con estos planes de manera anticipada contribuyen a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector telecomunicaciones participan varias instituciones encargadas de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación), (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar si la entidad rectora, reguladora y prestadores de los servicios del sector telecomunicaciones cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastres. 2. Identificar si el ente rector, el regulador o el prestador con la mayor cartera de usuarios del sector telecomunicaciones cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastre 3. Determinar si el periodo de aprobación ha sido dentro de los últimos 5 años. 4. De ser necesario consultar con representantes del sector telecomunicaciones, de existir preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, sobre la existencia del plan que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-16 RR-1B-15 PR-1B-11	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición
RC-1B-9	En el caso de verificar que la normatividad del sector telecomunicaciones define la responsabilidad de realizar actividades de la recuperación post desastre, entre las mismas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga la presente condición.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora, reguladora y/o el prestador con la mayor cartera de usuarios del sector telecomunicaciones debe haber formulado, en los últimos 5 años, un Plan *ex-ante* formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastres.

No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.

En la justificación se deberán detallar a modo ilustrativo algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Trinidad y Tobago 2018. The Telecommunications Service of T&T TSTT presented an approved Disaster Management Plan at the Association of Professional Engineers of Trinidad and Tobago (APETT) conference 2014. The ex-ante recovery plan rests on the "robust infrastructure that minimises the chance of major disruption while at the same time implementing processes and procedures to ensure quick detection, assessment and recovery from these inevitable occurrences". (Abstract APETT conference). "As part of its comprehensive disaster recovery plans, TSTT has acquired a new fleet of Iridium Extreme satellite phones from local telecommunications equipment provider, Caribel"(T&T Newsday, July 17, 2004). Now, as Trinidad and Tobago's only fullservice telecommunications provider, TSTT has the responsibility of managing multiple independent yet interdependent networks. To satisfy numerous customer demands in such a converged environment, network changes primarily in coverage, capacity and technological advancements have accelerated in recent times. As it relates to the robustness of TSTT's network, Coordinator for the Disaster Management Programme, James Richardson, stated, "The first level of robustness must be in the network design at macro and micro levels and while no design is perfect, attempts have been made to ensure built in resilience to international carrier standards." With respect to the transport network, Richardson explained, "We have a highly resilient MPLS (Multiprotocol Label Switching) core that connects major transport nodes on our primarily fibre based network. This, combined with overhead and underground cabling, route diversity with automatic switching and high capacity microwave radios in certain areas contribute to our ability to adequately serve our consumers and prepare for virtually any event." To mitigate the effects of a disaster, TSTT has established District Emergency Operation Centres (DEOC) in North, South and Tobago with dedicated office facilities and a range of voice and data delivery systems to adequately manage specific geographical areas. On a national level, the company is an active participant in the national disaster response and recovery effort led by the ODPM. Also, as part of its comprehensive disaster recovery plans, TSTT has acquired a new fleet of Iridium Extreme satellite phones from local telecommunications equipment provider, Caribel. "Once charged, these phones are extremely reliable offering approximately four (4) hours of straight talk time and 30 hours on standby," stated Caribel Sales Manager, Nicholas De Montbrun. Under the assumption that telecoms services may not always be available to first responders in the event of an emergency, these military grade phones are furnished with built in GPS, location tracking, SOS and voice communication; the first handset to bring all these critical connections together in one single device. According to Richardson, TSTT is also currently in the process of developing a caravan-type mobile disaster management unit. "The unit will contain features typically associated with an Emergency Operation Centre (EOC) including different types of communications, access to all TSTT networks and services and critical data for recovery." The caravan is intended to be deployed onsite alongside incident commanders so that situations can be better managed and communication more efficient.

Traducción:

Trinidad y Tobago 2018. La presentación de Telecomunicaciones en la reunión de APETT en 2014. Para sostener el cumplimiento del indicador, tal vez el texto podría cambiarse a: El Servicio de Telecomunicaciones de T&T TSTT presentó un Plan de Gestión de Desastres aprobado por la Asociación de Ingenieros Profesionales de Trinidad y Tobago (APETT), conferencia 2014. El plan de recuperación ex ante se basa en la *"infraestructura robusta que minimiza la posibilidad de interrupciones importantes, al mismo tiempo que implementa procesos y procedimientos para garantizar la detección, evaluación y recuperación rápidas de estos eventos inevitables"*. (Resumen de la conferencia APETT). *"Como parte de sus planes integrales de recuperación de desastres, TSTT ha adquirido una nueva línea de teléfonos satelitales Iridium Extreme del proveedor local de equipos de telecomunicaciones, Caribel"* (T&T Newsday, 17 de julio de 2004). Ahora, como único proveedor de servicios completos de telecomunicaciones de Trinidad y Tobago, TSTT tiene la responsabilidad de administrar múltiples redes independientes pero interdependientes. Para satisfacer numerosas demandas de los clientes en un entorno tan convergente, los cambios en la red principalmente en cobertura, capacidad y avances tecnológicos se han acelerado en los últimos tiempos. En relación con la robustez de la red de TSTT, el Coordinador del Programa de Gestión de Desastres, James Richardson, declaró: *"El primer nivel de robustez debe estar en el diseño de la red a niveles macro y micro y, aunque ningún diseño es perfecto, se han hecho intentos para garantizar una resistencia integrada a los estándares de los proveedores internacionales"*. Con respecto a la red de transporte, Richardson explicó: *"Tenemos un núcleo MPLS (Conmutación de etiquetas multiprotocolo) altamente resistente que conecta los principales nodos de transporte en nuestra red basada principalmente en fibra. Esto, combinado con el cableado aéreo y subterráneo, la diversidad de rutas con conmutación automática y radios de microondas de alta capacidad en ciertas áreas contribuyen a nuestra capacidad de servir adecuadamente a nuestros consumidores y prepararnos para prácticamente cualquier evento"*. Para mitigar los efectos de un desastre, TSTT ha establecido Centros de Operaciones de Emergencia Distritales (DEOC) en el Norte, Sur y Tobago con instalaciones de oficina dedicadas y una gama de sistemas de entrega de voz y datos para administrar adecuadamente áreas geográficas específicas. A nivel nacional, la compañía es un participante activo en el esfuerzo nacional de respuesta a desastres y recuperación liderado por el ODPM. También como parte de sus planes integrales de recuperación de desastres, TSTT ha adquirido una nueva línea de teléfonos satelitales Iridium Extreme del proveedor local de equipos de telecomunicaciones, Caribel. *"Una vez cargados, estos teléfonos son extremadamente confiables y ofrecen aproximadamente cuatro (4) horas de tiempo de conversación directo y 30 horas en espera"*, declaró Nicholas De Montbrun, Gerente de Ventas de Caribel. Bajo el supuesto de que los servicios de telecomunicaciones pueden no estar siempre disponibles para los socorristas en caso de emergencia, estos teléfonos de grado militar están equipados con GPS incorporado, seguimiento de ubicación, SOS y comunicación de voz. El primer teléfono que reúne todas estas conexiones críticas en un solo dispositivo. Según Richardson, TSTT también se encuentra actualmente en el proceso de desarrollar una unidad móvil de gestión de desastres de tipo caravana. *"La unidad contendrá características típicamente asociadas con un Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) que incluye diferentes tipos de comunicaciones, acceso a todas las redes y servicios TSTT y datos críticos para la recuperación"*. La caravana está diseñada para desplegarse en el sitio junto con los comandantes de incidentes para situaciones Se puede gestionar mejor y la comunicación es más eficiente.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. Se hizo la consulta a la Superintendencia General de Energía y Telecomunicaciones de El Salvador (SIGET), la cual solo hizo referencia a la aprobación y ratificación del Convenio de Tampere, el cual versa sobre el *"suministro de recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofes"* donde se plantea que los Estados Partes cooperarán entre sí y con las entidades no estatales y las organizaciones intergubernamentales de conformidad con lo dispuesto en dicho Convenio, para facilitar la utilización de los recursos de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe. No obstante, dicho Convenio no constituye evidencia de la existencia de un plan ex ante como plantea el indicador.

Código RC-2-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10. ¿Cuenta el sector energía con un Plan ex ante de recuperación post desastre que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca establecer si el sector energía, entendido como energía eléctrica, ha formulado y aprobado formalmente, al menos en los últimos 5 años, un plan ex-ante de recuperación, en el ámbito de sus competencias. Este indicador reconoce como atributo de calidad que los diferentes Ministerios, secretarías y sectores elaboren planes de recuperación post desastres de manera previa a la ocurrencia de los mismos, ya que los contar con estos planes de manera anticipada contribuyen a que la recuperación del sector comience de manera oportuna.</p> <p>Debe considerarse que en algunos países en el sector energía participan varias instituciones encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Así mismo, podrían existir instituciones responsables de la rectoría, regulación (superintendencia) y la prestación de este tipo de servicios, donde cada una de estas instituciones puede tener su propio marco normativo. Incluso en algunos países la prestación de los servicios de energía puede realizarse bajo el esquema de concesiones, alianzas público-privadas o por prestadores privados.</p> <p>El plan de recuperación podrá incluir entre otros aspectos: (i) un calendario y metodología para la realización anticipada y permanente del análisis de escenarios de daños, pérdidas y de las necesidades de recuperación potenciales para el sector, (ii) un esquema para la generación de capacidades para la recuperación), (iii) la programación de actividades para la identificación de acuerdos interinstitucionales existentes y que deben elaborarse para la recuperación (incluyendo acuerdos con el sector privado), (iv) un esquema de financiamiento para la recuperación (que incluirá herramientas de protección financiera pero también opciones de reorientación de presupuesto y programas) y (v) guías operativas para la recuperación que establezca protocolos de acción generales y protocolos específicos para los escenarios considerados. Estos protocolos incluirán un esquema básico que facilite en el momento de la emergencia una rápida identificación e implementación ordenada de las acciones de recuperación previstas que se deben realizar.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los actores relevantes (rector y regulador) del sector energía, así como a las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país. 2. Identificar si la entidad rectora o reguladora del sector energía cuenta con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastres. 3. Identificar si las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país cuentan con un plan <i>ex-ante</i> aprobado formalmente para orientar el proceso de recuperación post-desastres. 4. Determinar si el periodo de aprobación de los planes identificados ha sido dentro de los últimos 5 años. 5. De ser necesario consultar con representantes del sector energía, de existir preferentemente con la dependencia con responsabilidades en materia de gestión del riesgo de desastres, sobre la existencia del plan que hace referencia este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
IR-1B-17 RR-1B-16 PR-1B-12	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición
RC-1B-10	En el caso de verificar que la normatividad del sector energía define la responsabilidad de realizar actividades de planificación de la recuperación, entre las mismas se podría incluir realizar el tipo de planes que indaga la presente condición.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido
<p>Para el cumplimiento de este indicador, la entidad rectora o reguladora del sector energía debe haber formulado, en los últimos 5 años, un Plan <i>ex-ante</i> formalmente aprobado, que determine las acciones básicas y estratégicas que se deben realizar en caso de enfrentar un proceso de recuperación post desastres.</p> <p>En ausencia de lo anterior, se permitirá dar cumplimiento a este indicador si las empresas de generación, transmisión y distribución de energía con la mayor facturación en el país cuentan, de manera independiente o conjunta, con un plan para orientar el proceso de recuperación post-desastres.</p> <p>No debe confundirse este plan con un plan de emergencia o contingencia. No obstante, si existiera un Plan de Continuidad de Operaciones formalmente aprobado en los últimos 5 años que, además de incluir elementos propios de respuesta de emergencia y del restablecimiento o rehabilitación de servicios básicos, incluyera acciones propias para coadyuvar a una rápida y oportuna recuperación, tales como los mencionados en la sección “Descripción General del Indicador” de esta ficha, podría aceptarse como verificable de este indicador.</p> <p>En la justificación se deberán detallar algunas de las principales acciones consideradas en el plan de recuperación que haya sido identificado</p>
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.</p>
Ejemplos de incumplimiento en países de la región
<p>Costa Rica 2014. No se localizó evidencia de que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) o Instituto Costarricense de Electricidad cuente con un Plan <i>ex ante</i> de recuperación post desastre para su sector y que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos 5 años. Esto se confirmó mediante entrevista al jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).</p>

Código RC-3-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La recuperación post-desastre implica uno de los componentes de la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD) de mayor complejidad y costo político, pues generalmente las comunidades afectadas demandan prontitud en el restablecimiento de las condiciones de desarrollo.</p> <p>La comunicación y la participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre se considera una buena práctica porque permite orientar de manera más efectiva la acción del estado hacia las necesidades más acuciantes de la población damnificada. Además, permite hacer de público conocimiento los esfuerzos que el estado viene desarrollando y mitiga, al menos parcialmente, el posible descontento que puede suscitar la recuperación en caso de desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si la normatividad de GRD o de recuperación post-desastre establece mecanismos de participación de la sociedad civil, organizaciones sociales, no gubernamentales y sector privado en los procesos de recuperación post-desastre. 2. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o de la recuperación post-desastre sobre el cumplimiento de esta condición. 3. Verificar si en alguna situación de desastre reciente se ha implementado un mecanismo de participación ciudadana. En caso positivo, indagar su fundamento legal. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-3-5 PR-3-1	Revisar si la normatividad utilizada para dichos indicadores permite verificar la presente condición.
RC-3-4	Si en alguna situación de desastre se activó un mecanismo de participación comunitaria para la recuperación, indagar si existió normatividad que lo respaldara.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador la normatividad identificada debe establecer de manera explícita los mecanismos de participación de la sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales en la recuperación post-desastre. Dichos mecanismos de participación pueden ser comités, plataformas, foros de comunicación y participación, etc.</p> <p>Se debe tener presente que los mecanismos de participación identificados no deben ser solamente de carácter informativo para sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales, por lo cual necesariamente deben considerar el involucramiento de la población o sus organizaciones en la consulta, toma de decisión e incluso implementación de la política pública de la recuperación post desastre.</p> <p>En el caso que la normatividad utilizada para verificar esta condición haga mención a GRD de manera general, en la justificación debe quedar explícito el alcance de la GRD para evidenciar que la recuperación post-desastre es parte de la misma, caso contrario no se podrá validar la presente condición.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. La Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 8 de febrero de 2011 (RC-3-1a) dedica dentro del Capítulo VII, Entidades Públicas, Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, entidades privadas y sociedad civil, el Subcapítulo III entero a este tema: *“Participación de las entidades privadas y la sociedad civil”*, y con ese fin se refiere a los mecanismos de participación que son enmarcados en la integralidad de la Gestión del Riesgo de Desastres, lo que incluye la recuperación post-desastre: 18.1, *“La participación de las entidades privadas y de la sociedad civil constituye un deber y un derecho para la puesta en marcha de una efectiva Gestión del Riesgo de Desastres, sustentado en el principio de participación”*; 18.4 *“... la participación ciudadana se da a través de las organizaciones sociales y de voluntariado, que constituyen la base social de organismos tales como la Cruz Roja Peruana, juntas vecinales, comités parroquiales, de instituciones educativas y empresariales...”*. El Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), del 25 de mayo de 2011 (RC-3-1b), establece en el artículo 36, numeral 7, la *“planificación participativa”*, que consiste en *“formular participativamente el plan integral de reconstrucción que no reproduce los riesgos preexistentes, definiendo el alcance, estrategias de implementación, actividades y responsabilidades, presupuestos e indicadores de seguimiento y evaluación”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. Si bien la Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 del 15 de junio de 2005, considera la participación de representantes de la sociedad civil en las organizaciones departamentales y locales de emergencia, según lo establece el Art 15, donde se indica *“...Las organizaciones departamentales y locales de emergencia estarán integrados por autoridades públicas y municipales locales y por representantes voluntarios de las Entidades Organizadas de la Sociedad (EOS) de las comunidades respectivas...”*, en este documento normativo no se hace mención explícita su participación en los procesos de recuperación, ni tampoco se encontró evidencia de que las *“Organizaciones departamentales y locales de emergencia”* tengan bajo sus funciones y responsabilidades algunas vinculadas con la recuperación post desastres. Así mismo, se analizó el Decreto N° 11.632 por el cual se reglamenta la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (S.E.N), aprobado el 12 de Agosto de 2013, sin encontrar información complementaria que establezca mecanismos de participación de la sociedad civil en la recuperación post-desastres, por lo cual no se cumple el indicador.

Código RC-3-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una evaluación sobre la gestión del gobierno en la recuperación en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca detectar la participación de la entidad nacional de control, o de quien haga sus veces, en relación con los procesos de recuperación post-desastre en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud, declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.</p> <p>El presente es un indicador de desempeño ya que no se pregunta por una normatividad como tal, sino por una actuación específica de la entidad nacional de control.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 8. Identificar la entidad o las entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 9. Indagar por la realización de al menos una evaluación del proceso de recuperación post-desastre por parte de esta entidad en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en las que se solicitó ayuda internacional. 10. De ser necesario, consultar directamente con representantes la entidad nacional de control sobre si se ha realizado dicha evaluación. También se podría indagar con las entidades de gobierno que coordinaron los procesos de recuperación en los desastres identificados, si éstas siguieran funcionando. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-3-3	Revisar si el documento utilizado para este indicador permite verificar la presente condición
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, el reporte identificado debe haber sido elaborado por el ente nacional de control y debe contener la evaluación de la gestión del gobierno en la recuperación post-desastre en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud.</p> <p>En la justificación se deberá respaldar que el desastre que hace referencia el informe cuenta con una declaratoria oficial por parte del gobierno o bien que el país haya solicitado ayuda internacional.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Colombia 2013. En relación con la Emergencia Nacional declarada por la llamada "Ola Invernal" (afectación por el Fenómeno La Niña); en Colombia se instauró como mecanismo para la atención de la emergencia que integra la "*rehabilitación*" una cuenta especial del Fondo Nacional de Calamidades llamada "*Colombia Humanitaria*"; y para la reconstrucción definitiva la figura llama "*Fondo Adaptación*". La CGR ha creado un "*programa para la vigilancia especial de los recursos para la prevención y atención de desastres*", que es específico para la Emergencia Invernal (Fenómeno la Niña). En el sitio <http://186.116.129.19/web/guest/emergencia-invernal>, se presentan las cifras de la emergencia invernal y la información sobre la verificación por parte del Ente Nacional de Control sobre la gestión del gobierno en el contexto de esta emergencia. Adicionalmente, la CGR presenta informes de gestión que analizan la labor de Colombia Humanitaria y del Fondo de Adaptación; el último informe publicado se presenta como verificable de RC-3-2a.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. No se han encontrado evidencias relacionadas con este indicador. Se investigó desde el año 2011 a la fecha la información de transparencia en la página web de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos relativa al literal sobre auditorías internas y gubernamentales, y no se encontró ninguna evidencia que se haya realizado en ese período realizado en ese período una verificación o evaluación sobre el cumplimiento de acciones en gestión del riesgo de desastres. También se consultó con funcionarios de la SGR y corroboraron que no se ha realizado tal evaluación. Cabe mencionar que en la normativa que crea el Comité para Reconstrucción y Desarrollo Productivo, conformado para el proceso de reconstrucción post-desastre en Manabí, debe presentar en forma trimestral un informe de sus acciones a la Asamblea.

Código RC-3-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación?	
Descripción general del indicador	
<p>Este indicador busca detectar si la autoridad ha implementado mecanismos de información a la población afectada, en relación con los procesos de recuperación post-desastre en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre de gran magnitud, declarados por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.</p> <p>Este indicador sigue la misma lógica del anterior, y es asimismo un indicador de desempeño pues no indaga por la normatividad sino por una condición de implementación específica que puede ser verificada en el país. Es decir, los mecanismos de comunicación pueden en este caso estar definidos o no por una normatividad específica.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer las 5 últimas situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional. 2. Determinar si al menos en alguna de dichos desastres se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación. 3. De ser necesario, indagar con la institución rectora de la GRD o la recuperación post-desastre sobre el cumplimiento de esta condición. También se podría indagar con alguna de las entidades que coordinaron los procesos de recuperación de los desastres analizados, si todavía siguieran funcionando. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento de este indicador, debe verificarse de forma objetiva (comprobable) si en al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de información a la población afectada sobre la recuperación.</p> <p>Si el mecanismo de información está basado en internet, además de registrar el URL se deberá detallar en la justificación el tipo de información compartida.</p> <p>Además, en la justificación se deberá respaldar que el desastre que se hace referencia cuenta con una declaratoria oficial por parte del gobierno o bien que el país haya solicitado ayuda internacional</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Guatemala 2013. Se encontró evidencia de que la CONRED informa por medio de la emisión de boletines en su página de internet sobre los avances en los procesos de recuperación. Como ejemplo se encuentra el Boletín Informativo No. 3406 (RC-3-3a) emitido por la CONRED el 7 de noviembre de 2013, informando sobre las acciones de reconstrucción en las zonas afectadas por el Terremoto de San Marcos, que afectó esa zona del país el 7 de noviembre de 2012.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. Los mecanismos de información no han sido implementados para procesos de recuperación. Existió una iniciativa de apoyo con PNUD en las provincias fronterizas Bahoruco e Independencia luego del paso del huracán Noel y Olga, pero no se pudo encontrar evidencia sólida que pudiera ser utilizada como verificable.

Código RC-3-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. <i>¿En al menos una de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional, se ha activado algún mecanismo de participación comunitaria para la recuperación?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>En algunas normativas, no necesariamente en la GRD, se establece el principio de participación comunitaria, incluso se llega a definir los mecanismos específicos de participación de la sociedad civil; sin embargo, la aplicación concreta de estos principios no es siempre evidente. Por lo cual, identificar la existencia real de estos mecanismos en la práctica es una aproximación al cumplimiento de lo establecido en la norma y contribuye a monitorear la recuperación post-desastre por parte de la comunidad quien es la beneficiada de estas acciones.</p> <p>Este indicador sigue la misma lógica del anterior, y es asimismo un indicador de desempeño pues no indaga por la normatividad sino por una condición de implementación específica que puede ser verificada en el país. Es decir, los mecanismos de participación pueden en este caso estar definidos o no por una normatividad específica.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar las 5 últimas situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional. 2. Determinar si al menos en una oportunidad se ha activado algún mecanismo de participación para la población afectada sobre la recuperación. 3. De ser necesario indagar con la institución rectora de la GRD o de la recuperación post-desastre sobre el cumplimiento de esta condición. También se podría indagar con las entidades que coordinaron los procesos de recuperación en los desastres identificados, si tales entidades aún siguen funcionando. 	
Vínculo con otros indicadores	
PR-3-1	Si existe normatividad que establece mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de preparativos y respuesta, ésta podría ser extensiva a la recuperación post desastre.
PR-3-6	Si se verificó la participación comunitaria en la repuesta a las últimas 5 situaciones de desastres declaradas, dichos mecanismos podrían haberse extendido a la fase de recuperación de los mismos eventos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador debe existir evidencia del funcionamiento de al menos un mecanismo de participación comunitaria, organizaciones sociales, no gubernamentales y/o sector privado en la recuperación post-desastre en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.

Para que se cumpla el indicador debe existir evidencia del funcionamiento de al menos un mecanismo de participación comunitaria, organizaciones sociales, no gubernamentales y/o sector privado en la recuperación post-desastre en alguna de las últimas 5 situaciones de desastre declaradas por el nivel nacional o en los que se solicitó ayuda internacional.

Se debe tener presente que los mecanismos de participación identificados no deben ser solamente de carácter informativo para sociedad civil o de organizaciones sociales y no gubernamentales, por lo cual los mismos necesariamente deben considerar el involucramiento de la población o sus organizaciones en la consulta, toma de decisión e incluso implementación de la política pública de la recuperación post desastre.

El mecanismo de participación comunitaria no necesariamente debe estar definido por normatividad de carácter nacional, pero si debe haber sido validada por la entidad rectora de GRD u otra autoridad pública, lo cual debe quedar consignado en la justificación respectiva. Así mismo, en la justificación se debe quedar registrada la declaratoria de desastre o la solicitud de ayuda internacional.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. El Boletín de Prensa No. 289 del 16 de agosto de 2016 emitido por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS (RC-3-4a) refiere conformar veedurías ciudadanas al Comité de Reconstrucción de Manabí posterior al terremoto:... **“...SE ACREDITARÁ VEEDURÍA CIUDADANA AL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA POR TERREMOTO: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará el proceso de capacitación y acreditación para los postulantes a integrar la Veeduría Ciudadana que vigilará el proceso de asignación de fondos a los entes ejecutores para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto por parte de la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva”.** En opinión del equipo consultor la conformación de la Veeduría Ciudadana para monitorear el destino de los fondos de la reconstrucción en la Provincia de Manabí constituye evidencia del cumplimiento del indicador.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2013. No ha sido posible verificar, de forma objetiva (comprobable), que en las más recientes situaciones de desastre se hayan activado mecanismos formales de participación comunitaria para la recuperación (no hay evidencias en sitios web). Se consultó: Inundaciones de La Plata en 2013, Inundaciones en Santa Fe de 2003 y Erupción del Volcán Puyehue en 2011.

F. PROTECCIÓN FINANCIERA (RC)

Código PF-1A-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿La normatividad nacional de Gestión del Riesgo de Desastres establece fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una condición deseable para poder implementar una política pública efectiva desde el punto de vista del componente de protección financiera, contar con un fondo o instrumento financiero equivalente (por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) para el financiamiento de las necesidades que surjan a partir de un desastre, ya sean de asistencia humanitaria, para restablecer servicios básicos, rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc. Para fines de este indicador no se requiere que el fondo o instrumento financiero identificado esté operativo o tenga recursos asignados; basta con que su creación, establecimiento o constitución esté dispuesta en la normatividad.</p> <p>Los fondos pueden ser de carácter nacional o multi-país/regional (en este caso la normatividad del país debe reflejar que el país hace parte del fondo, lo cual podría ser a través de normatividad que señale que el país se ha adherido a un fondo regional mediante un mecanismo formal).</p> <p>Cabe mencionar que para efectos de este indicador no se consideran fondos las líneas dentro del presupuesto denominadas así, a menos que el fondo a que haga referencia corresponda a una estructura dedicada al manejo de recursos asignados para financiar gastos emergentes en caso de desastres, es decir los diferentes gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria o aquellos destinados a restablecer servicios básicos o a realizar tareas de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad nacional que regula la GRD en el país. 2. Verificar si de manera explícita se hace referencia a la creación de fondos o instrumentos financieros equivalentes, del orden nacional, para financiar los gastos emergentes de situaciones de desastre, es decir los diferentes gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria o aquellos destinados a restablecer servicios básicos o a realizar tareas de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc. Estos fondos pueden ser fondos de reservas, calamidades, emergencias o fondos de desastres, entre otras denominaciones. 3. Revisar, en su caso, si el país hace parte/está adscrito a alguna institucionalidad multipaís/regional que cuente con fondos o instrumentos financieros equivalentes, para financiar los gastos emergentes de situaciones de desastre. 4. Identificar, en caso de la existencia de fondos regionales, que la normatividad nacional refleje que el país hace parte de dicho fondo, lo cual podría ser a través de normatividad que señale que se ha adherido formalmente al acuerdo regional. 5. De ser necesario contactar a la institución nacional rectora de la GRD y/o encargada de la respuesta de desastres sobre el cumplimiento de esta condición. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	La normatividad revisada o empleada para verificar dicho indicador podría hacer referencia al fondo o mecanismo financiero sobre el cual indaga el presente indicador.
PF-2-8	Si el fondo o mecanismo equivalente empleado para respaldar el cumplimiento de dicho indicador está considerado en la normatividad de GRD, también permitiría verificar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla la condición, la normatividad nacional de GRD debe crear o establecer un fondo u instrumento financiero que permita sufragar gastos emergentes de situaciones de desastre, es decir los diferentes gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria o aquellos destinados a restablecer servicios básicos o a realizar tareas de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc.

En caso de que el país participe en acuerdos multi-país/regionales para la GRD que dispongan de fondos o instrumentos financieros equivalentes para financiar gastos emergentes de situaciones de desastre, adicionalmente se requeriría evidenciar la normatividad que refleje que el país hace parte de dicho fondo, lo cual puede ser a través de normatividad que señale que el país ha adherido formalmente a dichos acuerdos.

No se logrará verificar este indicador usando normatividad diferente a la específica en GRD; tampoco se admite como respaldo de cumplimiento la existencia de fondos para la reconstrucción constituidos después de ocurrido un desastre.

Tampoco se considera el indicador cumplido si hay normatividad que faculte al poder legislativo o cualquier otra institución gubernamental a establecer un fondo o instrumento financiero equivalente, en caso de ocurrencia de desastres, pues en ese caso la eventual existencia del fondo quedaría supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones.

Finalmente, a efectos de este indicador tampoco se consideran fondos a las líneas dentro del presupuesto denominadas así, a menos que el fondo a que haga referencia corresponda a una estructura dedicada al manejo de recursos asignados para financiar gastos emergentes en caso de desastres.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. El Artículo 15 de la Ley N° 109, Fondo Nacional para la Reducción de Desastres, del 9 de diciembre de 1996, crea el Fondo Nacional Permanente de Reducción de Desastres (PF-1A-1a), a través de una cuenta específica abierta para el efecto en el Banco de Guatemala, misma que será capitalizada en razón a la posibilidad financiera del Estado, más donaciones nacionales e internacionales, que serán colocadas en forma proporcional y mensual conforme reciba los ingresos del Ministerio de Finanzas Públicas. Adicionalmente, para efectos de fortalecer el tema en el eje estratégico de "Preparación de capacidades y condiciones para el manejo del riesgo a desastre de la Política Nacional para la Reducción de Riesgo a los Desastres en Guatemala" emitido por N° 06-2011, del 15 de julio de 2011 (PF-1A-1b), se establece como línea de acción un "Fondo Nacional Para la Gestión Integral de Reducción de Riesgo a los Desastres" y en el eje estratégico de "Recuperación post desastres", se establece como línea de acción: "...Establecimiento de reservas financieras contingentes a nivel nacional, departamental y municipal a efecto de responder de manera oportuna y pertinente ante los desastres...".

Belize 2016. Belize is part of the agreement for establishing the Caribbean Disaster Emergency Response Agency Agreement. According to Part VIII (subsection 28) of the “Disaster Preparedness and Response Act”, Chapter 145 of the Substantive Laws of Belize, revised edition 2011 (PF-1A-1), which is consistent with the revised edition of year 2000 of the same Act (F-1A-1b): “The provisions of the Caribbean Disaster Emergency Response Agency Agreement in the Fourth Schedule shall have the force of law in Belize”. According to Numeral 1 of Article 25 of the Fourth Schedule of the mentioned Act, “The Agency shall establish an Emergency Assistance Fund (hereinafter in this Article referred to as “the Fund”) which shall be used solely to defray expenses incurred in connection with the rendering of assistance in the event of a disaster occurring in a Participating State”. The condition is considered positive given that the country has access to a fund for financing emergent expenses in disaster situations.

Traducción:

Belice 2016. Belice es parte del acuerdo para establecer el Acuerdo de la Caribbean Disaster Emergency Response Agency Agreement. De acuerdo con la Parte VIII (subsección 28) de la "Disaster Preparedness and Response Act", Capítulo 145 de las Substantive Laws of Belize, revised edition 2011 (PF-1A-1), que es consistente con la edición revisada del año 2000 del misma Ley (F-1A-1b): "*Las disposiciones del Acuerdo de la Caribbean Disaster Emergency Response Agency Agreement en el Cuarto Anexo tendrán fuerza de ley en Belice*". De acuerdo con el Numeral 1 del Artículo 25 del Cuarto Anexo de la Ley mencionada, "*La Agencia establecerá un Emergency Assistance Fund que se utilizará únicamente para sufragar los gastos incurridos en relación con la prestación de asistencia en caso de que ocurra un desastre en un Estado participante*". El indicador se cumple dado que el país tiene acceso a un fondo para financiar gastos emergentes en situaciones de desastre.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. Ecuador carece de una normatividad que aborde de manera integral la temática de la gestión del riesgo de desastres. No obstante, existe un marco legal compuesto de varias normas que rigen para la gestión del riesgo de desastres en el país, el cual incluye: (i) Constitución de la República del Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008; (ii) Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 35 del 28 de septiembre de 2009; (iii) Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Decreto Ejecutivo 486, publicado en el Registro Oficial Suplemento 290 de 30 de septiembre de 2010; y (iv) Buen Vivir, Plan Nacional 2013 -2017, Todo el Mundo Mejor, Registro Oficial Suplemento 78 de 11-sep-2013. Ninguna de estas normas establece fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres, lo cual fue ratificado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe mencionar que actualmente está vigente la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, que establece dentro de la disposición general tercera que "*Los recursos netos obtenidos de las contribuciones creadas en esta ley, se registrarán en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado para la construcción, reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.*" No obstante, esta es una Ley transitoria que aplica solo para el caso puntual del proceso de reconstrucción del terremoto de Manabí y que no puede considerarse parte del marco normativo de GRD del país.

Código PF-1A-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿La normatividad nacional establece el porcentaje anual de recursos a asignarse a los fondos a nivel nacional para gastos emergentes de situaciones de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La constitución de fondos o instrumentos financieros equivalentes destinados a suministrar recursos para atender los gastos emergentes por la ocurrencia de desastres (los diferentes gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria o aquellos destinados a restablecer servicios básicos o a realizar tareas de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc.) es sin duda un paso importante, pero no es suficiente. Por eso se considera deseable que la normatividad nacional que regula la GRD u otra, por ejemplo, la relacionada con el presupuesto y las finanzas públicas nacionales, fije en sus preceptos un porcentaje, monto o parámetro sobre los recursos que se deban asignar al fondo establecido para sufragar dichos gastos. Esta cualidad proporciona a estos fondos fortaleza y certidumbre, y así les facilita asegurar su permanencia y el cumplimiento de sus objetivos. Cabe mencionar que este indicador no evalúa si el monto o porcentaje de recursos a asignar al fondo son o no suficientes.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad que regula la GRD en el país y verificar si de manera explícita se hace referencia a la creación de fondos o instrumentos financieros equivalentes, del orden nacional, que puedan financiar los gastos emergentes por la ocurrencia de desastres (los diferentes gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria o aquellos destinados a restablecer servicios básicos o para realizar tareas de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc.). 2. De existir fondos nacionales o instrumentos financieros equivalentes establecidos en la normatividad de GRD, revisar sus reglamentos, documentos operativos u otra normatividad vinculada a los mismos para conocer si se establece un porcentaje, monto u otro parámetro para la asignación anual de recursos. 3. Indagar en la normatividad nacional relacionada con el presupuesto nacional o las finanzas públicas que esté vinculada a la asignación o funcionamiento del fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-1A-1, o de un fondo para gastos emergentes en situaciones de desastre que no derive de la normativa nacional de la GRD, si de manera explícita se establece un porcentaje, monto o parámetro de recursos que deben asignarse dicho fondo o mecanismo equivalente. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1A-1	El presente indicador podría indagar por el porcentaje o parámetro de asignación de recursos asignados al fondo identificado en el indicador PF-1A-1.
PF-2-8	Si el fondo o instrumento financiero equivalente empleado para respaldar dicho indicador está considerado en la normatividad de GRD, se deberá además revisar si existe normatividad que establece un porcentaje u otro parámetro para la asignación anual de recursos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

<p>Para que se cumpla el indicador se deben satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existencia de al menos un fondo del nivel nacional para sufragar los gastos emergentes (los diferentes gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria o para aquellos para restablecer servicios básicos o para las tareas de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc) por la ocurrencia de desastres, que haya sido establecido en la normatividad. 2. Existencia de normatividad nacional que establezca el porcentaje o parámetro de los recursos que deben asignarse al fondo o instrumento financiero equivalente mencionado en la condición anterior. <p>Para el cumplimiento de este indicador no es necesario que el fondo esté habilitado (es decir, que cuente con recursos asignados, ya sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente) al momento de la aplicación del iGOPP.</p>
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
<p>Ejemplos de cumplimiento en países de la región</p>
<p>Costa Rica 2014. La Ley N° 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, del 27 de octubre de 2005 (Pf-1A-2a) establece en su Artículo 46: <i>"Todas las instituciones de la Administración central, la Administración Pública descentralizada y las empresas públicas, girarán a la Comisión un tres por ciento (3%) de las ganancias y del superávit presupuestario acumulado, libre y total, que cada una de ellas reporte, el cual será depositado en el Fondo Nacional de Emergencias, para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo..."</i>.</p>
<p>Ejemplos de incumplimiento en países de la región</p>
<p>Argentina 2014. Argentina carece de una ley, política o estrategia nacional que aborde específicamente la temática de la gestión del riesgo. No obstante, existe normatividad que establece fondos para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres: La Ley No. 26.509, que crea el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Emergencia Agropecuaria), promulgada el 27 de agosto del 2009, en el Artículo 16 dispone la creación del <i>"... Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios..."</i>. Cabe mencionar que en dicha Ley no se establece el porcentaje anual de recursos a asignarse al Fondo.</p>

Código PF-1A-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿Existe normatividad que establezca la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Para que el desarrollo e implementación de una estructura de protección financiera del riesgo de desastres sea sostenible se considera como una buena práctica la existencia de normatividad que establezca como mandato su formulación.</p> <p>Por estructura de protección financiera del riesgo de desastres se entiende una combinación óptima de instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo, de acuerdo a los eventos a cubrir (eventos recurrentes y no recurrentes) y los costos asociados. No obstante, la normatividad por la que se indaga no tiene que mencionar todos estos elementos de manera explícita; solo es necesario que incluya referencias a conceptos que los abarquen o que sean similares, como por ejemplo la generación de una estrategia de <u>protección financiera</u>, o la elaboración de una estrategia <u>para reducir la vulnerabilidad fiscal</u> ante la ocurrencia de desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el marco normativo sobre la gestión de las obligaciones contingentes. 2. Revisar los manuales de funciones de las áreas de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente). 3. Revisar la normatividad nacional que rige la GRD. 4. Revisar la normatividad nacional que regula la planificación del desarrollo en el país. 5. Consultar el tema con la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente). 6. Consultar el tema con la entidad rectora de la GRD. <p>Nota: no es necesario que la normatividad identificada llegue al nivel de detalle de mencionar retención y transferencia o instrumentos <i>ex-ante</i> y <i>ex-post</i>. Bastaría con que haga mención de la formulación de una estructura de protección del riesgo de desastres o a funciones relacionadas con la disminución de la vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.</p>	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-1	La existencia de una estrategia de protección financiera puede mencionar la normatividad que la soporta
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, debe existir normatividad nacional que mencione como meta, objetivo, actividad o resultado la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país o, en su defecto, una estrategia de protección financiera o actividades para la disminución de la vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.</p> <p>Para validar esta condición no hace falta que dicha estructura de protección financiera, o algunos de sus elementos, estén operativos.</p> <p>No será posible verificar este indicador solo con evidenciar que el país cuenta con algunos instrumentos de protección financiera (retención y transferencia), ya que el indicador busca evidenciar que la selección de los instrumentos de protección financiera es parte del cumplimiento de funciones establecidas en la normatividad.</p> <p>Este indicador no hace referencia a la normatividad referente a la obligatoriedad de cubrir los activos públicos a través de pólizas de seguros, en razón a que dicha normatividad solo hace referencia a un instrumento de transferencia de riesgo. Tampoco se hace referencia a la normatividad del presupuesto que permite realizar traslados presupuestales o adquirir créditos para gestionar recursos y atender la</p>	

ocurrencia de desastres, pues es una normatividad relacionada con la posibilidad de gestionar instrumentos ex - post para atender la ocurrencia de desastres, presente en la mayoría de los países. Tampoco, se hace referencia a normatividad asociada con acuerdos que permiten adquirir instrumentos de transferencia del riesgo, tales como CCRIF, en razón a que dicha normatividad solo hace referencia a la posibilidad de adquirir un instrumento de transferencia de riesgo.

Finalmente, no se dará por cumplido el indicador si la normatividad esgrimida solamente establece la formulación de una estrategia de protección financiera para apenas una parte de las amenazas naturales que pueden afectar el país. Es imprescindible que la normatividad haga referencia general a los diferentes desastres, sin limitar el mandato a eventos climáticos o geofísicos particulares.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Panamá 2013. La condición se cumple parcialmente mediante el Decreto Ejecutivo No.110, del 4 de agosto de 2009, por el cual se crea la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y se adoptan medidas de eficiencia administrativa (PF 1A-3a), en cuyo artículo 2, incisos 7 y 8, relativo a las funciones de esa Dirección, se dispone la de revisar y recomendar a su superior la política en materia de riesgos, seguros y fianzas, además de verificar que los bienes nacionales estén cubiertos por un "...moderno sistema de administración de riesgos...". La condición se cumple plenamente a través del Decreto Ejecutivo No. 479, de 22 de noviembre de 2011, que adiciona los numerales 10, 11, 12 y 13 al artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 110 de 4 de agosto de 2009 (PF 1A-3b), que trae responsabilidades adicionales en materia de gestión financiera del riesgo de desastres a la Dirección de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado (DICRE), pues se introduce en los artículos 10 y 11 la especificidad respecto de la transferencia de riesgos, además de, aunque vagamente, la condición de retención de riesgos.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece en el Eje 1, referente a "*Mecanismos para enfrentar pérdidas y daños recurrentes*" como línea prioritaria "*Opciones y mecanismos de retención y transferencia de riesgos*". No obstante, dado que el mandato de la Estrategia solo aborda los riesgos climáticos del país, quedan por fuera los riesgos geológicos que también son muy importantes para el país, por lo cual no se considera que la normatividad de cambio climático mandate la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país, que cobije todas las fuentes de riesgo. Lo anterior fue ratificado por el Ministerio de Hacienda en las visitas realizadas en julio de 2016. A juicio del Ministerio de Hacienda una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres debe cobijar riesgos adicionales a los contemplados por la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2013.

Código PF-1A-4

Pregunta de respuesta cerrada

4. ¿La normatividad que regula el sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características no homogéneas/especiales está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo aceptados por el ente regulador del sector?

Descripción general del indicador

Para que las aseguradoras cuenten con los recursos necesarios para responder en caso de ocurrencia de un desastre es recomendable que las provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos para riesgo catastrófico se estimen teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista del riesgo o de estimación de pérdidas máximas probables, los cuales deben estar certificados o aceptados por el ente regulador del sector asegurador.

Así mismo, se considera recomendable que dichos modelos consideren las diferencias en los tipos de bienes sujetos de cobertura. Los bienes de características no homogéneas/especiales corresponden a aquellos con características particulares, tales como sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de energía eléctrica e infraestructura petrolera. Se diferencian de los bienes de características homogéneas o uniformes en que éstos tienen características físicas similares, por ejemplo, edificios de oficinas, de concreto y con una antigüedad de 10 años.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Revisar la normatividad sobre seguros, particularmente aquella que regula las provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos.
2. Revisar que en dicha normatividad se estipule que las provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos del sector asegurador se deben establecer teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista o de estimación de pérdidas máximas probables, las cuales deben estar definidas, certificadas o aprobadas por el ente regulador del sector asegurador.
3. Confirmar que la normatividad revisada en los pasos anteriores hace referencia específica a la estimación de provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos para bienes de características no homogéneas/especiales (o equivalentes). Es decir, no basta con la existencia de normatividad que haga referencia específica a que la estimación de provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos esté soportada en modelos de evaluación probabilista o de estimación de pérdidas máximas probables, las cuales deben estar definidas, certificadas o aprobadas por el ente regulador del sector asegurador: también es necesario que la normatividad señale explícitamente que dichos modelos deben considerar las diferencias en los tipos de bienes sujetos de cobertura (de características no homogéneas/especiales).
4. Revisar la página web del ente de supervisión del mercado de seguros.
5. De ser necesario, consultar al ente regulador o supervisor del mercado de seguros y a asociaciones de aseguradoras en el país.

Vínculo con otros indicadores

PF-1A-5

La normatividad y documentación revisada o utilizada como verificable en dicho indicador podría servir para respaldar al presente indicador o para orientar en la búsqueda de la información que se requiere para verificar su cumplimiento.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido

Para que se cumpla este indicador se deben satisfacer las siguientes condiciones:

1. Que la normatividad que regula las provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos para riesgo catastrófico del sector asegurador señale de manera explícita que se deben establecer provisiones o reservas técnicas u obligaciones por contratos de seguros suscritos para los bienes de características no homogéneas/especiales.
2. Que dicha normatividad establezca que la estimación de provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros para riesgo catastrófico suscritos debe realizarse haciendo uso de modelos de evaluación probabilista o de estimación de pérdidas máximas probables.
3. Que los modelos de evaluación probabilista o estimación de pérdidas máximas probables estén certificados o aprobados por el ente regulador del sector asegurador del país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) manifestó que en México, independientemente de si el bien es homogéneo o no homogéneo, se aplica un mismo modelo. En el Capítulo 7.2. de la Circular Única de Seguros (PF-1A-4a), “De las bases técnicas para la valuación de la reserva de riesgos en curso y de la Pérdida Máxima Probable de los seguros de terremoto” se establece “Para efectos del cálculo de la Pérdida Máxima Probable que se utilizará para determinar el requerimiento de solvencia y el límite de la reserva de riesgos catastróficos de los seguros de terremoto, se deberá observar lo siguiente: La Pérdida Máxima Probable se determinará mensualmente aplicando las bases técnicas que se indican en el Anexo 7.2.1. (PF-1A-4b) y mediante el sistema de cómputo “Sistema R” que será proporcionado por la Comisión, conforme a lo indicado en el Anexo 7.2.2.” (PF-1A-4c). Con relación al Anexo 7.2.1., referente a las “Bases técnicas para la determinación de la prima de riesgo y la Pérdida Máxima Probable de los seguros de terremoto”, la CNSF manifestó que la descripción de dicho modelo corresponde a un modelo probabilista. Dicho modelo se aplica para bienes de características no homogéneas.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En 2003 se contaba (además de la Ley 45 de 1990 y del Decreto 839 del 27 de marzo de 1991, que seguían vigentes), con la Ley 510 del 3 de agosto de 1999, “por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”. Esta Ley establecía en el Artículo 2, que el literal (d) del Artículo 53 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, debía ajustarse así: “Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la empresa, el cual deberá hacerse extensivo para el caso de las entidades aseguradoras a los ramos de negocios que se pretendan desarrollar; dicho estudio deberá indicar la infraestructura tecnológica y administrativa que se utilizará para el desarrollo del objeto de la entidad, los mecanismos de control interno, un plan de gestión de los riesgos inherentes a la actividad, así como la información complementaria que solicite para el efecto la Superintendencia Bancaria”. Al revisar esta normativa (y en entrevistas con expertos), se concluye que la misma no establece que la estimación de reservas para bienes no homogéneos debe estar sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo definidos o certificados por el ente regulador del sector (Superintendencia Bancaria).

Código PF-1A-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. <i>¿La normatividad que regula el sector asegurador establece que la estimación de reservas de riesgo catastrófico para bienes de características homogéneas/uniformes está sustentada en modelos de evaluación probabilista del riesgo aceptados por el ente regulador del sector?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Para que las aseguradoras cuenten con recursos necesarios para responder en caso de ocurrencia de un desastre es recomendable que las provisiones técnicas o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos para riesgo catastrófico se estimen teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista del riesgo o de estimación de pérdidas máximas probables, los cuales deben estar certificados o aceptados por el ente regulador del sector asegurador.</p> <p>Así mismo, se considera recomendable que dichos modelos consideren las diferencias en los tipos de bienes sujetos de cobertura. Los bienes de características homogéneas o uniformes corresponden a aquellos que tienen características físicas similares, por ejemplo, edificios de oficinas, de concreto y con una antigüedad de 10 años. Se diferencian de los bienes de características no homogéneas/especiales en que tienen características particulares, tales como sistemas de acueductos y alcantarillado, sistemas de energía eléctrica e infraestructura petrolera.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad sobre seguros, particularmente aquella que regula las provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos. 2. Revisar que en dicha normatividad se estipule que las provisiones o reservas técnicas, o las obligaciones por contratos de seguros suscritos del sector asegurador, se deben establecer teniendo en cuenta modelos de evaluación probabilista o de estimación de pérdidas máximas probables, los cuales deben estar definidos, certificados o aprobados por el ente regulador del sector asegurador. 3. Confirmar que la normatividad revisada en los pasos anteriores hace referencia específica a la estimación de provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos para bienes de características homogéneas/uniformes. Es decir, no basta con la existencia de normatividad que haga referencia específica a que la estimación de provisiones o reservas técnicas o las obligaciones por contratos de seguros suscritos esté soportada en modelos de evaluación probabilista o de estimación de pérdidas máximas probables, las cuales deben estar definidas, certificadas o aprobadas por el ente regulador del sector asegurador: también es necesario que la normatividad señale explícitamente que dichos modelos deben considerar las diferencias en los tipos de bienes sujetos de cobertura (<u>características homogéneas/uniformes</u>). 4. Revisar la página web del ente de supervisión del mercado de seguros. 5. Consultar al ente regulador o supervisor del mercado de seguros y/o asociaciones de compañías de seguros. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1A-4	La normatividad y documentación revisada o utilizada como verificable en dicho indicador podría servir para respaldar al presente indicador o para orientar en la búsqueda de la información que se requiere para verificar su cumplimiento.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para del cumplimiento del indicador se deben dar las siguientes condiciones:

1. Que la normatividad que regula las provisiones o reservas técnicas, o las obligaciones por contratos de seguros suscritos para riesgo catastrófico del sector asegurador, señale de manera explícita que se deben establecer provisiones o reservas técnicas u obligaciones por contratos de seguros suscritos para los bienes de características homogéneas/uniformes.
2. Que dicha normatividad establezca que la estimación de provisiones o reservas técnicas u obligaciones por contratos de seguros suscritos debe realizarse haciendo uso de modelos de evaluación probabilista o, cuando menos, de estimación de pérdidas máximas probables.
3. Que los modelos de evaluación probabilista o estimación de pérdidas máximas probables estén certificados o aprobados por el ente regulador del sector asegurador del país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. Mediante la Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (S.B.S.) N.º 1305-2005, que aprueba el Reglamento para la Constitución de la Reserva de Riesgos Catastróficos y de Siniestralidad Incierta, de 19 de agosto de 2005 (PF-1A-4b), la SBS estableció que las empresas de seguros deben efectuar un estudio que permita calcular la Pérdida Máxima Probable (PML) sobre la cual se determinarán las coberturas catastróficas mínimas requeridas para el mercado nacional. Lo anterior se estipula en el artículo 3: *“Las empresas constituirán mensualmente la reserva catastrófica como la sumatoria de los siguientes componentes: a) El monto equivalente al producto del PML determinado de conformidad con la Nota Técnica por el Monto Total Expuesto de los edificios y naves industriales. b) El importe de la pérdida máxima esperada de estructuras especiales diferentes a edificios y naves industriales.”*

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Brasil 2017. A normatização não sugere, tampouco exige a utilização de algum modelo de avaliação probabilística de riscos para a estimativa de reservas ou provisões para bens de características homogêneas/uniformes, como é possível acompanhar no (i) Decreto-Lei No. 73 de Novembro de 1996, Norma Federal, o qual *“Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências”*, onde estipula no Artigo 8 da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP que esta é uma das entidades que conforma o Sistema Nacional de Seguros Privados. De acordo com o Artigo 36 da norma mencionada *“Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras: ...b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP”* (Conselho Nacional de Seguros Privados); (ii) A CIRCULAR SUSEP N.º 517, DE 30 de JULHO DE 2015, a qual *“Dispõe sobre provisões técnicas; teste de adequação de passivos; ativos redutores; capital de risco de subscrição, crédito, operacional e mercado; constituição de banco de dados de perdas operacionais; plano de regularização de solvência; registro, custódia e movimentação de ativos, títulos e valores mobiliários garantidores das provisões técnicas; ...”* em seu Artigo 3 estabelece *“Para cada provisão técnica, as supervisionadas deverão manter nota técnica atuarial, assinada pelo atuário técnico responsável, à disposição da Susep, com o detalhamento da metodologia de cálculo utilizada. I - a nota técnica atuarial com a metodologia de cálculo deverá ser entregue à Susep no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da solicitação; II - a Susep poderá, a qualquer tempo, conforme se faça necessário em cada caso concreto, determinar às supervisionadas a utilização de método específico para o cálculo da provisão técnica; e III - na hipótese prevista no inciso II, as supervisionadas poderão*

encaminhar à Susep solicitação para a utilização de método próprio, cuja aplicação depende de prévia autorização da Susep". A condição é negativa já que as provisões técnicas devem estar suportadas em notas atuariais, para as quais não se estabelecem nenhum tipo de modelo.

Traducción:

Brasil 2017. La normatividad no sugiere, ni requiere el uso de ningún modelo de evaluación de riesgo probabilístico para estimar reservas o provisiones para bienes de características homogéneas / uniformes, como es posible seguir en (i) el Decreto Ley No. 73 de Noviembre de 1996, la Norma Federal, que *"prevé el Sistema Nacional de Seguros Privados, regula las operaciones de seguros y reaseguros y otras medidas"*, que estipula en el Artículo 8 de la Superintendencia de Seguros Privados - SUSEP que es una de las entidades que conforma el Sistema Nacional de Seguros Privados. De conformidad con el Artículo 36 de la norma antes mencionada *"Le corresponde al SUSEP, como ejecutor de la política descrita por el CNSP, como el organismo de supervisión para la constitución, organización, operación y operaciones de las Compañías de Seguros: ... b) emitir instrucciones y emitir circulares sobre la regulación operaciones de seguros de acuerdo con las pautas del CNSP "* (Consejo Nacional de Seguros Privados); (ii) SUSEP CIRCULAR N ° 517 DE 30 DE JULIO DE 2015, que *"prevé disposiciones técnicas; prueba de adecuación de responsabilidad; reducción de activos; suscripción, crédito, capital de riesgo operativo y de mercado; constitución de la base de datos de pérdidas operacionales; plan de liquidación de solvencia; registro, custodia y movimiento de activos, valores y valores que garanticen disposiciones técnicas..."*. En su Artículo 3 establece *"Para cada disposición técnica, el supervisado deberá mantener una nota técnica actuarial, firmada por el actuario técnico responsable, disponible para Susep, detallando la metodología de cálculo utilizada. I - la nota técnica actuarial con la metodología se entregará a Susep dentro de los 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud, II - Susep puede, en cualquier momento, según sea necesario en cada caso específico, determinar supervisar el uso de método específico para calcular la provisión técnica, y III - en el caso previsto en el punto II, las personas supervisadas pueden presentar a Susep una solicitud para el uso de su propio método, cuya aplicación depende de la autorización previa de Susep"*. La condición es negativa ya que las disposiciones técnicas deben estar respaldadas por notas actuariales, para las cuales no se establece ningún tipo de modelo.

Código PF-1A-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. <i>¿Existe normatividad que establezca fondos nacionales de desarrollo que puedan financiar actividades de manejo de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable que existan diferentes fuentes de recursos para financiar actividades de manejo de desastres, dentro de las cuales se considera una buena práctica que los fondos nacionales de desarrollo puedan asignar recursos a actividades de manejo de desastres.</p> <p>Los fondos de desarrollo pueden ser una fuente de recursos muy importante para financiar actividades de manejo de desastres, esto es, los gastos emergentes de situaciones de desastre (tales como los de asistencia humanitario o aquellos destinados a restablecer servicios básicos o para tareas de rehabilitación, reactivación económica, recuperación o de reconstrucción, etc.).</p> <p>Los fondos nacionales de desarrollo, también conocidos como cuentas de inversión social (o instrumento financiero equivalente), se enfocan principalmente en dotar recursos para la inversión a distintas escalas y diferentes enfoques (unidades de gestión territorial, sectorial, etc.), y de forma integrada contribuyen hacia la visión de desarrollo de los países. Estos fondos pueden ser de regalías, fondos de inversión, acción o cohesión social, etc.</p> <p>El presente indicador valora el hecho de que estos fondos de desarrollo incluyan o consideren su posible uso para el financiamiento de actividades de manejo de desastres, aun cuando no tengan como fin exclusivo actividades relacionadas con GRD.</p> <p>El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los principales fondos nacionales de desarrollo (o instrumento financiero equivalente). 2. Indagar en la normatividad de dichos fondos (o instrumentos financieros equivalentes) si están autorizados para financiar actividades de manejo de desastres. 3. Indagar con el área de presupuesto (en caso de que exista) de la autoridad hacendaria, de economía o de finanzas (o entidad equivalente) y/o con la institución rectora de GRD al respecto de la existencia de fondos de desarrollo (o instrumento financiero equivalente) que estén autorizados para financiar actividades de manejo de desastres. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-8	Algunos de los fondos identificados en dicho indicador podrían estar también habilitados para el financiamiento de manejo de desastres que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento del indicador se deben satisfacer las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existencia de fondos nacionales de desarrollo o instrumentos financieros equivalentes. 2. Evidencia de que al menos uno de ellos esté autorizado para financiar actividades de manejo de desastres (respuesta, rehabilitación, reconstrucción). <p>Para validar este indicador no se requiere que necesariamente se hayan empleado o asignado recursos del fondo en cuestión para iniciativas de manejo de desastres, basta con que el fondo pueda formalmente sufragar este tipo de gastos.</p>	

Cabe mencionar, que para efectos de este indicador no se consideran como fondos a líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica).

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. En México existen varios casos, por ejemplo: (i) Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad, FONAES, que se rige por el ACUERDO mediante el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad para el ejercicio fiscal 2012, publicadas en el DOF el 21 de diciembre de 2011 (PF-1A-6a) está habilitado para “7. Cobertura. Los recursos y acciones destinadas a solventar los efectos ocasionados por desastres naturales, deberán apegarse a los lineamientos y mecanismos que determinen la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en sus ámbitos de competencia y demás disposiciones aplicables.”; (ii) Fondo del Programa “Esta Es Tu Casa”, que según el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Esta Es Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2013, publicados en el DOF el 28 de febrero del 2013 (PF-1A-6b) incluye en el numeral “4.3.Fenómenos naturales y zonas de riesgo. En situaciones de emergencia originadas por fenómenos naturales... la Instancia Normativa tendrá la atribución, previo análisis de la suficiencia presupuestal y capacidad de respuesta, de otorgar subsidios federales a personas con viviendas afectadas por fenómenos naturales o con viviendas edificadas en zonas de riesgo, mediante esquemas de complementariedad con subsidios estatales y/o municipales, sin necesidad de que medie financiamiento o ahorro previo a cargo de los damnificados...”.

Argentina 2014. No se encontró evidencia de fondos de desarrollo habilitados para financiar actividades de manejo de desastres, se consideraron los siguientes fondos: (i) Por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 286/95 se constituyó el FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL (FFDP), con el objetivo de prestar apoyo a las reformas del sector público provincial argentino y de promover el desarrollo económico de las provincias. A través del Decreto N° 1289 del 4 de noviembre de 1998, se ampliaron los objetivos del FFDP, pudiendo financiar además programas de reforma fiscal, financiera o administrativa de los Estados Provinciales, así como también asistir y financiar programas que contemplen el saneamiento de la deuda pública y otros tendientes a promover el desarrollo de los sectores de la economía real de las provincias argentinas; (ii) El “Sistema Federal de la Vivienda”, establecido en la Ley Nacional N° 24.464 promulgada el 27/03/95 fue creado con el objeto de facilitar las condiciones necesarias para posibilitar a la población de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a la vivienda digna, conforme lo previsto en el Art. 14 de la Constitución Nacional. Este Sistema está integrado por el FO.NA.VI. - Fondo Nacional de la Vivienda -, los Organismos Ejecutores Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales son responsables de la aplicación de la Ley en sus respectivas jurisdicciones, y el Consejo Nacional de la Vivienda. No se encontró evidencia en la normatividad de dichos fondos respecto de la posibilidad de financiar actividades de manejo de desastres.

Código PF-1B-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿Existe normatividad que establezca la responsabilidad fiscal del estado frente al riesgo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable que la responsabilidad del estado frente a la ocurrencia de desastres esté establecida en la normatividad nacional. La responsabilidad del estado frente al riesgo de desastres define el pasivo contingente que el estado debe gestionar y por ende los aspectos a considerar en el diseño e implementación de su estrategia de protección financiera del riesgo de desastres.</p> <p>Este indicador indaga por la responsabilidad del estado frente a activos que no sean de propiedad pública, particularmente los de la población más vulnerable, como por ejemplo sus viviendas y producción agropecuaria, entre otras.</p> <p>Este indicador no hace referencia a un mandato constitucional o de otra normatividad relacionada con las responsabilidades generales del estado ante la ocurrencia de desastres, o las responsabilidades de las instituciones del estado para socorrer, brindar protección y atención de emergencia. Se busca normatividad que sea explícita sobre la responsabilidad fiscal del estado frente a los activos de la población afectada, particularmente de la población más vulnerable.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la Constitución del país, la normatividad relacionada con la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), la de los fondos de GRD, normas relacionadas con gestión de contingentes y normatividad financiera relacionada con el apoyo de las instituciones de gobierno a la población afectada por desastres. 2. Revisar normatividad nacional relacionada con los procesos o programas de reconstrucción post desastres. 3. Revisar normatividad de los sectores de vivienda y agricultura vinculada con fondos o programas para apoyo en dichas materias a la población afectada por desastres. 4. Indagar si la normatividad hace referencia de manera explícita a las responsabilidades del Estado en caso de ocurrencia de desastres frente a los activos de la población afectada, particularmente de la población más vulnerable. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	La normatividad de GRD puede orientar o contener las consideraciones para verificar el presente indicador
PF-1A-1 PF-1A-6	La normatividad del fondo identificado en dichos indicadores puede orientar o contener las consideraciones para verificar el presente indicador.
RC-1A-2	La normatividad que considere la recuperación de medios de vida puede orientar o contener las consideraciones necesarias para verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada debe indicar la responsabilidad fiscal del estado ante la ocurrencia de desastres, que estipule explícitamente las responsabilidades frente a activos que no sean de propiedad pública, particularmente los de la población más vulnerable, como por ejemplo sus viviendas y producción agropecuaria, entre otras.</p> <p>En ese sentido, este indicador no indaga por la responsabilidad moral de apoyar a la población afectada por la ocurrencia de desastres, sino por un mandato explícito para hacerse cargo fiscalmente de esas pérdidas de la población. No se considera un verificable una interpretación respecto de algún artículo de la normativa vigente en el país. El texto debe ser explícito como, por ejemplo: “...ante la ocurrencia de un desastre, el Estado es responsable de los activos de la población más vulnerable, entendida ésta</p>	

como...”, o, de manera contraria: “...ante la ocurrencia de un desastre, el estado no será responsable por los activos de los privados...”.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Nicaragua 2016. En el Artículo 6 de la Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, Ley No. 337 (PF-1B-1a), aprobada el 8 de marzo del 2000 y publicada en La Gaceta No. 70 del 7 de abril del 2000, referente a los “*Objetivos del Sistema Nacional*” se estipula como objetivo de dicho sistema “1. *La reducción de riesgos, la respuesta eficaz y oportuna, la rehabilitación y la reconstrucción de las áreas afectadas por un desastre*”. Dentro de este contexto, el Reglamento de Asignación de Funciones del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) a las Instituciones del Estado, aprobado por Decreto Ejecutivo No. 98-2000 (PF-1B-1b), estipula en el literal f) del numeral 4 (referente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público) del Artículo 4, que hace referencia a las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres que corresponden a ciertos Ministerios. “*Atender y resolver los reclamos por afectaciones de propiedades muebles o inmuebles que se hayan considerado necesarias para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes en caso de desastre*”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. La Ley N.º 113/2013-2014, Ley de Gestión de Riesgos, aprobada por la Asamblea el 13 de noviembre de 2014, estipula en el Artículo 5 como principios “*Todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tienen prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud ante la infraestructura socio-productiva y los bienes, frente a riesgos de desastres ocasionados por amenazas naturales, socio-naturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales...La atención frente a desastres y/o emergencias, debe ser preferencial para mujeres gestantes, niñas, niños, adultos mayores, personas en condición de enfermedad inhabilitante y personas con capacidades diferentes*”. No obstante, el indicador no se cumple en razón a que la normatividad mencionada no define hasta dónde llega la responsabilidad fiscal del Estado ante la ocurrencia de desastres.

Código PF-1B-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad que asigne competencias al sector Hacienda, Finanzas o Economía, en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera deseable que la normatividad asigne responsabilidad al sector hacienda en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres, con el fin de asegurar la sostenibilidad de actividades en este frente.</p> <p>Una estrategia integral de la gestión del riesgo de desastres requiere del componente de protección financiera, el cual debería ser responsabilidad del sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente). También podría ser responsabilidad de otra área, por ejemplo, del área rectora de la GRD. Consecuentemente, este indicador trata de identificar si en algún marco normativo, como por ejemplo: (i) el que trata sobre pasivos u obligaciones contingentes; (ii) el que define las funciones del sector hacendario o ministerio equivalente; (iii) los planes nacionales desarrollo; (iv) los planes nacionales de GRD; y/o (iv) la normatividad específica de GRD, se estipulan de manera explícita para alguna entidad las funciones relacionadas con la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país, estrategia de protección financiera o para disminuir la vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.</p> <p>No se está haciendo referencia a la normatividad referente a las potestades del sector hacendario para gestionar traslados presupuestales o para adquirir créditos para gestionar recursos para atender la ocurrencia de desastres, pues es una normatividad relacionada con la posibilidad de gestionar instrumentos ex - post para atender la ocurrencia de desastres, presente en la mayoría de los países.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el marco normativo sobre la gestión de las obligaciones contingentes. 2. Revisar los manuales y reglamentos de organización y funciones (ROF) del sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente). 3. Revisar la normativa nacional que rige la GRD, para identificar las responsabilidades que la misma podría asignar al sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente). 4. Revisar la normatividad nacional que regula la planificación nacional de la GRD. 5. Revisar la normatividad nacional que regula la planificación del desarrollo nacional. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-1A-1	La normatividad de GRD puede definir funciones de algunas instituciones gubernamentales, donde se podría incluir lo que indaga el presente indicador.
PF-1A-3	La normatividad que define la formulación de protección financiera puede asignar dicha responsabilidad al sector Hacienda, Finanzas o Economía.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad nacional que asigne funciones al sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente), para que gestione desde el punto de vista financiero el riesgo de desastres. Para verificar el indicador las responsabilidades y funciones asignadas al sector hacendario debe hacer mención explícita a la formulación de una estructura de retención y transferencia del riesgo de desastres en el país, estrategia de protección financiera o para disminuir la vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres o concepto equivalente.</p> <p>No se respaldará el cumplimiento de este indicador mediante la normatividad referente a las potestades del sector hacendario para gestionar traslados presupuestales o para adquirir créditos para gestionar recursos para atender la ocurrencia de desastres, pues es una normatividad relacionada con la posibilidad de</p>	

gestionar instrumentos ex - post para atender la ocurrencia de desastres, presente en la mayoría de los países.

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. El Acuerdo 1290 del 28 de Agosto de 2012, (PF-1B-2a), cuyo asunto corresponde a "Créase la Unidad de Riesgos Fiscales en la Dirección de Política Económica y Fiscal" acuerda en el Literal a) "Crear la Unidad de Riesgos Fiscales en la Dirección de Política Económica y Fiscal, del Ministerio de Hacienda, cuya función principal será la cuantificación del impacto fiscal asociado a las pérdidas económicas y daños de los desastres naturales originados por el cambio climático, así como la gestión de las obligaciones contingentes, buscando contribuir a la sostenibilidad fiscal y la transparencia en la administración de los recursos públicos". Así mismo, en el Literal b) establece "Para los efectos del presente Acuerdo, se entiende por Riesgos Fiscales aquellas obligaciones contingentes sobre las cuales no se tiene certeza respecto a su valor o momento en el cual se harán exigibles, ya que son determinadas por la ocurrencia de un evento futuro e incierto. Estos eventos tienen relación al menos con lo siguiente: desastres naturales, contratos de concesión, que se desarrollen mediante mecanismos de asocio público-privado, procesos judiciales en contra del Estado y garantías en operaciones de crédito público, entre otros". El literal c) establece como funciones de la Unidad de Riesgos Fiscales: "Desarrollar las metodologías y guías para el proceso de identificación, definición, valoración, mitigación y seguimiento de los riesgos contingentes asociados a los eventos que puedan generar impactos fiscales para el Estado según lo definido en el literal b) de este Acuerdo".

Honduras 2014. En el Plan de Gobierno 2010-2014, de fecha 2010, en la sección J.2 para la Gestión de Riesgos, se establece como medida de política en el literal p) "Elaborar e implementar una política integral de financiamiento para la recuperación post-desastres". Adicionalmente, la Política de Estado para la Gestión Integral de Riesgo en Honduras, aprobada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-051-2013, publicada en la Gaceta de 26 de noviembre de 2013, define como objetivo 3 "Establecer y desarrollar mecanismos que aseguren la reducción de la vulnerabilidad financiera del Estado ante desastres y aumente su capacidad para la gestión integral de riesgo, la recuperación y resiliencia de los hondureños y hondureñas", dentro de este objetivo, el lineamiento estratégico 4 establece "Crear y fortalecer los mecanismos financieros para la reducción del riesgo y la recuperación ante desastres, en el presupuesto de la Nación". Cabe mencionar que la normatividad mencionada no define los entes responsables del desarrollo de instrumentos de protección financiera ante el riesgo de desastres. De otra parte, la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), Decreto 151-2009, del 26 de diciembre de 2009, estipula en el Artículo 22 "La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas debe establecer el mecanismo de financiación y acumulación del Fondo Nacional para la Preparación y Respuesta a Emergencias (FONAPRE) de acuerdo con las posibilidades reales del país". No obstante, la condición es negativa pues la normatividad no hace referencia a instrumentos de transferencia del riesgo. De otra parte, en el Decreto Ejecutivo, PCM-008-97, que corresponde al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, en el Artículo 57, que define las funciones de la Secretaría de Finanzas, no hace referencia a la protección financiera frente a riesgo de desastres. Lo anterior fue ratificado en las entrevistas con la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

Código PF-1B-3

Pregunta de respuesta cerrada

3. *¿Existe normatividad que establezca que las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?*

Descripción general del indicador

Ante la ocurrencia de desastres, los gobiernos son responsables por los activos públicos a su cargo, los cuales han sido adquiridos y/o construidos, entre otros, con recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos. Dentro de este contexto, se considera relevante que las entidades sectoriales (ministerios, empresas, institutos, etc.) cubran los activos a su cargo con pólizas de seguros u otro instrumento financiero equivalente ante la ocurrencia de desastres. Lo anterior debe estar soportado por normatividad que les asigne a las entidades sectoriales (ministerios, empresas, institutos, etc.) responsabilidades en este tema. Este tema es clave pues es la base de la protección financiera de los bienes públicos.

Dentro de los instrumentos financieros equivalentes se consideran esquemas de auto-ahorro/seguro, los cuales son instrumentos de retención del riesgo, que pueden ser empleados para constituir esquemas que permiten transferir el riesgo a los mercados de seguros/reaseguros. Lo anterior, conlleva que en primera instancia se estimen los riesgos a cubrir, para posteriormente establecer un mecanismo compuesto por reservas y/o instrumentos de transferencia de riesgo.

Es importante mencionar que en este indicador solo se evalúa por la existencia de la norma, no se evalúa su cumplimiento.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Revisar la normatividad relacionada con la gestión de los activos del estado.
2. Revisar la normatividad relacionada con normas de control interno, activos de la administración pública o con los códigos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos.
3. Indagar si existe una entidad a cargo de la gestión o administración de los activos públicos, y en caso de que exista, consultar a dicha área.
4. Consultar al sector Hacienda, Finanzas o Economía o entidad equivalente.
5. Consultar a la institución rectora de la GRD en el país.

Vínculo con otros indicadores

PF-1C-1

Si las unidades de gestión territorial tienen la obligación de cubrir sus activos públicos, podría ser que dicha norma también establezca las mismas responsabilidades para los sectores respectivos.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido

Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad nacional que establezca de manera explícita la obligación de las entidades sectoriales de proteger financieramente los activos públicos bajo su responsabilidad con pólizas de seguro u otras formas de cobertura (p.ej. auto-ahorro/seguro).

El indicador indaga por la existencia de normatividad. El indicador no indaga por la existencia de seguros contratados por el sector público, es decir, no se respalda su cumplimiento a través de evidencias de que uno o más sectores cuentan con pólizas de seguros vigentes aplicables a los activos públicos bajo su responsabilidad. Sin embargo, de darse la situación descrita, debe quedar reflejada en la justificación respectiva.

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Panamá 2014. La DICRE manifestó en la entrevista que todas las entidades sectoriales deben cubrir sus activos públicos. Lo anterior en razón a lo estipulado en el Decreto de Gabinete No. 17, de 5 junio de 1991, por el cual se establece el manejo de los seguros del Estado (PF 1B-4a): (i) Artículo 3. *"La Comisión deberá establecer un sistema moderno de administración de riesgos, por medio de concurso, según lo establecido en el Código Fiscal, con la participación de la mayor cantidad de corredores profesionales de seguros para el manejo, organización y reclamación de los seguros de cada una de las instituciones..."*; (ii) Artículo 5. *"Este sistema será diseñado con el objeto de que se considere al Estado Panameño como un solo cliente..."*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. En el numeral 7 del Artículo 33 de la LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.522 de septiembre 6 de 2002, relacionado con *"Deberes y Prohibiciones de los Funcionarios o Funcionarias Públicos"* se estipula como deber *"Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la Administración Pública confiados a su guarda, uso o administración"*. De manera consistente, en el título II de la *"Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015"*, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.161 del miércoles 10 de diciembre de 2014, dentro de los proyectos de la Procuraduría General de la Republica se encuentra N.E: 124237, COD. PPTO: 250041000 para *"Garantizar y resguardar los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República"*. No obstante, la condición se considera negativa dado que no se hace referencia explícita a la obligatoriedad del aseguramiento.

Código PF-1B-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿Existe normatividad sobre incentivos para el aseguramiento frente al riesgo de desastres de la vivienda por parte de los privados?	
Descripción general del indicador	
<p>La reparación y reconstrucción de viviendas tras la ocurrencia de un desastre constituye una de las necesidades de financiamiento más importantes, por ser la vivienda uno de los activos esenciales de la población. Usualmente no hay una responsabilidad respaldada normativamente para que los gobiernos apoyen la reparación y/o reconstrucción de las viviendas de la población más vulnerable, pero sí hay una obligación contingente moral para que apoyen estos temas.</p> <p>Si la vivienda de una parte significativa de la población está asegurada, el gobierno podrá asignar más recursos para atender a la población más vulnerable o para canalizar recursos para cubrir otras necesidades urgentes. Es por ello que se considera una buena práctica que la vivienda de los privados esté asegurada. En ese sentido, se indaga si existe normativa nacional o algún programa vigente a nivel nacional que promueva o incentive el aseguramiento por parte de los privados de su vivienda frente a desastres.</p> <p>Este indicador no indaga por la obligatoriedad de suscripción de seguros relacionados con créditos hipotecarios. Tampoco indaga por las políticas de las compañías privadas de seguros relacionadas con mejoras en la tarifa de la póliza como consecuencia de realizar intervenciones físicas para reducir el riesgo.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar con el gremio asegurador respecto de la existencia de este tipo de normatividad o de programas a nivel nacional que incentiven el aseguramiento de la vivienda por sus propietarios. 2. Consultar al sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente). 3. Consultar con el sector de la vivienda. 4. Revisar la información disponible de la página web del ente de supervisión del mercado de seguros. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla la condición del indicador, la normatividad identificada debe incluir incentivos para el aseguramiento por parte de los privados de su vivienda por riesgo de desastres, los cuales deben ser mencionados y descritos en la justificación respectiva. También se cumpliría el indicador si a falta de normatividad existiera un programa vigente a nivel nacional que incentive dicho aseguramiento.</p> <p>El indicador no se cumple a través de la obligatoriedad de asegurar la vivienda cuando se suscribe un crédito hipotecario.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Haití 2014. En el PLAN STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT D'HAITI (PF-1B-5a), aprobado en 2012 se estipula: "*SOUS-PROGRAMME 2.5.1 : AMÉLIORER L'ACCÈS AUX ASSURANCES. Nécessairement, compte tenu des ressources limitées de l'État, il faut s'appuyer au maximum sur le secteur privé afin de favoriser l'accroissement souhaité du recours aux assurances et, à court terme, rendre l'assurance obligatoire pour divers actes ou diverses situations de risques. Dans le cadre du prochain PTI, il faudra identifier et mettre en oeuvre les mesures requises pour améliorer la couverture des assurances dans tous les domaines, et notamment concernant : (i) l'assurance automobile ; (ii) l'assurance vie ; (iii) l'assurance santé ; (iv) l'assurance agricole ; (v) les risques professionnels ; (vi) les biens meubles et immeubles ; et (vii) l'assurance multirisque*". Es decir, se promueve el aseguramiento de bienes inmuebles y muebles del sector privado. Cabe mencionar que Clinton Bush Haití Fund está realizando inversiones en una Compañía de Aseguramiento Alternativa para expandir la oferta de productos de aseguramiento: comercial, automóbiles, vida, salud, seguro funerario, a través de microseguros. "

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Costa Rica 2014. La Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) de 1986 establece en su Artículo 168.- "*Toda operación hipotecaria realizada para los fines de esta ley, otorgada por una entidad autorizada, deberá contar con el respaldo de un seguro de incendio y terremoto, que cubra el avalúo de la vivienda existente o de la que esté en proceso de construirse, y de un seguro temporal de desgravamen hipotecario decreciente, emitidos ambos al costo por el Instituto Nacional de Seguros, a cuyo efecto éste y el Banco deberán negociar las primas correspondientes*". No obstante, no se considera cumplido el indicador en razón a que los incentivos están relacionados con el otorgamiento de créditos hipotecarios, hipótesis expresamente exceptuada del protocolo de aplicación del iGOPP.

Código PF-1C-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. <i>¿Existe normatividad que establezca que las entidades de las Unidades de Gestión Territorial deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro u otro tipo de mecanismo equivalente?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Ante la ocurrencia de desastres, los gobiernos son responsables por los activos públicos a su cargo, que han sido adquiridos y/o construidos, entre otros, con recursos provenientes de los impuestos pagados por los ciudadanos. Dentro de este contexto, se considera relevante que las unidades de gestión territorial (UGT) cubran los activos a su cargo con pólizas de seguros u otro instrumento financiero equivalente ante la ocurrencia de desastres. Esto debe estar establecido por normatividad que asigne a las UGT que tengan otorgadas competencias en el uso y ordenación del suelo, responsabilidades en este tema.</p> <p>Dentro de los instrumentos financieros equivalentes se consideran esquemas de auto-ahorro/seguro, los cuales son instrumentos de retención del riesgo, que pueden ser empleados para constituir esquemas que permiten transferir el riesgo a los mercados de seguros/reaseguros. Lo anterior conlleva que en primera instancia se estimen los riesgos a cubrir, para posteriormente establecer un mecanismo compuesto por reservas y/o instrumentos de transferencia de riesgo.</p> <p>Es importante mencionar que este indicador solo indaga por la existencia de normatividad y no se evalúa si las entidades cumplen con lo establecido en dicha normatividad.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad relacionada con la gestión de los activos del estado. 2. Revisar la normatividad relacionada con normas de control interno o con los códigos disciplinarios aplicables a los funcionarios públicos que laboran en las UGT. 3. Revisar normatividad relacionada con el funcionamiento y obligaciones de las UGT que tengan asignadas competencias en el uso y ordenación del suelo, para lo cual hay que revisar la normatividad que establece competencias en el uso y ordenación del suelo. 4. Indagar si existe responsable a cargo de la gestión de los activos públicos y, en caso de que exista, consultar a dicha área. 5. Consultar al sector de Hacienda o entidad equivalente. 6. Consultar a la institución rectora de la GRD en el país. 7. Consultar a las instancias de control de las UGT o, en su caso, a la institución a cargo de su supervisión. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1B-3	Si los sectores tienen la obligación de cubrir sus activos públicos es probable que dicha norma también obligue a las UGT.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir normatividad que establezca de manera explícita que las unidades de gestión territorial (UGT) que tengan asignadas competencias en el uso y ordenamiento del territorio son responsables de proteger financieramente sus activos públicos con pólizas de seguro u otros instrumentos financieros equivalente (p.ej. Auto-ahorro/seguro).</p> <p>Si la normatividad identificada no hiciera referencia a todas las UGT existentes en el país, la condición se deberá cumplir al menos para la unidad de gestión territorial de menor jerarquía (Municipio o equivalente) existente en el país.</p> <p>Cabe mencionar que se indaga por las UGT que tengan competencias en el uso y ordenamiento del territorio, en razón a que estas podrían estar en capacidad de cubrir los activos públicos a su cargo. Las UGT sin este tipo de competencias probablemente no estarían en la capacidad de cubrir los activos públicos a su cargo.</p>	

El indicador indaga por normatividad. El indicador no indaga por la existencia de seguros contratados por las UGT, es decir, no se respalda su cumplimiento a través de evidencias de que una o más UGT cuenten con pólizas de seguros vigentes aplicables a los activos públicos bajo su responsabilidad.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Perú 2013. El Decreto Supremo No. 007-2008-Vivienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N.º 29151, General del Sistema Nacional de los Bienes Estatales, del 14 de marzo de 2008 (PF-1C-1a), señala en el artículo 10, que dentro de las funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades está la de “Contratar las pólizas de seguros para los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su administración, conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal”. En ese sentido, las entidades de los niveles territoriales deben cubrir sus activos públicos con pólizas de seguro.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. La Ley General de Protección Civil de 2012 establece en su artículo 18 que “... Es responsabilidad de los gobiernos de los estados y del gobierno del Distrito Federal, conforme a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura de sus entidades federativas...”. Adicionalmente, en el capítulo de esa Ley destinado a los instrumentos financieros de gestión del riesgo, el artículo 88 estipula que: “El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas, y el del Distrito Federal, buscarán y propondrán mecanismos para la transferencia de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros”. Cabe mencionar, que en México los estados corresponden a entidades territoriales. En este sentido, la normativa no alcanza también a municipios, por lo que el indicador no se cumple a cabalidad.

Código: PF-1C-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿Existe normatividad que obligue a la implementación de estructuras de protección financiera ante desastres en la ciudad capital del país?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>De manera general, la ciudad capital suele concentrar el mayor valor de exposición ante las amenazas por fenómenos naturales. En este sentido, es conveniente que implemente estructuras de protección financiera ante el riesgo de desastres.</p> <p>Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde esté la sede administrativa de gobierno (poder ejecutivo) o, alternatively, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.</p> <p>En ese sentido, se considera una buena práctica que la normatividad la obligue a la implementación de estructuras de protección financiera o de instrumentos de retención y/o transferencia del riesgo con el fin de disminuir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Investigar en la normatividad general que rige a las UGT (por ejemplo, leyes orgánicas de organización territorial). 2. Indagar en la normatividad de GRD. 3. Indagar en la normatividad relacionada con la gestión de las obligaciones contingentes. 4. Consultar con el sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente), si tienen conocimiento sobre una normatividad que obligue a la ciudad capital a implementar estructuras de protección financiera ante desastres. 5. Consultar con el sector hacendario, de finanzas o de economía (o entidad equivalente) de la ciudad capital (ciudad donde este la sede administrativa de gobierno o, alternatively, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país) si tienen conocimiento sobre una política al respecto. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-2-1	Las acciones en términos de protección financiera de la ciudad capital podrían estar soportadas en una norma que establezca dichas actividades.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador debe existir normatividad de carácter nacional o territorial que disponga que la ciudad capital del país o alguna otra, ya sea por su población o importancia, deba implementar estructuras de protección financiera o de instrumentos de retención y/o transferencia del riesgo con el fin de disminuir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.</p> <p>Se considera cumplido el indicador con la existencia de normatividad que aplique a la ciudad capital, ciudad donde se encuentra ubicada la sede administrativa de gobierno (poder ejecutivo) o, alternatively, la ciudad que más población concentre o que más aporte al PIB del país.</p>	

"Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>"

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. De acuerdo con el Artículo 13, referente al "*Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos*" de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (PF-1C-2a), publicado en el Registro Oficial No. 166, del 21 de enero de 2014, que modifica el artículo 140 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización (PF-1C-2b), publicado en el registro oficial suplemento 303, del 19 de octubre de 2010 ."*La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley*". La condición es positiva dado que la gestión del riesgo incluye competencias para los territorios relacionadas con la transferencia del riesgo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En Colombia, en la ciudad de Bogotá D.C., el Decreto 545 de 2006, que estipula las funciones de la Secretaría Distrital de Hacienda incluye en el artículo 5, numeral j, dentro de las funciones de la Oficina de Análisis y Control de Riesgo "*Proponer una estrategia financiera para la cobertura del Distrito frente a la ocurrencia de desastres naturales*". La condición se considera negativa, en razón a que dicha norma no obliga a la implementación de estructuras de protección financiera.

Código PF-1C-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿La ciudad capital del país cuenta con un fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la ciudad capital cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres (respuesta, rehabilitación y reconstrucción).</p> <p>Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde se encuentra ubicada la sede administrativa de gobierno (poder ejecutivo) o, alternativamente, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.</p> <p>Cabe mencionar, que para efectos de este indicador no se consideran como fondos líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). No es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar la normatividad que regula la GRD en el país y revisar si de manera explícita se hace referencia a que las UGT que tengan asignadas competencias en el uso y ordenación del suelo, deben contar con sus propios fondos o instrumento financiero equivalentes para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. Cabe mencionar que se indaga por las UGT que tengan competencias en el uso y ordenamiento del territorio, en razón a que éstas podrían estar en capacidad de cubrir los activos públicos a su cargo. Las UGT sin este tipo de competencias probablemente no estarían en la capacidad contar con un fondo o instrumento financiero equivalente para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres (respuesta, rehabilitación y reconstrucción). 2. Revisar la normatividad que rige las finanzas públicas de la ciudad capital, y ver si establece un fondo o instrumento financiero equivalente para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. 3. Revisar la normatividad que rige la GRD de la ciudad capital, y ver si establece un fondo o instrumento financiero equivalente para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. 4. Revisar los Planes de Desarrollo o de GRD o los documentos de política de GRD de la ciudad capital, y revisar si establece un fondo o instrumento financiero equivalente para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. 5. Revisar normatividad que regula las responsabilidades y funciones de las UGT. 6. Indagar con la institución rectora de la gestión del riesgo de desastres de la ciudad si dispone de un instrumento financiero propio (es decir, no un fondo del nivel nacional) que esté habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. 7. Revisar con el área de finanzas de la ciudad capital o con el área rectora de GRD de la ciudad capital si el fondo está habilitado, es decir que cuente con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1C-4 PF-1C-5	La ciudad analizada para estos indicadores debe ser la misma. La normativa revisada o usada para verificarlos puede guiar y validar el presente indicador.
PF-2-1	Si la ciudad sede del gobierno nacional cuenta con una estructura de protección financiera, las herramientas de retención de riesgo a las que se haga mención en la misma podrían respaldar el cumplimiento del presente indicador, siempre y cuando estén habilitadas.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido
<p>Se debe verificar que se cumplan las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencia de la existencia en la ciudad capital de un fondo o instrumento financiero equivalente facultado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. 2. Evidencia que dicho fondo esté habilitado, es decir, que cuente con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). <p>Dicho instrumento financiero puede ser un fondo de reservas, calamidades, emergencias o desastres, entre otras denominaciones.</p> <p>Para efectos de este indicador no se consideran como fondos a líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). No es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).</p> <p>Si el país es centralizado y existe un fondo o mecanismo del orden nacional para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, pero no existe el instrumento financiero a nivel de la ciudad capital, no se considera el indicador cumplido.</p> <p>Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde se encuentra ubicada la sede administrativa de gobierno (poder ejecutivo) o, alternativamente, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>
Ejemplos de cumplimiento en países de la región
<p>México 2014. La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de julio de 2011 (PF-1C-4a), tiene el objeto de “... regular la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares, en la aplicación de los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre”. Esta ley establece tres fondos o instrumentos financieros destinados a distintas fases de la gestión de los desastres: el FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres, el FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, y el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres. El FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres tiene como finalidad realizar acciones preventivas de carácter urgente, para evitar afectaciones a la vida y patrimonio de la población o la estructura de la ciudad ante la inminente ocurrencia de fenómenos perturbadores (artículo 7, XXVI). El FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias es activado mediante las declaratorias de emergencia y desastre, para el otorgamiento de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos perturbadores y la recuperación de los daños causados por los mismos (artículo 7, XXVII). Y finalmente el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres que apoya acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores (artículo 7, XXVIII).</p>

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Barbados 2018. The iGOPP team was informed at mission by the Department of Emergency Management (DEM) that in a context of centralization the central level is in charge of assigning resources for attending the occurrence of disasters at local level. Consequently, Bridgetown has not a fund or equivalent mechanism for financing or co-financing disaster management activities.

Traducción:

Barbados 2018. El equipo de iGOPP fue informado en misión por el Departamento de Gestión de Emergencias (DEM) de que, en un contexto de centralización, el nivel central se encarga de asignar recursos para atender los desastres a nivel local. En consecuencia, Bridgetown no tiene un fondo o mecanismo equivalente para financiar o cofinanciar actividades de gestión de desastres.

Código PF-1C-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad sede del gobierno del país, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la ciudad capital cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente (fideicomiso, cuenta bancaria con destinación específica) habilitado (esto es, con recursos asignados) para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres que tenga capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.</p> <p>Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde este la sede administrativa de gobierno o, alternativamente, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Considerar el fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-1C-3. 2. Consultar con la autoridad del sector hacendario, economía o finanzas (o entidad equivalente), así como con la entidad nacional rectora de la GRD de la ciudad capital, si el fondo identificado en el indicador PF-1C-3 tiene capacidad de acumulación de recursos en el tiempo. 3. Revisar la normatividad de creación y/u operación del fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-1C-3. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1C-3	El fondo o instrumento financiero identificado en dicho indicador deber ser el mismo a ser considerado en el presente.
PF-1C-5 PF-2-1 PF-2-12	La ciudad analizada para dichos indicadores debe ser la misma que para el presente. La normatividad revisada o empleada para verificar dichos indicadores puede guiar la búsqueda de información o incluso validar el presente indicador.
PF-2-1	Si la ciudad analizada cuenta con una estructura de protección financiera que incluye algún instrumento de retención de riesgo, entre sus características podría incluirse la condición indagada por el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador deben satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que la ciudad capital cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres. 2. Evidencia de que dicho fondo cuente con la capacidad de acumulación de recursos en el tiempo. <p>Dicho instrumento financiero puede ser un fondo de reservas, calamidades, emergencias o desastres, entre otras denominaciones.</p> <p>Cabe mencionar que, para efectos de este indicador, no se consideran como fondos a líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). No es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).</p> <p>Este indicador solo puede cumplirse si previamente se ha corroborado que la ciudad capital cuenta con un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado para el manejo de desastres, lo cual se evidencia</p>	

con el cumplimiento del indicador PF-1C-3, ya que mediante el presente indicador se indaga por la capacidad de acumulación de recursos de dicho instrumento financiero
 Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde este la sede administrativa de gobierno o, alternativamente, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. De acuerdo al Artículo 2 de la Resolución Nro. 0008, mediante la cual el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana expide el “Reglamento de Gestión del Fondo de Emergencias de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y Convivencia Ciudadana” (PF-1C-4a), “... Si los recursos del Fondo de Emergencia no se agotan al final del año, serán acumulables para el siguiente período para actividades de atención y respuesta de emergencias”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz manifestó que el Fondo de Atención Inmediata de Emergencias y/o Desastres del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene capacidad de acumular recursos en el tiempo en razón a que las Normas de Contratación de Bienes y Servicios permiten la contratación a varios años para obras multigestión. No obstante, la condición es negativa en razón a que no se encontró normatividad que soportará la acumulación de recursos. Cabe mencionar que el Fondo aún no ha sido reglamentado, de acuerdo a lo manifestado en entrevista sostenida con la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Código PF-1C-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. <i>¿El fondo o mecanismo equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres de la ciudad capital del país, está basado en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y/o la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que la ciudad capital cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica) habilitado (esto es, con recursos asignados) para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres que esté dimensionado de acuerdo a las necesidades de la ciudad capital. En ese sentido, el fondo debería tener definida una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y en la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.</p> <p>Este indicador solo puede cumplirse si previamente se ha corroborado que la ciudad capital cuenta con un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado para el manejo de desastres, lo cual se evidencia con el cumplimiento del indicador PF-1C-3.</p> <p>Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde esté la sede administrativa de gobierno o, alternativamente, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Considerar el fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-1C-3. 2. Consultar con la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente), o con la institución nacional rectora de la GRD de la ciudad capital si dicho fondo o instrumento financiero equivalente está dimensionado con base a la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. 3. Revisar la normatividad vinculada a la creación y/u operación del fondo o instrumento financiero equivalente. 4. Indagar con el área legal de la entidad responsable el fondo o instrumento financiero equivalente si está basado en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1C-3 PF-1C-4	El fondo o mecanismo identificado en dichos indicadores debe ser el mismo a ser considerado en el presente.
PF-1C-3 PF-1C-4 PF-2-1 PF-2-12	La ciudad analizada para dichos indicadores debe ser la misma que para el presente. La normatividad revisada o empleada para verificar dichos indicadores puede guiar la búsqueda de información o incluso validar el presente indicador.
PF-2-1	Si la ciudad analizada cuenta con una estructura de protección financiera que incluye algún instrumento de retención de riesgo, entre sus características podría incluirse la condición indagada por el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla este indicador deben satisfacerse las siguientes condiciones:

1. Que la ciudad capital cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres (debe ser el mismo fondo identificado en PF-1C-3).
2. Que dicho fondo esté dimensionado conforme a una regla basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores en la ciudad considerada.

Dicho instrumento financiero puede ser un fondo de reservas, calamidades, emergencias o desastres, entre otras denominaciones. Cabe mencionar, que para efectos de este indicador no se consideran como fondos a líneas presupuestarias con el nombre de Fondo o similar. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). No es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).

Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde esté la sede administrativa de gobierno o, alternativamente, la ciudad que mayor población concentre o que más aporte al PIB del país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. De la lectura del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2012; la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009, y de su Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009, que conformarán el marco normativo financiero-presupuestario no se desprende que la determinación de los recursos del Fondo de Atención a Desastres y Emergencias (FADE) y el Fondo de Prevención de Desastres (FOPDE) se sujeten a una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada e información calculada sobre las pérdidas por desastres en ejercicios anteriores. Con relación a la regla de acumulación, la Ley estipula “Artículo 68. Para efectos de la constitución del Fideicomiso Preventivo de Desastres (FIPDE), los recursos financieros, serán asignados en un 20 por ciento del saldo con el que el FADE cuente al final del ejercicio, destinándose como aportaciones. Si en el año del ejercicio respectivo no quedara remanente alguno, se podrá utilizar hasta un 20 por ciento de la cantidad que del fideicomiso FADE se hubiere constituido con los remanentes de años inmediatos al anterior”, es decir, no está basada en una regla óptima de acumulación y gasto basada en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.

Código PF-2-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿La ciudad capital del país cuenta con una estructura de protección financiera en caso de desastre?	
Descripción general del indicador	
<p>De manera general, la ciudad capital suele concentrar una elevada exposición de población, activos económicos e infraestructuras, además de reunir a las principales instituciones del estado. En ese sentido, es conveniente que desarrolle estructuras de protección financiera en caso de desastres, con el fin de disminuir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres.</p> <p>Se considera que la ciudad capital cuenta con una estructura de protección financiera si tiene vigentes al menos dos instrumentos financieros para atender la ocurrencia de desastres que sean diferentes a la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestales y contratar créditos. Cabe mencionar que los dos instrumentos pueden ser ambos de retención del riesgo, de transferencia de riesgo, o uno de retención y el otro de transferencia de riesgo. A efectos de este indicador, tampoco se considera como instrumento financiero contar con un rubro presupuestal para contratar seguros.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con el área de hacienda, economía o finanzas (o entidad equivalente) de la ciudad capital. 2. Consultar con el área encargada de la GRD de dicha ciudad. 3. Consultar con la autoridad del sector hacendario, de economía o de finanzas (o entidad equivalente) del nivel nacional, particularmente con el área a cargo del seguimiento a las UGT. 4. Consultar a la institución rectora de la GRD del nivel nacional. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1C-3 PF-1C-4 PF-1C-5	La ciudad analizada para estos indicadores debe ser la misma, por tanto, la normativa revisada o usada para verificarlos puede guiar y validar el presente indicador.
PF-2-12	Si la ciudad capital cuenta con un instrumento de transferencia del riesgo de desastres, éste podría ser uno de los dos instrumentos de protección financiera por los cuales indaga el indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador, se deberá proveer documentación que permita verificar que la ciudad capital tenga vigentes al momento de la aplicación del iGOPP al menos dos instrumentos de protección financiera ante la ocurrencia de desastres, sin importar si son de retención o transferencia del riesgo.</p> <p>Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde esté la sede administrativa de gobierno o, alternativamente, la ciudad que más población concentre o que más aporte al PIB del país.</p> <p>Dentro de los instrumentos financieros pueden considerarse, por ejemplo: fondos, aseguramientos colectivos, créditos contingentes, bonos catastróficos, Cat Bonds, Cat Swaps entre otros.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de julio de 2011 (PF-2-1a), dispone “...*la integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, así como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares, en la aplicación de los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y recuperación para la salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre*”. En esta protección financiera se consideran los tres instrumentos financieros destinados a distintas fases de la gestión de los desastres: el FIPDE o Fideicomiso Preventivo de Desastres, el FADE o Fondo de Atención a Desastres y Emergencias y el FOPDE o Fondo de Prevención de Desastres.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. Se encontró evidencia que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) cuenta con un instrumento de retención del riesgo, en razón a que mediante Ordenanza Metropolitana N.º 265 del año 2012 el Concejo Metropolitano de Quito aprobó una Reforma a la Ordenanza Metropolitana No 265 del año 2008 con la que se creó el Sistema Metropolitano de Gestión de Riesgos. En el artículo 1 de esa reforma se crea el Fondo Metropolitano para la Gestión de Riesgos y la Atención de Emergencias constituido por “*un aporte anual no menor al 0,5% del presupuesto general del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y por un 5% de la recaudación de la tasa anual de seguridad*”. Con relación a instrumentos de transferencia del riesgo, Rocafuerte Seguros manifestó que el MDMQ asegura como un portafolio su estructura municipal. No obstante, no fue posible acceder ni a la póliza respectiva, ni a la solicitud de contratación de seguros en el portal de Compras Públicas. De otra parte, el MDMQ no cuenta con líneas de crédito contingente ante la ocurrencia de desastres. Es decir, no se pudo evidenciar que el MDMQ cuente con una estructura de protección financiera en caso de desastres.

Código PF-2-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. <i>¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha dimensionado las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La estimación anticipada de las necesidades de recursos para cubrir los gastos asociados a los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción derivados de la ocurrencia de eventos catastróficos y poco frecuentes es fundamental para definir la combinación óptima de los diferentes instrumentos financieros que conformarán la estrategia de protección financiera.</p> <p>Se considera una buena práctica de estimación de estas necesidades de recursos el cálculo de las pérdidas máximas probables (PMP) empleando modelos probabilistas de eventos catastróficos para distintos periodos de retorno considerando las diferentes amenazas naturales.</p> <p>El indicador evalúa si el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, o la entidad que el país haya establecido para liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera ante desastres, o bien la entidad rectora de la GRD, ha realizado, encargado o se ha apropiado de los resultados de estudios que calculen la PMP para su toma de decisiones.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad equivalente), o con la entidad que el país haya establecido para liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera ante desastres, acerca de la existencia de estudios para dimensionar las necesidades de recursos financieros para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno. 2. Consultar con la entidad rectora de la gestión del riesgo de desastres en el país sobre la existencia de dichos estudios. 3. En el caso que el país haya adoptado instrumentos financieros de retención o transferencia de riesgo, indagar por el tipo de información empleada para respaldar el dimensionamiento de dichos instrumentos financieros y, en general, para la toma de decisiones al respecto. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-1 MG-2-7	Los documentos vinculados con la estrategia o con instrumentos de protección financiera para desastres podrían incluir referencias sobre estudios de PMP.
PF-2-3	Los estudios referidos en este indicador podrían incluir la estimación de la PMP.
PF-2-10	Los documentos utilizados para la validación del indicador podrían contener las consideraciones necesarias sobre PMP que indaga el presente indicador.
PF-2-17	La contratación de instrumentos de transferencia del riesgo para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto puede tener como soporte este tipo de estudios.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para cumplir este indicador se deben satisfacer las siguientes condiciones:

1. Existencia de al menos un estudio que haya dimensionado las necesidades de recursos del país para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos poco frecuentes.
2. Que el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía (o entidad equivalente), o la entidad que el país haya establecido para liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera ante desastres, haya elaborado un documento oficial que trate sobre aspectos relacionados con la protección financiera del riesgo de desastres y que incluya datos o resultados del referido estudio sobre PMP, aunque éste haya sido realizado por terceros (p.ej. BID o Banco Mundial).

Con relación a la segunda condición, lo que interesa evidenciar es que la entidad se ha apropiado de las estimaciones de PMP para evaluar las necesidades de recursos. Puede darse el caso en que dicha apropiación se exprese mediante la inclusión en documentos oficiales de los datos de dichos estudios. En ese sentido, no tienen que haber sido realizados o contratados necesariamente por el área de Hacienda o la entidad responsable de la estrategia de protección financiera, pero sí debe de constatar una apropiación de sus resultados, por ejemplo, a través de documentos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o de la entidad rectora de GRD.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bahamas 2017. The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF), which is a risk pooling facility, published in August 2013 the Bahamas Country Risk Profile (PF-2-2). This risk profile *“is aimed at providing decision makers with a clear picture of the key risks which the country faces in order to guide national catastrophe risk management and inform decision making for both risk reduction and risk transfer (via CCRIF coverage and other mechanisms which may be available)”*. The Ministry of Finance of the Bahamas has used this study as an input in the decision-making process to buy the insurance policy offered by CCRIF. The Bahamas Risk profile includes estimative of: (i) PML for different return periods for Tropical Cyclone; (ii) earthquake hazard profile; and (iii) wind hazard profile.

Traducción:

Bahamas 2017. El *Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF)*, que es un fondo común de riesgo, publicó en agosto de 2013 el Perfil de riesgo país de Bahamas (PF-2-2). Este perfil de riesgo *“está dirigido a proporcionar a los tomadores de decisiones un claro imagen de los riesgos clave que enfrenta el país para guiar la gestión nacional del riesgo de catástrofes e informar la toma de decisiones tanto para la reducción del riesgo como para la transferencia del riesgo (a través de la cobertura CCRIF y otros mecanismos que puedan estar disponibles)”*. El Ministerio de Finanzas de las Bahamas ha utilizado este estudio como un aporte en el proceso de toma de decisiones para comprar la póliza de seguro ofrecida por CCRIF. El perfil de riesgo de Bahamas incluye una estimación de: (i) PML para diferentes períodos de retorno del ciclón tropical; (ii) perfil de peligro de terremoto; y (iii) perfil de riesgo de viento.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. En Guatemala se han realizado al menos dos estudios, que incluyen el dimensionamiento de las necesidades de recursos para cubrir Pérdidas Máximas Probables (PMP) por eventos catastróficos para diferentes periodos de retorno: (i) Evaluación Probabilista de Riesgo de Guatemala, realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2009, que incluye la estimación de los porcentajes de daños respecto a la suma asegurada (PMP) por huracán y por terremotos en Guatemala, utilizando la Plataforma CAPRA; y (ii) Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) a través de la Unidad de Conservación de Carreteras (COVIAL), identificó que el mayor impacto fiscal asociado a eventos de la naturaleza está relacionado con el sector del transporte. No obstante, el país no se ha empoderado de estos estudios, lo cual se refleja en el informe de avance en la implementación del Marco de Acción de Hyogo para el período 2011-2013, el cual no reporta avances en este frente.

Código PF-2-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. <i>¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha dimensionado las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Para efectos de apoyar la sostenibilidad fiscal, se considera relevante que los gobiernos incluyan en su presupuesto anual recursos para atender los gastos generados por la ocurrencia de desastres ocasionados por eventos naturales frecuentes. Se considera una buena práctica para dimensionar estos recursos, la realización de estudios, generalmente basados en datos históricos de pérdidas, que dimensionen las necesidades de financiamiento para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes.</p> <p>El indicador indaga si el área de Hacienda, Finanzas o Economía o la entidad que el país ha establecido para liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera o la entidad rectora de la GRD ha realizado estimaciones sobre los recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes, o si se ha empoderado de los resultados de cálculos o estimaciones similares realizadas por otras instituciones (nacionales o internacionales).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con la autoridad del sector hacendario, de economía o de finanzas (o entidad equivalente) o con la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera sobre la existencia de estudios para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes. 2. Consultar con la institución rectora de la gestión del riesgo de desastres en el país sobre la existencia de estudios que dimensionen las necesidades de recursos previstas para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes. 3. Verificar si el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía (o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia de protección financiera) o la entidad rectora de la GRD se ha apropiado de algún estudio realizado por otra institución nacional o internacional sobre el dimensionamiento de las necesidades de recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes. 4. En caso que el país haya adoptado instrumentos financieros de retención o transferencia de riesgo indagar por el tipo de información empleada para dimensionar dichos instrumentos financieros. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-7	Indagar si entre la información utilizada para el diseño, establecimiento o contratación de los instrumentos de transferencia de riesgo se han realizado estimaciones de pérdidas por eventos frecuentes.
PF-2-2	Los estudios para estimar Pérdidas Máximas Probables podrían incluir la estimación de las pérdidas asociadas a eventos frecuentes.
PF-2-17	La contratación de instrumentos de transferencia del riesgo para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto puede tener como soporte este tipo de estudios.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para que se cumpla el indicador se debe satisfacer al menos una de las siguientes condiciones:

1. Que el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Economía (o la entidad que el país ha establecido que debe liderar el diseño e implementación de la estrategia de protección financiera) o la entidad rectora de la GRD ha desarrollado algún estudio para dimensionar las necesidades de recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes.
2. Alternativamente, que dichos estudios hayan sido realizados por terceros (p.ej. BID o BM) y el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Economía (o la entidad que el país ha establecido para liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera) o la entidad rectora de la GRD se haya empoderado de sus resultados. Este empoderamiento debe verificarse a través de algún documento oficial elaborado por dicha entidad, donde se mencionen los resultados de dicho estudio.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. Esto se logró con el R-FONDEN o Sistema de Estimación de Pérdidas para el Riesgo Federal (PF-2-3a), un modelo de evaluación probabilística del riesgo de desastres, desarrollado en 2010 a solicitud del Comité Técnico del FONDEN, que considera los principales activos públicos que cubre el FONDEN (infraestructura carretera, hidráulica, escuelas y hospitales y las viviendas de la población de bajos recursos enfrentan ante las amenazas naturales más importantes) y proporciona modelos de posibles daños por desastre a dichos activos con el objeto de perfeccionar las estrategias para el financiamiento de riesgos. El R-FONDEN provee métricas tales como la Pérdida Anual Esperada y Curvas de Excedencia de Pérdida. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público manifestó que R-FONDEN permite estimar pérdidas tanto para eventos catastróficos como para eventos recurrentes.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) no ha dimensionado las necesidades de recursos para cubrir anualmente los procesos de respuesta, rehabilitación y reconstrucción ocasionados por eventos menores y frecuentes. Cabe destacar que el MEPyD ha realizado estudios de dimensionamiento de pérdidas anuales esperadas, pero solo para eventos extremos o severos, como huracanes y sismos, que están fuera del contexto que analiza este indicador.

Código PF-2-4

Pregunta de respuesta cerrada	
4. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres?	
Descripción general del indicador	
Se considera una buena práctica que existan estándares o lineamientos respecto de los contenidos de los términos y condiciones de las pólizas de seguros que deben ser contratadas por las entidades públicas para cubrir sus edificaciones, ya que de esta manera se transfiere de manera adecuada al sector asegurador las potenciales pérdidas sobre activos del sector público.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con la autoridad del sector hacendario, finanzas o de economía (o entidad competente), de manera particular con el área de riesgo, o con las áreas rectoras de contratación pública (como, por ejemplo, las áreas a cargo de agregar la demanda de compras públicas) respecto de la existencia de estándares o lineamientos para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres. 2. Consultar con la asociación nacional de compañías aseguradores respecto de la existencia de estándares o lineamientos para el aseguramiento de edificaciones públicas en caso de desastres. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1B-3 PF-1C-1 PF-2-5 PF-2-6	La normatividad revisada o empleada para verificar estos indicadores podría contener los estándares por los cuales indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
Para que se cumpla el indicador debe existir un documento oficial con estándares o lineamientos sobre el contenido de los términos y condiciones de las pólizas de seguros que deben ser contratadas por las entidades públicas contra el riesgo de desastres, el cual debe haber sido aprobado o endosado por la autoridad o cabeza del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad competente), o por las áreas rectoras de contratación pública (como, por ejemplo, las áreas a cargo de agregar la demanda de compras públicas).	
<i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.	
Ejemplos de incumplimiento en países de la región	
Jamaica 2013. The Handbook of public sector procurement procedures, Volume 4 of 4, Procedures for the procurement of general insurance services, Ministry of Finance & the Public Service (October 2010) established that "Specifications of the insurance coverage required should be prepared in consultation with the Holding Broker and the Procuring Entity's insurance adviser (if any)". Given that it was not possible to find the specifications for the insurance coverage the condition is negative."	

Traducción:

Jamaica 2013. El Manual de procedimientos de adquisición del sector público, Volumen 4 de 4, Procedimientos para la contratación de servicios generales de seguros, Ministerio de Hacienda y Servicios Públicos (octubre de 2010) estableció que "*Las especificaciones de la cobertura de seguro requerida deben prepararse en consulta con el Holding Broker y el asesor de seguros de la Entidad Contratante (si corresponde)*". Dado que no fue posible encontrar las especificaciones para la cobertura del seguro, la condición es negativa.

Código PF-2-5

Pregunta de respuesta cerrada	
5. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado estándares para el aseguramiento de las concesiones de al menos un servicio básico o infraestructura crítica en caso de desastres?	
Descripción general del indicador	
<p>Las concesiones de servicios básicos y de infraestructura crítica (en ocasiones también referidos como líneas vitales) conllevan cuantiosas inversiones y resultan esenciales al momento de la respuesta y recuperación frente a situaciones de desastres. Se considera pertinente que este tipo de infraestructura y servicios estén asegurados y que existan estándares o lineamientos respecto de los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado. Lo anterior, con el fin de proteger financieramente los activos concesionados ante la ocurrencia de desastres.</p> <p>Los estándares o lineamientos para el aseguramiento de las concesiones de los servicios básicos o infraestructura crítica pueden estar incluidos en los contratos de concesión. En ocasiones puede suceder que dichos contratos o los referidos estándares o lineamientos para el aseguramiento sean elaborados por instituciones del estado diferentes al Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía, como por ejemplo el Ministerio de Transporte o las áreas rectoras de contratación pública (como por ejemplo las áreas a cargo de agregar la demanda de compras públicas).</p> <p>En el caso que el país no cuente con concesiones o alianzas público-privadas de servicios básicos o infraestructura crítica, el indicador se verifica con la existencia de un documento oficial que incluya los lineamientos o estándares para aseguramiento de infraestructura crítica o de servicios básicos (en ocasiones también referidos como líneas vitales) o de obra pública.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los servicios básicos y/o infraestructura crítica que haya sido concesionada o cuente con un esquema de alianza público-privada en el país. 2. Consultar con la autoridad del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad competente), de manera particular con el área de riesgo o las áreas rectoras de contratación pública (como por ejemplo las áreas a cargo de agregar la demanda de compras públicas) o el Ministerio de Transporte, respecto a la existencia de estándares para los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas por lo menos a las entidades que suscriben concesiones con el Estado, para un servicio básico o para una infraestructura crítica. 3. Consultar con la o las entidades que sean responsables de licitar concesiones (tanto de servicios básicos como de infraestructura crítica) en el país respecto de la existencia de estándares o lineamientos para los contenidos de las pólizas de seguros que deben ser exigidas a las entidades que suscriben concesiones con el Estado. 4. Revisar los contratos de concesión de servicios básicos y/o infraestructura crítica. 5. En el caso que el país no cuente con concesiones o alianzas público-privadas de servicios básicos o infraestructura crítica, revisar si existe un documento oficial que incluya los lineamientos o estándares para aseguramiento de una infraestructura crítica o un servicio básico (en ocasiones también referidos como líneas vitales) o de obra pública. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1A-4 PF-1A-5 PF-2-6 PF-2-13	La normatividad relacionada con el aseguramiento de riesgo de desastres en el país podría contener los lineamientos que busca verificar el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	

Para el cumplimiento de este indicador debe existir un documento oficial aprobado o endosado por alguna entidad pública (Hacienda, Finanzas, Economía o entidad a cargo de las compras públicas o de licitar concesiones, como por ejemplo el Ministerio de Transporte) que contenga los estándares o lineamientos sobre el contenido de las pólizas de seguros, que deben ser exigidas por lo menos a las entidades que suscriben concesiones con el Estado para un servicio básico y/o para una infraestructura crítica. Puede darse el caso que estos estándares apliquen tanto para concesiones, como para obras públicas.

En el caso que el país no cuente con concesiones o alianzas público-privadas de servicios básicos o infraestructura crítica, el indicador se podrá verificar con la existencia de un documento oficial que incluya los lineamientos o estándares para aseguramiento de una infraestructura crítica o de un servicio básico (en ocasiones también referidos como líneas vitales) o de una obra pública.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. De acuerdo a la normatividad vigente, existe infraestructura crítica a nivel federal que debe ser asegurada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público apoya estos procesos, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento de elaboración de programas de aseguramiento (PF-2-5a). Cada caso se analiza de acuerdo al tipo de infraestructura a ser cubierta. En ese sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite un documento de lineamientos a las diferentes dependencias. En caso de que la dependencia no acoja las recomendaciones, debe soportar su actuación. Lo anterior, en razón a lo estipulado en el Decreto de Uso Eficiente de Recursos. Para el caso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el numeral 1.1 de la convocatoria para la licitación pública nacional para la contratación del aseguramiento de los bienes patrimoniales y responsabilidades para la Secretaría de Educación Pública (PF-2-5b) se menciona que consultaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de los requisitos mínimos para contratación de seguros patrimoniales estipulados por la Secretaría de Función Pública.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. No se encontraron evidencias. Se analizó: (i) Ley Orgánica de incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la inversión extranjera, publicada en el Registro Oficial N° 652 del 18 de diciembre de 2015; (ii) Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el Registro Oficial 395 del 4 de agosto de 2008, y actualizada el 14 de octubre de 2013, la cual tiene un Capítulo sobre Garantías; (iii) Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo 1700, publicado en el Registro Oficial 588 del 12 de mayo de 2009, el cual tiene un Capítulo sobre contratación de seguros; (iv) Acuerdo No. 017 - CG - 2016 mediante el cual se expide el "Reglamento general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del sector público" el 15 de abril de 2016. Lo anterior fue ratificado tanto por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, como por el Ministerio de Economía y Finanzas

Código PF-2-6

Pregunta de respuesta cerrada	
6. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad competente, ha aprobado requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado?	
Descripción general del indicador	
Se considera una buena práctica establecer requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros de bienes de responsabilidad fiscal del Estado, con el fin de garantizar que sean capaces de responder ante el Estado en caso de ocurrencia de un desastre, es decir, que tengan capacidad para pagar ante la ocurrencia de siniestros. Por requisitos nos estamos refiriendo, por ejemplo a su calificación crediticia otorgada por firmas de riesgo crediticio, o a su experiencia.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con la autoridad del sector hacendario, de economía, o de finanzas (o entidad competente), particularmente con el área de riesgo (en caso que exista), respecto a la existencia de requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros de bienes de responsabilidad fiscal del Estado. 2. Consultar con el área responsable de la contratación estatal o de las compras del Estado (en caso que exista) respecto de la existencia de requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros de bienes de responsabilidad fiscal del Estado. 3. Consultar con la asociación nacional de aseguradores o entidad similar sobre la existencia de requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos algún bien de responsabilidad fiscal del Estado. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1B-3 PF-1C-1 PF-2-13	La normatividad revisada o empleada para verificar estos indicadores podría contener los requisitos mínimos por los cuales indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
Para que se cumpla este indicador debe existir un documento oficial aprobado o endosado por el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía (o entidad competente) o por el área responsable de la contratación estatal o de las compras del Estado (en caso que exista) que contenga los requisitos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros para al menos un bien de responsabilidad fiscal del Estado. Por requisitos nos estamos refiriendo, por ejemplo, a su calificación crediticia otorgada por firmas de riesgo crediticio, o a su experiencia.	
<i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	
No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.	

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó que los requisitos mínimos para la participación de los agentes aseguradores y reaseguradores en los contratos de seguros y de reaseguros lo establecen las dependencias en sus procesos de adjudicación de seguros. A manera ilustrativa, en el numeral 1.3 de la convocatoria para la licitación pública nacional para la contratación del aseguramiento de los bienes patrimoniales y responsabilidades para la Secretaría de Educación Pública se señala que las compañías de reaseguro deben contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, la condición se considera negativa en razón a que no fue posible obtener los requisitos para contar con dicha autorización.

Código PF-2-7

Pregunta de respuesta cerrada	
7. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía u otra entidad nacional competente, ha generado lineamientos para las entidades territoriales para la protección financiera frente al riesgo de desastres de los bienes e infraestructura bajo su responsabilidad?	
Descripción general del indicador	
<p>El riesgo se manifiesta localmente. En ese sentido, se considera relevante que las unidades de gestión territorial (UGT) que tengan asignadas competencias en el uso y ordenamiento del suelo reciban lineamientos para la protección financiera frente al riesgo de desastres de la infraestructura o servicios o bienes de su responsabilidad fiscal, con el fin que avancen en el diseño e implementación de instrumentos de protección financiera ante el riesgo de desastres en su ámbito de competencias.</p> <p>Es importante mencionar que en algunos países el área de Hacienda no tiene potestad para generar lineamientos de obligatorio cumplimiento para las UGT, en razón a la autonomía territorial de éstas. No obstante, se considera que el nivel nacional puede generar lineamientos que, aunque no sean mandatorios, puedan ser adoptados libremente por las UGT. En ese sentido, este indicador indaga por la existencia de dichos lineamientos, los cuales no tienen que ser de obligatorio cumplimiento.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar con la autoridad del sector hacendario, de economía, finanzas u otra entidad nacional competente, particularmente con su respectiva área de riesgo o aquella a cargo del seguimiento a los municipios (en caso que alguna de ellas exista), o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera respecto a la existencia de lineamientos de protección financiera frente al riesgo de desastres para las UGT. 2. Consultar con la institución rectora de la GRD respecto a la existencia de lineamientos de protección financiera frente al riesgo de desastres para las UGT. 3. Revisar la normatividad sobre GRD, en especial la relacionada con protección financiera, así como la que asigna funciones o establece lineamientos para las unidades de gestión territorial en materia de GRD. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir un documento de lineamientos para la protección financiera frente al riesgo de desastres de las UGT que tengan asignadas competencias en el uso y ordenación del suelo, de al menos la infraestructura o servicios o bienes de su responsabilidad fiscal, que haya sido elaborado por el Ministerio de Hacienda, Economía, Finanzas u otra entidad nacional competente, o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

México 2014. La Ley General de Protección Civil de 2012 (PF-2-7a) después de establecer la obligación de todos los órdenes de gobierno de asegurar su infraestructura contra los daños causados por desastres de orden natural (artículos 18 y 88), dispone paralelamente la obligación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de asesorar a los estados en la definición y selección del modelo requerido para la transferencia de riesgos (artículo 19, fracción VII). Es decir, ese soporte técnico y especializado no será igual para todos los casos, sino que cada estado podría recibir una atención particularizada, de acuerdo a sus muy especiales circunstancias y problemática.

Los Lineamientos Operativos del Fondo de Desastres Naturales (LOFONDEN), de 2011 (PF-2-7b) dedican el Capítulo VII *“De los Soportes para la transferencia de riesgos”* para describir con detalle las acciones y responsables para la consecución de la estrategia ordenada desde la Ley: *“Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 de las Reglas, el Comité Técnico podrá solicitar recomendaciones de la Unidad de Seguros, respecto de las Estrategias de Gestión Integral de Riesgos que se presenten. La Unidad de Seguros presentará al Comité Técnico la propuesta de los Soportes Técnicos o Soportes Económicos que se podrán proporcionar, con base en las características de las estrategias y lo establecido en los Lineamientos de Operación. El Comité Técnico podrá autorizar la erogación de recursos para la contratación de expertos en materia de administración y transferencia de riesgos que lo apoyen en la realización o revisión de las acciones citadas...”* (numeral 35)."

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. La Alcaldía de la Municipalidad del Distrito Central manifestó que a nivel territorial no hay avances en temas de protección financiera, incluyendo aspectos relacionados con aseguramiento de activos públicos. De otra parte, manifestó que no han recibido directrices para la protección financiera frente al riesgo de desastres. Cabe mencionar que SEFIN manifestó que no puede generar este tipo de directrices ya que no es de su competencia, debido a que la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), en su artículo 58, indica lo siguiente: *“Todas las instituciones están obligadas a asegurar sus bienes aquellas que fueran calificadas de riesgo generado por desastres naturales o antropogénicos que provoquen un daño publico directo y los daños que se deriven de los mismos, previo a la obtención del seguro. Las instituciones deben solicitar al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) una evaluación de riesgos de los bienes a su cargo para posteriormente lograr una negociación efectiva con las compañías aseguradoras de acuerdo a la Ley de Contratación del Estado y a la Ley General de la Administración Pública”*.

Código PF-2-8

Pregunta de respuesta cerrada	
8. <i>¿Existe un fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
Se considera una condición deseable para poder implementar una política pública efectiva desde el punto de vista del componente de protección financiera contar con un fondo o instrumento financiero equivalente para el financiamiento de actividades de manejo de desastres, tales como las de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. A diferencia de los indicadores PF-1A-1 y PF-1A-6, el presente indicador indaga por fondos habilitados, es decir, no sólo que estén establecidos por normatividad vigente, sino que además cuenten con asignación de recursos.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de dicho fondo o instrumento financiero equivalente con la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente). 2. Averiguar por la existencia de dicho fondo o instrumento financiero equivalente con la entidad rectora de la GRD en el país. 3. Revisar la ley de creación del fondo o instrumento financiero equivalente, en caso que se haya comprobado su existencia. 4. Indagar si el fondo cuenta con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente) en los documentos presupuestales del país, con la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente) o con la entidad rectora de la GRD en el país. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1A-1 PF-1A-6	Si los fondos o instrumentos financieros equivalentes identificados para estos indicadores cuentan con recursos asignados, podrían ser considerados para respaldar el cumplimiento del presente indicador.
MG-2-5	Si el fondo o instrumento financiero equivalente identificado para este indicador puede ser utilizado para el manejo de desastres, y además cuenta con recursos asignados, podría ser considerado para respaldar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para el cumplimiento del indicador deben satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencia legal de la existencia de un fondo o instrumento financiero equivalente (por ejemplo, fideicomiso, cuenta bancaria con destinación específica) facultado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, tales como respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Esto significa que el país debe tener cumplido el indicador PF-1A-1 o el PF-1A-6. 2. Evidencia de que el fondo cuente con asignación de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente). 	

Los fondos o instrumentos financieros para atención de emergencias de carácter sectorial (p. ej. en sector de agricultura, vivienda, etc.) no permiten validar el presente indicador debido a que este indicador indaga por un fondo que no tenga limitaciones, es decir que permita que todos los sectores puedan accederlo.

Tampoco se considera el indicador cumplido con normatividad que posibilite al parlamento o asamblea nacional o cualquier otra institución gubernamental establecer un fondo o instrumento financiero equivalente en caso de ocurrencia de desastres, pues en ese caso la eventual existencia del fondo quedaría supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones.

Los fondos pueden ser de carácter nacional o multi-país/regional, como por ejemplo el caso del CDEMA-Emergency Assistance Fund. La normatividad del país debe reflejar que el país hace parte del fondo, lo cual podría ser a través de normatividad que señale que el país se ha adherido a un fondo regional mediante un mecanismo formal. Adicionalmente, la normatividad de dicho fondo debe estipular que el país debe aportar recursos a dicho fondo.

Para efectos de este indicador no se consideran como fondos las líneas dentro del presupuesto que puedan llamarse Fondos, a menos que el fondo a que se haga referencia corresponda a una estructura dedicada para manejar recursos asignados a un propósito específico. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero, como por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica.

Finalmente y de contar con la información, se recomienda incluir en la justificación el monto de los recursos asignados al fondo indentificado.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Paraguay 2016. El literal b1, del Artículo 6 de la Ley N°2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional, aprobada el 10 de junio de 2005 y publicada en la Gaceta N° 53 el 15 de junio 2005 (PF-2-8a), referente a "Créase el Fondo Nacional de Emergencia" estipula "El Fondo Nacional de Emergencia deberá funcionar como una cuenta especial de la Nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística. Los recursos sobrantes, que no sean del Tesoro, de un ejercicio fenecido se incorporarán a dicho fondo, debiendo destinarse el 50% (cincuenta por ciento) de dichos recursos a financiar proyectos de prevención y/o mitigación de desastres, como recurso adicional en el nuevo Presupuesto, en el Rubro de Inversiones (Preparación de Proyectos y/o Financiamiento de Inversiones), debiendo destinarse el 50% (cincuenta por ciento) restante para medidas de preparación y respuesta...". La existencia de fondos a nivel nacional para financiar gastos emergentes en situaciones de desastres se ratifica, en el Artículo 2 del Decreto N° 3713/15, por el cual se amplía y modifica parcialmente el Decreto N° 11.632/2013 que establece la reglamentación de la Ley N° 2615/05 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), aprobado el 30 de junio de 2015 (PF-2-8b), "Por el cual se amplía y modifica parcialmente el Decreto No. 11.632/2013", "Que establece la reglamentación de la Ley No. 2615/05", "Que crea la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)", publicado en la Gaceta Oficial No 13 del 22 de julio de 2015. Dicho artículo referente a "De la utilización del Fondo Nacional de Emergencia en casos de declaración de emergencia o desastres" establece que "... el Secretario Ejecutivo, o en ausencia de este el Secretario Adjunto de la SEN, como ordenador de gastos y bajo cuyo cargo recae la administración del Fondo Nacional de Emergencia (FONE), podrá disponer de dicho recurso adicional de la institución en forma inmediata para realizar acciones o adoptar medidas de respuesta a la emergencia o el desastre cuya situación haya sido declarada...". Finalmente, en el Artículo 39 del Decreto 4774 por el cual se reglamenta la Ley 5554 del 5 de enero de 2016, "Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2016" (PF-2-8c), publicado en la Gaceta Oficial No. 152 del 5 de agosto de 2010, se establece que "En la elaboración del Plan Financiero deberán ser asignados el 100% de los montos

aprobados por la Ley N°5554/2016 en los Objetos del Gasto ... 831 Aportes a Entidades con Fines Sociales y al Fondo Nacional de Emergencia...". Adicionalmente, en el literal m) del Artículo 66 del Decreto en mención se establece que dentro de los Programas y Objetos del gasto que no podrán ser disminuidos está el objeto de gasto 831 "Aportes a Entidades con Fines Sociales y al Fondo Nacional de Emergencia".

Barbados 2018. Barbados legal framework has established three funds for financing disaster risk management activities, but only one of them is in operation: 1. **Emergency Assistance Fund.** The Agreement establishing the Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA) in 1992 established in Article 25 "*The Agency shall establish an Emergency Assistance Fund (hereinafter in the Article referred to as "the Fund") which shall be used solely to defray expenses incurred in connection with the rendering of assistance in the event of a disaster occurring in a Participating State*". Endorsement of this Agreement by Barbados can be found in section 30 of Part VIII (Application of Treaties) of the Emergency Management Act, Chapter 160A, L.R.O 2007, that established that "*The relevant provisions of (a) the Caribbean Disaster Emergency Response Agency Agreement set out in the First Schedule to the Caribbean Disaster Emergency Response Agency Act; ... shall apply in giving effect to the purposes of The Agreement establishing the Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA)*" was signed by Barbados in 2008. CDERA became officially CDEMA at the 18th meeting of the Council of CDERA, convened in Georgetown in 2009 (according to https://www.cdema.org/index.php?option=com_content&view=article&id=267:at-18th-meeting-cdera-looks-at-transition-to-cdema&catid=50:guyana&Itemid=276) and the Emergency Assistance Fund of the former was placed under the responsibility of the latter. This fund is in operation, as evidenced by the collection of donations, using, among others, bank accounts in Barbados for attending the effects of Irma Hurricane in 2017. CDEMA representatives informed the iGOPP team in November 2017 that although the Emergency Assistance Fund can fully operate, it remains unfunded and that contribution requests have been made to donors, as evidenced in its web page, for example, for the hurricane events that affected the region in 2017. In addition, Barbados Estimates 2016-2017 includes allocation of resources for Head 28, Ministry of Foreign Affairs to Subprogram 0200, whose Statement is "*To provide contributions to Caribbean Disaster Emergency Response Agency, ...*". 2. The **Emergency Disaster Fund:** established by the Emergency Management Act. The Department of Emergency Management (DEM) personnel stated that this fund has not been established and consequently it is not in operation. 3. The **Catastrophe Fund:** Created by the Catastrophe Fund Act, 2007-5: Although resources have been allocated to this fund, as evidenced in the Annual Report of the Catastrophe Fund 2011 elaborated by the National Insurance Board, the iGOPP team was informed in November 2017 that this Fund has been never been used since its procedures have not been developed and approved *this Act*".

Traducción:

Barbados 2018. La normatividad de Barbados estableció 3 fondos para apoyar las actividades de gestión de riesgos de desastres, pero solo uno está en operación para financiar o cofinanciar actividades de gestión de riesgos: El Emergency Assistance Fund. El Acuerdo que establece la Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA) en 1992 establece en el Artículo 25 que *"La Agencia establecerá un Fondo de Asistencia de Emergencia (en adelante, en este Artículo denominado "el Fondo ") que se utilizará únicamente para sufragar los gastos incurridos en relación con la prestación de asistencia en caso de que ocurra un desastre en un Estado participante"*. El endoso de este acuerdo por parte de Barbados se encuentra en el Artículo 30 de la Parte VIII (Aplicación de Tratados) de la Ley de Manejo de Emergencias, Capítulo 160A, LRO 2007, que establece que *"Las disposiciones relevantes de (a) el Acuerdo de la Caribbean Disaster Emergency Response Agency Agreement contenido en el Primer Anexo de la Caribbean Disaster Emergency Response Agency Act; ... se aplicará para dar efecto a los propósitos de esta Ley"*. El acuerdo estableciendo la *Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDEMA)* fue firmado en Barbados en 2008. CDERA se volvió oficialmente CDEMA en la 18ava reunión del Concejo de CDERA, convocada en Georgetown en 2009 (de acuerdo a https://www.cdema.org/index.php?option=com_content&view=article&id=267:at-18th-meeting-cdera-looks-at-transition-to-cdema&catid=50:guyana&Itemid=276) y el Emergency Assistance Fund del primero quedó bajo la responsabilidad del segundo. Este fondo está en funcionamiento, como lo demuestra el recaudo de donaciones, utilizando, entre otras, cuentas bancarias en Barbados para atender los efectos del huracán Irma en 2017. Los representantes de CDEMA informaron al equipo de iGOPP en noviembre de 2017 que, aunque el Emergency Assistance Fund puede operar, sigue sin financiación y se han hecho solicitudes de contribución a los donantes, como se evidencia en su página web, por ejemplo, para los eventos de huracanes que afectaron a la región en 2017. Adicionalmente, el presupuesto de Barbados para el 2016-2017 incluye la asignación de recursos para la Sección 28, Ministerio de Relaciones Exteriores, del Subprograma 0200, cuya *Statement* es "Proporcionar contribuciones a la Caribbean Disaster Emergency Response Agency...". 2. El **Emergency Disaster Fund**: establecido por la Emergency Management Act. Funcionarios del Department of Emergency Management (DEM) señalaron que este fondo nunca fue creado y, en consecuencia, no está en funcionamiento. 3. El **Catastrophe Fund**, creado por la Catastrophe Fund Act, 2007-5, aun cuando le han sido asignados recursos a este fondo, como se evidencia en el Informe anual 2011 de ese Fondo, elaborado por la National Insurance Board, el equipo de iGOPP fue informado en noviembre de 2017 que ese Fondo nunca se ha utilizado, ya que no se han desarrollado los procedimientos para acceder a sus recursos.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Uruguay 2015. La Ley N° 18,621 Sistema Nacional de Emergencias, del 12 de octubre de 2009, estipula en el Artículo 24 *"Créase el Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres. Dicho Fondo estará destinado en forma exclusiva a atender subsidiariamente las actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de Emergencias..."*. *"Dicho Fondo estará integrado por: A) Donaciones y legados con destino al Sistema o al cumplimiento de sus actividades específicas o coordinadas por él. B) Transferencias provenientes de otras entidades públicas..."*. No obstante, la condición es negativa en razón a que de conformidad con la consulta efectuada a la Ley de Presupuesto Nacional para el periodo 2010-2014, Ley N° 18719, del 27 de diciembre de 2010, no se localizó evidencia de asignación de recursos para el Fondo. La inexistencia de otros fondos habilitados para el manejo de desastres fue corroborada mediante entrevistas con expertos en GRD del país.

Código PF-2-9

Pregunta de respuesta cerrada

9. *¿El fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, cuenta con capacidad de acumulación de recursos en el tiempo?*

Descripción general del indicador

Es importante que el país cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente (por ejemplo fideicomiso, cuenta bancaria con destinación específica) habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres que tenga capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.

Este indicador solo puede cumplirse si previamente se ha corroborado el cumplimiento del indicador PF-1A-1 o del PF-1A-6, esto es, que el país cuenta con un fondo o instrumento financiero equivalente para financiar estas actividades que haya sido establecido por normativa, y además si dicho fondo está habilitado para financiar el manejo de desastres, lo cual se evidencia con el cumplimiento del indicador PF-2-8. En este sentido, el fondo en cuestión no necesariamente debe ser el creado por la normatividad de GRD, ya que el indicador PF-1A-6 permite que sea un fondo nacional de desarrollo establecido por una normatividad diferente.

Pasos a seguir para la obtención de la información requerida

1. Considerar el fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-2-8.
2. Consultar con la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente), así como con la entidad nacional rectora de la GRD, si el fondo identificado en el indicador PF-2-8 tiene capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.
3. Revisar la normatividad de creación y/u operación del fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-2-8.
4. Indagar con el área legal de la entidad responsable del fondo o instrumento financiero equivalente si tiene capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.

Vínculo con otros indicadores

PF 2-8	Para verificar el cumplimiento del presente indicador se debe considerar el fondo y la normatividad respectiva asociada identificados para dicho indicador.
PF-1A-1 PF-1A-6	Los fondos que permitan cumplir cualquiera de estos dos indicadores podrían servir para validar el presente indicador, siempre y cuando estén habilitados, esto es, cuenten con recursos asignados para financiar actividades de manejo de desastres.

Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido

Para verificar este indicador deben cumplirse las siguientes condiciones:

1. Evidencia de la existencia de un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres (debe ser el mismo fondo identificado en el indicador PF-2-8).
2. Evidencia de que dicho fondo cuenta con la capacidad de acumulación de recursos en el tiempo.

Cabe mencionar que para efectos de este indicador no se consideran como fondos las líneas dentro del presupuesto que puedan llamarse Fondos, a menos que el fondo a que haga referencia corresponda a una estructura dedicada para manejar recursos asignados a un propósito específico. El fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). No es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. El Proyecto de Ley N.º 113/2013-2014, Ley de Gestión de Riesgos (PF-2-9a), aprobado por la Asamblea el 13 de noviembre de 2014, en el numeral VI del Artículo 28, relacionado con la Constitución del FORADE estipula *“Con el fin de garantizar la sostenibilidad del Fideicomiso, los recursos del patrimonio autónomo podrán ser invertidos por el fiduciario bajo principios de seguridad y liquidez”*.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Ecuador 2016. No se encontraron evidencias sobre la existencia de fondos con esas condiciones, lo cual fue ratificado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe mencionar que muchos fondos especiales han sido eliminados. En el año 2009, mediante la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso Público de los Recursos Petroleros del Estado, Publicada en el Registro Oficial No. 308, del 3 de abril de 2008, aprobada por la Asamblea Constituyente, se eliminaron los fondos petroleros y sus recursos fueron incorporados en el Presupuesto General del Estado (PGE). De otra parte, la disposición transitoria trigésima de la Constitución de la República del Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008, estableció la liquidación del Fondo de Solidaridad. Tampoco se encontraron evidencias de la existencia de fondos habilitados para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres en el marco legal compuesto de varias normas que rigen la GRD en el país, entre las que se incluye: (i) Constitución de la República del Ecuador 2008, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008; (ii) Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 35 del 28 de septiembre de 2009; (iii) Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, Decreto Ejecutivo 486, publicado en el Registro Oficial Suplemento 290 de 30 de septiembre de 2010; y (iv) Buen Vivir, Plan Nacional 2013 -2017, Todo el Mundo Mejor, Registro Oficial Suplemento 78 de 11-sep-2013. Por otro lado, es importante señalar que el Artículo 165, referente a "Fondos de Reposición", del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, publicado en http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINANZAS.pdf establece que *"Las entidades y organismos del sector público pueden establecer fondos de reposición para la atención de pagos urgentes, de acuerdo a las normas técnicas que para el efecto emita el ente rector de las finanzas públicas"*. Dentro de este contexto, la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió la Resolución No. SGR - 044-2014, para expedir el "Reglamento para la Administración de los Fondos Rotativos Institucionales y para Proyectos y Programas, de las Coordinaciones Zonales y Oficinas de Monitoreo de la Secretaría de Gestión de Riesgos", el cual *"será utilizado para cubrir obligaciones que permitan contrarrestar, reducir y mitigar situaciones de emergencia de origen natural y antrópico o para reducir las vulnerabilidades de carácter urgente que por su característica no pueden ser realizados con los procesos normales de la gestión financiera institucional"*. De acuerdo al Artículo 4, referente a "Monto" de la Resolución en mención *"Los Fondos Rotativos Institucionales y para Proyectos y Programas, Serán de quince mil dólares (\$ 15.000) asignados a cada una de las Coordinaciones Zonales y Oficinas de Monitoreo"*. En razón a que los fondos rotativos corresponden a rubros presupuestales, de acuerdo con lo manifestado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, se confirma el incumplimiento del indicador.

Código PF-2-10

Pregunta de respuesta cerrada	
10. ¿El fondo o instrumento financiero nacional equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres, está basado en la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores?	
Descripción general del indicador	
<p>Es importante que el país cuente con un fondo o instrumento financiero equivalente (por ejemplo, fideicomiso, cuenta bancaria con destinación específica) habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres que esté dimensionado de acuerdo a las necesidades del país. En ese sentido, este indicador considera como buena práctica que el dimensionamiento del fondo esté basado en la pérdida anual esperada (PAE) y en la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores.</p> <p>Este indicador solo puede cumplirse si previamente se ha corroborado el cumplimiento del indicador PF-1A-1 o del PF-1A-6, esto es, que el país cuenta con un fondo o instrumento financiero equivalente para financiar estas actividades que haya sido establecido por normativa, y además si dicho fondo está habilitado para financiar el manejo de desastres, lo cual se evidencia con el cumplimiento del indicador PF-2-8. En este sentido, el fondo en cuestión no necesariamente debe ser el creado por la normatividad de GRD, ya que el indicador PF-1A-6 permite que sea un fondo nacional de desarrollo establecido por una normatividad diferente.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Considerar el fondo o instrumento financiero equivalente identificado en el indicador PF-2-8. 2. Consultar con la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente), o con la institución nacional rectora de la GRD, si dicho fondo o instrumento financiero equivalente está dimensionado con base a la pérdida anual esperada y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. 3. Revisar la normatividad vinculada a la creación y/u operación del fondo o instrumento financiero equivalente. 4. Indagar con el área legal de la entidad responsable el fondo o instrumento financiero equivalente si está basado en la pérdida anual esperada (PAE) y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF 2-8	Para verificar el cumplimiento del presente indicador se debe considerar el fondo y la normatividad respectiva asociada identificados para dicho indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador deben satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidencia de la existencia de un fondo o instrumento financiero equivalente habilitado para el financiamiento o cofinanciamiento de actividades de manejo de desastres (debe ser el mismo fondo identificado en PF-2-8). 2. Evidencia de que dicho fondo está dimensionado de acuerdo a las necesidades del país basada en la pérdida anual esperada (PAE) y la información registrada sobre las pérdidas por desastres en años anteriores. <p>Cabe mencionar que para efectos de este indicador no se consideran como fondos las líneas dentro del presupuesto que puedan llamarse Fondos, a menos que el fondo en cuestión corresponda a una estructura dedicada para manejar recursos asignados a un propósito específico. En este sentido, el fondo debe entenderse como un instrumento financiero (como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con destinación específica). No es suficiente con que la creación del fondo esté establecida por normatividad vigente. Es imprescindible que el fondo esté habilitado, es decir, cuente con saldo de recursos (sea un saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente).</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. No se encontraron evidencias en: (i) la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Decreto 777 de 2005); (ii) Reglamento General de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Decreto No. 55 de 2006; (iii) Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Decreto Legislativo 778, publicado en el Diario Oficial 160, en el Tomo 368, el 31 de agosto de 2005); (iv) el Instructivo del Ministerio de Hacienda MH-7011, referente a las Normas Específicas para el Manejo del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID); (v) Decreto Ejecutivo 11, Reglamento de la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, publicado en el Diario Oficial 37, tomo 370, el 22 de febrero de 2006. Lo anterior fue corroborado por el Ministerio de Hacienda.

Código PF-2-11

Pregunta de respuesta cerrada	
11. <i>¿El país tiene suscrito al menos un crédito contingente explícitamente vinculado con la financiación de gastos emergentes de situaciones de desastre?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Los créditos contingentes son un tipo de instrumento financiero que sirven para cubrir los gastos extraordinarios generados por la ocurrencia de desastres. Dentro de un esquema de protección financiera del riesgo de desastres, la primera capa de pérdidas suele cubrirse mediante reasignaciones presupuestales y fondos de atención de emergencias, mientras que los créditos contingentes suelen cubrir los gastos relacionados con el impacto de eventos más severos y menos frecuentes. Al igual que los fondos de emergencia los créditos contingentes se consideran un instrumento de retención del riesgo, por cuanto son créditos que el país tendrá que reembolsar (además de los intereses devengados) al prestador. En una estrategia integral de protección financiera estos instrumentos de retención del riesgo complementan a otros de transferencia del riesgo como son los seguros, reaseguros y bonos catastróficos, entre otros.</p> <p>En este indicador se indaga por créditos contingentes específicamente vinculados con la financiación de gastos emergentes debidos a la ocurrencia de desastres por fenómenos naturales, y no por aquellos créditos contingentes para atender todo tipo de shocks (p.ej. caídas de precios internacionales de determinadas exportaciones, etc).</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar las páginas web del BID, BM, CAF, CDB respecto de las operaciones aprobadas para el país. En ocasiones, estos créditos son ofrecidos también por entidades bilaterales como, por ejemplo, JICA. 2. Consultar al área de crédito público de la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente) o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia o política de protección financiera respecto a créditos contingentes contratados por el país que estén explícitamente vinculados con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre. 3. Consultar con la institución rectora de la GRD del país sobre la existencia de líneas de crédito contingente suscritas por el país que estén explícitamente vinculados con la financiación de gastos emergentes en situaciones de desastre. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador se debe evidenciar que el país ha suscrito al menos una línea de crédito contingente, explícitamente vinculada con la financiación de gastos generados como consecuencia de desastres, y que dicho crédito se encuentre vigente. Para evidenciarlo se deberá proporcionar el contrato de préstamo o los documentos oficiales asociados al mismo que respalden su validez al momento de la aplicación del iGOPP.</p> <p>Alternativamente se podrán citar como fuentes publicaciones, notas de prensa o documentos similares de las entidades que otorgan el crédito en cuestión que contengan información acerca de las características y periodo de vigencia de estos créditos.</p> <p>No se considera el indicador cumplido si el país se encuentra negociando este tipo de créditos.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Belize 2017. According to the “Project Appraisal Document on a Proposed Loan in the Amount of US\$ 30 Million to Belize for a Climate Resilient Infrastructure Project” (F-2-11a) “The objectives of the Project are: (a) to enhance the resilience of road infrastructure against flood risk and impacts of climate change; and (b) to improve the Borrower's capacity to respond promptly and effectively in an Eligible Crisis or Emergency, as required”. Consequently, one of the components of the Project is “Contingent Emergency Response”, that “will provide support for immediate response to an eligible crisis or emergency, as needed”. Same information is reflected in the Schedule 1 (Project description) of the “Loan Agreement (Climate Resilient Infrastructure Project) between Belize and the International Bank for Reconstruction and Development” (F-2-11b).

Traducción:

Belice 2017. Según el “Documento de evaluación del proyecto sobre un préstamo propuesto por un monto de US \$ 30 millones para Belice para un proyecto de infraestructura resistente al clima” (F-2-11a) “Los objetivos del proyecto son: (a) a mejorar la resistencia de la infraestructura vial contra el riesgo de inundación y los impactos del cambio climático; y (b) para mejorar la capacidad del Prestatario para responder de manera rápida y efectiva en una crisis o emergencia elegible, según sea necesario”. En consecuencia, uno de los componentes del Proyecto es la “Respuesta de emergencia contingente”, que “brindará apoyo para la respuesta inmediata a una crisis o emergencia, según sea necesario”. La misma información se refleja en el Anexo 1 (Descripción del proyecto) del “Acuerdo de préstamo (Proyecto de infraestructura resistente al clima) entre Belice y el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo” (F-2-11b).

Perú 2013. Mediante Decreto Supremo N° 254-2010-EF, que aprueba un financiamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, del 15 de diciembre del 2010 (PF-2-11a) por valor de 100 millones de dólares americanos bajo la modalidad Catastrophe Deferred rawdown Option - CAT DDO, denominado “Préstamo de Política de Desarrollo de Administración de Riesgos de Desastre”.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Bolivia 2015. En 2008, el país suscribió con la CAF la primera línea de crédito contingente de atención a la emergencia natural hasta por USD 20 millones para ser ejecutada durante 2008. En la página web de la CAF se registra que la fase V de un crédito por emergencias naturales aprobado en 2011 ya fue totalmente desembolsado. El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, manifestó que actualmente el país está evaluando la posibilidad de suscribir una línea de crédito contingente con el Banco Mundial.

Código PF-2-12

Pregunta de respuesta cerrada	
12. <i>¿Al menos un municipio de la ciudad capital del país cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del Estado?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera relevante que al menos un municipio, distrito, delegación o parroquia de la ciudad capital cuente con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para la cobertura de la vulnerabilidad fiscal de su presupuesto (para proteger la susceptibilidad del presupuesto debido a la demanda de recursos no programados, ante la ocurrencia de desastres desencadenados por fenómenos de la naturaleza) o para la cobertura de al menos un portafolio de bienes de su responsabilidad fiscal.</p> <p>En aquellas ciudades capitales que no estén organizadas en municipios, distritos, delegaciones o parroquias, este indicador se deberá validar para la ciudad capital como un todo. Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde este la sede administrativa de gobierno o, alternativamente, la ciudad que más población concentre o que más aporte al PIB del país.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los municipios, distritos, delegaciones, o parroquias existentes en la ciudad capital del país. 2. Seleccionar los principales municipios, distritos, delegaciones o parroquias que podrían llegar a cumplir este indicador debido a su importancia relativa dentro de la ciudad capital, por el nivel de ingresos y/o por la evidencia del avance en materia de GRD. 3. Consultar a la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente) del municipio, distrito, delegación o parroquia de la ciudad capital del país respecto a la existencia de instrumentos vigentes de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de su responsabilidad fiscal o para la vulnerabilidad fiscal del presupuesto municipal. 4. Consultar al área rectora de la GRD de dicho municipio, distrito, delegación o parroquia respecto a la existencia de instrumentos vigentes de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de su responsabilidad fiscal o para la vulnerabilidad fiscal del presupuesto. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-2-1	Si la ciudad sede del gobierno del país cuenta con una estructura de protección financiera para casos de desastre, ésta podría incluir información para poder verificar el cumplimiento del presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador debe satisfacerse al menos una de las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evidenciar que al menos un municipio, distrito, delegación o parroquia de la ciudad capital del país cuenta con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del municipio. 2. Evidenciar que al menos un municipio, distrito, delegación, o parroquia de la ciudad capital del país cuente con un instrumento vigente de transferencia del riesgo de desastres para la cobertura de la vulnerabilidad fiscal de su presupuesto. <p>Para evidenciar lo anterior se deberán proporcionar los contratos o documentos oficiales asociados o informes de gestión o similares que certifiquen la existencia y vigencia del instrumento financiero de transferencia del riesgo vigente al momento de la aplicación del iGOPP. El indicador no se cumplirá por el hecho de que el presupuesto del municipio, distrito, delegación o parroquia cuente con un rubro para pago de seguros: lo que se debe verificar es la existencia del seguro u otro instrumento financiero de transferencia del riesgo.</p>	

En aquellas ciudades capitales que no estén organizadas en municipios (distritos, delegaciones, parroquias), este indicador se deberá validar para la ciudad capital. Por ciudad capital se entenderá la ciudad donde esté la sede administrativa de gobierno o, alternatively, la ciudad que más población concentre o que más aporte al PIB del país.

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Colombia 2013. Contrato suscrito en 2013 para intermediar el programa de seguros de la Secretaría de Educación Distrital (PF-2-12a). Cabe mencionar que dentro de la sección de justificación de dicha contratación se menciona que es para el "*diseño, implementación y contratación del programa de seguros que ampare todos sus bienes e intereses patrimoniales*".

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

El Salvador 2016. El Gobierno de San Salvador en respuesta a una solicitud de información formulada de acuerdo a las previsiones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) manifestó que no cuenta con instrumento de transferencia del riesgo de desastres para un portafolio de bienes de responsabilidad fiscal del municipio. De otra parte, en respuesta a otra solicitud de información formulada de acuerdo a las previsiones de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) manifestó que la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS) cuenta con una póliza de seguro. En razón a que no se pudo acceder a dicha póliza para verificar si los bienes que cubre incluyen todas las edificaciones a cargo de la municipalidad del Gobierno de San Salvador se ratifica que la condición se considera negativa. Cabe mencionar que en desarrollo de las visitas realizadas en julio de 2016 el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) manifestó que el nivel de descentralización es muy bajo, por lo cual la mayoría de los bienes de responsabilidad fiscal están a cargo del nivel central.

Código PF-2-13

Pregunta de respuesta cerrada	
13. ¿Se ha implementado y está vigente al menos un instrumento de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector?	
Descripción general del indicador	
<p>Los bienes fiscales son aquellos activos cuya reposición en caso de afectación por desastres sería pagada por el gobierno. Estos activos generalmente incluyen infraestructuras públicas, y en algunos casos también las viviendas de la población de bajos ingresos. Para no someter a fuertes presiones al presupuesto público, es aconsejable cubrir estos activos mediante instrumentos de transferencia del riesgo, como pueden ser los seguros, bonos catastróficos o los Cat swaps. Agrupar un portafolio de activos para su aseguramiento, como pueden ser los del sector salud o los de educación, al introducir la diversificación de activos e incrementar la suma asegurable, permite aprovechar ciertos beneficios, tales como ahorros en la prima o facilidades para mejorar la calidad de la cobertura. En este sentido, el indicador considera una buena práctica transferir de manera colectiva el riesgo de un portafolio de bienes fiscales de al menos un sector.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente) si existe un mecanismo de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva el portafolio de bienes fiscales de al menos un sector. 2. Consultar a las autoridades del sector de obras públicas, salud y educación, entre otros ministerios que tengan a cargo bienes fiscales, si han implementado algún mecanismo de transferencia del riesgo para cubrir de forma colectiva su portafolio de dichos bienes. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-7	El fondo o mecanismo equivalente del nivel nacional habilitado para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo podría estar financiando el instrumento financiero por el cual se indaga en el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir evidencia de la existencia de al menos un instrumento financiero vigente para la transferencia del riesgo de un portafolio de bienes fiscales de al menos un sector.</p> <p>Se considerará como evidencia, entre otros, contratos de seguros (en caso que puedan ser públicos), informes de gestión de funcionarios, informes de la entidad que contrata el seguro o informes de prensa, donde mencionen que se contrataron seguros para grupos de bienes de responsabilidad fiscal.</p>	
<p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Ecuador 2016. El Alcance al Memorando No. CGSC–2015– 0369-M, cuyo asunto es “*Contratación de seguros ramos generales periodo 2015-2017*” (PF-2-13a), incluye como “*Objeto de Contratación: “Contratación bajo régimen especial” - seguros ramos generales para los años 2015-2017*”, así mismo incluye como alcance “*La presente contratación tiene como propósito asegurar y salvaguardar cada uno de los bienes con los que cuenta el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de manera que ninguno quede sin protección ante cualquier eventualidad que afecte las actividades que diariamente se desarrollen en la entidad, asegurando así su continuidad en el tiempo*”. En el numeral 7, el cual describe los valores asegurados incluye, entre otros, edificios y equipo médico. Cabe mencionar que dentro del proceso de cotización que aparece en el portal de compras públicas aparece la cotización respectiva de Seguros Sucre y los certificados de disponibilidad presupuestal requeridos para realizar dicha contratación.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Venezuela 2015. No se encontraron evidencias. Se realizaron consultas virtuales a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud y del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en razón a que usualmente en estos sectores se realizan este tipo de coberturas colectivas. Lo anterior fue confirmado en entrevistas con el Ministerio del Poder Popular para la Educación. También, se realizaron consultas virtuales a la página web del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas y no se encontraron evidencias.

Código PF-2-14

Pregunta de respuesta cerrada	
14. <i>¿Cuenta el sector público con al menos un instrumento financiero diseñado ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica haber adoptado de forma ex ante instrumentos financieros que permitan incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. Por reactivación económica se entiende la recuperación de los medios de vida, actividades y productos que contribuya al aumento del empleo, la producción y la inversión tras el desastre.</p> <p>Usualmente este tipo de instrumentos se encuentran disponibles para la reactivación económica del sector agrícola. Adicionalmente, la normatividad de algunos fondos nacionales de emergencia, fondos sectoriales o fondos de desarrollo podría permitirles asignar recursos a actividades de reactivación económica.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar si la normatividad asociada al sector agrícola o a la GRD establecen algún fondo o instrumento financiero equivalente para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. 2. Consultar con la autoridad de planificación del desarrollo nacional, del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente), particularmente con su área de presupuesto, respecto a la existencia de fondos o instrumentos financieros equivalentes que hayan sido aprobados formalmente de manera ex ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. 3. Consultar a la autoridad del sector agricultura y de otros sectores productivos, así como a la entidad rectora de GRD, respecto a la existencia de fondos o instrumentos financieros equivalentes que hayan sido aprobados formalmente de manera ex-ante para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. 4. Revisar el tipo de instrumentos financieros que el país ha empleado para financiar los gastos extraordinarios surgidos a raíz de la ocurrencia de desastres pasados y comprobar si alguno ha financiado gastos relativos a la reactivación económica en las zonas afectadas por el desastre. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador debe estar vigente, esto es, aprobado formalmente, al menos un instrumento financiero para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres. Se permitirán como verificables documentos normativos, informes y reportes oficiales de instituciones nacionales o internacionales entendidas en la materia que hagan mención a la existencia y vigencia de los instrumentos financieros por los que indaga el indicador.</p> <p>Para el cumplimiento del indicador se admiten tanto fondos exclusivos de reactivación económica creados de manera <i>ex-ante</i> para zonas afectadas por desastres, como fondos con alcance más general que incluyan entre sus diferentes propósitos dicha reactivación económica.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

Guatemala 2013. En el Plan Operativo Anual 2013 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (PF-2-14a), publicado en julio de 2012 por la Dirección de Planificación, se hace referencia a *“Agricultores apoyados en la gestión de créditos y pago de primas de seguro agropecuario como instrumento de administración del riesgo climático en la producción”*, a través de Guate Invierte (Fideicomiso Para el Desarrollo Rural). Los subsidios para la compra de seguro agrícola se consideran un instrumento ex ante, dado que permiten que los agricultores reciban recursos que permiten la reactivación económica en áreas afectadas por desastres.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Honduras 2014. La Ley del Fondo de Contingencia Agropecuaria, Decreto Número 25-90, de fecha 20 de diciembre de 1990 (PF-2-14b), establece en el Artículo 3 *“El FODECA tendrá como objetivo general contar con recursos financieros de disponibilidad inmediata para auxiliar a los productores nacionales en el rehabilitamiento de explotaciones agropecuarias destruidas o dañadas por la incidencia de fenómenos naturales calificadas como desastres: inundaciones, sequías, huracanes, terremotos, plagas y enfermedades. El FODECA tendrá como objetivos específicos los siguientes: a) Apoyar financieramente la reposición y/o rehabilitación de explotaciones agropecuarias destruidas o dañadas; b) Atender las contingencias relativas a la reposición o reparación de la Infraestructura destruida o dañada, y; c) Atender otras demandas asociadas con la naturaleza de los rubros productivos y con el fenómeno que genere la situación”*. En el artículo 16, relacionado con el patrimonio del fondo, se establece que incluye, entre otros, aportes del gobierno central y de los productores de banano y plátanos, caña de azúcar y palma africana. No obstante, el indicador no se cumple en razón a que la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) manifestó que el FODECA no ha sido operativizado y que no dispone de otros instrumentos financieros vigentes para incentivar la reactivación económica en áreas afectadas por desastres.

Código PF-2-15

Pregunta de respuesta cerrada	
15. <i>¿El Ministerio de Agricultura tiene una estructura de protección financiera del sector agricultura (o equivalente) vigente frente al riesgo de desastres?</i>	
Descripción general del indicador	
<p>La ocurrencia de desastres, particularmente los ocasionados por eventos hidrometeorológicos, usualmente tienen un impacto significativo sobre el sector agricultura (que, de acuerdo a la normatividad de cada país, puede incluir a subsectores tales como cultivos, ganadería, pesca y bosques). En ese sentido, se considera relevante que este sector tenga una estructura de protección financiera frente al riesgo de desastres. Entre los posibles instrumentos que podrían formar parte de la estructura de protección financiera del riesgo de desastres del sector estarían los siguientes: (i) fondos de emergencia; (ii) aseguramiento, (iii) ahorros de precaución (permiten tener un autoseguro, que puede ser parcial), (iv) créditos contingentes, y (v) bonos catastróficos, entre otros.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar a la autoridad del sector agricultura (o entidad equivalente) respecto de los instrumentos de protección financiera que tiene vigentes. 2. Consultar con el gremio agrícola respecto de los instrumentos financieros a los cuales podrían acceder para cubrir sus pérdidas en caso de ocurrencia de desastres, y que cuenten con apoyo o participación de entidades del gobierno. 	
Vínculo con otros indicadores	
No aplica	No tiene indicadores vinculados
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla este indicador deberá evidenciarse que el sector agricultura cuenta con al menos dos instrumentos de protección financiera ante el riesgo de desastres. Cabe mencionar que los dos instrumentos pueden ser ambos de retención del riesgo, de transferencia de riesgo, o uno de retención y otro de transferencia. A efectos de este indicador, no se considera como instrumento financiero contar con un rubro presupuestal para contratar seguros.</p> <p>Se permitirán como verificables documentos normativos, contratos, informes y reportes oficiales de instituciones nacionales o internacionales entendidas en la materia que hagan mención a la existencia y vigencia de instrumentos financieros por los cuales indaga el indicador.</p> <p>Importante mencionar que se indaga por los instrumentos financieros con que cuenta el sector agricultura para su protección financiera en los que hay participación del gobierno. En este sentido, no interesan todos los seguros agrícolas ofrecidos por el sector asegurador, sino solo aquellos que cuenten con respaldo del gobierno o que hayan sido generados a través de programas con el gobierno.</p> <p><i>“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	
Ejemplos de cumplimiento en países de la región	

Panamá 2014. El Instituto de Seguros Agropecuarios es una entidad autónoma del Estado Panameño creada mediante la Ley No. 34, de 29 de abril de 1996, por la cual se crean el Seguro Agropecuario y el Instituto de Seguro Agropecuario (PF 2-15a); "... *contra pérdidas fortuitas no controladas que puedan ocurrir en las inversiones, con garantía de compensación para éstas, con el propósito de ofrecer protección básica a las personas, naturales o jurídicas, dedicadas a la actividad agropecuaria*" (artículo 1).

Colombia 2013. El Seguro Agropecuario está regulado por las leyes 69 y 101 de 1993; 633 del 2000 y 812 de 2003, y el decreto 3377 del 2003. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene como instrumento de cobertura de riesgo ante desastres el seguro agropecuario; instrumento que promueve a través de un subsidio a la prima de seguro hasta del 60%. Es un sistema de cobertura de los daños ocasionados a las producciones agropecuarias, como consecuencia de variaciones anormales de agentes climáticos. Los riesgos agrícolas que podrá amparar el seguro serán los de sequías, heladas, granizadas, inundaciones, exceso de humedad y vientos huracanados o cálidos. La evidencia de que se está ofreciendo dicho seguro y que hay compañías aseguradoras ofreciendo el producto se encuentra en: <http://www.finagro.com.co/productos-y-servicios/seguero-agropecuario> (PF-2-15a)". Con relación a otros instrumentos de protección financiera, el Gobierno de Colombia cuenta con una línea de crédito contingente de libre destinación suscrita con el Banco Mundial (PF-2-15b), que podría emplearse entre otros para la protección financiera del sector agricultura.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

República Dominicana 2014. En la Ley 157/09 de 2009 del Seguro Agropecuario se establece "*con el objetivo de dotar a los productores agropecuarios de un instrumento de protección, transparente y regulado, que les permita hacer frente a las consecuencias económicas que se registran en las operaciones agropecuarias tras el acaecimiento de fenómenos naturales no controlables*". En el capítulo III se describen los riesgos asegurables: Párrafo II. "*En las producciones agrícolas y forestales se aseguran los daños causados por sequía, viento fuerte, inundación, ciclón, exceso de lluvia, granizo, incendio, plagas y enfermedades y otras adversidades derivadas de fenómenos naturales...*" pero según Párrafo IV "*Quedan excluidos de la cobertura del seguro agropecuario al que se refiere la presente ley, los siniestros que por su extensión e importancia sean calificados por el Poder Ejecutivo como zonas de desastre o calamidad nacional*". De otra parte, la ley 197-11 de 2011, la cual modifica la Ley 157/09 de 2009 crea en el artículo 27 el "*Fondo Dominicano de Apoyo al Seguro Agropecuario*", "*con el objetivo de garantizar los recursos con los cuales el Estado dominicano apoyará a los productores agropecuarios que demanden el seguro agropecuario*". Cabe mencionar, que en un comunicado de prensa del Ministerio de Agricultura de 2013 se señala que el Gobierno destinará RD\$234 millones para el Seguro Agropecuario, el cual entrará en vigencia a partir de marzo de 2013. En ese sentido, el indicador no se cumple dado que al momento de aplicación del iGOPP no se habían implementado los instrumentos de protección financiera frente al riesgo de desastres para el sector agricultura.

Costa Rica 2014. Mediante la ley 4461 de 1969, Ley de Seguro Integral de Cosechas, se establece en el artículo 1 "*Establécese el Seguro Integral de Cosechas*", el cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 "*El Seguro será administrado por el Instituto Nacional de Seguros, de conformidad con esta ley. El Instituto determinará las zonas a que se extenderá la cobertura, cuáles cultivos asegurará y la forma en que se asumirá el Seguro, el cual puede amparar los créditos bancarios con destino directo para el cultivo, la inversión necesaria y directa hecha por el agricultor, o un porcentaje de las cosechas, todo dentro de los límites que el Instituto establezca*". De otra parte, en el artículo 6 se establece "*Artículo 6º.- Para el fortalecimiento de la cartera correspondiente sin recargo en la prima de la protección, los miembros del Sistema Bancario Nacional y los Bancos Privados, tanto los existentes en el país, como los que se establecieren en el futuro, girarán directamente al Instituto Nacional de Seguros, el cincuenta por ciento de la suma que cada uno de ellos cubra a título de Impuesto sobre la Renta. Con esos aportes el Instituto formará la Reserva Técnica de Contingencias, destinadas a enjugar los déficits que arroje la liquidación anual del Seguro de Cosechas*". El indicador no se cumple en razón a que en conversaciones sostenidas con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias se manifestó que no se están ofreciendo este tipo de productos a los agricultores y que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está realizando gestiones para impulsar el aseguramiento agrícola en el país.

Código PF-2-16

Pregunta de respuesta cerrada	
16. ¿Existe un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas que establece la estrategia o política de protección financiera para la gestión del riesgo de desastres en el país?	
Descripción general del indicador	
<p>En todos los países es el estado y su capacidad financiera la última instancia que hará frente ante las exigencias y demandas que traigan consigo los desastres y sus consecuencias. En este sentido, la ocurrencia de desastres genera una obligación contingente, debido a la demanda no prevista de recursos para atender su impacto. Dentro de este contexto, se considera como un factor de calidad la existencia de una estrategia que proponga los diferentes instrumentos financieros que el estado debería considerar para enfrentar la ocurrencia de desastres a efectos de disminuir su vulnerabilidad fiscal.</p> <p>Todos los países tienen de manera implícita "una estrategia de protección financiera". Sin embargo, lo que interesa es que las autoridades competentes del estado hayan reflexionado sobre el tema y hayan plasmado su visión sobre la forma de gestionar dicho contingente en documentos oficiales que reflejen dicha estrategia, tales como Decretos, Resoluciones Ministeriales o publicaciones del Ministerio Economía y Finanzas (o quien haga sus veces), entre otros.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 3. Indagar por la existencia de documentos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) que describan las acciones y/o instrumentos de protección financiera que el país ha identificado para reducir su vulnerabilidad fiscal ante la ocurrencia de desastres. 4. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o de la GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1B-2	Si el sector Hacienda, Finanzas o Economía tiene competencias en materia de protección financiera frente al riesgo de desastres, podría ser que haya elaborado la estrategia que indaga el presente indicador.
PF-3-1 PF-3-3	En las evaluaciones sobre mecanismos de protección financiera se podría identificar la existencia de una estrategia en el tema.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador debe existir un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (o quien haga sus veces) que contenga o evidencie la existencia de una estrategia o política de protección financiera.</p> <p>Ese documento podrá estar publicado por el órgano oficial, aprobado o expedido mediante un decreto o por resolución ministerial, estar publicado en la página institucional de la entidad competente en el tema, o cualquier otra formalidad que le confiera al documento el carácter de estrategia o política oficial. No se podrá respaldar el cumplimiento de este indicador con (i) la existencia de un régimen de excepción para contratación en caso de ocurrencia de desastres, ni con (ii) normatividad que permita el ingreso de mercancías de importación en escenarios de riesgo de desastres con excepciones tributarias, ni tampoco mediante (iii) la existencia de políticas presupuestales para desastres (tales como la posibilidad de reasignar el presupuesto o de contratar créditos).</p> <p><i>“Por tratarse de un nuevo indicador considerado en el proceso de actualización del protocolo iGOPP no se presentan ejemplos para este indicador, sin embargo para conocer ejemplos de futuras aplicaciones se puede consultar las aplicaciones del iGOPP disponibles en https://riskmonitor.iadb.org/”</i></p>	

Código PF-2-17

Pregunta de respuesta cerrada	
17. ¿Existe un instrumento financiero vigente que haya sido empleado en el país para la contratación de instrumentos de transferencia del riesgo para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto?	
Descripción general del indicador	
<p>El presupuesto nacional es susceptible de verse afectado ante la ocurrencia de desastres debido a la demanda de recursos no programados. En ese sentido, es deseable que el país considere la adopción de instrumentos de transferencia del riesgo que permitan disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto a través del acceso en el corto plazo a recursos para atender los gastos ocasionados por los desastres. Este tipo de instrumentos de transferencia de riesgo permiten que el país, mediante el pago de una prima, traslade determinadas pérdidas probables por causa de desastres futuros hacia los mercados especializados.</p> <p>El indicador indaga si estos instrumentos de transferencia del riesgo han sido adquiridos, es decir, si se ha sufragado su cobertura, con recursos provenientes de instrumentos financieros vigentes de carácter nacional, regional y/o multi-país, o mediante algún mecanismo de integración económica o comercial constituida por países.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> Indagar por la existencia de algún instrumento vigente de transferencia del riesgo que permita al país acceder a recursos para atender los gastos ocasionados por desastres y, por ende, contribuya a disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto en caso de desastre. Identificar si los recursos usados para la adquisición del instrumento de transferencia del riesgo identificado, esto es, para el pago de su prima, provienen de instrumentos financieros vigentes que sean nacionales, regionales y/o multi-país, o bien de un mecanismo de integración económica o comercial del que el país haga parte. De ser necesario, entrevistarse con representantes de las instituciones rectoras de autoridad hacendaria, de economía o finanzas y/o en materia de GRD sobre el cumplimiento de este indicador. 	
Vínculo con otros indicadores	
PF-1A-3 PF-2-13	Si el país cuenta, ya sea a nivel nacional o sectorial, con instrumentos de transferencia de riesgo frente a desastres, se debería indagar por las fuentes de financiamiento y por el tipo de acuerdo o instrumento financiero que permitieron la contratación de dichos instrumentos.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para que se cumpla el indicador se deben satisfacer dos condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Existencia de al menos un instrumento financiero nacional (como, por ejemplo, un fondo nacional de gestión del riesgo, un fondo de adaptación, o fondos de desarrollo o inversión social), regional y/o multi-país, mecanismo de integración económica o comercial (como por ejemplo la Alianza del Pacífico), o compañía constituida por países (como, por ejemplo, CCRIF) que pueda ser empleado para sufragar la contratación de al menos un instrumento de transferencia de riesgo de desastres para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto (por ejemplo, un Cat Bond contra riesgo sísmico o hidrometeorológico, o un Cat Swap). Que dicho instrumento nacional haya sido usado en algún momento para contratar al menos un instrumento de transferencia del riesgo de desastres para disminuir la vulnerabilidad fiscal del presupuesto. 	
En la justificación deberá entregarse una descripción tanto del instrumento de transferencia del riesgo como del instrumento financiero que sufragó su cobertura, así como proveer la información necesaria que respalde que el instrumento financiero está vigente y puede seguir financiando tales coberturas.	
<i>"Por tratarse de un nuevo indicador considerado en el proceso de actualización del protocolo iGOPP no se presentan ejemplos para este indicador, sin embargo para conocer ejemplos de futuras aplicaciones se puede las aplicaciones del iGOPP disponibles en https://riskmonitor.iadb.org/"</i>	

Código PF-3-1

Pregunta de respuesta cerrada	
1. ¿El ente nacional de control ha realizado al menos una verificación o evaluación del cumplimiento de la normatividad existente sobre protección financiera en los últimos 5 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que si existe normatividad sobre protección financiera, ésta esté sujeta a evaluación por parte del ente nacional de control.</p> <p>Este indicador requiere en primer lugar que exista normatividad sobre protección financiera. En segundo lugar, que el cumplimiento de dicha normatividad haya sido objeto de evaluación por parte del ente nacional de control. Y en tercer lugar, que dicha evaluación haya sido realizada en los 5 años previos a la aplicación del iGOPP.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 7. Indagar sobre la existencia de normatividad sobre protección financiera. 8. Identificar la entidad o las entidades de control en el país (puede ser auditoría, contraloría o entidad equivalente). 9. Consultar con el ente nacional de control y con la autoridad del sector hacendario, economía o finanzas sobre la existencia de normatividad de protección financiera. 10. En el caso que exista normatividad sobre protección financiera, consultar con el ente nacional de control si ha evaluado/verificado el cumplimiento de normatividad sobre protección financiera 11. Revisar los informes elaborados por el ente nacional de control. 12. Consultar con las instituciones involucradas en el manejo y operación de los instrumentos de protección financiera que pudiera contar el país, para conocer si los mismos han sido sujeto de verificación por parte del ente nacional de control. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-1 PF-1B-2 PF-1C-2 PF-2-1	La información revisada o empleada para estos indicadores puede guiar a identificar la normatividad sobre protección financiera que debería ser sujeto de verificación por parte del ente nacional de control.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador deben satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La existencia de normatividad sobre instrumentos de protección financiera. 2. Que en los 5 años previos a la aplicación del iGOPP el ente nacional de control haya evaluado o verificado el cumplimiento de dicha normatividad. <p>Se considera como evidencia un informe del ente de control en donde analice el cumplimiento de la normatividad en términos de protección financiera o, alternativamente, donde se analice un instrumento de protección financiera que el país ha propuesto en su estrategia de protección financiera.</p> <p>Los informes del ente de control sugiriendo mejoras en el uso de recursos empleados para atender la etapa de emergencia no son evidencia de evaluaciones respecto del cumplimiento de la normativa sobre protección financiera ya que por lo que se indaga es por el cumplimiento de una normatividad de protección financiera, específicamente en las acciones que deben realizarse antes de la ocurrencia del desastre, en términos de preparativos financieros.</p>	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

No existen ejemplos positivos de acuerdo con los resultados de las aplicaciones del iGOPP realizadas hasta el año 2019, momento en el cual se elaboró el presente protocolo.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

México 2014. De acuerdo con lo estipulado en el manual de funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el órgano interno hace auditorías anuales. De otra parte, la auditoría superior audita la cuenta pública del año anterior. No obstante, no se han hecho estudios por parte del ente nacional de control sobre el cumplimiento de la normativa existente sobre mecanismos de protección financiera. Cabe mencionar, que la OECD realizó en 2012 una evaluación externa a todo el sistema de protección civil, incluyendo el componente de protección financiera.

Código PF-3-2

Pregunta de respuesta cerrada	
2. ¿ El ente rector del sector asegurador ha realizado al menos una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en el cálculo tarifario de las pólizas por parte de las compañías de seguro en los últimos 3 años?	
Descripción general del indicador	
<p>Se considera una buena práctica que los modelos de evaluación del riesgo para la definición de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguros sean modelos probabilistas. Adicionalmente se considera recomendable que dichos modelos sean evaluados por el ente rector del sector asegurador.</p> <p>Lo anterior es fundamental para asegurar el adecuado aprovisionamiento de reservas, de forma que el sector asegurador tenga capacidad financiera para responder por los siniestros en caso de ocurrencia de un desastre.</p> <p>En ese sentido, en primer lugar, se requiere que la normatividad establezca que la estimación de reservas de riesgo catastrófico debe estar basada en modelos de evaluación probabilista del riesgo. Posteriormente habría que verificar si el ente rector del sector asegurador ha realizado en los 3 años previos a la aplicación del iGOPP al menos una evaluación sobre la aplicación de dicha normatividad.</p>	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Indagar por la existencia de normatividad que establezca que la estimación de reservas de riesgo catastrófico debe estar basada en modelos de evaluación probabilista de riesgo. 2. Revisar los informes elaborados por el ente rector del sector asegurador para indagar si han realizado una verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de al menos una de las compañías de seguro funcionando en el país en los últimos 3 años. 3. Consultar con el ente rector del sector asegurador y al gremio que reúne a las compañías aseguradoras en el país respecto de la verificación o evaluación sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico de las compañías de seguro en los últimos 3 años. 	
Vínculo con otros indicadores	
<p>PF-1A-4</p> <p>PF-1A-5</p>	<p>La normatividad identificada en estos indicadores debería ser la que establezca el mandato de que la estimación de reservas de riesgo catastrófico esté basada en modelos de evaluación probabilista del riesgo. De ser así, el cumplimiento de dicho mandato es el que debería ser evaluado por el ente rector del sector asegurador.</p>
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para verificar positivamente este indicador deben cumplirse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existencia de normatividad que establezca el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico. 2. El ente regulador del sector asegurador ha realizado al menos una evaluación o verificación en los últimos 3 años sobre el uso del modelo de evaluación probabilista del riesgo en la estimación de las reservas de riesgo catastrófico para al menos una de las compañías de seguro en el país. 	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dispuso la publicación el 5 de octubre de 2012 de la Circular modificatoria 54/12 de la Única de Seguros (PF-3-2a) (Diversas modificaciones al Capítulo 7.2.; se modifican los Anexos 7.2.1. y 7.2.7.; se adiciona el Anexo 7.2.2.; y se suprimen los Anexos 7.2.5. y 7.2.8.) con el objeto dar a conocer la actualización del estudio que contiene las bases técnicas con las que se determinan la prima de riesgo y la pérdida máxima probable de los seguros de terremoto, así como proporcionar el sistema de cómputo con el que las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros podrán realizar el procesamiento de información para calcular dicha prima de riesgo y pérdida máxima probable. Esto por la necesidad de hacer una revisión y actualización que permita incorporar los adelantos tecnológicos y conocimientos actualizados del fenómeno de terremoto. Para ello, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha realizado actualizaciones al estudio técnico para el cálculo de la prima de riesgo y la pérdida máxima probable de los seguros de terremoto (lo cual es mencionado en los considerandos de la Circular modificatoria 54/12 de la Única de Seguros).

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Argentina 2014. La Resolución 21.523 de 1992 (Reglamento General de la Actividad Aseguradora) no obliga al uso de modelos probabilistas de riesgo certificados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en consecuencia, esta entidad no realiza evaluaciones al respecto.

Código PF-3-3

Pregunta de respuesta cerrada	
3. ¿El Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha realizado al menos una evaluación sobre la protección financiera en el país en los últimos 3 años?	
Descripción general del indicador	
Considerando las responsabilidades del Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o entidad equivalente o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia de protección financiera, se considera una buena práctica que dicha entidad realice una evaluación interna de la normatividad, política o estrategia de protección financiera frente a riesgos de desastres en el país, para obtener aprendizajes que permitan perfeccionar dicha estrategia.	
Pasos a seguir para la obtención de la información requerida	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar si existe normatividad, estrategia o política de protección financiera frente al riesgo de desastres. 2. Revisar los informes publicados por la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente) relacionados con evaluaciones sobre la implementación de la normativa, estrategia o política sobre protección financiera que hayan sido realizadas en los últimos 3 años. 3. Consultar a la autoridad del sector hacendario, economía, o finanzas (o entidad equivalente) o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia de protección financiera respecto de evaluaciones sobre protección financiera realizadas en los últimos 3 años. 4. Consultar con las instituciones involucradas en el manejo y operación de los instrumentos de protección financiera que pudiera contar el país, para conocer si al menos alguno de ellos ha sido sujeto de alguna evaluación por parte del Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia de protección financiera. 	
Vínculo con otros indicadores	
MG-2-1 PF-1B-2	La información revisada o empleada para respaldar el cumplimiento de estos indicadores puede ayudar a identificar la normatividad o estrategia que deberían ser sujetos de evaluación por parte del Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía o la entidad que el país ha establecido debe liderar el diseño e implementación de la estrategia de protección financiera por la que indaga el presente indicador.
Descripción de la situación mínima requerida para considerar el indicador cumplido	
<p>Para cumplir este indicador deben satisfacerse las siguientes condiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Existencia de normatividad, estrategia o política de protección financiera frente al riesgo de desastres o, alternatively, de instrumentos de protección financiera (retención y/o transferencia del riesgo) frente al riesgo de desastres que fueron adoptados por el estado y se encontraban vigentes en el periodo objeto de la evaluación referida en el siguiente numeral. 2. En los últimos 3 años el Ministerio de Hacienda, Finanzas o Economía ha realizado una verificación o evaluación del cumplimiento de la normatividad, estrategia o política existente sobre protección financiera frente al riesgo de desastres o, alternatively, sobre todos los instrumentos de protección financiera con los que contaba el país en el periodo de análisis. 	

“Los ejemplos que se presentan a continuación, tanto de cumplimiento como de incumplimiento, reflejan la situación del país durante el año de aplicación del iGOPP, lo que significa que a día de hoy la información puede haber variado. Por otro lado, en lo que respecta a su redacción, estos ejemplos deben tomarse con reserva, pues la forma en que se presenta la correspondiente justificación no necesariamente sigue las indicaciones del Protocolo de aplicación del iGOPP. Puede consultar otros resultados de las aplicaciones del iGOPP en <https://riskmonitor.iadb.org/>”

Ejemplos de cumplimiento en países de la región

México 2014. En la entrevista sostenida con la Unidad de Seguros de la Secretaría de Hacienda manifestaron que para poder sacar al mercado nuevos instrumentos financieros deben hacer una evaluación de todo el esquema. En ese sentido, en el libro sobre FONDEN, publicado en 2012 (PF-3-3a) se describen la evolución de los activos por cubrir y los instrumentos seleccionados.

Ejemplos de incumplimiento en países de la región

Colombia 2013. En 2007, el MHCP realizó un estudio respecto del aseguramiento de sus edificaciones públicas. Actualmente, con apoyo técnico del Banco Mundial, está realizando una evaluación respecto del esquema de aseguramiento vigente, con el objetivo de fortalecerlo.

Glosario

Algunas de las definiciones que se presentan a continuación han sido concebidas y adaptadas para facilitar la aplicación del iGOPP, por lo cual no deberían considerarse o referenciarse en el marco de iniciativas diferentes a este índice.

1. **Actividades ex-ante de GRD:** Aquellas acciones que han sido planeadas y ejecutadas antes de la ocurrencia de un desastre, con el fin de identificar y analizar el riesgo de desastres, reducir dicho riesgo, prepararse para responder ante un eventual desastre, planificar el proceso de recuperación del desastre y protegerse financieramente ante sus consecuencias.
2. **Actividades ex-post de GRD.** Aquellas acciones que son ejecutadas posteriormente a la ocurrencia de un desastre, con el fin de responder, rehabilitar y recuperarse.
3. **Activos públicos.** Aquellos bienes, ya sean materiales o no, que se encuentran bajo el dominio o responsabilidad del estado, a través de los distintos niveles de gobierno y unidades de gestión territorial, y que son susceptibles de ser asegurados contra los efectos de un desastre.
4. **Adaptación al cambio climático⁷:** En los sistemas humanos, se refiere al proceso de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, a fin de moderar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En los sistemas naturales, el proceso de ajuste al clima real y sus efectos; la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado.
5. **Agentes aseguradores y reaseguradores.** Son las instituciones que ofrecen los servicios de seguros y reaseguros.
6. **Ahorros de precaución.** Recursos (en forma de ahorros/reservas) para atender situaciones inesperadas ante la ocurrencia de desastres.
7. **Amenaza⁸:** Peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura, los bienes y servicios. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con una cierta intensidad, en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido.
8. **Análisis del riesgo⁹:** Consiste en relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos (amenazas) en un territorio. Los análisis de amenazas y de vulnerabilidades son parte del análisis de riesgo y deben estar articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e independientes.
9. **Aseguramiento paramétrico.** Véase “Seguro paramétrico”.
10. **Ayuda internacional.** La asistencia humanitaria, de orden financiera, material, tecnológica o humana, prestada por países u organismos internacionales en el marco del derecho internacional y que es dirigida hacia aquellos países que la hayan solicitado o consentido, por reconocer que se encuentran en una situación de desastre o emergencia que ha rebasado su capacidad de respuesta.

⁷ IPCC, (2012). “Resumen para responsables de políticas” en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. –K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19.

⁸ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD

⁹ Ibid

11. **Bienes de características homogéneas/uniformes.** Aquellos que tienen características físicas similares, por ejemplo, edificios de oficinas, de concreto y con una antigüedad de 10 años.
12. **Bienes de características no homogéneas/especiales.** Aquellos con características particulares, tales como sistemas de acueductos y alcantarillado o sistemas de energía eléctrica e infraestructura petrolera, es decir, bienes cuyas características físicas difieren y consecuentemente demandan un tratamiento de acuerdo con éstas.
13. **Bienes de responsabilidad fiscal del Estado¹⁰:** Portafolio de elementos expuestos cuyo costo de reposición sería asumido por el estado. Generalmente incluyen los activos públicos y, en determinados casos, los activos de la población de bajos ingresos.
14. **Bonos catastróficos.** Son deuda de alto rendimiento que cubre una serie de eventos catastróficos, como huracanes, terremotos, etc., que puede ser emitida por instituciones financieras internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc.), gobiernos o compañías de seguros.
15. **Cambio climático¹¹:** Un cambio en el estado del clima que puede ser identificado (por ejemplo, mediante pruebas estadísticas) por cambios en el valor medio de sus propiedades y/o por la variabilidad de las mismas, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales, a forzamientos externos o a cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.
16. **Cat Swaps:** Instrumento financiero hecho a medida que se comercializa en el mercado de derivados extrabursátiles y que permite a las aseguradoras y/o gobiernos protegerse contra pérdidas potenciales masivas resultantes de un desastre de gran escala como un huracán o un terremoto. En un Cat Swap, dos partes, una aseguradora/gobierno y un inversor, intercambian flujos de pagos periódicos. Los pagos de la aseguradora/gobierno se basan en una cartera de valores del inversor, y los pagos del inversor se basan en posibles pérdidas por catástrofes según lo previsto por un índice de pérdidas por catástrofes.
17. **Clasificador presupuestal.** Marcador alfanumérico usado en los presupuestos nacionales para identificar o visualizar de manera agrupada los recursos asignados a un determinado tipo de gasto o asignación presupuestaria, los cuales permiten identificar y realizar seguimiento al gasto público.
18. **Conocimiento del riesgo.** Véase “Identificación del riesgo”.
19. **Crédito contingente.** Línea de crédito suscrita entre un gobierno y una institución financiera, de manera previa a la ocurrencia de desastres, que permite acceder a liquidez ante la ocurrencia de desastres producidos por fenómenos naturales peligrosos.
20. **Cuentas de inversión social.** Fondos nacionales de desarrollo o instrumentos similares que permiten asignar recursos para la inversión a distintas escalas y diferentes enfoques (unidades de gestión territorial, sectorial, etc.), y que de forma integrada contribuyen hacia la visión de desarrollo de los países. (ver Fondos nacionales de desarrollo).
21. **Curva de excedencia de pérdidas (CEP)¹²:** Representación de la frecuencia anual con que determinada la pérdida económica es posible de ser excedida. Constituye la medida de riesgo

¹⁰ UNISDR (2011). Informe Global sobre el Riesgo de Desastres (GAR)

¹¹ IPCC, (2012). “Resumen para responsables de políticas” en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. –K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19

¹² <http://www.revista.unam.mx/vol.11/num1/art05/int05/int05d.htm>

catastrófico más importante para los encargados de gestionar el riesgo, dado que estima la cantidad de fondos requeridos para alcanzar los objetivos de la gestión del riesgo. La CEP se puede calcular para el mayor evento en un año o para todos los eventos (en forma acumulativa) en un año.

- 22. Desastre¹³:** Situación o proceso social que se desencadena como resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad afectada, las cuales, en muchos casos, no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los recursos disponibles a la unidad social directamente afectada. Estas alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como daños severos en el ambiente; requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población para atender a los afectados y restablecer umbrales aceptables de bienestar y oportunidades de vida.
- 23. Desarrollo sostenible¹⁴.** Desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
- 24. Documento normativo.** Véase “Normatividad”.
- 25. Documento oficial.** Escrito expedido por una autoridad competente en el que se informa, dispone o instruye sobre determinada materia y, en cuyo contenido, sus alcances se fundan en la normativa y sus motivos se establecen debidamente.
- 26. Eco-región.** Unidad geográfica identificada por tener flora, fauna y ecosistema que le son característicos.
- 27. Edificaciones esenciales.** Véase “Instalaciones vitales”.
- 28. Ejercicio fiscal.** Periodo, generalmente anual, dispuesto por la normatividad de los países para la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos aprobado previamente por el poder legislativo. Para efectos del levantamiento del iGOPP, salvo sus excepciones, se deberá considerar el ejercicio presente, es decir del año en el cual se está aplicando el iGOPP.
- 29. Emergencia¹⁵:** Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno físico peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción inmediata y exige la atención de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. Cuando es inminente el evento, pueden presentarse confusión, desorden, incertidumbre y desorientación entre la población. La fase inmediata después del impacto es caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia y funcionamiento de la unidad social afectada. Constituye una fase o componente de una condición de desastre, pero no es, *per se*, una noción sustitutiva de desastre. Puede haber condiciones de emergencia sin un desastre.
- 30. Entidades responsables de la GRD.** Todas aquellas instancias gubernamentales que, dentro de los diferentes niveles de gobierno y en el marco legal vigente de la Gestión del Riesgo de Desastres, se les asigna responsabilidades específicas en esa materia.

¹³ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD.

¹⁴ “Our common future”, el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987.

¹⁵ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD.

- 31. Entidades sectoriales.** Aquellas instancias gubernamentales cuyas competencias y responsabilidades, conforme a la normatividad, corresponden a una actividad o política pública común. Dependiendo del país puede corresponder a ministerios, secretarías, institutos u otras denominaciones usadas.
- 32. Etiquetador presupuestal:** Véase “Clasificador presupuestal”.
- 33. Estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres.** La combinación de los diferentes instrumentos financieros que el país debería considerar para financiar todos los componentes de la gestión de riesgo de desastres (GRD), es decir identificación del riesgo, reducción del riesgo, preparativos para la respuesta, planificación de la recuperación y protección financiera.
- 34. Estrategia de protección financiera.** La propuesta de instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo que el país considera para enfrentar la ocurrencia de desastres a efectos de disminuir su vulnerabilidad fiscal, a la vez que permite asignar recursos para las fases de emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
- 35. Estructura de protección financiera.** Para fines de aplicación del iGOPP se entenderá que se cuenta con una estructura de protección financiera si a la fecha de aplicación del iGOPP el país tiene vigentes al menos dos instrumentos financieros para atender la ocurrencia de desastres, que sean diferentes a la posibilidad de realizar reasignaciones presupuestales y contratar créditos.
- 36. Etiquetador presupuestal.** Véase “Clasificador presupuestal”.
- 37. Evaluación del riesgo:** Véase “Análisis de riesgo”.
- 38. Evaluación probabilista del riesgo:** Es un enfoque metodológico sistemático e integral para evaluar el riesgo en unidades cuantitativas de medida (monetarias, personas, viviendas, etc.) para determinar qué puede ocurrir, qué tan probable es que ocurra y cuáles son sus consecuencias. Esta evaluación permite estimar qué tan frecuentemente ocurrirán desastres con consecuencias de cierto tamaño, basándose en la estimación de la ocurrencia de la amenaza, la valoración de los elementos expuestos a dicha amenaza (en términos económicos, de vidas o de otra naturaleza) y la evaluación de la vulnerabilidad de dichos elementos.
- 39. Ex ante:** Antes de la ocurrencia del desastre.
- 40. Exposición¹⁶:** Corresponde a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente por fenómenos naturales peligrosos.
- 41. Ex post:** Después de la ocurrencia del desastre.
- 42. Fase de pre-inversión¹⁷.** Corresponde al proceso de elaboración de los estudios y análisis necesarios para la preparación (o formulación) y evaluación de un proyecto de inversión pública. El resultado de esta fase es una decisión de realizar o no el proyecto o inversión.
- 43. Fondos.** Instrumentos financieros creados por normatividad para fines específicos definidos en la misma normatividad que los crea, como, por ejemplo, un fideicomiso o una cuenta bancaria con

¹⁶ IPCC, (2012). “Resumen para responsables de políticas” en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. –K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19.

¹⁷ <https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/33602/SegundoModulo.pdf>

destinación específica. No se consideran como fondos a las líneas presupuestarias con el nombre de fondo o similar. Un fondo está habilitado si cuenta con asignación de recursos, la cual puede provenir del saldo de periodos anteriores o del ejercicio fiscal presente.

- 44. Fondos nacionales de desarrollo.** Instrumentos financieros creados normativamente y dotados presupuestalmente, con el fin de promover o fortalecer una actividad económica específica, o el desarrollo de determinados sectores, regiones o poblaciones. (Véase “Cuentas de inversión social”).
- 45. Gastos emergentes.** Aquellos gastos que se originan debido a la ocurrencia del desastre, tales como los de asistencia humanitaria, los que sirven para restablecer servicios básicos, los de rehabilitación, recuperación o de reconstrucción, etc.
- 46. Gestión de desastres.** Organización y gestión de recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de los desastres, en particular la preparación, respuesta y rehabilitación. La gestión de desastres incluye planes, estructuras y acuerdos que permitan comprometer los esfuerzos del gobierno de entidades voluntarias y privadas de una manera coordinada e integral para responder a todas las necesidades asociadas con un desastre.
- 47. Gestión de emergencia:** Véase “Gestión de desastres”.
- 48. Gestión de obligaciones contingentes¹⁸:** Actividades relacionadas con la identificación, la valoración, el registro, la mitigación y el seguimiento de pasivos contingentes que puedan generar impactos adversos representativos en el futuro sobre las finanzas de las entidades.
- 49. Gestión del riesgo de desastres¹⁹:** Procesos para diseñar, aplicar y evaluar estrategias, políticas y medidas destinadas a mejorar la comprensión e identificación de los riesgos de desastre, fomentar la reducción y la protección financiera de riesgos de desastre, y promover la mejora continua en las prácticas de preparación, respuesta y recuperación para los casos de desastre, con el objeto explícito de aumentar la seguridad humana, el bienestar, la calidad de vida, la resiliencia y el desarrollo sostenible. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad y la seguridad territorial y los derechos e intereses colectivos, y por lo tanto está intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro y con la gestión ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno.
- 50. Gestión financiera del riesgo de desastre:** Administración de los recursos financieros necesarios para poder implementar los diferentes componentes de la gestión del riesgo de desastres (Véase “Estrategia de gestión financiera del riesgo de desastres”).
- 51. Gobernabilidad:** La capacidad de gobierno de un problema público. Esta capacidad se manifiesta en la gestión continuada y estable por parte del conjunto de los gobiernos y administraciones, pero también de los actores sectoriales y privados de un país.
- 52. Habilitado:** Se refiere a la doble condición de un instrumento financiero de estar legalmente constituido y de contar con recursos para su operación.
- 53. Identificación del riesgo de desastres:** proceso de la gestión del riesgo de desastres enfocado en el conocimiento sobre orígenes, causas, alcance, frecuencia y posible evolución, entre otros aspectos, de los fenómenos potencialmente peligrosos, así como la ubicación, causas, evolución y capacidad de

¹⁸ Adaptado de Resolución Número 866 (septiembre 8 de 2004) de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, “Por medio de la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C.”

¹⁹ IPCC, (2012). “Resumen para responsables de políticas” en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. –K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19.

resistencia y de recuperación de elementos socioeconómicos expuestos. Este proceso incluye el análisis anticipado de las consecuencias y admite tanto interpretaciones objetivas y científicas como de percepción social e individual.

- 54. Incentivos presupuestales.** Instrumentos financieros que tienen por objeto otorgar recursos financieros adicionales a entidades que logren cumplir con objetivos definidos explícitamente para mejorar la gestión de las entidades que los reciben y por ende mejoran su provisión de servicios y productos.
- 55. Infraestructura crítica:** Véase “Instalaciones vitales”.
- 56. Infraestructura pública:** Conjunto de sistemas, obras y edificaciones erigidas por los diferentes niveles de gobierno con recursos públicos y con el fin de facilitar su funcionamiento y cumplimentar sus funciones, o bien, prestar un servicio público.
- 57. Instalaciones vitales²⁰:** Las estructuras físicas, instalaciones técnicas y sistemas principales que son social, económica u operativamente esenciales para el funcionamiento de una sociedad o comunidad, tanto en circunstancias habituales como extremas durante una emergencia. Las instalaciones vitales son elementos de la infraestructura que respaldan los servicios esenciales en una sociedad. Éstas suelen incluir sistemas de transporte, puertos aéreos y marítimos, sistemas de electricidad, de suministro de agua y de comunicaciones, hospitales y clínicas de salud, y centros de servicios de bomberos, policía y de administración pública.
- 58. Instrumentos de política para la GRD:** Corresponde a aquellos planes, políticas, estrategias, sistemas de información, etc. que dan viabilidad a la ejecución de las políticas públicas para la Gestión del Riesgo de Desastres.
- 59. Instrumentos de protección financiera²¹:** Son instrumentos de financiamiento ante la ocurrencia de desastres; se clasifican en instrumentos ex – ante, tales como reservas, créditos contingentes e instrumentos de transferencia del riesgo y ex – post, tales como reasignación presupuestal, incremento de impuestos y contratación de deuda.
- 60. Instrumentos de transferencia del riesgo de desastres²²:** Corresponde a instrumentos financieros que permiten trasladar las consecuencias financieras de un riesgo en particular de una parte a un tercero (mercado de capitales, o al mercado de seguros y reaseguros) mediante un contrato, por el cual una entidad obtendrá recursos de la otra parte después que se produzca un desastre a cambio del pago previo de un monto acordado por ambas partes (primas, etc.). Algunos de estos instrumentos pueden ser seguros indemnizatorios, seguros paramétricos y bonos catastróficos.
- 61. Instrumentos financieros²³:** Corresponden a herramientas de transferencia de recursos financieros entre agentes económicos que se caracterizan por su liquidez, riesgo y rentabilidad. Supone una forma de mantener riqueza para quienes la poseen (los inversores) y un pasivo para quienes los generan. Estos activos pueden ser transmitidos de unas unidades económicas a otras.
- 62. Instrumento presupuestal:** Véase “Clasificador presupuestal”.

²⁰ UNISDR (2009). Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres. Publicada por la Estrategia Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR). Ginebra, Suiza, mayo de 2009.

²¹ Ghesquiere y Mahul, (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters, A Primer, The World Bank, Latin American and the Caribbean Region, Finance and Private Sector Development, Sustainable Development Network, September 2010

²² Adaptado de UNISDR (2009) Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres.

²³ Diccionario ESPASA (1998). Economía y Negocios. Arthur Andersen.

- 63. Líneas vitales:** Véase “Instalaciones vitales”.
- 64. Manejo de crisis.** Véase “Gestión de emergencias”.
- 65. Manejo de desastres:** Véase “Gestión de emergencias”.
- 66. Marco de Gasto de Mediano Plazo²⁴:** Contiene las proyecciones de las principales prioridades sectoriales y los niveles máximos de gasto, distribuidos por sectores y componentes de gasto del Presupuesto General de la Nación para el periodo de gobierno y se revisa anualmente.
- 67. Más alto nivel político nacional:** Corresponde al nivel ministerial o de secretaría o, presidencia de la república o la presidencia del consejo de ministros.
- 68. Materiales peligrosos:** Toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que, por sus características físicas, químicas o biológicas, puede ocasionar daños a los seres humanos, al medio ambiente y a los bienes.
- 69. Medios de vida:** Comprende las habilidades, los activos (tanto materiales como sociales) y las actividades necesarias para la subsistencia de una persona, familia o comunidad. En otras palabras corresponde a la forma que estas se “ganan la vida”, “mantienen a sus familias”, es decir el “empleo” o “actividades productivas” que les permite subsistir.
- 70. Mitigación al cambio climático²⁵:** Intervención humana encaminada a reducir las fuentes o potenciar los sumideros de gases de efecto invernadero, incluyendo al dióxido de carbono.
- 71. Niveles de gobierno:** Incluye gobierno central, entidades autónomas y descentralizadas, empresas del estado, gobiernos locales y regionales, y los sectores y ministerios.
- 72. Niveles territoriales:** Integra lo local, municipal, cantonal, parroquial, distrital, departamental, regional, estadual o provincial, dependiendo de la división político administrativa de cada país.
- 73. Normatividad:** Para fines de aplicación del iGOPP, se deberá entender de manera genérica como los documentos legales aplicables en el país, cualquiera que sea su jerarquía.
- 74. Objeto de gasto:** Véase “Clasificador presupuestal”.
- 75. Pasivo contingente²⁶:** Obligaciones financieras cuyo valor depende de la ocurrencia de hechos futuros e inciertos (que pueden ocurrir o no) que crean una incertidumbre financiera a una entidad o país. Un pasivo engloba las obligaciones, es decir el financiamiento que cuenta una entidad o país para el pago a terceros (bancos, proveedores, impuestos, salarios, etc.). De esta manera, desde una perspectiva presupuestal, el riesgo fiscal relacionado con los desastres representa un pasivo contingente. Cuando un desastre ocurre, los pasivos contingentes se vuelven un costo real asociado con las operaciones de alivio económico y humanitario en el corto plazo y con el apoyo para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en el mediano y largo plazo.
- 76. Parámetros y lineamientos:** Se refiere a instructivos que pueden ser o no de obligatorio cumplimiento y que establecen estándares sobre las mejores prácticas para la realización de una actividad a cargo de una entidad o institución específica.
- 77. Peligro:** Véase “Amenaza”.

²⁴ Adaptado de <http://www.minhacienda.gov.co>

²⁵ Glosario IPCC

²⁶ Adaptado de International Monetary Fund (2018). How to Manage the Fiscal Cost of Natural Disasters

- 78. Pérdida Anual Esperada (PAE)²⁷:** La PAE se calcula como la suma del producto entre las pérdidas esperadas para determinado evento y la frecuencia de ocurrencia de dicho evento en un periodo de un año y para todos los eventos estocásticos considerados. En términos probabilistas, la PAE es la esperanza matemática de la pérdida anual.
- 79. Pérdida Máxima Probable (PMP):** La PMP representa un nivel de pérdida máxima estimada para una excedencia (probabilidad) determinada establecida en función de un periodo de retorno de referencia. Dependiendo de la capacidad de un país, región o entidad para la gestión del riesgo, se puede optar por intervenir las pérdidas potenciales hasta determinado periodo de retorno que se considere apropiado.
- 80. Plan de contingencia:** son procedimientos alternativos, de respuesta inmediata, al orden normal de una entidad, institución o empresa, cuyo fin es permitir el normal funcionamiento de ésta, aun cuando alguna de sus funciones se viese dañada por un accidente interno o externo. Los planes de contingencia son un componente de los planes de emergencias.
- 81. Plan de continuidad de negocio²⁸:** Es un plan cuyo propósito es analizar las vulnerabilidades de una entidad para definir su organización y planes logísticos que le permitan recuperar y restaurar sus funciones críticas parcial o totalmente después de un desastre, de forma que no se ponga en peligro su misión y se mejore la resiliencia de la organización. Un Plan de Continuidad de Negocio, a diferencia de una Plan de Contingencia, está orientado al mantenimiento de la operación de la entidad, con lo que priorizará las actividades críticas necesarias para continuar operando después de un incidente imprevisto. Un plan de continuidad de negocio incluye un plan de contingencia.
- 82. Plan de continuidad de operaciones.** Véase “Plan de continuidad de negocio”.
- 83. Plan de emergencias²⁹:** Definición de funciones, responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades operativas y simulación para la capacitación, con el fin de salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible después de que se presente un fenómeno peligroso. Consiste en una propuesta normada de organización de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre, con base en la evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación a la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etc. Determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y organismos llamados a intervenir en la atención y establece el sistema de coordinación de las instituciones, los recursos y medios tanto públicos como privados necesarios para cumplir el objetivo propuesto.
- 84. Plan de gestión del riesgo³⁰:** Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, que se formula para orientar las actividades de preparativos, identificación de riesgos, reducción o mitigación, prevención, previsión y control de riesgos, y la recuperación en caso de desastre. Ofrece el marco global e integrado, el detalle de las políticas y estrategias globales y los niveles jerárquicos y de coordinación existentes para el desarrollo de planes específicos, sectoriales, temáticos o territoriales relacionados con los distintos aspectos del riesgo y desastre. Al garantizar condiciones apropiadas de seguridad frente a los diversos riesgos existentes y disminuir las potenciales pérdidas materiales y consecuencias sociales que se derivan de los desastres, se mantiene la calidad de vida de la población y se aumenta la sostenibilidad.

²⁷ UNISDR (2011). Informe Global sobre el Riesgo de Desastres (GAR).

²⁸ Adaptado de Wikipedia, Business Continuity Management, Good Practice Guidelines 2008 Business Continuity Institute, A Management Guide to Implementing Global Good Practice in Business Continuity Management y Guía de Desarrollo de un Plan de Continuidad de Negocio, Escuela Universitaria de Informática, Universidad Politécnica de Madrid, Trabajo de tesis de Laura del Pino Jimenez en 2007

²⁹ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD.

³⁰ Ibid.

- 85. Plan Nacional de Emergencia o contingencia:** Para fines de aplicación del iGOPP, un Plan Nacional de Emergencias es aquel dispuesto en la normatividad, y que prevé escenarios de una emergencia, contingencia o desastre, que ocupen o afecten gran parte o la totalidad de un territorio nacional, y en el que se hace necesario la coordinación, así como los procedimientos y el curso de acción que se debe tomar entre los distintos niveles de gobierno.
- 86. Preparación (preparativos) de la respuesta:** proceso de la gestión del riesgo de desastres cuyo objetivo es planificar, organizar y poner a prueba los procedimientos y protocolos de respuesta de la sociedad en caso de desastre, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las actividades en la zona afectada por el desastre. La preparación se lleva a cabo mediante el monitoreo de eventos y la definición de escenarios de riesgo, la planificación, organización, entrenamiento, dotación de recursos y simulación para las acciones de alerta, evacuación, búsqueda, rescate, socorro, asistencia humanitaria que deben realizarse en caso de emergencia y las actividades de recuperación física, económica y social posteriores.
- 87. Préstamos contingentes.** Véase “Créditos contingentes”.
- 88. Prevención del riesgo³¹:** Medidas y acciones dispuestas con anticipación que buscan evitar la generación de nuevos riesgos o impedir que se desarrollen y se consoliden. Significa trabajar en torno a amenazas, exposición y vulnerabilidades latentes. Visto de esta manera, la prevención de riesgos se encaja en la Gestión Prospectiva del Riesgo. Dado que la prevención absoluta rara vez es posible, la prevención tiene una connotación semi-utópica y debe ser vista a la luz de consideraciones sobre el riesgo aceptable, el cual es socialmente determinado en sus niveles.
- 89. Productos financieros:** Véase “Instrumentos financieros”.
- 90. Protección financiera³²:** Combinación óptima de mecanismos o instrumentos financieros de retención y transferencia del riesgo que permite acceder de manera ex post a recursos económicos oportunos, lo cual mejora la capacidad de respuesta ante la ocurrencia de desastres (eventos menores y recurrentes y grandes desastres de baja recurrencia) y protege el balance fiscal del Estado.
- 91. Reactivación económica.** Proceso impulsado por el estado para restablecer los medios de vida, la dinámica productiva, la actividad comercial y la infraestructura necesaria vinculada a la actividad económica de una comunidad que ha sido afectada por la ocurrencia de un desastre.
- 92. Reaseguro:** Es un nuevo contrato a través del cual una aseguradora cede de manera parcial o total, la cobertura de un riesgo que ya había sido cubierto con el fin de reducir el monto de su pérdida posible, sin modificar el acuerdo ya establecido entre la aseguradora y su cliente.
- 93. Reconstrucción:** Etapa de la recuperación que corresponde al proceso de restitución y refuerzo de las construcciones afectadas y de reparación del daño físico de las edificaciones, la infraestructura y los centros de producción después de un desastre.
- 94. Recuperación³³:** Proceso de restablecimiento de condiciones aceptables y sostenibles de vida mediante la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos o deteriorados en el área afectada, y la reactivación económica y social de la comunidad bajo condiciones de menor riesgo que lo que existía antes del desastre.

³¹ Ibid.

³² Ghesquiere y Mahul, (2010). Financial Protection of the State against Natural Disasters, A Primer, The World Bank, Latin American and the Caribbean Region, Finance and Private Sector Development, Sustainable Development Network, September 2010

³³ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD

- 95. Reducción del riesgo de desastres³⁴:** Proceso de la gestión del riesgo de desastres enfocado en minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación) el impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible.
- 96. Regla óptima de acumulación y gasto.** Aquella pauta o método que permite dimensionar los recursos presupuestales que se deben asignar anualmente a los fondos de GRD, de forma que permita la acumulación de recursos en el tiempo de acuerdo a las necesidades del país.
- 97. Regional.** Para fines de aplicación del iGOPP, corresponde al territorio ocupado por dos o más países con características que les son comunes como el clima, orografía, recursos, etc. O bien, que están ligados por intereses recíprocos. Habitualmente se utiliza para referirse a Centroamérica, América del Sur, Países Andinos, Caribe, etc.
- 98. Rehabilitación:** Etapa de la recuperación que corresponde al restablecimiento temporal de los servicios vitales indispensables interrumpidos o deteriorados por el desastre. Es una solución temporal no definitiva, ya que la definitiva debería asegurar que no se recrean las condiciones de vulnerabilidad que dieron origen al desastre. Es una etapa durante la cual se continúa con la atención de la población, pero en la cual se restablece el funcionamiento de las líneas vitales, como la energía, el agua, las vías y las comunicaciones, y otros servicios básicos como la salud y el abastecimiento de alimentos y víveres.
- 99. Reservas de riesgo catastrófico³⁵:** Corresponden a reservas financieras que se constituyen para cubrir los riesgos derivados de eventos catastróficos, caracterizados por su baja frecuencia y alta severidad.
- 100. Resiliencia³⁶:** La habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un fenómeno peligroso, de forma oportuna y eficiente, incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales.
- 101. Respuesta³⁷:** Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las acciones previstas en la etapa de preparación y que, en algunos casos, ya han sido antecedidas por actividades de alistamiento y movilización, motivadas por la declaración de diferentes estados de alerta. Corresponde a la reacción inmediata para la atención oportuna de la población.
- 102. Retención del riesgo:** Corresponde al componente de la estrategia de protección financiera que tiene como propósito proveer recursos para atender los gastos asociados a eventos recurrentes y menos severos, así como la primera capa de los eventos severos, mediante recursos propios y aquellos provenientes de créditos. Incluye el conjunto de herramientas financieras adoptadas por una entidad para compensar directamente las posibles pérdidas que puedan sobrevenir a causa de un desastre. Las reasignaciones presupuestales, los fondos de emergencias y desastres y los créditos contingentes son ejemplos típicos de este tipo de herramientas.

³⁴ *Ibíd.*

³⁵ Decreto 2973 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la República de Colombia

³⁶ IPCC, (2012). "Resumen para responsables de políticas" en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. -K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19.

³⁷ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD.

- 103. Riesgo de desastres³⁸:** La probabilidad de que, durante un periodo específico de tiempo, se produzcan alteraciones graves del funcionamiento normal de una comunidad o una sociedad debido a los fenómenos físicos peligrosos que interactúan con condiciones sociales vulnerables, dando lugar a efectos humanos, materiales y económicos o ambientales adversos generalizados que requieren de una respuesta inmediata a la emergencia para satisfacer las necesidades humanas esenciales, y que pueden requerir apoyo externo para la recuperación.
- 104. Rubro presupuestal.** Es un código numérico que identifica y describe de manera general el concepto del Gasto (Funcionamiento, Deuda, Inversión).
- 105. Seguros:** Son contratos que ayudan a reducir la incertidumbre económica sobre el futuro. De esta manera es un contrato (póliza) firmado con una compañía de seguros en la cual una persona o institución se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero (prima), mediante la cual se garantiza un pago futuro frente a la eventualidad que ocurra alguna circunstancia por la cual se ha tomado el seguro.
- 106. Seguro indemnizatorio³⁹.** Aquellos contratos que ofrecen al asegurado una compensación financiera suficiente para colocarlo en la misma situación que gozaban inmediatamente antes de la materialización del evento para el cual se aseguró, teniendo como límite de compensación el monto de la suma asegurada.
- 107. Seguro paramétrico⁴⁰:** Son seguros que ofrecen cobertura ante riesgos catastróficos, donde las indemnizaciones se basan en la intensidad del evento (por ejemplo, la velocidad de los vientos huracanados, la magnitud del terremoto o el volumen de las precipitaciones), en la extensión geográfica de la afectación y/o en el monto de los daños y pérdidas ocasionadas por el evento, calculada por un modelo predeterminado. A diferencia de los seguros tradicionales que requieren de un avalúo in situ de las pérdidas individuales, el seguro paramétrico avalúa las pérdidas a través de una metodología predeterminada de variables exógenas, tanto para el asegurado como para la aseguradora. Los seguros paramétricos ayudan a limitar el impacto financiero de eventos devastadores y ofrecen desembolsos inmediatos cuando ocurre un siniestro y se activa una póliza. La cobertura de seguro paramétrico puede ser proporcionada a través de un contrato de seguro o reaseguro, así como mediante la emisión de un bono de catástrofe.
- 108. Servicios básicos:** Aquellos servicios que son necesarios para satisfacer las necesidades primarias de un asentamiento cualquiera, tales como red de agua potable, drenaje, asistencia médica, alumbrado público, suministro de electricidad, gas, teléfono, seguridad pública, educación, etc.
- 109. Servicios públicos.** Aquellas actividades realizadas por una instancia del estado, o bien, una de naturaleza privada pero sometida a la normatividad aplicable, con el fin de prestar servicios a la población en general para satisfacer determinada necesidad pública.
- 110. Subsidiaridad (principio de):** en su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, política o económica) más próxima al objeto del problema.
- 111. Sustancias peligrosas.** Véase “Materiales peligrosos”.

³⁸ IPCC, (2012). “Resumen para responsables de políticas” en el informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos hidrometeorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G. –K. Plattners, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Informe Especial de los Grupos de Trabajo I y II del IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19

³⁹ MHCP y BM, 2015

⁴⁰ CCRIF – Hoja Informativa “Seguros paramétricos”.

- 112. Transferencia de riesgo:** Corresponde al componente de la estrategia de protección financiera que tiene como propósito proveer recursos para atender los eventos severos. Incluye el conjunto de instrumentos financieros que permiten trasladar las consecuencias financieras de un riesgo en particular de una parte a un tercero (mercado de capitales, o al mercado de seguros y reaseguros) mediante un contrato, por el cual una entidad obtendrá recursos de la otra parte después que se produzca un desastre a cambio del pago previo de un monto acordado por ambas partes (primas, etc.). Algunos de estos instrumentos pueden ser seguros indemnizatorios, seguros paramétricos y bonos catastróficos.
- 113. Transferir de manera colectiva el riesgo de un portafolio de bienes.** El aseguramiento de una cantidad considerable y diversa de bienes o activos fijos lo cual permite aprovechar los beneficios de la diversificación (menor costo, mejores términos y condiciones).
- 114. Último ejercicio o vigencia fiscal.** Para efectos del levantamiento del iGOPP se deberá considerar el ejercicio presente, es decir del año en el cual se está aplicando el iGOPP. Véase “Ejercicio fiscal”.
- 115. Unidades de gestión territorial:** Véase “Niveles territoriales”.
- 116. Vigencia fiscal:** Véase “Ejercicio fiscal”.
- 117. Vulnerabilidad⁴¹:** Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de origen natural, socio natural o antropogénico. Representa también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación autónoma posterior. Las diferencias de vulnerabilidad del contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. Sistema de condiciones y procesos resultantes de factores físicos, sociales, económicos y medioambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de los peligros.
- 118. Vulnerabilidad fiscal del presupuesto.** La susceptibilidad del presupuesto, debido a la demanda de recursos no programados, ante la ocurrencia de desastres por fenómenos de la naturaleza.

⁴¹ CRID. Vocabulario Controlado sobre Desastres (VCD). Consulta en Línea (<http://vcd.cridlac.org/index.php>). Fuente: Lavell, A. et. al., (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y la práctica. CEPREDENAC, PNUD